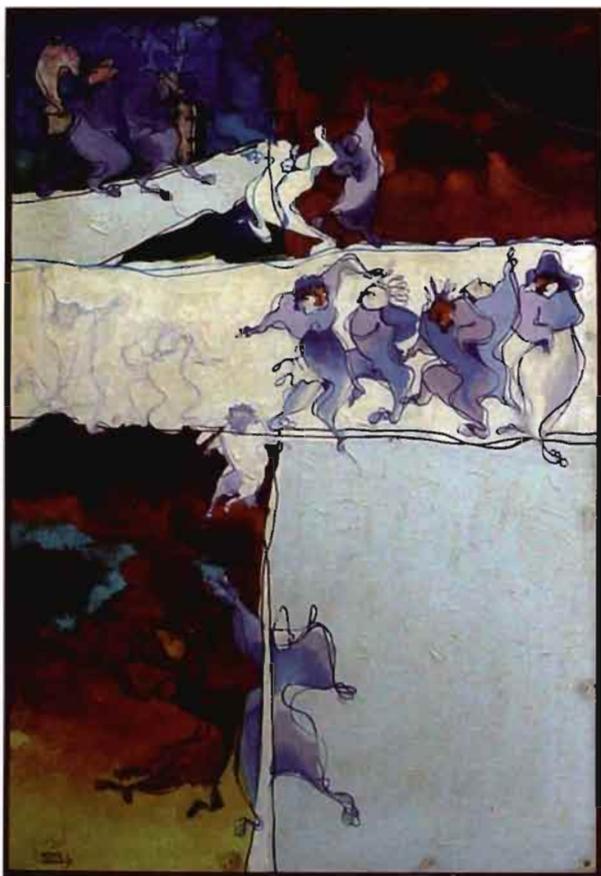


CIUDADES Y SOCIEDADES EN MUTACIÓN

Lecturas cruzadas sobre Colombia



Coordinadores

Françoise DUREAU

Olivier BARBARY

Vincent GOUËSET

Olivier PISSOAT

Thierry LULLE

Universidad
Externado
de Colombia

Algunas publicaciones de la Universidad Externado de Colombia

Ciudad y región en Colombia

Óscar A. Alfonso, Luis M. Cuervo, Fabio Giraldo, Samuel Jaramillo, Humberto Molina, Fernando Montenegro y Pedro I. Moreno, 2001

Hacer metrópoli. La región urbana de Bogotá de cara al siglo XXI

Óscar A. Alfonso, Henri Coing, Daniel Delaunay, Françoise Dureau, Vincent Gouéset, Thierry Lulle, Évelyne Mesclier y Luis B. Peña, 2005

Amazonía colombiana: economía y poblamiento

Camilo Domínguez Ossa, 2005

Población, pobreza y desarrollo. Memorias del día mundial de la población 2004

Magdalena Arango (compilación y edición), 2005

Construcción de lugares-patrimonio el Centro Histórico y el humedal de Córdoba en Bogotá

Adriana Páris D. y Dolly C. Palacio (eds.), Jeffer Chaparro, Leonardo Garavito G., Thierry Lulle, Claudia P. Rodríguez y María C. Van Der Hammen, 2006

Bosques urbanos en América Latina. Usos, funciones, representaciones

Sylvie Nail (ed.), Jair Preciado B., Elma Montaña, Antonio Bracq Egg, Morada Maldonado, Eduardo Parry M., Gemma Rojas R., Claudia Petry, Francine Barthe-DeLoizy y Dolly C. Palacio, 2006

FRANÇOISE DUREAU
OLIVIER BARBARY
VINCENT GOUËSET
OLIVIER PISSOAT
THIERRY LULLE
COORDINADORES

**CIUDADES Y SOCIEDADES
EN MUTACIÓN
LECTURAS CRUZADAS SOBRE COLOMBIA**

INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT (IRD)
INSTITUT FRANÇAIS D'ÉTUDES ANDINES (IFEA)
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

ISBN 978-958-710-270-3

- © 2004, EDICIONES ECONOMICA
- © 2007, BERNARDO RENGIFO LOZANO (TRAD.)
- © 2007, INSTITUTO FRANCÉS DE ESTUDIOS ANDINOS
Av. Arequipa 4595 Lima 18, Perú
Teléfono (511) 447 6070
postmaster@ifea.org.pe
<http://www.ifeanet.org>
- © 2007, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
Calle 12 n.º 1-17 Este, Bogotá
Teléfono (57 1) 342 0288
publicaciones@uexternado.edu.co
www.uexternado.edu.co

Primera edición: noviembre de 2007

Ilustración de cubierta: Óleo sin título, Vicente González, 1981

Composición: Proyectos Editoriales Curcio Penen

Impresión y encuadernación: Ladiprint Editorial Ltda.

Tiraje de 1 a 1.000 ejemplares.

Impreso en Colombia

Printed in Colombia

Prohibida la reproducción o cita impresa o electrónica total o parcial de esta obra, sin autorización expresa y por escrito del Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas en esta obra son responsabilidad de los autores.

Este volumen corresponde al tomo 242 de la colección “Travaux de l’Institut Français d’Études Andines”.
ISBN 0768-424X

El libro original fue publicado en la colección Villes (Anthropos - Economica) dirigida por Denise Pumain.
Traducción: Bernardo Rengifo Lozano, supervisada por Françoise Dureau y Thierry Lulle, realizada con la colaboración financiera de las Unidades de Investigación 013 y 107 del IRD, así como del IFEA.

OLIVIER BARBARY	ODILE HOFFMANN
ELISABETH CUNIN	THIERRY LULLE
JEAN-PAUL DELER	ÉVELYNE MESCLIER
FRANÇOISE DUREAU	OLIVIER PISSOAT
VINCENT GOUËSET	JUAN CARLOS ROJAS ARIAS

CONTENIDO

PRÓLOGO	9
INTRODUCCIÓN GENERAL <i>Françoise Dureau</i> <i>Vincent Gouëset</i>	13
CAPÍTULO PRIMERO EXPANSIÓN DE LA RED URBANA (1951-1993) <i>Vincent Gouëset</i> (coord.) <i>Évelyne Mesclier</i> <i>Jean-Paul Deler</i> (colab.)	33
CAPÍTULO SEGUNDO MOVILIDADES Y SISTEMAS DE LUGARES <i>Olivier Barbary</i> (coord.) <i>Françoise Dureau</i> <i>Odile Hoffmann</i>	93
CAPÍTULO TERCERO DINÁMICAS METROPOLITANAS DE POBLAMIENTO Y SEGREGACIÓN <i>Françoise Dureau</i> (coord.) <i>Olivier Barbary</i> <i>Thierry Lulle</i>	161
CAPÍTULO CUARTO CIUDAD Y ETNICIDAD: CONFIGURACIONES DE LA ETNICIDAD NEGRA EN LA CIUDAD <i>Odile Hoffmann</i> (coord.) <i>Olivier Barbary</i> <i>Elisabeth Cunin</i>	237
CAPÍTULO QUINTO VIOLENCIAS Y CIUDADES <i>Olivier Pissot</i> (coord.) <i>Olivier Barbary</i> <i>Juan Carlos Rojas Arias</i> (colab.)	293

CAPÍTULO SEXTO

BOGOTÁ: CRECIMIENTO, GESTIÓN URBANA Y DEMOCRACIA LOCAL

Thierry Lulle (coord.)

Françoise Dureau

Vincent Gouëset

Évelyne Mesclier (colab.)

351

CONCLUSIONES GENERALES

397

Jean-Pierre Lévy

ANEXOS

405

Anexo 1. Lista de los invitados al seminario

405

Anexo 2. Las fuentes de información

407

Anexo 3. Conceptos y definiciones

427

Anexo 4. Siglas y abreviatura

441

INDICACIONES BIBLIOGRÁFICAS SOBRE COLOMBIA

443

ÍNDICE DE RECUADROS

465

ÍNDICE DE TABLAS

465

ÍNDICE DE MAPAS

466

ÍNDICE DE GRÁFICOS

467

LOS AUTORES

469

Esta obra es el fruto de una investigación apoyada financieramente por el GIS *Réseau Amérique Latine* y el *Institut de Recherche pour le Développement* (IRD, UR 013). La idea fundadora de este proyecto era la de aprovechar los resultados de las investigaciones que han realizado desde hace unos diez años diferentes equipos franceses sobre las ciudades colombianas, organizando, en forma de ciclo de seminarios escalonados a lo largo de dos años (2000-2002), intercambios alrededor de cuestiones claves de la investigación sobre las ciudades y los sistemas de ciudades. El grupo constituido de esta manera, a través de la confrontación de puntos de vista y de métodos generalmente segmentados y aplicados a terrenos separados, se fijó como objetivo no simplemente establecer un “estado del arte” sobre la cuestión urbana en Colombia, sino producir conocimientos nuevos obtenidos gracias a la colaboración entre los diferentes miembros del equipo, quienes cuentan con una gran base disciplinaria y con experiencias de investigación muy diversificadas.

Este proyecto, titulado “Recomposiciones urbanas en América Latina: una lectura estructurada a partir del caso colombiano”, reunió durante dos años a un equipo de unos diez investigadores de diferentes disciplinas e instituciones, autores de esta obra colectiva.

Los análisis propuestos en esta obra se apoyan en los diferentes programas de investigación en los cuales participaron los autores:

– “Las formas de movilidad espacial de las poblaciones de Bogotá y su impacto sobre la dinámica del área metropolitana”, IRD-CEDE (Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico) de la Universidad de los Andes;

– “Prácticas residenciales e impacto sobre las dinámicas y la segmentación de grandes metrópolis. Estudio de las formas de movilidad espacial de las poblaciones de Bogotá y Delhi”, financiado por el PIR-*Villes*;

– “Movilidades, temporalidades y formas de gestión urbana. El caso de Bogotá”, IRD-CIDS (Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social) de la Universidad Externado de Colombia;

1 Traducción de MÓNICA SILVA.

– “Movilidad, urbanización e identidades de las poblaciones negras de la región Pacífica de Colombia”, IRD-CIDSE (Centro de Investigación y Documentación Socioeconómica) de la Universidad del Valle en Cali, con el apoyo financiero de Colciencias;

– “Segregación, ciudadanía y dinámicas urbanas en América Latina: el papel de las poblaciones negras en la ciudad”, IRD-CIDSE;

– “Movilidad espacial en ciudades de zonas de expansión: el caso de Yopal, Aguazul y Tauramena”, IRD-CEDE, con el apoyo financiero de Colciencias y del Ministerio del Medio Ambiente;

– “Observatorio de las redes y de los espacios de los Llanos, de los Andes y de la Amazonia”, IRD en colaboración en Colombia con el CRECE (Centro de Estudios Regionales, Cafeteros y Empresariales) y el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), con el apoyo financiero de FONADE (Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo);

– “Recomposiciones urbanas y dinámicas metropolitanas en Bogotá (Colombia)”, financiado por el programa ECOS-Norte Colombia.

La versión definitiva de los mapas de esta obra fue realizada por OLIVIER PISSOAT con el programa Philcarto [<http://perso.club-internet.fr/philgeo>].

Cada capítulo fue objeto de un seminario que reunía al equipo de redacción y a colegas que trabajan sobre Francia, África, Asia u otros países de América Latina, que pudieran aportar aclaraciones teóricas, metodológicas o comparativas críticas. Unas treinta personas² aceptaron ofrecernos las reflexiones que surgieron de la lectura de una versión preliminar. Éstas tuvieron un rol esencial a la hora de poner en perspectiva nuestras observaciones colombianas a la luz de conocimientos producidos en otras regiones del mundo, y nos permitieron aportar precisiones sobre la situación colombiana cuando era necesario, o, por el contrario, relativizar lo que, en ocasiones, no era específico de este país. Su contribución nos permitió enriquecer nuestra problemática de conjunto y nuestro bagaje conceptual y metodológico. Queremos hacerles llegar nuestros más profundos agradecimientos por su contribución, enriquecedora para la generación de esta obra.

2 Cfr. lista en anexo 1.

Agradecemos igualmente a DENISE PUMAIN, por su relectura atenta del manuscrito, y a JEAN-PIERRE LÉVY, por las pistas que despeja, desde el ejemplo colombiano, en la conclusión de esta obra.

Para los autores era muy importante que esta obra se divulgara entre el público colombiano interesado. Esta intención pudo concretarse gracias al apoyo del IRD y del IFEA, que financiaron la traducción al español, y de la Universidad Externado de Colombia, que acogió el proyecto con gran interés y asumió su publicación. Agradecemos a estas tres instituciones por su colaboración.

Por último, queremos señalar dos puntos que pueden llegar a permear la lectura de un libro escrito entre los años 2000 y 2002, y publicado por primera vez en Francia. Por una parte, es obvio que en los últimos seis años las diversas mutaciones observadas y analizadas han seguido desarrollándose y requieren ser consideradas retrospectivamente. Por otra parte, preferimos conservar en la traducción casi todas las aclaraciones dirigidas a los lectores franceses, quienes en su inmensa mayoría desconocen a Colombia. Es muy probable que éstas resulten muy evidentes a los ojos de los lectores colombianos; sin embargo, consideramos que no lo serían tanto para otros lectores de América Latina.

INTRODUCCIÓN GENERAL
LA CIUDAD, ESPEJO DE LOS CAMBIOS
EN LA SOCIEDAD COLOMBIANA

En la Colombia del siglo xx, la ciudad ha sido a la vez el teatro y uno de los principales motores de los cambios sociales. Aunque la urbanización y la fundación de las ciudades que concentraban todos los poderes constituyeran hechos inherentes a la historia de toda la América hispánica –desde la Conquista hasta nuestros días–, Colombia permaneció poco poblada y mayoritariamente rural hasta mediados del siglo pasado. Desde entonces, todo ha contribuido a convertir a Colombia en una nación urbana y a las ciudades en un medio cada vez más complejo. El movimiento de transición demográfica, iniciado a fines de los años 1930 y todavía inconcluso en el presente, hizo pasar a la población colombiana de 9 millones a más de 37 en medio siglo; evolución que en gran medida es una “transición urbana” porque la proporción entre los habitantes citadinos y los rurales se invierte en el mismo período: en el censo de 1993, las dos terceras partes de los colombianos vivían en ciudades, contra menos de un tercio que lo hacía sólo medio siglo antes. Más numerosas, las ciudades colombianas también son mucho más grandes que en el pasado, y algunas llegan a constituir grandes metrópolis: cuatro de ellas superan un millón de habitantes y Bogotá, la capital, que contaba apenas con 100.000 habitantes en los albores del siglo xx, hoy se ha convertido en una metrópoli con más de seis millones de habitantes.

Este movimiento de urbanización –cuyo despegue en los años 1930 coincidió con la crisis del modelo agrominero exportador y el proceso de industrialización por sustitución de las importaciones– fue alimentado al principio especialmente por la migración de origen rural¹ y por un marasmo en el campo, agravado por el episodio trágico de La Violencia en los años 1950. Pero el crecimiento urbano, en primer lugar ampliamente exógeno, rápidamente ha respondido a una lógica más endógena, y ha encontrado sus propias fuerzas en el dinamismo demográfico de poblaciones urbanas jóvenes y fecundas.

1 Sin provocar, no obstante, un despoblamiento del campo, cuya cifra total de población no cesó de aumentar a todo lo largo del siglo xx.

Este dinamismo demográfico también se fundamenta en la concentración —en las ciudades— de actividades cada vez más numerosas y diversificadas. Cada nuevo ciclo económico ha reforzado la preponderancia de las grandes ciudades: industrias, servicios intermedios y superiores, funciones de mando, funciones regionales, comercio, apertura internacional... Con la globalización y la liberalización de la economía, el grado de internacionalización de las ciudades colombianas devino, en la década de los años 1990, en un factor de desarrollo decisivo.

Así, las ciudades se han convertido —sobre el plano económico y social pero también político y cultural— en un prisma que permite observar las mutaciones que afectaron al país a lo largo del siglo xx, en particular en el curso de sus tres últimos decenios, que constituyen el período de referencia de este trabajo². En efecto, Colombia experimentó numerosos cambios desde los años 1970, que esencialmente corresponden a tendencias continentales y mundiales, en ocasiones influidas por especificidades nacionales. Estos cambios tienen importantes consecuencias sobre la dinámica urbana.

En el plano demográfico, la dinámica urbana está marcada por el paso de un ciclo de crecimiento que había alcanzado en los años 1960 tasas muy elevadas, a escala mundial, a un ciclo de disminución del crecimiento, simultáneamente con la aparición de formas de movilidad espacial cada vez más complejas, que se desviaban del modelo de la migración rural-urbana dominante en otro tiempo. Estos cambios han sido acompañados por una renovación de la aproximación clásica al proceso de urbanización y de concentración urbana. El crecimiento demográfico de las ciudades y su expansión espacial han concentrado desde hace tiempo la atención de los poderes locales y de los investigadores, como también han demandado interés la segregación socioespacial, el desarrollo de barrios marginados, en general, la pobreza urbana. Retrospectivamente, los estudios realizados en esta época frecuentemente parecen impregnados de una visión alarmista sobre la urbanización, pues ven en la “explosión urbana” o en el “gigantismo” de las ciudades el estigma de una “crisis urbana” que afecta al conjunto de la sociedad. En las décadas de los años 1980 y 1990, esta visión

2 Debido a restricciones de orden estadístico, se consideraron esencialmente los censos de 1973 y de 1993 (cfr. la presentación de las fuentes de información en el anexo 2).

ha cedido progresivamente el paso a enfoques más diversos sobre el hecho urbano, a medida que las tasas de crecimiento disminuían y que las grandes ciudades se convertían en el marco de vida cotidiana para poblaciones cada vez más numerosas³ y todavía jóvenes. Las ciudades colombianas –menos marcadas por el contexto de urgencia y de informalidad que había caracterizado al período anterior– han entrado hoy en una fase de relativa “madurez”, en la que la gestión del “stock urbano” acumulado en el curso de los decenios precedentes –en vía de densificación e incluso de regeneración– constituye ahora un problema a menudo más importante que la expansión de los barrios periféricos. Esta última se plantea además en términos renovados, en la medida en que ocurre esencialmente más allá de los límites administrativos de las ciudades centrales, lo que suscita desafíos de orden institucional, a escala metropolitana y a veces regional, una situación antaño rara en Colombia fuera del área urbana de Medellín.

En el plano político, a pesar de la persistencia de una situación interior muy conflictiva, desde los años 1980 Colombia ha conocido un doble proceso de democratización⁴ y descentralización que culminó con la adopción en 1991 de una nueva Constitución. Esta Constitución entrañó muchas reformas legales e institucionales, especialmente en términos de ordenamiento territorial: incremento en las competencias de las colectividades locales y medidas de saneamiento financiero, incitación y luego obligación de proceder a una planificación municipal y urbana, etc. Las implicaciones de estas reformas, que fueron concebidas para mejorar las condiciones de ejercicio y la eficacia de la acción pública, son *a priori* importantes en términos de gestión y de dinámica urbanas. Hoy sólo se pueden medir sus efectos en el largo plazo.

En el plano económico, el fracaso del modelo latinoamericano de desarrollo –usualmente llamado “sustitutivo”– ha sido menos violento en Colombia que en otras partes durante la década de los años 1980, especialmente gracias a los efectos positivos del narcotráfico, en su apogeo durante ese período. Esta

3 En 1993, tres de cada cuatro ciudadanos vivían en ciudades de más de 100.000 habitantes.

4 Una democratización conducida simultáneamente “desde arriba” a través de la designación de un número creciente de cargos públicos por vía electoral (y un control reforzado de los representantes del Estado), y “desde abajo” mediante la implementación de numerosas e innovadoras formas de “participación ciudadana” en los asuntos públicos locales.

relativa tregua no le impidió a Colombia entrar en el mismo giro neoliberal que el resto del subcontinente en los años 1990, al abrir su mercado interno al comercio internacional y a las inversiones extranjeras, y al proceder a una serie de ajustes estructurales que implicaron una redefinición del rol del Estado y una modificación de sus reglas de intervención en la esfera económica. Allí también las consecuencias urbanas de esos cambios son importantes: el campo de acción de los gobiernos locales se desplazó, la naturaleza de las relaciones entre el Estado y el sector privado (sector inmobiliario, empresas de transporte, establecimientos comerciales, etc.) evolucionó, y las empresas de servicios públicos, que habían contribuido ampliamente a “hacer” la ciudad desde el principio del ciclo de crecimiento urbano acelerado —a mediados del siglo xx—, igualmente contemplaron la transformación de su papel y su modo de funcionamiento.

Las décadas de los años 1980 y 1990 también produjeron un giro cultural mayor cuyo eco, menos centrado *stricto sensu* sobre la problemática urbana, no obstante es discutido ampliamente en esta obra: el “viraje étnico”, consagrado por el reconocimiento en la Constitución de 1991 del carácter multiétnico y pluricultural de la Nación. Antes focalizado en las reivindicaciones territoriales de las comunidades indígenas y frecuentemente vinculado, por eso mismo, a conflictos agrarios, el problema étnico regresa bajo una perspectiva más amplia, a la vez identitaria, cultural, territorial, social y política. El reconocimiento de las minorías étnicas indígenas y afrocolombianas⁵, la aceptación

5 Sobre la definición de categorías étnicas en Colombia, cfr. el anexo 3. El reconocimiento de las “comunidades negras” es una verdadera novedad. La categoría concierne especialmente a las poblaciones ribereñas del Pacífico, descendientes de los antiguos esclavos y de individuos libres refugiados allí a lo largo del tiempo, y cuyo mestizaje fue débil. La Costa Pacífica también es una de las regiones más rurales y pobres de Colombia. El reciente movimiento de urbanización de estas poblaciones en las ciudades de la costa o del interior (como Cali), así como la progresiva integración del litoral Pacífico al mercado mundial (especialmente gracias a las actividades extractivas), han contribuido a movilizar políticamente a esas poblaciones afrocolombianas en torno a reivindicaciones al mismo tiempo culturales, territoriales, ecológicas, económicas y sociales (vivienda, educación, trabajo, etc.). En el conjunto de esta obra, hemos decidido escribir las denominaciones étnicas o raciales en minúsculas. Eso nos parece preferible a ceder al uso corriente que

de las discriminaciones de las cuales han sido –y siguen siendo hoy– víctimas durante la historia nacional, condujeron a una serie de medidas en favor de esas poblaciones, como la Ley 70 de 1993 en beneficio de las comunidades negras. Mediante esas medidas, bastante radicales, el Estado reconoce los derechos colectivos de las poblaciones indígenas y negras sobre cerca de un tercio del territorio nacional. Si bien esos nuevos “territorios étnicos” en su mayoría están localizados en zonas rurales periféricas, sus repercusiones sobre la temática urbana no son pocas, sobre todo para las poblaciones afrocolombianas. En primer lugar porque la toma de conciencia y la movilización de estas últimas y de sus líderes han sido frecuentemente asuntos propios de las elites urbanas⁶. En segundo lugar porque los “territorios étnicos” han replanteado el problema de las relaciones ciudad-campo en un contexto en el que el estudio de las movilidades individuales ha mostrado claramente que los emigrantes que han abandonado sus lugares rurales de origen conservan frecuentemente un lazo fuerte (y cíclico) con ellos. Por último, porque el retorno de consideraciones étnicas y raciales al debate público ha permitido replantear el problema de las discriminaciones hacia las minorías en general, un problema que la opinión generalizada muchas veces considera como menor en Colombia, especialmente cuando se lo compara con la agudeza del mismo problema en Estados Unidos. Pero una mirada más atenta sobre el tema muestra que, por el contrario, este problema conserva toda su pertinencia, especialmente en el medio urbano, donde el racismo es susceptible de volver a dar a los conflictos clásicos de la segregación socioespacial y del ostracismo cultural una dimensión suplementaria, en particular para las poblaciones negras.

transforma un aspecto aproximativo y socialmente construido en una categoría de pertenencia, para la cual el sustantivo, expresado en la escritura gracias a la letra mayúscula, reenvía a la idea de una identidad que sería “objetiva” y casi “natural”.

- 6 Los indígenas de Colombia no aparecen por el momento como actores sociales muy representados en la ciudad ni asociados con reivindicaciones urbanas, especialmente en razón de su escasez demográfica, de su residencia mayoritariamente rural y de la vinculación histórica de los movimientos indígenas a la recuperación de sus territorios “ancestrales”, raramente localizados en las ciudades.

LA RENOVACIÓN DE LAS TEMÁTICAS
DE INVESTIGACIÓN URBANA EN COLOMBIA

En un contexto científico fuertemente marcado por las corrientes estructuralistas (como la Escuela de la dependencia), la investigación urbana en Colombia, de una calidad muy frecuentemente desconocida en el exterior, ha privilegiado durante mucho tiempo una lectura institucional y funcional de la ciudad en la interpretación del hecho urbano y de los movimientos sociales que lo acompañan, haciendo hincapié en las estructuras subyacentes a la organización de la sociedad y del espacio, así como los mecanismos que operan en escala menor: movimiento nacional de crecimiento y de concentración urbana, dependencia Sur-Norte inherente al sistema capitalista, y más recientemente viraje neoliberal y globalización. Estas aproximaciones en general proceden en forma segmentada. Así, son examinados por turno los mecanismos del crecimiento urbano, los flujos migratorios y las características demográficas de las poblaciones urbanas, la morfología urbana con el crecimiento incontrolado de los barrios periféricos y los procesos de segregación socioespacial, e incluso las políticas urbanas y el protagonismo de los actores sociales sobre el escenario urbano local.

A lo largo del tiempo, la investigación sobre las ciudades colombianas ha integrado progresivamente nuevas temáticas, especialmente con la transición ya mencionada hacia una nueva fase del crecimiento urbano, indisociable ella misma de un cambio de modelos políticos y económicos, y también bajo la influencia de nuevos paradigmas científicos difundidos en el país durante las décadas de los años 1980 y 1990. La descentralización, la democratización de la gestión urbana, la participación ciudadana, la cultura urbana y el reconocimiento de identidades individuales y colectivas, el medio ambiente, etc., han ocupado un lugar cada vez más importante en el campo de los estudios urbanos.

Uno de los cambios más significativos quizás ha sido el reconocimiento del papel de los habitantes como actores de pleno derecho en la producción de la ciudad, por sus prácticas individuales o familiares y por su modo de vida. Mal conocido durante mucho tiempo, este papel está hoy ampliamente valorado tanto por los científicos como por los políticos. Colombia dispone hoy de una serie de estudios realizados en diferentes ciudades en los años 1990, que han aplicado diferentes métodos de recolección y análisis, lo cual

permite examinar mejor los comportamientos residenciales de los habitantes y su papel en el desarrollo urbano: encuestas demográficas, enfoque antropológico, análisis biográficos, análisis sistemático de datos tanto cuantitativos como cualitativos.⁷

El cruce entre los distintos tipos de aproximación a la ciudad evocados aquí, el uno “por arriba”, institucional y estructuralista, y el otro “por abajo”, más individual y biográfico, ahora es concebido como necesario por numerosos autores. Pero raras veces ha sido conducido en forma sistemática, y mucho menos de manera sistémica.

GÉNESIS DE UN PROYECTO INTERDISCIPLINARIO

Es precisamente esta voluntad de emprender una lectura de las ciudades colombianas entrecruzando los ángulos de ataque y las disciplinas, la que ha guiado el espíritu del equipo movilizado por la redacción de la presente obra.

Organizado de manera informal al principio, sobre la base de un conocimiento recíproco de investigaciones urbanas y sociales emprendidas por diferentes investigadores franceses en Colombia y en otros países latinoamericanos, el colectivo reunido en esta obra se constituyó formalmente a principios del año 2000, en respuesta a una convocatoria de investigaciones del *Réseau Amérique Latine -GIS-*, que nos condujo a elaborar un programa titulado “Recomposiciones urbanas en América Latina: una lectura estructurada a partir del caso colombiano”. En ese momento, sin ideas preconcebidas sobre la forma precisa que tomarían los resultados de esta colaboración, los investigadores comprometidos tenían la inquietud muy clara de poner en común sus saberes, métodos, conceptos, terrenos y resultados de investigación respectivos, para elaborar una lectura cruzada del hecho urbano en Colombia. Esta lectura debía permitir a cada uno de ellos —aprovechando la experiencia, el saber-hacer y el anclaje disciplinario o epistemológico de los otros miembros del equipo— exponer sus trabajos a la perspectiva de los demás y analizarlos bajo nuevas luces. Conducida así, la confrontación entre los principales resultados nos ha

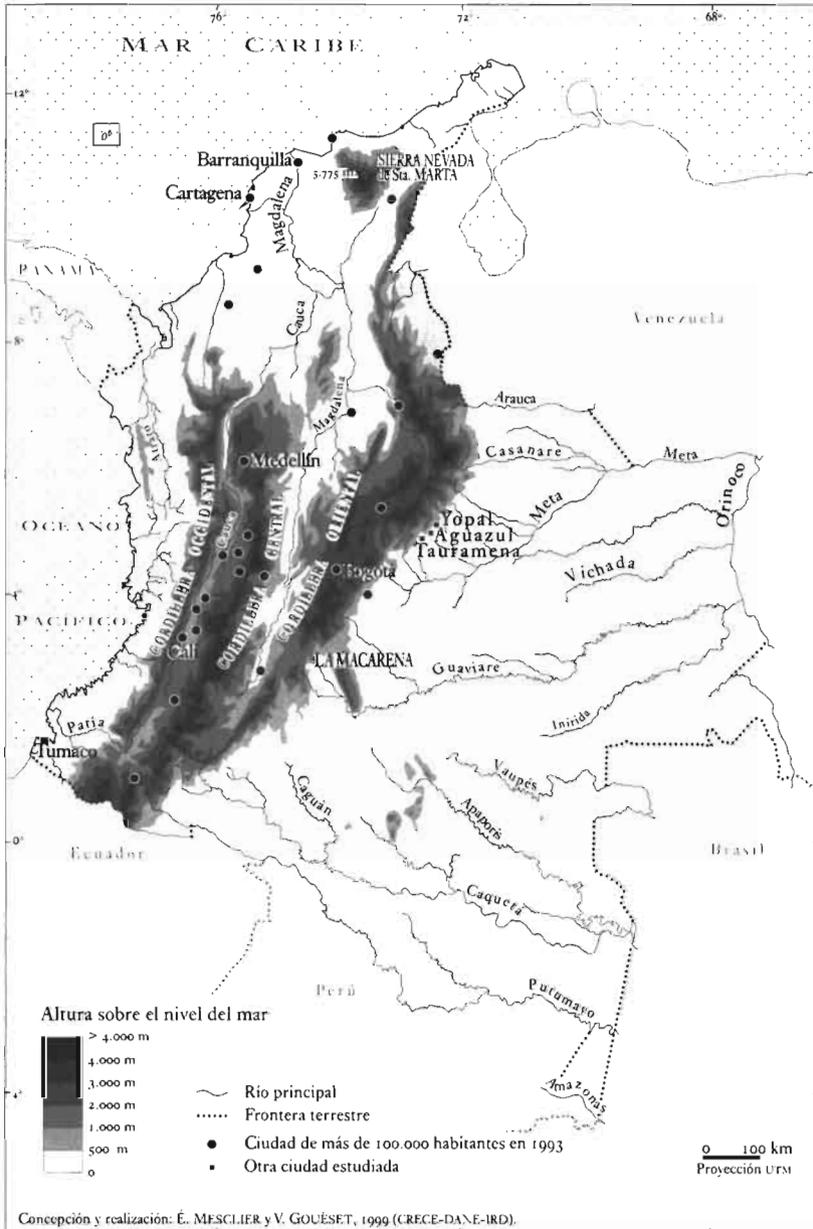
7 Cfr. la presentación de las fuentes de información en el anexo 2.

permitido sacar partido nuevamente de nuestros respectivos materiales, para producir nuevos conocimientos respecto a los resultados alcanzados en cada uno de los programas de investigación, innovaciones que sólo el cruzamiento de perspectivas y las colaboraciones alcanzadas al interior de cada capítulo han hecho posibles.

Por ejemplo, es así como el conocimiento íntimo de las prácticas individuales y familiares del espacio urbano, reinscrito en un campo migratorio ampliado y que funciona en forma cíclica, abre nuevas pistas sobre la acción pública y las políticas de la ciudad en una metrópoli como Bogotá. Paralelamente, los trabajos de análisis espacial sobre la dinámica de la red urbana colombiana alcanzan un nuevo relieve cuando se sitúa de nuevo el crecimiento de las ciudades en la óptica de las estrategias migratorias y los comportamientos demográficos de los individuos y las familias. Inversamente, el conocimiento de esta dinámica de conjunto de la red urbana colombiana en el largo plazo confiere al trabajo sobre las migraciones un marco que permite situar mejor los movimientos de las poblaciones. En otro registro, las investigaciones sobre la violencia alcanzan, una vez reinscritas en el contexto de las dinámicas urbanas, una nueva orientación que enriquece, en contrapartida, el ya amplio espectro de los estudios sobre la violencia en Colombia. Otro ejemplo es la inclusión de la variable “étnica” apprehendida bajo un ángulo socioantropológico, que aclara bajo nuevas luces el problema —clásico en las ciudades de América Latina— de la segregación socioespacial, mientras que, a la inversa, una entrada estrictamente urbana contribuía a cambiar sensiblemente la perspectiva de los estudios sobre el hecho étnico en Colombia, más centrados de ordinario sobre los indicios y las marcas identitarias “tradicionales” de las sociedades respectivas, más rurales en su origen. El cambio de escala que ha impuesto a cada uno este esfuerzo colectivo, confrontando los terrenos de estudio (presentados en el Recuadro 0.1 y en el mapa 0.1) y oponiendo el caso de las ciudades muy grandes como Bogotá, al de las ciudades a veces muy pequeñas como Tauramena, siempre reinscribiendo el conjunto de esas observaciones en el contexto de un sistema urbano nacional, añade un atractivo suplementario al ejercicio.

El equipo de investigadores reunido para la elaboración de esta obra, fortalecido a través de experiencias bastante extensas de investigación en proyectos binacionales, se sitúa en la convergencia de dos comunidades científicas, francesa y colombiana. Apoyándose sobre un conocimiento preciso de la

MAPA O. I
RELIEVE DE COLOMBIA Y CIUDADES ESTUDIADAS



Edición: O. PISSOAT

realidad colombiana, los investigadores se esforzaron por aportar una “lectura cruzada” sobre las ciudades, extrayendo de los debates los paradigmas y los métodos respectivos de las dos comunidades, así como el bagaje conceptual de su disciplina: la geografía, el urbanismo, la sociología, la antropología, la demografía o la estadística. Conscientes del desfase cultural —e incluso epistemológico— que puede existir entre Francia y Colombia, y de sus riesgos (el etnocentrismo, consciente o inconsciente) pero también de sus ventajas (la de una exterioridad científica y afectiva —en realidad muy relativa— respecto al objeto de estudio), nos hemos preocupado por sacar partido de esa posición intermedia aprovechando nuestro bagaje científico francés cada vez que era posible, pero evitando siempre introducir precipitadamente conceptos inapropiados para la realidad colombiana. Del mismo modo, nuestro deseo es situar de nuevo este estudio de la realidad nacional colombiana en una perspectiva latinoamericana, incluso internacional, con el fin de hacerlo parte de la especificidad y de la universalidad de los hechos analizados, y con el objetivo de “des-singularizar” el caso colombiano, frecuentemente considerado como único en el campo de las ciencias sociales. Los seminarios de reflexión desarrollados para cada capítulo —a los que fueron invitados sistemáticamente investigadores que trabajan en otras regiones de América Latina y del mundo— han respondido a este esfuerzo de confrontación dialéctica.

LA ELECCIÓN DE TEMAS Y LUGARES

Sin duda, resultaba imposible tratar todas las recomposiciones urbanas. Las políticas urbanas nacionales, por ejemplo, no habían sido objeto de investigaciones en profundidad, al igual que los sistemas productivos urbanos. La diversidad misma de las mutaciones urbanas abordadas en los trabajos de los investigadores del equipo también impedía tomarlas en cuenta en su integridad. Dos preocupaciones guiaron nuestra elección: la voluntad de producir resultados complementarios a los conocimientos ya adquiridos sobre las ciudades de Colombia; y la inquietud de proponer, a partir de nuestros estudios particulares, lecturas más generales sobre las ciudades colombianas que pudieran contribuir a los debates en curso entre la comunidad científica internacional.

Sólo un pequeño número de ciudades había sido objeto de trabajos en profundidad. A partir de ese panel compuesto por siete ciudades, no se pretendía aprehender el conjunto de transformaciones en curso en las ciudades de las diferentes regiones de Colombia. Pero en este conjunto de ciudades, variado tanto en términos de tamaño como de localización, las recomposiciones urbanas se cumplen con una intensidad particular. La diversidad de enfoques aplicados en esas ciudades y la riqueza de las informaciones recogidas permitían considerar colaboraciones novedosas, en el cruce entre un enfoque macro y una aproximación micro al hecho urbano.

Es el resultado de estos trabajos lo que se propone compartir aquí con los lectores que no trabajan sobre Colombia: se trata de una lectura de la ciudad “estructurada” a partir de nuestras experiencias colombianas, que podría ser confrontada con otras situaciones, latinoamericanas o mundiales⁸.

RECUADRO 0.1

SOBRE LOS LUGARES ESTUDIADOS EN ESTA OBRA

Colombia (organización administrativa del territorio)

Con una superficie total de 1.141.748 Km², el territorio colombiano está subdividido, según la Constitución de 1991, en tres niveles: la Nación, los departamentos (32 más el Distrito Capital de Bogotá: mapa 0.2) y los municipios. Colombia cuenta actualmente con 1.098 municipios, de los cuales tres gozan de un estatus específico: Distrito Turístico (Cartagena y Santa Marta) o Industrial y Portuario (Barranquilla). La descentralización ha reforzado la autonomía de los departamentos y más aún la de los municipios. Igualmente, la nueva Constitución prevé la existencia de otras entidades territoriales a escala regional o local, como los “Territorios” de las comunidades indígenas y negras (entidades inframunicipales) e incluso las “Áreas Metropolitanas” (entidades intermunicipales), poco numerosas y que funcionan con problemas pues limitan especialmente la autonomía de los municipios comprometidos.

Ciudad

El DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) considera que la población urbana corresponde a las cabeceras municipales. Para el análisis del sistema de ciudades realizado en el capítulo primero, hemos utilizado un umbral estadístico más restrictivo de lo urbano, considerando sólo las cabeceras municipales de más de 15.000 habitantes en 1993.

8 Para mayores precisiones, consultar las definiciones del anexo 3.

Entre las 164 ciudades así definidas en Colombia, ocho son áreas metropolitanas constituidas por la conurbación de varias cabeceras municipales. Cada ciudad está subdividida en zonas, designadas bajo el término de comunas en los municipios ordinarios (Cali tiene 21) y de localidades, en Bogotá (que cuenta con 19 localidades urbanas y la localidad rural de Sumapaz).

Bogotá

Capital de la República de Colombia, en el corazón de una aglomeración de más de seis millones de habitantes. La ciudad goza del estatus de “Distrito Capital”, independiente del Departamento de Cundinamarca aunque se encuentra situada en él (y también es su capital). Su estatus es semejante al de los otros municipios del país, pero también goza de prerrogativas que se le confieren a los departamentos. El crecimiento de la ciudad invade hoy una vasta corona metropolitana (suburbios y municipios periféricos) poblada por cerca de 0,7 millón de habitantes en 1993. El relativo aislamiento geográfico de Bogotá, situada a 2.600 m. en una altiplanicie de la Cordillera Oriental de los Andes (la Sabana), ha limitado desde hace tiempo su crecimiento y ha permitido la expansión de metrópolis que compiten con ella (p. ej., Medellín, Cali, Barranquilla). Esta desventaja se ha superado hoy y la ciudad concentra una parte creciente de la economía nacional, especialmente en las ramas de actividad más modernas, lo cual la convierte en la ciudad más atractiva para las migraciones de población.

Cali

Capital del Departamento del Valle del Cauca, poblada por 1,8 millones de habitantes según el censo de 1993, Cali se ha convertido —durante un siglo de rápido crecimiento— en la metrópoli indiscutible del suroccidente colombiano. Abierta al Pacífico gracias al puerto de Buenaventura, la ciudad se ha beneficiado ampliamente del dinamismo de la rama agroexportadora local (azúcar y café), al igual que de una temprana afluencia de inversiones extranjeras que han favorecido el desarrollo de una industria moderna. Esta coyuntura positiva le ha valido recibir importantes flujos migratorios de todo el suroccidente de Colombia, y hoy le permite proyectarse sobre una amplia región metropolitana que se extiende a parte del departamento vecino del Cauca. También es, gracias a las poblaciones provenientes de la Costa Pacífica y a las antiguas zonas de plantación del Valle, una de las ciudades más “afrocolombianas” de la región andina. A mediados de los años 1990, el crecimiento económico de Cali sufrió una brusca caída ligada al deterioro de la coyuntura nacional, gravemente complicada debido al desplome de los carteles locales de la droga. Esta recesión, acompañada por una muy grave crisis social, hoy pesa seriamente sobre la economía caleña.

Cartagena

Segunda ciudad de la costa Caribe, con 700.000 habitantes en 1993, Cartagena heredó de su pasado colonial el esplendor de sus monumentos –que le valieron ser inscrita como patrimonio mundial de la humanidad en 1984– pero también heredó el mestizaje de su población, lo que recuerda que fue el primer puerto esclavista de la actual Colombia.

Cartagena, que ha sufrido durante mucho tiempo la competencia de Barranquilla, mejor situada en la desembocadura del río Magdalena sobre la costa, ha conocido fases alternadas de decadencia y recuperación desde la independencia. El destino de Cartagena, bastante dependiente de factores exógenos (p. ej., base militar, actividades industriales y portuarias) hoy está especialmente ligado al desarrollo del turismo nacional e internacional. La huella del turismo refuerza la dualidad de una ciudad muy marcada por las desigualdades y por una segregación no exclusivamente social sino también racial.

Tumaco

Segundo puerto del Pacífico colombiano y segunda ciudad del Departamento de Nariño, Tumaco era una ciudad mediana de 65.000 habitantes en 1993, situada en el corazón de una región pobre y periférica. Su historia está marcada por el sello de la esclavitud, a imagen de la fuerte polarización sociorracial que todavía hoy estructura el espacio y la sociedad tumaqueños. La ciudad, que vive al ritmo de los ciclos de actividades extractivas dominantes desde siempre en la economía local (minas, recursos forestales, acuicultura e incluso, más recientemente, tráfico de drogas), ocupa no obstante una posición de interfase estratégica entre el campo de la costa y las ciudades de los Andes.

Yopal, Aguazul, Tauramena

Yopal, capital del Casanare, contaba con 43.000 habitantes en 1996, mientras que Aguazul y Tauramena sólo estaban pobladas por 11.000 y 7.000 habitantes respectivamente. Casanare es un vasto departamento periférico y rural del nororiente de Colombia, que permaneció poco poblado y débilmente urbanizado hasta el descubrimiento de yacimientos petroleros cuya explotación, a principios de los años 1990, entrañó un crecimiento económico y una afluencia migratoria espectaculares. Tauramena y Aguazul eran el asiento de dos gigantes pozos petroleros, Cusiana y Cupiagua. Hasta fines de los años 1990, ningún pozo era explotado en el territorio municipal de Yopal, pero la ciudad era sede de numerosas actividades petroleras y de prospección intensa.

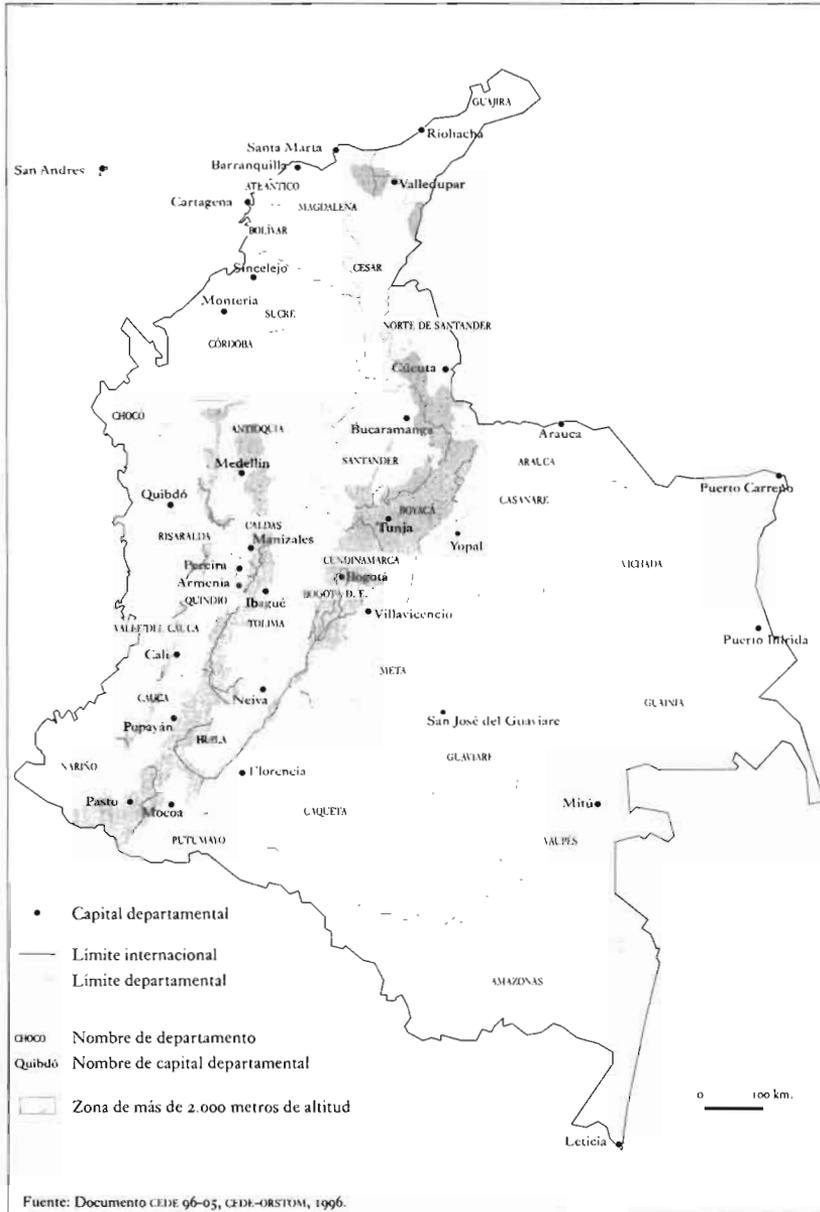
ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

El primer capítulo realiza un ejercicio inédito en Colombia: trazar un cuadro general de la dinámica de la red urbana colombiana en el curso de un período

reciente (1973-1993, a veces remontándose, siempre que sea útil y posible, hasta el censo de 1951), tratando de identificar –a partir de métodos de análisis espacial– los procesos de crecimiento, difusión y concentración urbana a escala nacional, así como los principales factores demográficos del crecimiento (movimiento natural, aporte migratorio, características de la población urbana). Esta primera aproximación –que permite poner de manifiesto la existencia de varios modelos regionales de urbanización, representados en forma gráfica– muestra el carácter sistémico de la dinámica urbana en Colombia. Ésta obedece a lógicas frecuentemente próximas a las observadas en Europa, que son relativamente independientes de la coyuntura económica de las ciudades o de las políticas públicas dirigidas al respecto y que son más sensibles a parámetros estrictamente demográficos o espaciales: efecto del tamaño inicial de las ciudades, de su localización en la malla urbana nacional, de la densidad del poblamiento rural de los alrededores, e incluso de la distancia respecto a las más grandes metrópolis. Igualmente, el crecimiento de las ciudades es muy sensible a los flujos migratorios, que favorecen a las ciudades más grandes y sus periferias. Este estudio previo nos demuestra que ninguna ciudad puede ser aislada del contexto urbano nacional: todas evolucionan en forma interdependiente con el resto de la red, lo que relativiza el peso de los factores económicos, políticos y culturales propios de cada una de ellas.

A continuación, el Capítulo Segundo se concentra en el factor que introduce las más grandes desigualdades en las trayectorias de crecimiento demográfico de las ciudades: la movilidad espacial. El estudio se apoya en el análisis tanto de la información clásica de los censos sobre las cifras y las características de los migrantes, como de la información recogida en las encuestas realizadas entre 1993 y 1998 en Bogotá, en las ciudades del Casanare, en Cali y en el municipio de Tumaco. Estas recolecciones permiten aprehender, a nivel de los individuos y de sus unidades familiares, los cambios de residencia duraderos y también los movimientos pendulares, las movilidades circulares o las prácticas multiresidenciales. Los ejemplos analizados muestran una evolución general reciente en los comportamientos migratorios que atraviesa los contextos locales. La intensificación de la movilidad, la diversificación de sus formas y los cambios en la orientación y en la composición de los flujos que caracterizan a los años 1990, afectan en forma nueva a los lugares que dicha movilidad pone en relación. La diferenciación de los comportamientos

MAPA 0.2
MALLA ADMINISTRATIVA EN 1993



Concepción y realización: F. DURFAC y O. PASSOT

migratorios, abundantemente ilustrada, testimonia la diversidad de registros de la movilidad pero también las restricciones en su gestión por los individuos y las unidades familiares. En cambio, lo que permanece constante es el principio de un espacio de reproducción multilocal, y la tendencia que muestra a ampliarse considerablemente, trastornando la organización tradicional en cuencas migratorias regionales alrededor de las metrópolis colombianas, al igual que los modos de administración y gestión del territorio.

El Capítulo Tercero introduce una nueva escala, la del análisis intraurbano de las grandes ciudades colombianas, a partir de los ejemplos de Bogotá y Cali. Dirigido bajo una perspectiva comparativa y diacrónica (de los años 1970 hasta fines de los años 1990), este estudio pone en relación los modelos de desarrollo metropolitano, las distribuciones espaciales de las densidades y las divisiones sociales del espacio. Se examina el papel de los habitantes a través de sus lógicas residenciales y sus prácticas de movilidad en la producción de formas metropolitanas contemporáneas. Recíprocamente, se consideran las modificaciones en los comportamientos de los habitantes impuestas por la evolución de las estructuras metropolitanas. En Colombia, el proceso segregativo marca profundamente los sistemas de representación de los distintos actores urbanos, habitantes y responsables, sin que el tema haya sido objeto de un análisis en profundidad. El acceso a los archivos individuales de los censos y los datos sobre la movilidad intraurbana recogidos en nuestras encuestas permiten emitir un diagnóstico –inédito, preciso, en diferentes escalas– de la dinámica del poblamiento y de las divisiones sociales en las dos ciudades. El ejercicio pone en evidencia el cambio de modelo de crecimiento de Bogotá, bien avanzado: la dinámica de expansión periférica ha cedido su lugar a una dinámica dominada por la redistribución de las poblaciones en el espacio, asociada con una diversificación de las escalas de la segregación residencial. En Cali, la herencia histórica de una división social del espacio en grandes bloques, en toda la ciudad, perdura y se extiende a la periferia. El estudio de la dimensión racial de la segregación también muestra que en Cali no existe un gueto racial en el sentido que tiene este término en Estados Unidos; no obstante, existe segregación residencial de la población negra, que se expresa en escalas y bajo modalidades variables en función de la pertenencia social.

El Capítulo Cuarto profundiza en el problema de la construcción identitaria en la ciudad, y en las relaciones recíprocas entre identidades urbanas y

estructuras urbanas: ¿cómo se combinan las “identidades urbanas” o se oponen a otras modalidades de afirmación identitaria, especialmente sociorracial y étnica?, ¿de qué modo contribuyen las pertenencias raciales y étnicas a la producción de la ciudad?, ¿cómo son producidas ellas por la ciudad? Éstas son algunas de las preguntas que aborda este capítulo a propósito de las poblaciones afrocolombianas. La decisión adoptada fue confrontar voluntariamente tres aproximaciones diversas, en tres ciudades de tamaño e historia contrastados: en Cali, el análisis estadístico de los determinantes de las inscripciones identitarias étnicas o raciales declaradas en una encuesta cuantitativa; en Cartagena, el análisis antropológico de situaciones de interacción entre personas que consideran sus pertenencias raciales como diferentes; en Tumaco, el abordaje en términos de geografía e historia política en el largo plazo. El cruzamiento de las conclusiones alcanzadas en los tres contextos urbanos es rico en enseñanzas sobre los procesos de construcción de la identidad negra en la ciudad, eminentemente diversos y dinámicos, pero que tienen un punto de partida en común: la percepción de un componente propiamente racial en la segregación residencial y en la exclusión socioeconómica. Los ejemplos tratados a lo largo del capítulo también permiten proponer una nueva lectura sobre las relaciones ciudad-etnicidad, en la cual los problemas de escala y de contexto adquieren una pertinencia particular. En efecto, la relación identidad-territorio, lejos de desaparecer en el medio urbano, se expresa allí bajo escalas y modalidades diversas, a través de prácticas urbanas que testimonian, más que los espacios, la existencia de pertenencias sociorraciales.

En un país marcado a la vez por un conflicto armado particularmente sangriento y por la urbanización creciente de la población, las ciudades constituyen nuevos soportes para el despliegue de la violencia. Pero la violencia en la ciudad, objeto del Capítulo Quinto, ha sido poco estudiada aún, a diferencia de la violencia política, que se ha convertido en todo un campo tradicional de la investigación en Colombia, con sus propios especialistas: los “violentólogos”. En primer término, este capítulo traza un diagnóstico espacial de la violencia homicida en el conjunto de los municipios del país desde 1982 a 1998, y en las ciudades de Cali y Bogotá a fines de los años 1990. Este análisis vuelve a poner en cuestión los discursos clásicos asociados con la generalización de la violencia. La violencia en las ciudades colombianas permanece, en su mayo-

ría, como imputable a actores distintos a los del conflicto armado: en Cali y Bogotá, la violencia homicida está principalmente marcada por las dinámicas de penetración del bandolerismo en la ciudad. El análisis de la delincuencia menor (principalmente los robos) en Cali en 1998, realizado a partir de una encuesta de victimización, vuelve a poner a la orden del día las interpretaciones ligadas a la ruptura del lazo social y la exclusión económica. En la capital caleña, sometida entonces a una recesión económica y una crisis social sin precedentes, salen a la luz factores dejados de lado por los violentólogos. Así ocurre, por ejemplo, con la pobreza, abandonada a justo título en la explicación del fenómeno a nivel nacional, pero cuya consideración resulta imperativa respecto a las grandes ciudades. La sobreexposición de la población negra a la delincuencia común realmente constituye una dimensión importante de la segregación étnica en Cali.

Para terminar, el Capítulo Sexto vuelve sobre una cuestión relativamente clásica en Colombia: la de la gestión de las ciudades por parte de sus actores institucionales, concentrándose en el caso de Bogotá. El crecimiento y el tamaño de esta ciudad, la complejidad de los desafíos sociales y espaciales que la caracterizan, el aspecto voluntarista y con frecuencia innovador de las políticas urbanas —de las cuales se ha beneficiado desde hace tiempo—, al igual que la riqueza de estudios y la cantidad de fuentes disponibles sobre Bogotá, hacen de esta capital una figura ejemplar de acción pública urbana en Colombia. El interés de esta sección es múltiple. No sólo procede a realizar un inventario de las políticas públicas implementadas en esta ciudad desde los años 1950, sino que además busca, cada vez que resulta posible, confrontar la acción pública con sus resultados, ofreciendo indicaciones precisas sobre la evolución de los principales sectores de intervención pública. Así, permite tener una idea de conjunto sobre los efectos —o la ausencia de efecto— del control de la expansión urbana, de las políticas de vivienda (especialmente popular), de la oferta de servicios públicos domésticos, de la gestión de los transportes e, incluso, de las reformas institucionales y democráticas desde la escala de la localidad hasta la de la región metropolitana. Un examen atento de las políticas sectoriales permite tanto objetar una crítica reiterada sobre la ineficacia de la acción pública, como mostrar los límites de las reformas implementadas en materia de descentralización, de democratización y de promoción de nuevas formas de participación ciudadana.

La confrontación de este capítulo con los que lo preceden, sobre la dinámica de la red urbana nacional, las movilidades espaciales, las formas de segregación socioespacial e incluso sobre las manifestaciones de violencia intraurbana, permite finalmente establecer una síntesis raramente realizada entre diferentes escalas de análisis del hecho urbano colombiano, articulando estudios del sistema urbano nacional, de ciudades y de prácticas de diferentes actores urbanos, habitantes y responsables, que era justamente lo que constituía un objetivo central de este libro.

FRANÇOISE DUREAU
VINCENT GOUËSET

CAPÍTULO PRIMERO

*Expansión de la red urbana (1951-1993)**

VINCENT GOUËSET

ÉVELYNE MESCLIER

Para comprender la dinámica urbana de un país y analizarla bajo diferentes escalas, resulta útil entender primero el lugar que ocupa cada ciudad en la red urbana nacional. Desde fines de la década de los años 1970, siguiendo los pasos de los primeros estudios anglosajones, la escuela francesa del análisis espacial contribuyó de forma sobresaliente a la renovación del conocimiento sobre el proceso de urbanización. Gracias a estos últimos trabajos, se conoce el carácter sistémico de ese proceso: cada ciudad evoluciona como un elemento interdependiente de los otros, en el marco de una dinámica que funciona a escala nacional (PUMAIN, 1997: 61).

Los métodos del análisis espacial conceden al tamaño de las ciudades un lugar especial (PUMAIN, 1982; GUÉRIN-PACE, 1993; MORICONI-ÉBRARD, 1994). Las cifras sobre población sintetizan la posición de las ciudades en el seno de un sistema y presentan la ventaja de no obligar a proponer hipótesis sobre los motores —económicos en particular— del proceso de urbanización, a diferencia de otros indicadores, como los niveles de industrialización o la importancia del sector terciario (DUREAU, 1993). Esta característica resulta especialmente importante al aplicar esos métodos fuera de Europa Occidental, donde fueron empleados inicialmente¹. En efecto, la urbanización es un fenómeno general a escala planetaria, pero los momentos y ritmos de crecimiento de las ciudades difieren, según los contextos históricos y geográficos. Para estudiar la dinámica de la red urbana colombiana, nos remitiremos entonces a esos indicadores simples, por lo demás disponibles y relativamente fiables, que son: el tamaño de las ciudades, sus tasas de crecimiento y los flujos de población.

En el largo plazo, la historia del poblamiento y de la ocupación del territorio en Colombia nos sumerge en una realidad diferente a la de los procesos identificados en Europa Occidental. En el corto plazo, el movimiento general de urbanización de la población es más tardío pero en conjunto más rápido. No obstante, la simplicidad y la neutralidad de los indicadores elegidos nos permi-

* Los modelos gráficos que figuran en la conclusión de este capítulo fueron elaborados por JEAN-PAUL DELER; O. BARBARY y F. DUREAU colaboraron en la sección III, dedicada a las migraciones.

1 Por ejemplo, los métodos del análisis espacial se aplicaron en el estudio de las redes urbanas de Costa de Marfil (DUREAU, 1987) y de Argelia (REDJIMI, 2000).

tirán comprender las singularidades del funcionamiento de la red colombiana y sus posibles convergencias con los modelos formulados hasta el presente.

Una primera peculiaridad de Colombia es la muy desigual distribución de las ciudades en el espacio. En los sistemas urbanos estudiados en Europa Occidental, la regularidad de la distribución de ciudades de distintos tamaños en el espacio es tal, que con frecuencia uno se ve tentado a introducir modelos basados en ecuaciones muy simples. Ahora bien, las ciudades colombianas en su mayoría están situadas sobre las cordilleras, mientras que extensas zonas del territorio nacional no poseen ninguna.

Según D. PUMAIN (1982: 8), la distribución del tamaño de las ciudades parece obedecer a reglas inmutables:

En todos los países y en diferentes épocas, se observa casi la misma forma de distribución del tamaño de las ciudades: bastante disimétrica, consta de pocas ciudades grandes y de muchas pequeñas, y el número de ciudades decrece en función del tamaño y bajo una progresión geométrica regular.

Desde esa perspectiva, Colombia parece diferenciarse al menos por tres hechos. En primer lugar, la expansión de su red urbana se apoya sobre la aparición de un gran número de pequeñas ciudades y sobre la concentración de la mayoría de la población urbana en grandes ciudades, en detrimento de las medianas, muy poco numerosas. En segundo lugar, la cúspide de la jerarquía urbana se caracteriza por una cierta inestabilidad, contrariamente a las clasificaciones observadas en las redes estudiadas en Europa Occidental. Por último, la originalidad más impactante del sistema urbano colombiano es el tamaño de Bogotá, la capital de la Nación, que no se destaca radicalmente de las otras grandes ciudades del país, en particular de Medellín, Cali y Barraquilla. Se ha propuesto el término “cuadricéfala” para designar esta “excepción” colombiana, que por otra parte debe ser relativizada (GOUËSET, 1992).

Al interior del “ecúmene urbano” colombiano, reducido sólo a una parte del territorio nacional, la distribución espacial de las ciudades se adecua, no obstante y a grandes rasgos, a las reglas postuladas por los modelos. Gracias al estudio de las trayectorias de las ciudades y de las lógicas de su crecimiento, sobre el período más dinámico y mejor documentado (1951-1993), aparece también claramente el carácter sistémico de la dinámica urbana. En efecto, las

trayectorias de las ciudades están correlacionadas con sus características iniciales. Los flujos migratorios muestran con claridad cómo las áreas de influencia de las ciudades se reparten el territorio, pero también cómo la ciudad más grande, Bogotá, efectivamente ocupa un lugar privilegiado en el sistema.

¿El destino de las ciudades no está determinado más que por el funcionamiento del sistema urbano, o bien algunas de sus dinámicas económicas, sociales y políticas pueden ser generadas de manera independiente al sistema y tener una influencia sobre su posición en el mismo? Plantear esta pregunta, después de haber analizado precisamente el funcionamiento de un sistema urbano particular, seguramente permite aportar argumentos para el debate.

Desarrollaremos este último punto en la sección IV del capítulo, después de analizar las lógicas de distribución de las ciudades en el espacio (secc. I), sus dinámicas y sus trayectorias de crecimiento (secc. II), y luego el papel de los flujos migratorios en su desarrollo (secc. III).

I. LA CONCENTRACIÓN ESPACIAL DE LAS CIUDADES COLOMBIANAS

Con 164 aglomeraciones² de más de 15.000 habitantes en 1993 y una población total de 37,5 millones de habitantes, Colombia no estaba menos dotada de ciudades que Francia, que contaba con 232 unidades urbanas de más de 20.000 habitantes, para una población total de 56,6 millones de personas en 1990. En los dos casos, la relación es de algo más de cuatro ciudades por millón de habitantes, lo que sin duda no prejuzga la morfología de esas ciudades ni las condiciones de vida que las caracterizan. Según este criterio, Colombia se encuentra cerca del promedio de otros países andinos, si se consideran

2 Por “ciudades” se entienden aquí las 164 unidades urbanas de Colombia que tienen más de 15.000 habitantes. La mayoría de estas ciudades están constituidas por una sola cabecera municipal. Sin embargo, ocho de ellas son aglomeraciones compuestas por varias cabeceras. Actualmente, Colombia cuenta con un total de 179 cabeceras municipales de más de 15.000 habitantes. Las cabeceras conurbadas a veces serán consideradas por separado, por ejemplo, para distinguir la tasa de crecimiento de las ciudades-centro respecto de la tasa de las afueras (mapa 1.5). La justificación de estas elecciones se presenta en el anexo 3, bajo las rúbricas “aglomeración”, “urbano” y “ciudad”.

las estadísticas elaboradas por MORICONI-ÉBRARD (1994: 159 a 182), pero su población se encuentra menos concentrada en la capital, característica que el país comparte con Ecuador.

En 1951, las ciudades colombianas contaban con 3,5 millones de personas, contra 22,5 millones en 1993, y abarcaban respectivamente el 73% y el 89% de la población del conjunto de las cabeceras municipales (tabla 1.1). En poco más de cuarenta años, la población de este conjunto se ha multiplicado entonces por más de seis. Las ciudades han absorbido las cuatro quintas partes del crecimiento de la población colombiana en el período considerado. Las tasas de urbanización de Colombia pasaron de 28% a 61% entre 1951 y 1993 si nos referimos sólo a la población de las unidades urbanas de más de 15.000 habitantes, y de 39% a 67% si nos referimos a la población del conjunto de las cabeceras municipales (anexo 3). Esta progresión ha situado a Colombia más cerca de la tasa promedio de urbanización de América del Sur, cuando esa misma tasa estaba claramente por debajo a comienzos del período³.

TABLA 1.1
EL CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES Y SU LUGAR DENTRO DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA
(1951-1993)

Cifras en miles de habitantes	1951	1964	1973	1985	1993
Población total	12.149	17.996	23.436	31.004	36.724
Población de las cabeceras	4.701	9.359	13.888	20.308	25.204
Población de las 179 cabeceras > 15.000 habitantes	3.451	7.569	11.553	16.949	22.516
Población de las zonas rurales	7.448	8.637	9.548	10.696	11.520

3 Según la base *Géopolis* (MORICONI-ÉBRARD, 1994: 173), que sólo considera a las ciudades de más de 10.000 habitantes, Colombia pasó de una tasa de urbanización del 27% en 1950 a una de 63% en 1990, contra un promedio regional de 36% a 67% respectivamente (este promedio excluye los Estados de las Guayanas en todo el período, al igual que a Bolivia, Brasil y Perú en 1990). Según las estadísticas del PNUD, poco precisas por cuanto consideran como “zonas urbanas a las definidas según los criterios nacionales aplicados durante el último censo de población” (1997: 259), Colombia pasó de una tasa de urbanización del 48% en 1960 a una de 72% en 1994, contra un promedio regional de 54% y 75% respectivamente (excluyendo a los Estados de las Guayanas).

Tasa de crecimiento anual en %	1951-64	1964-73	1973-85	1985-93	1973-93	1951-93
Población total	2,98	2,83	2,33	2,12	2,25	2,63
Población de las cabeceras	5,23	4,23	3,17	2,7	2,98	4,00
Población de las 179 cabeceras > 15.000 habitantes	6,04	4,70	3,19	3,55	3,34	4,47
Población de las zonas rurales	1,12	1,07	0,95	0,93	0,94	1,04

Fuente: FLÓREZ, 2000: 64 (cálculos a partir de los datos ajustados de los censos de población) y DANE (datos parcialmente ajustados de los censos de 1985 y 1993) para las estimaciones de las 179 cabeceras.

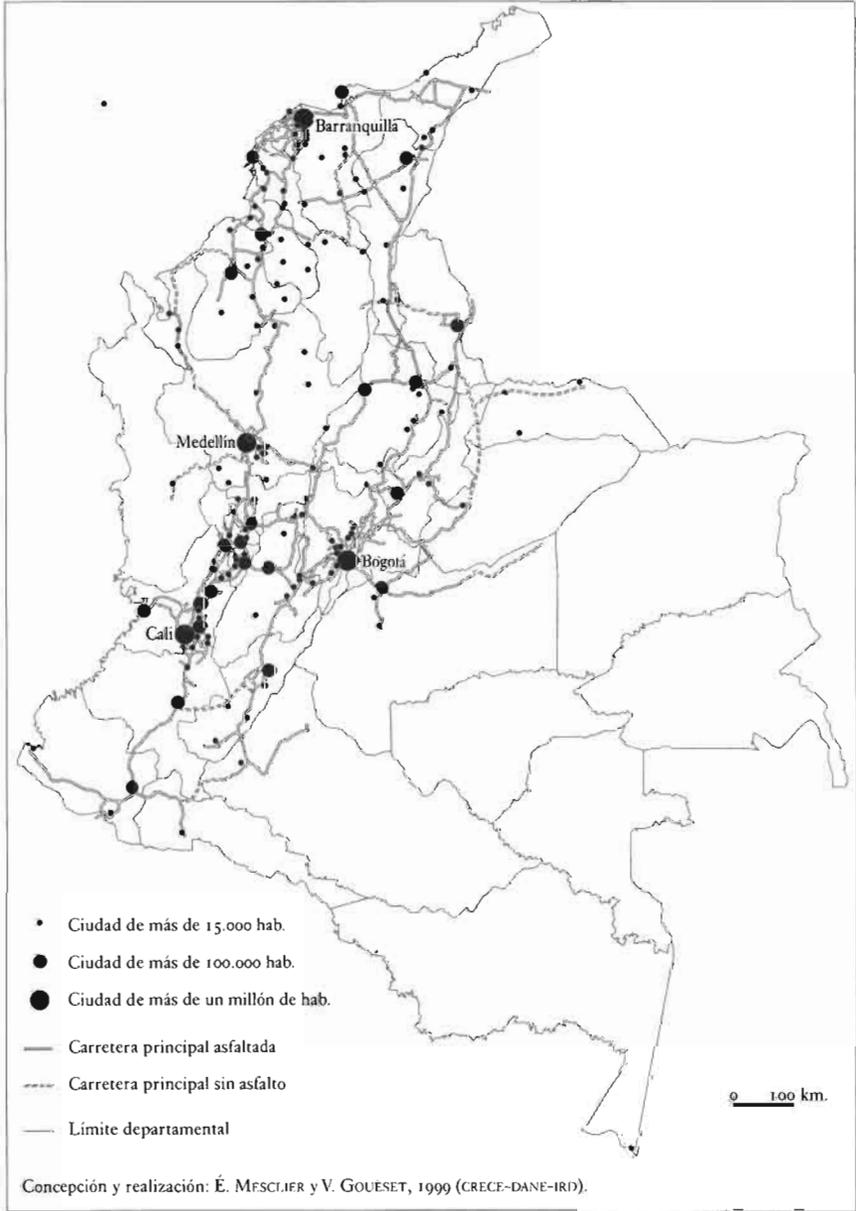
La fórmula de la tasa de crecimiento es la utilizada habitualmente por el DANE en Colombia: $100 \cdot [\ln(\text{PobT}+t) / \text{PobT}/t]$. Cálculos de los autores.

A. UNA DISTRIBUCIÓN MUY DESIGUAL DE LAS CIUDADES EN EL ESPACIO

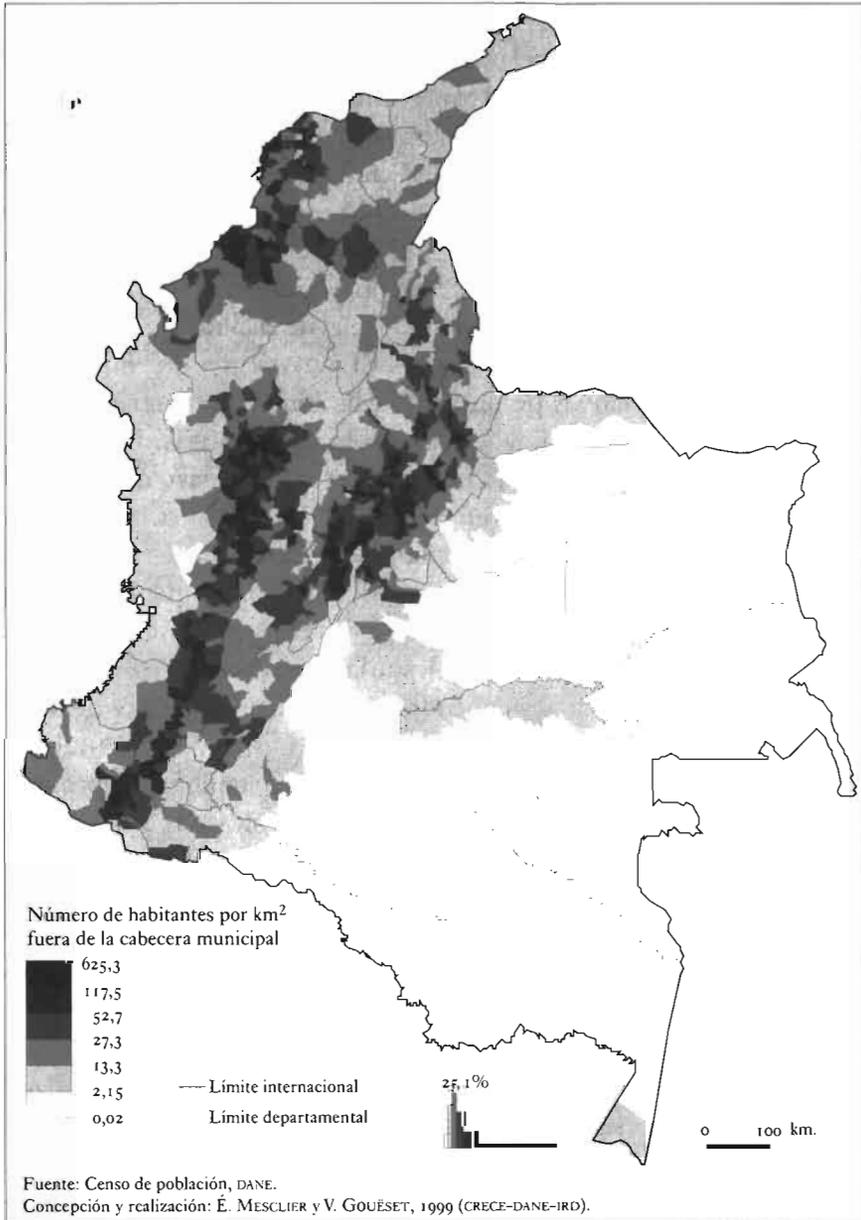
La observación de la localización de las ciudades en el espacio (mapa 1.1) muestra un sembrado muy irregularmente repartido a través del territorio colombiano. Esta distribución marcadamente anisótropa de las ciudades en el espacio representa una diferencia importante en relación con la red urbana francesa. Es mucho menos original en el contexto de los países andinos, donde uno encuentra en todas partes –más o menos– la misma desigualdad (GONDARD y LEÓN, 2001; PULIDO, 1999).

La mayoría de las ciudades están agrupadas en la mitad occidental de Colombia, especialmente en dos áreas: la zona andina (en particular en su zona central, el triángulo Bogotá-Cali-Medellín) y la costa Caribe. La Costa Pacífica y las tierras bajas de la mitad oriental del país (sabanas del Orinoco al norte, y selva amazónica al sur) aparecen como un casi “desierto urbano”, con la excepción del piedemonte andino y de escasos puertos marítimos o fluviales. En estos vastos espacios, que hasta hace poco eran frentes de colonización agraria y zonas con alta población indígena o negra (como en la costa sur del Pacífico) –y que permanecen así, los más enclavados de ellos–, el poblamiento no sólo es más modesto sino también menos urbano. Las ciudades son menos grandes, debido al hecho mismo de las características de los modos de ocupación y de valorización del espacio: agricultura extensiva, con presencia de cultivos ilícitos; zonas de pesca artesanal sobre la costa del Pacífico.

MAPA 1.1
LAS 164 UNIDADES URBANAS DE MÁS DE 15.000 HABITANTES Y LA RED VIAL EN 1993



MAPA I.2
DENSIDADES DE POBLACIÓN RURAL EN 1993



B. LOS EFECTOS DE LA SITUACIÓN Y DEL POBLAMIENTO SOBRE LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS CIUDADES

La muy desigual repartición de las ciudades colombianas dentro del territorio nacional nos incita a reconsiderar el papel de factores como el lugar y sobre todo la situación de las ciudades, antaño sobrevalorados en la geografía urbana.

Desde luego, el emplazamiento de las ciudades colombianas tiene efectos sobre sus posibilidades de expansión física. Mientras las vastas y fértiles altiplanicies donde se fundaron Bogotá y Cali ofrecen hoy grandes perspectivas de desarrollo, el estrecho emplazamiento de Medellín, al fondo de un valle, ha bloqueado rápidamente la expansión espacial de la ciudad-centro y ha provocado el desarrollo precoz de las afueras. El muy escarpado emplazamiento de Manizales, en los flancos de un volcán, ha limitado el crecimiento de la ciudad al igual que las posibilidades de establecer industrias.

No obstante, el emplazamiento urbano es menos decisivo que la situación para comprender las disparidades en el crecimiento. Como ya ha sido establecido (GOUËSET, 1996: 171), en un país tan lleno de contrastes (mapa 0.1), las presiones físicas (relieve, clima) son menos determinantes que la distribución del poblamiento inicial —especialmente rural— en el espacio antes del despegue del crecimiento urbano en el siglo xx. Desde la Conquista y la colonización, las primeras fundaciones urbanas —dependientes de recursos locales de mano de obra— tuvieron lugar principalmente sobre la costa Caribe y en los Andes, en las zonas de mayor densidad de población indígena, pero también en proximidad de los recursos mineros o a lo largo de los ejes de comunicación. Posteriormente, las ciudades que más se desarrollaron están en su mayoría localizadas en las zonas de poblamiento más denso. Todavía en 1993 se observa que la distribución de las ciudades colombianas se concentra principalmente en las zonas con más alta población rural (mapas 1.1 y 1.2). Los contraejemplos son raros y se explican por situaciones particulares: puerto marítimo o fluvial, ciudad de contacto entre montaña y tierras bajas, enclave minero, etc. Esto explica que fuera de la región Caribe (región plana y de fácil acceso), las ciudades se concentren en las áreas más montañosas, mientras que sitios *a priori* más accesibles pero menos poblados han sido muy poco urbanizados, como las tierras bajas orientales, enclavadas en el corazón de la cuenca amazónica; el corredor

de comunicación “natural” e histórico que es el río Magdalena e incluso la Costa Pacífica. Los ciclos de expansión agroexportadora (especialmente de café y azúcar), y después los de industrialización, de desarrollo de servicios y de crecimiento urbano en el siglo xx no hicieron más que reforzar el carácter central del triángulo Bogotá-Cali-Medellín, que se afirmó progresivamente como el corazón agroexportador y luego industrial del país, y como el principal soporte de su malla urbana.

C. DISTANCIAS Y CONEXIONES POR CARRETERAS

Aunque la red urbana colombiana permanece concentrada sobre una porción reducida del territorio, las distancias entre las ciudades son grandes, especialmente si se consideran los tiempos de desplazamiento. La distancia promedio entre las ciudades de más de 10.000 habitantes era de 40 km en 1990 (contra 18 km en Francia), un valor comparable al de los países vecinos (MORICONI-ÉBRARD, 1994: 173). En realidad, este promedio es poco significativo, en primer lugar en razón de la magnitud de los contrastes entre las regiones más urbanizadas, donde se observan distancias bastante cortas (región cafetera del Gran Caldas, sabana de Bogotá, valle medio del Cauca) y las regiones que están menos urbanizadas, como la mitad oriental del país. En el corazón de las regiones más pobladas, las distancias entre las ciudades son más cortas: menos de 400 km entre las tres ciudades de Bogotá, Medellín y Cali; con frecuencia, mucho menos de 40 km entre las ciudades pequeñas y medianas al interior de este triángulo. Sin embargo, los tiempos de tránsito son extensos, incluso dentro de esta Colombia densamente urbanizada, en razón del relieve y de la mediocridad del transporte terrestre. Por ejemplo, se necesita alrededor de un día entero para viajar entre cada una de las tres principales metrópolis. Además, esos tiempos extensos se alargan debido a numerosas eventualidades: estado de las vías y calzadas, accidentes que bloquean las carreteras, crudeza del clima y deslizamientos de tierra que obstruyen las vías. El recrudecimiento de la inseguridad desde mediados de la década de los años 1990 (retenes y detenciones, extorsiones por dinero y secuestros por parte de movimientos armados o de la delincuencia común) ha incrementado las demoras y los costos, al igual que la falta de confianza en los transportes terrestres. El avión sólo

constituye una alternativa limitada, costosa y socialmente inequitativa, que además contribuye a reforzar, lo mismo que las carreteras, el centralismo de las grandes ciudades, que disponen de mejores conexiones aéreas.

En esas condiciones, no es casual que la red urbana sea densa allí donde la red de carreteras también lo es (mapa 1.1), allí donde la accesibilidad y conectividad por carretera son las más elevadas. El crecimiento de las ciudades en el corazón de la Colombia andina y caribe suscita una densificación de la red de carreteras al interior de los espacios más urbanizados, y este crecimiento es alimentado a su vez por las facilidades de comunicación, muy desigualmente repartidas a través del territorio colombiano.

En resumen, y en referencia a los estudios que se han realizado sobre la densidad de la distribución urbana en Europa (CATTAN et ál., 1994: 28 a 34), conservamos la idea de una Colombia caracterizada por contrastes cuya amplitud no tiene equivalente dentro de los países europeos, aunque sí a nivel de Europa en su conjunto. Por un lado, tenemos espacios con fuertes densidades urbanas, donde se observa el bosquejo de una malla regular, conforme a la teoría de los lugares centrales de CHRISTALLER; por otro lado, está el inmenso “vacío urbano” que representa la mitad oriental del país en el mapa. El muy desigual desarrollo de las infraestructuras de transporte contribuye a reforzar ese contraste y constituye un factor determinante del dinamismo de las ciudades colombianas.

Al contrario, y para matizar esta constatación, al observar la dinámica de las ciudades a mediano plazo, se divisa que el impacto de su situación sobre el crecimiento es ampliamente compensado por otros efectos, comenzando por su rango en la jerarquía urbana.

II. CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES Y DINÁMICA DEL SISTEMA URBANO DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

El crecimiento demográfico de Colombia, particularmente rápido incluso en relación con el resto de América Latina, ha generado la multiplicación de su población por cuatro en medio siglo: 8,9 millones de habitantes en 1938; 36,7 en 1993 (FLÓREZ, 2000: 64; DUREAU y FLÓREZ, 1996: 141). Incluso cuando la

población rural casi se ha duplicado durante este período, pues pasó de 6,1 a 11,5 millones de habitantes, la mayor parte de este crecimiento ha beneficiado a las ciudades, que han conocido un formidable desarrollo. La proporción entre habitantes rurales y habitantes de ciudad se invirtió en medio siglo: el 69% de la población era rural en 1938, el 69% de la población es urbana en 1993. El cambio de una mayoría rural a una mayoría urbana tuvo lugar poco antes del censo de 1964 (tabla 1.1).

Este crecimiento urbano tan rápido fue alimentado a la vez por un masivo flujo migratorio, y por un crecimiento natural muy elevado debido a las características de la transición demográfica en Colombia, en particular gracias a la juventud y la alta natalidad de las poblaciones urbanas. La distribución del poblamiento sobre el territorio nacional, así como la configuración general de la red urbana se vieron modificadas de manera irreversible (mapa 1.3). El sistema urbano, antes conformado por un gran número de pequeñas ciudades de menos de 15.000 habitantes, hoy está dominado por grandes, y a veces muy grandes ciudades (tabla 1.2). El número de cabeceras de más de 15.000 habitantes se multiplicó por cinco entre 1951 y 1993, al pasar de 35 a 179, lo que representa una progresión sin equivalente en Europa, e incluso en América Latina⁴.

A. EXPANSIÓN DE LA RED URBANA Y REFORZAMIENTO DE LAS JERARQUÍAS

En un contexto de urbanización tan rápida, todas las ciudades han crecido pero en formas diferenciadas, aunque siguiendo un principio general que ya fue observado en Francia por D. PUMAIN (1982): la rapidez del crecimiento está ligada menos al tamaño de las ciudades que a un fenómeno de “autocorrelación” en la tasa de crecimiento inicial, que tiende a conservarse en el tiempo (D. PUMAIN, 1982, citado por F. GUÉRIN-PACE, 1993: 116).

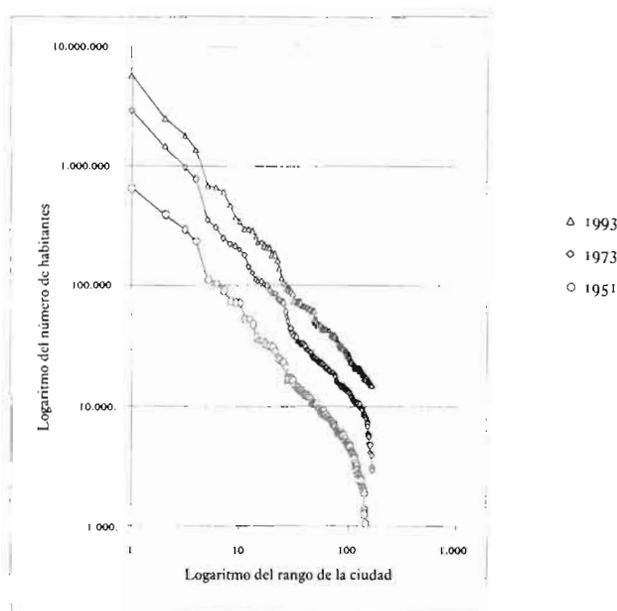
4 Según la base *Geopolis* (MORICONI-ÉBRARD, 1994), el número de ciudades de más de 10.000 habitantes se multiplicó por 1,7 en Francia entre 1950 y 1990 (el promedio de Europa Oriental: 1,3), contra 3,6 en Colombia (el promedio de la América del Sur hispanohablante: 2,7).

TABLA 1.2
REPARTICIÓN POR TAMAÑO DE LAS CIUDADES DE MÁS DE 15.000 HABITANTES EN 1993,
DURANTE EL PERÍODO 1951-1993

	1951			1964			1973			1985			1993		
	n.º	Población	%	n.º	Población	%	n.º	Población	%	n.º	Población	%	n.º	Población	%
Categoría 4: Ciudades < 15.000 habitantes	144	735.228	21,5	115	911.793	12	82	817.035	7	41	514.711	3	-	-	-
Categoría 3: 15.000 < Ciudades < 50.000 habitantes	23	594.391	17	39	992.931	13	65	1.616.809	14	96	2.556.540	15	121	3.355.167	15
Categoría 2: 50.000 < Ciudades < 100.000 habitantes	6	401.268	11,5	13	896.880	12	14	1.057.473	9	13	887.122	5,5	25	1.739.444	7,5
Categoría 1: Ciudades > 100.000 habitantes	6	1.720.308	50	12	4.767.236	63	18	8.061.608	69,5	29	12.990.999	76,5	33	17.420.965	77,5
Total	179	3.451.195	100	179	7.568.840	100	179	11.552.925	100	179	16.949.372	100	179	22.515.576	100

Fuente: Fundación Social, 1998, según los censos de población del DANE. Cálculos de GOUËSET y MESCLIER, 2002.

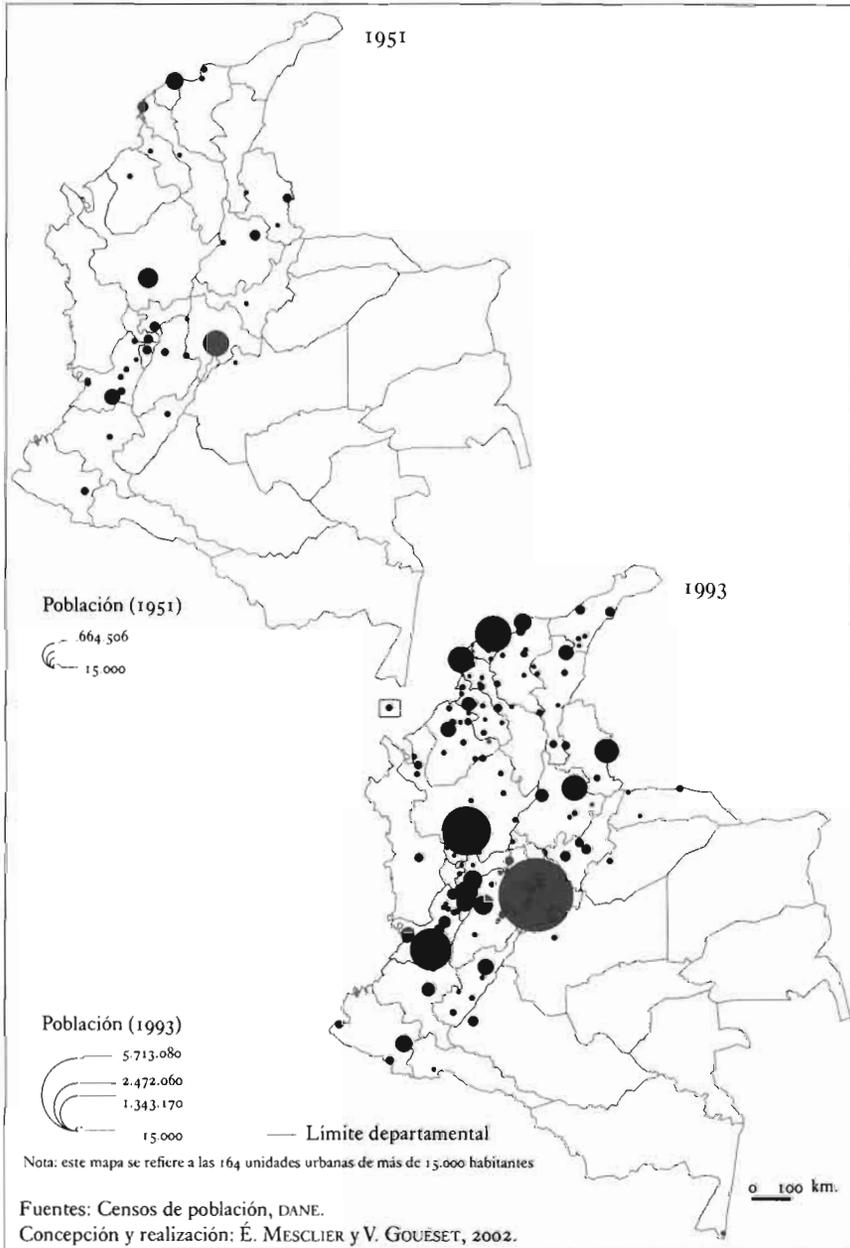
GRÁFICO 1.1
DISTRIBUCIÓN RANGO-TAMAÑO DE LA POBLACIÓN
DE LAS CIUDADES COLOMBIANAS EN 1951, 1973 Y 1993 (CURVAS DE ZIPF)



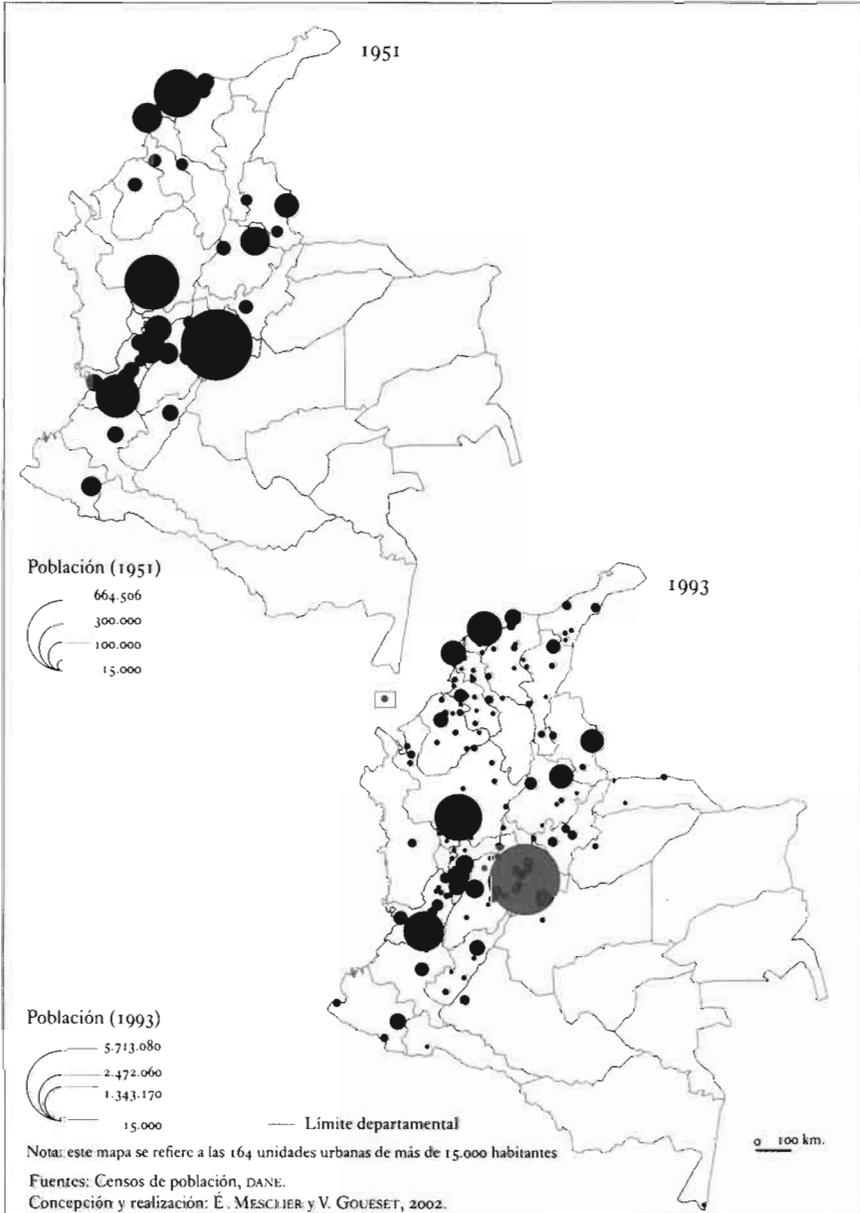
Esta estabilidad relativa, que se percibe claramente en el Gráfico 1.1 (curvas de Zipf), confirma el carácter sistémico de la evolución de la red urbana colombiana, que conserva a largo plazo su distribución jerárquica inicial. En las curvas de Zipf se observa especialmente el mantenimiento de una fuerte característica de la red urbana colombiana entre 1951 y 1993, que es la segmentación de las ciudades por categorías de tamaño. El umbral relativamente modesto entre la primera ciudad (Bogotá) y la segunda (Medellín), que es una especificidad colombiana, contrasta con dos grandes rupturas claramente identificables: por una parte entre la cuarta ciudad (Barranquilla) y la quinta (Cartagena), y por otra parte entre la numerosa cohorte de las grandes ciudades que siguen, y las ciudades medianas. Esta ruptura es observable en alrededor de 100.000 habitantes en 1993, contra 50.000 en 1973 y 20.000 en 1951.

Si la configuración general de la red se mantiene a grandes rasgos en el largo plazo, aparecen cambios entre 1951, 1973 y 1993 en lo que respecta a los

MAPA I.3
EVOLUCIÓN DE LA RED URBANA ENTRE 1951 Y 1993
A ESCALA DE REPRESENTACIÓN CONSTANTE



MAPA I.4
EVOLUCIÓN DE LA RED URBANA ENTRE 1951 Y 1993 A TAMAÑO MÁXIMO CONSTANTE



tamaños relativos de las ciudades. El mapa 1.4, inspirado en PUMAIN (1997) y en PUMAIN et ál. (1999: 110 a 115) permite especialmente, gracias al recurso de una escala máxima constante (tamaño idéntico de la ciudad más grande en las dos fechas), comparar más fácilmente la configuración de la red urbana en 1951 y 1993, al eliminar visualmente el efecto de los crecimientos de valor absoluto para mostrar sólo la modificación de las posiciones relativas.

Los principales rasgos del crecimiento de las ciudades en Colombia durante la segunda mitad del siglo xx que aparecen aquí son:

– Un efecto de difusión. La aparición de numerosas ciudades, concentradas en las regiones andina y caribe, precisamente donde las densidades rurales son las más fuertes (mapa 1.2)⁵;

– Un efecto de selección. Cierta número de ciudades se destacan en forma clara de las otras, dentro de una red urbana más fuertemente jerarquizada en 1993 que en 1951;

– Un efecto de concentración. Las ciudades más grandes y especialmente Bogotá, reúnen hoy una proporción mayor de la población urbana que en 1951.

Como lo muestra la curva de rango-tamaño (gráfico 1.1), y como lo confirman las cifras del crecimiento por categoría de tamaño (tablas 1.2 y 1.3) al igual que los Mapas 1.3 y 1.4, la red urbana colombiana se ha estructurado, a lo largo de medio siglo de crecimiento, alrededor de dos categorías de ciudades dominantes hoy: por una parte, las *grandes ciudades* (más de 100.000 habitantes), cuyas cifras de población no han cesado de aumentar entre 1951 y 1993 (para 1993 suman 33, y representan las tres cuartas partes de la población urbana), y por otra parte las *ciudades de tamaño modesto* (de 15.000 a 50.000 habitantes), cuyo número ha crecido fuertemente (121 en 1993, contra 23 en 1951) y cuyo peso demográfico global permaneció bastante estable entre 1951 y 1993 (alrededor del 15% de la población urbana).

5 El crecimiento de estas pequeñas ciudades está alimentado en gran medida por una migración de proximidad en los campos, que conserva un nivel de fecundidad alto y donde la modernización de la agricultura alimenta oleadas continuas de emigración. Se trata de un proceso común, que aparece con frecuencia en América Latina, África y Europa, pero que comporta numerosas variantes ligadas en particular a las características de los cambios en la agricultura.

TABLA 1.3
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DE LAS CIUDADES POR CATEGORÍA DE TAMAÑO
ENTRE 1951 Y 1993

(porcentajes)	1951-1964 (sobre 155 ciudades)*	1964-1973 (sobre 174 ciudades)*	1973-1985 (sobre 179 ciudades)*	1985-1993 (sobre 179 ciudades)*
Categoría 4 Ciudades < 15.000 hab. en la fecha inicial	Promedio: 5,1 Mín: 0,9 Máx: 14,1	Promedio: 5,3 Mín: -3,0 Máx: 25,4	Promedio: 4,3 Mín: -1,4 Máx: 13,9	Promedio: 5,3 Mín: 1,3 Máx: 21,6
Categoría 3 15.000 < Ciud. < 50.000 hab. en la fecha inicial	Promedio: 5,2 Mín: 1,7 Máx: 8,5	Promedio: 3,6 Mín: -0,8 Máx: 9,1	Promedio: 2,8 Mín: -0,3 Máx: 12,2	Promedio: 4,1 Mín: -1,7 Máx: 12,4
Categoría 2 50.000 < Ciud. < 100.000 hab. en la fecha inicial	Promedio: 5,7 Mín: 5,1 Máx: 6,4	Promedio: 3,4 Mín: -1,0 Máx: 5,1	Promedio: 3,4 Mín: 1,1 Máx: 7,6	Promedio: 3,4 Mín: 2,3 Máx: 5,3
Categoría 1 Ciudades > 100.000 hab. en la fecha inicial	Promedio: 6,0 Mín: 4,5 Máx: 7,2	Promedio: 4,0 Mín: 1,0 Máx: 6,0	Promedio: 3,2 Mín: 0,5 Máx: 5,9	Promedio: 3,8 Mín: 1,4 Máx: 10,7

Fuente: DANE, Censos de población. Cálculos de GOUËSET y MESCLIER, 2002.

* Faltan datos para 24 ciudades en 1951 y para 5 ciudades en 1964.

La categoría de las grandes ciudades (más de 100.000 habitantes) fue la que más se benefició con el crecimiento. En número de seis a principios del período (lo que de todas maneras representaba la mitad de la población urbana (tabla 1.2), las grandes ciudades eran tres veces más numerosas en 1973. Su número se duplicó todavía entre 1973 y 1993, año en el que se contaban 33 ciudades de categoría 1 que albergaban a 17,4 millones de habitantes, es decir más de tres cuartas partes de la población urbana de Colombia. La supremacía de la actual jerarquía urbana se ganó antes de 1973, período durante el cual un masivo flujo migratorio (lo veremos más adelante), al igual que una natalidad elevada ligada al rejuvenecimiento de la población, elevaron las tasas de crecimiento a niveles históricos: 6% en promedio para las seis ciudades más grandes entre 1951 y 1964 (tabla 1.3). Después de 1973, las tasas de crecimiento de las grandes ciudades disminuyen de manera sensible, excepto en los casos de las cabeceras situadas en las afueras o en la proximidad de las grandes aglomeraciones (como Soacha, que creció el 11% cada año entre 1985 y 1993). Pero este descenso no es signo de una desconcentración relativa: al contrario, el peso

de las grandes ciudades en el total de la población urbana sigue progresando entre 1985 y 1993, período durante el cual ellas recibieron a las cuatro quintas partes de la variación total de la población urbana en Colombia (tabla 1.2). Esta consolidación de la supremacía de las ciudades que están en la cima de la jerarquía, ya perceptible antes del Censo de 1993 (GOUËSET, 1992 y 1996), está ligada al establecimiento de un “círculo virtuoso” del crecimiento, tan común en América Latina como en Europa: las ciudades más grandes conservan un nivel de crecimiento elevado, a pesar de su avance en el proceso de transición demográfica y de una cierta desaceleración de los flujos migratorios. Esta lógica del crecimiento acumulativo de las metrópolis, que contribuye a reforzar la jerarquía urbana en las fases de mayor dinamismo, es bien conocida en otros lugares, especialmente en Francia (PUMAIN, 1982; GUÉRIN-PACE, 1993; BAILLY y HURIOT, 1999), donde a veces se la designa bajo el término de “autocatálisis urbana” (LÉVY, 2000: 54). Se trata de un modelo relativamente universal al cual, lógicamente, se aproxima bastante Colombia.

La categoría de las pequeñas ciudades ha desempeñado un papel muy importante en el crecimiento de la red urbana colombiana. Como se puede constatar en la tabla 1.2, aunque las grandes ciudades eran muy poco numerosas en la Colombia de 1951 (12 ciudades superaban los 50.000 habitantes), fueron las ciudades más pequeñas (de menos de 15.000 habitantes) las que constituyeron la trama a partir de la cual se densificó la red urbana durante los últimos cincuenta años. La tasa de crecimiento de esta categoría es la más elevada de Colombia, con alrededor de un 5% anual en el conjunto del período (tabla 1.3). Sin embargo, se trata de un promedio que abarca evoluciones diversas en extremo: en el conjunto del período, siempre es en esta categoría donde se encuentran las tasas de crecimiento más elevadas (¡hasta un 25% anual!), pero también las tasas de crecimiento más débiles, en ocasiones negativas. En realidad, la mayoría presenta tasas de crecimiento bastante moderadas. Más adelante (mapa 1.6) volveremos sobre el caso de las pequeñas ciudades cuya población se incrementa rápidamente, las cuales son —con algunas excepciones— siempre las mismas de un período a otro. De manera general, las ciudades pequeñas —poco pobladas al principio— no han ganado, en términos de valor absoluto, cifras considerables de población. Estas ciudades pasan progresivamente a la categoría superior, pero son escasas las que, al crecer, se convierten

en grandes ciudades (tabla 1.4): entre 144 cabeceras municipales al principio en la categoría 4, pasaron 117 a la categoría 3 y sólo 27 pudieron alcanzar las categorías 1 y 2. El círculo muy restringido de ciudades que pasaron de menos de 15.000 habitantes a más de 100.000 entre 1951 y 1993, está conformado únicamente por cabeceras hoy conurbadas a una ciudad grande, con excepción de una capital de departamento particularmente dinámica (Valledupar).

Las ciudades pertenecientes a la categoría 3 (15.000 a 50.000 habitantes) a principios del período, han experimentado un crecimiento más importante a lo largo del medio siglo. De 23 ciudades al principio, sólo 4 permanecieron en esta categoría, que para la mayoría no fue más que de “tránsito” en la época: 15 de estas ciudades están hoy en la categoría 1 (tabla 1.4), y en la actualidad cumplen un papel importante en el tejido urbano colombiano: se trata de capitales departamentales (8), de polos industriales y/o portuarios (5), o de cabeceras conurbadas a ciudades grandes (2). En cambio en el presente, esta categoría 3, ampliamente renovada gracias al ascenso de 117 pequeñas ciudades que antes contaban con menos de 15.000 habitantes, agrupa dos tercios de las 179 cabeceras de nuestra selección (y tres cuartos de las 164 ciudades y aglomeraciones), al igual que el 15% de la población urbana. Son estas pequeñas ciudades las que más han contribuido a la densificación de la distribución urbana tan perceptible en los Mapas 1.3 y 1.4 en 1993.

TABLA 1.4
EVOLUCIÓN DESDE 1951 HASTA EL CENSO DE 1993
DE LAS CIUDADES CONSIDERADAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EN 1951

	1951	1964	1973	1985	1993
Ciudades de menos de 15.000 hab. en 1951 (categ. 4)					
Se conservan en categoría 4	144	115	82	41	
Pasan a 3		28	33	40	41
Se conservan en categoría 3			25	52	76
Pasan a 2		1	3	5	16
Se conservan en categoría 2				4	2
Pasan a 1					4

TABLA 1.4 (cont.)					
	1951	1964	1973	1985	1993
Ciudades de 15.000 a 50.000 hab. en 1951 (categ. 3)					
Se conservan en categoría 3	23	11	7	4	4
Pasan a 2		12	4	3	
Se conservan en categoría 2			6	3	4
Pasan a 1			6	7	2
Se conservan en categoría 1				6	13

Fuente: DANE, Censos de población. Cálculos de GOUËSET y MESCLIER, 2002.
Según PUMAIN, 1982.

En cambio, las ciudades medianas (de 50.000 a 100.000 habitantes) son poco numerosas. En el conjunto, el desarrollo ha beneficiado poco a esta categoría de ciudades, cuya tasa de crecimiento es una de las más débiles desde 1964, y que ha perdido su peso relativo en el largo plazo (tabla 1.3). Las grandes ciudades actuales se mantuvieron poco tiempo en esta categoría, mientras la mayoría de las pequeñas ciudades ha permanecido en las dos categorías inferiores. Esta categoría es hoy un eslabón débil en la red urbana colombiana, con sólo 25 ciudades (y 7,5% de la población urbana) (tabla 1.2), de las cuales una gran parte son polos agroindustriales poco dinámicos y sin mayores perspectivas de desarrollo; en menor medida, son capitales de pequeños departamentos (se cuentan tres) y algunas son ciudades localizadas cerca de las grandes ciudades y que se benefician de esta cercanía.

Se asiste así a un desarrollo sistémico de la red urbana colombiana durante la segunda mitad del siglo XX: la interdependencia entre las ciudades explica que la configuración general de la red –su repartición en el espacio colombiano y su distribución por tamaños– se conserve, no obstante la tendencia de concentración.

Sin embargo, las trayectorias de crecimiento de las grandes ciudades, es decir, los ritmos sucesivos de este crecimiento en el conjunto del período estudiado (1951-1993), están lejos de ser homogéneas. Aún más, es necesario tener en cuenta no sólo categorías por rango de tamaño sino también las trayectorias individuales de las ciudades y las relaciones que sostienen estas trayectorias con las localizaciones en la red urbana.

B. LAS LÓGICAS ESPACIALES DE LAS TRAYECTORIAS DE LAS CIUDADES

Una primera aproximación al estudio de las trayectorias individuales de las ciudades, que resume las observaciones que ya habíamos podido establecer sobre los períodos 1973-1985 y 1985-1993 (MESCLIER et ál., 1999: 54 a 57) y que tiene en cuenta las tasas medias anuales de crecimiento entre 1973 y 1993 (mapa 1.5), demuestra la complejidad de los fenómenos espaciales en juego.

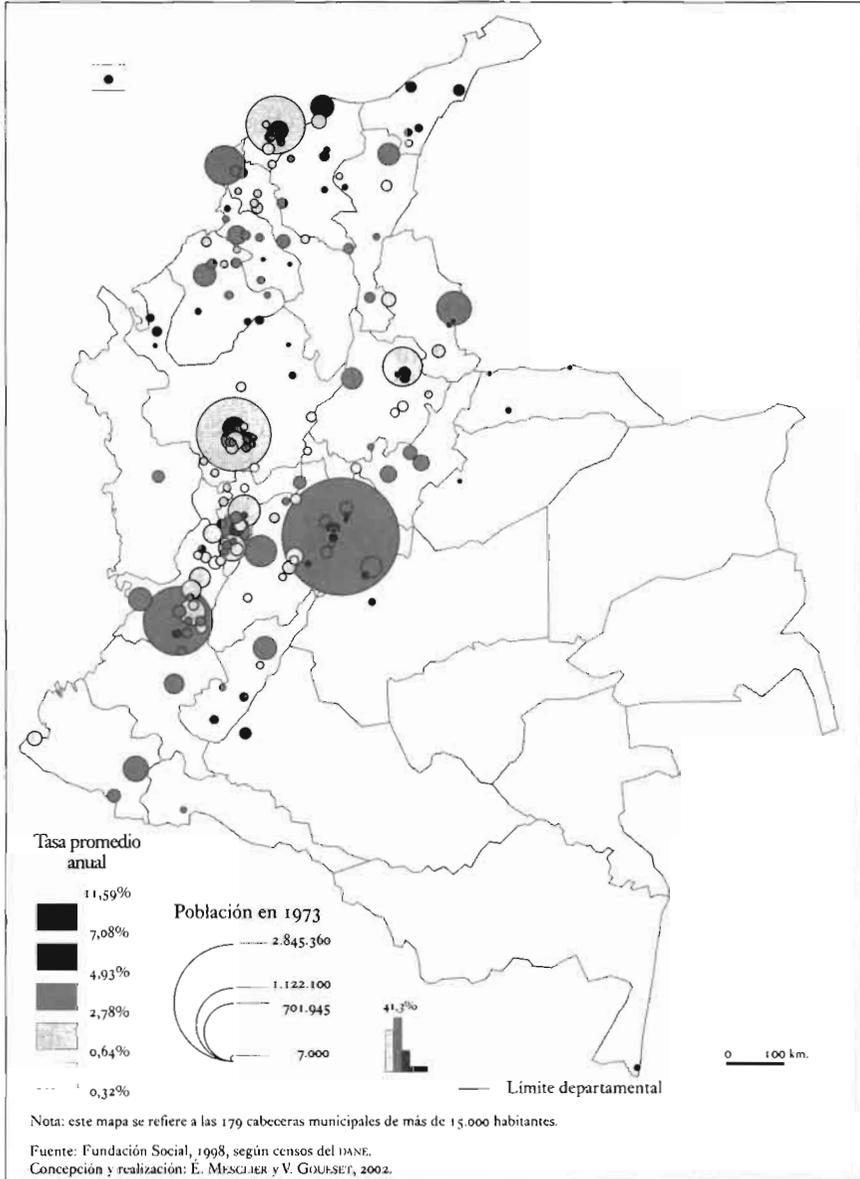
Por una parte, el mapa 1.5 confirma visualmente que tamaño y tasa de crecimiento no están directamente correlacionados. Por supuesto, el tamaño de las ciudades desempeña mecánicamente un rol en la tasa de crecimiento, puesto que el crecimiento relativo es menor cuando se trata de ciudades mayores. Sin embargo, si bien es cierto que sólo las ciudades pequeñas pueden alcanzar tasas de crecimiento muy elevadas, en cambio muchas de ellas tienen tasas de crecimiento moderadas o reducidas⁶. Inversamente, las tasas de crecimiento de las grandes ciudades parecen, gracias al mismo efecto mecánico, mucho más agrupadas en torno al promedio, a pesar de importantes diferencias en las cifras de las respectivas poblaciones.

Por otra parte, los crecimientos raramente son homogéneos en una misma región, incluso si se observan algunos fenómenos convergentes, como el dinamismo de las periferias de las grandes ciudades (que tiende a inducir un menor crecimiento de las ciudades-centro, en particular Medellín, Bucaramanga o Barranquilla), o como el de las zonas de colonización, o al contrario, como el débil dinamismo demográfico de pequeños centros urbanos a lo largo del Magdalena (una arteria antes vital y hoy marginada), de las regiones cafeteras del Tolima, del corredor localizado entre Medellín y el norte del departamento del Valle del Cauca, e incluso de la planicie azucarera y agroindustrial del mismo departamento.

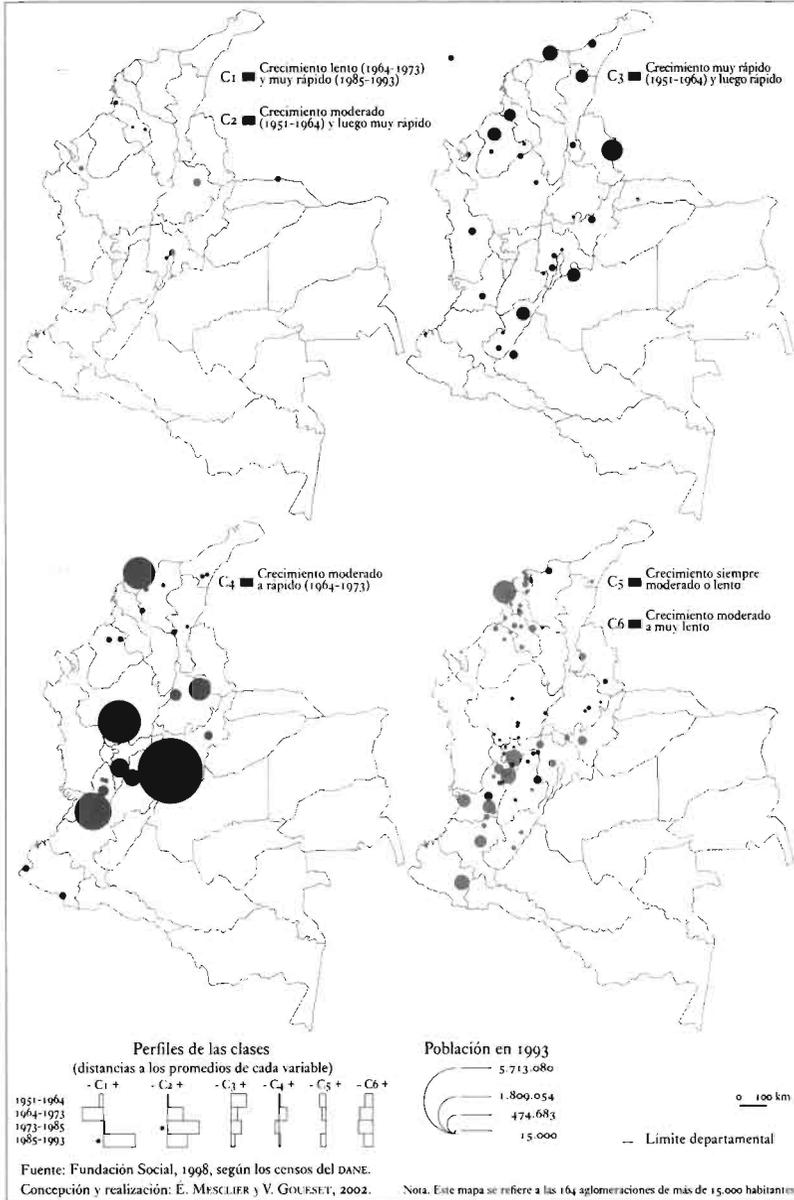
Es al detallar las trayectorias en subperíodos, y al juzgar el recorrido de cada ciudad comparado con el comportamiento del conjunto de las unidades

6 Ninguna ciudad colombiana presentó un crecimiento negativo entre 1973 y 1993; sólo 6 ciudades entre 179 (todas con menos de 40.000 habitantes) experimentaron un crecimiento inferior al 1%. Aquí usamos el término "reducido" de manera relativa y no absoluta.

MAPA 1.5
 TASA DE CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES ENTRE 1973 Y 1993
 A ESCALA DE REPRESENTACIÓN CONSTANTE



MAPA I.6
LAS TRAYECTORIAS DEMOGRÁFICAS DE LAS CIUDADES (1951 Y 1993)



urbanas, como se obtendrán finalmente las indicaciones más interesantes y más independientes de los cambios en el ritmo de crecimiento del conjunto del sistema. El mapa de las trayectorias de crecimiento de las ciudades (mapa 1.6)⁷, basado en una tipología de los ritmos de crecimiento de las ciudades para cada período intercensal entre 1951 y 1993, permite completar y matizar el panorama de los ciclos de desarrollo urbano en Colombia durante medio siglo.

La tipología obtenida por clasificación automática muestra que la cifra de población inicial resulta menos determinante para explicar el crecimiento global de las ciudades en el período, que su tasa de crecimiento inicial. En efecto, la mayoría de las ciudades muestra una gran estabilidad en su tasa de crecimiento, sea que esta última se conserve permanentemente elevada, media o reducida. Sólo hay algunas pocas excepciones, sobre las cuales volveremos. En cambio, dentro del mismo tamaño se observan disparidades en ocasiones muy fuertes entre los valores extremos de las tasas de crecimiento, en todo el período, cualquiera sea el rango de tamaño implicado (tabla 1.3). Así, entre 1985 y 1993, para las ciudades más grandes el máximo valor (el de Soacha: 10,7%) era casi ocho veces superior al valor más bajo (Palmira: 1,4%). Las disparidades iniciales en las tasas de crecimiento están ligadas a localizaciones particulares en el sistema urbano.

Las ciudades que actualmente están a la cabeza de la red urbana son las que, ya importantes al inicio del período, han conservado tasas de crecimiento superiores al promedio nacional en el lapso que sigue los récords históricos de 1951-1964, y luego iguales a ese promedio (sin embargo, Barranquilla cede su tercer puesto a Cali entre 1951 y 1964). Otras ciudades, todavía medianas en 1951, ingresan al grupo de las grandes gracias a tasas de crecimiento particularmente altas a comienzos del período, que luego se mantienen por encima de los promedios nacionales. Se trata de capitales departamentales, todas ellas distantes del triángulo Bogotá-Medellín-Cali. Cinco de estas ciudades pertenecen a la región Caribe. Cúcuta saltó del décimo al séptimo lugar –su

7 Este mapa está inspirado en los análisis de las trayectorias establecidos para Francia por PUMAIN y SAINT-JULIEN (1989: 21) y por GUÉRIN-PACE (1993: 100). Para Europa Occidental, cfr. CATAN et ál. (1994: 144); para Costa de Marfil, DUREAU (1987) y para Argelia, REDJIMI (2000).

puesto actual— entre 1964 y 1973. En cambio, algunas ciudades que eran importantes en 1951 siempre han tenido tasas de crecimiento un poco inferiores al promedio nacional en el curso del período considerado. La mayoría de ellas son capitales de la región andina, pero en esta situación también se encuentra Cartagena y ciudades que no son capitales, como Buenaventura o Palmira. Así, Armenia ha retrocedido del noveno al undécimo lugar entre 1964 y 1973. Cartagena y Bucaramanga intercambiaron varias veces sus quinto y sexto lugares —sus puestos actuales respectivamente— hasta 1985. Esta inestabilidad de la cúpula de la jerarquía urbana colombiana no data del período de más intenso crecimiento: tal inestabilidad afecta a todo el siglo XX, sobre todo hasta 1973 (GOUËSET, 1998, 9). Cuanto más se desciende en la jerarquía o más se vuelve hacia atrás, hasta el censo de 1938 e incluso hasta el de 1918, más aumenta la inestabilidad entre las diferencias de cifras que se reducen.

D. PUMAIN (1982, 8) ha mostrado que, en general, el crecimiento urbano modifica poco la jerarquía de las redes urbanas. ¿Cómo interpretar las reclasificaciones de las grandes ciudades, numerosas en Colombia, cuando son tan raras en otras partes? Sin duda, la antigua sobrerrepresentación de las grandes ciudades, que aparece en la curva de Zipf como un dato estable entre 1951 y 1973 (gráfico 1.1), explica en parte esta evolución: hay un gran número de ciudades muy semejantes en tamaño; por tanto, resulta lógico que las variaciones a veces mínimas en los ritmos de crecimiento provoquen reclasificaciones, estas últimas sustentadas en cifras de población limitadas.

Sin duda, el estatus de las ciudades al seno de la red urbana es una segunda explicación para esas reclasificaciones. Las ciudades más grandes, en particular las capitales departamentales, parecen haber representado una competencia, en el período considerado, para las otras grandes ciudades cercanas a las primeras o que se encontraban bajo su dependencia administrativa.

En este proceso de selección, ciudades antaño importantes gracias al dinamismo de su economía, pero que no son capitales, han padecido una carencia de rol administrativo. Se trata de una evolución clásica, conforme a las reglas observadas en los estudios basados en el análisis espacial. Así, el centro agro-industrial de Palmira, duodécima ciudad de Colombia en 1973, perdió siete lugares en 1993; y el puerto de Buenaventura, en la Costa Pacífica, después de ocupar el puesto 14 en 1973, perdió cuatro lugares en 1993. Estas dos

ciudades pertenecen al mismo departamento, el Valle del Cauca, cuya capital Cali duplicó sus cifras en el mismo período.

Uno estaría tentado a explicar también las modificaciones de la jerarquía urbana mediante la inestabilidad económica e incluso la decadencia relativa de algunas regiones, cuyo dinamismo se agotó a lo largo de la segunda mitad del siglo xx. Las principales víctimas fueron las ciudades del Eje Cafetero central (Manizales, Armenia) y del Eje Azucarero (todas las ciudades agroindustriales del Valle del Cauca, fuera de Cali). El relativo “estancamiento” del corazón azucarero y cafetero de Colombia, en el centro de lo que a veces se llama –abusivamente, como se puede constatar aquí– el “Triángulo de Oro” de Colombia (Bogotá, Medellín y Cali), es particularmente espectacular. Sin embargo, esta pérdida de dinamismo sin duda está más ligada a la competencia de las tres metrópolis colombianas –que han concentrado la mayor parte de los flujos migratorios en detrimento de otras ciudades de la región (secc. III)– que a las posibles dificultades de la región misma, las cuales todavía no eran importantes en 1993. La grave crisis del sector agrícola –en particular del café–, que golpeó a Colombia después de esta fecha, limita todavía más las perspectivas de crecimiento de esas ciudades, que ya padecieron la competencia de las metrópolis.

Las capitales de la región Caribe, pese a padecer una coyuntura económica desfavorable (con excepción de Cartagena), han presentado más bien una tendencia a progresar (Santa Marta, Montería, Valledupar y Sincelejo), lo cual muestra que la relación entre los crecimientos económico y demográfico no es unívoca (secc. IV). La localización de estas ciudades en la red, apartadas del “triángulo metropolitano” Bogotá-Cali-Medellín, puede aparecer entonces como uno de los factores de su dinamismo, que se añade a la fecundidad particularmente alta de su población.

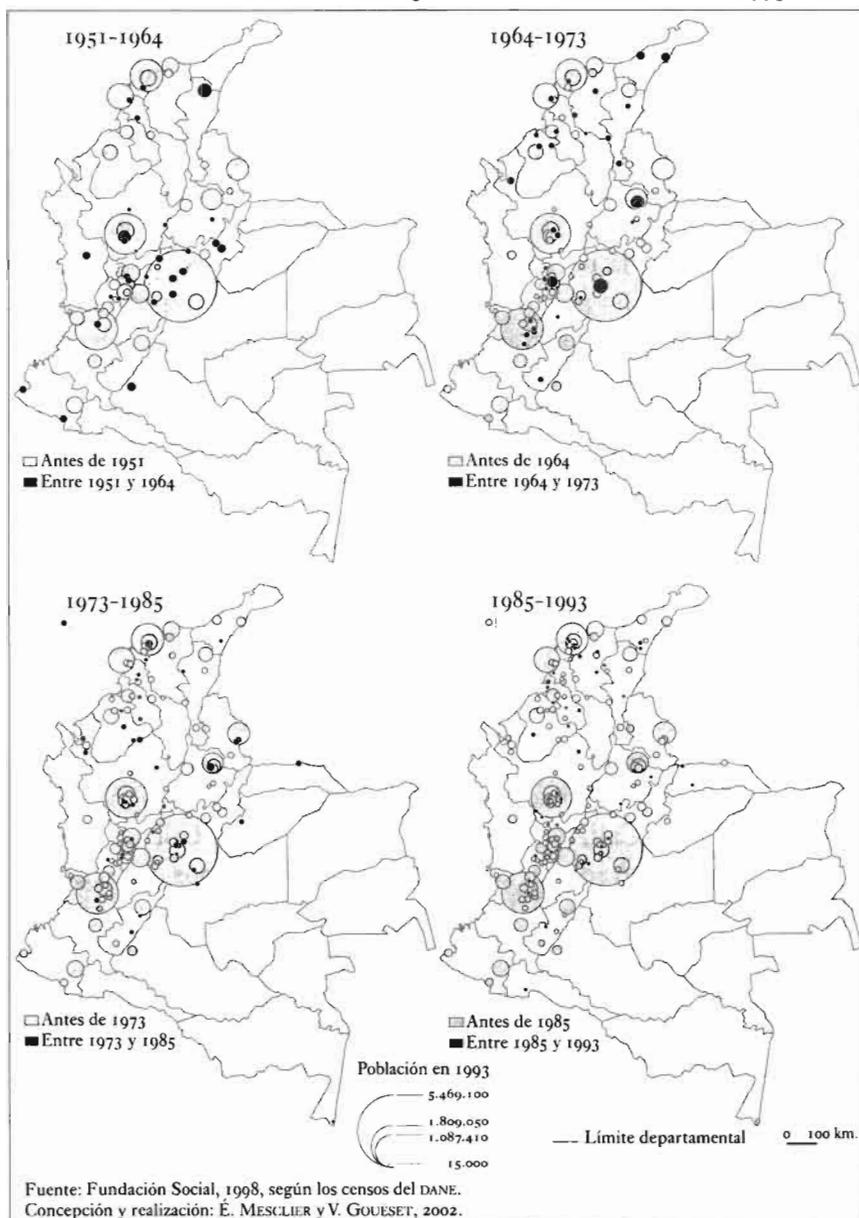
En el otro extremo de la red urbana, las ciudades pequeñas y medianas se caracterizan, como ya se dijo, por tener tasas de crecimiento bastante moderadas: muy pocas de ellas han llegado en el largo plazo a competir con las más grandes. El mapa 1.7, que ofrece una visión complementaria de la renovación de la red urbana a través de la emergencia de ciudades pequeñas, demuestra que la red actual de las grandes ciudades ya estaba establecida antes de 1951. Entre las ciudades que entran a formar parte de la red urbana

a lo largo del período, sólo Valledupar y cinco cabeceras municipales de las afueras de las grandes aglomeraciones son ahora ciudades de más de 100.000 habitantes. Cierta cantidad de ciudades pequeñas presentan sin embargo tasas de crecimiento medias o elevadas a lo largo del período, e incluso constituyen categorías aparte debido a la brusca aceleración de su tasa de crecimiento, sea al principio o al final del período. Eso se explica por la conservación de un crecimiento natural importante, por tener un rol de primer grado en las migraciones de proximidad, y sobre todo por la recepción de poblaciones de origen más lejano: en la periferia de las grandes ciudades, por una parte, y en zonas de colonización por otra parte. Debido al tamaño pequeño de estas ciudades, las migraciones generan un efecto particularmente apreciable sobre su tasa de crecimiento global.

Contrariamente a lo ocurrido en las ciudades ya importantes a comienzos del período, en el caso de los pequeños centros urbanos la vecindad de ciudades muy grandes no parece entrar en contradicción con la aparición de unas tasas de crecimiento elevadas o muy elevadas. Todo lo contrario: los municipios periféricos y las ciudades suburbanas, situados en la cercanía de las grandes ciudades colombianas, tienen un papel importante en la renovación de la red urbana. Se trata a la vez de ciudades surgidas a principios del período (entre 1951 y 1964 o entre 1964 y 1973; mapa 1.7) y de ciudades que hoy se encuentran entre las más grandes (más de 50.000, e incluso más de 100.000 habitantes), cuyas tasas de crecimiento fueron con frecuencia espectaculares (mapa 1.5). Todas las ciudades son afectadas por el fenómeno, especialmente alrededor de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cúcuta. Además, se observa un efecto de “gradiente de proximidad” en algunos casos, como Medellín o Barranquilla (e incluso Bogotá, donde la situación es más compleja), que testimonian la cronología del proceso: las afueras cercanas aparecieron a comienzos del período y hoy en día están muy pobladas, mientras que las ciudades más alejadas aparecieron recientemente (1985 ó 1993) y sus cifras absolutas de población permanecen modestas.

El mapa 1.7 muestra que el surgimiento de ciudades ha sido numeroso en las zonas de producción agrícola intensiva y en los frentes de colonización, como los valles del Cauca y del Magdalena, el piedemonte oriental de los Andes, e incluso las planicies del interior de la región Caribe. Pero los crecimientos

MAPA I.7
 APARICIÓN DE LAS CIUDADES DE 15.000 HABITANTES O MÁS HASTA 1993



sólo son rápidos en el piedemonte oriental de los Andes, en el interior del Urabá y en la península de La Guajira, es decir, en las regiones más alejadas de las grandes metrópolis. La localización en la red urbana parece entonces cumplir, incluso allá, un papel esencial en las trayectorias, al lado de las características regionales que hacen posible esta dinámica en la región Caribe. En efecto, en este último caso, las fuertes densidades rurales –alimentadas por una fecundidad que permanece más elevada que en los campos andinos y también por una modernización de la agricultura particularmente brusca– han liberado una abundante mano de obra que ha nutrido el crecimiento de un gran número de ciudades pequeñas. Sin duda alguna, resultaría abusivo ver en este crecimiento de las pequeñas ciudades de la región sólo una consecuencia de la violencia y un problema de “desplazados” (argumento frecuentemente evocado en Colombia, sin embargo), aunque el impacto de la violencia ha desempeñado un papel importante, como lo muestra la mayoría de los estudios empíricos sobre el tema⁸.

Paralelamente, se observan tasas de crecimiento bastante reducidas en numerosas ciudades pequeñas del interior de la región Caribe, lo cual explica el retraso que acumularon en el largo plazo. El mismo fenómeno se reproduce en la región andina, donde a veces llega a afectar incluso a las capitales menos dinámicas, que no han resistido la competencia de las más grandes. Este proceso se observa en particular en el corazón del triángulo metropolitano Bogotá-Medellín-Cali, de donde no emergen más que Pereira e Ibagué, las dos sedes más industrializadas de esta región.

En suma, se constata que la renovación de la red urbana mediante la aparición de pequeñas ciudades entre 1951 y 1993, lejos de significar un movimiento de “contraurbanización” –para retomar un concepto que fue objeto de una amplia controversia en Europa (CATTAN et ál., 1994: 149 y 150)–, más bien traduce el reforzamiento de la influencia de las grandes ciudades, según un proceso de “concentración diluida” (ibíd.), producto de los movimientos de periurbanización y de metropolización. El crecimiento muy moderado de

8 Por ejemplo, GRACIA, 1999: 150 a 163, y los estudios que lo acompañan (CUBIDES y DOMÍNGUEZ, 1999), e incluso PISSOAT y GOUËSET, 2002.

la mayoría de las ciudades pequeñas y medianas, fuera de las localizaciones particulares evocadas, da testimonio de ello.

C. LOS PROGRESOS DE LA PRIMACÍA URBANA DE BOGOTÁ

El caso de Bogotá, la capital de Colombia y su metrópoli más grande, ya ha sido ampliamente estudiado. La aparente reducción del peso demográfico de esta ciudad en el sistema urbano nacional, y especialmente en relación con las tres ciudades siguientes –Medellín, Cali y Barranquilla (todas tres “millonarias” desde 1985)–, constituye una originalidad en América Latina, donde generalmente existe una ruptura importante entre la primera ciudad y la segunda, o, como en los casos de Ecuador y Brasil, entre la segunda y la tercera. Esta originalidad colombiana ha sido analizada desde 1990 por CUERVO, quien ha mostrado especialmente que la primacía de Bogotá sobre la red urbana colombiana es tardía y limitada; su adelanto respecto a las ciudades siguientes incluso tuvo un breve momento de decrecimiento a principios del siglo XX, durante el despegue industrial y mientras el crecimiento demográfico comenzaba justamente a acelerarse.

TABLA 1.5
EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE LA PRIMACÍA URBANA DE BOGOTÁ
(1938-1993)

	Índice de población total (a) %	Coefficiente de intensidad cronológica (b) %	Índice de población urbana (c) %	Índice de primacía (d)	Índice de las cuatro ciudades (e)
1938	4,09	7,04	12,34	1,47	0,87
1951	6,19	16,22	14,78	1,69	0,78
1964	9,71	27,03	18,28	1,77	0,91
1973	12,52	31,23	21,00	1,97	1,02
1985	14,07	12,89	21,42	2,20	1,11
1993	14,56	6,19	21,16	2,31	1,18

Fuentes: FLÓREZ, 2000: 78 y GOUËSET, 1998: 151 (según CUERVO, 1990); salvo índice de primacía.

(a) IPT = Población de Bogotá / Población total de Colombia (en %)

(b) CIC = (IPT_i - IPT_j) / (i - j), donde i = fecha final y j = fecha inicial

(c) IPU = Población de Bogotá / Población urbana de Colombia

(d) IP = Población de Bogotá / Población de la segunda ciudad (según MORICONI-ÉBRARD, 1993)

(e) ICC = Población de Bogotá / Población de las tres ciudades siguientes

En realidad, si se observa el conjunto de los indicadores de la primacía de Bogotá desde 1938 (tabla 1.5), especialmente el índice de población total (IPT) y el índice de población urbana (IPU), se percibe que el peso de Bogotá en la población colombiana, e incluso simplemente en la población urbana, nunca ha dejado de progresar desde esa fecha. Esta progresión de Bogotá, bastante lenta al comienzo, con un coeficiente de intensidad cronológica (CIC) de 7% en 1938, en seguida se acelera hasta alcanzar sus máximos en 1964 (27%) y especialmente en 1973 (31%), antes de decrecer rápidamente y de volver a caer por debajo de su ritmo inicial (6%) en 1993. La periodicidad de esta evolución coincide con la de la intensidad de los flujos migratorios hacia la capital colombiana (secc. III). El índice de las cuatro ciudades (ICC), que mide el peso de Bogotá en relación con las tres ciudades siguientes (Medellín, Cali y Barranquilla), disminuye sólo el 9% entre 1938 y 1951, antes de progresar de manera constante hasta el presente. La inflexión del ICC a comienzos del período está ligada sobre todo al formidable crecimiento de Cali entre las dos fechas, al igual que al buen mantenimiento de las otras dos ciudades, especialmente Medellín, que era el primer foco industrial de Colombia durante el primer censo de estas actividades en 1945.

A pesar de ese reforzamiento tendencial de la primacía urbana de Bogotá, el caso colombiano conserva su originalidad. Mientras que el crecimiento urbano es muy rápido a todo lo largo del siglo XX, y que los colombianos se desplazan masivamente hacia las más grandes ciudades, la concentración de la población en la primera ciudad es bastante modesta y progresa muy lentamente (excepto en 1951 y 1973). Todavía en 1993, Bogotá concentra el 14% de la población colombiana y el 21% de la población urbana. La brecha entre la primera ciudad y la segunda permanece limitada (Bogotá sólo está 2,3 veces más poblada que Medellín). Fuera de la capital, Colombia cuenta con tres metrópolis que superan el millón de habitantes y Bogotá no está más que 1,2 veces más poblada que las tres ciudades siguientes reunidas.

Se ha propuesto el término de “cuadricéfalia urbana” para designar esta figura de una red urbana dominada por cuatro metrópolis (GOUËSET, 1992). Los límites de esta cuadricéfalia también han sido mostrados (ibíd.): hoy, Bogotá continúa creciendo más rápidamente que las otras grandes ciudades colombianas y, sobre todo, la primacía económica de Bogotá es muchísimo mayor que su peso demográfico, el cual sigue siendo relativamente moderado (secc. IV).

III. LA IMPORTANCIA DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS EN LA EVOLUCIÓN DE LA RED URBANA

La evolución diferenciada de los elementos del sistema urbano, en términos de tamaño y de tasa de crecimiento, se explica mediante las características de dos factores de cambio demográfico: el movimiento natural y el saldo migratorio. En el caso colombiano, el primero, globalmente favorable a todas las ciudades, tiene poco efecto discriminante en la jerarquía urbana, mientras el segundo resulta, por el contrario, decisivo para explicar el desarrollo de ciudades más grandes, comenzando por Bogotá.

A. UNA ESTRUCTURA DE POBLACIÓN GLOBALMENTE FAVORABLE AL CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES

En numerosos estudios demográficos se ha establecido que la estructura de la población urbana, modificada por la afluencia de población migrante a todo lo largo del siglo XX, en parte es responsable del rápido crecimiento de las ciudades colombianas (URRUTIA, 1990; DUREAU y FLÓREZ, 1996; FLÓREZ, 2000). Este efecto reposa sobre algunos principios simples que nos limitaremos a citar (se volverá sobre este problema en el capítulo segundo), y que están ligados simultáneamente a la composición de los flujos migratorios y a la evolución de los modos de vida en la ciudad:

- Las mujeres son más numerosas que los hombres en la ciudad, pues los flujos de emigración rural han correspondido más a las mujeres que a los hombres (FLÓREZ, 2000: 69)⁹¹;

- Con la llegada masiva de jóvenes adultos migrantes, la estructura por edad de las poblaciones urbanas ha sido y es propicia a un crecimiento natural elevado (FLÓREZ, 2000: 69);

- La sobrerrepresentación de las mujeres en edad de procrear, que resulta de los factores precedentes, compensa el descenso global de la fecundidad en la ciudad y mantiene elevadas las tasas de natalidad.

9 La tasa de masculinidad es reducida en todas las ciudades, y muy constante: entre 80% y 90% en la mayoría de las ciudades de más de 50.000 habitantes (MESCLIER, GOUSET et ál., 1999: 76).

Por estas razones, a las que hay que sumar la reducción de la mortalidad infantil en la ciudad (FLÓREZ, 2000: 16 a 18), el crecimiento natural permaneció elevado en las ciudades colombianas durante toda la segunda mitad del siglo XX, el crecimiento poblacional se debe cada vez más al movimiento natural –movimiento vegetativo– que al aporte migratorio directo como factor de crecimiento urbano, mientras que entre 1951 y 1964 el 37% del crecimiento urbano era atribuible a la inmigración, esta proporción cayó a 31% entre 1973 y 1985 (DUREAU y FLÓREZ, 1996: 148).

No obstante, y a pesar de variaciones regionales a veces sensibles (tasa de fecundidad más elevada en las pequeñas ciudades y en las ciudades de la costa Caribe, por ejemplo, donde los grupos de edad más fecundos están, en cambio, un poco menos representadas que en las grandes ciudades del interior), el elevado movimiento natural ha beneficiado al conjunto de las ciudades colombianas y no parece ser un factor importante de diferenciación del crecimiento, contrariamente a las migraciones.

B. DESDE UNA EMIGRACIÓN RURAL MASIVA
ORIENTADA HACIA LAS MÁS GRANDES CIUDADES,
HASTA UNA DIVERSIFICACIÓN DE LOS FLUJOS
Y UN REFORZAMIENTO DE LA POLARIZACIÓN HACIA BOGOTÁ

Las migraciones internas han constituido el principal estímulo para el crecimiento urbano en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX, bien sea directamente, a través de la llegada de nueva población, o indirectamente, porque esa población genera (debido a las características demográficas que acabamos de mencionar) un fuerte crecimiento natural. Las migraciones y el crecimiento urbano funcionan de manera sistémica: se trata de un sistema que opera a escala nacional y en el cual los flujos migratorios están estructurados según un principio jerárquico bastante estable en el largo plazo.

A partir de la década de 1950 se establece en Colombia un vasto proceso de migración rural-urbana. Entre 1964 y 1973, más de 250.000 personas abandonan cada año los campos para ingresar en las ciudades (BANGUERO, 1985). El movimiento se intensificó a principios de la década de 1970: la tasa anual de migración alcanzaba entonces el 2,2%. Las causas de este movimiento, que han

sido bien estudiadas en Colombia (FLÓREZ, 2000: 67), son del mismo orden que en muchos países de América Latina en el mismo momento: expulsión de la población del campo bajo el efecto de una sobrepoblación relativa debida a la transición demográfica y a la modernización de la agricultura; atracción representada por las ciudades en pleno desarrollo, que ofrecían ventajas sociales y económicas más y más evidentes comparadas con las de las zonas rurales. La Violencia, entre 1948 y 1953, y sus consecuencias en los años siguientes, sin duda ampliaron el movimiento pero sin desencadenarlo o convertirse en su motor principal (GOUËSET, 1992: 57; FLÓREZ, 2000: 67), contrariamente a lo que con frecuencia se sostiene en Colombia.

Entre 1951 y 1973, la emigración rural estaba ampliamente polarizada hacia las más grandes ciudades del país y ocurría en el seno de cuencas migratorias en expansión, pero que permanecían relativamente compartimentadas (GOUËSET, 1992, 57 y 58). Fueron sobre todo las capitales más pobladas de los departamentos las que se beneficiaron de este proceso, y en particular las cuatro principales metrópolis que absorbieron a la población de su *hinterland* rural y de su zona de influencia regional (ibíd.). Entre 1964 y 1973, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla absorbieron el 40% del total de los flujos migratorios del país (RUEDA, 1979). La tasa promedio anual de migración neta de estas ciudades era elevada, incluso más en Bogotá (2,7%) que en Medellín (2,1%) y Cali (2,0%), y sobre todo, que en Barranquilla (FLÓREZ et ál., 1987).

A partir de 1973, disminuyó la migración desde los campos hacia las ciudades, al igual que el aporte de la migración rural al crecimiento demográfico de las últimas, mientras surgían nuevos polos de atracción en las ciudades intermedias (con menos de 250.000 habitantes), que alcanzaban tasas anuales de migración neta superiores a 4% entre 1973 y 1985. Estas ciudades, poco numerosas (localizables en el mapa 1.5), corresponden a categorías particulares ya mencionadas a comienzos de este capítulo y descritas por RUBIANO (1992) o GOUËSET (1996): ciudades fronterizas o portuarias, ciudades situadas en el corazón de zonas de explotación agrícola intensiva (regiones cafeteras, frentes de colonización agrícola), ciudades petroleras o mineras.

A medida que Colombia se urbanizaba, las migraciones entre las ciudades igualaron progresivamente el paso a los flujos de origen rural. Las décadas de 1970 y 1980 fueron marcadas por una diversificación de las direcciones de

la migración, mientras la complejidad de las trayectorias migratorias venía aumentando. Junto a la emigración rural de corta distancia, comenzaban a desarrollarse migraciones de origen urbano de larga distancia. El conjunto de los movimientos funcionaba de acuerdo con el modelo clásico de selectividad de la migración, el cual postula que la migración de larga distancia es más calificada que la de corta distancia. La diversificación de las direcciones de la migración y la diversificación de las características de la población migrante van a la par.

El censo de 1993 demuestra esta importante modificación del sistema migratorio colombiano, a la vez en la intensidad y en las direcciones de la migración (MARTÍNEZ y RINCÓN, 1997: 253). Bogotá continúa ejerciendo una atracción sobre los departamentos vecinos (Boyacá y Cundinamarca suministran el 36% de la migración entre 1988 y 1993), pero también comienza a ejercerla en forma significativa por fuera de su cuenca migratoria tradicional, en regiones densamente pobladas y especialmente en las grandes ciudades. Bogotá se afirma como un “foco del sistema territorial colombiano” (JARAMILLO, 1998: 117), que polariza más y más las migraciones interurbanas nacionales. Ya entre 1980 y 1985, la mitad de los migrantes llegados a Bogotá provenían de una capital departamental; después, entre 1988 y 1993, Bogotá absorbió la cuarta parte de las migraciones interdepartamentales del país (MARTÍNEZ y RINCÓN, 1997: 254). Paralelamente a este reforzamiento de la atracción de Bogotá, los movimientos migratorios siguieron diversificándose. Es el caso, por ejemplo, de los movimientos desde el Meta en dirección al Casanare, o de la fuerte migración del Cauca y en menor medida de Nariño, hacia el departamento del Valle del Cauca. MARTÍNEZ y RINCÓN no vacilan en hablar de una “tendencia a la desconcentración de la migración” (1997: 253) que paradójicamente refuerza el peso de Bogotá, única ciudad grande que se beneficia a la vez de la permanencia de las migraciones de proximidad y de la atracción creciente sobre los flujos de origen más urbano y más lejano.

Esas modificaciones recientes han tenido el efecto de relativizar la segmentación del territorio colombiano en cuencas migratorias antes relativamente cerradas, al menos hasta 1973 (JARAMILLO, 1998), aunque sin cuestionar su configuración general, que aparece claramente en el mapa 1.8.

C. LOS FLUJOS MIGRATORIOS HACIA LAS METRÓPOLIS

El mapa 1.8, elaborado a partir de los lugares de origen de la migración (e indicando, en cuatro aglomeraciones, el municipio de nacimiento de la población residente en 1993), y el mapa 1.9, elaborado, por el contrario, según los lugares de destino de la migración (clasificación de los municipios colombianos según el lugar de residencia en 1993 de las personas que han emigrado de su municipio de nacimiento), confirman las tendencias que acabamos de mencionar. Elaborados a partir de los lugares de nacimiento de los migrantes y haciendo abstracción de las etapas migratorias hasta 1993, estos mapas tienen la ventaja de presentarnos una perspectiva de largo plazo. Las cuatro metrópolis concentran en 1993 un tercio del volumen total de la población colombiana que ha abandonado su lugar de nacimiento (o sea un poco menos que entre 1964 y 1973), y Bogotá el 19% ella sola.

Las cuencas migratorias de las cuatro metrópolis se resaltan en formas muy claras en los dos mapas:

– Una cuenca limitada sobre todo al departamento de Antioquia para Medellín, pero que funciona de manera muy exclusiva en este departamento, muy poblado desde el principio (mapa 1.2).

– Una cuenca más extendida y más difusa en Cali, de donde emerge sin embargo un eje preponderante que comienza en la zona cafetera del Viejo Caldas al norte (una zona multipolarizada, dividida entre la atracción de sus propias capitales departamentales y la de las tres metrópolis), bordea los valles medio y superior del río Cauca (donde la atracción de Cali es exclusiva) y termina en el gran valle interandino de Nariño, al sur. De igual modo, la influencia de Cali es dominante en todo el litoral Pacífico comprendido entre la frontera ecuatoriana y el sur del Chocó, lo que representa cifras de migrantes muy importantes, en particular en los flujos recientes (cap. segundo).

– Una cuenca bastante grande pero más dispersa para Barranquilla, desde el departamento de Córdoba hasta el de La Guajira, pero que sólo parece funcionar de manera exclusiva en el departamento del Atlántico y en su proximidad inmediata; más allá, la atracción de la metrópoli Caribe se enfrenta rápidamente con la competencia de las otras capitales de la costa, tanto al este como al oeste.

– Por último, una cuenca muy grande para Bogotá, que abarca integralmente los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, muy poblados al principio (mapa 1.2), y se desborda ampliamente sobre todos los otros departamentos periféricos: Tolima, Santander del Sur, pero también Caldas, Huila y Meta.

La atracción ejercida por las cuatro metrópolis disminuye con la distancia, lo que resulta lógico, pero son escasas las regiones que escapan a esa atracción (categoría 7 del mapa 1.9). Esos espacios, donde la emigración hacia las más grandes ciudades nunca deja de presentarse, corresponden, bien sea a los espacios polarizados por sus propias capitales departamentales (Córdoba, Cesar, Norte de Santander, parte de Santander), o bien a espacios periféricos ampliamente dirigidos hacia los frentes de colonización (Norte del Chocó y toda la mitad oriental de Colombia).

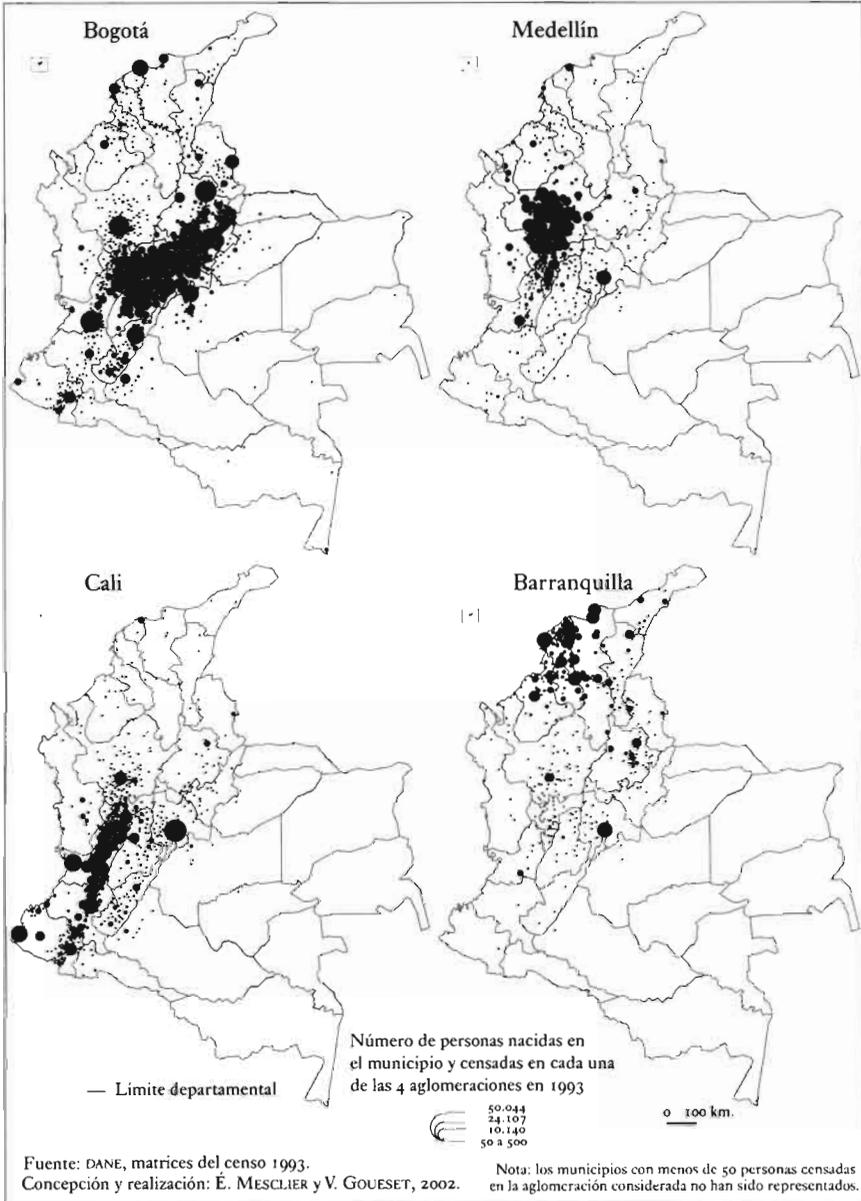
El mapa 1.8 también permite apreciar la aparición de flujos interurbanos de origen más lejano, que progresivamente se encuentran en el proceso de seguir el paso de las cuencas migratorias tradicionales, más próximas y más rurales. En cada una de las cuatro metrópolis se observa un aporte migratorio importante desde las otras ciudades. Sólo Bogotá está en condiciones de resultar atractiva para el conjunto de las ciudades de Colombia: la observación gráfica nos confirma las constataciones ya planteadas por MARTÍNEZ y RINCÓN (1997) y JARAMILLO (1998).

Se ha visto que desde la década de los años 1950 las migraciones internas de Colombia han sido prioritariamente polarizadas por las ciudades más grandes. La tabla 1.6 muestra el peso de esos flujos de inmigración en la población total de las aglomeraciones de más de 300.000 habitantes en 1993. El saldo migratorio sobre la duración de la vida¹⁰ representa el 28%, en promedio, de la población de las ciudades-centro, y el 57% de la población de los municipios periféricos de fuerte crecimiento¹¹. Bogotá y Cali se singularizan como ciudades de migrantes, con un saldo migratorio que representa más de un tercio de la población total, resultado que debe ser matizado de todas maneras dada la

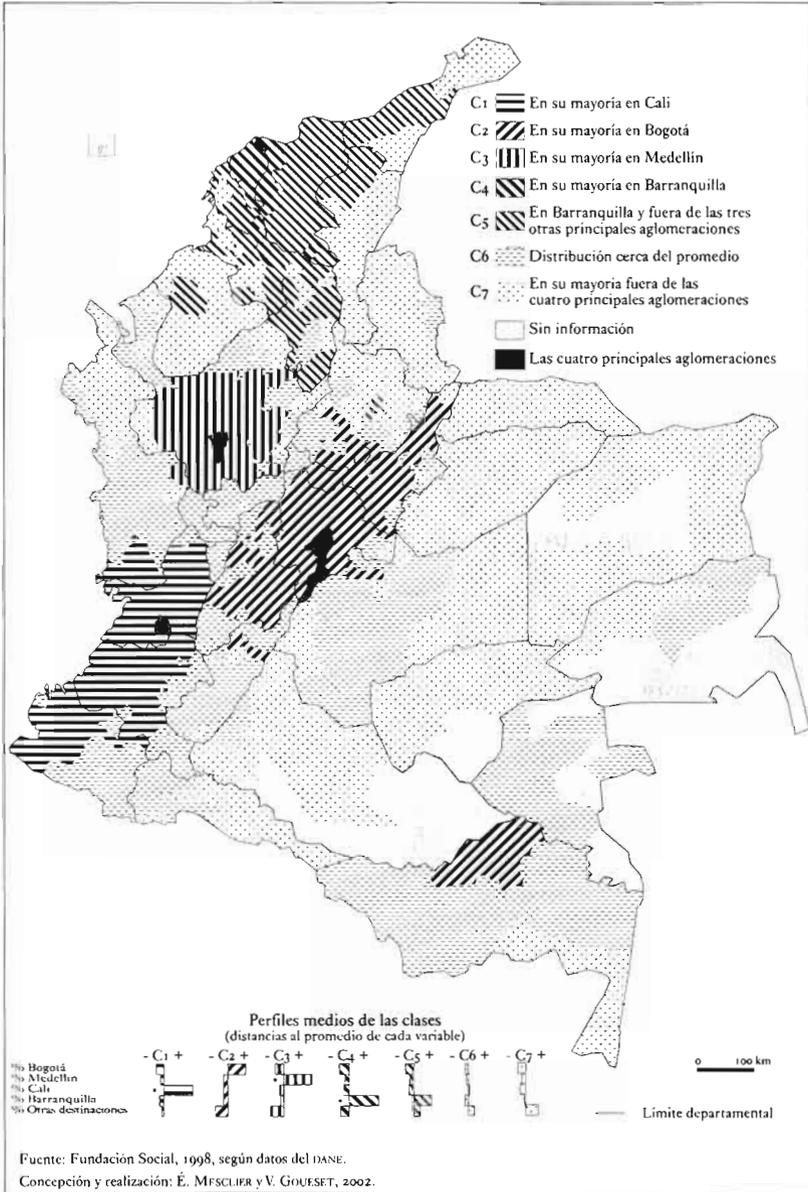
10 Cfr. las definiciones en el anexo 3, al final de este libro.

11 Subtotal en las siete ciudades de mayor crecimiento entre 1985 y 1993, entre las cabeceras municipales que cuentan con 100.000 a 300.000 habitantes. Se trata únicamente de municipios de las periferias de las grandes aglomeraciones.

MAPA 1.8
CUENCAS MIGRATORIAS DE BOGOTÁ, MEDELLÍN, CALI Y BARRANQUILLA,
POR MUNICIPIO DE NACIMIENTO DE LOS INMIGRANTES EN 1993



MAPA 1.9
 CLASIFICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS SEGÚN EL LUGAR DE RESIDENCIA DE LOS MIGRANTES EN 1993



modestia de sus periferias conurbadas (inexistentes en Cali, y que representan menos de un 5% de la población total en Bogotá), mientras que esas mismas periferias, al contrario, captan a la mayoría de la población inmigrante en las otras metrópolis. El caso extremo es Bucaramanga, cuyo saldo migratorio es negativo, lo que puede explicarse a la vez gracias a la amplitud de la migración hacia Bogotá (visible en el mapa 1.8) y debido a los desplazamientos de la población hacia los municipios periféricos, como Floridablanca, cuyo saldo migratorio equivale a dos tercios de la población total del municipio. Se encuentra una situación análoga, aunque menos espectacular, en Pereira, Medellín e incluso Barranquilla, lo que muestra que en la mayor parte de las ciudades colombianas (excepto en Cali) la expansión urbana ha traspasado ahora los límites administrativos de la ciudad-centro (cap. tercero).

Las cifras sobre el período más reciente (1988-1993) confirman que los flujos migratorios han perdido su importancia relativa en el curso de los últimos años, en ciudades que aparecen cada vez menos como “ciudades de migrantes”, sobre todo en el centro de las aglomeraciones. El saldo migratorio 1988-1993 no representa más que el 6% de la población de los municipios centrales, e incluso el 21% de la de las periferias en fuerte crecimiento. Entre esas ciudades periféricas, Soacha se distingue por una fuerte participación del saldo migratorio en su población (30%). Soacha no solamente es un lugar de recepción de la inmigración de larga distancia que se dirige a Bogotá, al mismo título que los distritos periféricos de la ciudad, sino también una alternativa residencial a corta distancia para las familias que ya residen en Bogotá, configurándose así como un “barrio de Bogotá” igual a los otros (DUREAU, HOYOS y FLÓREZ, 1994; cfr. también el cap. tercero).

IV. EL DESFASE ENTRE DESARROLLO ECONÓMICO Y CRECIMIENTO URBANO

Los desarrollos precedentes abarcaron los resortes puramente demográficos de la dinámica urbana en Colombia. Esos mecanismos han mostrado que el crecimiento de las ciudades obedece a reglas que se pueden deducir de la simple observación de la red urbana (efectos de tamaño, de jerarquía, de situación, de proximidad a las metrópolis, etc.) y del estudio de las dinámicas migratorias,

que ejercen una influencia sobre el crecimiento natural de la población urbana. Sin duda, resulta legítimo preguntarse si el sistema de las ciudades colombianas no es igualmente sensible a la coyuntura económica, y más específicamente, a la localización del aparato productivo colombiano y su evolución.

A. DIFICULTADES DE ORDEN CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO

Los estudios sobre análisis espacial regularmente plantean la pregunta sobre la existencia de un nexo entre los ciclos de crecimiento demográfico de las ciudades y las fases de desarrollo económico (GUÉRIN-PACE, 1993: 89 a 110; PUMAIN y SAINT-JULIEN, 1996: 247 a 256, etc.). Para ello, se apoyan sobre hipótesis y referencias teóricas (especialmente el modelo de MARCHETTI y los trabajos de SANDERS) que hacen hincapié en el paralelo que se puede establecer —a largo plazo y en numerosos países industrializados— entre el crecimiento, la estabilización o el declive de algunas ciudades y la sucesión de los ciclos económicos (ciudades del carbón, textiles, puertos, etc.), o entre las fases de crecimiento y los ciclos de innovación económica.

Desde la década de los años 1980, varios autores¹² que han comparado en forma empírica la evolución de las ciudades y del aparato productivo en Colombia, han planteado frecuentemente esa pregunta, aunque ciertamente inscritos en el marco de otros paradigmas interpretativos, distintos al análisis espacial. Por ejemplo, la Escuela de la dependencia establece un nexo entre los ciclos de desarrollo del capitalismo periférico y el proceso de urbanización, o más recientemente, las teorías sobre la globalización de la economía.

En realidad, todos estos enfoques tropiezan con el mismo escollo estadístico. Los datos económicos que permitirían estudiar en el largo plazo y en el conjunto de la red urbana el lazo que puede existir entre el tamaño de las ciudades y su dinamismo económico —incluso limitándose al período 1951-1993 y a las 164 unidades urbanas de más de 15.000 habitantes— son muy poco numerosos, en general incompletos y no siempre fiables, sea que se trate de

12 Especialmente: JIMÉNEZ y SIDERI (1985), JARAMILLO y CUERVO (1987: 47 a 159 y 189 a 253), JARAMILLO y CUERVO (1993), DNP (1993: 63 a 124), CUERVO y GONZÁLEZ (1997), Fundación Social (1998).

TABLA 1.6
DINÁMICA MIGRATORIA DE LAS DIEZ PRIMERAS AGLOMERACIONES DE COLOMBIA EN 1993

	Población residente en 1993	Población migrante de toda la vida				Población migrante de los últimos 5 años (1988-1993)		
		Nativos (nacidos en el municipio)	Emigrantes (nacidos en el municipio y que no residían más en 1993)	Inmigrantes (nacidos fuera del municipio y que residían en 1993)	Participación neta de inmigrantes (en % de la población residente en 1993)	Emigrantes	Inmigrantes	Participación neta de inmigrantes (en % de la población residente promedio entre 1988 y 1993)
Municipios centrales								
Bogotá	4.922.825	2.715.754	443.889	2.207.071	36%	318.016	658.856	7,7%
Cali	1.661.433	883.098	190.805	778.335	35%	107.887	275.439	11,1%
Medellín	1.620.915	923.144	361.941	697.771	21%	168.882	199.333	2,1%
Barranquilla	989.907	610.541	205.570	379.366	18%	122.134	135.911	1,5%
Cartagena	651.493	416.082	82.601	235.411	23%	40.300	94.216	9,3%
Cúcuta	479.079	258.445	74.147	220.634	31%	43.567	74.354	7,3%
Bucaramanga	406.695	221.872	201.922	184.823	-4%	86.109	70.049	-4,4%
Ibagué	362.649	198.847	120.899	163.802	12%	43.950	60.159	5,0%
Pereira	349.353	180.376	126.212	168.977	12%	49.493	61.904	3,9%
Manizales	323.774	193.055	115.183	130.719	5%	36.432	42.813	2,2%
Subtotal	11.768.123	6.601.214	1.923.169	5.166.909	28%	1.016.770	1.673.934	6,0%

TABLA 1.6
DINÁMICA MIGRATORIA DE LAS DIEZ PRIMERAS AGLOMERACIONES DE COLOMBIA EN 1993

	Población residente en 1993	Población migrante de toda la vida				Población migrante de los últimos 5 años (1988-1993)		
		Nativos (nacidos en el municipio)	Emigrantes (nacidos en el municipio y que no residían más en 1993)	Inmigrantes (nacidos fuera del municipio y que residían en 1993)	Participación neta de inmigrantes (en % de la población residente en 1993)	Emigrantes	Inmigrantes	Participación neta de inmigrantes (en % de la población residente promedio entre 1988 y 1993)
Periferias más dinámicas*								
Soacha (afueras de Bogotá)	230.232	70.195	13.466	160.037	64%	7.015	67.881	30,0%
Itagüí (afueras de Medellín)	179.537	63.678	39.579	115.859	42%	15.496	39.673	14,9%
Bello (afueras de Medellín)	260.664	83.163	27.389	177.501	58%	22.152	55.653	14,3%
Envigado (afueras de Medellín)	114.973	34.793	18.824	80.180	53%	11.226	25.567	13,6%
Soledad (afueras de Barranquilla)	238.031	104.990	18.524	133.041	48%	8.713	58.876	23,7%
Floridablanca (afueras de Bucaramanga)	192.549	60.541	6.902	132.008	65%	5.776	49.183	25,3%
Dosquebradas (afueras de Pereira)	139.774	34.621	3.672	105.153	73%	5.545	39.107	26,9%
Subtotal	1.355.760	451.981	128.356	903.779	57%	75.923	335.940	21,0%

Fuente: DANE, Censo ajustado de 1993. Cálculos de BARBARY, 2002.

* Cabeceras municipales con mayor crecimiento demográfico entre 1985 y 1993, en la categoría de 100.000 a 300.000 habitantes.

indicadores que tienen en cuenta los volúmenes y la estructura de la mano de obra, la producción industrial, los servicios financieros, la enseñanza superior e incluso las otras actividades de servicio.

A pesar de esas limitaciones, es posible establecer algunas conclusiones generales sobre la distribución de las actividades económicas en Colombia y luego proponer algunas reflexiones sobre su relación con las dinámicas urbanas observadas.

B. UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA MUY CONCENTRADA, CUYOS EFECTOS SOBRE LA DINÁMICA URBANA SON COMPLEJOS

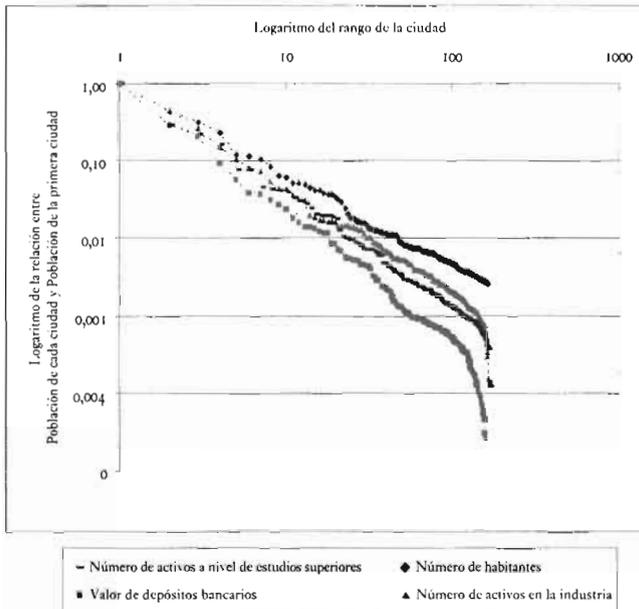
La mayoría de los estudios sobre el sistema productivo colombiano se centran en unas muestras de ciudades más restringidas que las 164 unidades urbanas definidas en este capítulo y sobretodo están enfocadas en la industria –por razones a la vez conceptuales y metodológicas–, lo que introduce un sesgo del cual resulta difícil escapar cuando uno se interesa en la localización de las actividades económicas en su conjunto. De todos modos, estos estudios han hecho evidente el carácter muy concentrado de la estructura productiva en Colombia, en especial en lo que concierne a la industria, el comercio internacional e incluso las actividades agroexportadoras o mineras. Los diferentes ciclos de desarrollo económico que se han sucedido desde mediados del siglo xx no han puesto en duda esta concentración: industrialización por sustitución de las importaciones a partir de la década de 1940, y después por transferencia de tecnologías extranjeras desde la década de 1960; crisis provocada por el impacto petrolero y recuperación selectiva de la industria a partir de la década de 1970; auge de los servicios superiores en las grandes ciudades durante la década de 1980; globalización de la economía en la década de 1990, con un levantamiento de las barreras aduaneras y una apertura a las inversiones extranjeras; grave recesión a fines de la década de 1990.

Antes del despegue de la industria colombiana, los centros de producción agroindustrial y minera –motores principales de la economía nacional– se encontraban no obstante repartidos en diferentes puntos del territorio nacional. Como consecuencia, las industrias se desarrollaron simultáneamente en varias ciudades, especialmente en razón de la segmentación del mercado interno colombiano, que sólo se unificó tardíamente (en la década de 1970, e incluso

en la de 1980). El impacto de esta relativa dispersión de las actividades productivas sobre el desarrollo de algunas grandes ciudades, y sobre la primacía moderada de Bogotá, parece un hecho establecido.

Sin embargo, el grado de concentración de las actividades económicas es muy superior al de la población, como lo indica claramente el Gráfico 1.2. En lo que respecta a la industria, está confirmado que el poder de atracción de las ciudades es globalmente proporcional a su tamaño (además con una sobrerrepresentación de la segunda ciudad, Medellín, que era el primer centro industrial de Colombia a mediados del siglo XX), pero el desfase existente entre las más grandes ciudades se incrementa rápidamente cuando se desciende en la jerarquía urbana, sobre todo hacia el decimoquinto rango y más allá. Como lo han hecho notar varios autores colombianos (especialmente CUERVO y GONZÁLEZ, 1997), sólo existe un número limitado de polos diversificados de desarrollo industrial en Colombia. Fuera de esos polos no se encuentran más que “enclaves” cuyo carácter duradero no está garantizado, o bien centros industriales menores.

GRÁFICO 1.2
DISTRIBUCIÓN RANGO-TAMAÑO DE LAS CIUDADES COLOMBIANAS
SEGÚN DIFERENTES INDICADORES DEMOGRÁFICOS Y ECONÓMICOS EN 1993



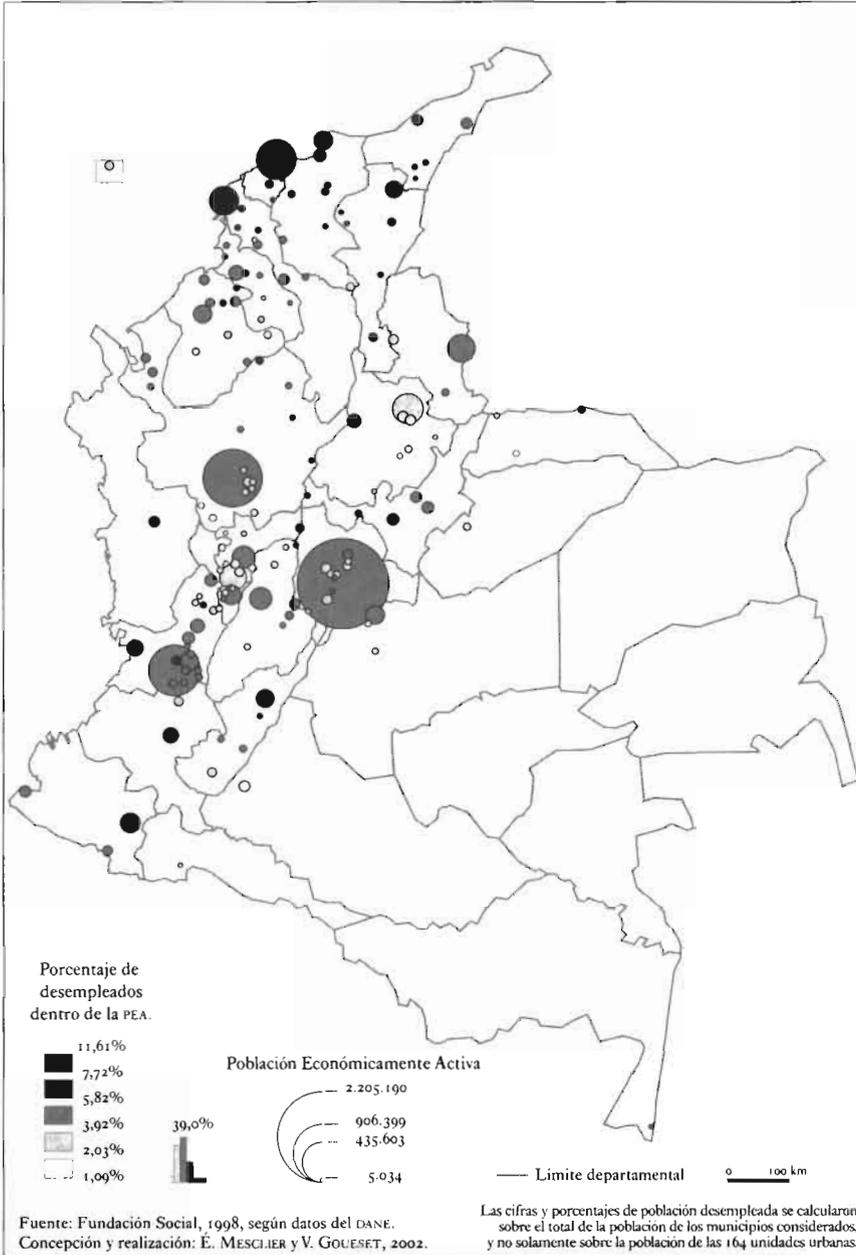
La influencia de la industria sobre el crecimiento urbano parece claramente establecida por los centros industriales más pequeños (como Duitama, Sogamoso o Barrancabermeja), cuyo rápido crecimiento se encuentra en desfase (incluso, a contracorriente) respecto a la evolución de la mayoría de ciudades próximas de tamaño equivalente (mapas 1.5 y 1.6). A la inversa, las capitales menos industrializadas (como Tunja, Popayán o Pasto), o las que han sido impactadas duramente por una crisis (como Manizales, Armenia o Palmira), acusan un retardo de crecimiento en el conjunto del período. Pero resulta difícil ir más allá de estas constataciones tan generales, pues lo esencial del aparato industrial está concentrado —a todo lo largo del medio siglo considerado— en las ciudades más grandes, donde tienen lugar los ciclos de innovación y las mayores crisis, sin que el ritmo de sus tasas de crecimiento parezca verse afectado.

En cuanto a los servicios superiores, por definición están concentrados en los centros urbanos más importantes, como lo confirma, en el Gráfico 1.2, la curva de la mano de obra altamente calificada —la disponibilidad de mano de obra de alto nivel resulta un factor decisivo para la localización de industria y los servicios de punta. La curva de los depósitos bancarios es la más fuertemente jerarquizada, y Bogotá representa más de la mitad del total nacional (MESCLIER, GOUËSET et ál., 1999: 104). Los servicios financieros y los capitales disponibles para la inversión están concentrados en la capital y en un número limitado de grandes ciudades en Colombia. Las crisis financieras, como la que azotó a América Latina a fines de la década de 1990, o las disminuciones de la actividad en los sectores de punta, tienen consecuencias demográficas muy difíciles de evaluar. Es probable que en Colombia, como en el resto de la región, esas crisis contribuyan al incremento de las salidas de personas y capitales hacia el extranjero, hacia Estados Unidos en particular, pero igualmente no es seguro que este éxodo tenga un efecto significativo de desaceleración de la concentración demográfica en las ciudades del vértice de la jerarquía urbana.

Otro indicador del estado de la actividad económica, la cantidad absoluta y la tasa de desempleo entre la población activa de 1993¹³ (mapa 1.10) parece

13 Por cierto, se trata de un indicador indirecto e insuficiente de la coyuntura económica (la cual además se ha degradado considerablemente desde esta fecha), pero permite tener en cuenta a la totalidad de las ciudades.

MAPA I.10
 VOLUMEN Y TASA DE DESEMPLEO EN LAS CIUDADES EN 1993



confirmar—incluso si no se dispone de cifras antiguas para seguir el fenómeno en el largo plazo— la idea de una relativa desconexión entre la coyuntura económica y la dinámica de la red urbana. En efecto, este mapa ilustra muy bien el “descolgamiento económico” del cual padecían las ciudades de la región Caribe a comienzos de la década de 1990. Este descolgamiento regional, que en realidad es más antiguo, también afecta a las capitales poco industrializadas del sur de la región Andina y a algunas ciudades que dependen muy exclusivamente de un solo tipo de actividad, como los centros industriales de Boyacá, el polo petroquímico de Barrancabermeja o el puerto de Buenaventura.

Las ciudades del triángulo metropolitano se caracterizan, al contrario, por un volumen y una tasa de desempleo relativamente bajos (la jerarquía de las ciudades según el número de desempleados se parece más, desde ese punto de vista, al estado de la red urbana en 1951 que al de 1993 en el mapa 1.4), lo que confirma la vitalidad económica de la zona central de los Andes. Con todo, al comparar este mapa del desempleo con el de las tasas de crecimiento (mapa 1.5), e incluso con el de las trayectorias del crecimiento (mapa 1.6), se puede observar que las dificultades económicas alteran poco el crecimiento demográfico de las ciudades. A la inversa, algunas regiones urbanas en proceso de pérdida de dinamismo demográfico (como la región cafetera del Viejo Caldas o el Valle del Cauca) no parecen particularmente afectadas, en comparación con las otras, debido al problema del desempleo.

En resumen, ciertamente resulta innegable que el desarrollo económico permanece —en el largo plazo— como un motor esencial para el crecimiento demográfico de las ciudades, pero en detalle y a más corto plazo, la observación de la dinámica de la red urbana colombiana nos enseña que esta relación se encuentra lejos de ser constante.

CONCLUSIÓN

Este estudio ha permitido extraer algunas tendencias fuertes de la dinámica de la red urbana colombiana entre 1951 y 1993. Hemos podido confirmar especialmente su carácter sistémico, con, por ejemplo —y eso era algo relativamente inesperado— la desaceleración precoz del crecimiento de las ciudades situadas en el corazón del triángulo Bogotá-Medellín-Cali, a pesar de ser relativamente

próspero, lo cual sólo se explica a través de un desvío de los flujos migratorios hacia las metrópolis nacionales. La interdependencia de las ciudades y de sus trayectorias queda así claramente establecida. Otro ejemplo, el rápido crecimiento de numerosas ciudades pequeñas desde 1973, en realidad se explica gracias al cambio en las modalidades de crecimiento de las grandes ciudades, cada vez más orientadas hacia su periferia. Esto muestra que el proceso de expansión periurbana de las ciudades que ha sido descrito en Europa y en América del Norte también opera en Colombia, con una amplitud sin duda menor y a despecho de las condiciones radicalmente diferentes que marcan la movilidad de las personas.

El fenómeno de “autocorrelación” en el crecimiento, con unas diferencias que se profundizan entre ciudades caracterizadas por una situación inicial ventajosa o desventajosa dentro de la red urbana, coincide igualmente con las tendencias ya observadas en los países industrializados. Entre los factores que favorecen el progreso de algunas ciudades dentro de la red nacional, se pueden mencionar con certeza su situación geográfica en relación con las otras ciudades, pero también los efectos de las decisiones tomadas en términos de la administración del territorio. Así, se ha localizado la existencia de una “prima de crecimiento” en las ciudades que se benefician de las funciones administrativas centrales, sobre todo durante la década de 1960, que fue el período de máximo crecimiento de numerosas capitales de departamentos hasta entonces periféricas.

El funcionamiento de la red urbana se combina con las especificidades de la distribución del poblamiento sobre el territorio colombiano, para crear diversos modelos regionales de urbanización. Proponemos a continuación una síntesis gráfica de esos diferentes modelos (gráfico 1.3), marcados por importantes contrastes: una red bastante densa de grandes ciudades sobre la costa Caribe, que conservan su dinamismo en el plano demográfico gracias a, entre otras razones, su lejanía de las grandes metrópolis; una Costa Pacífica que, al contrario, parece un casi desierto urbano –fuera de Buenaventura y Tumaco– fuertemente polarizado por ciudades exteriores a la región (sobre todo Cali); una mitad oriental de Colombia muy pobre en ciudades, incluso en individuos; cordilleras andinas densamente urbanizadas y bajo el control del triángulo Bogotá, Medellín y Cali, que por su dinamismo han limitado

el crecimiento de ciudades medianas bastante próximas; un contraste muy marcado entre los dos valles interandinos: el del Magdalena, ayer estratégico y hoy marginado, al contrario que el del Cauca, que se conserva como uno de los “corredores urbanos” de Colombia, bajo el control de Cali.

El peso de Bogotá se hace sentir sobre el conjunto de la red urbana. Se creyó durante mucho tiempo –y esta imagen sigue prevaleciendo a veces en el exterior– que Colombia tenía la “suerte” de poder escapar a los problemas de “macrocefalia” que afectaban simultáneamente a la mayoría de países de América Latina. El estudio de la distribución y del funcionamiento de las actividades productivas en Colombia en realidad nos había mostrado desde hace tiempo que esa excepción colombiana era en parte ilusoria (GOUËSET, 1992). El examen de las dinámicas demográficas refuerza aun más esa constatación: Bogotá, situada en el corazón de una región metropolitana cada vez más vasta y dinámica (cap. tercero), no cesa de reforzar su dominación sobre la red urbana colombiana, especialmente mediante el juego de las migraciones entre ciudades, que son las más selectivas socialmente.

El “problema” que plantea Bogotá en términos de equilibrio y de ordenamiento del territorio (un hecho subestimado por los poderes públicos por mucho tiempo) ahora no se niega más. Este problema ya estaba en el corazón de la reflexión sobre la política urbana del gobierno SAMPER (1994-1998) (MARÍN et ál., 1995). Pero desde entonces, no se ha implementado ninguna política mayor para oponerse al centralismo de Bogotá. Es cierto que la seria degradación de la coyuntura económica colombiana a partir de mediados de la década de 1990, al igual que el deterioro de la situación de orden público y las condiciones de seguridad –especialmente en las carreteras– han limitado considerablemente el margen de maniobra del Estado: la redacción de una ley orgánica de ordenamiento territorial (LOT), inscrita sin embargo en la Constitución de 1991 y en debate desde hace años en el Parlamento, aún no se ha concluido (cap. sexto).

Como ha mostrado este estudio, los azares de la coyuntura económica no siempre repercuten de manera directa sobre la dinámica de la red urbana. No obstante, uno puede preguntarse si las evoluciones posteriores al censo de 1993 no han influido en parte de las tendencias observadas: ¿el dinamismo de Cali no ha sido frenado por la grave recesión que impactó a la ciudad luego de los golpes al cartel de la droga?, ¿las ciudades de la región Caribe han ex-

perimentado una recuperación en su crecimiento con las oleadas masivas de personas desplazadas por la violencia, que afectaron a la región durante los años recientes? Si es así, cuáles son las dinámicas demográficas más afectadas: ¿las de los pequeños centros urbanos cercanos o más bien las de las capitales departamentales que se han visto modificadas? Bogotá, ciudad relativamente librada de la violencia pero también golpeada por la recesión, ¿ha continuado su “trayectoria dominante” y bajo qué forma (crecimiento del Distrito Capital o de la corona metropolitana)? Estas preguntas deberían encontrar respuesta en el censo de 2005, cuando salgan los resultados ajustados.

GRÁFICOS 1.3-1 A 1.3-4

REDES URBANAS REGIONALES: UNA REPRESENTACIÓN “MODELIZADA”

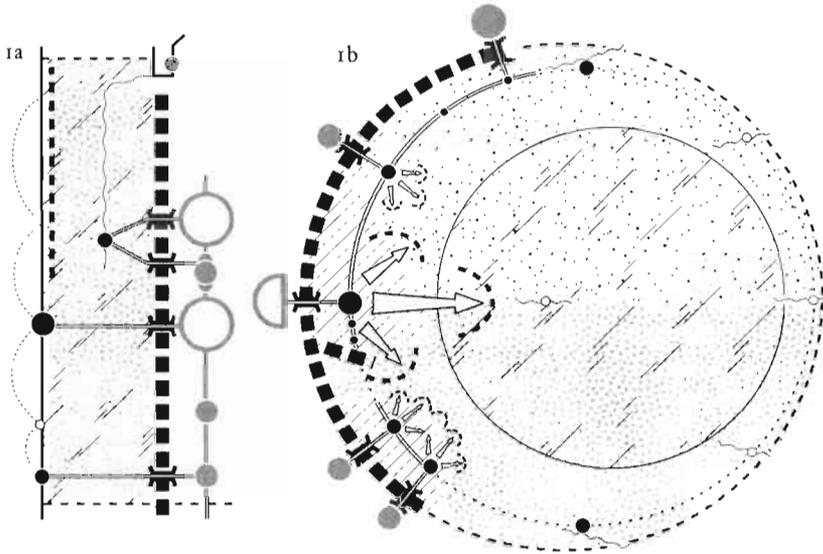
La heterogeneidad física y la relativa compartimentación del territorio nacional, la especificidad de las trayectorias históricas de los subconjuntos socioespaciales que lo componen, explican en parte la diferenciación observada en la configuración de las redes urbanas regionales y en la estructuración inducida del espacio. Los modelos gráficos (coremas) a continuación, apuntan a subrayar las características mayores de esos diferentes dispositivos urbanos, sin exhaustividad.

GRÁFICO 1.3-1
REDES URBANAS LINEALES DE LAS PERIFERIAS SUBPOBLADAS

Vertientes boscosas externas, piedemontes y planicies de la Colombia oriental (650.000 km²) y de la fachada del Pacífico (65.000 km²) cubren cerca de 2/3 del territorio nacional y no cuentan con mucho más del 5% de la población del país. Establecidas en los márgenes de esos vastos espacios periféricos y débilmente jerarquizadas, las redes se estructuran aquí en forma de rosario de ciudades alineadas en situación de interfase (piedemonte, frontera internacional, litoral).

En la costa Pacífica (1a), las principales ciudades-puertos alineadas en la mitad meridional del litoral están menos unidas entre sí (cabotaje) que con los grandes centros del interior de los cuales son las aperturas marítimas. Al norte, la única ciudad en posición central corresponde al valle longitudinal del Atrato.

Cfr. "convenciones" después del corema 4



En el conjunto oriental (1b), la red urbana esboza una órbita de "gravitación" alrededor de un inmenso espacio central con muy bajas densidades de población. El tamaño y la distribución de los lugares centrales, el grado de intercomunicación y las densidades locales de poblamiento inducen una clara disimetría entre la mitad oeste de la red —con sus ciudades de piedemonte de colonización ligadas a los grandes centros del interior— y la mitad este —con sus centros administrativos y estratégicos (fronterizos y ribereños, pues están al lado de grandes arterias fluviales)—, aislados entre sí y de tamaño pequeño (menos de 5.000 habitantes, exceptuando a Arauca al Norte y Leticia al sur).

Concepción y realización: J. P. DELER, 2002.

Edición: O. PISSOAT

GRÁFICO 1.3-2
HETEROGENEIDAD Y PARADOJAS DE LA MALLA URBANA DE LOS GRANDES VALLES

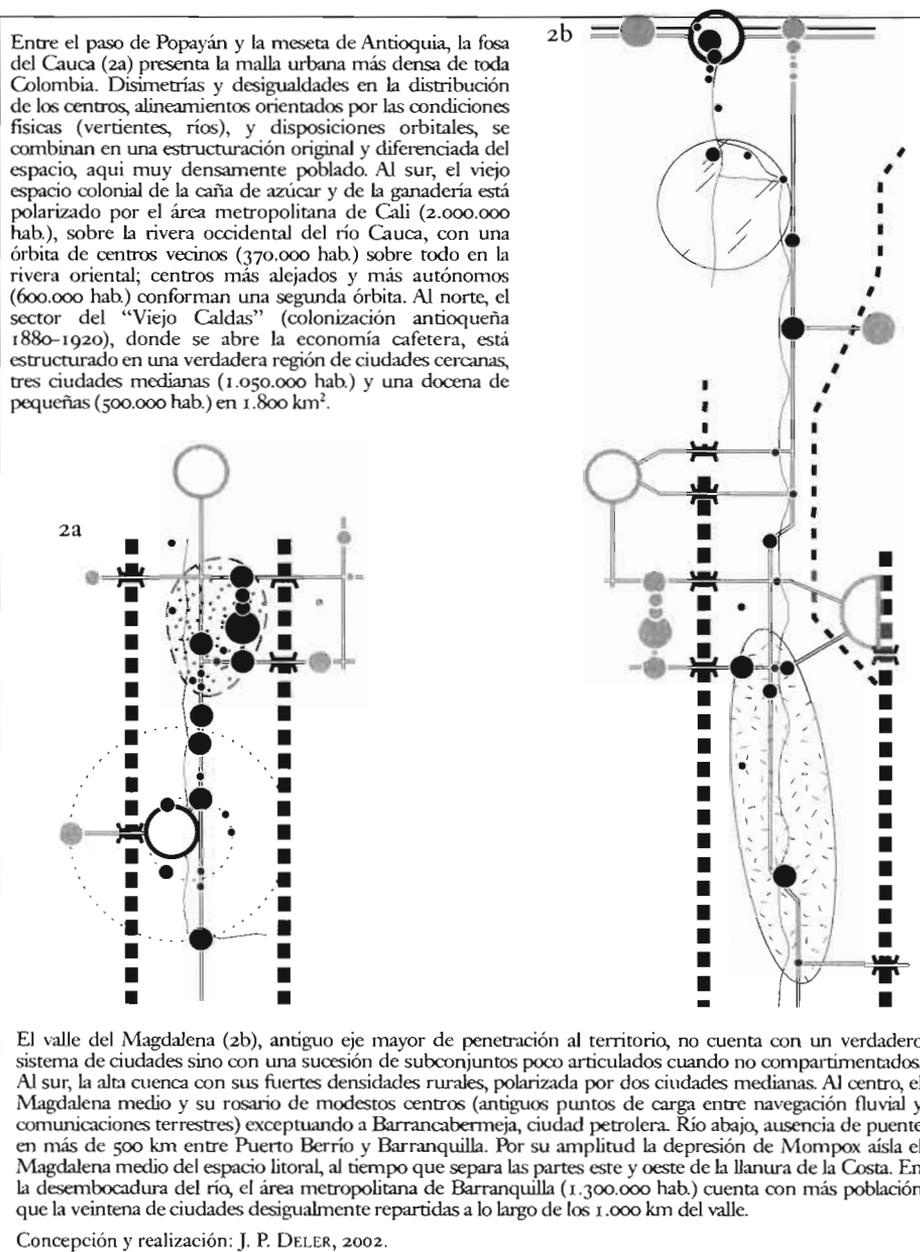
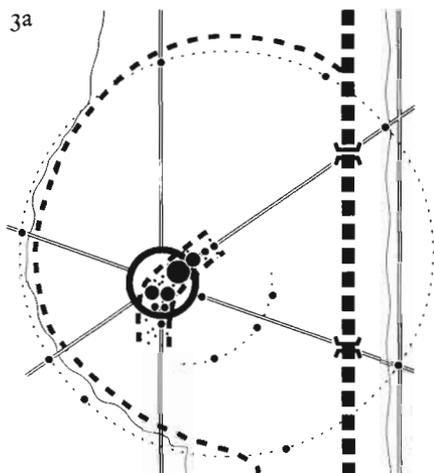


GRÁFICO 1.3-3
METRÓPOLIS Y POLARIZACIONES CONTRASTADAS

Las tierras altas de Antioquia y las de Cundinamarca/sur de Boyacá, con sus espacios cálidos próximos (valles o piedemontes) congregan a más de un tercio de los colombianos en dos áreas de un centenar de kilómetros de radio, respectivamente polarizadas por Medellín y Bogotá.

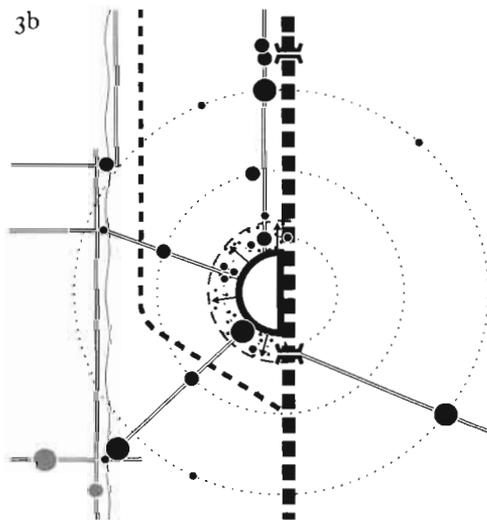
3a



(3a) Descentrada, a la cabeza de una estrella vial, el área metropolitana de Medellín (11 municipios; 3.000.000 hab.) está encauzada en el estrecho valle de Aburrá y domina un cuasi "desierto urbano" con la excepción de pequeñas ciudades al sureste (foco inicial de la colonización antioqueña) y de una órbita de pequeños centros periféricos (en total, 11 centros y menos del 10% del peso demográfico del área metropolitana).

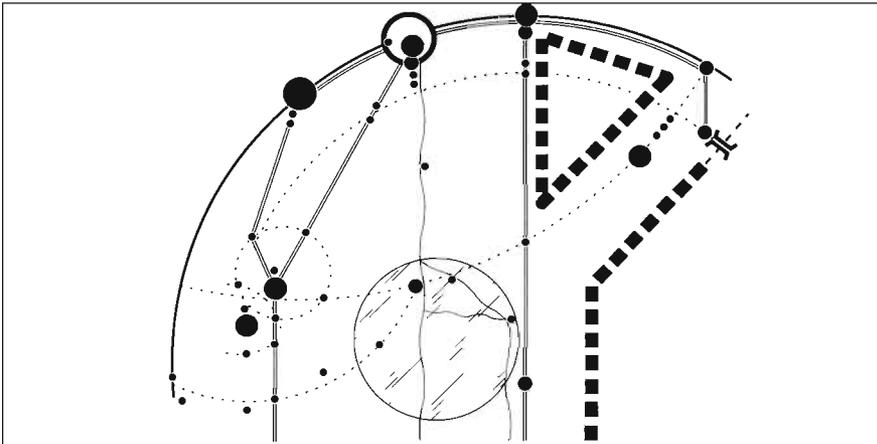
(3b) Adosado en la cordillera, el Distrito de Bogotá (6.000.000 de hab.) polariza una región profundamente diferenciada y disimétrica (viejo foco de poblamiento de las sabanas y vertientes del Magdalena al oeste, frentes pioneros de la reciente colonización del piedemonte oriental). En la periferia inmediata del Distrito, el proceso de metropolización se extiende en un semicírculo con periurbanización e incorporación de centros urbanos (400.000 hab.) de una primera (semi) órbita de gravitación. En el límite o en las puertas de la sabanas, pequeños centros de pesos equivalentes (200.000 hab.) dibujan una segunda (semi) órbita de gravitación. Una tercera órbita reúne a un último grupo de ciudades (700.000 hab.), que es más compleja y heterogénea. Más allá, el papel polarizante de Bogotá se ejerce a escala nacional.

3b



Concepción y realización: J. P. DELER, 2002.

GRÁFICO I.3-4
URBANIZACIÓN DIFERENCIADA DE LA COSTA ATLÁNTICA



El modelo contrastado y difuso de urbanización de la región Atlántica deriva su especificidad de la existencia de una primera oposición entre la franja litoral dominada por un triplete urbano mayor, en posición central sobre la costa Caribe; y el interior con una red de medianas y pequeñas ciudades. De una y otra parte del obstáculo del Magdalena, la llanura occidental se opone, por otro lado, a la zona oriental aislada por la Sierra Nevada de Santa Marta.

El triplete urbano mayor (2.300.000 hab.) polariza el conjunto regional. En la bisagra litoral/interior costero, un primer emplazamiento de ciudades reúne pequeños centros ligados con los ejes de comunicación. A unos 150 a 200 km de la metrópoli de Barranquilla, las ciudades medianas dibujan una amplia órbita de gravitación, desde Riohacha hasta el binomio Sincelejo-Montería. Al este del Magdalena, el dispositivo lineal de las ciudades está ligado a la compartimentación del espacio; al oeste del río, las fuertes densidades de la región del Sinú están acompañadas por una red densa de pequeños centros que gravitan alrededor de la pareja Sincelejo-Montería (600.000 hab. con una docena de centros vecinos).

Ciudades		Convenciones	
Del sistema	Exteriores al sistema		
	> 1.000.000		Frontera internacional
	400.000-700.000		Litoral
	100.000-300.000		Eje montañoso
	50.000-100.000		Río
	15.000-50.000		Sinapsis
	< 15.000		Carretera
	Área de metropolización (Bogotá, Medellín), región urbana (Viejo Caldas)		Cabotaje (costa Pacífica)
	Dinámica metropolitana (Bogotá)		Frente de colonización
	Órbita de gravitación		Área de colonización del piedemonte oriental
			Zona de baja densidad de población
			Sabana (Llanos)
			Selva (Amazonia, Costa Pacífica)
			Área del alto Magdalena

Concepción y realización: J. P. DELER, 2002.

BIBLIOGRAFÍA¹

- BAILLY, A. y J.-M. HURIOT (dir.). *Villes et croissance. Théories, modèles, perspectives*, Paris, Anthropos, Col. Géographie, 1999.
- CATTAN, N.; D. PUMAIN, C. ROZENBLAT y T. SAINT-JULIEN. *Le système des villes européennes*, Paris, Anthropos, Col. Villes, 1994.
- CUERVO, L. M. *La primauté urbaine en Amérique latine. Une étude historique comparative*, Paris, tesis de Doctorado, Institut d'Urbanisme de Paris, Université de Paris XII, 1990.
- DUREAU, F. *Migrations et urbanisation. Le cas de la Côte d'Ivoire*, Paris, ORSTOM, Col. Études et Thèses, 1987.
- DUREAU, F. "Pour une approche non fonctionnaliste du milieu urbain africain", en *Association Internationale des Démographes de Langue Française. Croissance démographique et urbanisation, politiques de peuplement et aménagement du territoire*, Séminaire international de Rabat, 15 a 17 de mayo de 1990, Paris, AIDELF-PUF, 1993.
- GONDARD, P. y J. LEÓN (eds.). *Dinámicas territoriales. Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela*, Quito, IRD-Colegio de Geógrafos de Ecuador-Pontificia Universidad del Ecuador-Corporación Editora Nacional, 2001.
- GUÉRIN-PACE, F. *Deux siècles de croissance urbaine. La population des villes françaises de 1831 à 1990*, Paris, Anthropos, Col. Villes, 1993.
- LÉVY, J. "Métropolisation", en S. WACHTER et ál. *Repenser le territoire. Un dictionnaire critique*, Paris, DATAR-L'Aube, 2000.
- MORICONI-EBRARD, FRANÇOIS. *L'urbanisation du monde depuis 1950*, Paris, Anthropos, Col. Villes, 1994.
- PNUD. *Rapport mondial sur le développement humain 1997*, Paris, Economica, 1997.
- PULIDO, N. *Les tendances récentes de l'urbanisation au Venezuela: le rôle des villes moyennes*, Toulouse, Université de Toulouse le Mirail, tesis de Doctorado en Geografía, 1999.

1 No figuran aquí las referencias bibliográficas que tratan específicamente sobre Colombia: éstas se encuentran en la bibliografía general ubicada al final de la obra.

PUMAIN, D. y T. SAINT-JULIEN. *Atlas des villes de France*, Paris, Reclus-La Documentation Française, 1989.

PUMAIN, D. y T. SAINT-JULIEN. “Spécialisations urbaines et cycles d’innovation”, en PUMAIN D. y F. GODARD. *Données urbaines*, vol. 1, Paris, Anthropos-PirVilles, Col. Villes, 1996.

PUMAIN, D. *La dynamique des villes*, Paris, Economica, 1982.

PUMAIN, D. “Pour une théorie évolutive des villes”, *L’espace géographique*, n.º 2, 2, 1997.

PUMAIN, D.; A. BRETAGNOLLE y C. ROZENBLAT. “Croissance et sélection dans le système des villes européennes (1600-2000)”, *Travaux de l’Institut Géographique de Reims*, n.ºs 101-104, 1999.

REDJIMI, M. *De l’empire à l’État démiurge: la recomposition du territoire algérien (1830, 1990)*, Montpellier, tesis de Doctorado en Geografía, Université de Montpellier III, 2000.

CAPÍTULO SEGUNDO

Movilidades y sistemas de lugares

OLIVIER BARBARY (coord.)

FRANÇOISE DUREAU

ODILE HOFFMANN

A través de su movilidad espacial y de los movimientos de bienes que les son propios, las poblaciones desempeñan un papel esencial, en interacción con otras categorías de actores, en las dinámicas territoriales y los procesos urbanos en Colombia. Como conclusión del capítulo anterior, hemos visto que “la clave del crecimiento urbano es ante todo demográfica” y, más precisamente, está relacionada con la intensificación de las migraciones de larga distancia y su creciente polarización hacia las grandes metrópolis: Medellín, Cali, Barranquilla y, sobre todo, Bogotá. En general, desde hace unos veinte años asistimos, en la totalidad del territorio nacional, a una diversificación de los destinos, los ritmos y las formas de la movilidad; con las dinámicas actuales la movilidad no se puede definir solamente como un cambio duradero de residencia. La intensificación y la complejización de la movilidad permiten que se relacionen allí, de una nueva manera, diferentes tipos de lugares, urbanos y rurales, transformando sus poblaciones y estructuras demográficas, económicas, sociales y sus organizaciones espaciales. En este capítulo, apoyándonos sobre varios ejemplos de observación de la movilidad en sus diferentes formas (comportamientos y trayectorias migratorias, migraciones temporales, multi-residencia), desarrollada en varios lugares (metrópolis, ciudades pequeñas y medianas, espacios rurales) y con diferentes escalas espaciotemporales, queremos ilustrar este fenómeno de integración de espacios migratorios amplios y compuestos, con la característica común de que todos integran diferentes tipos de ciudades.

Esta evolución suscita diversas preguntas. ¿De qué forma la movilidad espacial de la población afecta el sistema de los lugares que ésta conecta, es decir, cómo se modifican la organización territorial y las relaciones de intercambio, desiguales y desequilibradas, entre estos lugares? ¿Acaso estas transformaciones se dirigen hacia una no diferenciación del espacio o al contrario hacia su especialización? Este cuestionamiento “geográfico” acerca de los efectos de la intensificación de la movilidad va a la par con un cuestionamiento sobre las funciones y las condiciones sociales de esta movilidad, ¿cuáles son las condiciones y las oportunidades de reproducción económica y social de los individuos, los hogares o los grupos familiares, que corresponden a esa movilidad? La movilidad es cada vez más una condición de acceso a recursos económicos, sociales y culturales distribuidos de manera sumamente desigual

en el espacio, pero a la vez ella es un recurso que no es ofrecido a todos por igual. Partiendo de este fenómeno, ¿no se convierte entonces en un nuevo factor que acentúa las desigualdades sociales?

Como lo anuncia el título del capítulo, abordaremos nuestro cuestionamiento a partir de la noción de “sistema de lugares”, para la cual proponemos dos acepciones complementarias: a. Un sistema de lugares se conforma con la suma de las interacciones entre lugares, generada por la circulación de personas y bienes materiales y simbólicos, la cual constituye un “sistema” desde el punto de vista espacial (de los lugares); b. Estas interacciones traen a su vez la determinación recíproca de las dinámicas demográfica, socioeconómica, cultural y política de los diferentes lugares, hasta integrarlos en un espacio de movilidad que opera como un dispositivo en las estrategias (y los condicionantes) de los diferentes actores, formando así un “sistema” desde el punto de vista de los individuos y los grupos sociales.

Así, esta noción intenta dar cuenta de una serie de avances teóricos y metodológicos recientes en el campo de los estudios sobre la movilidad, los cuales han sido aplicados en el corpus de encuestas y análisis reunido aquí, y que presentaremos de manera resumida.

DE LA MIGRACIÓN DE INDIVIDUOS A LA MOVILIDAD DE UNIDADES COLECTIVAS¹

Para comprender las construcciones y recomposiciones territoriales que las movibilidades ocasionan, éstas deben ser analizadas en sus diferentes escalas espaciotemporales y sociales: se trata de considerarlas como un sistema articulador de diferentes tipos de desplazamiento, a nivel de los individuos y de las unidades colectivas de las que hacen parte.

En el plano espaciotemporal, un enfoque de este tipo se aparta considerablemente de la concepción tradicional en la demografía, donde las prácticas espaciales se analizan a través del prisma de una residencia única, el lugar que la persona “acostumbra habitar” (HENRY, 1981: 105). En América La-

¹ Esta sección resume algunas ideas desarrolladas en LÉVY y DUREAU (ed.), 2002: 355 a 382.

tina, durante los años 1960 y 1970, numerosos estudios fueron dedicados a la migración, considerada como “un hecho definitivo, un desplazamiento geográfico que implicaba una separación irreversible del migrante de su lugar de origen” (REBORATTI, 1986: 11). Después, numerosos autores señalaron el carácter bastante parcial de este enfoque y resaltaron la importancia de otras formas de movilidad, temporales y/o circulares, excluidas del análisis demográfico por no implicar un cambio de residencia, y que, sin embargo, “tienen a menudo un efecto tan importante sobre el equilibrio de una región, incluso de un país, que los desplazamientos definitivos” (COURGEAU, 1988: 29). Dentro de la reorientación del enfoque de la movilidad, los trabajos de los antropólogos y geógrafos han desempeñado un rol esencial: pusieron en evidencia la complejidad de las relaciones con el espacio y el carácter multilocal de las prácticas de las poblaciones en contextos geoculturales diversos.

En lo que concierne a las unidades sociales, las categorías estadísticas tradicionales (individuos, viviendas, hogares) se revelan inadecuadas para la descripción de las realidades trabajadas. Los investigadores propusieron entonces nuevas nociones: J. BALÁN y J. DANDLER (1987) introdujeron en América Latina la noción de “hogar confederado”, compuesto de segmentos cuya localización obedece a una lógica de reproducción multipolar de la familia, que se acerca a la de “sistema residencial familiar”, propuesta en las ciudades africanas para denominar al “conjunto articulado de los lugares de residencia de una misma familia” (LE BRIS et ál., 1987). El paso de una unidad de análisis individual a una unidad colectiva (más a menudo la familia, y a veces la comunidad campesina) cumple un papel esencial (DUPONT y DUREAU, 1994: 805) pues conduce a la consideración de la circulación de los individuos entre diferentes lugares (o polos)². Las nociones de “espacio de vida” o “espacio vivido” (FRÉMONT, 1976: 219), las de “área de acción migratoria” centrada sobre una “residencia-base” y de “reversibilidad de la migración” (DOMENACH y PICOUE, 1987) o la de “densidad de residencia”³ (DUREAU, 1987: 564), participan en este cambio de escala espaciotemporal y social del estudio de la movilidad.

2 Cfr. particularmente el coloquio sobre migraciones temporales llevado a cabo en Quito en 1986 (REBORATTI [ed.], 1986) y el realizado en Bogotá en 1992 (DUREAU [ed.], 1995) sobre las nuevas formas de movilidad en América Latina.

3 Cfr. la definición del Recuadro 2.1.

UN ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD QUE INTEGRA
DISTINTAS FUENTES DE INFORMACIÓN
EN CUATRO LUGARES DE OBSERVACIÓN

Siguiendo estos avances conceptuales, se desarrolló un cierto número de innovaciones metodológicas. Entre ellas, nos inspiramos en las encuestas realizadas en Bogotá (1993), en tres ciudades de Casanare (1996), en Cali (1998 y 1999) y en el municipio de Tumaco (1997 y 1998), cuyos resultados son la base de este capítulo⁴. Se procesó igualmente la información de los censos de 1973, 1985 y 1993, cuya metodología más clásica proporciona sin embargo resultados muy valiosos gracias a los niveles finos de desagregación geográfica y a la secuencia de puntos de referencia históricos que permite. En los análisis que siguen, nos apoyaremos sobre dos tipos de informaciones empíricas que nutren enfoques conceptuales diferentes:

– La estimación de las cifras y características de los migrantes de toda la vida y de los migrantes recientes⁵, a partir de preguntas sobre el lugar de nacimiento y el de residencia anterior que figuran en nuestras propias encuestas o en fuentes de información secundarias. Este enfoque corresponde a la noción ‘tradicional’ de migración entendida como el cambio duradero de un lugar de residencia que se supone único.

– Las trayectorias migratorias observadas por las encuestas específicas efectuadas entre 1993 y 1998 en distintas ciudades y lugares de Colombia, a partir de las cuales aprehenderemos la continuidad espacio-temporal de las formas de movilidad: cambios definitivos o duraderos de residencia, pero también migraciones pendulares, movilidades circulares o sistemas de multiresidencia.

Esas encuestas están lo suficientemente próximas en el tiempo como para permitir un análisis integrado de las prácticas de movilidad en sus diferentes espacios regionales. No resulta excesivo, como introducción, presentar al lector un resumido esquema de la diferenciación y articulación de estos cuatro lugares

4 Las principales características de estas encuestas son presentadas en el anexo 2.

5 Para las definiciones de los diferentes tipos de migración, cfr. el anexo 3, donde se discuten también algunas de sus limitaciones, sobre las cuales volveremos.

en el espacio nacional colombiano, para hacer más comprensible el beneficio que se puede obtener de esta diversidad de observaciones (cfr. también la Introducción general de este libro, y los mapas a continuación).

Evidentemente, las metrópolis de Bogotá y Cali se oponen, en primer lugar, por su tamaño y sus funciones económicas a las pequeñas ciudades petroleras del Casanare y al espacio urbano y rural del Pacífico, del cual hemos tomado aquí como ejemplo el municipio de Tumaco. El interés por observar en paralelo las prácticas y las funciones de la movilidad espacial en los Llanos y el Pacífico —además de tratarse de dos regiones que hoy son objeto de particular atención en el debate en torno al conflicto armado— se alimenta tanto de diferencias como de puntos comunes. En términos muy esquemáticos, el espacio de los Llanos, que permaneció muy subpoblado hasta mediados del siglo XX, experimenta desde entonces una rápida colonización, tanto por parte de los frentes pioneros agrícolas (culturas comerciales lícitas e ilícitas, cría de ganado), como a causa —más recientemente— de la explotación petrolera. De manera inversa, la región Pacífica, colonizada desde la Conquista por la población negra ligada a la esclavitud y la manumisión, está sometida desde hace más de treinta años a un persistente éxodo rural. Sin embargo, los dos espacios también comparten dos características: en primer lugar, el hecho de haber permanecido aislados del proceso de integración económica y política, al igual que de las dinámicas migratorias que experimentaron las otras regiones del país durante las décadas de los años 1950 y 1960; en segundo lugar, desde principios de los años 1990 las dos regiones han experimentado una veloz integración al espacio económico nacional e incluso internacional, con el corolario de la intensificación y diversificación de los flujos migratorios, cuyos motores, aunque diferentes, son exógenos en los dos casos: la actividad petrolera para el Casanare y la agricultura de renta en el Pacífico (plantaciones de palma, cría de camarones, cultivos de drogas). Con seguridad, también en los dos casos, estas nuevas dinámicas económicas están acompañadas por crecientes conflictos sociales y militares que, a su turno, generan importantes desplazamientos de población⁶.

6 Para ilustraciones más detalladas de estos dos contextos regionales cfr., para la región de los Llanos, a DUREAU y FLÓREZ (2000), y para el Pacífico, a HOFFMANN y PISSOAT (1999).

Estos dos ejemplos muestran claramente que en el estudio de la movilidad espacial en Colombia, no se puede pretender ignorar los desplazamientos forzados: volveremos varias veces sobre esto a lo largo del capítulo⁷². Sin embargo, hemos evitado conscientemente dedicarles a este tipo de desplazamientos un desarrollo específico e incluso hacer del “flujo de refugiados” una categoría aparte en nuestros análisis. En efecto, por una parte, no disponemos de fuentes fiables sobre los motivos de las migraciones para la mayoría de los lugares estudiados aquí; por otra parte, aunque esas fuentes existan, numerosos estudios han mostrado el muy débil alcance analítico de la oposición entre desplazamientos “económicos o familiares” y desplazamientos “forzados”, y la fragilidad de las inferencias causales que origina (OSORIO, 1995; PÉCAUT, 1999; BELLO y MOSQUERA, 1999); por último, porque los mismos desplazados por la violencia tienen más que nada el deseo de pasar desapercibidos y encontrar lo más rápido posible una inserción residencial y profesional en su lugar de emigración. Por esto, muy frecuentemente, los estudios sobre los “desplazados” sólo tocan a poblaciones albergadas en estructuras específicas o en barrios donde se concentran a su llegada a la ciudad, lo que sesga fuertemente el análisis y desemboca, en algunos casos, en una deficiente evaluación de las necesidades y en un ‘tratamiento social’ erróneo del conjunto de los refugiados.

En cuanto a la comparación de Bogotá y Cali, es rica en enseñanzas para comprender –desde el punto de vista de los espacios migratorios– las diferencias de estatus y de rol entre las metrópolis regionales y las que poseen proyecciones nacional e internacional: efecto de “masas” demográficas y económicas diferentes, “competición” en la atracción que ejercen en la intersección de sus respectivas zonas de influencia, etc. Las dos ciudades también se oponen por algunas características de las regiones, ambas densamente pobladas, que las rodean: Bogotá, en el seno de un *hinterland* globalmente expulsor (fuera de la Sabana propiamente dicha) para la población rural y de las ciudades pequeñas y medianas; Cali, por el contrario, rodeada de campos más dinámicos que retienen mejor a su población.

¿Qué puede esperarse de la puesta en perspectiva de contextos geográficos y económicos tan diferentes? Ciertamente no un análisis comparativo, de tipo

7 El tema de los refugiados también será abordado en el capítulo quinto.

similitudes-diferencias, entre estos dos lugares. La idea es más bien, a través de ejemplos, mostrar la variedad de espacios, prácticas y desafíos (individuales, familiares, sociales) que se articulan alrededor de la movilidad, para captar los determinantes de estos movimientos de personas y bienes y los diferentes impactos que tienen sobre los lugares, tomados de manera individual, pero más que todo considerados como un sistema. De hecho, la noción de sistema de lugares se encuentra como elemento estructurante del conjunto del texto, cuyas distintas partes documentan desde varios ángulos sus diferentes aspectos.

La sección I adopta de manera alternada el punto de vista de los lugares de salida y de llegada de la migración: se observará primero cómo la extensión y la configuración de la cuenca migratoria de Cali ha evolucionado al mismo tiempo que las prácticas, las trayectorias y las características socioeconómicas de los migrantes. Estas dinámicas migratorias tienen evidentemente impactos demográficos y sociales importantes y diferenciados sobre los lugares de inmigración y emigración (de los cuales un ejemplo claro es el área rural de Tumaco); ellas influyen también sobre la percepción que los migrantes tienen de estos espacios. En la sección II, proponemos un estudio “sistémico” de los espacios de circulación interesándonos en las diferentes modalidades por las cuales la movilidad hace que se relacionen los lugares. La diversidad de las prácticas migratorias y residenciales a diferentes escalas espaciales y temporales (migración de larga duración, circulación entre varias residencias o multirresidencia) será relacionada con los tipos de recursos económicos o sociales utilizados en cada lugar por los individuos y los grupos familiares. Si su generalización, a diferentes escalas, tiende a hacer de la movilidad una “opción” de reproducción económica y social, ella opera, sin embargo, en condiciones bastante desiguales, lo que determina una fuerte segmentación socioeconómica de las prácticas y funciones de la movilidad espacial. Por último, la sección III corresponde al estudio “sistémico” de un espacio de circulación: la gran región del Pacífico. Aprovechando las observaciones realizadas conjuntamente en los espacios de origen y destino de los flujos (las campañas en el municipio de Tumaco y en Cali), emprenderemos una interpretación global del funcionamiento polimorfo del espacio del Pacífico, en tanto espacio integrado de circulación de hombres y bienes. Sin embargo, este análisis propuesto como ilustración –a escala regional– de la noción de

sistema de lugares no está completo: la interpretación permanece circunscrita a este espacio regional, pero sabemos que la movilidad contemporánea de las poblaciones del Pacífico lo supera ampliamente.

I. LAS DINÁMICAS MIGRATORIAS Y SUS IMPACTOS EN LOS ESPACIOS DE SALIDA Y LLEGADA

Las tendencias generales del crecimiento urbano en Colombia y los roles respectivos de los saldos migratorios y del crecimiento natural han sido examinados en el capítulo primero sección III. Sólo cabe recordar que después de la “explosión urbana” que caracterizó el período intercensal 1951-1964 (la población urbana aumentó entonces a un ritmo de 5,6% por año), el conjunto de las grandes ciudades del país entró, desde el comienzo de los años 1970, en una fase de “transición urbana” caracterizada, por una parte, por una desaceleración sensible de su ritmo de crecimiento (baja regular de las tasas y tendencia a su estabilización progresiva entre el 2 y 3% anual), por otra parte, por que primó el crecimiento natural sobre el saldo migratorio: en el período 1973-1985, menos de un tercio del crecimiento de la población urbana puede imputársele a la migración (DUREAU y FLÓREZ, 1996: 148). Igualmente, se observa el fortalecimiento de la primacía de Bogotá en la jerarquía de la red urbana nacional, pero, paralelamente, los destinos migratorios se diversifican sobre el conjunto del territorio (nuevos intercambios interdepartamentales) y el crecimiento urbano conoce una redistribución geográfica en beneficio de la periferia de las grandes aglomeraciones. Por último, puesto que Bogotá y Cali van a estar en el centro de este capítulo, nos resulta necesario recordar los rasgos característicos y distintivos de sus cuencas migratorias, relativamente estables hasta fines de los años 1980. La concentración geográfica relativa del área de influencia de Bogotá —dada su condición de capital—, polarizada sobre el altiplano de Cundinamarca, Boyacá y los departamentos del Este⁸, se opone a la dispersión de la cuenca migratoria de Cali, importante respecto al tamaño de la aglomeración: esta última drena el conjunto de regiones su-

8 Sin considerar, por supuesto, la atracción que ejerce sobre la migración urbana procedente de las capitales departamentales.

roccidentales de la dorsal andina, en concurrencia con Medellín para el sur de la región cafetera (Viejo Caldas), y con Bogotá para el medio y alto valle del río Magdalena.

Este contraste nos conduce a una de las hipótesis que trataremos de probar: las prácticas sociales del espacio trastornan la distancia entre los lugares. Los parámetros de la distancia geográfica y de la relación de las masas demográficas e incluso económicas son incapaces por sí solos de dar cuenta de las áreas de reclutamiento de la migración. En la lógica de los actores, la “distancia” que gobierna la decisión migratoria es pluridimensional: integra tanto la evaluación de los obstáculos naturales y los riesgos inherentes al viaje, como la del diferencial (entre los lugares de partida y de destino) de oportunidades de acceso a educación y salud, lo mismo que al empleo, e incluso la evaluación del capital social y cultural que se deja y el que se espera encontrar en el lugar de destino. Para las poblaciones con capital económico y profesional bajo o mediano, las condiciones físicas del viaje, traducidas en costos, continúan siendo limitantes fuertes y frecuentemente restringen los radios de la acción migratoria misma (no obstante, con notables excepciones, como lo veremos). En cambio, para las clases medias y acomodadas, la abolición de la distancia espacial gracias al transporte aéreo, la estandarización de sus modelos culturales y la aspiración a los modelos internacionales de forma de vida, explican una movilidad que se extiende al conjunto de las grandes ciudades del país. Además, el incremento de la diferencia entre el peso económico de Bogotá y el de las otras metrópolis conduce a una muy fuerte polarización de esos flujos hacia la capital del país.

A pesar de esas tendencias generales, presentes durante muchos decenios, la década de los años 1990 aportó importantes transformaciones en la configuración del sistema migratorio colombiano. Para ilustrar estos cambios, observaremos en primer lugar los casos de Cali y de las ciudades petroleras del Casanare (subsección A). Más allá de la reorientación de los flujos, también es necesario analizar en detalle su dinámica y su composición sociodemográfica para comprender los sistemas de lugares que ponen en juego. A continuación, mostraremos cómo las evoluciones de los comportamientos migratorios (subsección B) modulan, bajo diferentes escalas espacio-temporales, las estructuras

demográficas y socioeconómicas de los lugares de emigración e inmigración (subsección C).

A. NUEVOS FLUJOS MIGRATORIOS DURANTE LA DÉCADA DE 1990

DOS EJEMPLOS:

CALI Y LAS CIUDADES PETROLERAS DEL CASANARE

Las encuestas realizadas en 1998 y 1999 en Cali, y en 1996 en las ciudades petroleras del Casanare, ofrecen dos visiones complementarias de las dinámicas migratorias que tuvieron lugar en la Colombia de los años 1990.

La característica más importante de la evolución de la cuenca migratoria de Cali desde 1993 reside en la duplicación del peso relativo de la región Pacífica en las migraciones recientes: mientras que este origen no totalizaba más que el 15% de los migrantes de toda la vida en 1993, su contribución es de 31% entre los migrantes llegados entre 1993 y 1996, y de 30% entre los que llegaron entre 1996 y 1998 (tabla 2.1). Este crecimiento se debe en parte a la conservación o al aumento regular del flujo proveniente de las áreas de atracción “tradicionales” de Cali (Tumaco, Costa Pacífica del Cauca, Buenaventura, sur del Chocó), pero también a muy fuertes “presiones” migratorias más coyunturales, procedentes de espacios con predominio rural, como el valle del Patía entre 1993 y 1996, la Costa Pacífica de Nariño (sin incluir a Tumaco y Barbacoas) y el norte del Chocó desde 1996. Evidentemente, tales fenómenos de “expulsión” se relacionan con los retos territoriales, económicos y militares de los cuales estas regiones son objeto desde la llegada de los actores del conflicto social y político (inversionistas agroindustriales, traficantes de drogas, guerrilla y fuerzas paramilitares). Además, este aumento relativo del peso de la región Pacífica en la migración reciente también puede provenir de una menor estabilidad de esos migrantes en Cali en comparación con los migrantes de otros orígenes. Volveremos sobre este tema a propósito de los retornos a los lugares de origen y, en general, de la intensa circulación migratoria que existe entre Cali y el Pacífico.

TABLA 2. I
LA INMIGRACIÓN EN CALI. EVOLUCIÓN DE ESTRUCTURAS POR SEXO Y EDAD
SEGÚN EL LUGAR DE NACIMIENTO (1993 Y 1999)

Fuentes	Censo de 1993					Encuesta CIDSE/BM 1999					
	Lugar de nacimiento	Índice de masc.	Clase de edad			% del total inmigrantes	Índice de masc.	Clase de edad			% del total inmigrantes
			0-19 años % línea	20-59 años % línea	60 años y + % línea			0-19 años % línea	20-59 años % línea	60 años y + % línea	
Costa Pacífica/Nariño	75	23	69	8	4	66	13	72	15	5	
Costa Pacífica/Cauca y Patía	60	23	68	8	2	60	18	57	25	2	
Buenaventura	79	31	65	4	3	90	16	73	11	4	
Chocó	63	21	69	10	2	78	20	65	15	2	
Total Pacífico	71	25	68	7	11	74	16	68	16	13	
Norte del Cauca	71	22	68	10	4	79	19	67	14	4	
Sur del Valle	81	21	67	12	8	72	11	70	19	9	
Norte del Valle	83	16	73	11	21	80	12	68	20	20	
Total hinterland Cali	81	18	71	11	33	77	13	68	19	33	
Interior Cauca	69	22	67	11	7	64	15	67	18	8	
Interior Nariño	87	18	68	14	5	72	6	70	24	5	
Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo	81	16	66	18	8	73	12	62	26	10	
Antiguo y Viejo Caldas	89	15	69	16	19	70	11	63	26	19	
Total distancia media	84	17	68	15	39	70	12	64	24	42	
Región oriental y Bogotá	93	28	60	12	9	75	25	54	21	9	
Costa Caribe	91	29	63	7	1	81	39	55	6	3	
Extranjero	105	49	37	14	1	NS	NS	NS	NS	NS	
Sin datos y datos no rep.	79	36	56	8	6	—	—	—	—	0	
Total larga distancia	89	32	58	10	17	77	28	54	18	12	
Total inmigrantes	82	21	67	12	47	73	15	65	20	42	
Nacidos en Cali	97	54	43	3	53	97	50	46	4	58	
Total	89	38	54	7	100	86	35	54	11	100	

Fuentes: Censo de 1993, DANE. Encuesta CIDSE/BM, Cali, 1999.

NS: No significativo.

De manera general, cuando se comparan los lugares de nacimiento de los inmigrantes de toda la vida observados con seis años de distancia entre el censo de 1993 y la encuesta de 1999, las variaciones muestran una modificación importante de los flujos entre las dos fechas: llegadas masivas de nativos de Buenaventura, Medellín y Popayán; transición —en la inmigración proveniente del norte del Valle y del Viejo Caldas— de una migración de origen rural a una migración urbana, mientras que solamente movimientos de emigración pueden explicar el descenso significativo de las cifras de los nativos de Bogotá y Palmira. Así, en el marco de una estabilidad a largo plazo en la configuración general de la cuenca migratoria de Cali —observada hasta 1993 (mapa 1.8)—, se produce, a una escala espacio-temporal más fina, una recomposición regional de los flujos producto de su ajuste permanente a la evolución de los contextos sociales y económicos locales.

El carácter regional de la migración hacia Yopal, Aguazul y Tauramena, manifiesto en 1973, es todavía efectivo en 1996: él traduce la dinámica de colonización del poblamiento del piedemonte casanareño, en el cual los boyacenses juegan un papel de primer plano (mapas 2.1 y 2.2). En 1996, en las tres ciudades, Casanare permanece como el principal departamento de nacimiento de los inmigrantes de toda la vida. Sigue el departamento de Boyacá (límitrofe de Casanare), o en el caso de Tauramena, la Región Oriental. La intensificación de los flujos migratorios, desencadenada por la explotación petrolera, no ha desdibujado la dinámica demográfica regional ocurrida en los años anteriores sino que se ha superpuesto a ella. En efecto, la tabla 2.2 también pone en evidencia la importancia creciente de las migraciones de larga distancia hacia las tres ciudades. En el curso de los últimos veinte años, los departamentos de Casanare y Boyacá siguen suministrando la mayoría de migrantes. No obstante, regiones alejadas como la del Caribe, la Oriental y Bogotá, ocupan un lugar crecientemente significativo. La amplitud de esta transformación aparece como un fenómeno más importante en Tauramena que en las otras dos ciudades, lo que se debe al carácter mucho más reciente de las migraciones hacia Tauramena (a partir de 1992). Así pues, en las tres ciudades casanareñas, al poblamiento tradicional propiamente regional, la actividad petrolera de Cusiana y Cupiagua le ha sumado, entre 1973 y 1996, una inmigración de larga distancia. A pesar de que ningún pozo petrolero está

Lugar de nacimiento	1973		1993		1996	
	Inmigrantes de toda la vida	Inmigrantes < 1 año	Inmigrantes de toda la vida	Inmigrantes < 5 años	Inmigrantes de toda la vida	Inmigrantes < 1 año
Residentes en Tauramena						
Casanare (sin Tauramena)	26,0	32,0	22,6	18,7	23,4	20,7
Boyacá	57,2	39,4	37,1	30,8	20,0	15,5
Bogotá	3,3	1,8	4,9	5,6	4,4	3,8
Región Central	6,5	16,1	7,2	9,2	7,9	10,4
Región Oriental	6,1	7,1	19,8	24,5	26,4	29,0
Región Atlántica	0,0	0,0	1,8	2,4	5,7	9,2
Región Pacífica	0,9	3,6	3,4	4,6	3,2	5,3
Antiguos Territorios Nacionales	0,0	0,0	3,0	4,1	8,7	5,3
Otro país	ND	ND	0,2	0,1	0,4	0,9
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuentes: Censos de población de 1973 y 1993, DANE. Encuesta de movilidad espacial en el Casanare, 1996, CEDE-ORSTOM.

Nota: Incluidas viviendas particulares y hoteles. Los inmigrantes de 1996 incluyen a los migrantes intramunicipales y de retorno.

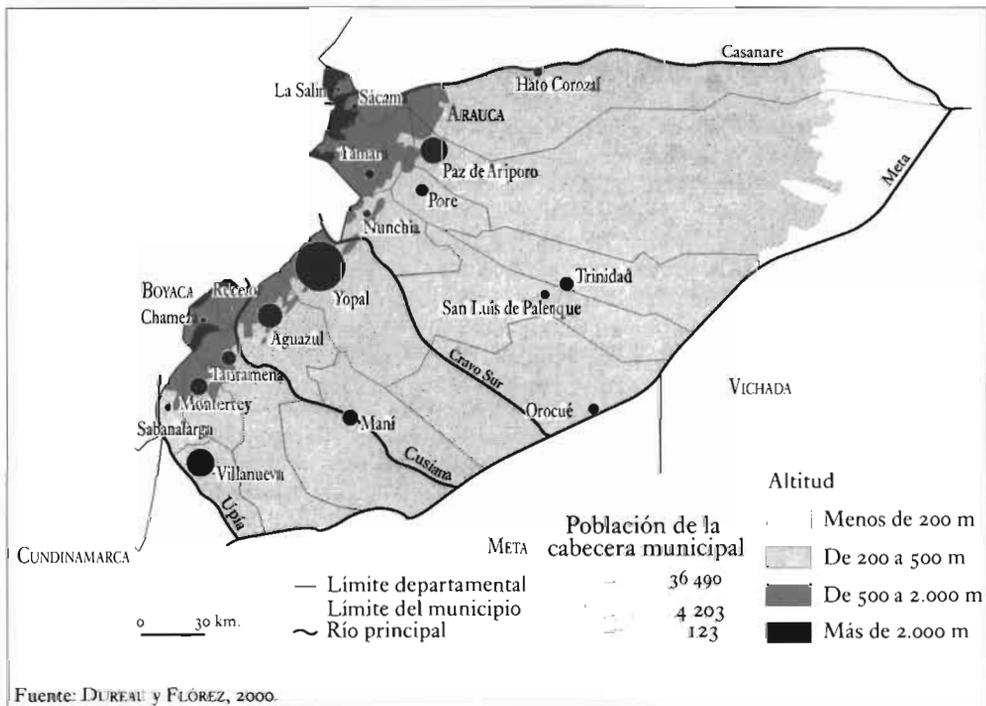
CORRIENTES MIGRATORIAS SELECTIVAS POR SEXO Y EDAD

De modo semejante a una tendencia general en la mayoría de los países de América Latina (CHACKIEL y VILLA, 1993), la migración con destino urbano en Colombia es, desde hace ya varios decenios, frecuentemente individual (y no familiar); está constituida por jóvenes adultos, en su mayoría mujeres. Estas características representan una ruptura respecto a la primera mitad del siglo XX, cuando el desequilibrio entre los sexos era claramente menos acentuado (FLÓREZ, 2000: 70).

Según el censo de 1993, la relación de masculinidad entre la población migrante (los no nativos de la ciudad) era de 80 hombres por cada 100 mujeres en Bogotá (tabla 2.3). En Cali, la cifra era de 82 hombres por 100 mujeres para los migrantes, mientras que para la población nativa asciende a 97 hombres por 100 mujeres (tabla 2.1). En los flujos migratorios hacia las dos metrópolis, existen variaciones de la estructura por sexo según el lugar

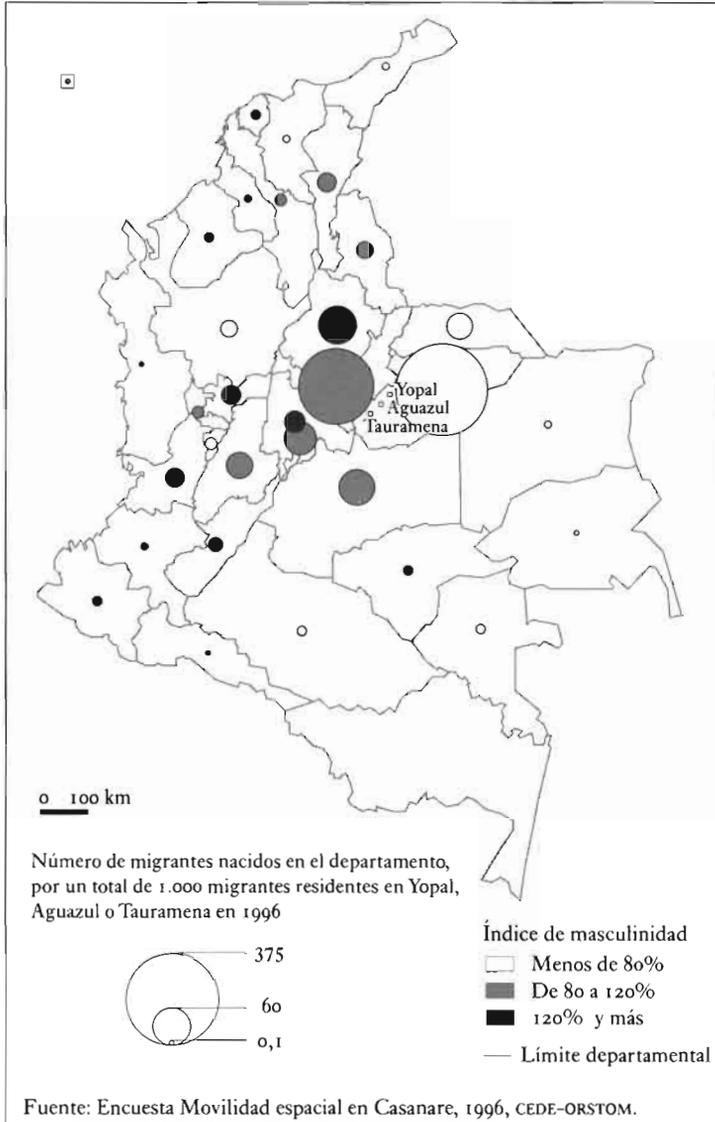
de origen. Entre los migrantes de toda la vida censados en Cali, la migración más femenina se asociaba a espacios predominantemente rurales (costa del Cauca y Valle del Patía, interior del Cauca, costa de Nariño y Chocó) o a ciudades cercanas (Buenaventura, Norte del Cauca), mientras que las migraciones urbanas de distancia más larga tenían estructuras más equilibradas. En Bogotá, en la misma fecha, la migración más femenina correspondía a los flujos provenientes de todos los departamentos del Orinoco y del Amazonas, y de algunos otros departamentos en los cuales el origen rural está también fuertemente representado.

MAPA 2.1
ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO DE CASANARE EN 1993



Concepción y realización: F. DURLAU y O. PISSOAT

MAPA 2.2
LUGAR DE NACIMIENTO DE LOS MIGRANTES DE TODA LA VIDA.
YOPAL, AGUAZUL, TAURAMENA (1996)



Concepción y realización: F. DUREAU y O. PISSOAT

Migrantes de toda la vida: personas cuyo lugar de nacimiento difiere del lugar de residencia en el momento en que se realizó la encuesta.

La comparación entre los migrantes de cinco años y los de toda la vida muestra una inversión reciente del fenómeno, con la masculinización de la migración a Bogotá: ésta se cumple en la mayoría de los flujos, pero con una amplitud particular para migrantes originarios de la Orinoquia y la Amazonia. Sin embargo, una excepción la constituye el caso de la migración desde Nariño, aún más femenina entre 1988 y 1993. Por el contrario, en Cali, según la encuesta de 1999, el carácter femenino de la migración se acentúa fuertemente (73 hombres por 100 mujeres) y se generaliza en casi todos los orígenes.

TABLA 2.3
RELACIÓN DE MASCULINIDAD SEGÚN EL ORIGEN GEOGRÁFICO
DE LA MIGRACIÓN A BOGOTÁ (1993)

Departamento o región	Inmigrantes de toda la vida en 1993	Inmigrantes recientes (1988-1993)
Total Región Oriental	81,1	83,2
Cundinamarca	80,3	84,1
Boyacá	83,3	80,7
Santander	77,2	82,9
Norte de Santander	84,1	92,2
Total Región Centro	80,0	85,0
Tolima	76,9	82,4
Caldas	85,9	87,1
Antioquia	88,5	93,1
Huila	70,0	76,9
Risaralda	89,5	91,8
Total Región Pacífico	85,6	86,6
Valle del Cauca	86,6	93,4
Nariño	92,6	79,0
Total Región Atlántico	77,8	78,4
Atlántico	91,1	88,9
Total Orinoquia/Amazonia	69,4	92,8
Meta	74,6	95,9
Total inmigrantes internos del país	80,4	84,4

Fuentes: Censo de población DANE de 1993. Cálculos de D. DELAUNAY (IRD) sobre archivos individuales.

Notas: El detalle por departamento está indicado para todo departamento que cuente con más del 1% de migrantes de toda la vida en 1993. Las regiones son las mismas definidas por el DANE: Atlántico (Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Cesar, Magdalena, La Guajira); Centro (Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Caquetá); Oriente (Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Meta); Pacífico (Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño); Orinoquia/Amazonia (Arauca, Casanare, Vichada, Guainía, Guaviare, Vaupés, Amazonas, Putumayo, San Andrés y Providencia); y Bogotá. La relación de masculinidad para el conjunto de la población de Bogotá era de 87,8 en 1973, y de 89,7 en 1993.

Dentro del modelo general de migración urbana con dominante femenina, los flujos de población dirigidos hacia las ciudades petroleras del Casanare conforman una excepción: como es común en las migraciones asociadas con la explotación de recursos naturales (COSIO-ZABALA, 1980), los hombres son más numerosos que las mujeres (tabla 2.4). Así, la intensificación de los flujos migratorios ligada a la explotación petrolera está acompañada –en las tres ciudades– por una masculinización de la población inmigrante adulta entre 1973 y 1993, particularmente marcada en Tauramena. La tendencia se invierte a partir de 1993, con una feminización de los migrantes recientes, aunque con una menor amplitud que la masculinización anterior. Comparar la composición de las diferentes cohortes de migrantes presentes en 1996 en esas ciudades permite precisar los recientes cambios en los procesos migratorios. Los migrantes llegados durante el año 1996 presentan una proporción mayor de jóvenes de menos de 15 años (30% a 35%) que los migrantes más antiguos, al igual que una gran proporción de mujeres jóvenes entre 15 y 29 años (20%). Después de una fase de migración conformada predominantemente por hombres solos, la migración reciente se compone sobre todo de familias completas y de mujeres, solas o acompañadas por sus hijos. Luego de una etapa en la cual su modo de vida reposaba sobre la disociación del espacio de trabajo y del espacio de reproducción social y familiar, tema sobre el cual volveremos (subsecc. II.C), algunos malleros⁹, una vez asegurada su situación residencial y económica, traen a su esposa e hijos. Por lo demás, la llegada de la familia parece más frecuente entre los malleros originarios del Casanare –que deben enfrentar la situación de crisis experimentada por la agricultura y la escalada de violencia en la región– que entre los de origen más lejano (HOYOS y SALAZAR, 1997b). La llegada reciente de jóvenes mujeres adultas también está ligada al fuerte aumento de la prostitución, especialmente en Tauramena. Los malleros han sido seguidos por las prostitutas, quienes, “como los malleros mismos, siguen al petróleo” (HOYOS y SALAZAR, 1997b).

9 Este término designa a los trabajadores que quieren ingresar en una empresa petrolera, es decir, cruzar la *malla* que rodea las instalaciones de esas empresas.

TABLA 2.4
GRUPO DE EDAD Y RELACIÓN DE MASCULINIDAD DE LOS INMIGRANTES RECIENTES
DE 15 AÑOS O MÁS. YOPAL, AGUAZUL, TAURAMENA (1973, 1993, 1996)

	1973 Inmigrantes con duración de resi- dencia < 1 año	1993 Inmigrantes con duración de resi- dencia < 5 años	1996 Inmigrantes con duración de resi- dencia < 1 año
Yopal			
15-29 años	71,1	53,6	56,2
30-44 años	16,0	32,9	30,2
45 años y más	12,9	13,5	13,6
TOTAL	100,0	100,0	100,0
Relación de masculinidad	85,2	109,6	102,3
Aguazul			
15-29 años	68,1	50,0	60,1
30-44 años	21,8	35,0	26,4
45 años y más	10,1	15,0	13,4
TOTAL	100,0	100,0	100,0
Relación de masculinidad	108,8	127,8	115,1
Tauramena			
	sin Puente Cusiana	sin Puente Cusiana	con Puente Cusiana
15-29 años	53,8	53,0	55,9
30-44 años	33,4	36,2	32,0
45 años y más	12,8	10,8	12,0
TOTAL	100,0	100,0	100,0
Relación de masculinidad	77,3	183,3	113,0

Fuente: Censos de población de 1973 y 1993, DANE. Encuesta de movilidad espacial en el Casanare, 1996, CEDE-ORSTOM.

Nota: incluidas viviendas particulares y hoteles. Los inmigrantes de 1996 incluyen a los migrantes intramunicipales y de retorno.

B. DIVERSIDAD DE LOS COMPORTAMIENTOS MIGRATORIOS

Más allá del volumen y la composición sociodemográfica de la migración de toda la vida o de los flujos recientes hasta el momento analizados, se hace necesario considerar las trayectorias migratorias en su globalidad. Las encuestas de biografías migratorias realizadas en Bogotá (1993), en las ciudades de Casanare (1996) y en Cali (1998) permiten realizar este análisis de manera

comparativa¹⁰. Basándose en tres indicadores simples¹¹, se puede poner en evidencia ciertas diferencias, así como algunas regularidades, que podríamos llamar las “invariantes” de los trayectos migratorios hacia estas ciudades.

En Cali, los inmigrantes observados en la encuesta de 1998 han conocido en promedio 1,75 lugares diferentes de residencia antes de su primera llegada a la ciudad¹². Más de la mitad de las migraciones (57%) se hace directamente desde el lugar de nacimiento y los migrantes indirectos conocen, en conjunto, unas dos etapas migratorias antes de su entrada a la ciudad (2,75 lugares de residencia en total). En relación con Cali, la migración hacia Bogotá es todavía más directa: en promedio, los migrantes realizan 1,6 etapas antes de su primera llegada al área metropolitana, y los flujos hacia la capital colombiana cuentan proporcionalmente con más migrantes directos (67% en el Distrito, y 60% en la periferia). La complejidad de las trayectorias de los migrantes hacia las ciudades petroleras contrasta con la relativa simplicidad de las de los migrantes hacia las dos metrópolis: incluso si se excluyen los migrantes residentes en hoteles, todavía más móviles, las proporciones de migrantes directos son bastante inferiores (entre 16% y 36%), y las cantidades promedio de etapas son muy superiores (entre 2.7 y 3.3 según las ciudades).

Una segunda constatación importante tiene que ver con la variabilidad del número de etapas y del porcentaje de migración directa según el sexo y las características socioeconómicas de los migrantes. Globalmente, la migración

10 Son numerosas las diferencias que oponen a estos tres contextos geográficos y económicos. Por esto, permanece una especificidad irreductible de conceptos y métodos de observación de la movilidad empleados en las tres encuestas. Si, por ejemplo, la definición del cambio de residencia es idéntica desde el punto de vista del criterio temporal (residencia estable, al menos durante un año en el mismo lugar), en cambio varía según la encuesta desde el punto de vista del criterio espacial (cambio de vivienda, desplazamiento desde una residencia rural a una residencia urbana, o cambio de corregimiento al interior del mismo municipio, cambio de municipio). En consecuencia, la interpretación de las cifras que presentaremos no debe tratar más que sobre los órdenes de tamaño.

11 El número de etapas antes de la primera entrada al lugar de inmigración, el porcentaje de inmigrantes directos, la duración promedio de las trayectorias de los inmigrantes indirectos.

12 Es decir, su lugar de nacimiento y, frecuentemente, una etapa residencial anterior a su llegada a Cali.

femenina es más directa que la migración masculina (por ejemplo 59% contra un 55% para los hombres en Cali, 36% contra 27% en Yopal, etc.) y, en el caso de las inmigrantes indirectas, comprende un menor número de etapas residenciales antes de la llegada a la ciudad (2.5 para las mujeres, contra 3 para los hombres en Cali, etc.). Esta menor complejidad de las trayectorias femeninas debe relacionarse con la desigualdad de oportunidades de inserción escolar y profesional de las mujeres y verse como el producto de las estrechas relaciones entre migración y actividad económica. Una parte de las migraciones femeninas “dependientes” del cónyuge no se realizan sino cuando en efecto el hombre parte primero y se asienta en un lugar de residencia estable donde puede asegurar el sostenimiento económico de la familia. Este esquema explicativo ha sido documentado por el trabajo de campo en las ciudades de Casanare. Sin embargo, que la migración de las mujeres sea más directa no es siempre sinónimo de migración dependiente; a veces ésta se explica, por el contrario, por un proyecto migratorio específicamente femenino, ligado directamente a los recursos típicos del medio urbano: empleos “femeninos”, educación y salud (para ellas mismas, o para sus hijos), y también por la atracción del “modelo” urbano de condición femenina (independencia económica y social). Es el caso de la región del Pacífico (secc. III).

Los indicadores sintéticos considerados hasta aquí para el conjunto de los migrantes esconden importantes variaciones de las trayectorias y las características de los individuos que las realizan: examinando los resultados en los tres tipos de ciudades estudiadas, se manifiesta la diversidad de recorridos seguidos por los inmigrantes. No se detallarán aquí los resultados de las topologías obtenidas en las tres encuestas¹³; sólo ilustraremos algunas conclusiones

13 En los tres casos, la herramienta empleada para el análisis tipológico de las trayectorias individuales es el “Análisis Armónico Cualitativo” (anexo 3), método de estadística descriptiva de los procesos aleatorios propuesto por J. C. DEVILLE y G. SAPORTA en 1982 y adaptado para la clasificación de los datos biográficos por O. BARBARY en 1995 (DEVILLE, 1982; BARBARY y PINZÓN, 1999). Para responder a las necesidades del estudio de las migraciones entre Cali y el Pacífico, se considera una desagregación detallada de los lugares de origen, lo cual implica un número importante de clasificaciones: 15 en Bogotá (551 inmigrantes observados), 20 en las tres ciudades de Casanare (1.827 inmigrantes) y 34 en Cali para un total de 1.175 inmigrantes.

importantes a partir del ejemplo de Cali. La tabla 2.5 describe los grandes tipos de itinerarios hacia esta ciudad, agrupados según las principales zonas de origen con la ayuda de indicadores que resumen sus características promedio.

Cuando se detalla el origen geográfico de los flujos, el porcentaje de migración directa varía, pero no existe una relación sistemática con la distancia entre los lugares de nacimiento y de inmigración (del tipo: migración próxima = alto porcentaje de migración directa). Por lo general, las proporciones más elevadas de migración directa hacia Cali se observan para los flujos de origen urbano, aun cuando son de larga distancia, mientras las menores corresponden a inmigrantes rurales, incluyendo los de orígenes cercanos. Sin embargo, esta oposición urbano/rural no es sistemática y lo que sugieren por las cifras es más bien una fuerte diferenciación del tipo de trayectoria según las características demográficas y socioeconómicas de los migrantes. Así, la migración directa a Cali es particularmente frecuente entre las mujeres de origen urbano cercano, con bajo nivel de escolaridad (primaria o secundaria incompleta); al contrario, se encuentra muy escasamente entre los hombres de origen rural que, en la fecha de la encuesta, tienen un capital escolar más elevado (secundaria o estudios superiores). En Bogotá, la migración proveniente de Antioquia es claramente más directa (77%) que la originaria del Valle (32%). En Yopal, el ejemplo de los migrantes originarios de Bogotá también muestra que la distancia geográfica no es el único factor: el 41% de ellos viene directamente, mientras que ese sólo es el caso para el 4% de los migrantes originarios de la región del centro.

TABLA 2.5
LOS PRINCIPALES TIPOS DE ITINERARIOS DE QUIENES MIGRAN A CALI
OBSERVADOS EN 1998 (CIDSE/IRD)

Indicadores ⁽²⁾	Proporción de inmigrantes directos ⁽³⁾			
	Sexo		Total (%)	Total (obs.)
	Hombres (%)	Mujeres (%)		
Pacífico rural lejano	45,2	63,3	55,3	141
Pacífico lejano urbano	50,0	58,8	55,4	195
Buenaventura	51,3	60,3	57,0	107
<i>Hinterland</i> rural de Cali	52,4	61,6	58,3	115
<i>Hinterland</i> urbano de Cali	65,0	70,6	68,2	239
Distancia media rural	60,0	56,4	58,1	74

Distancia media urbana	69,0	69,1	69,1	181			
Larga distancia	40,9	57,1	50,0	50			
Migrantes mayores de todos los orígenes	0,0	2,2	1,4	73			
Total	53,1	59,8	57,1	1.175			
Indicadores	Trayectoria de inmigrantes indirectos ⁽⁴⁾						
	Número promedio de etapas			Duración promedio de la trayectoria en años			Total (obs.)
Lugar de origen	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	
Pacífico rural lejano	5,6	3,9	4,9	18	11	15	63
Pacífico lejano urbano	3,7	3,0	3,2	9	8	8,5	87
Buenaventura	4,8	3,0	3,6	24	11	16	46
<i>Hinterland</i> rural de Cali	2,8	4,2	3,5	13	16	14	48
<i>Hinterland</i> urbano de Cali	3,1	2,7	2,9	9	16	13	76
Distancia media rural	3,4	3,2	3,3	9	24	19	31
Distancia media urbana	3,5	2,6	2,9	13	12	12	56
Larga distancia	5,7	3,7	4,3	23	16	18	25
Migrantes mayores de todos los orígenes	5,3	5,8	5,5	18	22	20	72
Total	4,1	3,4	3,7	14,1	15,5	14,9	504

Fuente: Encuesta CIDSE-IRD, 1998, Cali.

(1) Reagrupamiento de la tipología de las trayectorias en 34 clases.

(2) Las estadísticas son calculadas ponderando las observaciones mediante los factores de extrapolación del muestreo. Las últimas columnas dan, a título indicativo, el número de observaciones.

(3) En porcentaje del conjunto de inmigrantes (número de inmigrantes de los dos sexos en la última columna).

(4) Desde el lugar de nacimiento hasta la última entrada a Cali (número de inmigrantes indirectos de los dos sexos en la última columna).

La misma lógica interpretativa se impone en el examen del número de etapas y de las duraciones promedio de las trayectorias desde el lugar de nacimiento hasta el último arribo a Cali: fuerte variabilidad en los dos indicadores según las regiones de origen, pero la oposición entre las trayectorias simples (pocas etapas y duraciones cortas) y las complejas (mayor número de etapas y más larga duración) se explica generalmente más por las características de los migrantes que por la localización de sus lugares de origen.

Esta constatación de la diversidad de las prácticas migratorias según el origen geográfico de los flujos, su composición demográfica y socioeconómica, sus motivos y los obstáculos en su desarrollo, cobra aún más interés

cuando se relacionan estos procesos con las consecuencias que tienen sobre las estructuras espaciales y sociales. En este ejercicio, los contrastes entre los tipos de trayectorias propias de los diferentes flujos pondrán de relieve la estrecha vinculación que existe entre los comportamientos migratorios y las características sociodemográficas de los migrantes, así como los múltiples y profundos cambios estructurales que estos flujos provocan en los lugares de salida y de destino.

C. IMPACTOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS DE LAS MIGRACIONES

Evidentemente, entre Bogotá y Cali —donde muchos decenios de migración han contribuido a la formación de metrópolis—, y las pequeñas ciudades petroleras del Casanare —sometidas a una abrupta aceleración de la migración—, el impacto de la migración está bastante diferenciado. Estas dos categorías de ciudades, situadas en los extremos de la jerarquía urbana y donde las temporalidades de la migración son distintas, nos permitirán en primer lugar poner en evidencia diferentes tipos de impactos sobre los lugares de inmigración, tanto en períodos de larga duración como en el presente. Pero el papel de la migración en la producción de la ciudad en Colombia no debe ocultar sus consecuencias, todas de la misma importancia, sobre los lugares de partida. Tendremos en cuenta estas consecuencias, a partir del ejemplo de la integración al movimiento general de urbanización de un espacio que permaneció durante mucho tiempo al margen del sistema de poblamiento colombiano: las regiones rurales del Pacífico.

ALGUNOS EFECTOS DEMOGRÁFICOS TODAVÍA IMPORTANTES EN LAS METRÓPOLIS

Como hemos visto, las corrientes migratorias hacia las grandes ciudades son fuertemente selectivas según el sexo y la edad. Incluso cuando el impacto demográfico directo del flujo migratorio ha disminuido fuertemente desde 1980, la acumulación de generaciones de jóvenes adultos inmigrados, en su mayoría mujeres y, en Cali, la acentuación de estas características en los flujos recientes,

modulan fuertemente la estructura por edad del conjunto de la población. El aporte, por migración, de una población concentrada en las edades de más alta fecundidad y de mayoría femenina, contribuye en primer lugar a incrementar la proporción de jóvenes adultos en el conjunto de la población; en segundo lugar, modera la caída de las tasas de natalidad debida a la transición demográfica. En total, en las dos ciudades, el aporte migratorio y el excedente de nacimientos que produce, reducen de manera significativa el envejecimiento de la población. En Cali, en 1999, la población todavía comprende casi el 35% de menores de 20 años, 54% de 20 a 59 años y sólo un 11% de más de 60 años. En Bogotá, la migración, compuesta mayoritariamente por jóvenes adultos, es más antigua y su efecto sobre la estructura demográfica de la capital se ha conjugado con el de una transición demográfica particularmente precoz y rápida¹⁴. Migración y transición generan, allá también, una proporción de adultos muy elevada: el grupo de los 20 a los 59 años pasó de 45% en 1973 a 55% en 1993, mientras en el mismo período, el de los menores de 20 años cayó del 51% al 39%.

Estas estructuras por edad mantienen las tasas de crecimiento natural en altos niveles. En Bogotá, como en Cali y en las otras grandes ciudades colombianas, el crecimiento natural se convierte en el motor principal del aumento de población: mientras en 1979 la migración explicaba el 49% del crecimiento de Bogotá, ella no es responsable más que del 22% en 1990 (YEPES y BOSONI, 1993). Además, el número de hogares aumenta a un ritmo de 1.5 a 2 veces superior al de la población. La migración de jóvenes adultos, la transición demográfica y las transformaciones en los modelos residenciales familiares explican esta dinámica particular que constituye actualmente —mucho más que el ritmo de crecimiento de la población— el verdadero desafío de la política de vivienda. Resulta visible: incluso si el impacto demográfico directo de la migración disminuye sensiblemente, sus efectos indirectos en las grandes

14 En efecto, Bogotá presenta los niveles más débiles de fecundidad y mortalidad del país, incluso si las tasas medias enmascaran las mayores diferencias según las clases sociales: en 1985, el promedio de niños por mujer era de 1,9 entre los “no pobres”; 3,6 entre las mujeres clasificadas como “pobres”; 4,3 para las que se encontraban “en situación de miseria” (DUREAU y FLÓREZ, 1996: 155).

metrópolis del país conservan su importancia a través de la composición de la población acumulada en varios decenios de crecimiento rápido.

LA CONSTRUCCIÓN DE PEQUEÑAS CIUDADES PETROLERAS EN UN CONTEXTO DE INMIGRACIÓN MASIVA

A comienzos de los años 1990, las ciudades petroleras del Casanare representan el arquetipo de las pequeñas ciudades sometidas a una afluencia masiva de migrantes que modifica profundamente la composición por sexo y edad de su población. La juventud (relativa) de la población en 1973, surgida de un régimen demográfico de elevada fecundidad, cede su lugar en 1996 a una estructura de población mucho más masculina y extremadamente concentrada en jóvenes adultos. Muy frecuentemente dejada a un lado por los planificadores —atentos sobre todo al volumen de la población—, esta evolución tiene consecuencias importantes en términos de la naturaleza de la demanda de vivienda, de infraestructura o de servicios urbanos, y constituye un gran desafío a corto y mediano plazo para la administración de esas ciudades.

Esta difícil situación se complica con la percepción del fenómeno migratorio. La llegada masiva de inmigrantes cuyos orígenes son cada vez más remotos no puede dejar indiferente a la población casanareña —instalada allí desde hace más tiempo—, que deviene progresivamente minoritaria¹⁵. De hecho, esas condiciones contribuyen a transformar su percepción de la región —de su pasado, frecuentemente idealizado, y de su futuro, frecuentemente dramatizado—, y a fomentar la afirmación de la identidad llanera. Esta situación, en resumidas cuentas clásica, redobla sus efectos en esas ciudades petroleras de los Llanos Orientales bajo un contexto particular. Relativamente tranquilo en los años 1980, el Casanare afronta a partir de los años 1990 un aumento importante de la violencia¹⁶, hasta convertirse en uno de los departamentos más violentos del país. Fenómenos como el desarrollo de la actividad petrolera, la brusca intensificación de la migración y el incremento de la violencia con la

15 En 1996, sólo el 30% de la población de las ciudades de Yopal y Aguazul era nativa; en Tauramena, esta población era de 14%.

16 Cfr. capítulo quinto: “Violencias y ciudades”.

llegada de nuevos actores armados a la región se encuentran estrechamente ligados, tanto en los hechos como en las representaciones: “la llegada del petróleo” designa, en forma genérica, al conjunto de esos elementos considerados como “exteriores” a la región. Mientras tanto, la mayoría de los males que afrontan esas ciudades actualmente (pobreza, delincuencia, violencia, etc.) son atribuidos a los recién llegados. Éstos, por su parte, perciben esta estigmatización y revelan –ante los autóctonos– un repliegue regionalista. Acentuando la percepción negativa del fenómeno y la sensación de “colonización” del Casanare por parte de “extraños”, los medios de comunicación atizan las tensiones. Tanto en estas ciudades como en otras partes, el desconocimiento del fenómeno migratorio le cede una gran ventaja a los prejuicios.

Las temporalidades específicas, en las cuales se definen las lógicas de las diferentes clases de actores que intervienen en estas ciudades, hacen igualmente difícil la elaboración de proyectos colectivos de ciudades¹⁷. M. C. HOYOS y O. I. SALAZAR afirman con toda razón que existe “un sentimiento generalizado de cuarto de hora, momento que hay que aprovechar al máximo en razón del carácter pasajero de la situación” (1997b). Para numerosos migrantes recientes, esta coyuntura pasajera se inscribe en una estrategia de movilidad residencial “de largo plazo”. En cambio, para los nativos de la región y para quienes habían decidido residir allí antes del descubrimiento de los yacimientos petroleros, se trata de una situación súbita, que entra en contradicción con su futuro en la región misma. Adaptarse en pocos años a un medio completamente trastornado supone, para los “antiguos” casanareños, transformaciones frecuentemente mucho mayores que las experimentadas por los inmigrantes. Por ejemplo, ellos deben enfrentar la profundización sensible de la desigualdad social: aunque una parte de los “antiguos” casanareños logra alcanzar beneficios del ciclo petrolero, otros sufren un fuerte deterioro de sus condiciones de vida, ligado al aumento generalizado de los precios.

Además del ciclo demográfico que impone, la coyuntura petrolera (es decir, el repentino aumento de la población, seguido de una disminución pro-

17 Un estudio específico sobre esta cuestión fue realizado por J. M. FOURNIER y V. GOUËSET (2000), a partir del análisis de entrevistas recogidas por M. C. HOYOS y O. I. SALAZAR (1997b).

bable pero difícil de evaluar) provoca el incremento de sistemas residenciales plurilocales (secc. II.A), que se traducen en una temporalidad particular en la actividad de las poblaciones. Entonces, las instituciones que tienen a cargo la administración de estas ciudades deben tener en cuenta la práctica de diferentes espacios urbanos por las poblaciones. Por una parte, las migraciones circulares y los sistemas residenciales bipolares alivian relativamente la presión ejercida sobre servicios urbanos como la educación y la salud: el consumo de servicios en la ciudad de inmigración es menor que en el caso de una migración definitiva cuando el trabajador migrante llega acompañado por su cónyuge y sus hijos. Pero este tipo de sistema de residencia también conduce a situaciones sociales difíciles de administrar. Así, Tauramena funciona al ritmo del pago de las empresas petroleras:

Los días de pago [...] Tauramena es completamente caótica. Todo el mundo bebe [...]. Eso dura tres días, dos días y comienza de nuevo; es un ciclo y ellos no lo abandonan jamás; entre más dinero ganan [...] más lo derrochan (Testimonio de un agricultor, citado por M. C. HOYOS y O. I. SALAZAR).

Más aun, como observa A. MAURO (1986) a propósito de algunas ciudades ecuatorianas, los ciudadanos que se consideran en estancia temporal en la ciudad, limitarán al máximo sus gastos y no invertirán nada —o muy poco— de sus ahorros en esa ciudad; a cambio, los invertirán en sus localidades de origen. Así, como lo expresa la recurrente mención a la ciudad fantasma de Arauca, la incertidumbre sobre el porvenir es fuerte. Ella marca los comportamientos y las decisiones de la población tanto como los de los actores económicos e institucionales. En suma, estas lógicas específicas de los migrantes y los nativos, del petróleo y del desarrollo urbano y regional, bajo temporalidades profundamente contradictorias, amenazan con hipotecar el futuro de estas ciudades.

¿QUÉ PASA EN LOS LUGARES DE EMIGRACIÓN?

En todo el país, el carácter femenino de la mayoría de los flujos migratorios con destino urbano genera desequilibrios importantes y contribuye a una sobrerrepresentación de los hombres en el medio rural. El fenómeno se agudiza

en las zonas de colonización agrícola reciente, como son la Amazonia, los Llanos, la Costa Pacífica, y el interior de la región Caribe, donde está amplificado por la llegada masiva de hombres (MESCLIER et ál., 1999: 76). El ejemplo de Tumaco permite examinar más adelante procesos bastante comunes a los de otras regiones colombianas marcadas por el envejecimiento de la población campesina y su masculinización¹⁸.

El municipio de Tumaco, en el extremo suroeste del país, abriga unos 200 caseríos y pueblos, más la ciudad misma que contiene aproximadamente la mitad de la población total (115.600 hab., según una estimación de 1996). Más de la mitad de los caseríos que cuentan con un seguimiento regular por los servicios de salud presentan tasas negativas de crecimiento para el período 1994-1996, de las cuales veinte son inferiores al -10%. Se trata entonces de una emigración muy fuerte, aún si se encuentra repartida de manera desigual en el territorio municipal. De hecho, casi un tercio de los caseríos presenta, por el contrario, un crecimiento demográfico sostenido (tasa anual >3,5%); éstos son sobre todo los pueblos localizados en cercanías de la vía Tumaco-Pasto, caracterizados por un dinamismo económico más fuerte que el promedio (comercio, venta de madera, trabajo asalariado en plantaciones vecinas).

Variable de una localidad a otra, la emigración es igualmente selectiva y genera modificaciones importantes en las estructuras de edad y sexo. Según el censo de 1993, las poblaciones de los diez municipios del litoral Pacífico de Nariño sufren todas de un claro déficit de mujeres, sobre todo en las zonas rurales. La pirámide de Tumaco rural, aunque es la menos “desequilibrada” de todas, muestra una clara ruptura entre las mujeres a partir del rango de edad 15-19 años. Las pirámides más asimétricas se relacionan con los centros urbanos de Roberto Payán, Barbacoas y, en menor medida, Iscuandé; éstas son zonas de conflicto armado en la región, con presencia de guerrilla desde principios de la década de los años 1990: déficit importante de hombres adultos (desde los 25 a 30 años) y débil presencia de niños. Sumados a los factores económicos y sociales, como lo veremos, los problemas de orden público repercuten

18 Para una descripción de conjunto a escala nacional, cfr. MESCLIER (1999: 74 a 77). Un análisis detallado del caso de los espacios rurales que circundan las tres ciudades de Casanare se encuentra en C. E. FLÓREZ, F. DUREAU y R. MÉNDEZ (1996: 27 a 31).

rápidamente en los comportamientos migratorios, impuestos en su mayoría por la fuerza (huída, desplazamiento). Los datos de diferentes monografías concuerdan con las cifras. En 1991, la zona de las riberas (cinco riberas al norte de Tumaco que reúnen unos 30 caseríos o pueblos y aproximadamente unos 8.000 habitantes) presenta una relación de masculinidad adulta de 117 hombres por cada 100 mujeres¹⁹ y esta tendencia se extiende a la totalidad del municipio de Tumaco: en 1994-1996 la relación de masculinidad es de 88 en el medio urbano por 108 en promedio en el medio rural, donde casi un cuarto de los pueblos presentan tasas superiores a 122²⁰. La feminización de la migración adulta hacia Tumaco tiene como corolario la masculinización del área rural del municipio. Se llega entonces a una situación inversa a las descritas para esta región en la década de los años 1960 por N. WHITTEN (1992: 11) y N. MOTTA (1975: 67 y 69), cuando la migración femenina era netamente inferior a la de los hombres.

Los datos del SISBEN (1994-1996) permiten, a partir del análisis comparativo ciudad-campo, comprender algunos efectos y motores de las migraciones hacia las ciudades. El impacto sobre las estructuras familiares es evidente: en promedio, los hombres no representan sino un 55% de los jefes de hogar en la ciudad, contra un 78% en el campo. Por otra parte, los jefes de hogar solteros son bastante más numerosos en la ciudad que en el campo (48% contra 30%), y se trata la mayoría de veces de mujeres (85% de jefes solteros en la ciudad, 65% en el campo). Estas marcadas diferencias de las estructuras familiares están acompañadas de diferencias importantes en términos de capital escolar: en la ciudad, casi un tercio de los jefes de hogar no tienen ningún año cursado y una cuarta parte terminó sus estudios primarios y en ocasiones continuó educándose. En el medio rural, son cerca del 50% quienes no poseen ninguna escolaridad y sólo un 5% culminó el ciclo de educación primaria. La ausencia de oferta de escolaridad de calidad en el medio rural explica en gran parte la emigración hacia la ciudad. Todas las entrevistas lo confirman: la emigración

19 N. DE. C. ANGULO PAREDES, O. M. SAYA y J. J. RIASCOS TORRES, 1991.

20 Datos de las encuestas del SISBEN (Sistema Integrado de Subsidios para el Bienestar Social), 1994-1996, sobre una muestra de un cuarto de la población municipal, tanto en el medio urbano como en pueblos y riberas.

de mujeres atrae a las jóvenes solteras que parten en busca de trabajo (hacia Cali), pero también y sobre todo a las madres de niños en edad escolar (hacia Tumaco). Estas últimas se instalan en la ciudad con sus hijos, el marido permanece a veces en el pueblo o realiza constantemente viajes de ida y vuelta (birresidencias o migraciones alternadas).

A manera de conclusión, es necesario recordar la importancia de los impactos demográficos que ejercen las migraciones sobre todas las categorías de lugares (metrópolis, ciudades pequeñas y espacios rurales), incluso si, en las metrópolis, esos efectos demográficos presentan una temporalidad más lenta pues la importancia de las cifras en juego imprime una inercia considerable sobre las estructuras de población. Pero el impacto del proceso migratorio sobre las ciudades de llegada y de sus evoluciones recientes no se limita a las dimensiones demográficas o económicas frecuentemente consideradas: aumento de la población, transformación de su composición por sexo y edad, transferencia de capital humano, etc. Las dimensiones sociales, tratadas superficialmente a propósito de las ciudades petroleras, muestran cómo realidades y percepciones de la migración se conjugan y complican la elaboración de un proyecto colectivo de ciudad, condición no obstante necesaria para un desarrollo urbano duradero. Pero más allá de una lectura demográfica o macroeconómica de esos impactos, debemos interrogarnos sobre la importancia de la movilidad espacial para las unidades familiares y los grupos sociales que la practican, y la manera en la cual ella participa en sus lógicas de reproducción microeconómica y social.

II. CIRCULACIONES EN EL ESPACIO DE VIDA Y ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES ENTRE LUGARES

El objetivo general de esta segunda parte es poner en evidencia las formas de circulación en el espacio que les permiten a los individuos y a los grupos sociales integrar y hacer funcionar un espacio de vida “multilocal”. Algunas de estas formas sostienen a veces el poblamiento de zonas de emigración a través de prácticas de residencia alternas de sus habitantes. En la mayoría de los casos, ellas constituyen más bien diferentes tipos de “sistemas de lugares” en interacción demográfica, económica y social. De hecho, sobre la variedad

de sitios observados, parece que este principio de espacio de vida multipolar aparece por todas partes, pero en grados y con prevalencias variables, a veces difíciles de medir, pero sobre todo, funciona en escalas sociales, espaciales y temporales muy diferentes (*escala social*: individuos, hogares, grupos familiares, incluso comunidades aldeanas u otros tipos de redes; *escala espacial*: terruño, municipio, departamento, región, entre dos o tres lugares, e incluso más; *escala temporal*: multirresidencia, migración alterna anual o plurianual, escala del ciclo de vida). Más que operar una segmentación estricta entre los cambios de residencia durables y las otras formas de movilidades espaciales —como la multirresidencia o las formas de las movilidades circulares—, retomaremos el *continuum* espaciotemporal de las formas de movilidad, para poner el acento sobre las modalidades y las funciones de la integración de los lugares. La demostración se apoyará de nuevo sobre varios ejemplos. En Bogotá y en las ciudades del Casanare, sobre la observación de los sistemas de residencia durante el año precedente a la encuesta, sus características y sus funciones en el sistema de reproducción de los individuos y de sus familias (recuadro 2.1). En Cali, sobre las biografías migratorias ya analizadas en la sección 1.B, señalando esta vez con prioridad las migraciones circulares en el curso del ciclo de vida.

Nos proponemos ilustrar este punto de vista en dos tiempos. En primer lugar, de manera bastante descriptiva en la primera sección, donde mostramos la diversidad de esas prácticas de movilidad en los espacios estudiados, desde las movilidades de ciclos cortos, que articulan varios polos residenciales en la semana o en el año (Bogotá, ciudades del Casanare), hasta la alternancia de elecciones residenciales de larga duración (Cali). A continuación, bajo un ángulo más analítico, procurando identificar las lógicas de articulación de esas prácticas con los desafíos directos de reproducción socioeconómica, pero también con las “estrategias” familiares y las adaptaciones de comportamientos de alcance más cultural.

RECUADRO 2.1
LA OBSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS RESIDENCIALES
EN LAS ENCUESTAS DE BOGOTÁ (1993) Y CASANARE (1996)

Además de los residentes habituales, el universo de las encuestas CEDE-ORSTOM incluye a todas las personas no residentes habituales en las viviendas de la muestra, pero que han permanecido al menos 30 días (28 días, en el Casanare) en la vivienda durante el año de referencia (12 meses precedentes a la encuesta). En el cuestionario, se identifican para cada miembro de la familia dos lugares de estancia por fuera de la vivienda encuestada, y se aplica el mismo criterio de una duración mínima de estancia en cada vivienda de 30 días (28 días, en el Casanare), consecutivos o no, durante el año de referencia.

Para analizar los espacios residenciales, se puede introducir la noción de “densidad de residencia”, definida por la duración de la estancia en alguno de los lugares reportados en el intervalo del tiempo de observación. Así pueden ser aprehendidos los sistemas residenciales: configuraciones sociotemporales definidas por el conjunto de los lugares de estancia y la densidad de residencia en alguno de ellos. Aquí consideraremos tres categorías de *sistema residencial*:

- Unipolar: un solo lugar de residencia;
- Bipolar: alternancia entre dos lugares de residencia en los cuales la persona vive por períodos;
- Itinerante: serie de migraciones residenciales durables: trasteos entre los diferentes lugares.

A. LAS PRÁCTICAS DE CIRCULACIÓN

Las prácticas de circulación se ejercen, en primer lugar, bajo escalas de tiempos cortos –la semana o el mes– que articulan varios polos residenciales. En Bogotá, según la encuesta de 1993²¹, los sistemas residenciales bipolares o itinerantes permanecen como prácticas poco frecuentes: 1% de los sistemas itinerantes en las zonas situadas en el Distrito, 3% para las situadas en la periferia; 7% de los sistemas bipolares en el Distrito, 5% en la periferia. Frecuentemente, las prácticas itinerantes corresponden a mudanzas sucesivas de familias de clases populares muy móviles, entre viviendas en alquiler: es la manifestación de una movilidad intraurbana que será tratada en el capítulo tercero. Las prácticas “bipolares”, más frecuentes en los barrios de familias

21 Cfr. DUREAU, FLÓREZ y HOYOS, 1994; DUREAU, LULLE y PÁRIAS, 1998; DUREAU, 1999 y 2002.

acomodadas, corresponden por una parte a las movilidades familiares hacia una residencia secundaria durante los fines de semana o las vacaciones; por otra parte, a las movilidades individuales de profesionales que ejercen su actividad fuera de la capital, sobre las cuales volveremos con el ejemplo de las ciudades del Casanare; estas prácticas birresidenciales son también el caso entre las empleadas domésticas que duermen en la casa de su empleador pero regresan regularmente a su residencia personal.

En resumen, la segmentación del espacio de reproducción familiar no concierne entonces más que a una parte reducida de la población de Bogotá, más presente entre las clases acomodadas que entre los sectores populares. En cambio, su impacto sobre la ciudad está lejos de ser desdeñable. Así, el segmento superior del mercado de vivienda se ha modificado rápidamente con la adopción –igualmente muy rápida y a partir de 1980– de un nuevo tipo de habitat para las clases acomodadas: el apartamento en edificios colectivos, en proximidad a las zonas de empleo terciario en el pericentro norte. Han podido disponer así de un espacio residencial que satisfaga a la vez sus expectativas en materia de seguridad y proximidad al lugar de trabajo, y sus exigencias de calidad de vida (la casa de campo).

Con escalas temporales más variables (de la semana al año), la incidencia de prácticas residenciales plurilocales es de mayor importancia en las ciudades petroleras del Casanare. En 1996, el 18% de la población de Tauramena, el 14% de la de Yopal y el 11% de la de Aguazul no tenían, como lugar único de residencia, la vivienda encuestada: la explotación petrolera ha conducido a un aumento de prácticas residenciales basadas en estancias temporales o cíclicas en las tres ciudades. Una parte de esta población no permanente es itinerante: con frecuencia, se trata de migrantes atraídos por el mercado de trabajo petrolero, sin perspectivas de una instalación duradera en la ciudad (ellos se concentran especialmente en Tauramena).

Las migraciones temporal y circular, y los sistemas residenciales asociados con ellas, corresponden a veces a una etapa en el proceso de instalación del migrante y de su familia. Con todo, los sistemas residenciales bipolares no son exclusivos de los migrantes recientes. La frecuencia de los desplazamientos y la corta duración de las estancias conducen con frecuencia a interpretar la movilidad temporal y/o circular como algo efímero. Pero no lo es en absoluto: por número de trabajadores, se trata por el contrario, de un modo de vida “de

larga duración” (recuadro 2.2), que practican durante muchos años²². Como observan M. C. HOYOS y O. I. SALAZAR (1997):

[se trata] de un modo de vida que posee su propia estabilidad y una lógica de funcionamiento al interior de la inestabilidad residencial que implica [...] Es un sistema estructurado, funcional y estable.

Este sistema permite a esos trabajadores sacar partido de las oportunidades específicas ofrecidas por diferentes lugares.

Los ritmos de estadía en las diferentes viviendas que componen los espacios residenciales son muy variables: si una cuarta parte de los residentes bipolares se marcha cada semana a su otra residencia, y otra cuarta parte lo hace una vez al mes, una tercera parte no hace más que una sola estadía por año (DUREAU y FLÓREZ, 2000: 164). Aquí también, la distancia por sí sola no determina los comportamientos; como lo veremos más adelante, estos desvíos en los ritmos de movilidad de un lugar a otro se explican principalmente por las prácticas específicas de las diferentes categorías socioprofesionales implicadas.

RECUADRO 2.2

EL SISTEMA RESIDENCIAL MULTIPOLAR DE LOS MALLEROS²³

Este mallero, originario del pueblo El Morro, es enfermero de formación; su familia siempre ha vivido en ese pueblo; él trabaja y se desplaza solo. Afirma que les envía dinero desde los lugares donde está empleado, “... y cuando termina ya esa comisión, entonces un tiempito y llega uno a la casa, depara 15 días, 20 días, y vuelve y otra vez”. En seguida añade: “Yo sí me he movido un poco más, he sido más trajinado en andanzas. Justamente con las compañías porque he estado en Arauca, Barrancabermeja, Sabana de Torres, el Huila y el Tolima”. También ocurre que entre dos empleos él no pueda volver a su casa. Es decir, él puede trabajar 28 días en Barrancabermeja y al final de ese contrato marcharse directamente a Sabana de Torres para trabajar dos meses seguidos sin volver a El Morro. Su práctica residencial combina las migraciones temporales y circulares alrededor de un “centro de gravedad a partir del cual se articula un conjunto de desplazamientos hacia polos secundarios” (POULAIN, 1985: 3), “residencia base” donde vive su familia de manera permanente.

22 Un tercio de los migrantes bipolares de Yopal tiene más de cinco años de antigüedad; uno de cada cinco cuenta incluso con más de diez años de permanencia en la ciudad.

23 Ejemplo presentado por M. C. HOYOS y O. I. SALAZAR (1997b cap. quinto I.B)

En lo que respecta a la alternancia de los lugares de residencia a más largo plazo en el curso de la vida, la encuesta realizada en Cali conduce a un primer resultado: si la gran mayoría de los migrantes directos se estabiliza en Cali luego de su llegada a la ciudad, por el contrario, la movilidad de los migrantes indirectos no se detiene en su primera llegada porque entre ésta y la última llegada precedente a la encuesta, ellos emprenden en general otras migraciones fuera de Cali (una en promedio). En el conjunto bastante entrado en años y más masculino que el promedio, la población que alterna –de manera durable y relativamente equilibrada en términos de tiempo– las estadías en Cali y en sus lugares de origen, representa alrededor del 8% del conjunto de los migrantes²⁴. Estas alternancias residenciales se relacionan tanto con el área metropolitana de Cali (alrededor del 30% de los individuos) como con ciertos espacios integrados a su área de influencia regional (Antioquia y el Viejo Caldas, Tolima, Huila, 33%), y más raramente a espacios más lejanos todavía (Bogotá, el resto de Colombia y el extranjero, 18% del total). En lo relativo a los oriundos de la región Pacífica, se limitan casi exclusivamente a los migrantes del norte del Cauca y los barrios acomodados de Buenaventura (9% del total).

En el plano socioeconómico, la residencia alternada entre Cali y el lugar de origen se concentra en los dos extremos de la escala social, pero raramente toca a las clases medias. Los residentes de los sectores más populares de Cali (47% de quienes la practican) son en su mayoría originarios del *hinterland* rural o urbano de la ciudad, donde mantienen su *residencia-base* (baja densidad de residencia en Cali para la totalidad del período). De manera inversa, los habitantes de barrios acomodados (48%), con orígenes más lejanos y variados, residen la mayoría del tiempo en la metrópolis. El caso de los originarios de Buenaventura es un ejemplo de esta segmentación social. Entre ellos, los oriundos de los barrios acomodados del gran puerto del Pacífico tienen los medios económicos para una movilidad frecuente entre Cali y su ciudad de origen (4,8 etapas migratorias, en promedio), estrategia que se ajusta a los azares de la coyuntura, a su situación familiar o a su posición en el ciclo de vida, en fin,

24 Estimación según el análisis tipológico de las trayectorias residenciales de los migrantes a Cali.

a los imperativos de su reproducción económica, social o familiar. En su caso, esta alternancia residencial se conjuga a menudo con un ascenso social en Cali (paso de barrios de clase media a barrios de clases acomodadas). A la inversa, las trayectorias más simples de los originarios de la zona rural o de los barrios populares de Buenaventura (menos de tres etapas en promedio) corresponden a una movilidad por motivos principalmente económicos, limitada por la baja acumulación de capital económico y social.

B. LA MOVILIDAD, UNA OPCIÓN DE REPRODUCCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DESIGUALMENTE DISTRIBUIDA

Ahora queremos mostrar cómo diferentes configuraciones espacio-temporales del espacio de vida y de la movilidad de los individuos, los hogares, los grupos familiares, etc., corresponden a diferentes esquemas de posible disociación entre los lugares de reproducción económica, familiar, social y cultural. Al conservar en el lugar de origen –o al atribuir a otros lugares– una función residencial, económica, social e incluso simbólica, para algunos miembros de la colectividad y/o algunos momentos del ciclo de vida, la movilidad hace uso del espacio como un “recurso”, una “opción” de reproducción económica y social, movilizable sólo bajo ciertas condiciones, como vamos a verlo, muy poco igualitarias. Las posibilidades de configuración y de uso del espacio de vida están lejos de ser las mismas para todos.

En las tres ciudades del Casanare, las modalidades de los sistemas residenciales bipolares difieren sensiblemente de una ciudad a otra (DUREAU y FLÓREZ, 2000: 156). Una buena parte de los residentes bipolares de Tauramena practica un arreglo residencial de tipo “hogares confederados”, según la expresión de J. BALÁN y J. DANDLER (1987) a propósito de los migrantes bolivianos: su espacio residencial está compuesto por Tauramena, ciudad donde trabajan o, cuando menos, donde buscan empleo, y por otro lugar más lejano (Bogotá para el 25% de ellos, u otro departamento del país, fuera de Casanare y de Boyacá) donde reside de manera permanente su familia. En Aguazul, igualmente, la gran mayoría de los residentes bipolares tiene su lugar de residencia habitual fuera de la ciudad, con la cual están ligados por razones profesionales, pero se distinguen del caso precedente por la débil amplitud geográfica de su espacio

residencial y el carácter rural de la residencia familiar. En cuanto a Yopal, allí están presentes dos categorías de residentes bipolares. La primera está compuesta por personas que residen habitualmente en Yopal pero trabajan en el exterior (un tercio de los residentes bipolares). Con frecuencia, se trata de casanareños que tienen su lugar de trabajo en el mismo departamento y que, en razón de la infraestructura de los servicios existente en Yopal, eligen su domicilio en esta ciudad: ganaderos o cultivadores de arroz conforman una buena parte de esta población. El segundo grupo corresponde a las personas que trabajan en Yopal pero habitualmente residen fuera de la ciudad, en Bogotá o fuera de Casanare y de Boyacá; su presencia en Yopal se explica por alguna actividad en el sector petrolero, como en las otras dos ciudades, pero también en otros sectores, como la administración pública o la agricultura (ganadería, arroz, etc.). Por último, conviene mencionar a los residentes bipolares que salen de las tres ciudades por razones de estudio, a causa de las deficiencias del departamento de Casanare, incluyendo a su capital, en materia de oferta escolar.

La especificidad de los sistemas residenciales de los habitantes de las tres ciudades refleja el papel particular desempeñado por cada uno de ellos en un mismo sistema local de habitat: Aguazul es más usada como lugar de reproducción económica para los residentes bipolares de la región, mientras Tauramena alberga más bien a residentes bipolares que tienen a su familia en un lugar más lejano. Yopal, como capital del departamento y poseedora de una infraestructura hotelera de mejor calidad, cumple un papel particular en el alojamiento de los trabajadores cualificados del sector petrolero. Así, en Tauramena, y en menor medida en Aguazul, la mayor parte de los sistemas residenciales bipolares se explica directa o indirectamente —como en los casos de las prostitutas— por la actividad petrolera, mientras en Yopal —como lo veremos— intervienen otros factores. Sea que estén motivadas por la actividad petrolera o no, las movi- lidades circulares pueden cumplirse gracias al mejoramiento de los medios de transporte y de comunicación que ha conocido recientemente la región: es este mejoramiento el que ha multiplicado los lugares del territorio nacional accesibles desde Yopal, Aguazul y Tauramena, y por tanto ha hecho posible el desarrollo de prácticas plurilocales entre sus poblaciones.

La falta de bienes y de servicios en el campo y las pequeñas ciudades del Casanare conduce a los habitantes del resto del departamento a realizar

frecuentes estadias en la ciudad, particularmente en Yopal, localidad que concentra la mejor oferta en la materia. También existe una fuerte movilidad circular con otras ciudades de Boyacá (en particular Sogamoso) y Bogotá:

- En razón del costo de vida en Yopal.

- Por razones de seguridad. Son numerosas las entrevistas realizadas por M. C. HOYOS y O. I. SALAZAR en la estación de autobuses de Sogamoso, que ponen en evidencia el peso de la violencia (amenazas, secuestros, etc.) en la decisión de los casanareños al abandonar sus fincas. Ellos siguen trabajando en el departamento y realizan visitas esporádicas, pero instalan a sus familias en las ciudades de Boyacá o, en el caso de algunos generalmente más adinerados, en Bogotá.

- En razón de la debilidad de la oferta educativa en el Casanare. A las razones de seguridad se mezcla estrechamente la búsqueda de una mejor calidad de educación para los hijos. Así, para los casanareños, la movilidad espacial puede acompañarse de un desplazamiento inicial a las ciudades de Boyacá; luego hacia Bogotá para las familias más acomodadas que buscan una mejor oferta educativa (FOURNIER y GOUËSET, 2000: 92).

Estos ejemplos lo muestran claramente: los sistemas bipolares de residencia, con un polo en una de las ciudades del Casanare y el otro en el exterior de la región, corresponden a una estrategia familiar para sacar partido de las oportunidades ofrecidas por los lugares frecuentados cíclicamente. Esta práctica no responde únicamente a los imperativos de sobrevivencia de estratos populares sino que también es practicada por las clases acomodadas. Pero el ritmo de desplazamiento entre el trabajo y el lugar de residencia es entonces directamente función del nivel socioeconómico (FOURNIER y GOUËSET, 2000).

Las encuestas demográficas y antropológicas realizadas en las tres ciudades del Casanare concuerdan: mientras los obreros se reúnen dos o tres veces por año, o a lo sumo cada dos meses con sus familias, los profesionales más calificados se reúnen con su familia cada semana, incluso si ella reside en Bogotá o en un departamento más alejado. Lo aleatorio domina los ritmos de desplazamiento de los malleros, mientras los ingenieros de las compañías petroleras pueden contar con estabilidad en sus empleos, regularidad en sus ritmos de trabajo y medios de comunicación (avión) que disminuyen las distancias entre la zona de explotación petrolera y la residencia familiar. Finalmente, en

el largo plazo, la situación es igualmente inequitativa: mientras la carrera de los profesionales se beneficia de la diversidad de experiencias sobre diferentes obras, los otros acumulan empleos no calificados y sin trayectoria social ascendente. La segmentación social es manifiesta tanto entre las movilidades circulares que sostienen a estos sistemas complejos de residencia como entre la migración de larga duración en Cali, tratada en la subsección II.A.

A los motivos económicos de la bi-residencia, se añaden motivos de orden familiar. Así, el modo de vida adoptado por los malleros presenta otras ventajas, además de salarios relativamente altos: autoriza mayor independencia que otros tipos de trabajos y ofrece cierta libertad en relación con las obligaciones familiares.

Incluso en este dominio el mallero se encuentra en una posición límite, puesto que tiene a su esposa y sus hijos en otro lugar del país sin asumir plenamente las responsabilidades que exigiría la pertenencia a una familia (HOYOS y SALAZAR, 1997b).

En efecto, estas condiciones se prestan para invertir tiempo y energía en el terreno profesional, aprovechando la “liberación” de las obligaciones hacia los hijos, pero también pueden, a veces, ser responsables de la separación de la pareja.

En el otro polo del sistema residencial, la presencia física no es la única relación entre los segmentos de las familias espacialmente fracturadas: los residentes bipolares frecuentemente envían dinero a su familia a lo largo del año. La mitad de los habitantes de los hoteles —que poseen principalmente un sistema de residencia bipolar—, y entre el 10% y el 20% de los residentes ordinarios, envían regularmente dinero a sus parientes cercanos (padre, madre, cónyuge e hijos). La frecuencia de las transferencias disminuye con la duración de la estancia en la ciudad, pero se mantiene como una práctica extendida —incluso a largo plazo— lo cual desemboca en una redistribución, fuera de las ciudades petroleras, de los ingresos percibidos por los inmigrantes. Al lado de la redistribución por parte del Estado colombiano de una parte de las regalías petroleras en el resto del territorio nacional, existe entonces un sistema “informal” de redistribución que no responde a una política de ordenamiento territorial sino a la lógica de la geografía de los lugares de origen de los migrantes.

En resumen, se puede afirmar que los sistemas residenciales complejos, basados en estadias temporales frecuentemente cíclicas en diferentes lugares del territorio nacional, permiten sacar partido de las oportunidades locales: con frecuencia, obedecen a lógicas familiares (y no individuales) en un territorio nacional atravesado por profundas desigualdades. Entre tanto, el recurso a la movilidad es profundamente discriminatorio: al dominio del espacio por parte de los profesionales calificados del sector petrolero, por ejemplo, se opone la situación de los obreros, para quienes la distancia siempre tiene un costo que impide sus desplazamientos frecuentes al lugar de residencia familiar. Si la migración, bajo sus múltiples formas, es una opción de reproducción económica y social —en muchos casos, además, el único recurso movilizable, a un alto costo, frente a la degradación de las condiciones de vida locales—, no se puede, en ningún caso, idealizarla como solución a la desigual repartición de las oportunidades de empleo, acceso a vivienda, educación, etc., y ni siquiera como un derecho de acceso a la ciudad para todos.

III. LA GRAN REGIÓN PACÍFICO, ¿UN ESPACIO MIGRATORIO CONTEMPORÁNEO?

Queremos ahora ensanchar la perspectiva ubicándonos en el marco más amplio de la evolución del “sistema de lugares” constituido por las localidades de salida, de paso y de inmigración, de las redes y, más extensamente, de los espacios de vida y de reproducción de los migrantes, para poder comprender cómo las movilidades se apoyan sobre valoraciones diferentes del espacio (en concreto, de ciertos recursos localizados), y cómo, de manera retroactiva, las funciones del espacio regional se modifican bajo el efecto de la movilidad. Para este ejercicio disponemos, en la gran región Pacífica, de observaciones en los lugares de salida —rurales en este caso— y en uno de los principales lugares de llegada, Cali. Apoyándonos en el análisis de las trayectorias de emigrantes e inmigrantes, buscaremos integrar, dentro de la interpretación de los resultados, el conjunto de lugares que éstas relacionan. Los datos provienen de las fuentes anteriormente mencionadas, a saber: el censo de 1993, la encuesta de 1998 en Cali —en particular la tipología de las trayectorias migratorias, explotada aquí de manera específica para los inmigrantes del Pacífico—, y una encuesta reali-

zada en el pueblo de Bellavista, ubicado en la ribera del río Mejicano dentro del municipio de Tumaco en 1997 y 1998²⁵ (anexo 2). El recuadro 2.3 precisa la terminología de los espacios a los cuales se hará alusión²⁶.

RECUADRO 2.3
LOS LUGARES DE LA REGIÓN PACÍFICO

La “gran región Pacífico” reúne los cuatro departamentos del suroeste colombiano: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Sin embargo, a lo largo del texto, se hablará también de “región Pacífico” para referirse solamente a la franja litoral de estos departamentos, que fue poblada históricamente por descendientes de esclavos negros antes y después de la abolición de la esclavitud (1851–1852) y que cobija hoy en día a una población esencialmente negra (cap. cuarto).

La “región de Tumaco” se entiende como la ciudad y el conjunto de las riberas de los ríos de la ensenada, y corresponde grosso modo al municipio del mismo nombre. En este cuadro, las migraciones “lejanas” son aquellas que sobrepasan este espacio regional tumaqueño y el término “local” se aplica a los espacios rurales de la ribera del Mejicano o a las riberas inmediatamente próximas (mapa 2.3).

Finalmente, la expresión “Pacífico lejano” resulta comprensible desde Cali: ella excluye de la región del litoral Pacífico el municipio de Buenaventura, gran puerto situado a dos horas de camino, que mantiene relaciones demográficas y económicas bastante estrechas con la capital del Departamento del Valle del Cauca.

En primer lugar, tomaremos el punto de vista de los espacios rurales de salida (Bellavista), y nos interesaremos, por una parte, en la extensión del universo de reproducción familiar a través de los espacios de nupcialidad, y por otra, en la distribución de los destinos de los emigrantes y sus recorridos migratorios. Se busca de esta manera caracterizar las diferentes funciones que adoptan los lugares de circulación y emigración. En un segundo momento, el análisis se desplazará a las trayectorias y las características de los inmigrantes a Cali provenientes del Pacífico y, particularmente, del municipio de Tumaco. Nos interrogaremos entonces sobre la especificidad de las condiciones de inserción urbana de esta población. Finalmente, se propone a manera de conclusión una

25 El conjunto de informaciones recogidas en Bellavista pudo obtenerse gracias a la colaboración de N. RIVAS, quien presentó sus principales resultados en su memoria de sociología (RIVAS, 1999).

26 Cfr. también HOFFMANN y PISSOAT (1999).

interpretación global del espacio del Pacífico en tanto “sistema de lugares”, integrado y jerarquizado, de circulación de personas y bienes.

A. LOS RÍOS, TUMACO Y CALI: CAUSAS Y EFECTOS DE LA MOVILIDAD A ESCALA LOCAL, MUNICIPAL Y REGIONAL

LOS ESPACIOS DE NUPCIALIDAD: ALIANZAS Y TERRITORIALIDAD

La evolución de los espacios de nupcialidad en Bellavista nos permite explorar un primer aspecto del rol que tiene la movilidad en la “puesta en sistema” de los lugares, aunque no directa ni exclusivamente relacionado con la lógica económica. En la bahía de Tumaco, a unas cuatro horas de la ciudad en piragua a motor, el río El Mejicano cuenta actualmente en sus orillas con cinco pueblos consolidados, con poblaciones entre 100 y 600 habitantes cada uno, y un habitat disperso a lo largo del río. El relato local afirma que el pueblo de Bellavista fue fundado por **BALBINA DE LA CRUZ**, una mujer oriunda de la costa ecuatoriana vecina. Tuvo dos esposos seguidos, ambos oriundos de Barbaocoas y considerados igualmente como “fundadores”. La información recolectada cubre la totalidad de sus descendientes residentes sobre tres generaciones, además de otras familias que se instalaron tiempo después. Resultan interesantes los espacios de nupcialidad en vista de que permiten observar correspondencias entre lógicas sociales de alianzas y filiación, y lógicas espaciales. En otros términos: ¿es posible descubrir recurrencias en las estrategias de alianzas que tendrían significaciones espaciales y territoriales?, ¿en qué medida se relacionan entonces con las prácticas migratorias y/o de movilidad?

El espacio de nupcialidad, que para los primeros habitantes se limitaba a los pueblos del río Mejicano o del río Gualajo vecino (mapa 2.3), se diversifica a partir de la segunda generación con cónyuges provenientes de ríos más alejados (Rosario, Caunapi, Chaguí), de Tumaco, de grandes ciudades del país, e incluso, en algunos casos, del extranjero. Esta tendencia se intensifica en la siguiente generación, cuando los cónyuges se reparten equitativamente según su proveniencia de la región o de fuera del Pacífico. Sin embargo, la diversidad de orígenes de los cónyuges no está equitativamente repartida entre los

sexos: en promedio, las mujeres se unen con cónyuges oriundos de regiones más lejanas y, sobre todo, de otras ciudades del país, mientras que los hombres parecen decidirse por unirse con mujeres de la región, y preferiblemente de origen rural. Estamos lejos, en todo caso, de un modelo de comunidad cerrada o restringida en la región. No obstante, al dar vuelta al argumento podríamos resaltar que, a pesar de la aceleración de las migraciones desde hace veinte años, el 43% de los cónyuges de la generación actual siguen siendo oriundos del mismo río, y en muchas ocasiones del mismo pueblo. De hecho, el análisis de los comportamientos según las ramas familiares (es decir, el conjunto de núcleos familiares descendiente de un mismo ancestro) conduce a identificar estrategias matrimoniales privilegiadas. Como se ha descrito también en el vecino Chocó, por ejemplo LOSONZCY (1992), el esquema más común en Bellavista consiste en establecer relaciones con cónyuges de otros ríos de la región —antes que en los pueblos del mismo río—, teniendo en cuenta sus orígenes sociales y con repetición de uniones entre miembros de las mismas familias (mapa 2.3). Un segundo caso se ocupa de las ramas familiares en las que la mayoría de los cónyuges son provenientes de las ciudades del Pacífico (Tumaco, Cali, Buenaventura). Finalmente, dos grupos familiares presentan combinaciones sin recurrencia evidente en los lugares de origen de los cónyuges. Estas tres estrategias atestiguan una transición entre un “modelo tradicional” restringido a la región próxima —la primera—, y un esquema que traduce la ampliación completa del espacio de nupcialidad —la última—, la segunda, intermedia, reflejando las primeras fases de migración y el brusco ensanchamiento de la esfera de nupcialidad hacia las ciudades.

En el primer caso, la precariedad generalizada de los recursos lleva a diversificar las alianzas locales, y multiplica de esta manera las posibilidades de acceso a la tierra o a otros recursos, y establece solidaridades que se movilizan en caso de presentarse un problema mayor (pérdida de territorio, enfermedad, etc.). Se trata todavía de un abanico restringido de recursos localizados en el espacio rural más cercano. Pero estas lógicas de supervivencia pierden su importancia al mejorar estas condiciones extremas con la introducción de otro tipo de recursos (el trabajo asalariado, el pequeño comercio urbano). Resulta entonces posible disociar las estrategias matrimoniales de las estrategias familiares de reproducción relacionadas con el espacio local. En este nuevo

contexto, la alianza de tipo “local” deja de privilegiar los recursos materiales del lugar de origen del cónyuge, para valorar más bien la relación en sí, es decir, la inclusión en una red de reconocimiento mutuo²⁷. Esa red permite la reafirmación de una “territorialidad” común, la del mundo de los ríos, que sobrepasa el pueblo o el río de origen, y comprende toda la bahía de Tumaco. Sin embargo, con la aceleración de las migraciones lejanas y sobre todo de la urbanización, los recursos estratégicos para la reproducción individual y colectiva, como el trabajo, el acceso a la educación y la salud, las redes de información, etc., dejaron de situarse exclusivamente en la región y pasaron a ubicarse en las ciudades. El ensanchamiento del espacio de nupcialidad se articula así con los fenómenos de migración y de urbanización, participando en la construcción de un nuevo “sistema de lugares” que depende de nuevas movilidades.

LUGARES, TRAYECTORIAS Y FUNCIONES DE LA MOVILIDAD

“Anda andando”, “anda viajando”. Como la iniciación casi ritual en la adolescencia, que A.M. LOSONZCY (1992) describió en el Chocó, el viaje es la experiencia más compartida del Pacífico en la que se confunden hombres y mujeres, como bien lo expresó A. VANÍN (1999). Aquí buscaremos describir los espacios y las trayectorias que cubren estos “viajeros”²⁸.

Antes que nada, se confirma la importancia de las migraciones: 76% de las mujeres y 63% de los hombres nativos²⁹ de Bellavista ya no residían allí en el momento de la encuesta. Pero también se constata que alrededor de los

27 Hoy en día, es necesario matizar considerablemente las interpretaciones funcionalistas que veían en el sistema de parentesco del Pacífico un conjunto de estrategias basadas en el control del acceso a los territorios (DE FRIEDEMANN, 1969 y 1974; MOTTA, 1975).

28 A partir de la “red genealógica” del conjunto de los habitantes, elaborada para el estudio de la nupcialidad, seleccionamos 30 informadores que en 1998 vivían en Bellavista, Tumaco y Cali, y se les pidió que reconstruyeran sus propias trayectorias migratorias, y las de sus allegados (padres, hijos, en ocasiones los colaterales, mayores de 15 años y aún con vida), ya sea que vivieran o no en el pueblo al momento de la encuesta. Pudimos de esta manera recolectar informaciones sobre los presentes y ausentes en 1998 (142 personas en total), con una repartición equilibrada por sexo y segmentos de edad.

29 Haremos un uso abusivo de este término, asimilando a esta categoría algunas personas

dos tercios de los nativos viven aún en la región cercana: en el pueblo, los ríos vecinos o en la ciudad de Tumaco. La migración lejana no tiene que ver pues, más que con un tercio de la población de origen. Los lugares de residencia fuera de la región no son muy variados: principalmente la ciudad de Cali (en 1998, alrededor de 20% de los nativos de Bellavista viven en esta ciudad), el puerto de Buenaventura y las ciudades industriales de Venezuela. Para los habitantes de los ríos del Pacífico, el espacio de migración es en su mayoría limitado por lugares conocidos de tiempo atrás, en donde se implementaron las redes migratorias, ya sea en la región cercana o en las dos ciudades principales de la gran región del Pacífico.

La ciudad de Tumaco es el primer lugar de emigración desde Bellavista y permite el establecimiento y activación de redes de circulación permanente de personas, productos e informaciones entre los ríos y la ciudad; retomaremos más adelante este punto. Pero los lugares cobijados por las redes de nativos de los ríos se expanden más allá de la región cercana de Tumaco, para constituir una estructura discontinua de espacios de diferentes “cualidades” que atraen una migración selectiva en función del sexo, de la edad y de la escolaridad de los individuos. El espacio más cercano corresponde al “país de los ríos” que abraja en 1998 alrededor de un tercio de la población de origen: una población relativamente mayor en términos de edad que el promedio, con bajo nivel escolar y una leve mayoría masculina. En el nivel inmediatamente superior, la ciudad de Tumaco, polo regional, es el lugar de destino de los hombres con estudios secundarios, y sobre todo de mujeres adultas que vienen en busca de educación para sus hijos. Más lejos, Cali recibe fundamentalmente hombres jóvenes y cada vez más mujeres jóvenes que cursan o ya terminaron la secundaria, y que a menudo aprovechan (sobre todo las mujeres) para realizar sus estudios. Los destinos más alejados atraen personas de más edad, que encuentran un trabajo especializado acorde con capacidades que han adquirido anteriormente, o personas que se reúnen de nuevo con sus hijos (las mujeres sobre todo). Tendríamos entonces un dispositivo espacial de múltiples funcio-

no nativas que residieron durante largo tiempo en Bellavista antes de emigrar (se trata de cónyuges de personas nativas).

nalidades, un espacio aparentemente abierto y accesible para los emigrantes en función de sus necesidades y expectativas, gracias a las redes de parientes y vecinos que garantizan “el aterrizaje” en los lugares de llegada. Un análisis de las trayectorias migratorias permite precisar este modelo.

Prácticamente todos los nativos de Bellavista abandonaron el pueblo al menos una vez por un período superior a un año (92% de los hombres y 95% de las mujeres). Un poco menos de la mitad no se han marchado más que una vez, ya sea que hayan regresado al pueblo definitivamente, o que se hayan quedado en el lugar de migración. Un poco más de la mitad efectúa una segunda etapa de migración, y a su vez la mitad de ésta una tercera etapa. Una minoría de personas conoció incluso otras etapas, hasta cinco³⁰. Las primeras salidas se presentan siempre antes de los 25 años, en búsqueda de trabajo o de la continuación de estudios, pero también para “buscar la vida” y “abrirse su camino”. Los motivos de las migraciones ulteriores son fundamentalmente la búsqueda de trabajo, para los hombres; la educación y la escolaridad de los menores, para las mujeres. El análisis detallado de las trayectorias (destino, edad del emigrante, duración, motivos) permite esclarecer el proceso regional de movilidad. Se desprenden seis modalidades principales:

Un primer grupo, muy minoritario (8%) agrupa los “sedentarios” que nunca han viajado; abarca fundamentalmente los “mayores”, cuatro de los cuales asumen un rol importante en la jerarquía social local. Para ellos, el hecho de no emigrar no es ningún factor de marginalización: sus hijos viven, o han vivido, en el exterior.

Por oposición, los “emigrados” (30%) se marcharon con un destino lejano (Buenaventura, Cali, el extranjero, etc.), donde aún residían en el momento de la encuesta. Entre ellos, los más jóvenes se fueron hace menos de 10 años y posiblemente no han finalizado su ciclo de migración. La migración definitiva, si la definimos arbitrariamente como aquella con duración mayor a 10 años,

30 En promedio, en el momento de la encuesta, los emigrantes lejanos habían efectuado 1,9 etapas migratorias. Este valor concuerda con los obtenidos en la encuesta de 1998 en Cali, que indica un número promedio de etapas antes de la última llegada a Cali, así: de 2,5 para los oriundos de la zona rural de Tumaco, 1,6 para la zona rural de Barbacoas y 1,8 para las zonas rurales de otros municipios de la costa de Nariño.

afecta principalmente a las mujeres (28 vs. 15 hombres). En el caso de los hombres, los emigrantes que más lejos se han ido presentan dos perfiles “clásicos” en la región: por un lado, los jóvenes que van a trabajar de raspadores en las plantaciones de coca en las llanuras amazónicas durante el tiempo necesario para acumular alguna pecunia e irse más lejos o devolverse (esta etapa no es, por lo general, de larga duración); por otro lado están los que prueban suerte en las zonas industrializadas –principalmente petroleras– de Venezuela. En ambos casos, el objetivo económico es determinante: acumular y enviar (o traer consigo) dinero para la familia.

Más de la mitad de las personas (54%) se encuentran en situaciones intermedias: todas emigraron, pero sus partidas no significan en absoluto una ruptura con las redes familiares: por el contrario, las extienden en espacios de amplitud variable. Algunos (14%) persiguen el esquema tradicional de la movilidad de los ríos en un universo que integra las ciudades del Pacífico. Otros (19%), en una versión moderna del viaje de iniciación, realizan una etapa en Tumaco, luego una travesía por Cali antes de devolverse a vivir en Tumaco, con la riqueza de la experiencia de “la gran ciudad”. Las salidas de individuos directamente hacia Cali –seguidas eventualmente de regresos a la región– son naturalmente menos comunes (15%) y responden más que todo a motivos económicos y expectativas precisas (trabajo, estudios o instalación definitiva, incluso si ésta no concierne en definitiva más que a la mitad de los individuos). Finalmente, algunos (6%) se alejan de las destinaciones “tradicionales”, como son Tumaco y Cali, para recorrer diversos lugares antes de regresar al pueblo: ellos “buscan la vida” y desean “ver el mundo”, un tanto a la manera de sus antepasados, que recorrían los ríos del Pacífico. Ellos expanden cada vez más lejos las fronteras de su universo; son los “retornantes” descritos por A. VANÍN (1999), que adquieren, estando lejos, un prestigio que en seguida aprovechan en el mundo de los ríos.

Igual que en otros lugares de América Latina, la mayoría de estas movili-
dades residenciales no constituye una ruptura con la región de origen³¹, y los

31 Esta conclusión concuerda en efecto con los análisis recopilados en las actas del coloquio realizado en Quito “Se fue a volver” (REBORATTI [ed.], 1986) o con lo expuesto por G. CORTES en Bolivia (2000).

recursos del caserío o pequeño poblado son solicitados frecuentemente para ayudar a la persona que emigra: la mujer joven puede dejar a sus hijos o enviar a los recién nacidos donde sus abuelos, las hermanas menores toman rumbo hacia Cali para ayudar a sostener la casa, sin contar los regresos imprevistos en casos de fuerza mayor. De manera recíproca, la ciudad ha integrado definitivamente los espacios de vida de los habitantes rurales; es en particular el caso de Tumaco que “funciona”, en las prácticas de movilidad, de varias maneras: destino estable, etapa transitoria antes de partir con rumbo lejano, o lugar de residencia compartido con una vereda rural (donde el hombre se queda generalmente mientras que la mujer y los niños viven en Tumaco). Tumaco se convirtió en el polo regional donde se concentra y circula, a través de los migrantes, la información estratégica de orden familiar, económico o político. Con esta circulación, los pueblos ribereños nutren su capacidad de mantenerse “al corriente” e integrarse en las dinámicas regionales para dejar de ser “olvidados” cuando surgen programas de infraestructura o desarrollo local. Hoy en día, los pueblos no pueden reproducirse socialmente sin los emigrantes urbanos. El espacio regional se constituye entonces como sistema a partir de la articulación de las diferentes modalidades de migración, sin olvidar a quienes no migran. La circulación de personas y de bienes materiales y simbólicos funciona precisamente por la presencia de individuos sedentarios, mientras otros emigran por largos períodos o practican un sistema de movilidad con regreso.

Como consecuencia, los alarmantes diagnósticos sobre la disminución de la población rural, sobre todo cuando se presenta la emigración masiva de mujeres, no deben conducir a conclusiones apresuradas en términos de “decadencia”. Sin embargo, señalan una recomposición espacial que afecta considerablemente las maneras de pensar y apropiarse los recursos en los espacios rurales. Los registros “tradicionales” de legitimidad, fundados en gran medida sobre la residencia y el trabajo, deben ahora adaptarse a nuevas condiciones: los aldeanos-urbanos (que alternan su residencia en Tumaco y en el pueblo), o los emigrantes que retornan, disponen de nuevos recursos materiales o no materiales (como la legitimidad adquirida en la ciudad, principalmente por la escolaridad o la integración en las redes de poderes locales): ellos pueden

ponerlos a disposición del colectivo (la familia, la parentela extendida, el poblado) o, por el contrario, utilizarlos con fines más individualistas.

B. LOS INMIGRANTES DEL PACÍFICO EN CALI: LA DIFÍCIL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Presentaremos ahora una descripción a grandes rasgos de los inmigrantes del Pacífico en Cali. Sus itinerarios residenciales y sus características demográficas y socioeconómicas hacen de ésta una población a la vez particular y muy heterogénea, que enfrenta, globalmente, dificultades específicas de inserción urbana. Utilizaremos aquí la tipología de las trayectorias de inmigrantes elaborada a partir de la encuesta realizada en Cali en 1998 (ya mencionada en la secc. 1.B 1.2), en la cual los oriundos de la región Pacífica se agrupan en 14 clases³², que totalizan el 18% de los inmigrantes de toda la vida en Cali (anexo 3). En medio de esta división de la tipología, intentaremos despejar lo que distingue a los oriundos de la costa del Departamento de Nariño y particularmente a los del municipio de Tumaco.

UN SISTEMA MIGRATORIO AMPLIO E INTENSO

Las trayectorias que van del Pacífico con rumbo a Cali se originan en cuatro grandes espacios: la costa de Nariño (34% de los inmigrantes del Pacífico en Cali), la costa del Cauca y el valle del Patía (31%), el municipio de Buenaventura (24%) y el Chocó (11%).

Si nos limitamos a unos indicadores sintéticos (proporción de migrantes directos, número promedio de etapas, duración promedio de las etapas), las trayectorias de los migrantes del Pacífico se diferencian poco de aquellas de los demás inmigrantes que llegan a Cali (tabla 2.5). En cambio, al descartar las migraciones directas —de las cuales una buena parte se explica por el reagrupamiento familiar en Cali—, las prácticas migratorias de los habitantes del Pacífico lejano se distinguen fuertemente por tres características:

32 10 clases de migrantes provienen de lo que denominamos “el Pacífico lejano”, a las cuales deben adicionarse 4 clases de migrantes del municipio de Buenaventura.

– La frecuencia alta de la movilidad residencial: un cambio de residencia cada tres años, en promedio, en comparación con los cuatro años y medio para el conjunto de las demás orígenes.

– La gran amplitud espacial de las trayectorias dentro y fuera de la región Pacífico: las trayectorias que provienen de la región del Pacífico lejano abarcan, casi todas, numerosas migraciones de larga distancia, ya sea en la gran región suroeste del país (por ejemplo, desde la costa de Nariño hacia Buenaventura, Cali, el interior del Cauca, el sur del Valle o la región de Antioquia) o mucho más lejos, en el resto del país, incluso hasta en el extranjero (Panamá, Ecuador y Venezuela).

– La intensidad de las relaciones migratorias con Cali: la frecuencia alta de episodios residenciales en Cali anteriores al momento de la encuesta es una característica específica de los migrantes del municipio de Tumaco (tanto urbanos como rurales) y, en menor medida, de la zona rural del Chocó. Esta experiencia migratoria hacia Cali, seguida por un regreso o por otra migración, tiene una duración variable según los individuos y se adquiere a lo largo de un período de tiempo también variable, que alcanza en algunos casos los veinte años. En un momento dado, participan de ella entre el 10 y el 30% de la población encuestada. En total, considerando la rotación entre los individuos, más de la mitad de los migrantes de Tumaco o de Chocó habían vivido algún tiempo en Cali antes de su estadía en el momento de la encuesta.

Las trayectorias de larga distancia de los inmigrantes del Pacífico lejano³³ contrastan particularmente, en un contexto comparable desde el punto de vista de la distancia hasta Cali, con aquellas de los migrantes provenientes de la zona andina de la región suroeste (interior del Cauca y Nariño, Antioquia, Tolima y Huila). En estas regiones, la migración se caracteriza en efecto por la importancia de las migraciones directas hacia Cali, así como por las trayectorias migratorias limitadas a las ciudades de los departamentos donde nacieron o aquellas situadas cerca de Cali (ausencia –con pocas excepciones– de migración hacia el exterior de la región suroeste del país) y la escasez de episodios resi-

33 Los resultados estadísticos presentados aquí confirman los del estudio antropológico de esta movilidad: QUINTÍN (1999), VANÍN (1999), URREA, ARBOLEDA y ARIAS (2000).

denciales anteriores en Cali. El sistema migratorio de la población del Pacífico lejano se opone igualmente a aquel de los migrantes de orígenes cercanos a Cali que acabamos de poner en evidencia y que confirman los estudios cualitativos realizados en las zonas de origen.

UN ALTO CAPITAL EDUCATIVO MAL CONVERTIDO EN TÉRMINOS SOCIOECONÓMICOS

Es necesario recordar que el perfil particular de movilidad de los habitantes del Pacífico va acompañado por una fuerte singularidad “racial” y social por parte de este grupo de migrantes³⁴. La población negra constituye la gran mayoría de los flujos migratorios procedentes de la costa de Nariño y Chocó, mientras la composición es mucho más variada en el caso de Buenaventura (más del tercio de población no negra para el conjunto del municipio) y, aun más, de la región pacífica del Cauca (con mayoría de blancos y mestizos). Pero a pesar de estas variaciones locales, cerca del 80% de los migrantes del Pacífico son afrocolombianos aunque representan solamente el 24% del total de la población de Cali.

Contrariamente al estereotipo propagado en Cali sobre la desventaja de nivel educacional de la población afrocolombiana, el capital educativo de los migrantes del Pacífico en el momento de la encuesta es netamente superior al de muchos otros inmigrantes. Este diferencial es certificado para el conjunto del Pacífico con relación al promedio de los migrantes: 54% de nivel secundario o superior para ellos, contra un 51% en promedio. La diferencia global se explica en buena parte por el efecto del nivel de educación muy alto de los migrantes de Buenaventura (79% de secundaria o superior). Pero sobre todo, la ventaja relativa de los oriundos del Pacífico se acentúa y deviene sistemática cuando

34 Considerando el reducido tamaño de la muestra observada, nos limitaremos al análisis estadístico de tres variables: el fenotipo de los individuos, su nivel de educación y su estrato socioeconómico de residencia en Cali (cfr. la introducción y el anexo 3). Para análisis más detallados de las cifras y las características socioeconómicas de los migrantes afrocolombianos en Cali cfr.: AGIER et ál. (2000), BARBARY (2001), BARBARY et ál. (1999), BARBARY, RAMÍREZ, URREA (1999), URREA y RAMÍREZ (2000).

se comparan con otros migrantes, cuando se tiene en cuenta la distancia a Cali y el origen rural o urbano. De esta manera, para los migrantes rurales, el 42% de los de la Costa Pacífica de Nariño tienen un bagaje educativo secundario o superior mientras que éste es el caso para sólo el 9% de los migrantes rurales procedentes del interior de este departamento. Exceptuando el caso particular de la ciudad de Buenaventura, los contrastes son generalmente menos fuertes para los migrantes de origen urbano, pero siguen siendo casi siempre en provecho de los oriundos del Pacífico.

Las observaciones realizadas en Tumaco sugieren que es necesario asociar esta constatación, establecida en Cali, con un proceso de emigración muy selectivo en la zona rural del Pacífico: solamente los individuos dotados de un mejor capital educativo emprenderán la migración hacia Cali. Pero este tipo de migración selectiva no es en absoluto específico del Pacífico. Para explicar la diferencia con los otros orígenes regionales, es necesario recurrir a la hipótesis de una sobreinversión colectiva de las poblaciones del Pacífico en educación, percibida como la condición necesaria para su inserción económica en Cali. Vale la pena preguntarse si este comportamiento se debe a alguna conciencia de la desventaja racial que es necesario sobrepasar. De cualquier forma, es dudoso que esta inversión pueda realizarse en los lugares de origen de los migrantes, dada la insuficiencia crónica de oferta escolar que presentan. Lo más probable es que ésta haya tenido lugar en el transcurso de la trayectoria migratoria y, probablemente en gran medida, entre la fecha de la primera llegada a Cali y la de la encuesta. Como sea, queda planteada la cuestión de saber si esta ventaja relativa de capital educativo es convertida en términos de inserción socioeconómica. En 1998, la encuesta desmiente esta expectativa con resultados contrastados, pero a menudo contrarios a tal encadenamiento “lógico”.

En el plano residencial por ejemplo, si tomamos el caso de los migrantes rurales de la costa de Nariño *versus* los del interior del departamento, a pesar de su ventaja en términos de capital educativo, los primeros están, en una proporción muy superior a la de los segundos, asentados en los estratos de habitat popular (estratos 1, 2 y 3): de 80% a 100% según los orígenes mientras que al mismo tiempo, casi la mitad de los migrantes del interior pudieron hacerse a una vivienda en los tres estratos superiores. Este patrón muy desigual se

repite para los migrantes rurales del Chocó y, en menores proporciones, del Pacífico, el Cauca y de Buenaventura, frente a la inserción socioeconómica que logran sus homólogos de las zonas rurales. En cambio, la inserción residencial de los migrantes urbanos procedentes del Pacífico no se muestra, en conjunto, inferior a la de los migrantes urbanos del interior y, en algunos casos, puede llegar a ser comparativamente mejor.

La cuestión de las desigualdades sociorraciales en lo relativo al acceso a los recursos económicos en la ciudad se plantea entonces de una manera demostrable, pero con una serie de matices. Para los migrantes rurales, no hay duda de que los oriundos del Pacífico están considerablemente afectados en su ascenso social por discriminaciones en el acceso a los empleos y a las remuneraciones, no obstante su ventaja relativa de capital educativo respecto a otros migrantes. La existencia en Cali, en algunos segmentos del mercado laboral, de una discriminación claramente racial hacia la población afrocolombiana está confirmada por estudios cualitativos (URREA, 1997: 155; QUINTÍN, RAMÍREZ y URREA, 2000: 23; AGIER et ál., 2000: 50 a 53), así como por la fuerte percepción de la discriminación por parte de la población de Cali (BARBARY, 2001: 794 a 798). Sin embargo, llegar a conclusiones acerca de su importancia estadística y su papel en las desigualdades de inserción socioeconómica es un tema aparte. La heterogeneidad de las condiciones sociales según los orígenes regionales y, sobre todo, la oposición entre migrantes rurales y urbanos, deja claro que el proceso no es uniforme ni tan simple. El componente racial tiene un peso variable en interacción con otros criterios de diferenciación: lugares y tiempo de residencia en Cali, género, posición en el ciclo de vida, trayectoria profesional, etc. Queda por hacer un estudio estadístico riguroso del fenómeno introduciendo otras variables que interactúan con el factor racial, ya que la educación no puede por sí sola dar cuenta de las desigualdades en la acumulación de las diferentes formas de capital que condicionan el acceso a los recursos. El análisis simple que hemos desarrollado aquí tiene sobre todo el mérito de trasladar el debate sobre la desigualdad racial en Cali del terreno más “convencional” de la segregación residencial, mediatizado a través de la figura del gueto racial —que los resultados de la investigación empírica demuestran que no existe (cap. tercero)—, hasta colocarlo en la cuestión crucial de las desigualdades en el acceso al conjunto de los bienes y servicios urbanos (cap. cuarto).

C. CALI Y LA COSTA PACÍFICA,
EL EJEMPLO DE UN SISTEMA DE LUGARES

Los datos recolectados en la región de Tumaco y en Cali ilustran bastante bien la tesis defendida en el presente capítulo sobre el *sistema de lugares*. Las formas diferenciadas de migración y circulación, identificadas tanto en los emigrantes de Bellavista como en los inmigrantes del Pacífico en Cali, concurren, en conjunto, a la puesta en relación de una serie de espacios que se extienden a la totalidad de la región Pacífica e incluso más allá. Desde luego, la densidad y la intensidad de las relaciones materiales y simbólicas que se establecen entre estos lugares varían fuertemente según las direcciones y las distancias, y dejan grandes “vacíos” que por cierto se colmarían en gran medida si se generalizara la observación en otros lugares del Pacífico con emigración o inmigración³⁵. Más que una estructura concéntrica, se trata de un esquema reticular que organiza este espacio migratorio a lo largo de las “rutas” donde se concentra la movilidad. En el caso del eje Bellavista/Tumaco/Cali, se dibujan alrededor de cinco espacios cardinales: (I) Bellavista, (II) el espacio de los ríos de la bahía de Tumaco, (III) la ciudad de Tumaco, (IV) las ciudades de Cali y Buenaventura, (V) otros destinos fuera de la región Pacífico. Pero en total, la sumatoria de estas prácticas migratorias engendra un sistema de circulación que se proyecta en toda la “gran región Pacífico”, e incluso la sobrepasa. Los flujos de personas y de bienes, materiales y simbólicos, que lo componen, varían según diferentes escalas temporales, espaciales y sociales.

Con el tiempo, los flujos varían a escala “histórica”, con la reorientación y diversificación de los destinos de los emigrantes desde sus zonas de origen y, como corolario, la expansión y recomposición de las cuencas migratorias de las grandes ciudades. Pero en la escala del ciclo de vida de los migrantes, las

35 Fundamentalmente, las relaciones privilegiadas Tumaco-Buenaventura, Guapi-Buenaventura y Guapi-Popayán, así como las relaciones entre las costas de Nariño y del Cauca y las zonas agroindustriales y las ciudades intermedias del norte del Cauca y del sur del Valle. El caso del Chocó, más complejo a causa de las estrechas relaciones con Medellín y la costa Caribe, ilustra la ruptura entre las partes norte y sur de la región Pacífico, documentada por varios autores en diversos aspectos (lingüísticos, culturales, políticos, etc.).

formas de movilidad se diferencian igualmente, y producen composiciones demográficas y socioeconómicas específicas para cierto tipo de flujos: viajes de “iniciación”, migraciones durables con motivos económicos o familiares, instalaciones en los lugares de inmigración, regresos a los lugares de origen o desplazamientos forzados³⁶.

En un primer momento, podríamos interpretar estas dinámicas como un proceso de indiferenciación espacial, es decir, un proceso en el cual las unidades espaciales “tradicionales” (el poblado, el río, la ciudad) perderían sus funciones primarias (respectivamente: residencia, filiación territorial, vinculación con la sociedad global) en beneficio de una recomposición general del territorio regional. Puede presentarse ahora una disociación entre el lugar de residencia y el lugar de filiación territorial (el que emigró a Cali y continúa calificándose como “tumaqueño”, pero también el que se percibe totalmente como “caleño”) o entre residencia y trabajo (los birresidentes en la ciudad y el poblado rural). De cierta forma, los lugares pierden su autonomía al adquirir cada uno nuevas funciones interdependientes con las de otros. El Pacífico se integra de esta manera (con un cierto retraso en comparación con las demás regiones del país), a las dinámicas migratorias y las recomposiciones territoriales que induce la nueva distribución de funciones en los lugares. Los recursos explotados por los individuos, y sobre todo por los grupos familiares, se sitúan en diferentes lugares y no adquieren valor sino por su combinación y complementariedad en el tiempo y el espacio; no faltan en los párrafos anteriores los ejemplos que lo ilustran. Sin embargo tal “indiferenciación” de los lugares solamente es aparente ya que todos los espacios contribuyen a este sistema de reproducción de manera muy desigual y, sobre todo no aleatoria, sino de modo diferenciado según la edad, el género y la posición en el ciclo de vida de los migrantes del grupo social en cuestión.

36 En el Pacífico, este último caso se refiere a una época reciente (2000-2001) pero presenta una dinámica excepcional, resultado de la ofensiva paramilitar en toda la región del Pacífico (SÁNCHEZ, 2001). Al terrorismo sobre las poblaciones rurales instaladas en las zonas consideradas como estratégicas por alguno de los actores armados, se suma la eliminación o el desplazamiento de las “elites” ligadas al campo social y político local (ONG para la defensa de los derechos humanos, movimiento étnico, sindicatos, Iglesia Católica, etc.), lo que modifica profundamente la capacidad de acción y adaptación de estas sociedades frente a los cambios de orden nacional o global.

En el nuevo “sistema de lugares” entonces, los puntos de partida y de llegada de cada “ruta” tienen posiciones y funciones relativas que determinan los volúmenes y las características de los flujos migratorios. Desde Bellavista, por ejemplo, Tumaco es el destino preferencial para las mujeres que buscan un acceso real a la educación y a la salud de sus hijos, incluso si debe producirse la segmentación del espacio de reproducción económico y social del hogar; en efecto, los hombres conservan en ocasiones su inserción residencial y laboral rural o buscan en Cali, Buenaventura o aun más lejos, mejores oportunidades de empleo. Con la migración directa hacia Cali, las mujeres jóvenes, por su parte, buscan la independencia económica y las condiciones necesarias para seguir con sus estudios. Pero las prácticas migratorias de las poblaciones del Pacífico muestran que el conjunto de estas elecciones residenciales individuales o familiares se inscribe casi siempre en lógicas más colectivas (redes en ocasiones muy extensas constituidas por originarios del mismo pueblo, del mismo río, del mismo municipio, etc., comunidades más amplias construidas alrededor de la identidad territorial regional, incluso de la identidad étnica). Otros estudios han ilustrado el rol de las “colonias”, como, en Cali la de los guapireños o en Bogotá, la de los robleños; estas “comunidades de origen” se instituyen en la migración y adquieren, en primer lugar, un rol de cohesión social y luego de mediación entre los migrantes y la sociedad urbana³⁷. Las referencias rurales del origen común explican y legitiman a menudo las acciones colectivas en el medio de llegada.

Sin lugar a duda, en el caso del Pacífico, el sentimiento de comunidad de origen se encuentra reforzado por la doble discriminación unánimemente denunciada por los migrantes: discriminación geográfica (el Pacífico como “región abandonada por el Estado central”) y discriminación racial (el Pacífico como “región negra”). La desigualdad en el acceso a los recursos urbanos, que nuestros análisis comprobaron en varias ocasiones, brinda a esta denuncia argumentos concretos. Las recientes dinámicas políticas fundadas sobre el reconocimiento de una “identidad” étnica y territorial, propia de las poblaciones del Pacífico, refuerzan aún más el vínculo entre zonas de origen y lugares de emigración. En efecto, la identidad afrocolombiana y los derechos asociados,

37 AGUDELO (1998), ARBOLEDA (2001).

inicialmente concedidos exclusivamente a las poblaciones rurales, han sido en adelante reivindicados por numerosos negros urbanos, sean inmigrantes, descendientes de inmigrantes o nativos de las ciudades. En este proceso, la referencia a un territorio de origen forma parte de un nuevo discurso que se ajusta a las disposiciones legislativas: aquí aparece un nuevo aspecto de la “integración regional” del Pacífico. Ampliamente discutidas en el capítulo cuarto, estas cuestiones nos recuerdan de qué forma las relaciones establecidas en y por la movilidad, entre las personas y los grupos sociales, y entre los espacios, sobrepasan de lejos el registro socioeconómico para integrarse en lógicas globales de reproducción política de los espacios considerados.

CONCLUSIÓN: LOS SISTEMAS DE MOVILIDAD EN LA COLOMBIA DE LA DÉCADA DE 1990

Quisiéramos enfatizar dos tipos de conclusiones:

– Ciertas convergencias que aparecen a través del conjunto de espacios urbanos y rurales estudiados, y que pueden constituir tendencias profundas en la evolución de los flujos migratorios y las prácticas de movilidad en la Colombia de los años 1990, pero también responden a la aparición de nuevos retos de la movilidad espacial para los individuos y las unidades familiares, frente a la necesidad de acceder a recursos cada vez más desigualmente repartidos.

– Tres desafíos, propiamente políticos, del aumento y la diversificación de la movilidad: una creciente complejidad en la gestión de las entidades territoriales, una tendencia a la sobrevaloración de la movilidad en detrimento de la atención a las desigualdades socioeconómicas, y finalmente, la construcción de nuevas identidades locales, regionales, étnicas, etc.

ALGUNAS CONVERGENCIAS ENTRE PRÁCTICAS DE MOVILIDAD EN LA COLOMBIA DE LOS AÑOS 1990

La diversidad de ejemplos presentada aquí muestra una evolución general reciente de los comportamientos migratorios, que atraviesa los contextos locales y regionales, sin duda con matices y ritmos específicos. La intensificación de la movilidad, la diversificación de sus formas y las transformaciones en la orientación y la composición de los flujos son el resultado de una interdependencia creciente entre los lugares a diversas escalas espaciales y temporales.

Recíprocamente, la movilidad refuerza esta interdependencia con el poderoso impacto que ejerce sobre las dinámicas demográficas, económicas y sociales de los espacios de emigración y de inmigración. Hilo conductor del capítulo, la noción de sistema de lugares se impone todavía más al análisis, pues ella subyace igualmente a los comportamientos de los actores sociales, estructurando las limitaciones y las estrategias a partir de las cuales ellos asignan diferentes funciones a los lugares. Los principales resultados de este estudio ilustran esta dialéctica entre causas y efectos de la circulación de personas y bienes.

El impacto de la movilidad sobre la dinámica demográfica y la estructuración socioeconómica de los espacios se destaca en primer lugar con la recomposición de las cuencas migratorias: las de las grandes ciudades, sin duda, como Bogotá o Cali, pero también las de los espacios donde se desarrollan nuevas actividades económicas, como la explotación petrolera en el piedemonte del Casanare, o la agroindustria a lo largo de la vía de Cali a Tumaco. La composición demográfica y socioeconómica de esos nuevos flujos es variable, y muy frecuentemente bastante “específica” (migración muy selectiva). Más que por la distancia o las masas de población, esa composición se explica por las categorías de población, las dinámicas económicas y sociales de los espacios de emigración e inmigración y la función que los migrantes le atribuyen a sus desplazamientos. Esas dinámicas migratorias, sensibles a las coyunturas de corto y mediano plazo, no impiden la conservación de ciertas tendencias más estables: lo ilustra el hecho, verificado en general³⁸, de que la inmigración hacia las ciudades (pequeñas y grandes) permanece mayoritariamente como joven y femenina. Sin duda alguna, la importancia y el ritmo de las transformaciones que induce la movilidad en las estructuras demográficas y socioeconómicas varían según el tamaño de las poblaciones respectivas. En las grandes ciudades, la inercia de las estructuras por sexo y edad, marcadas por la tendencia de largo plazo de las cohortes sucesivas de inmigrantes (jóvenes y femeninas), contribuye a la conservación de un crecimiento natural sostenido y a un rápido aumento del número de hogares, al igual que frena el ritmo de envejecimiento de la población. Los efectos son inversos y a menudo mucho más bruscos en muchos espacios rurales de emigración: masculinización y

38 No obstante, con excepción del caso particular de las ciudades petroleras.

envejecimiento acelerados de la población, éxodo de activos jóvenes entre los más capacitados.

La diferenciación de los comportamientos migratorios fue abundantemente ilustrada aquí por las prácticas de circulación y de residencia al interior del espacio de vida (migraciones durables, migraciones alternadas anuales o plurianuales, multirresidencia), las trayectorias migratorias desde los lugares de origen (frecuencia de migraciones directas, lugar, número y duración de las etapas) así como los itinerarios residenciales en la escala del ciclo de vida (sucesión de migraciones, instalaciones definitivas, retornos a los lugares de origen). El conjunto de estos comportamientos confirma la diversidad del registro de la movilidad en tanto que opción de reproducción económica y social, pero también las condiciones de su empleo por parte de los individuos y los grupos sociales. Un primer ejemplo son las numerosas oposiciones según el género: una frecuencia más alta de la migración directa entre las mujeres, menor número de etapas y duración media de la trayectoria en general superior a la de los hombres; en fin, una mayor “estabilidad” residencial de las mujeres acompañada sin embargo por una tendencia más fuerte a migrar, particularmente a las ciudades. Como se ha observado, estos rasgos característicos corresponden tanto a proyectos migratorios específicamente femeninos (acceso a educación y salud, para sí mismas y para sus hijos; búsqueda de un mercado de empleo femenino; atractivo de la condición femenina urbana) como a las condiciones y limitaciones particulares en las cuales se ejerce la movilidad de las mujeres (migraciones dependientes, carga de la responsabilidad sobre los hijos). La sección II del capítulo muestra también que, según el origen social y el capital económico y social acumulado, los individuos y las unidades familiares funcionan sobre diferentes registros de movilidad, los articulan en forma variada a los diferentes momentos de su ciclo de vida y no tienen acceso a los mismos sistemas de residencia. No existen pues invariantes espaciales, sociales o culturales en las prácticas de movilidad ni en el papel que desempeñan en la reproducción económica y social, sino, al contrario, existe una gran variabilidad en las oportunidades de relación entre los lugares, los ritmos y las modalidades de circulación entre ellos, con las funciones que les asignan los individuos y los grupos sociales (sobrevivencia, inserción durable, acumulación económica, bienestar, etc.). En cambio, lo que se encuentra

invariablemente es el principio de un espacio de reproducción multilocal y la tendencia que muestra actualmente a expandirse considerablemente.

TRES DESAFÍOS POLÍTICOS

El Pacífico y la cuenca superior de la Orinoquia (Casanare) ofrecen dos ejemplos de regiones que permanecieron largo tiempo al margen del sistema migratorio colombiano, que lo integran en un contexto histórico y económico particular, con un incremento de los desequilibrios espaciales. La fase de consolidación de la red urbana colombiana es también un período de estructuración demográfica, económica y política del territorio nacional alrededor de las ciudades, durante el cual se profundiza la brecha de desarrollo entre la Colombia “útil” y el resto del país. ¿Cuál es el impacto de este contexto que opone las pequeñas ciudades descentradas respecto a las metrópolis como Bogotá y Cali, sobre las políticas de gestión y de planificación que pueden poner en práctica los gobiernos locales? Esta problemática, que no ha hecho más que agudizarse con la globalización económica, es común en un buen número de regiones subintegradas de Colombia y, en general, de América Latina. Como se ha observado en los casos de las ciudades del Casanare, la diversidad de las temporalidades en las cuales se definen las lógicas de acción de los diferentes actores presentes vuelve muy compleja la elaboración de un proyecto colectivo de gestión urbana. Es el caso, muy particularmente, del desfase entre el carácter plurilocal de las prácticas de movilidad (o, lo que sería lo mismo, las prácticas del espacio) y los modos de administración y de gestión del territorio, fundados sobre el principio explícito de la incorporación única (una persona pertenece a una unidad administrativa, a través de su “residencia habitual”, considerada única). Al menos, en la hora actual se observan algunas primicias sobre una gestión que admite las prácticas plurilocales, en la cual, para administrar situaciones de muy fuerte circulación de la población, resulta esencial la noción de “densidad residencial”. Las ciudades petroleras, como Tauramena, que se infla y se desinfla cíclicamente, o, en un contexto muy diferente, ciertas ciudades turísticas son, bajo esta perspectiva, figuras precursoras.

Pero, a la inversa, la sobrevaloración de la movilidad por parte de los políticos y los gestores es un escollo que podría revelarse como algo peor que la actual ignorancia de las prácticas plurilocales del espacio. Eso podría

conducir, por una parte, a olvidar el papel de los sedentarios y, en general, de las poblaciones “estables”: es necesario, en efecto, recordar que el espacio, regional o más amplio, hace sistema a partir de la articulación de las diferentes modalidades migratorias, sin olvidar a quienes no se van. Los “sedentarios” y los “emigrados durables” constituyen las categorías “extremas” del sistema, que hacen posibles las otras modalidades de la movilidad. La focalización sobre las categorías muy móviles conduce a olvidar las transformaciones que deben enfrentar las poblaciones estables en contextos en plena conmoción. Se ha observado, en el caso del Casanare, cuán necesario resulta ser capaz de adaptarse para sobrevivir y sacar provecho de la situación actual. Por otra parte, no hay que ocultar el carácter profundamente desigual del acceso a la movilidad, puesto en evidencia a todo lo largo del capítulo, en cualesquiera de las formas de movilidad consideradas. Se olvida muy fácilmente que todo el mundo no tiene el mismo acceso a este recurso. ¿Un funcionamiento económico y social que acepta, que alienta, una desigual distribución espacial de los recursos, y erige así la movilidad en principio general, no es acaso más inequitativo que una situación de menores desequilibrios espaciales en la que el acceso a los recursos no está filtrado por la movilidad?

Finalmente, los desafíos políticos alrededor de la construcción, y de la posible oposición de diferentes identidades locales, regionales, culturales y étnicas, están también, en la Colombia y en la América Latina de hoy, fuertemente ligados a la movilidad de las poblaciones³⁹. Está demostrado el papel decisivo de la comunidad de origen en las dinámicas migratorias, por un lado, y en las configuraciones espaciales urbanas por otro lado. Los grupos de solidaridad (paisanaje) se instituyen en la migración, y adquieren, en primer lugar, un sentido de cohesión social, y en segundo lugar, un papel de mediación entre los migrantes y la sociedad urbana. La alteridad social que así se construye es, por lo demás, frecuentemente afianzada por diversos tipos de discriminaciones, como lo hemos visto en la estigmatización de los migrantes en las ciudades petroleras del Casanare y en las poblaciones negras originarias del Pacífico en Cali. A la manera de lo que está en curso en la gran región del Pacífico, el proceso de “integración migratoria” de diferentes lugares en un sistema sólo

39 Sobre el caso de México cfr. A. QUESNEL y F. LARTIGUE (coord.). *Las dinámicas de la población indígena: cuestiones y debates actuales en México*, México, CIESAS-IRD, 2003.

adquiere realidad política mediante la construcción social de un territorio colectivo, en la que el aporte de sus distintos componentes demográficos, económicos y culturales debe ser reconocido y valorado.

Para terminar, queremos volver sobre dos sesgos de análisis que los objetivos anunciados en la introducción tenían que evitar para abordar así completamente la articulación de un sistema de lugares a través de la movilidad espacial de las poblaciones, pero que los datos y los análisis disponibles impiden desconocer del todo.

El primero sesgo consiste en razonar sobre los migrantes desde un único lugar de observación (lugar de emigración o de inmigración), en detrimento de una comprensión global de los espacios de movilidad. Siguiendo el hilo de las tres partes, el análisis de las trayectorias migratorias recogidas en los diferentes lugares de las encuestas, apuntaba a reconstituir el conjunto de espacios y duraciones de estancias que componen los sistemas migratorios de las poblaciones. Se mantiene el hecho de que los ejemplos observados a través de las muestras no permiten más que una comprensión parcial y, sobre todo, que esas encuestas no pueden reunir, de manera fiable y exhaustiva, las mismas informaciones sobre los ausentes del lugar de observación en la fecha de la encuesta. Con todo, esta aproximación nos ha permitido describir, en diferentes escalas espacio-temporales, las prácticas migratorias que ponen en relación muchos lugares, evaluar los diferentes impactos que ejercen sobre cada uno de ellos y proponer una interpretación de su función respectiva en el sistema que constituyen.

El segundo sesgo se deriva de un corte (metodológico) en la continuidad espacio-temporal de las formas de movilidad (migración “durable”⁴⁰ *versus* “otras formas”), el cual impide captar, en tanto que sistema, el conjunto de los lugares y las funciones económicas, sociales y culturales de la movilidad. Desafortunadamente no disponemos, para el conjunto de los casos tratados aquí, de la misma variedad de información. Los datos censales para el conjunto de las localidades, o los de las fuentes secundarias obtenidos en Tumaco, sólo informan sobre la migración de toda la vida y la reciente. En cuanto a los datos recogidos en 1998 en Cali sobre los sistemas de residencia y los retornos a los lugares de origen, todavía no han sido analizados. En cambio, en las ciudades

40 Sin que, por otra parte, sea posible definirla a partir de un umbral de duración (anexo 3), desde la mayoría de las fuentes.

de Casanare, todas las formas de movilidad han sido tomadas en cuenta para describir los modos de inserción de las poblaciones; éstos son netamente diferenciados, ciertamente, pero todos presentan impactos demográficos y socioeconómicos importantes sobre el sistema de lugares. Este ejemplo muestra con claridad que no es legítimo, desde el punto de vista analítico, separar las migraciones “durables” de las migraciones pendulares, de las movi- lidades circulares o de la multirresidencia.

BIBLIOGRAFÍA⁴¹

- BALÁN, J. y J. DANDLER. “Marriage process and household formation: migration in the Cochabamba region (Bolivia) and Bolivian migrants in Buenos Aires (Argentina), Ponencia presentada en el seminario L’insertion des migrants dans les villes africaines, CRDI-ORSTOM-URD, Lomé, 10 a 14 de febrero, 1987.
- BARBARY, O. y L. M. PINZÓN SARMIENTO. “L’analyse harmonique qualitative et son application à la typologie de trajectoires individuelles”, *Mathématique, informatique et sciences humaines*, n.º 144, Paris, EHESS, 1999.
- CHACKIEL, J. y M. VILLA. *América Latina y el Caribe: dinámica de la población y desarrollo*, Santiago de Chile, Naciones Unidas, 1993.
- CORTES, G. *Partir pour rester. Survie et mutations de sociétés paysannes andines (Bolivie)*, Paris, Editions IRD, 2000.
- COSIO-ZAVALA, M. E. “Industria petrolera y cambio sociodemográfico en la zona sur de Veracruz”, en *Impactos regionales de la política petrolera en México*, México, 1980.
- COURGEAU, D. *Méthodes de mesure de la mobilité spatiale. Migrations internes, mobilité temporaire, navettes*, Paris, INED, 1988.
- DEVILLE, J. C. “Analyse des données chronologiques qualitatives, comment analyser les calendriers?”, *Annales de l’INSEE*, n.º 45, 1982.
- DOMENACII, H. y M. PICOUET. “Le caractère de réversibilité dans l’étude de la migration”, *Population*, vol. 42, n.º 3, 1987.

41 No figuran aquí las referencias bibliográficas que tratan específicamente sobre Colombia; éstas se encuentran incluidas en la bibliografía general ubicada al final de esta obra.

- DUPONT, V. y F. DUREAU. "Rôle des mobilités circulaires dans les dynamiques urbaines. Illustrations à partir de l'Equateur et de l'Inde", *Revue Tiers Monde*, t. XXXV, n.º 140, 1994.
- DUREAU, F. *Migrations et urbanisation. Le cas de la Côte d'Ivoire*, Paris, ORSTOM, Collection Etudes et thèses, 1987.
- DUREAU, F. "La recolección de datos sobre movilidad espacial de las poblaciones urbanas. Algunas enseñanzas de una encuesta de migraciones realizada en Quito", en *Las nuevas formas de movilidad de las poblaciones urbanas en América Latina*, Memorias del taller CEDE-ORSTOM, Bogotá, 7 a 11 de diciembre de 1992, Documento CEDE, n.º 97, 1995.
- DUREAU, F. (ed). *Las nuevas formas de movilidad de las poblaciones urbanas en América Latina*, Memorias del taller CEDE-ORSTOM, Bogotá, 7 a 11 de diciembre de 1992, Bogotá, Documento CEDE n.º 97, 1995.
- FRÉMONT, A. "Espace vécu et niveaux sociaux" en *CNRS, Universités de Caen, Orléans, Paris 1, Rouen, Vincennes, L'espace vécu*, Coloquio realizado en Rouen, 13 y 14 de octubre de 1976, Paris, CNRS, RCP n.º 354, 1976.
- HENRY, L. *Dictionnaire démographique multilingue, volume français*, Liège, UIESP-Ordina éditions, 1981.
- LE BRIS, E.; A. MARIE, A. OSMONT y A. SINOU. *Famille et résidence dans les villes africaines. Dakar, Bamako, Saint-Louis, Lomé*, Paris, L'Harmattan, Villes et entreprises, 1987.
- MAURO, A. *Albañiles campesinos. Migración temporal de los obreros de la construcción*, Quito, Ciudad, 1986.
- POULAIN, M. "La migration, concept et méthodes de mesure", en *Migrations internes. Méthodes d'observation et d'analyse*, Louvain, UCL, 1985.
- REBORATTI, C. E. (ed.). *Se fue a volver*, Seminario sobre las migraciones temporales en América Latina, México, PISPAL-Ciudad-CENEP, 1986.

CAPÍTULO TERCERO

Dinámicas metropolitanas de poblamiento y segregación

FRANÇOISE DUREAU

OLIVIER BARBARY

THIERRY LULLE

El período de más alto crecimiento urbano, a mediados del siglo xx, fue particularmente favorable para las ciudades de la cima de la jerarquía urbana de Colombia. Junto con Bogotá, tres grandes ciudades (Cali, Medellín, Barranquilla) superan el millón de habitantes desde 1985. Más recientemente, el reforzamiento del predominio de Bogotá constituye uno de los rasgos más importantes en la evolución del sistema de ciudades colombiano. La evolución de este sistema y el papel de las migraciones en sus transformaciones fueron los objetivos de los capítulos primero y segundo. Adoptaremos ahora una nueva escala de análisis, la de gran ciudad. ¿Qué configuraciones socioespaciales se establecen en las metrópolis colombianas cuya población ha alcanzado millones? ¿Qué modificaciones de forma acompañan las transformaciones en el tamaño de las ciudades? ¿Cómo evolucionan las divisiones sociales de los espacios metropolitanos? Centrando nuestro análisis sobre la distribución espacial de las poblaciones, y adoptando así una lectura en términos de poblamiento, privilegiaremos una lectura del papel cumplido por los habitantes –a través de sus lógicas residenciales y de sus prácticas de movilidad– en la producción de las formas metropolitanas contemporáneas en Colombia. Recíprocamente, esta aproximación conducirá a preguntarnos por las modificaciones de los comportamientos de los habitantes, impuestas por la evolución de las estructuras metropolitanas.

El reconocimiento de los habitantes como actores de pleno derecho en la producción de la ciudad es reciente en Colombia. Marcada por la escuela francesa de sociología urbana (CUERVO, 1995: 2), la lectura de la ciudad desarrollada en Colombia ha privilegiado desde hace tiempo una aproximación estructuralista: las décadas de 1970 y 1980 han dado lugar a importantes trabajos sobre las formas de producción de la vivienda y el espacio urbano. Los habitantes son situados ahora frente a la escena; al tiempo que los investigadores reconocen en los ciudadanos un rol efectivo en la producción de la ciudad, los políticos les imputan una parte de responsabilidad en ciertas disfunciones urbanas. En este balanceo entre una lectura de la ciudad mediante las estructuras urbanas y otra mediante las prácticas de los habitantes, proponemos entonces poner en relación los dos niveles centrándonos sobre dos metrópolis de envergadura internacional y regional: la capital, Bogotá, y la ciudad de Cali.

El camino propuesto, enfocado en sobre las configuraciones espaciales del poblamiento y las incidencias de la movilidad sobre la división social del espacio, encuentra una resonancia particular en Colombia. Estamos en presencia de jóvenes metrópolis, que han experimentado un crecimiento particularmente rápido a mediados del siglo XX: el impacto de las transformaciones en tamaño es particularmente fuerte y el sistema de transporte, poco eficaz y socialmente muy segmentado, refuerza los efectos de distancia, las discriminaciones en el acceso a los recursos urbanos y los fenómenos de segregación espacial. En un contexto donde la autoconstrucción es responsable de entre la tercera parte y la mitad de la construcción de viviendas, las prácticas de los habitantes cumplen un papel mayor –comparativamente al de los actores¹ públicos– en la producción de la ciudad y las modalidades de urbanización. Muy profundas desigualdades en el ingreso económico atraviesan a la sociedad, que ponen en primer plano el problema del acceso a los recursos. Por último, el juicio de los políticos sobre las formas de poblamiento ha sufrido transformaciones sensibles: la segregación, considerada durante mucho tiempo como el problema número uno, ahora compite con la densidad, cuyo nivel actual se considera muy elevado². Por tanto, son argumentos que confieren toda su pertinencia a la cuestión del poblamiento en las grandes ciudades colombianas y a un análisis preciso de la geografía social de los espacios metropolitanos.

La polisemia del término *segregación* hizo correr mucha tinta (BRUN, RHEIN, 1994). Precisemos pues de entrada la posición adoptada en este texto:

[Segregación es] una aceptación puramente empírica y descriptiva, la distinción espacial entre las áreas de residencia de grupos de población que viven en una misma aglomeración (BRUN, 1994: 22).

Nuestro camino se aproxima así a los trabajos sobre las diferenciaciones sociales del espacio, en boga en la producción científica francesa hasta la década de 1970, los cuales fueron sustituidos por análisis centrados en las lógicas de

1 El papel de los políticos se analiza en detalle en el capítulo sexto de este libro.

2 Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, 2000.

ciertas categorías de actores. El acento está puesto deliberadamente sobre el factor residencial, entre otros, de la división social del espacio.

Aunque en Colombia se reconoce unánimemente el carácter muy marcado de la segregación, él está frecuentemente más presupuesto que demostrado, y poco contextualizado. El diagnóstico del fenómeno y el análisis del proceso permanecen insuficientes, a imagen de lo que J. BRUN denunció sobre Francia:

en la representación –incluida la representación erudita– [...] la percepción de los problemas sociales asociados con una forma juzgada como patógena prevalece sobre el análisis exacto de esa forma (BRUN, 1994: 40).

En tal contexto, proceder a una descripción precisa del estado de la segregación en las dos ciudades constituye un aporte al conocimiento de las ciudades colombianas, consideradas en perspectiva con otras aglomeraciones. El corpus de información recogido sobre Cali y Bogotá ofrece buenas condiciones para realizar ese diagnóstico. Los censos de 1973, 1985 y 1993³, a cuyos archivos individuales la legislación colombiana autorizó el acceso, permiten proceder a un análisis fino de las distribuciones espaciales de las poblaciones según diferentes categorizaciones. Las encuestas biográficas sobre la movilidad espacial, realizadas en Bogotá (CEDE-ORSTOM, 1993) y en Cali (CIDSE-IRD, 1998), y las observaciones antropológicas asociadas, informan sobre las prácticas de movilidad residencial. Por último, el análisis de la encuesta CIDSE-Banco Mundial (1999), unida a la encuesta CIDSE-IRD de 1998, permite captar el problema de la segregación racial en Cali.

Además de la dimensión étnica o racial (desarrollada en los países anglosajones) y la dimensión socioeconómica (la más corriente en Colombia), deben considerarse otros componentes del proceso segregativo: ellos son la traducción, en el espacio urbano, de diferencias sociales en el sentido amplio del término y conducen a la formación, en esos mismos espacios, de culturas y modos de vida particulares. Así, en este capítulo, igualmente tendremos en cuenta el origen migratorio (a través de la localización residencial de diferentes grupos de inmigrantes que se instalan en Bogotá y Cali) y la dimensión demográfica de la segregación (captada a través de la edad de los individuos

3 Las fuentes de información, los censos y las encuestas, se presentan en el anexo 2.

y el tamaño de las familias). Comprender bajo el mismo término *segregación* varias formas de diferenciaciones sociales del espacio no significa que ellas procedan de un mismo sistema causal. Al contrario, esta aproximación pluridimensional a la segregación permite justamente abordar “el problema de la imbricación entre los diferentes registros de la distancia social” (GRAFMEYER, 1994: 105), inevitablemente evacuado en los análisis que no tienen en cuenta la dimensión socioeconómica o sociorracial de la segregación.

Una voluntad de comparación entre Bogotá y Cali ha guiado la definición de los temas del análisis, las elecciones metodológicas para los tratamientos estadísticos y cartográficos, y la presentación de los resultados: los indicadores y los mapas han sido establecidos para las mismas variables en las dos ciudades. Sólo el análisis de la dimensión racial de la segregación llevado a cabo en Cali queda pendiente para Bogotá. En su estudio sobre las poblaciones negras de Bogotá realizado en 1996, C. MOSQUERA retoma una frase del discurso bogotano común: “Acá antes no se veían negros”, para subrayar a la vez la “invisibilidad tradicional” de esta población y su aparición reciente en algunos barrios de Bogotá. Desde entonces, flujos de migración económica y de población de refugiados originarios del Pacífico y de la región Caribe han traído consigo la instalación de población negra en algunos barrios donde antes estaba completamente ausente. Pero, en total, la población negra sigue siendo muy minoritaria en Bogotá (8%), sin comparación con su importancia en Cali (26%)⁴, y no disponemos de datos estadísticos confiables que conduzcan a una identificación fenotípica de la población.

Esta aproximación dinámica, comparativa y pluridimensional a las configuraciones socioespaciales de Bogotá y Cali será desarrollada en tres partes.

La primera parte trata sobre el modelo de crecimiento que se presenta en las dos ciudades. Los ritmos de crecimiento, las formas de expansión y la distribución espacial de las densidades estarán en el centro de este análisis del poblamiento de los dos sistemas metropolitanos. Evaluaremos el alcance del modelo puesto en evidencia y su posible especificidad latinoamericana. Por último, interrogaremos las articulaciones entre esas historias urbanas y las trayectorias residenciales de los habitantes.

4 Según la ENH, 2001.

Una vez establecido este marco general, la reflexión se orientará hacia las divisiones sociales de los espacios urbanos. La diversidad de dimensiones de la segregación estructura esta segunda parte según tres factores de diferenciación social de los espacios de Bogotá y Cali: la condición social de los hogares, sus características demográficas y los orígenes de los migrantes. Las distribuciones espaciales de la población serán interpretadas a la luz de sus comportamientos residenciales, fuertemente diferenciados. Por último se tratarán los sistemas de representación de la segregación entre quienes producen la ciudad, habitantes y gestores.

En la tercera parte, consagrada a la dimensión racial de la segregación en Cali, comenzaremos describiendo el papel de ese factor en la distribución espacial de la población, teniendo en cuenta el mestizaje afroamericano: la población negra será distinguida de la población afrocolombiana en su conjunto. Sobre la base de índices de segregación, a continuación realizaremos una comparación con Estados Unidos; para terminar nos interrogaremos sobre el peso del factor racial entre las otras dimensiones del proceso segregativo, en particular, sobre la escala fina de los barrios y las viviendas.

I. FORMAS DE DESARROLLO Y CONFIGURACIÓN DE LOS ESPACIOS METROPOLITANOS

El análisis de las dinámicas socioespaciales de Bogotá y Cali, y la posterior puesta en perspectiva de esas dinámicas con los modelos de urbanización en otras regiones del mundo, muestran las principales especificidades del crecimiento de estas grandes ciudades colombianas. En estas jóvenes metrópolis, la historia de la ciudad, de sus barrios y las trayectorias residenciales de sus habitantes se articulan de manera singular.

A. BOGOTÁ: EXPANSIÓN ESPACIAL, DENSIFICACIÓN Y METROPOLIZACIÓN

A comienzos del siglo xx, Bogotá contaba apenas con 100.000 habitantes. A fines de 1930, el crecimiento demográfico anual permanecía aproximadamente en un 3%, mientras la ciudad registra en la misma época la más alta tasa de expansión espacial de su historia (7%): la figura arquitectónica del “barrio”

hace su aparición en la periferia, en discontinuidad con el antiguo núcleo urbano.

1. 1940-1970: UNA EXPANSIÓN ESPACIAL MUY RÁPIDA

A partir de la década de 1940, un rápido crecimiento natural y una intensa migración de origen rural aceleraron sensiblemente el ritmo de crecimiento demográfico: la tasa alcanza un 7% anual entre 1951 y 1964, y después un 6% entre 1964 y 1973. La población pasa entonces de 330.000 habitantes en 1938 a cerca de tres millones en 1973. La expansión espacial es aún más rápida: Bogotá estaba 12 veces más extendida en 1973 que en 1938. La densidad de población alcanza entonces su mínimo, pues está bajo el umbral de los 100 habitantes por hectárea a principios de los años 1970 (tabla 3.1).

TABLA 3.1
EVOLUCIÓN DE LA DENSIDAD. BOGOTÁ (1938-1995)

	1938	1958	1964	1973	1985	1993	1995
Población urbana	330.000*	1.130.000*	1.661.935	2.845.361	4.227.706	5.469.105	
Area urbanizada (ha.)	2.514*	8.084*	14.605*	30.423**	33.149**	37.847**	
Densidad (hab./ha.)	131*	140*	114	94	127	145	162***

Fuentes: Censo de población (DANE, población ajustada).

* JARAMILLO (1990)

** MONTEZUMA (1997).

*** Alcaldía de Bogotá (1996).

El extenderse sobre las tierras de la sabana está acompañado por el establecimiento de una nueva organización espacial. El centro tradicional, cuya función comercial y financiera se afirma, es abandonado por las clases acomodadas a cambio de localizaciones más septentrionales, al pie de los cerros situados al oriente. Simultáneamente, se acentúa el carácter popular del sur, mientras la naciente industria se concentra en el oeste de la ciudad, en inmediaciones de la Estación del Ferrocarril. Desde los años 1950, se encuentran así dispuestas las estructuras mayores de Bogotá, que se acentuarán posteriormente. Las clases acomodadas prosiguen su continuo desplazamiento hacia el norte, mientras el frente de expansión hacia el sur de la ciudad es un hecho propio

de las clases pobres. En cuanto a las clases medias, cuyas cifras crecen rápidamente durante este período, ocupan los barrios centrales abandonados por las familias acomodadas, o bien los nuevos barrios del occidente. Esta división social de los espacios residenciales está acompañada por la consolidación de una estructura funcional articulada alrededor de un eje terciario centro-norte y de un eje industrial centro-occidente.

Las viviendas destinadas a las clases medias y acomodadas son en su mayoría producidas en forma individual (*por encargo*, según la terminología propuesta por JARAMILLO): quien accede a la propiedad hace construir su casa sobre el terreno adquirido, por un maestro de obras o un arquitecto. La producción legal de vivienda social resulta muy claramente insuficiente en relación con la demanda⁵. Para alojarse, las poblaciones pobres, mayoritarias, deben entonces compartir con otros hogares viviendas en arriendo en el antiguo centro (inquilinos) o, más frecuentemente, recurrir a la autoconstrucción sobre terrenos periféricos ocupados ilegalmente⁶. Las formas muy segmentadas de producción de vivienda generan una fuerte heterogeneidad en la ocupación del espacio metropolitano, y dibujan un mapa de densidades bastante alejado del modelo concéntrico (mapa 3.1): a los barrios recién urbanizados mediante la producción ilegal de viviendas, donde las densidades permanecen inferiores a los 50 hab./ha., se oponen algunos sectores del centro histórico o del pericentro sur, donde la densidad supera a los 500 hab./ha.

2. LA DÉCADA DE 1970: EL INICIO DE LA METROPOLIZACIÓN⁷

Bajo el efecto de la transición demográfica y de un descenso en la intensidad de la migración, Bogotá ingresa en una fase de crecimiento demográfico menos

5 Entre 1964 y 1973, los dos organismos a cargo de la vivienda social en Bogotá no produjeron más que 35.000 viviendas, es decir, el 16% de las construidas durante ese período (JARAMILLO, 1990).

6 En Bogotá, como en Cali, contrariamente a lo ocurrido en muchas otras ciudades de América Latina, la invasión permanece como un fenómeno minoritario en el proceso de ocupación ilegal de los terrenos. La urbanización pirata constituye el medio más común.

7 Se refiere al desbordamiento del crecimiento de Bogotá en su periferia metropolitana.

rápido: la tasa pasa por debajo del 4% anual a mediados de los años 1970. La intensa migración rural de los decenios precedentes prosigue no obstante sus efectos: en razón de las modificaciones que ella ha aportado a la estructura por sexo y edad de la capital, el ritmo de crecimiento natural permanece elevado (cap. primero y secciones A y C del capítulo segundo).

Al interior del Distrito⁸, la dinámica de crecimiento varía fuertemente: mientras las localidades centrales pierden población entre 1973 y 1985, otras, todas en la periferia, presentan ritmos de crecimiento muy rápidos (entre 7,5% y 12,5% anuales). La expansión anterior, a lo largo de los ejes de comunicación, que había dejado numerosos intersticios desocupados, cede su lugar a una ocupación más general del espacio al interior del perímetro urbano. El inicio de la construcción en altura provoca la aparición de sectores con densidades muy elevadas: éste es especialmente el caso en el noroccidente, donde se multiplican los edificios de apartamentos para las clases medias. En cuanto al centro histórico, incluso cuando experimenta una pérdida de población entre 1973 y 1985, conserva una densidad elevada.

Los ritmos de crecimiento de los municipios vecinos de Bogotá muestran que esta dinámica de poblamiento franquea los límites del Distrito. Integrados en esta dinámica de crecimiento metropolitano, los municipios periféricos más próximos (Soacha, Chía, Cota) experimentan una clara aceleración de su crecimiento⁹. Desde 1973, la población del Distrito de Bogotá aumenta a un ritmo menos rápido (3,3%) que el de los 17 municipios que componen la periferia metropolitana (4,7%).

3. DESDE LOS AÑOS 1980:

NUEVAS LÓGICAS RESIDENCIALES A ESCALA METROPOLITANA

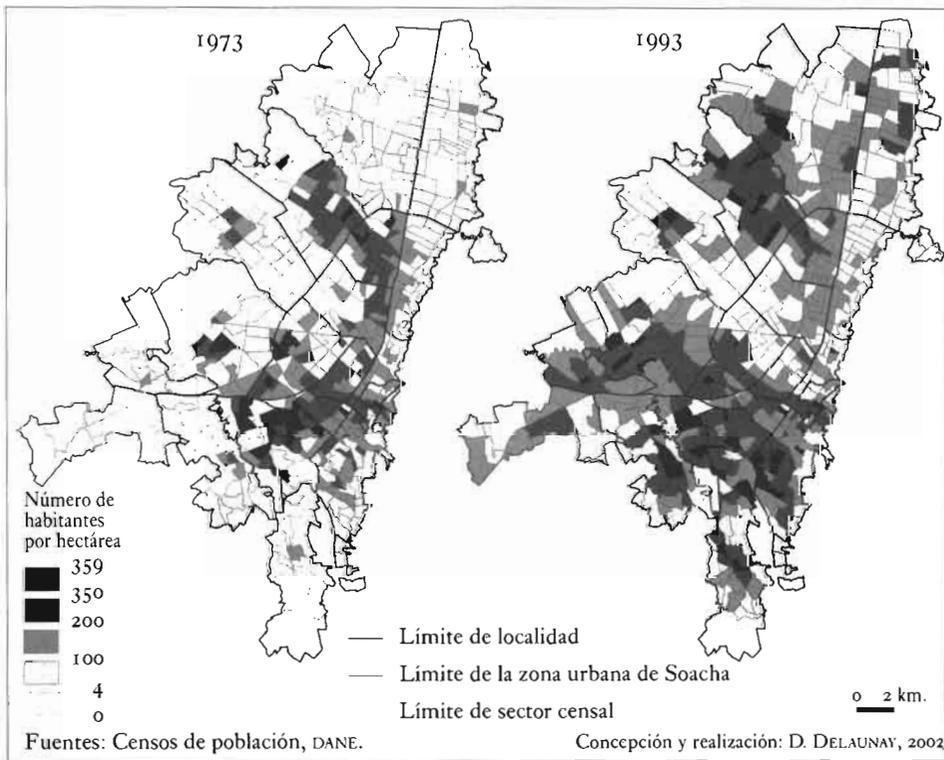
A comienzos de los años 1990, el Distrito de Bogotá cuenta con 5.5 millones de habitantes y su crecimiento se mantiene en un ritmo sostenido (3,3% anual). La densidad aumenta sensiblemente y en 1993 recobra el nivel que tenía medio siglo antes (tabla 3.1). Esta evolución resulta a la vez de la progresiva

8 Cfr. en el anexo 3, las definiciones del Distrito de Bogotá y de las áreas metropolitanas de Bogotá y Cali.

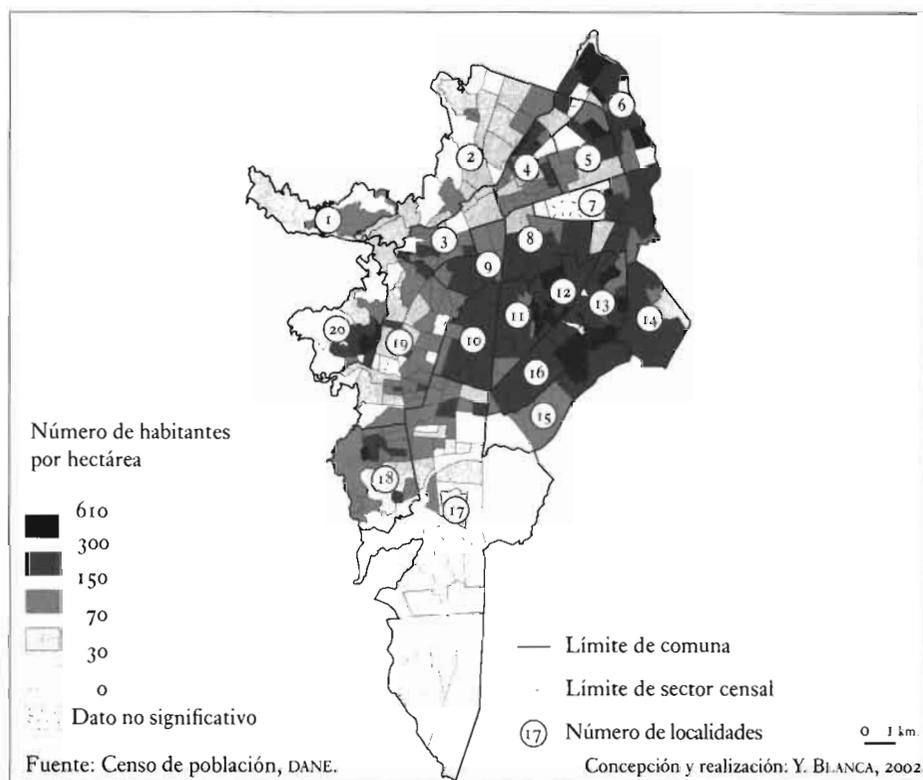
9 Desde el período de 1964-1973 hasta el de 1973-1985, las tasas de crecimiento pasan del 5,1% al 9,3% en Soacha; del 3,5% al 5,1% en Chía; y del 2,5% al 4,7% en Cota.

densificación de los espacios periféricos nuevamente urbanizados y de la rápida redensificación de ciertos espacios pericentrales (mapa 3.1). Al mismo tiempo, la dinámica de expansión espacial se ejerce, cada vez más intensamente, más allá de los límites del Distrito. Entre 1985 y 1993, el ritmo de crecimiento de la periferia metropolitana es dos veces más rápido que el de la capital (6,1% contra 3,3%), y diez veces mayor que el de otros municipios de Cundinamarca (0,6%). Un quinto del crecimiento demográfico total del área metropolitana se cumple entonces fuera de los límites del Distrito, en una periferia que integra un creciente número de municipios que cumplen papeles específicos al interior del sistema metropolitano: el proceso de diferenciación socioespacial tiende a prolongar al exterior de Bogotá las formas de segregación presentes en la capital. Volveremos sobre este punto en la sección II.A.

MAPA 3.1
DENSIDAD DE POBLACIÓN EN BOGOTÁ EN 1973 Y 1993



MAPA 3.2
DENSIDAD DE POBLACIÓN EN CALI EN 1993



Edición: O. PISSOAT

Los años 1980 marcan un giro importante en la historia de la ciudad. La competencia por el acceso al suelo deviene más fuerte: la extensión de la ciudad debe afrontar los relieves que bordean a Bogotá al sur y al oriente, pero también las grandes propiedades agrícolas al occidente, dedicadas en parte al cultivo intensivo de flores. Las distancias creadas por la expansión espacial de los decenios precedentes, reforzadas por los problemas de transporte, producen cambios en las elecciones residenciales de la población. Los hogares más pobres—frente a los cuales la acción del Estado sigue siendo muy insuficiente—ocupan tierras en diversas localizaciones del Distrito (suroccidente, extremo norte, noroccidente), sobre relieves accidentados del sur y en los municipios periféri-

cos, como Soacha. En las mismas afueras del sur, la construcción de conjuntos cerrados ofrece a las clases medias la oportunidad de satisfacer, en buenas condiciones financieras, su ideal de vivienda. Algunas familias acomodadas se instalan en la periferia norte (Chía, Cota), donde buscan la calidad de vida que no pueden encontrar en una ciudad atestada, polucionada y que carece de espacios verdes; otras familias de altos ingresos, que aspiran a un acercamiento a sus lugares de trabajo, se contentan con una oferta importante de viviendas de alta categoría situadas en el pericentro norte, cerca del principal centro de negocios de la capital. En un marco reglamentario bastante laxo, y bajo una política pública de vivienda que favorece a las clases medias y altas, las aspiraciones residenciales de las diferentes categorías de población se combinan con las estrategias de los constructores para producir profundos cambios en las características del espacio residencial y la estructura del poblamiento metropolitano. Sin que sea resultado de una política voluntarista por parte de los poderes públicos, y mientras la metropolización prosigue, comienza un movimiento de densificación del Distrito.

En cuestión de medio siglo, la ciudad compacta de medio millón de habitantes ha sido reemplazada entonces por una metrópoli de más de seis millones de habitantes en 1993. El desarrollo espacial periférico en vigor hasta los años 1970, ha sido reemplazado por un nuevo modelo de desarrollo, más endógeno y metropolitano:

- El crecimiento natural se convierte en el motor principal del crecimiento demográfico, y las movilidades intraurbanas en el principal factor de la dinámica del poblamiento.

- El espacio ya urbanizado conoce transformaciones y rápidos procesos de redensificación.

- La expansión urbana se ejerce de todos modos sobre los municipios limítrofes, mientras otros municipios polarizan el proceso de metropolización.

B. ¿CALI SIGUE EL MISMO MODELO?

La evolución demográfica de Cali sigue la misma tendencia de Bogotá. La dinámica demográfica de las dos ciudades es resultado de dos grandes fenómenos de la historia demográfica nacional: la transición demográfica

—iniciada desde fines de los años 1930— y el descenso en la intensidad de los flujos migratorios en dirección hacia las grandes ciudades —desde mediados de los años 1970—. En el curso de los decenios de 1950 y 1960, se conjugan un crecimiento natural rápido y una migración intensa de origen rural, polarizada por las cuatro ciudades más grandes del país (cap. primero): la tasa de crecimiento de Cali sobrepasa entonces el 6% anual. Desde los años 1970, disminuye progresivamente el ritmo de crecimiento de Cali hasta alcanzar el 3.1% entre 1973 y 1985, y se estabiliza allí hasta 1993. Más allá del paralelismo entre las evoluciones demográficas de las dos metrópolis, rasgo característico de la dinámica del sistema urbano colombiano, ¿qué ha sido de la dinámica socioespacial? ¿La semejanza entre las evoluciones demográficas se reencuentra en su modelo de desarrollo?

I. UNA INTENSA EXPANSIÓN ESPACIAL, PERO AÚN CONTENIDA EN LOS LÍMITES MUNICIPALES

Las densidades de Cali y Bogotá son comparables a principios de los años 1990, cuando alcanzaban el orden de los 150 hab./ha. Pero esta similitud es producto de evoluciones diferentes. En Cali, las densidades brutas, sensiblemente más elevadas que en Bogotá durante la década de 1950, caen 100 puntos en 35 años (tabla 3.2): la caída es mucho más acusada que en Bogotá, lo que testimonia un movimiento de expansión urbana muy activo y aún vigente durante los años 1990. El territorio municipal de Cali todavía no ha sido completamente urbanizado y la expansión urbana continúa cumpliéndose en su interior: la ampliación del perímetro urbano de Cali sigue integrando progresivamente las tierras periféricas pertenecientes a grandes propietarios, que buscan obtener una renta territorial urbana¹⁰. Entre 1993 y 1998, las comunas más dinámicas

10 Después de la integración de tierras de las haciendas del oriente del municipio —durante las décadas de 1950 a 1970—, a fines de los años 1990 se observa la integración de la parcelación de Desepaz, y se constituye así la comuna 21 de Cali. También en Bogotá, la ampliación del perímetro administrativo del Distrito ha acompañado al movimiento de expansión urbana. En 1954, seis municipios limítrofes fueron anexados al Distrito y transformados en alcaldías menores (luego localidades), pero este movimiento de anexión administrativa de municipios por parte del Distrito se detuvo entonces.

de Cali se encuentran todas en situación periférica (al sur, a lo largo de los cerros occidentales y al oriente), mientras los sectores pericentrales pierden población. El movimiento de densificación observado en Bogotá desde fines de los años 1970 no se cumple en Cali.

Más allá de estas diferencias de intensidad y temporalidad en los procesos de expansión, en Cali la distribución espacial de las densidades presenta, en 1993 (mapa 3.2), una característica común con la de Bogotá: la diferenciación muy marcada de los espacios residenciales. Las débiles densidades de los sectores residenciales de las clases acomodadas se oponen a las —más elevadas— de las zonas populares que continúan densificándose. Tanto en Cali como en Bogotá, las diferencias respecto al consumo del espacio según los estratos sociales son muy marcadas.

TABLA 3.2
EVOLUCIÓN DE LA DENSIDAD. CALI (1945-1993)

	1945*	1958*	1970*	1993 ajustada**
Población urbana	154.860	455.070	846.045	1.809.054
Area urbanizada (ha.)	730	1.850	3.900	11.939
Densidad bruta (habitantes/ha.)	212	246	217	152

Fuentes: * VÁSQUEZ BENÍTEZ, 2001: 270. ** Censos del DANE.

2. LA METROPOLIZACIÓN EN CALI: FACTORES ENDÓGENOS Y EXÓGENOS

Si se considera su periferia metropolitana, el desfase entre la dinámica de las dos ciudades se pone más de manifiesto. En Cali, el dinamismo demográfico aún no cruza los límites del municipio. Hasta 1985, la población de Cali aumenta más rápidamente que la de la periferia; el ritmo de crecimiento de la periferia no se acerca al del centro de la ciudad más que en el curso del último período intercensal (1985-1993). El análisis, detallado por municipios de la periferia metropolitana, refuerza la idea de un proceso de metropolización diferente en las dos ciudades. Los ritmos de crecimiento de los municipios periféricos de Cali permanecen moderados desde la perspectiva de los que

fueron observados en la periferia de Bogotá: ninguno supera el 5% anual entre 1985 y 1993, mientras que ése es el caso de la mitad de los municipios de la periferia de Bogotá.

El municipio de Palmira, donde se concentra más de la mitad de la población de la periferia metropolitana de Cali, y que ha visto disminuir su ritmo de crecimiento regularmente desde 1951, para alcanzar un 1% entre 1985 y 1993, es un ejemplo del proceso descrito en el capítulo primero: la proximidad a una metrópoli puede tener efectos contradictorios, de activación o de freno del crecimiento. El aeropuerto de Cali, situado en este municipio, ha conducido a la creación de una zona franca e industrial, pero la mayoría de los trabajadores van y vienen cotidianamente desde Cali a sus empleos. En Palmira, como en Yumbo, los polos de empleo industrial no están acompañados de movi­lidades residenciales importantes de mano de obra hacia estos municipios. Esto se explica, en primer lugar, por el hecho de que el municipio de Cali ha ofrecido en su seno, durante todo el período de desarrollo de esos polos de actividad, soluciones residenciales al alcance del conjunto de categorías de mano de obra; en segundo lugar, a causa de la ventaja comparativa de residir en Cali, en términos de servicios urbanos y acceso a educación y salud; por último, debido a la facilidad de acceso a esas zonas industriales por medio del transporte público.

Desde comienzos de los años 1990, el norte del Departamento del Cauca es integrado al proceso de metropolización (JIMÉNEZ, 1999: 190): es en ese departamento donde se encuentra el municipio más dinámico de la periferia metropolitana caleña entre 1985 y 1993; se trata de Puerto Tejada, ciudad-dormitorio que alberga a una mano de obra en su mayoría poco calificada, que trabaja en las explotaciones azucareras de la región o en la industria y los servicios en Cali. Más recientemente, a partir de mediados de los años 1990, el dinamismo de los municipios del norte del Cauca es reforzado por la intervención pública. Aspirando a “reactivar social y económicamente una región deprimida durante mucho tiempo y devastada el 6 de junio de 1994 por un seísmo” (JIMÉNEZ, 1999: 172), la Ley 218 de 1995 (llamada “Ley Paez”) concede importantes ventajas fiscales a las empresas situadas en 25 municipios del Cauca y 13 del Huila. Manifiestamente, esta Ley ha contribuido a concentrar a la población y la producción en los municipios del norte del Cauca próximos

a Cali. En el contexto de la aguda crisis económica que atravesaba la región, ella ha favorecido la creación de empresas en la cuenca de empleo de Cali, limitando sin duda la alarmante elevación del desempleo en esta ciudad pero en detrimento de su objetivo oficial, que era dar empleo a las poblaciones locales afectadas por el sismo. Algunas inversiones previstas en las zonas francas de Palmira se trasladaron a los municipios del norte del Cauca, para beneficiarse de las ventajas fiscales (JIMÉNEZ, 1999: 175)¹¹. La reactivación económica de Cali tiene lugar actualmente en los municipios de su periferia metropolitana situados en el departamento vecino (el del Cauca), que acaparan la proximidad con la metrópoli regional y las exenciones fiscales.

¿Qué concluir sobre la dinámica de metropolización en curso en Cali, en relación con la observada en Bogotá? Tanto las temporalidades como la intensidad y las modalidades del proceso distinguen a las dos ciudades:

– En Cali no hay extendimiento de la aglomeración urbana en los municipios contiguos, mientras en Bogotá la conurbación desborda los límites del Distrito; la expansión urbana de Cali –sin embargo, actualmente más activa– se realiza aún en el perímetro del municipio, en razón del “tratamiento administrativo” que todavía recibe.

– En los dos casos, hay integración de municipios periféricos que aseguran funciones residenciales con destino a segmentos específicos de la población, y también polarización del crecimiento económico sobre ciertos municipios que se benefician de inversiones productoras de empleo.

– Pero hay un rol de la metrópoli central menos importante en Cali que en Bogotá. La dinámica de metropolización alrededor de Cali combina los efectos espaciales propios de la capital regional (polarización), con los efectos espaciales de la Ley Paez, que favorece a los municipios del sur de la periferia metropolitana situados en el departamento del Cauca. Mientras que en Bogotá la capital organiza completamente la dinámica metropolitana, la evolución del proceso de metropolización alrededor de Cali se inscribe en una dinámica regional de

11 Según las cifras de las Cámaras de Comercio del Valle del Cauca y del Cauca, retomadas por JIMÉNEZ (1999: 181), las inversiones correspondientes a la creación de sociedades, incluidas todas las ramas de actividad, pasaron entre 1994 y 1996: de 96 a 41 millones de dólares en el sur del Valle del Cauca, y de 0,6 a 83 millones en el norte del Cauca.

concentración demográfica y económica, que implica a dos departamentos y un factor relativamente exógeno a la ciudad (la Ley Paez).

C. ¿UN MODELO DE DESARROLLO LATINOAMERICANO?

La aceleración del crecimiento demográfico de las grandes ciudades en los años 1950, y luego su disminución a partir de los años 1970, son fenómenos generalizados en América Latina (COSIO-ZAVALA, 1994). Las modificaciones aportadas por las migraciones de origen rural a la estructura por sexo y edad, mantienen, no obstante, las tasas de crecimiento en un nivel elevado, del orden del 3% anual a comienzos de los años 1990¹². Bogotá y Cali siguen entonces una dinámica demográfica compartida a nivel del continente: los ritmos y las evoluciones de su crecimiento no tienen nada de excepcional.

Igualmente, las apreciaciones sobre la densidad de estas ciudades, durante mucho tiempo juzgada “muy débil” y que recientemente ha devenido “muy elevada”, no resisten la comparación internacional. En 1990, las densidades brutas de Bogotá y Cali son por cierto inferiores a la de Lima (225 hab./ha.) y de otras grandes ciudades del continente¹³, pero son del mismo orden que las observadas en Buenos Aires (144), Guadalajara (153), y bastante superiores a las de São Paulo (92), Rio de Janeiro (81) o Montevideo (71)¹⁴. Es claro que la comparación resulta difícil: siguiendo el “tratamiento administrativo” conferido a la expansión urbana y al proceso de metropolización, las cifras abarcan realidades muy variables. Pero la constante permanece: Bogotá y Cali no se distinguen de sus homólogas del continente, ni en el plano de la evolución demográfica global ni en el de los niveles de densidad.

Sin duda, las referencias a la ciudad densa y a los ritmos de crecimiento observados en Europa —a veces convertidos en normas implícitas por los urba-

12 Según estadísticas de Naciones Unidas citadas por COSIO-ZAVALA (1994: 52), las únicas excepciones son Buenos Aires y Rio de Janeiro, con un desarrollo más precoz: sus tasas ya han pasado por debajo del 2%.

13 Según la base Geopolis (MORICONI-EBRARD, 1994), el promedio de las densidades observadas en las 21 ciudades latinoamericanas de más de un millón de habitantes, era del orden de 206 hab./ha. en 1990.

14 Según estadísticas de Naciones Unidas, citadas por R. MOHAN (1994).

nistas— han contribuido a forjar la imagen de una excepción colombiana. Pero esta explicación no es suficiente. Los motores y las modalidades de la expansión periférica (urbanización ilegal en Bogotá, especulación territorial por parte de los grandes propietarios permitida por las concesiones y autorizaciones para construir por parte de la Alcaldía de Cali¹⁵) convierten también esta extensión continua en algo difícilmente aceptable. Indudablemente, son estas mismas razones las que hoy en día tornan problemática la densificación de los barrios populares periféricos de Bogotá. Sea como fuere, tanto en Colombia como en los otros países de la región, la gestión urbana se ha concentrado durante muchos decenios en la expansión, antes de comenzar a interesarse, en el transcurso de la década de 1990, en la gestión de los espacios ya urbanizados.

Sin embargo, un punto ya señalado a lo largo del análisis sobre las etapas de desarrollo en Bogotá y Cali diferencia claramente a las dos ciudades (y sin duda al conjunto latinoamericano) de los modelos generales elaborados en Europa y en Norteamérica: la distribución espacial de las densidades. Según el modelo de CLARK (1951), las densidades disminuyen con la distancia respecto al centro de la ciudad. Desde la formulación inicial de este modelo, numerosos trabajos han mostrado su pertinencia aunque subrayando una recurrente anomalía: “la formación de un cráter central en la superficie de las densidades” (DUPONT y PUMAIN, 2002: 16). En 1973, e incluso más claramente en 1993, se observan efectivamente las máximas densidades en el pericentro de Bogotá y no en pleno centro (mapa 3.1).

En cambio, el modelo de decrecimiento de las densidades respecto de la distancia desde el pericentro, todavía presente en Bogotá en 1985, se vuelve más legible en el mapa de las densidades de 1993 (mapa 3.1) y no se reencuentra en lo absoluto en la cartografía de las densidades de Cali en 1993 (mapa 3.2). En Bogotá, la organización concéntrica del modelo de distribución de las densidades está muy alterado debido a una organización sectorial: dos sectores de bajas densidades (ejes norte y occidente) alternan con dos sectores de fuertes densidades (eje noroccidental y cuadrante suroccidental) (mapa 3.1). Igualmente, la evolución de la distribución espacial de las densidades en

15 A propósito de este aspecto, cfr. APRILE GNISET (1990: 5 a 10; 33 a 60).

Bogotá, durante un período de veinte años, contradice la tendencia a la uniformidad en los niveles de la densidad al interior del espacio urbanizado, que se ha observado en el mundo desarrollado (DUPONT y PUMAIN, 2002: 4). En la capital colombiana, entre 1973 y 1993, las diferencias entre las densidades de los sectores de la ciudad no se reducen en manera alguna.

El conjunto de estas observaciones de la geografía de las densidades en Bogotá y Cali conduce a la misma conclusión: la importancia del factor socioeconómico en el modelo de desarrollo de las grandes ciudades colombianas. Es este factor el que deforma la organización concéntrica “ideal” de los modelos de densidad y mantiene en un nivel elevado las desigualdades en la densidad. L. M. CUERVO y S. JARAMILLO defienden la idea de un modelo de urbanización latinoamericana ligado a una “cierta especificidad de la lógica socioespacial” en América Latina (CUERVO, JARAMILLO, 1998: 1). Nuestros análisis tienden a validar su hipótesis: la composición social de la población, con una menor importancia de las clases medias en las sociedades latinoamericanas que en las europeas, en efecto explicaría en parte una polarización socioespacial muy fuerte, que modularía –sin por ello sustituirlo– al modelo de poblamiento urbano observado en otros continentes. La sección II, consagrada al proceso de segregación, nos dará la ocasión de retomar y poner a prueba esta hipótesis. Pero antes, detengámonos en las relaciones que establece este modelo de desarrollo con las prácticas residenciales de los habitantes.

D. ELECCIONES RESIDENCIALES Y MOVILIDADES ESPACIALES EN UNA CIUDAD EN CONSTRUCCIÓN

Durante muchos decenios, la adecuación entre las formas de producción de vivienda mayoritaria –la de los pobres– y las características del sistema de transporte, le han permitido a Bogotá desarrollarse en una expansión sin freno sobre las tierras planas de los alrededores: las formas de organización del transporte en Bogotá confirieron una gran flexibilidad al sistema, pues pusieron en comunicación a los barrios periféricos desde su aparición. Desde los años 1980, la capital colombiana debe enfrentar una nueva situación: no está asegurada la disponibilidad de tierras, recurso necesario para la reproducción del sistema metropolitano según el modelo de crecimiento de los decenios anteriores. El

uso intensivo de tierras agrícolas, las estructuras de la tenencia de la tierra y la presencia de los cerros frenan las posibilidades de expansión territorial. El efecto del tamaño de la ciudad, alcanzado a lo largo de los anteriores decenios de crecimiento, también se hace sentir en la movilidad cotidiana: en un territorio extendido sobre más de 40.000 hectáreas, la accesibilidad general a los diferentes lugares de la ciudad ya no está asegurada, tanto más cuando el escalonamiento urbano no ha sido acompañado por una suficiente producción de vías públicas. Desde los años 1990, el golpe de gracia proviene del repentino aumento del parque automotor bajo los efectos de la apertura económica. Las velocidades de desplazamiento —en especial en el norte de la ciudad, donde la tasa de equipamiento vehicular es elevada— bajan sensiblemente, lo cual produce una revalorización de la proximidad geográfica.

Los contextos físico, humano y económico locales sin duda imprimen características particulares a las modalidades de urbanización de Bogotá. La amplitud y rapidez de las transformaciones —el conjunto de fenómenos que constituyen esta historia se desarrolla en menos de medio siglo— carecen sin duda alguna de parangón en otros lugares y contribuyen también a conferirle cierta especificidad a Bogotá. Pero también tienen el mérito de hacer más legibles ciertas evoluciones compartidas de todas maneras por numerosas metrópolis del Sur:

- La movilidad residencial intraurbana se convierte en un componente importante de la dinámica del mercado de vivienda: en 1991, el número de viviendas liberadas en Bogotá gracias a la movilidad intraurbana era tres veces más grande que el número de viviendas nuevas producidas (alrededor de 50.000); esta proporción, signo de una “madurez del sistema metropolitano”, va en aumento.

- La movilidad cotidiana tiene un creciente papel respecto a los vastos territorios con recursos muy desigualmente repartidos.

La evolución de la población (su composición, pero también sus estrategias residenciales y sus modelos familiares), las transformaciones del parque inmobiliario, la circulación de las viviendas y las movilidades residenciales han devenido elementos esenciales en la dinámica, e imponen la superación de una lectura de la ciudad limitada a las formas de producción de la vivienda y del espacio urbano. La etapa histórica en la que se encontraba Bogotá durante los

años 1960-1970 justificaba esa aproximación centrada sobre la producción del espacio urbano. En lo sucesivo, la investigación y la gestión urbanas no pueden concentrarse ya exclusivamente sobre el componente de la “producción”: los *stock* (de población, de espacio urbanizado, de viviendas) se han convertido en un dato relevante.

Este cambio del modelo de crecimiento de Bogotá en un tiempo breve también altera las relaciones recíprocas entre las prácticas residenciales de los habitantes y la configuración urbana. Mientras se desarrolla el ciclo de vida de los ciudadanos, la ciudad se construye y se transforma. Esta simultaneidad de las temporalidades –tiempo biográfico y tiempo de la ciudad– define un contexto singular que es importante caracterizar antes de pasar a la dimensión social del poblamiento, objeto de la sección II de este capítulo.

Entre los compromisos que presiden las elecciones de localización y determinan las trayectorias residenciales, la pertenencia al barrio, el acceso a la propiedad y la cercanía a los parientes cumplen un papel importante, y eso vale para todas las clases sociales de Bogotá¹⁶. En la ciudad compacta de la primera mitad del siglo XX, esos tres objetivos eran compatibles. Por el contrario, entre las décadas de 1960 y 1970, descohabitar¹⁷ o acceder a la propiedad en lo más fuerte del movimiento de expansión de Bogotá significaba exiliarse en la periferia para un buen número de familias de clases popular o media, que no encontraban dónde instalarse en el saturado parque residencial del centro. En esta fase de la historia de la ciudad, descohabitar y acceder a la propiedad entrañaban frecuentemente una dilatación de los espacios de movilidad intraurbanos, tradicionalmente muy concentrados, y el alejamiento del domicilio de

16 Los análisis finales de las tablas cualitativas y cuantitativas de las encuestas CEDE-ORSTOM sobre la movilidad espacial en Bogotá, ponen en evidencia la importancia de esos factores, presentes en diversos grados en todas las clases sociales. Cfr. los informes intermedios producidos entre 1993 y 1997 y, entre las publicaciones más recientes: DUREAU (2000a); DUREAU (2002); DELAUNAY y DUREAU (2002).

17 La descohabitación es “el proceso a través del cual un individuo abandona la vivienda que compartía con otras personas [...] Generalmente se trata de descohabitación juvenil, es decir cuando los jóvenes abandonan el domicilio de los padres” (cfr. M. SEGAUD, C. BONVALET y J. BRUN [dir.]. *Dictionnaire de l’habitat et du logement*, Paris, Armand Colin, 2003, p. 105).

los parientes. Para las generaciones que accedieron a la autonomía residencial después de mediados de los años 1980, la configuración urbana y la distribución del parque de viviendas no imponen tal dispersión de su trayectoria residencial: con la consolidación de los barrios periféricos y la oferta de arriendos que engendra, los recorridos residenciales pueden realizarse de nuevo en un perímetro restringido, lo cual permite conservar a la vez una misma posición en el conglomerado y la proximidad residencial con los parientes.

Esto se observa más claramente mediante el ejemplo de la proximidad familiar: según la época, una misma lógica residencial se traduce de manera distinta en términos de la localización y tendrá consecuencias variables sobre las configuraciones espaciales del poblamiento. Las prácticas residenciales son forzadas fuertemente por las etapas de desarrollo y las rápidas transformaciones que sufre la configuración de una ciudad en pleno crecimiento. Este contexto vuelve muy legible el criterio de la localización en las elecciones residenciales. En posición relativa en la ciudad del momento, la localización de la vivienda es seleccionada en favor de cierto tipo de relación con la aglomeración. Junto a la reforma de tenencia de la ocupación y los atributos físicos de la vivienda (tamaño, comodidad, etc.), la localización determina –según los grupos sociales– cierto acceso a los recursos ofrecidos en diferentes sitios de la ciudad: empleos, equipamientos, servicios, comercios, pero también la mutua ayuda familiar. La localización también determina el acceso a los recursos sociales, en un espacio estructurado por la práctica colectiva de los lugares, la experiencia que se acumula a lo largo de la vida y las relaciones con sus habitantes.

Por causa de la escasez de inversiones en el sistema de transporte, la accesibilidad de los distintos sectores de Bogotá ha cambiado, y con ella –durante los años 1980– las elecciones residenciales de las clases acomodadas. Se admitía que en las ciudades latinoamericanas las elecciones de localización no obedecían a una voluntad de cercanía con el lugar de trabajo: esta imagen ha muerto. Sin duda alguna, las distancias-tiempos y su carácter eminentemente variable alcanzan progresivamente una posición en las elecciones residenciales de las familias: la situación y la accesibilidad ofrecida por una localización para una clase social dada devienen factores determinantes de los comportamientos.

II. LA SEGREGACIÓN, UN PROCESO MULTIDIMENSIONAL

La diversidad de las dimensiones de la segregación o, como lo plantea SIMON (2002: 206), su carácter “multiforme”, se coloca en el corazón de esta segunda parte. Articularemos entonces la dimensión social con otras dos dimensiones, esenciales en metrópolis jóvenes que cuentan con numerosos inmigrantes: la dimensión demográfica (estructura por edad y tamaño de los hogares), y el origen regional de los migrantes. Basándonos en la localización residencial observada en los censos, intentaremos dilucidar por medio de mapas y de índices de segregación (recuadro 3.1), las imágenes de las configuraciones socioespaciales que permiten medir y describir el fenómeno. Estas indicaciones cuantitativas autorizan la comparación entre las dimensiones de la segregación, entre las dos ciudades consideradas y en el tiempo en Bogotá. ¿Cómo las diferencias de temporalidad, tratadas en la primera parte, se traducen en las configuraciones sociales de dos espacios metropolitanos? ¿Qué modificaciones del esquema de segregación acompañan los desarrollos de Bogotá y Cali? Éstas son las principales preguntas que abordaremos con este análisis comparativo y diacrónico de la segregación, que se completará, en el caso de Bogotá, con el análisis de un factor que participa plenamente en el proceso segregativo: la percepción de la segregación por quienes producen la ciudad, habitantes y gestores.

RECUADRO 3.1

MEDIDAS DE LA SEGREGACIÓN A PARTIR DE LOS DATOS DE LOS CENSOS

El debate teórico y metodológico sobre la medición y el análisis de la segregación residencial, que se inició en la década de 1920 en la Escuela de Chicago, no ha cesado desde entonces. No es éste el lugar para entrar en él; simplemente se trata de resumir las elecciones metodológicas que subyacen a los análisis presentados en esta sección.

Las bases de datos desagregados (archivos de individuos y hogares) disponibles para 1973, 1985 y 1993 en Bogotá, y para 1993 en Cali, se han utilizado para producir estadísticas que agreguen al nivel de los sectores censales (en número de 600 en Bogotá y de 300 en Cali, en 1993) los efectivos de población caracterizados por diferentes criterios correspondientes a las dimensiones demográficas (categorías de edad, tamaño del hogar), sociales (indicador de condición social, hacinamiento en la vivienda) y según el origen migratorio (regiones de origen, población nativa en las dos ciudades) del fenómeno segregativo. Entonces, intervienen dos aproximaciones a la segregación desde diferentes escalas.

La cartografía por sector censal permite aprehender los esquemas de distribución espacial de diferentes categorías de población en distintas escalas, y observar las oposiciones o las coincidencias espaciales que manifiestan entre sí. Puestos en perspectiva junto con otras estructuras espaciales que eventualmente los determinan (históricas, económicas, de infraestructuras, etc.), esos mapas también autorizan una interpretación comparada de las situaciones y las lógicas en ocurrencia en las dos ciudades. En cambio, ellos no permiten apreciar la intensidad de la segregación propia de cada categoría ni, para una categoría dada, su variación de una ciudad a otra o de una fecha a otra.

Con este fin, los índices de segregación son calculados para el conjunto de la ciudad y para cada una de las subdivisiones administrativas que la componen (19 localidades en Bogotá, 20 comunas en Cali); en los dos casos, el cálculo se realiza sumando los datos agregados por sectores del censo. Hemos escogido dos índices entre la multitud de los propuestos en la literatura especializada. El primero es el índice de disimilaridad, convertido en clásico desde su inauguración por DUNCAN y DUNCAN en 1955, escogido porque permite la comparación internacional. El segundo índice proviene de una publicación reciente (HUTCHENS, 2001). Bautizado por el autor como “índice de la raíz cuadrada”, reúne siete importantes propiedades matemáticas en el plano teórico; algunas faltan en los dos índices más frecuentemente utilizados (disimilaridad e índice de Gini), lo que alimenta, hace más de cuarenta años, una controversia metodológica en las revistas especializadas*. En el plano empírico, no tenemos información sobre una aplicación actual de este índice a datos reales (HUTCHENS sólo utiliza una simulación). Por ello, tenemos allí una buena ocasión para comenzar. Además, el ejercicio de simulación de HUTCHENS, como nuestra aplicación, muestra a la vez la coherencia de este índice con el de la disimilaridad y su superioridad sobre este último en razón de su sensibilidad a una redistribución de la población entre zonas de sobre- (o sub-) representación. Estos dos índices tienen las siguientes expresiones:

Disimilaridad:

$$D = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^I \left| \frac{n_{1,i}}{N_1} - \frac{n_{2,i}}{N_2} \right|$$

Raíz cuadrada:

$$R = 1 - \sum_{i=1}^I \sqrt{\frac{n_{1,i}}{N_1} \times \frac{n_{2,i}}{N_2}}$$

Donde i , que varía entre 1 e I , describe los sectores censales en la ciudad (o en la comuna o la localidad); N_1 y N_2 son las poblaciones totales de las categorías de población 1 y 2 en la ciudad (o en la comuna o la localidad); $n_{1,i}$ y $n_{2,i}$ son las poblaciones totales de las categorías 1 y 2 en la unidad i .

Para la aplicación al estudio de la segregación en Bogotá y Cali, siempre hemos considerado como categoría 2 el complementario de la categoría 1 en la población total.

Los dos índices varían entre 0 y 1, y asumen:

- El valor “0” cuando todas las unidades tienen la composición media (invarianza = segregación nula).
- El valor “1” cuando las dos categorías no comparten ninguna unidad (“cada uno en su casa” = segregación total).

* Una buena síntesis al respecto se encuentra en MASSEY y DENTON (1988).

Antes de entrar en el análisis de las diferentes dimensiones de la segregación, podemos sacar las primeras enseñanzas de este ejercicio de comparación. La intensidad del proceso segregativo –medida por el índice de HUTCHENS, tomado como referencia en este capítulo–, varía a la vez según el contexto urbano y según la dimensión considerada (tabla 3.3). Así, al mismo tiempo que diferencian a Bogotá y Cali, los índices establecen una neta jerarquía entre los factores de segregación:

– En ambas ciudades, la dimensión socioeconómica, reflejada en el indicador de condición social de los hogares, constituye indiscutiblemente el primer factor en importancia de diferenciación en el poblamiento.

TABLA 3.3A
INDICADORES DE SEGREGACIÓN (ÍNDICE DE LA RAÍZ CUADRADA DE HUTCHENS).
BOGOTÁ, 1973-1985-1993

	Valor para el conjunto de la ciudad*	Promedio de valores por localidad**	Ratio R
Condición social del hogar **** (1973-1993)			
1973			
1.º cuartil	0,13	0,08	0,61
2.º cuartil	0,06	0,04	0,64
3.º cuartil	0,04	0,02	0,55
4.º cuartil	0,19	0,09	0,50
1985			
1.º cuartil	0,18	0,12	0,69
2.º cuartil	0,08	0,06	0,80
3.º cuartil	0,05	0,03	0,60
4.º cuartil	0,24	0,15	0,62
1993			
1.º cuartil	0,14	0,09	0,64
2.º cuartil	0,05	0,03	0,66
3.º cuartil	0,03	0,02	0,56
4.º cuartil	0,16	0,08	0,48
Características demográficas (1985)			
Individuos < 15 años	0,01	0,01	0,51
Individuos >= 60 años	0,03	0,01	0,43
Hogares unipersonales	0,07	0,04	0,58

	Valor para el conjunto de la ciudad*	Promedio de valores por localidad**	Ratio R
Lugar de nacimiento de los individuos (1985)			
Nativos de Bogotá	0,02	0,02	1,04
Migrantes de Antioquia	0,08	0,06	0,74
Migrantes de Boyacá	0,02	0,01	0,74
Migrantes de Cundinamarca	0,05	0,05	1,07
Migrantes de Tolima	0,02	0,02	0,81
Migrantes del extranjero	0,47	0,38	0,81

Fuentes: Censos Dane de 1985 y 1993; cálculos de F. DUREAU y O. BARBARY a partir de archivos individuales.

* Número total de sectores en 1973: 476; 1985: 537, y 1993: 599.

** Número de localidades en Bogotá: 19.

*** Ratio R: Promedio de los valores por localidad/valor conjunto de la ciudad. Este coeficiente se interpreta como un indicador de la intensidad de la segregación en el interior de las localidades con relación a la intensidad global en la ciudad.

**** En ambas ciudades, el indicador de condición social de los hogares es la suma de los años de estudio de los miembros del hogar mayores de 15 años, dividida por el número de personas por cuarto en la vivienda. En el contexto de las ciudades colombianas, donde existe una estrecha asociación estadística de los niveles de educación y hacinamiento en la vivienda con los niveles de renta (no disponibles en el censo), este indicador resulta particularmente pertinente.

TABLA 3.3B
INDICADORES DE SEGREGACIÓN (ÍNDICE DE LA RAÍZ CUADRADA DE HUTCHENS). CALI – 1993

	Valor para el conjunto de la ciudad*	Promedio de valores por comuna**	Ratio R***
Condición social del hogar			
1.º cuartil	0,15	0,07	0,43
2.º cuartil	0,05	0,02	0,31
3.º cuartil	0,03	0,02	0,52
4.º cuartil	0,16	0,04	0,24
Características demográficas			
Individuos < 15 años	0,01	0,00	0,26
Individuos ≥ 60 años	0,03	0,01	0,25
Hogares unipersonales	0,03	0,03	0,39
Lugar de nacimiento de los individuos			
Nativos de Cali	0,01	0,01	0,70
Migrantes de la zona de pob. afrocolomb.	0,03	0,01	0,31

TABLA 3.3B (cont.)			
Migr. int. deptos. Valle, Cauca, Nariño	0,00	0,00	0,81
Migr. deptos. Antioquia, Viejo Caldas	0,01	0,00	0,74

Fuentes: Censo de población y viviendas, DANE de 1993, cálculos de O. BARBARY a partir de archivos individuales.

* Número total de sectores: 330.

** Número de comunas en Cali: 20.

*** Ratio R: Promedio de los valores por comuna/valor conjunto de la ciudad.

– La intensidad de diferenciación social de los espacios urbanos es del mismo orden tanto en Bogotá como en Cali, en cuanto a la condición social de los hogares en 1993 y la composición por edad.

– En cambio, el tamaño de la familia y el origen migratorio introducen diferencias más marcadas en Bogotá que en Cali.

La tendencia a la homogeneidad social se impone como la lógica dominante de concentración residencial, respecto a otras lógicas ligadas a la posición en el ciclo de vida o al origen geográfico. Por la dimensión social iniciaremos entonces el análisis.

A. LAS ESCALAS DE LA POLARIZACIÓN SOCIAL DEL ESPACIO URBANO

I. ORGANIZACIONES SOCIOESPACIALES EN GRANDES BLOQUES

A comienzos del siglo XXI, los espacios residenciales de las diferentes clases sociales se distribuyen siguiendo una organización en grandes zonas que se distinguen igualmente por su densidad.

En Bogotá, la oposición entre un sur pobre, un norte rico, y un occidente ocupado por las clases medias, instaurada desde mediados del siglo XX, es todavía muy visible en 1990 (mapa 3.3). Con el proceso de metropolización, esta organización sectorial –al igual que la estructuración funcional a lo largo de los ejes de comunicación– se prolonga más allá de los límites del Distrito. La lógica metropolitana integra a los municipios periféricos asignándoles papeles específicos en el sistema de habitat metropolitano. Mientras la periferia norte acoge a la población más acomodada, los barrios populares se extienden al sur; en cuanto a la periferia occidental, acoge a las poblaciones obreras empleadas en la industria o la floricultura. El límite del Distrito no cuestiona las reglas

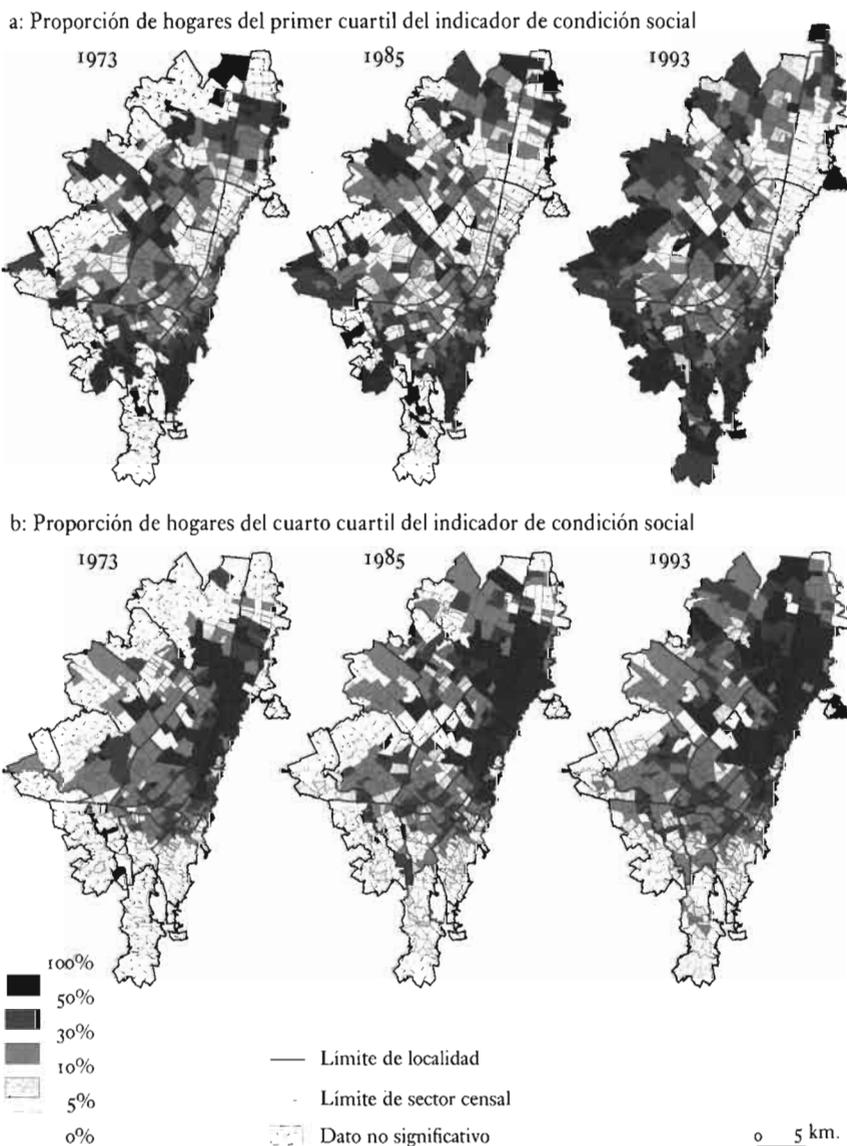
tradicionales de la distribución espacial de las clases sociales. Por el contrario, en razón de la ausencia de una redistribución de los recursos presupuestarios entre los municipios del área metropolitana, el salto de ese límite se traduce en una exacerbación de los efectos de la segregación en el acceso a los equipamientos y a los servicios urbanos.

En Cali la distribución de las categorías sociales presenta una organización espacial en grandes bandas o “corredores” (mapa 3.4). La población pobre está fuertemente concentrada en dos bandas periféricas: los barrios de la franja oriental y las extensiones sobre las laderas montañosas del occidente. Este conjunto de zonas, que agrupa a la mayoría de los núcleos de mayor densidad residencial (mapa 3.2), concentraba hacia 1998 el 55% de la población total de la ciudad (URREA y ORTIZ, 1999: 7). En oposición al esquema anterior, el espacio residencial de las categorías más pudientes se extiende sobre los barrios menos densamente poblados, con un vasto dominio territorial a lo largo de un corredor norte-sur. Las clases medias viven en el centro y en las comunas pericentrales; en la parte oriental del sector central, ellas comparten con las clases más pobres el espacio de mayor densidad de la ciudad.

La variación paralela que se manifiesta en ambas ciudades entre las características sociales y la densidad de población, claramente no es fortuita: el manejo del suelo y la segmentación de las formas de producción de la vivienda explican en gran medida esta distribución de poblamiento, y la amplitud de las desigualdades sociales que lo caracterizan.

En Cali, siguiendo los trabajos de APRILE-GNISET y MOSQUERA (1990 y 1999a), es necesario insistir sobre la importancia de dos factores que marcan la dinámica de expansión de la ciudad para el período 1945-1990. La apropiación de la tierra que rodea el casco urbano de Cali por la elite caleña y vallecaucana, iniciada desde el final del siglo XIX, se mantiene hasta nuestros días. Las tentativas de recuperación del control del suelo por parte de las administraciones municipales sucesivas fracasaron en su totalidad, sólo hasta decisiones judiciales recientes. Bajo la presión de estas elites, esas tierras son progresivamente integradas al perímetro urbano. Los terrenos mejor ubicados son objeto de operaciones de promoción inmobiliaria dirigidos a las categorías de población más pudiente, y se convierten en el centro de importantes especulaciones en propiedad raíz (corresponden al corredor norte-sur

MAPA 3.3
CONDICIÓN SOCIAL DE LOS HOGARES EN BOGOTÁ (1973, 1985, 1993)



Fuente: Censos de población, DANE.
Concepción y realización: F. DUREAU, 2002.

Edición: O. PISSOAT

mencionado anteriormente. En contrapartida, los terrenos que no permiten obtener una renta importante del suelo son confiados a proyectos de vivienda social o de autoconstrucción. Paralelamente, los programas de vivienda social desempeñan un papel fundamental en la expansión horizontal de la ciudad (tendencia general hasta los años 1970), y luego, progresivamente, en el aumento de las densidades en barrios cada vez más periféricos. El espacio residencial padece entonces, de manera global, una segmentación social según la distancia al centro.

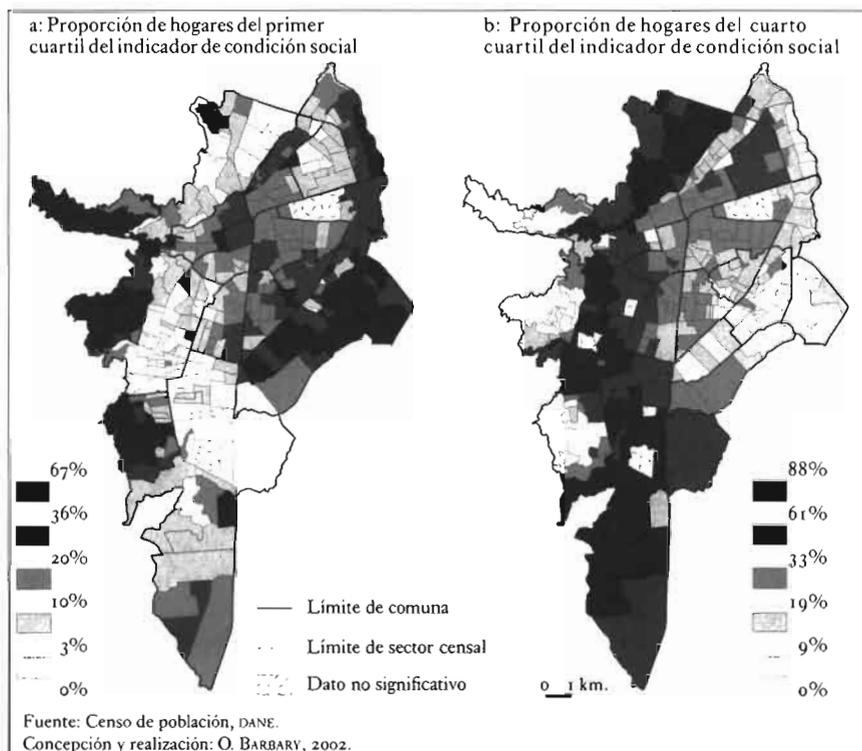
La muy fuerte segmentación de la producción de vivienda en Bogotá¹⁸ cumple incontestablemente un papel esencial en la intensidad de la segregación: en la fase de expansión espacial, las lógicas de cada una de las formas de producción (estatal, capitalista, por encargo, autoconstrucción) ha diseñado un parque de viviendas con una distribución espacial bien definida, en el que cada uno de los segmentos corresponde a un poblamiento inicial por categorías específicas de población. La bipolarización social del espacio urbano es reafirmada así, y después extendida, desembocando en una división global que opone un norte rico a un sur pobre, sensiblemente más denso.

Si los factores estructurales tuvieron un rol de primer orden en la fase de expansión, ahora se instauran otros mecanismos que desempeñan un creciente papel en el estadio de desarrollo actual de Bogotá. En las ciudades colombianas, como en otras partes, las características intrínsecas del parque de viviendas (tipo de vivienda, tamaño, forma de tenencia o localización) no son suficientes para explicar las elecciones residenciales: las lógicas de afinidad también intervienen aquí. Según las categorías sociales se buscan ciertas localizaciones, otras son evitadas o resultan financieramente inaccesibles. Las mudanzas de vivienda se cumplen generalmente en distancias cortas, con lo cual se logra mantener a la vez una posición en la aglomeración y la proximidad con las redes de relaciones, en particular familiares. Tanto para las familias de clase alta como para las medias y las más pobres, estas redes son determinantes en las elecciones residenciales. En una sociedad donde el ascenso social –incluso intergeneracional– es menos frecuente que durante los decenios de 1960 y

18 Cfr. los trabajos sobre las formas de producción de vivienda de JARAMILLO (especialmente, 1992), GIRALDO (entre otros, 1987) y, más recientemente, PÁRIAS (1996).

1970, esta práctica indudablemente contribuye a mantener las polarizaciones sociales iniciales impuestas por el parque de viviendas.

MAPA 3-4
CONDICIÓN SOCIAL DE LOS HOGARES EN CALI EN 1993



Edición: O. PISSOAT

2. UNAS ESCALAS MÁS DIVERSIFICADAS DE LA SEGREGACIÓN EN BOGOTÁ

Las divisiones sociales de los espacios urbanos de Bogotá y Cali, la fuerte visibilidad que les confiere su organización en grandes zonas, tienden a reforzar la constatación –frecuentemente expresada– sobre la existencia de espacios “muy fuertemente segregados”. ¿Esta afirmación se verifica cuando se observa el nivel de segregación social de las dos ciudades colombianas en la escala internacional?

Nuestra única referencia estadística latinoamericana tiene que ver con a Santiago de Chile (SABATINI y ARENAS, 2001)¹⁹. Los valores del índice de disimilaridad para los seis estratos de condición social del hogar considerados en la capital chilena varían desde 0,53 (para el estrato *extreme lower*, que cuenta con el 8% de la población) a 0,71 (para el *higher*, 11% de la población), según una curva que pasa por el mínimo de 0.26 para el estrato más numeroso (*lower middle*, 45% del total). Los valores observados para el mismo índice en Bogotá y Cali, pero sobre categorías menos detalladas y con iguales cifras (cuartiles del indicador de condición social de la familia), lógicamente son un poco inferiores (0,41 y 0,43 para el primer cuartil, 0,46 para el último en las dos ciudades). Pero conservan a la vez los órdenes de tamaño y la forma de distribución, con unos valores de índices inferiores para las clases medias, más elevados para los pobres y todavía más elevados para los hogares más favorecidos.

La similitud entre las curvas de Bogotá y Cali en 1993 es notable, así como la constancia de la curva en el curso del tiempo en Bogotá: la intensificación de la segregación en 1985 en Bogotá conserva el dispositivo global de ésta. Parece que la situación colombiana no resulta excepcional en el contexto latinoamericano, caracterizado por una fuerte segmentación socioespacial en los medios urbanos. En cambio, lo que sorprende es la enorme similitud de los índices en el espacio (Bogotá, Cali, Santiago) y en el tiempo (1973-1993 en Bogotá), lo que acentúa el interés por extender y sistematizar las aproximaciones comparativas al fenómeno, bajo la reserva –vamos a verlo ahora– de no limitarse a esos indicadores globales.

En efecto, volvamos a las dos ciudades colombianas. Los índices por localidad (tabla 3.3) muestran que las localidades de Bogotá tienen una composición

19 La fuente estadística utilizada es una encuesta Origen-Destino realizada en 1991, con una muestra de hogares repartida en 510 zonas censales. Desafortunadamente, los autores no ofrecen ninguna información sobre el diseño muestral, ni aun sobre el tamaño de la muestra. No obstante, sabemos que la población media de las 350 zonas encuestadas es de 3 530 individuos, un tamaño comparable al de los sectores censales en Colombia o de los *census tracts* en Estados Unidos. Entonces, es necesario tomar los resultados de este estudio con algunas precauciones (es posible que los intervalos de confianza importantes de las estimaciones por zona sobreestimen los valores del índice); de todas maneras, la importancia de la encuesta probablemente garantiza la fiabilidad de los órdenes de tamaño.

social menos homogénea que las comunas de Cali. También muestran que las localidades de Bogotá son más diferentes entre sí: junto a localidades con una composición social muy homogénea, otras localidades albergan una población mucho más diversificada socialmente. En 1993, el proceso segregativo se expresa bajo escalas más diversas en Bogotá que en Cali. En la capital colombiana, la organización sectorial heredada de decenios de fuerte expansión espacial, se ha vuelto más compleja, con situaciones locales inéditas de mezcla social. No se trata aquí de la sustitución de una escala de segregación por otra, sino de la aparición de una nueva escala —más micro— de la segregación, que modula el esquema global de distribución de las clases sociales en el espacio.

3. EN CALI, UNAS MEZCLAS SOCIALES LIMITADAS A LOS ESPACIOS-FRONTERAS

Las variaciones entre los índices por comuna, aunque menos importantes que en el caso de Bogotá, atestiguan situaciones contrastadas entre los barrios de Cali.

Un primer grupo de comunas, con población muy homogénea (reducidos valores del índice), integra al mismo tiempo barrios de habitat popular y otros de clase media. La homogeneidad del parque de viviendas (barrios de invasión autoconstruidos y programas de vivienda social) así como localizaciones apartadas de las áreas sociales más favorecidas de la ciudad, explican la uniformidad de la población, que implica a su vez la ausencia de “fronteras sociales” internas o con las comunas vecinas. Se trata ya sea de comunas periféricas situadas a lo largo del actual frente de urbanización, o de comunas empotradas en el seno del gran espacio residencial de capas medias y populares que cubre el oriente de la ciudad.

Un segundo grupo se caracteriza por una heterogeneidad interna media. Agrupa los barrios populares menos empotrados, los demás barrios centrales y peri centrales de clase media, así como la extensión sur del corredor de los barrios acomodados. En cada uno de estos espacios, la importante diversidad del parque de viviendas según la forma de tenencia, el tamaño y la categoría de las viviendas, genera directamente la especialización social de la población a escala de los barrios.

Finalmente, las zonas de contacto entre áreas sociales opuestas (ricos/pobres), situadas a lo largo de las franjas orientales y occidentales del eje de los barrios acomodados, constituyen los lugares de mayor polarización local. En términos de geografía social, es necesario distinguir dos situaciones. Por un lado, está la de las poblaciones pobres, minoritarias en el corredor central acomodado, confinadas en los enclaves constituidos por el segmento más degradado del parque de viviendas en alquiler (cuartos, inquilinatos). Por otro lado, el caso de la comuna 18, atravesada por la frontera entre los barrios populares de autoconstrucción de la ladera montañosa y los barrios residenciales acomodados que ocupan el territorio plano.

En resumen, es posible afirmar que en Cali, los pocos ejemplos de fuerte mezcla en el interior de las tres grandes áreas sociales que componen la ciudad, se explican por una heterogeneidad social limitada a algunos espacios-fronteras situados a sus márgenes.

4. UNAS NUEVAS PROXIMIDADES ESPACIALES ENTRE GRUPOS SOCIALES EN BOGOTÁ

Los años 1980 estuvieron marcados por un giro importante en el modelo de desarrollo urbano de Bogotá, descrito en la sección 1, que se traduce en la evolución de los índices de segregación calculados para el conjunto de la ciudad y sus localidades: ellos pasan por un máximo en 1985, antes de recobrar en 1993 su nivel de 1973. En un contexto marcado a la vez por una creciente competencia por el acceso a un recurso territorial —que se ha vuelto escaso— y la multiplicación de los conjuntos cerrados, comienzan a aparecer nuevas proximidades espaciales entre grupos sociales, que generan situaciones de segregación a nivel microlocal. Según las localidades, las situaciones están muy diferenciadas en el conjunto del período 1973–1993: salvo en lo que respecta a la clase más acomodada, para la cual las diferencias entre localidades se desdibujan desde fines de los años 1970, las diferencias entre localidades permanecen en el mismo orden a lo largo de todo el período. Algunos ejemplos ilustrarán los procesos instaurados en el pericentro y en la periferia sur²⁰.

20 Las informaciones sobre las prácticas residenciales surgen de las secciones demoestadística y antropológica de las encuestas CEDE-ORSTOM de 1993.

Desde mediados de los años 1980, los barrios pericentrales experimentan transformaciones importantes en la composición de su población, según procesos muy diferentes al norte y al sur.

La degradación de las condiciones de transporte, ligada a un brusco aumento del parque automotor y a la inserción laboral de la mujer, conduce a un importante número de familias acomodadas a aproximarse a su lugar de trabajo. Este nuevo incentivo hacia localizaciones más centrales se traduce en transformaciones muy rápidas en el efectivo y la composición demográfica del pericentro norte. La evolución ascendente del barrio es manifiesta: las familias instaladas a partir de mediados de la década de 1980 son más acomodadas que las instaladas durante el decenio anterior, en una época de decadencia del barrio, cuando las clases más altas lo abandonaron a cambio de localizaciones más septentrionales. Los índices de segregación de la localidad de Chapinero, ya elevados en 1973, aumentan sensiblemente: de hecho, la diversificación de la población corresponde a la formación de un mosaico de pequeños espacios muy homogéneos socialmente. La llegada de familias de altos ingresos se cumple en manzanas específicas, y las familias populares se encuentran confinadas en espacios cada vez más restringidos: los intersticios no tocados todavía por la evolución ascendente de este sector. Las transformaciones físicas del pericentro norte, directamente responsables de esta configuración socioespacial, expresan claramente el proceso de aburguesamiento en curso en este sector de Bogotá.

En cambio, otras evoluciones ocurridas en el pericentro sur no se leen directamente en el paisaje urbano. La localidad de Rafael Uribe experimentó un rápido proceso de subdivisión de grandes casas en apartamentos ocupados por familias con menos ingresos que los residentes tradicionales. La densificación demográfica y la tendencia al descenso del nivel socioeconómico de la población se cumplen sin que lo construido sea objeto de transformación visible exteriormente. Se trata, con todo, de un proceso confirmado por los índices de segregación de esta localidad: todos siguen una tendencia regular al descenso entre 1973 y 1993. Mientras los contrastes sociales se extienden en el pericentro norte, el pericentro sur sufre una homogeneización de la población. Allí también, el papel de las formas arquitectónicas debe subrayarse, al lado de factores de orden económico: la existencia de grandes casas burguesas,

cuya disposición interna de las habitaciones se presta para una subdivisión, ha facilitado esta evolución social del pericentro sur.

En las localidades periféricas, las situaciones son igualmente muy diversificadas, prueba suplementaria de fuertes disimetrías que se mantienen en el modelo de desarrollo de Bogotá. La periferia occidental conserva niveles de segregación moderada en el conjunto del período o solamente desde 1985. Clases medias y populares cohabitan en espacios con gradientes poco marcados. En cambio, al norte, la localidad de Usaquén presenta niveles de segregación claramente superiores a los valores observados en el conjunto de la ciudad, y esto de manera sistemática desde 1973. A todo lo largo del período, la producción de vivienda fue importante: producción individual, programa de viviendas o autoconstrucción sobre terrenos ocupados ilegalmente, han contribuido a la producción de un parque diversificado de viviendas, ofrecido al conjunto de la escala social. Esta producción se realizó según una marcada división espacial en el seno de la localidad, generó índices de segregación particularmente elevados. Pero, allí también, los signos de una diversificación local de la población se manifiestan y explican una fuerte disminución de los índices entre 1985 y 1993.

En el extremo opuesto de la ciudad, en la periferia sur tradicionalmente dejada a los sectores populares, la aparición de residencias para clases medias a fines de los años 1980 se traduce en el aumento de los valores de los índices de segregación correspondientes al tercer cuartil del indicador de condición social. Este fenómeno no sólo afecta a las localidades periféricas del Distrito, sino también al municipio de Soacha. La oferta de vivienda para las clases medias en el sur es un fenómeno ligado directamente a la carencia de tierras urbanizables en los territorios clásicos de instalación de esas poblaciones y a la difusión de un tipo de habitat particular: el conjunto cerrado, encerrado y vigilado por guardias. Atraídos por el precio de las viviendas y la calidad de las vías de comunicación, familias de clase media se instalan en el sur. Apenas iniciado a fines de los años 1980, este movimiento prosigue y se intensifica a todo lo largo de la década de 1990: el Sur ha devenido “habitabile”, con la condición de vivir en sus enclaves protegidos.

La diversificación de las escalas de segregación en Bogotá es manifiesta: los índices de segregación, las observaciones en profundidad sobre algunos

barrios y sobre las lógicas residenciales de sus habitantes, demuestran en forma muy coherente la realidad de esta evolución. El nuevo modelo de desarrollo de Bogotá está acompañado entonces por una evolución de las características geográficas de la segregación social. Junto a los factores relativos a la producción de vivienda y a las lógicas residenciales de los bogotanos, un tercer factor ha cumplido un papel importante en esta transformación: las formas arquitectónicas. La literatura actual insiste sobre los conjuntos cerrados; incontestablemente, ellos favorecen la proximidad espacial de los diferentes segmentos de población. Pero las características del parque de viviendas antiguas no deben ser olvidadas: la historia imprime sus marcas en la polarización social general del espacio urbano, en la percepción de la jerarquía de sus barrios (sobre lo cual volveremos en la sección II.D), pero también en su patrimonio edificado, más o menos apto para generar la densificación o la cohabitación entre grupos sociales.

Al desfase temporal entre los modelos de desarrollo de las dos ciudades evidenciado en la primera sección de este capítulo, responde pues una diferencia en las características de la distribución de segregación social. La diversificación de las escalas de la segregación observada en Bogotá no es tan efectiva en Cali. Por eso, la intensidad del proceso –tal como aparece medida en los índices– es actualmente la misma en las dos ciudades. Pero este nivel no resulta ni de la historia ni de la geografía social. Esta observación invita a la prudencia respecto a las comparaciones internacionales basadas sólo en los valores globales de los índices de segregación. También conduce a interrogarse sobre las significaciones y las consecuencias de esta transformación en la escala de la segregación social y, por tanto, sobre su menor visibilidad.

B. HISTORIA URBANA Y CICLO DE VIDA DE LOS HABITANTES

A menudo, el ciclo de vida interviene de manera importante en la diferenciación social de los espacios metropolitanos²¹. Los valores de índices (tablas 3.3a y

21 Cfr., por ejemplo, en *Métropoles en mouvement* (DUREAU et ál., 2000), los casos de París (SIMON: 303 a 306) y Montreal (DANSEREAU: 289 a 295).

b) y los Mapas 3.5 y 3.6 muestran efectivamente que tanto en Cali como en Bogotá, los barrios presentan diferencias significativas en cuanto a la estructura por edad (segregación moderada en los dos casos) y al tamaño de los hogares (segregación más fuerte, sobre todo en Bogotá).

La especialización del poblamiento según la posición en el ciclo de vida parece producirse en forma independiente de la composición social de los barrios. Lo anterior es corroborado por las muy distintas formas de distribución espacial observadas según uno o otro criterio: en aureolas toscamente concéntricas en lo concerniente a la segmentación demográfica (el tamaño de los hogares aumenta con la distancia al centro y, al mismo tiempo, la estructura por edad se torna más joven); en sectores o bandos, como lo pudimos ver, en el caso de la polarización social. Sin embargo, las dos distribuciones presentan algunas coincidencias: por ejemplo, la distribución espacial periférica de las poblaciones más jóvenes corresponde aproximadamente a la de los barrios populares, mientras que los hogares unipersonales se concentran sobre localizaciones centrales y pericentrales, socialmente mezcladas. Constataciones similares fueron realizadas en otros lugares²²: estamos aquí en presencia de tendencias bastante universales de la estructuración demográfica y social del medio urbano, respecto a las cuales, de nuevo, las dos ciudades colombianas no se singularizan fuertemente. No obstante, para vislumbrar los comportamientos de los actores que participan en la producción de estos dispositivos espaciales, es interesante entrar un poco más en detalle. Para eso, nos apoyaremos principalmente en el caso de Bogotá.

La expansión espacial de las ciudades se ve reflejada en la composición por edad de los habitantes de sus barrios. Mientras que la población mayor se concentra en los barrios antiguos, las periferias cuentan con una importante proporción de niños y jóvenes (mapas 3.5 y 3.6): edad de los habitantes y edad del barrio van de la par. Varias características de las prácticas residenciales explican estas configuraciones. Por un lado, con la edad y, sobre todo, el acceso a la propiedad, los cambios de vivienda se tornan menos frecuentes; por otra parte, como ya lo hemos visto, la movilidad residencial intraurbana se efectúa

22 P. ej., en París (SIMON, 2000: 303 a 306), Santiago de Chile (PAQUETTE, 2000: 310 a 315) y Montreal (DANSEREAU, 2000: 289 a 295).

de seguido sobre cortas distancias²³, lo que tiende a mantener la población en el barrio o la zona donde inició su recorrido residencial autónomo.

Sea que se trate de arrendatarios de clases populares que viven hace mucho tiempo en el barrio obrero de La Perseverancia –en la parte norte de la localidad de Santa Fe²⁴ (pericentro de Bogotá)–, o bien propietarios más acomodados de Chapinero, ni los unos ni los otros abandonaron masivamente esos barrios urbanizados desde los años 1950, con el resultado, más bien, de las fuertes concentraciones de personas de edad observadas en Bogotá. Todavía hoy en día, esta estabilidad geográfica se conserva y se resiste a los movimientos de aburguesamiento. Con todo, los antiguos habitantes de estos barrios afrontan simultáneamente un alto aumento de los precios en los comercios y los servicios cercanos, una creciente presión fiscal y un fuerte aumento en las tarifas de los servicios públicos. Las características urbanísticas de numerosas manzanas de Chapinero han ofrecido a los inversionistas un terreno favorable para una rápida transformación de lo edificado: las casas, suficientemente grandes y en manos de propietarios individuales han podido ser vendidas fácilmente, demolidas y reemplazadas por edificios. La transformación ruda y no regulada de este sector implica un importante costo social y humano para los antiguos habitantes, para quienes la evolución ascendente del barrio corresponde a una degradación de sus condiciones de vida, que no obstante no provoca salidas masivas del pericentro. Incluso para los habitantes de Chapinero, con recursos sensiblemente más altos que los de La Perseverancia, esta elección es bastante apremiante: una parte de ellos se instaló en un momento de relativa decadencia del barrio, que lo convertía en algo accesible para las clases medias. Ya avanzados en edad, en un país donde el sistema de pensiones es poco eficaz, les resulta prácticamente imposible cambiar de vivienda.

Para los hogares que tienen los medios para ajustar su vivienda a la composición familiar, sus recorridos residenciales expresan claramente la evolución de las aspiraciones residenciales en el curso del ciclo de vida. La fuerte homogeneidad de las viviendas en los conjuntos cerrados conduce a la

23 Cfr. el análisis cuantitativo de la movilidad residencial en Bogotá presentado en DELAUNAY y DUREAU (2002).

24 Ejemplos parecidos pueden citarse para Cali, en los barrios centrales de Versailles, San Antonio y San Fernando.

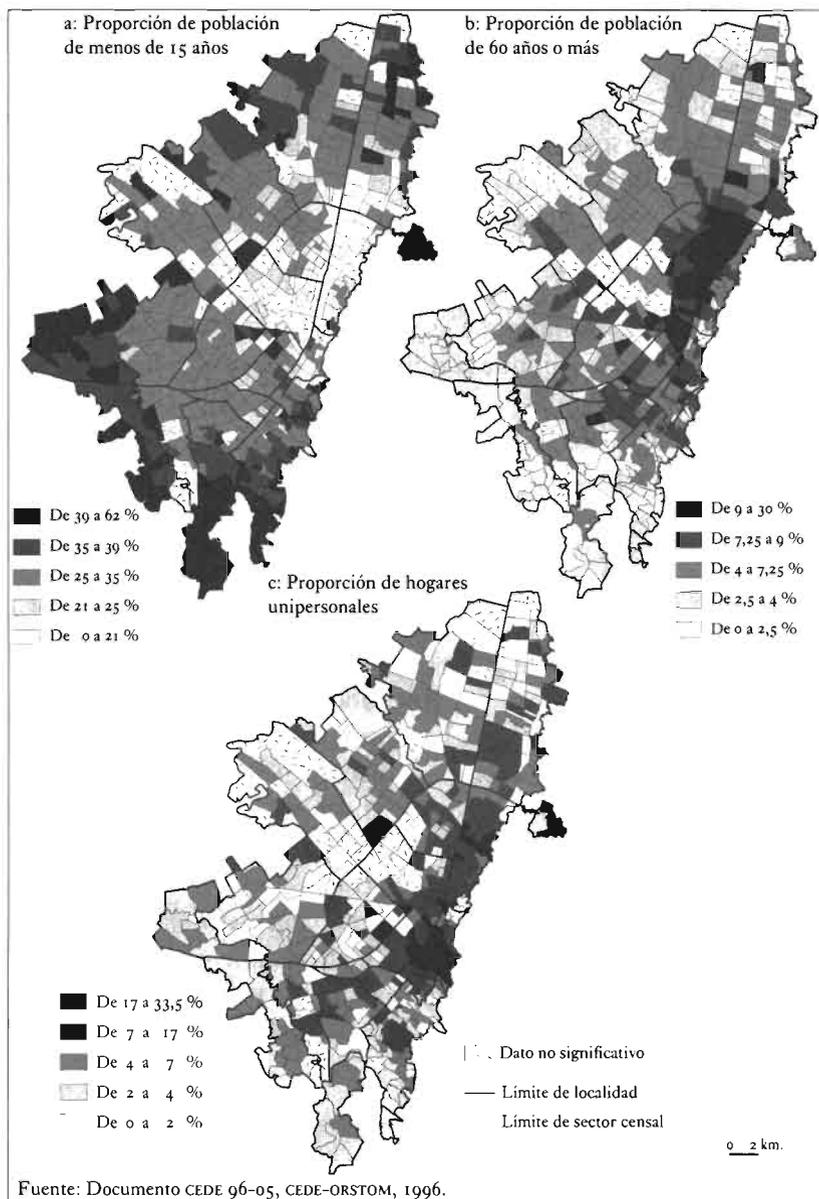
conformación de poblaciones particularmente uniformes. Un buen ejemplo son los conjuntos residenciales construidos a partir de los años 1980 en el municipio de Chía, al norte de Bogotá. Sin contar algunas parejas de edad que llegaron buscando un lugar tranquilo para su jubilación, casi la totalidad de los habitantes de los conjuntos cerrados se ajustan al mismo modelo: familias nucleares compuestas por los padres e hijos jóvenes, que tienen una situación laboral estable e ingresos suficientes, y que son propietarias de sus viviendas. Con frecuencia, los dos padres trabajan, lo que permite un rápido desembolso de los préstamos inmobiliarios. Esta situación les permite considerar su instalación en Chía como no definitiva, y emprender el retorno a Bogotá cuando los hijos han crecido. En el sur de Bogotá ocurre lo mismo en los conjuntos residenciales para las familias de clase media de Soacha: a la homogeneidad del parque de viviendas responde la uniformidad demográfica de la población que reside en ellas.

A esta reciente homogeneidad demográfica de los conjuntos residenciales se opone la mezcla de las grandes viviendas para las clases acomodadas producidas durante las décadas de 1960 y 1970. En Normandía (periferia occidental) o en Ciudad Jardín (periferia sur), las grandes casas todavía ocupadas por propietarios de edad acogen periódicamente a sus hijos, incluyendo a los nietos: en caso de divorcio o de pérdida del empleo, la casa de los padres constituye un recurso movilizadofrecuentemente donde las solidaridades familiares son fuertes. En esos barrios, la familia extensa puede cohabitar sin presiones, pues esas grandes viviendas hacen parte integrante de los itinerarios residenciales de las familias, movilizables frente a acontecimientos que marcan el ciclo de vida.

Evidentemente, los más pobres no disponen de la misma libertad de elecciones residenciales, en términos de forma de tenencia y tampoco en términos de localización. Como arrendatarios, están sometidos al nomadismo residencial para escapar del plazo del arriendo, huir de los conflictos con sus vecinos –problema frecuente en los inquilinatos superpoblados– o abandonar a su cónyuge. Como propietarios, están asignados a esa residencia, ya que sus recursos no les permiten repetir la adquisición de una vivienda²⁵. En estas

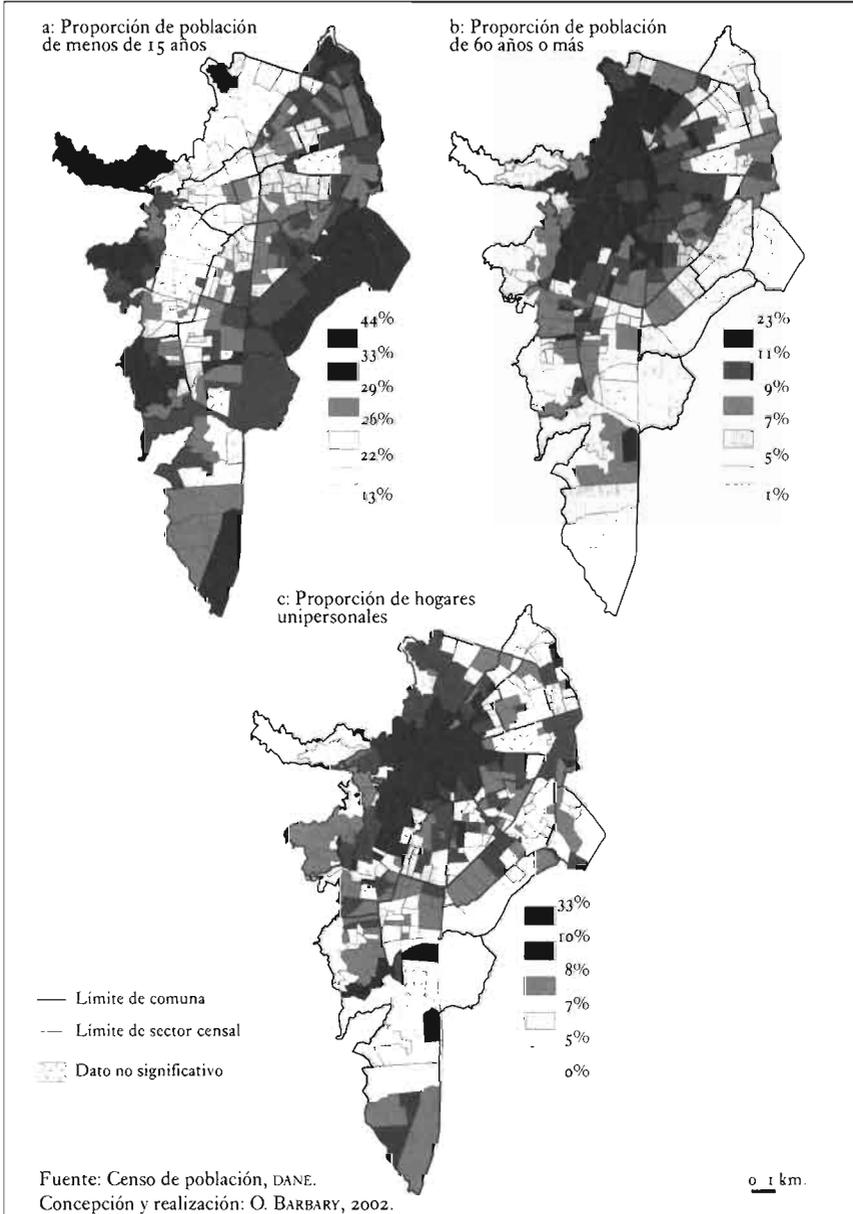
25 Para una medición de las relaciones entre movilidad residencial y cambios de formas de tenencia de ocupación, cfr. DELAUNAY y DUREAU (2002).

MAPA 3.5
POBLACIONES DE MENOS DE 15 AÑOS Y DE 60 AÑOS O MÁS
Y HOGARES UNIPERSONALES EN BOGOTÁ EN 1985



Concepción y realización: F. DUREAU y O. PISSOAT

MAPA 3.6
POBLACIONES DE MENOS DE 15 AÑOS Y DE 60 AÑOS O MÁS
Y HOGARES UNIPERSONALES EN CALI EN 1993



condiciones, la diferenciación demográfica de las zonas de habitat popular refleja ante todo el proceso de formación del barrio: su fecha de creación, su modo de producción, y la etapa de consolidación en que se encuentra.

Los barrios populares del centro concentran la mayoría de la población de ancianos con bajos ingresos. Los adultos que accedieron a la autonomía residencial en las décadas de 1960 y 1970 se vieron a menudo obligados a exiliarse en la periferia para conseguir una vivienda autónoma (secc. 1.D). Esta movilidad centrífuga aceleró el envejecimiento de los barrios centrales, mientras que las periferias se poblaban con jóvenes adultos.

En los barrios ilegales situados a orillas del río Bogotá, donde el proceso de consolidación ya está bastante avanzado, las estructuras demográficas son claramente más regulares que en las zonas de autoconstrucción reciente (como las invasiones en los cerros del sur de Bogotá) y la proporción de familias de gran tamaño es mayor. El surgimiento de una oferta de vivienda en la periferia, ligada directamente al proceso de consolidación de estos barrios, permite ahora a los jóvenes adultos instalarse en el sector, en una vivienda independiente de la de sus padres: la densificación en estos barrios populares periféricos está acompañada por una tendencia a la mezcla entre las generaciones, en ruptura con la segmentación que había acompañado al movimiento de expansión de la ciudad en los decenios anteriores.

En general, en estas ciudades jóvenes, los barrios son todavía fuertemente diferenciados en el plano demográfico: las características del parque de viviendas y las prácticas residenciales muy segmentadas según las clases sociales, dibujan configuraciones contrastadas aún marcadas por la dinámica de expansión espacial. Más que las posiciones en el ciclo de vida y las trayectorias residenciales que les corresponden, las configuraciones espaciales de la segregación demográfica traducen la historia reciente de las ciudades y el período de instalación de sus habitantes. Para una parte importante de la población, la movilidad residencial para ajustar la vivienda a las características de la familia es imposible; por ello, el hacinamiento en la vivienda es el siguiente paso para la mayoría de familias de las clases populares. Con la crisis económica que atraviesa el país, estas situaciones de promiscuidad se multiplican en los barrios más pobres. En Cali, donde la crisis se hace sentir desde la mitad de los años 1990, la exclusión masiva de los jóvenes del mercado

de trabajo —en particular de los hombres— retrasa significativamente la salida del domicilio paterno²⁶. El regreso a este domicilio se hace igualmente más frecuente: en Bogotá, en razón de la crisis del sistema de financiamiento de vivienda UPAC (Unidad de Poder Adquisitivo Constante)²⁷, aparecen a finales de los años 1990 nuevas cohabitaciones intergeneracionales, aun en las familias de clase media con viviendas poco amplias. De proseguir, esta dinámica traerá sin lugar a dudas importantes inflexiones a las configuraciones espaciales del poblamiento y favorecerá nuevas mezclas demográficas.

C. EL AGRUPAMIENTO ESPACIAL DE LOS MIGRANTES DEL MISMO ORIGEN

Aparte del flujo de personas de origen rural o de ciudades más pequeñas, que procede esencialmente de sus cuencas migratorias regionales, Cali y más aun Bogotá, atraen una población citadina que viene de municipios de talla mediana y capitales departamentales más alejadas. De orígenes mezclados, la población que migra hacia las dos ciudades es bastante heterogénea en cuanto a sus características sociales, su modo de inserción y su impacto sobre la dinámica urbana. Esta heterogeneidad se ve traducida en su patrón de inserción espacial y social: los no nativos se encuentran en todos los segmentos del mercado de la vivienda y su espacio residencial se extiende al conjunto de las dos urbes. El desplazamiento de los barrios de recepción de inmigrantes, ligado a la expansión de la urbanización y a la aparición de ofertas locativas en la periferia, ha traído, a lo largo de varias décadas, la generalización de la presencia de migrantes en todo el territorio metropolitano de las dos ciudades. Así, la mitad de los migrantes residentes en los barrios encuestados en 1993 en Soacha, llegados a la capital en el curso de los años 1988-1993, se instalaron directamente en las viviendas de alquiler en los barrios más consolidados del municipio. Más recientemente, desde fines de los años 1990, los desplazados se instalan en los espacios intersticiales abandonados gracias al movimiento de urbanización y de consolidación. Una dinámica enteramente comparable

26 Fuente: encuestas CIDSE-IRD, 1998 y CIDSE-Banco Mundial 1999.

27 Sistema creado en 1972 para permitir la compra de vivienda a crédito (cap. sexto).

caracteriza la inserción residencial de los migrantes en Cali, exceptuando que en este caso permanece en los límites municipales. Los índices de segregación (tabla 3.3) y los mapas correspondientes ilustran bien este proceso. En las dos ciudades no aparecen grandes zonas de concentración sino, al contrario, un mosaico que simplemente refleja la variabilidad local de las tasas de población migrante.

El análisis de las distribuciones geográficas de ciertos grupos de migrantes confirma la articulación que se esperaba con los procesos de segregación social. El acceso a los diferentes barrios de la ciudad de los grupos de migrantes está en gran parte determinado por su capital educativo y su composición social: la selectividad de la migración se lee directamente en sus localizaciones residenciales. En Cali, la distribución residencial de quienes provienen de la zona de poblamiento afrocolombiano, por ejemplo, cuya desventaja histórica se traduce en un bajo capital económico y social de los migrantes a su llegada (seccs. III de los capítulos segundo y cuarto), contrasta con aquella de quienes provienen de Antioquia y del Viejo Caldas, con características espacial y social exactamente inversa de los primeros. Lo mismo ocurre en Bogotá: las configuraciones espaciales de los originarios de Boyacá y Cundinamarca corresponden a barrios populares, para los cuales los valores del índice de segregación son reducidos o medios, mientras los originarios de Antioquia y sobre todo los extranjeros, están concentrados en los barrios de alta categoría, claramente más segregados.

Sin embargo, la polarización social del espacio urbano no explica completamente la geografía residencial de los migrantes. Para algunos grupos, existen esquemas de implantación espacial específicos dentro de los cuales la geografía, los sistemas de transporte interdepartamental y, a veces, ciertos factores culturales, tienen un papel. Es el caso, por ejemplo, de los originarios del Tolima, departamento situado al suroccidente de Bogotá, quienes se concentran en la mitad sur de la ciudad, mientras los migrantes de Boyacá están claramente más presentes al norte. De la misma manera en Cali, entre categorías sociales comparables, los migrantes de la Costa Pacífica se encuentran más concentrados en los barrios del oriente de la ciudad que quienes vienen del altiplano andino (departamentos del Valle, Cauca y Nariño), localizados de manera preferencial en los barrios de invasión de las laderas de la Cordillera Occidental.

Un cambio de escala pone de relieve otra dimensión clásica de las prácticas residenciales de los migrantes: la propensión de ciertos grupos a una fuerte agregación residencial local que favorece la heterogeneidad del poblamiento dentro de ciertas localidades. Aun en sectores próximos, las proporciones de personas originarias de un mismo departamento pueden ser bastante variables. La densidad de las redes de información y ayuda entre originarios de una misma región, su papel determinante en el acceso a la primera vivienda, desempeñan un rol decisivo en la trayectoria residencial de los migrantes dentro de la ciudad de destino. Como es el caso del domicilio de sus padres para quienes han nacido en la ciudad, a partir de esta primera vivienda se define el espacio de movilidad intraurbana de los migrantes. Por otra parte,

... el barrio juega un papel importante de recepción, reagrupamiento y de instalación de las comunidades de provincia, de integración a la vida urbana mientras que estas corrientes migratorias influyen a su vez en los aspectos físicos y sociales de los barrios (JIMÉNEZ MANTILLA, 1998: 66).

Sociabilidad, organización y participación popular se definen en esta unidad espacial del barrio. Es particularmente el caso en los barrios del noroeste de Bogotá, donde se mantienen las tradiciones de Boyacá, o en Cali, en el Distrito de Aguablanca, marcados por la presencia de población afrocolombiana (cap. cuarto).

Tenemos entonces las dos explicaciones principales de la reproducción, a lo largo de las trayectorias de los individuos, de una lógica de concentración residencial de los miembros de una misma región o localidad de origen. Los migrantes no escapan, de una parte, a los factores de localización residencial del conjunto de la población: segregación social, historia de la ciudad, aspiraciones residenciales. Los análisis realizados tanto en Cali como en Bogotá confirman las similitudes entre las trayectorias residenciales de migrantes y nativos. Sin embargo, persiste una cierta variabilidad de los comportamientos residenciales según los grupos de migrantes, que no puede ser reducida a los efectos de estos factores generales, y está ligada a la importancia de las redes en el acceso de los migrantes a la vivienda, que refuerza su concentración espacial. ¿Cuáles son las consecuencias de esta lógica de agregación espacial sobre la intensidad y la escala de los procesos segregativos?

Mucho más claramente que en el caso de la segregación social, para la cual se impone en la escala de las aglomeraciones la inercia de grandes agregados sociales relativamente homogéneos (incluso si los signos de una segmentación más sutil se manifiestan en ciertas localidades de Bogotá), o para la segmentación demográfica que también se da en la escala macro, la espacialización del poblamiento según el origen geográfico opera en diferentes escalas más detalladas y específicas. Este hecho modera, por supuesto, su impacto en términos de “exclusión” relativa de las poblaciones concernidas. Aquí nos acercamos a un paradigma muy discutido de los estudios sobre la segregación urbana, que relaciona o al contrario disocia las nociones de distancia espacial y proximidad social²⁸. La escala en la cual se da la polarización residencial es obviamente un parámetro determinante en la percepción que se tiene de la segregación. Tomando la ciudad entera como escala, la presencia de grandes bloques homogéneos y divididos espacialmente da paso a una lectura en términos de exclusión de grupos socialmente dominados y espacialmente segregados, que vuelve invisible a menudo la realidad de la movilidad espacial de los ciudadanos. Pero al contrario, cuando la mezcla social es señalada como solución a la cuestión de la integración, y mientras que el énfasis se hace en la dimensión espacial del problema, se ignoran otros mecanismos de distanciamiento social. En todo caso, es importante para la instrucción del debate que en la etapa de diagnóstico de las modalidades de segregación se tome en cuenta la escala de expresión de los fenómenos. Para esta tarea, los índices calculados para diferentes unidades espaciales son herramientas muy útiles.

En Cali, es indudable que la escala del proceso de agregación de los grupos de migrantes es distinta de aquellas referentes a las dimensiones sociales y demográficas de la segregación. Esto se muestra en los valores de los índices por comuna (ratio R de la tabla 3.3b): el origen migratorio generalmente introduce en el seno de las comunas una heterogeneidad local que no tiene equivalencia en la composición social, las estructuras de edad y el tamaño de los hogares²⁹. En cambio, en Bogotá la situación está menos contrastada (tabla

28 Cfr., por ejemplo, CHAMBOREDON y LEMAIRE (1970) o el artículo de Y. GRAFMEYER en la obra editada por BRUN y RHEIN en 1994.

29 De ahora en adelante, es necesario tener en cuenta la excepción de los originarios de la

3.3a): efectivamente, la heterogeneidad local es sensiblemente mayor respecto al origen migratorio que a la edad de los individuos y al tamaño de los hogares, pero supera apenas a la introducida por la condición social de los hogares.

Los factores ligados a la historia del desarrollo urbano y a las formas de producción de la vivienda, que pesan fuertemente sobre los procesos de segregación social y demográfica, actúan en primer lugar en la escala de la ciudad en su conjunto: no fue sino hasta una fase posterior del desarrollo metropolitano cuando surgió —como en el caso de Bogotá— una escala suplementaria más fina de la segregación social. La tendencia a la agregación de las comunidades de migrantes constituye un factor suplementario de la heterogeneidad local, que refuerza en Bogotá la tendencia a la constitución de un “mosaico de microespacios más y más homogéneos”, para retomar la imagen de LÉVY y BRUN (2002: 161).

D. LAS REPRESENTACIONES DE LA CONFIGURACIÓN SOCIOESPACIAL DE BOGOTÁ ENTRE DIFERENTES ACTORES URBANOS³⁰

Las representaciones juegan un papel decisivo en la producción de las configuraciones urbanas. Es por lo demás a este título que el equipo de A. MOCKUS, alcalde de Bogotá entre 1995 y 1998, reelegido en el año 2001, buscó influenciar las representaciones de la ciudad vehiculadas por sus habitantes en el curso de su primer mandato, a través de una política que concedía un importante lugar a lo que él denominó “educación ciudadana”. La tarea era ambiciosa: los sistemas de representación de quienes producen la ciudad —habitantes, políticos y gestores³¹— manifiestan una gran resistencia.

zona de poblamiento afrocolombiano en Cali ($R = 0,30$), sobre la cual volveremos en la sección III de este capítulo, consagrada a la segregación racial en esta ciudad.

30 Esta sección se apoya en varios materiales: un estudio diacrónico de la imagen de Bogotá comparando diversos textos de los años 1930 y 1990 (JARAMILLO, 1998); los discursos recogidos en diferentes encuestas (en particular, las realizadas por T. LULLE en 1996 y 2000, presentadas en el anexo 2); y algunos textos mayores producidos por los servicios de planificación de Bogotá.

31 A pesar de su papel tan determinante, los actores económicos —en particular los de los

I. UNA IMAGEN FORJADA DESDE LOS AÑOS 1930

La literatura no especializada de los años 1930³² comenta ampliamente sobre la rapidez del crecimiento demográfico de Bogotá, sobre su expansión espacial y sus transformaciones. El centro y la periferia son distinguidos a través de tres registros de oposiciones: antiguo/reciente, compacto/discontinuo, complejo/simple-homogéneo. En las periferias, los barrios residenciales del norte son opuestos a los barrios obreros del sur. En cambio, las clases medias y las zonas industriales no son mencionadas. Así comienza a establecerse desde esa época la idea de una “polarización geográfica-social en la cual el norte es de los ricos mientras el sur es de los pobres” (JARAMILLO, 1998: 133). Incluso cuando se introducen ciertos matices respecto a la bipolaridad socioespacial y cuando está en boga una intensa inquietud por identificar los problemas generados por el rápido crecimiento de la ciudad (congestión del centro, expansión periférica y precariedad en los barrios populares), el discurso “científico” de los especialistas en el tema de la ciudad no se desprende significativamente del precedente.

A principios de los años 1990 (antes del primer mandato de A. MOCKUS), los discursos sobre la ciudad en su conjunto, tan presentes sesenta años antes, han desaparecido:

Los bogotanos [han] ido perdiendo una imagen unitaria y sintética de la ciudad (JARAMILLO, 1998, 188) [Los periódicos envían una imagen catastrófica, calificándola como] caótica, monstruo, desastrosa, inmanejable, ingobernable [...] invisible (ibíd., 193).

La insistencia en el carácter excepcional de la situación de Bogotá es fuerte, en relación con otras ciudades o con un pasado concebido como mejor. Los problemas mencionados son atribuidos antes que todo al tamaño de la ciudad (y no a su crecimiento), pero también a la insuficiencia de acciones por parte

sectores de la construcción e inmobiliarios—, menos estudiados, no serán tomados en cuenta.

32 S. JARAMILLO distingue dos tipos de discursos producidos por las clases dominantes: el discurso técnico (de los urbanistas, arquitectos, ingenieros) y el discurso iluminado, destinado a un público no especializado, que alimenta más directamente al discurso común.

del Estado y al comportamiento de los habitantes (poco solidarios y carentes de sentido cívico); el déficit de sentimientos de pertenencia a la ciudad es atribuido a la fuerte población de migrantes.

La imagen de la configuración urbana ha evolucionado desde los años 1930. Sin duda, el norte siempre es asociado sistemáticamente con la población que recibe altos ingresos; el centro, al concentrar la miseria y el peligro, se convierte en objeto de un discurso recurrente sobre su decadencia, asimilando la degradación física y la social. Al contrario, la periferia posee un contenido mucho más vago, incluso cuando la asociación con la pobreza y la carencia de servicios públicos es frecuente: la periferia aparece generalmente como el simple residuo del norte y del centro, “el resto de la ciudad” (JARAMILLO, 1998: 236). Mientras se afirma la imagen del norte rico, la del sur de épocas anteriores parece diluirse, con la excepción de Ciudad Bolívar, arquetipo del barrio miserable asociado con la pobreza, la carencia de servicios y la violencia. A pesar de ser muy numerosos, los sectores de clase media no poseen una imagen fuerte, con la excepción de Ciudad Kennedy, símbolo de la modernidad. Mientras el norte y el centro son mencionados con frecuencia, la mayor parte de la ciudad no aparece más que “en el vacío”: en los medios de comunicación de principios de los años 1990,

la segmentación de la ciudad parece manifestarse no solamente en separación muy nítida entre los grupos sociales de mayores ingresos y el resto, sino en un contraste entre significación y no significación (JARAMILLO, 1998: 241).

2. LA POLARIZACIÓN SOCIAL VIVIDA POR LOS HABITANTES

Aunque las nociones de segregación o de segmentación están ausentes de sus discursos, los habitantes de los estratos populares o de clase media interrogados a mediados de los años 1990 sobre sus elecciones residenciales, mencionan con insistencia las divisiones sociales del espacio urbano en formas distintas: utilizando designaciones geográficas (la dirección o conjuntos como el centro, el norte, el sur); recurriendo a las divisiones establecidas por la Administración (los estratos socioeconómicos para el cobro de las tarifas de servicios públicos); o acompañando las alusiones a los barrios con calificativos sobre el nivel social de la población, el origen de los migrantes, las funciones (residencial *versus* comercial) o el nivel de inseguridad.

Cualquiera que sea su lugar de residencia, los habitantes de los barrios populares se expresan frecuentemente sobre la homogeneidad social de estas zonas, que oponen a los barrios de referencia en el otro extremo de la escala social (Chicó, Nogal).

Aquí, socialmente todos somos iguales, todos somos pobres; si hay alguien que vive peor que otro, es su problema. Pero aquí todos somos del mismo estrato, de la misma posición social, tenemos los mismos ingresos, estamos en posición social baja, ¿no es cierto? Aquí trabajamos todos para poder vivir (habitante de una invasión en Soacha).

Por otra parte, las observaciones sobre la composición social de los barrios habitados frecuentemente son más sutiles. Algunos habitantes de clase media subrayan así las diferencias sociales internas poco visibles, en barrios frecuentemente considerados homogéneos (sea en La Perseverancia o en conjuntos residenciales como Nueva Santa Fe o Ciudad Salitre).

El impacto de las representaciones sobre las elecciones residenciales de las clases medias –“aprimadas” entre las clases populares, frente a las cuales quieren imperativamente tomar distancia, y los estratos superiores, a los cuales sólo pueden acceder muy difícilmente– arroja tres registros.

Ciertos barrios son deliberadamente excluidos. A la pregunta: “¿dónde no viviría usted en Bogotá?”, poco más de la mitad de los encuestados respondió que no quería vivir en “el sur”, “el extremo sur” o Ciudad Bolívar, que simboliza la peor situación, lo inaceptable. Algunas respuestas, más escasas, mencionan el “extremo norte”, “la periferia”, “el centro” y las zonas socialmente llamadas “barrios de estratos bajos”, “donde se encuentra la marginalidad”. Se trata de diferenciarse claramente de los estratos populares. La argumentación reposa sobre consideraciones de pobreza, inseguridad o de función no residencial (esta última es el caso del centro, considerado como un sector de instituciones y comercio, no como un sitio residencial).

Otros barrios son buscados con la esperanza de mejorar el estatus social al cambiar de localización, con el riesgo de aceptar sacrificios importantes en el plano financiero y en la distancia al lugar de trabajo. Entre los empleados de la industria Icollantas (situada al sur, en Soacha), que se han trasladado de los conjuntos cerrados de ese municipio a los de Suba (en el noroccidente), la razón del mejoramiento del estatus social está muy presente y directamente

asociada con la idea de que el norte es mejor que el sur (ORJUELA, JARAMILLO, PÉREZ, 1994):

En Suba la gente es mejor. También son pobres todos, pero tienen más elegancia [...] Uno vive lejos (del trabajo), pero ha terminado por acostumbrarse. Además, uno se siente diferente, hace parte del grupo que vive lejos, al norte. Eso nos gusta.

Una última persona encuestada, que se trasladó a Suba después de vivir tres años en Soacha, afirmó:

Para nosotros, Suba representa un mejoramiento del estatus social porque nosotros no somos cualquier cosa. Ya tenemos nuestra propia casa y cada día queremos tener nuevas y mejores cosas.

La mayoría de los entrevistados da testimonio de la representación de una jerarquía en los sectores de la ciudad, y de la espera de un mejoramiento del estatus social mediante el cambio de lugar de residencia.

Pero algunos barrios son considerados inaccesibles. Algunas respuestas dan prueba de fatalismo, testimoniando la interiorización de una movilidad social imposible, y que en todo caso no pasa por estrategias de tipo inmobiliario. Desde la perspectiva de la clase media, el ideal representado por los barrios acomodados no es por lo demás tan fuertemente marcado como el antiideal que constituyen los barrios pobres.

Las representaciones de los habitantes y de los medios convergen entonces en algunos puntos: las fuertes imágenes del norte y del centro son completamente compartidas, lo que de paso confirma el papel de los medios de comunicación en las construcciones colectivas. En cambio, en el “resto” de la ciudad la población, ampliamente mayoritaria pero indiferente para los medios, se identifica fácilmente con las jerarquías o las mezclas sociales. Sin duda, allí hay un testimonio suplementario de la segmentación social de las prácticas espaciales en Bogotá, que marca a la vez a las trayectorias residenciales y a los recorridos cotidianos: no tratada por los medios, la ciudad de las clases medias y las capas populares tiende a volverse invisible en la prensa.

3. LA CONFIGURACIÓN SOCIOESPACIAL EN EL CENTRO DE LOS DEBATES POLÍTICOS CONTEMPORÁNEOS

Ya presentes en 1996, las alusiones al proceso segregativo se vuelven más explícitas y numerosas en las entrevistas realizadas cuatro años después. También aparecen en las declaraciones de una gama de actores más amplia: quienes poseen un conocimiento directo de las prácticas de los habitantes (los elegidos y líderes comunitarios, el sector inmobiliario), pero también entre quienes, en la Administración Pública, administran los programas de reasignación de vivienda. El tratamiento conferido a la segregación en el diagnóstico y los proyectos del POT (Plan de Ordenamiento Territorial) sin duda alguna cumple un papel en esta evolución reciente.

A pesar de la diversidad del estatus y las funciones de los actores interrogados, las representaciones de la segregación que se derivan de estas entrevistas son relativamente convergentes. La primera característica común es la aceptación exclusivamente socioeconómica de la segregación. La dimensión demográfica del fenómeno, a pesar de ser tan intensa en Bogotá, no es objeto de atención alguna.

La segunda característica común es la importancia concedida a las prácticas residenciales de los habitantes: es mediante esta entrada como se aborda la segregación, y no mediante mecanismos estructurales, como las características de la oferta de vivienda. Una constatación establecida por muchos es que, incluso cuando las personas cambian de residencia, se quedan a vivir en el mismo barrio o en la misma zona. Se evoca el origen familiar de la creación de algunos barrios, cierta clausura frente a personas del exterior y el apego al barrio. Algunas interpretaciones culturalistas salpican los discursos: “Nosotros somos muy segregacionistas, cada uno cree pertenecer a una familia mejor que la del otro” (RAMÍREZ, consultor). En el caso de las clases populares, un proceso de autoexclusión estaría constituyéndose junto a una relación con la vivienda particularmente fuerte. Pero entre todas las razones evocadas, dominan la importancia de las redes familiares y la voluntad de conservar una proximidad entre los miembros de la familia.

También circulan discursos más precisos sobre nuevas prácticas residenciales, ligadas a la coyuntura. La crisis política y económica habría influido en los comportamientos residenciales, habría contribuido a hacer más compleja

la regla de movilidad a corta distancia y a modificar el esquema de la segregación. Según los representantes elegidos de las localidades centrales, el centro histórico experimenta partidas motivadas por un sentimiento: los poderes públicos no hacen nada en materia de seguridad o, al contrario, no intervienen más que para favorecer el aburguesamiento. A los ojos de los agentes inmobiliarios, en los barrios habitados por las clases acomodadas, las partidas al extranjero causan la venta o el arriendo de las viviendas a precios atractivos, accesibles a familias de clase media en ascenso. Los representantes elegidos del pericentro sur subrayan que el empobrecimiento de las familias de clase media genera dos tipos de movimiento: bien sea la partida hacia el norte de quienes, minoritarios, no son víctimas directas de este empobrecimiento pero deploran sus efectos en términos de la degradación de su ambiente; bien sea la división de las casas y su arrendamiento por parte de quienes permanecen, o por sus herederos, quienes recurren a esta estrategia para valorizar su patrimonio y compensar su pérdida de ingresos. Estas partidas o divisiones generan la llegada de nuevas poblaciones, no necesariamente con bajos recursos pero con frecuencia de otro origen regional.

Finalmente, un último rasgo común de los discursos recogidos en el 2000, en un contexto particularmente polémico³³: la evaluación del tratamiento del problema de la segregación en el POT. A imagen de lo que también revelan otros textos producidos recientemente por el sector de la planificación de Bogotá, los debates en torno al POT muestran que el diagnóstico sobre la cuestión de la segregación ha evolucionado sensiblemente. Como se indicó, el discurso sobre las densidades demográficas se ha invertido, pasando de la constatación de una “subdensidad” heredada del período de expansión espacial, a un diagnóstico de “sobredensidad” global y de fuertes desigualdades entre diferentes sectores de la ciudad, que justifican la propuesta de densificación del extremo norte de la ciudad. Esta evolución en el diagnóstico –por lo demás, reconocida por los autores del POT (2000: 67)– es ciertamente coherente con la evolución efectiva

33 Las entrevistas fueron realizadas mientras la elaboración del POT generaba una fuerte controversia, en razón del proyecto de favorecer la expansión de la ciudad hacia una zona situada al norte: a los ojos de la CAR (Corporación Autónoma Regional), ese proyecto representaba una amenaza para el medio ambiente regional.

de las densidades. El tránsito a la escala metropolitana y la densificación del Distrito, demostradas en este capítulo, validan ese cambio de posición de los planificadores, pero el extremismo de las opiniones expresadas en estos textos sorprende.

Las densidades y la disponibilidad de tierras monopolizan la atención en el diagnóstico y las propuestas del POT, en detrimento de la segregación³⁴. En esta nueva lectura de la configuración urbana, las formas de producción de vivienda ya no son centrales; las movilidades residenciales están notoriamente ausentes³⁵ y las relaciones densidad/segregación social no están realmente descritas: en el análisis del parque existente y de la demanda de viviendas, la población no existe más que por su número y su grado de solvencia.

Son numerosas las críticas al POT y provienen de actores muy diferentes. Muchas personas elegidas a las Juntas de Acción Comunal –JAC– opinan que el POT tendrá como consecuencia el favorecer la segregación, y que incluso constituye “una táctica de los ricos para consolidar mejor la segregación” (palabras de un elegido a una JAC de un barrio popular). Los proyectos de vivienda social también son motivo de vivas reacciones, desde su misma formulación. Así, algunos municipios limítrofes de Bogotá, como Chía y Soacha, muy preocupados por la posible construcción de viviendas de interés social en sus territorios, han elaborado por su parte planes que controlan fuertemente la aparición de tales proyectos.

En los sistemas de representación de la ciudad que circulan entre los distintos actores urbanos de Bogotá, la segregación social –incluso si se encuentra relegada a un lugar secundario en el texto del POT– permanece muy presente desde hace varios decenios. Aunque estas representaciones se han vuelto más complejas a raíz de las etapas del proceso de metropolización y de las coyunturas político-económicas, todavía son muy estereotipadas en los discursos y prácticas de los actores, habitantes y encargados de las decisiones. Este rasgo del discurso es particularmente sorprendente entre estos últimos,

34 En el documento técnico del POT, que tiene más de 450 páginas, de 70 dedicadas a la caracterización de la ciudad actual sólo hay 1 consagrada a la segregación.

35 El cálculo del déficit de viviendas efectuado en el POT sólo se basa en la producción de viviendas nuevas, sin tomar en cuenta el parque existente.

quienes por convicción, formación o deber, pretenden recurrir cada vez más a conocimientos objetivos, ya existentes y diversificados, en la elaboración de diagnósticos y planes, así como en la definición e implementación de sus intervenciones y estrategias. Se observa la completa ambigüedad de la práctica urbanística, prisionera entre científicidad e ideología, proyecto y acción, y la incertidumbre que pesa sobre su eficacia en la proyección de una ciudad más equitativa.

III. EL COMPONENTE RACIAL DE LA SEGREGACIÓN RESIDENCIAL EN CALI

Como es el caso en la división social del espacio urbano que acabamos de observar, la producción periodística colombiana sobre la segregación racial, frecuentemente actualizada por los actores políticos, conserva ambigüedades y prejuicios que es necesario superar si se quiere situar el debate donde tiene que ser, es decir, en las modalidades reales de la segregación residencial y social de las “minorías étnicas” en Colombia. El desafío es mayor en el contexto del multiculturalismo, afirmado constitucionalmente desde 1991. Por primera vez en Colombia, con las encuestas realizadas en Cali en 1998 por el CIDSE y el IRD, y en 1999 por el CIDSE y el Banco Mundial³⁶, fuentes demográficas confiables permiten calcular los índices de segregación residencial correspondientes a los distintos componentes fenotípicos del poblamiento de una metrópoli (recuadro 3.2).

La encuesta de 1998 estimó que la población de los hogares afrocolombianos en Cali representaba un 27,5% del total (es decir, más de 540.000 personas) y que se contaba con un 25% de personas caracterizadas como negras o mulatas. Recordemos que los hogares afrocolombianos son aquellos donde el encuestador caracteriza como negra o mulata, es decir, como poseedora de rasgos fenotípicos africanos, a por lo menos una persona dentro del núcleo familiar del jefe del hogar. Esta definición permite constituir una categoría estadística que exprese la realidad del mestizaje afroamericano en Cali en sus

36 Cfr. la presentación de estas encuestas en el anexo 2.

dos aspectos: histórico (el mestizaje “biológico” de los individuos en el transcurso de las generaciones) y contemporáneo (los hogares mixtos)³⁷. La segunda encuesta, realizada en septiembre de 1999, confirmó el orden de magnitud de las cifras: 37% de la población pertenecía a hogares afrocolombianos y 31% se caracterizaba como negra o mulata³⁸.

Vamos a describir primero el papel del factor racial en la distribución espacial de las poblaciones y la geografía social de la configuración residencial, teniendo en cuenta el mestizaje en Cali: para esto deberemos distinguir la población negra de la población afrocolombiana en su conjunto. Sobre la base de los índices de segregación, nos dirigiremos luego a establecer una comparación con Estados Unidos, donde la segregación racial es a la vez mejor conocida empíricamente y ocupa desde mucho tiempo un lugar importante en el debate sociológico y político (recuadro 3.3). El análisis de los datos estadísticos de la sección III.B alcanzará un resultado importante: las cifras certifican que en Cali no existe un “gueto racial”³⁹. No obstante, el constatarlo no significa la inexistencia de un efecto propio del factor racial en la segregación residencial; la cuestión está en situar su peso dentro de los diversos componentes del proceso de segregación, particularmente a escala detallada de los barrios y las viviendas; este aspecto se tratará en la sección III.C.

37 De esta manera, al hablar de la población de los “hogares afrocolombianos”, o “no afrocolombianos”, se hace referencia a agregados estadísticos en los que sólo un 48% de los individuos fueron caracterizados como negros en el primer caso y un 63% como blancos en el segundo.

38 La diferencia con la encuesta de 1998 se debe a la cifra bastante superior de población mulata (19% contra un 10% en la encuesta CIDSE-IRD), en detrimento de la población mestiza (22% contra 28%). Estas diferencias señalan la importancia de la formación de los encuestadores y de un consenso semántico sobre las categorías fenotípicas.

39 Cfr. también sobre el tema las secciones I y IV del capítulo cuarto.

RECUADRO 3.2

SUMATORIA DE ENCUESTAS PARA MEDIR LA SEGREGACIÓN RACIAL EN CALI

Los cálculos de los índices de segregación a partir de las encuestas de 1998 y 1999 plantean ciertos problemas metodológicos ligados a la imprecisión de las estimaciones por sondeo de la composición de la población a escala micro. Los índices de disimilaridad y de HUTCHENS (recuadro 3.1) son precisamente mediciones de la variabilidad local en la composición poblacional (a nivel de sectores censales). Ahora bien, si los diseños de muestreo de las dos encuestas son concebidos con objetivos de representatividad para toda la ciudad o de las comunas, las estimaciones por sectores censales sufren en cambio intervalos de confianza importantes; de aquí la fuerte varianza de las proporciones de población por sectores y el aumento de los valores de los índices de segregación. No siendo funciones lineales, los estimadores de la varianza de estas dos estadísticas están sesgados y, en consecuencia, no existe una solución analítica para corregir la sobreestimación de los índices. Para superar esta dificultad no se puede sino emprender un acercamiento empírico.

Aprovechando la disponibilidad de dos encuestas desarrolladas con la misma metodología, con intervalo de un año –período lo suficientemente corto como para ignorar los cambios–, efectuamos la sumatoria de las dos muestras (1.880 hogares en la encuesta CIDSE-IRD y 1.982 en la encuesta CIDSE-Banco Mundial), con lo cual la muestra total llega a unos 16.706 individuos repartidos en 201 sectores censales, es decir un promedio de 83 observaciones por sector (en el censo de 1993, la población promedio de los sectores en Cali era de 5.035 personas). La comparación de los valores de los índices de segregación obtenidos a partir de la sumatoria con aquellos logrados con el censo de 1993 (para el conjunto de indicadores utilizados en la sección precedente) muestra que subsiste una sobreestimación importante. Escogimos evaluarla a partir de las tres dimensiones de la especialización del poblamiento más estables durante este período: el tamaño de los hogares, la estructura por edad y la proporción de población nativa de Cali. Este estudio empírico conduce a los coeficientes de ajuste de los valores estimados a partir de la sumatoria de encuestas: 0,65 para el índice de disimilaridad y 0,355 para el índice de HUTCHENS.

A. EL FACTOR RACIAL EN LA DISTRIBUCIÓN SOCIOESPACIAL DE LA POBLACIÓN

El patrón general de segmentación social del espacio urbano en Cali pesa fuertemente en la distribución residencial de la población negra y su segregación dentro del conjunto de los barrios populares (mapas 3.4 y 3.7). Esta segregación no puede ser apreciada sino en comparación con la configuración residencial del conjunto de la población afrocolombiana. Aunque el índice de segregación global para la población de los hogares afrocolombianos (cuadro

3.4) muestra una distribución residencial relativamente equilibrada entre los sectores censales, el análisis de su repartición en las grandes áreas sociales de la ciudad evidencia una concentración relativa en las zonas más pobres, producto de un proceso complejo de segregación residencial (BARBARY et ál. 1999: 37 a 39, y 71 a 76).

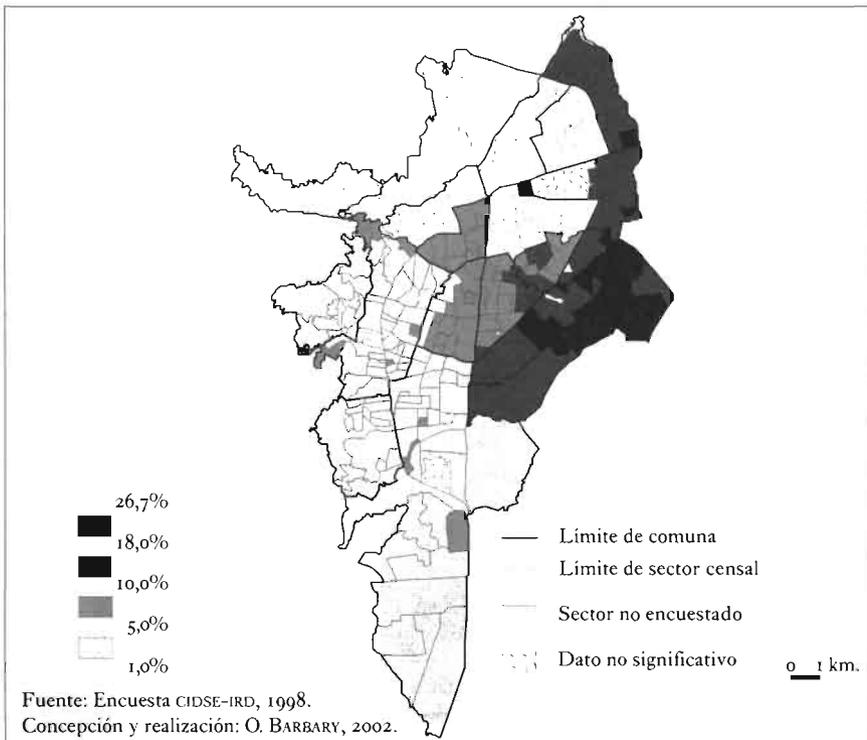
El 75% de la población afrocolombiana vive en las nueve comunas que concentran casi todo el habitat popular en Cali, mientras que sólo un 65% de la población no afrocolombiana se agrupa en ellas. De manera inversa, los barrios de clases media y alta no acogen sino a un 15% de los afrocolombianos, *versus* un 24% de los no afrocolombianos. Estas cifras no demuestran una segregación residencial masiva hacia los afrocolombianos, pero a medida que se entra en detalle en el análisis, las diferencias se acentúan.

A nivel global en la ciudad de Cali, el proceso de concentración residencial de las poblaciones parece seguir una jerarquía racial estricta que asocia sistemáticamente los contextos urbanos más pobres a mayor oscuridad en el tono de piel de la población. Los barrios populares del oriente, donde vive la mitad de la población total de Cali, reúnen un 74% de población negra, 52% de población mulata, pero sólo un 49% de población mestiza y un 47% de población blanca. Por el contrario, los barrios de clases media y alta (19% del total de la población) alojan a un 24% de blancos, un 19% de mestizos, un 18,5% de mulatos, pero solamente a un 7,5% de negros. Cabe notar con estas cifras, que las diferencias que oponen a las poblaciones mulatas, mestiza y blanca entre ellas (y en comparación al promedio) son reducidas, comparadas con las diferencias entre aquellas y la población negra. La conclusión estadísticamente válida, confirmada por los valores del índice de HUTCHENS (tabla 3.4), es entonces que existe de manera global una segregación de la población negra pero que no puede decirse lo mismo de las poblaciones blanca, mestiza y mulata.

La distribución espacial de la población negra (mapa 3.7) se caracteriza por el gradiente fuerte y regular del occidente hacia el oriente, según el cual varía su importancia demográfica relativa. Las tasas más bajas se encuentran en los barrios de las laderas occidentales y en el conjunto de barrios de clase acomodada del eje norte-sur. Al contrario, en los barrios orientales del Distrito de Aguablanca y de la ribera del río Cauca, las tasas de población negra sobrepasan siempre el promedio para el conjunto de la ciudad, hasta llegar a una

concentración máxima en el estrato socioeconómico más bajo de estos mismos barrios. Concentraciones cercanas al promedio caracterizan a los barrios menos favorecidos del oriente y a la totalidad de los barrios socialmente mixtos del centro y pericentro. Finalmente, más que para los hogares afrocolombianos, la segregación de la población negra en los más bajos segmentos del mercado de vivienda se produce en todas las áreas sociales de la ciudad. La frecuencia relativa de población negra en los estratos socioeconómicos más bajos de cada área es siempre notablemente superior a la frecuencia promedio del conjunto de la población del área.

MAPA 3.7
PROPORCIÓN DE POBLACIÓN NEGRA EN CALI EN 1998



Edición: O. PISSOAT

TABLA 3.4
EL FACTOR RACIAL COMPARADO CON OTROS FACTORES DE SEGREGACIÓN
RESIDENCIAL EN CALI (ÍNDICES DE HUTCHENS, 1998-1999)

Comunas	Indicadores								
	Número	Índice de la raíz cuadrada (x 100)							
	Sectores censo 93	Pob. ≤ 15 años	Pob. ≥ 60 años	1.º cuartil de CSI*	2.º cuartil de CSI	3.º cuartil de CSI	4.º cuartil de CSI	Pob. de los hogares afrocolombianos	
Comunas con la menor segregación racial									
16	5	0	1	0	0	0	1	0	
Comunas con la mayor segregación racial									
03	6	1	6	9	8	1	11	8	
Estadísticas globales									
Pro. Com.		0,8	2,5	3,8	3,0	1,4	3,4	2,9	
Total Cali	201	1,1	3,4	4,9	3,0	1,7	6,4	3,0	
R***		0,75	0,74	0,79	1,00	0,78	0,54	0,97	
Comunas	Indicadores (cont.)								
	Número	Índice de la raíz cuadrada (x 100)							
	Sectores censo 93	Pob. nacida en Cali	Migrantes de la ZPA****	Migrantes interiores de VCN**	Migrantes Antioquia Viejo Caldas	Población negra	Población mulata	Población mestiza	Población blanca
Comunas con la menor segregación racial									
16	5	0	0	0	1	1	1	1	0
Comunas con la mayor segregación racial									
03	6	0	10	1	1	15	6	4	4
Estadísticas globales									
Pro. Com.		0,8	4,0	1,8	3,9	5,4	3,1	3,9	2,1
Total Cali	201	0,9	3,8	1,9	3,9	5,8	3,0	4,5	2,7
R***		0,85	1,08	0,93	1,00	0,94	1,04	0,86	0,76

Fuentes: Encuestas CIDSE-IRD (1998) y CIDSE/Banco Mundial (1999). Cálculos de O. BARBARY a partir de archivos individuales.

* CSI: Indicador de la Condición Social de los Individuos (nivel educativo/hacinamiento en la vivienda).

** VCN: Interior de los Departamentos de Valle, Cauca y Nariño.

*** Ratio R: Promedio de los valores por comuna/Valor total para la ciudad.

**** ZPA: Zona de Población Afrocolombiana.

B. LA INTENSIDAD DE LA SEGREGACIÓN RACIAL EN CALI
EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL Y EN COMPARACIÓN
CON OTROS FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS

Entre los trabajos recientes sobre segregación racial en Estados Unidos, los realizados por el equipo del Population Research Center de la Universidad de Chicago, reunido alrededor de MASSEY y DENTON, son, sin lugar a duda, un punto de referencia. De su importante producción se extrajeron tres artículos de síntesis⁴⁰ sobre los cuales se apoyará este ejercicio de comparación con Cali (recuadro 3.3).

RECUADRO 3.3
COMPARACIÓN CON LOS ESTUDIOS EMPÍRICOS DE MASSEY Y DENTON
EN ESTADOS UNIDOS

El estudio del *Population Research Center* trata sobre las 50 ciudades norteamericanas más pobladas y sus suburbios, a las que se añadieron 10 centros urbanos escogidos por su importante población de origen "hispanico". Los autores se interesan por cinco dimensiones del proceso de segregación residencial de las minorías étnicas, de las cuales retendremos aquí sólo la primera, denominada *unevenness* (desigualdad) y medida por el índice de disimilaridad. Sólo ella, en efecto, corresponde a la aproximación de la segregación desarrollada aquí, en términos de desigual repartición espacial de las categorías de la población. La unidad espacial que sirve de base al conjunto de medidas es el *Census Tract*, o sector censal, que agrupa una población entre 3.000 y 6.000 personas (un promedio aproximado de 4.000); se trata entonces de un orden de tamaño que garantiza la comparabilidad con las medidas basadas en los sectores censales colombianos.

De acuerdo con el tono bastante politizado del debate norteamericano sobre la segregación racial, MASSEY y DENTON enfocan su atención sobre la cuestión de la "hiper segregación" de los afroamericanos, definida como la desigualdad de condición residencial padecida por esta minoría en comparación con la categoría étnica mayoritaria (*Non Hispanic Whites*) y a la otra minoría importante (*Hispanics*). Su demostración se apoya entonces en los índices de segregación relativa de estas dos minorías en comparación a la mayoría blanca, y no

40 MASSEY y DENTON, 1988 y 1989; MASSEY, WHITE y PHUA, 1996. Los datos, obtenidos del censo estadounidense de 1980, y el método, presentados en el primer artículo, son similares en los tres artículos. Los resultados empíricos son agrupados y discutidos en el segundo artículo, mientras el tercero propone una actualización de las cifras a partir del censo de 1990.

en la medida de su segregación absoluta en comparación con el resto de la población, como lo hemos hecho en las Tablas 3.3 y 3.4.

Para las necesidades comparativas, se adoptará temporalmente el punto de vista de MASSEY y de DENTON en la elaboración de la tabla 3.5. A partir de los datos de caracterización fenotípica obtenidos de las encuestas de 1998 y 1999, se considerarán entonces las tres poblaciones “minoritarias” importantes de Cali –negra (11% del total de la población), mulata (18%) y mestiza (20%)– para calcular su índice de segregación de manera relativa a la población blanca (41%).

Los resultados de la tabla 3.5 se examinarán con algunas cifras extraídas de MASSEY y DENTON (1989: 379 a 389; 384 y 385): los índices para las cinco primeras metrópolis del país y la aglomeración de New Orleans (cuyo tamaño puede compararse con el de Cali), así como los valores mínimo, máximo y el promedio para las 60 aglomeraciones de Estados Unidos.

TABLA 3.5
LA SEGREGACIÓN DE LAS POBLACIONES MINORITARIAS EN CALI (1998-1999)
Y ESTADOS UNIDOS (1980), ÍNDICES DE DISIMILARIDAD

Cali (% población total)*	Negra (11%)	Mulata (18%)	Mestiza (20%)
Cali**	0,29	0,22	0,25
Estados-Unidos***	Negra	Hispánica	
Chicago	0,88	0,63	
New York	0,82	0,66	
Los Angeles-Long Beach	0,81	0,57	
Miami	0,78	0,52	
San Francisco-Oakland	0,72	0,40	
New Orleans	0,68	0,25	
Mínimo	0,35	0,21	
Máximo	0,91	0,72	
Promedio 1980	0,69	0,44	

Fuentes: * Encuesta CIDSE-Banco Mundial 1999; ** Encuestas CIDSE-IRD 1998 y CIDSE-Banco Mundial 1999; *** MASSEY y DENTON (1989: 378 y 379; 384 y 385).

Considerando los valores de la disimilaridad, la segregación racial en Cali no tiene medida común con la de las grandes aglomeraciones estadounidenses. La concentración residencial de las poblaciones negra y blanca en barrios específi-

cos prueba ser 2,4 veces superior, en promedio, en las ciudades norteamericanas que en Cali; es el caso por ejemplo de New Orleans, mientras que en las cinco primeras ciudades del país, la diferencia se ahonda hasta llegar a un factor 3 en Chicago, la gran metrópoli con mayor segregación (tabla 3.5). Si consideramos además, como lo afirma SIMON (1997) en su estudio dedicado al censo de Estados Unidos, que la regla de la “gota de sangre” es la que se aplica en la identificación étnica, lo correcto sería comparar la segregación de la población negra de este país con la de las poblaciones negra y mulata de Cali: la intensidad menor de la segregación racial en Cali se encontraría reforzada.

La segunda diferencia importante entre los dos contextos es la ausencia en Cali de aquello que MASSEY y DENTON llaman “la hipersegregación de los afroamericanos”⁴¹. En Cali, la diferencia entre las poblaciones negra y mulata no sólo es reducida, sino que además la población mestiza tiene un nivel de segregación intermedia. De esta manera se desmiente, en el caso colombiano, la observación que hacen los especialistas norteamericanos acerca de una segregación que crece proporcionalmente a la oscuridad del color de piel. Con estas cifras se entiende por qué los antropólogos urbanos de la Escuela de Chicago—como J. FRAZER en Salvador de Bahía—, cuando conocieron en los años 1930 una realidad tan diferente a la de la ribera del Michigan, sostuvieron la idea de un modelo suramericano de coexistencia y “democracia” racial.

Estos resultados conducen pues a dos conclusiones: un nivel moderado de concentración residencial de las poblaciones negra y mulata, y una débil diferenciación entre los diversos componentes fenotípicos de la población. Puede entonces afirmarse que no existe un gueto racial en Cali, por lo menos como división del espacio urbano en grandes áreas de poblamiento homogéneo⁴². Pero ¿puede concluirse que el factor racial sólo cumple un papel secundario frente a las otras dimensiones del proceso de segregación residencial?

Se llega a una conclusión diferente cuando se retoma el índice de HUTCHENS para comparar la intensidad de la segregación, esta vez absoluta, inducida respectivamente por las divisiones demográfica, social, de acuerdo al origen

41 Cfr. la totalidad del argumento en MASSEY y DENTON (1989, 383 a 389), donde son tenidos en cuenta otros cuatro índices.

42 Para los debates sobre la noción de gueto, cfr. el capítulo cuarto.

regional y el color de piel. Las intensidades de la segregación racial y de la segregación social son del mismo orden. Sin embargo, cuatro grupos de población se distinguen por una segregación más fuerte: las categorías socioeconómicas de los dos extremos de la escala social (1.^{er} y 4.^o cuartiles del indicador de condición social), la población negra y la población mestiza (tabla 3.4). De manera más general, los fuertes niveles de segregación corresponden casi siempre a categorías de población definidas de manera directa o indirecta a partir de criterios socioeconómicos o fenotípicos. La hipótesis sugerida por estas cifras es que existe en Cali un factor sociorracial de concentración y diferenciación de la población a la escala de los sectores censales. El análisis detallado de la geografía socioeconómica y racial de la ciudad apoya esta tesis y muestra la interacción de las dos dimensiones.

C. LAS ESCALAS DE LA SEGREGACIÓN RACIAL

Dentro de algunas grandes áreas sociales, la estratificación socioeconómica del habitat (anexo 3) introduce un nivel suplementario en la especialización del poblamiento. En los barrios populares del oriente, por ejemplo, existe una importante sobrerrepresentación de la población de los hogares afrocolombianos en los tres estratos socioeconómicos más bajos; en una menor medida, también es el caso de los barrios de autoconstrucción de la ladera occidental. En cambio, esta división racial no tiene lugar, a escala micro, en las comunas centrales ni pericentrales, bastante mezcladas socialmente, ni en las del corredor norte-sur ocupado por las clases medias y superiores.

La intensidad de la segregación en los barrios, medida por los índices de HUTCHENS calculados entre sectores censales de una misma comuna (tabla 3.4), permite precisar la observación. En las comunas de barrios populares, donde la intensidad de la segregación de los afrocolombianos a esta escala es baja, no existe estructura de grandes bloques raciales homogéneos. La segregación opera sobre todo a nivel de las viviendas: la población negra se encuentra concentrada en las viviendas de peores condiciones. En este patrón, la precariedad socioeconómica parece dominar la diferenciación racial. A la inversa, en los barrios socialmente mezclados del centro y el pericentro y en los barrios más burgueses, la organización del poblamiento en áreas raciales homogéneas es

más marcada. Cuando se consideran niveles sociales equivalentes, los negros tienen iguales condiciones de vivienda que los blancos, pero se encuentran agrupados en determinados espacios: la segregación espacial les recuerda que aun “ricos” continúan siendo “diferentes”. Así, contraria a la segregación socioeconómica caracterizada, tal como se ha visto, por su escala macro, la segregación racial en Cali funciona en varias escalas y la “dosificación” entre sus diferentes niveles puede invertirse de un área social a otra.

Se puede todavía afinar el análisis, considerando no sólo la distribución de los lugares de residencia, sino también las condiciones de vida de los hogares afrocolombianos. La segregación se traduce con indicadores de hacinamiento, de acceso a los servicios públicos y de equipamiento del hogar, frecuentemente menos favorable a los hogares afrocolombianos (BARBARY et ál. 1999: 53 a 61). Un análisis detallado muestra que el proceso complejo que conduce a estas situaciones varía mucho con otros factores de división socioeconómica. BRUYNEL y RAMÍREZ muestran, por ejemplo, que para la promiscuidad en la vivienda, la desventaja relativa que tienen los hogares afrocolombianos es sistemática a lo largo de la escala social (ibíd., 56), mientras que para el acceso a servicios y bienes, la desventaja se concentra en los niveles sociales intermedios y, en cambio, los hogares afrocolombianos más pobres y los más ricos se encuentran en igual condición que sus homólogos no afrocolombianos (ibíd.: 58 y 59).

¿Qué debe concluirse a partir de estos desarrollos sobre la diferenciación de los dispositivos residenciales de las poblaciones afrocolombiana y negra en comparación con otras poblaciones? ¿Existe, en el proceso de segregación urbana en Cali, un componente racial irreductible? Es posible, particularmente a las escalas meso y micro de los estratos de habitat y del parque de viviendas. Pero estos mecanismos de segmentación residencial no pueden ser analizados únicamente como el producto endógeno de un orden social racialmente segregado, pues son igualmente resultado de estrategias y de oportunidades propias de las redes migratorias de las poblaciones de diferentes orígenes geográficos y sociales (ibíd.: 41, 49, 87 y 88). El papel de estos orígenes, como factor de diferenciación de la población afrocolombiana como también de su heterogeneidad interna, reviste una enorme importancia. Desde luego, el análisis de la división geográfica, económica y cultural del conjunto complejo de orígenes y trayectorias que determinan la segregación socioespacial en Cali

se vuelve un desafío central (secc. III.B del cap. segundo). Además, ligado a la diversidad de factores examinados a lo largo de este capítulo, que determinan las lógicas de concentración residencial en la ciudad (el acceso a la vivienda, y particularmente a su propiedad, el origen regional, ciertos factores culturales, el papel de las redes migratorias y de las estrategias de proximidad familiar o social, etc.), está el juego de escalas múltiples en las cuales esta concentración se produce, contribuyendo al entrelazamiento inextricable de las lógicas demográfica, social y racial en el proceso de armado del rompecabezas de la segregación urbana.

Así, muchas preguntas quedan abiertas. Para referirnos a la principal –aquella ligada al papel propio del factor racial en la segregación residencial– es claro que los afrocolombianos de Cali, sumergidos, como el resto de la población, en la combinación de factores y escalas del proceso segregativo, deben asumir una característica suplementaria y específica, cuya intervención en las relaciones interpersonales y sociales es indudable: su color de piel y los numerosos estigmas que él arrastra (cap. cuarto).

CONCLUSIÓN

El ejercicio comparativo ha puesto en evidencia la convergencia de las dinámicas socioespaciales de Cali y Bogotá, su desfase temporal e importantes similitudes entre estas grandes ciudades colombianas y sus homólogas latinoamericanas. El caso de Bogotá, donde el cambio de modelo de desarrollo ha empezado desde mediados de los años 1970, se inscribe plenamente en las evoluciones más generales descritas –sobre la base de un panel diverso de casos– en el libro *Metrópolis en movimiento* (DUREAU et ál., 2002). El tránsito desde una dinámica de expansión periférica a una dinámica dominada por la redistribución de la población en el espacio metropolitano está compartida ahora con otras numerosas metrópolis del Sur (LÉVY y BRUN, 2002: 150). En Bogotá, y pronto en Cali, ya no estaremos frente al simple marco de una “desigualdad espacial que estaría completamente regida por la expansión urbana espontánea” (LÉVY y BRUN, 2002: 151). En la capital colombiana, el cambio de dinámica está acompañado por una diversificación en las escalas de segregación

residencial. Esta hipótesis, surgida del análisis de las prácticas de movilidad espacial, está plenamente confirmada por los índices de segregación.

En Cali, una ciudad tres veces menor que la capital colombiana y menos avanzada en su desarrollo metropolitano, la herencia histórica de una división social del espacio en grandes bloques a escala de toda la ciudad perdura y se extiende en la periferia sin que surjan todavía recomposiciones importantes de la segregación social bajo una escala más fina. Y aunque no existe en Cali –y probablemente en ninguna ciudad del país– un gueto racial en el sentido que tiene este término en Estados Unidos, la segregación residencial y social de la población negra existe de todos modos: se ejerce en escalas y bajo modalidades variables en función de la pertenencia social.

Los resultados testimonian irrefutablemente el aporte de la aproximación estadística a las distribuciones espaciales de la población mediante los dos índices seleccionados. Su aplicación en dos ciudades, sobre las cuales disponíamos ya de un corpus de análisis y conocimientos, también muestra que esta aproximación alcanza su mayor interés cuando se trabaja con diferentes escalas geográficas y diacrónicamente. Como ocurre con frecuencia, la aproximación mediante los índices deriva su pertinencia de las variaciones de sus valores en el tiempo y en el espacio. No obstante, otros caminos merecerían ser explorados, recurriendo a métodos que precisamente tienen por objeto describir las estructuras de las escalas de poblamiento (fractales o métodos de análisis de imágenes).

A. EL TEMA TRATADO: DESAFÍOS CIENTÍFICOS Y POLÍTICOS INSOSPECHADOS

Las relaciones entre el modelo de crecimiento, la distribución espacial de las densidades y las divisiones sociales del espacio, han adquirido progresivamente una significación que no habíamos percibido en el inicio de este estudio.

El análisis del poblamiento “no calificado socialmente” (es decir, análisis de formas de expansión y de redistribución de las densidades) nos pareció inicialmente una cuestión poco importante en el contexto científico colombiano. En Francia, el problema de las densidades urbanas, abandonado durante decenios por las investigaciones, ocupa de nuevo un lugar importante en los debates

sobre la ciudad⁴³. La producción científica sobre la ciudad en Colombia ha permanecido al margen de este movimiento, reconfortándonos con la idea de que lo importante en el debate científico local era más el conocimiento del proceso segregativo y de sus recientes inflexiones. Creemos que el estudio de la dinámica socioespacial es una condición previa necesaria para el análisis del proceso segregativo, y por esta razón lo hemos convertido en uno de los objetivos de nuestro análisis: la hipótesis subyacente —plenamente confirmada en el ejercicio— era que el contexto de las ciudades “en construcción” imprimía un marco específico a los procesos de especialización social del poblamiento. Ahora bien, después de varios decenios de investigaciones y diagnósticos que subrayan la segmentación de las formas de producción de vivienda y del acceso a la vivienda, y que señalan la fuerte segregación, el problema del espacio y las densidades demográficas ha adquirido hace poco un estatus inédito en la más reciente producción en materia de planificación. ¿Por qué se produce este cambio en los diagnósticos de los planificadores? ¿Qué significación se puede atribuir a esta evolución, que además todavía no ha afectado a los elegidos locales ni a los profesionales de las ONG?

A pesar de estas nuevas orientaciones, los diagnósticos siguen careciendo de informaciones, cada vez más necesarias, para comprender mejor las actuales realidades metropolitanas. En el diagnóstico del POT de Bogotá, es manifiesta la crisis del paradigma de las formas de producción de vivienda, que se ha vuelto inadecuado en relación con la etapa de urbanización experimentada por la ciudad. Este diagnóstico está subtendido por una lectura puramente física de la ciudad y de la ocupación del espacio, y desdibuja a la vez los mecanismos de las dinámicas en marcha y su dimensión social. La población se encuentra ausente como actora: sólo interviene por su número y su capacidad de adquisición de vivienda. Sus movilidades espaciales no se mencionan. Las transformaciones del parque de viviendas no se analizan, el razonamiento está dirigido sobre todo en función del espacio libre para la construcción de nuevas viviendas.

43 El número 67 de *Annales de la Recherche Urbaine* (1995), dedicado a las densidades, testimonia la renovada atención a este problema. En este mismo número, un artículo de T. SAINT-JULIEN realiza una interesante síntesis sobre la evolución de los cuestionamientos sobre la densidad entre la comunidad científica francesa.

El marco de análisis estructuralista en crisis no es reemplazado por un nuevo paradigma que permita leer “la gran ciudad existente” con las transformaciones y redistribuciones que la atraviesan. La producción científica disponible es utilizada para dar a las nuevas orientaciones de planificación urbana la aparente racionalidad exigida tanto por las organizaciones internacionales como por algunos actores locales. Ella también sirve para dar forma a los intereses tradicionales de una pequeña elite económica y política propietaria de tierras todavía disponibles. En semejante contexto, un estudio que articule las densidades y las divisiones sociales del espacio alcanza un valor inesperado.

B. LOS LÍMITES DE UN ENFOQUE DESDE LA VIVIENDA

Resulta fácil mostrar las lagunas en los diagnósticos propuestos en los documentos de planificación. El enfoque propuesto en este capítulo no es del todo satisfactorio: él también está en desfase respecto a ciertas características actuales de las dinámicas socioespaciales en las ciudades estudiadas. El conjunto de nuestro razonamiento descansa sobre la localización de la población en su vivienda. Pero haciendo abstracción de la movilidad desde la vivienda, este enfoque no autoriza más que una aproximación estadística al poblamiento y borra las profundas desigualdades que atraviesan el acceso al espacio.

¿Cuál es la significación de las densidades residenciales cuando una parte creciente de la reproducción económica y social de los ciudadanos tiene lugar al exterior de la vivienda, en diferentes sitios de la ciudad? ¿Qué sentido tiene ofrecer una configuración socioespacial petrificada, que no corresponde más que a una realidad nocturna, cuando la población vuelve al “lugar de residencia habitual” donde la fija el censo? Durante mucho tiempo, los urbanistas han razonado reduciendo el uso del espacio a una sola función, designada en los documentos de urbanismo. Ahora bien, se comprueba que esas funciones son “espontáneamente” diversificadas por fuera de los intervalos horarios que les corresponden. El tríptico tradicional “un lugar-una función-una población residente” es puesto en tela de juicio por las prácticas efectivas de los lugares por parte de los habitantes. El poblamiento debería ser considerado de manera dinámica, recurriendo por ejemplo a nociones como la de “densidad móvil” (MILLE, 2000). Después de varios decenios de tratamiento espacial de

la ciudad, diferentes manifestaciones de un tratamiento temporal del espacio urbano ven la luz en las agencias de urbanismo francesas. Tener más en cuenta esta dimensión temporal es una necesidad para mejorar el diagnóstico de las configuraciones urbanas propuesto en este capítulo.

Los límites de una aproximación de la segregación a través del filtro de la vivienda aparecen también como evidentes: las desigualdades en el acceso al espacio de los diferentes grupos de población no se limitan solamente al campo residencial. Hemos voluntariamente reducido nuestro enfoque a una sola dimensión del fenómeno segregativo: “la distinción espacial entre las áreas de residencia de diferentes grupos de población”, según la definición de BRUN citada en la introducción. Por lo tanto, hemos dejado de lado otra dimensión,

... que enfatiza no tanto sobre las distancias socioespaciales entre los grupos como tales, sino mucho más sobre sus *oportunidades desiguales en el acceso a los bienes materiales y simbólicos que ofrece la ciudad*⁴⁴ (GRAFMEYER, 1994: 89).

En las ciudades de gran tamaño, donde la especialización funcional se intensifica, la movilidad se convierte en una condición para el acceso a los equipamientos, a los empleos, etc. Ahora bien, hemos visto que la movilidad espacial es profundamente discriminatoria. En tal contexto, hoy en día y más que ayer, es necesario tener en cuenta la diversidad de las prácticas espaciales y los usos de la ciudad, mucho más que solamente las prácticas residenciales⁴⁵. Considerada como una carencia de acceso a algunos lugares para ciertas categorías de población, el análisis del proceso segregativo ciertamente debe tener en cuenta el acceso a la vivienda, pero también otros recursos económicos y sociales en la escala cotidiana.

Los resultados presentados a lo largo de este capítulo demuestran que tomar en cuenta globalmente las prácticas espaciales es, más que nunca, necesario en las fases de desarrollo experimentadas por las grandes ciudades. La lectura –desde la vivienda– de las desigualdades en el acceso al espacio se vuelve

44 Cursiva fuera de texto.

45 Estas cuestiones ya eran centrales en el capítulo segundo.

cada vez más eficaz. Mientras la geografía de las áreas sociales se vuelve más compleja, mientras se multiplican las proximidades espaciales entre las clases sociales, la distribución espacial de los recursos urbanos es más y más desigual, y el acceso a la movilidad deviene un filtro otro tanto más poderoso para el acceso a éstas. Hemos visto en otra parte, con el ejemplo de Bogotá, que la localización alcanzaba importancia en las elecciones residenciales. La puesta en servicio de la primera línea de un sistema de transporte público masivo en 2001 (el denominado Transmilenio), comienza a introducir modificaciones en la configuración sociotemporal de Bogotá, en las accesibilidades relativas entre los distintos lugares de la ciudad. También es probable que la introducción de nuevos medios de transporte público, como el metro de Medellín, el Transmilenio de Bogotá o el proyecto de metro para Cali, conduzcan a una nueva toma de conciencia a doble título: las proximidades/distancias (atributos importantes de las viviendas) pueden experimentar modificaciones de envergadura, y esto gracias a la intervención de lo político (lo que también es muy nuevo, en ciudades donde la ineficacia de la regulación es la regla). Después de abandonar la producción de vivienda, los poderes públicos comienzan a intervenir en el campo del transporte e, indirectamente, contribuyen a una toma de conciencia cada vez más clara de la dimensión temporal de la ciudad en lo que respecta a sus habitantes. Considerando que se trata de poderes públicos, cuya acción reposa sobre diagnósticos que no restituyen la dimensión dinámica de la configuración sociespacial metropolitana, ¿eso no resulta paradójico?

BIBLIOGRAFÍA⁴⁶

- BRUN J. "Essai critique sur la notion de ségrégation et sur son usage en géographie urbaine", en J. BRUN y C. RHEIN (eds.). *La ségrégation dans la ville*, Paris, L'Harmattan, Col. Habitat et Sociétés, 1994.
- BRUN, J. y C. RHEIN (eds). *La ségrégation dans la ville*, Paris, L'Harmattan, Col. Habitat et Sociétés, 1994.

46 Aquí no figuran las referencias que conciernen específicamente a Colombia: están incluidas en la bibliografía general que figura al final de esta obra.

- CHAMBOREDON, J. C. y M. LEMAIRE. "Proximité spatiale et distance sociale. Les grands ensembles et leur peuplement", *Revue Française de Sociologie*, XI, n.º 1, 1970.
- COSIO-ZAVALA, M. E. "Concentration urbaine et transition démographique", *Problèmes d'Amérique Latine*, n.º 14, 1994.
- DANSEREAU, F. "Montreal: segregación socioresidencial y cohabitación social", en F. DUREAU et ál. (coord.). *Metrópolis en movimiento. Una comparación internacional*, Bogotá, Alfaomega-IRD, colección Economía de América Latina, 2002.
- DUPONT, V. y D. PUMAIN. "De la ciudad compacta a las metrópolis policéntricas", en F. DUREAU et ál. (coords.). *Metrópolis en movimiento. Una comparación internacional*, Bogotá, Alfaomega-IRD, colección Economía de América Latina, 2002.
- DUNCAN, O. D. y B. DUNCAN. "A Methodological Analysis of Segregation Indexes", *American Sociological Review*, n.º 41, 1955.
- DUREAU, F.; V. DUPONT, E. LELIÈVRE, J. P. LÉVY y T. LULLE. *Metrópolis en movimiento. Una comparación internacional*, Bogotá, Alfaomega-IRD, colección Economía de América Latina, 2002.
- GRAFMEYER, Y. "Regards sociologiques sur la ségrégation", en J. BRUN y C. RHEIN (eds.). *La ségrégation dans la ville*, Paris, L'Harmattan, Col. Habitat et Sociétés, 1994.
- HUTCHENS, R. "Numerical measures of segregation: desirable properties and their implications", *Mathematical Social Sciences*, n.º 42, 2001.
- LÉVY, J. P. y J. BRUN. "De la extensión a la renovación metropolitana: mosaico social y movilidad", en F. DUREAU et ál. (coord.). *Metrópolis en movimiento. Una comparación internacional*, Bogotá, Alfaomega-IRD, colección Economía de América Latina, 2002.
- MASSEY, D. S. y N. A. DENTON. "The dimensions of residential segregation", *Social Forces*, n.º 67-4, 1988.
- MASSEY, D. S. y N. A. DENTON. "Hypersegregation in US Metropolitan Areas: Black and Hispanic Segregation Along five dimensions", *Demography*, vol. 26, n.º 3, 1989.
- MASSEY, D. S.; M. J. WHITE y V. PHUA. "The dimensions of segregation revisited", *Sociological Methods & Research*, vol. 25, n.º 2, 1996.

- MEYER, S. G. "As long as they don't move next door. Segregation and racial conflict", en *American neighborhoods*, Lanham, Rowman & Littlefield Publishers Inc., 2000.
- MILLE, M. *Les temporalités quotidiennes urbaines. L'exemple de la métropole lilloise*, Lille, tesis de Doctorado en Geografía humana de los espacios industrializados, Université Lille 1, 2000.
- MOHAN R. *Understanding the developing metropolise*, 1994.
- MORICONI-ÉBRARD, F. *Geopolis. Pour comparer les villes du monde*, Paris, Anthropos, Col. Villes, 1994.
- PAQUETTE, C. "Santiago de Chile: una segregación espacial importante y 'organizada'", en F. DUREAU et ál. (coords.). *Metrópolis en movimiento. Una comparación internacional*, Bogotá, Alfaomega-IRD, colección Economía de América Latina, 2002.
- SABATINI, F. y F. ARENAS. "Residential segregation pattern changes in Chile's main Cities. Scale shifts and increasing malignancy", ponencia en el *International Seminar on Segregation and the City*, Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge, Mass., 2001.
- SEGAUD, M.; C. BONVALET y J. BRUN (dirs.). *Dictionnaire de l'habitat et du logement*, Paris, Armand Colin, 2003.
- SIMON, P. "La statistique des origines, race et ethnicité dans les recensements aux États-Unis, Canada et Grande-Bretagne", *Sociétés Contemporaines*, n.º 26, Paris, 1997.
- SIMON, P. "La división social y étnica del espacio parisiense", en F. DUREAU et ál. (coord.), *Metrópolis en movimiento. Una comparación internacional*, Bogotá, Alfaomega-IRD, colección Economía de América Latina, 2002.

CAPÍTULO CUARTO

*Ciudad y etnicidad:
configuraciones de la etnicidad negra en la ciudad*

ODILE HOFFMANN (coord.)

OLIVIER BARBARY

ELISABETH CUNIN

En su Constitución de 1991, Colombia se reconoce como pluriétnica y multicultural. En la introducción general se ha visto que esas modificaciones constitucionales se dirigen principalmente a las poblaciones negras rurales (derechos territoriales colectivos), a pesar de que las reivindicaciones identitarias atañen al conjunto de los afrocolombiano/as cuya mayoría reside en ciudades. Desde entonces, y en un nuevo contexto de multiculturalidad reconocida, se vuelve urgente pensar de nuevo la etnicidad negra en la ciudad¹. En este capítulo, queremos observar cómo se combinan las “identidades urbanas”, o cómo se oponen a otras modalidades de afirmación identitaria, especialmente sociorracial y étnica. ¿Cómo contribuyen las pertenencias raciales y étnicas a la construcción de la ciudad? ¿Cómo son producidas esas pertenencias por la ciudad? Expuestas así, estas preguntas se sitúan en la encrucijada de dos preocupaciones más generales: la construcción de la ciudad por parte de sus actores-habitantes, y el lugar de la etnicidad en esta construcción².

Desde los años 1980, las recomposiciones urbanas se aceleran al paso de múltiples factores: crecimiento demográfico, aumento de las migraciones y otras formas de movilidad, nuevas segmentaciones socioespaciales de lo urbano, etc. (caps. primero, segundo y tercero). Al mismo tiempo, gracias a la descentralización y la democratización que establecen las políticas públicas urbanas, se asiste a una revaloración de los actores locales, de sus funciones y sus poderes (cap. sexto). En las regiones con alta población negra (Pacífica y Caribe), también surgen nuevos actores, ahora calificados como “afrocolombianos”. Las innovaciones constitucionales y legislativas de la década de 1990 abren espacios para reinterpretaciones locales de la identificación en el sentido de un nuevo recurso: el registro étnico. Se trata de poderosos incentivos para consolidar la aparición de una “conciencia negra” hasta entonces desconocida en Colombia³. La reflexión sobre las relaciones interétnicas en la ciudad y

1 Como se afirmó en la introducción, la etnicidad indígena en la ciudad no es todavía en Colombia un tema de discusión o de preocupación, ni para las organizaciones indígenas mismas ni para los poderes públicos o las instituciones en general.

2 Una discusión teórica sobre las categorías de pertenencia étnica y racial se puede ver en la sección III del anexo 3.

3 Con algunas excepciones, como los grupos o asociaciones activas desde los años 1940, pero más especialmente desde los años 1970.

en contextos contemporáneos se inició con la Escuela de Chicago hace casi un siglo. Sus promotores encuentran, en la transición del siglo XIX al XX en Chicago, un marco particularmente favorable para este tipo de análisis, relacionados a la vez con el crecimiento urbano que experimentó la ciudad en esa época, con la llegada masiva de población extranjera y con el surgimiento de trabajos universitarios sobre problemáticas sociales (CHAPOULIE, 2001). De esos análisis, tendremos en cuenta su insistencia sobre dos temas: en primer lugar, el del “gueto negro” cuyos fundamentos fueron propuestos por L. WIRTH, y que se convertiría de paso en un concepto tanto heurístico como polémico en el campo de los estudios urbanos; en segundo lugar, la distinción entre identificación étnica e identificación racial, la primera aplicada a los migrantes de origen europeo (italianos, polacos, etc.) y la segunda a las poblaciones negras y asiáticas cuya integración no se resume en un problema cultural sino que también reenvía a una diferencia de rasgos físicos socialmente interpretados (PARK, 1950). Estos planteamientos, que hoy pueden parecer anacrónicos e incluso provocadores, se vuelven no obstante frecuentes en los debates sobre las relaciones entre la identificación étnica y racial, y las transformaciones de la ciudad en sus formas y en sus prácticas. Existen, en efecto –históricamente constituidas y por eso variables según los contextos nacionales, regionales y locales–, estrechas relaciones entre las pertenencias identitarias (modos diferenciados de identificación social y étnica) y las diferenciaciones intra e inter urbanas, de las cuales dan testimonio especialmente algunas estructuras espaciales urbanas: guetos, barrios estigmatizados o reservados, segregación espacial asociada con pertenencias sociorraciales (cap. tercero). Lo confirman también prácticas culturales y de uso del espacio urbano propias de algunos grupos o individuos cualificados por sus pertenencias étnicas o raciales: carnaval, *cabildo*, pero también movilidades residenciales o cotidianas diferenciales (cap. segundo), modos de habitar en las viviendas, etc.

Después de privilegiar durante mucho tiempo una aproximación a través de las estructuras urbanas, los estudios sobre la ciudad tienden ahora a valorar las prácticas –espaciales, culturales, económicas, etc.– de los habitantes en tanto productores de la ciudad. Si las primeras aproximaciones (la ciudad como estructura) ocultaban el rol del habitante, sujeto y actor de su espacio, las segundas (la ciudad como modo y producto de sociabilidad) minimizan

el peso de los procesos estructurales que limitan y condicionan las opciones de los individuos. De hecho, las identidades y las estructuras urbanas están en permanente interacción. La identidad étnica-racial, por su dimensión a la vez colectiva, “pública” (en el sentido en que se da a ver e interpretar) y profundamente individual, se encuentra, con otras⁴, en el corazón de esas interacciones. Esa identidad produce diferenciaciones que pueden cristalizarse en el espacio urbano (búsqueda de un “entre sí” que eventualmente deriva en la conformación de guetos) y es a la vez, al menos en parte, resultado o reacción (atribuciones impuestas, estigmatizaciones o inversión de los estigmas). Recientes trabajos de geografía urbana en Estados Unidos (a veces llamados, en referencia al caso anterior, la Escuela de Los Ángeles, cfr. MONNET, 2001) subrayan la capacidad de los individuos y los colectivos para “reinventar la ciudad” (AGIER, 1999) a partir de prácticas culturales construidas sobre referentes identitarios (hispanos especialmente, con el movimiento de los chicanos en la década de 1940, y los latinos hoy). La recuperación de espacios públicos, la transgresión de los usos o del sentido de los símbolos urbanos, son otras expresiones identitarias que se afianzan en la ciudad y le confieren un nuevo rostro. A cambio, la sociabilidad urbana, que relaciona a los grupos y las personas, ofrece nuevas posibilidades a los actores étnicos –individual o colectivamente– para reconstruir sus identidades frente a los otros (LESTAGE, 2001). Participa así en la recomposición identitaria que afecta al conjunto de la sociedad contemporánea.

Respecto a las poblaciones negras, esta problemática se articula con los debates sobre la discriminación, la lucha contra el racismo y los medios desplegados por los actores mismos para exigir el acceso a la ciudadanía. El análisis de la etnicidad en la ciudad, al enfocar los mecanismos de inclusión o exclusión en diferentes niveles, pone en evidencia la diversidad de prácticas sociales y espaciales de los habitantes, y su capacidad de innovación y acción. Veremos así que los marcadores identitarios territoriales no son los mismos según los contextos urbanos, como también son diferentes las relaciones –de

4 Las diferenciaciones socioeconómicas y las pertenencias de clase pueden ser objeto de análisis similares y, de hecho, se articulan con las categorizaciones étnicas y raciales, por ejemplo en los procesos de segregación urbana (cap. tercero).

tensión, de ignorancia o de buena convivencia— entre los grupos sociales, raciales o étnicos.

Frente a esta variabilidad, hemos tomado el partido de confrontar tres aproximaciones definitivamente diversas, en tres “terrenos” urbanos de tamaño e historia contrastados. El desafío teórico y metodológico no es menor; al menos tiene el mérito de poner en evidencia algunas convergencias, pero también diferencias e incluso contradicciones. Éstas nos permiten, en la última sección, proponer una nueva lectura de las relaciones ciudad-etnicidad en la cual los problemas de escala y de contexto alcanzan una pertinencia muy particular.

La primera aproximación (secc. I) asume la necesidad de un conocimiento estadístico de los procesos identitarios, lo que implica la elaboración y la puesta en marcha de diferentes tipos de encuestas basadas en categorías descriptivas “étnicas” o “raciales” (observación del fenotipo, combinando la autodeclaración y la caracterización externa de los encuestados por parte de los encuestadores) capaces de informar sobre los comportamientos individuales y colectivos⁵¹. Con los datos recogidos en Cali, la reflexión se dirige entonces al análisis y la interpretación sociológica de los determinantes de las inscripciones identitarias declaradas, para poner en evidencia los principales modos de construcción de la “comunidad afrocolombiana” en la ciudad.

Casi podríamos decir que, “al contrario”, un segundo enfoque (secc. II) rechaza toda categorización inicial y colectiva, y busca comprender —a través de situaciones concretas de interacción entre personas que consideran sus apariencias raciales como diferentes (la calificación física del otro remite a prejuicios sociales incorporados)— cómo se negocian las pertenencias socio-raciales en función de los contextos de las interacciones. El análisis, fundado en un trabajo realizado en Cartagena, combina el estudio de las prácticas y las representaciones individuales y colectivas, desembocando en la interrogación sobre las relaciones entre identidad étnica, raza y territorios urbanos.

Por último, la tercera aproximación (secc. III) propone, para la ciudad de Tumaco —más pequeña—, un acercamiento en términos de geografía e historia

5 Estos elementos de método son presentados con detalle en BARBARY (2001: 773 a 790).

política que busca pensar la ciudad como un lugar de permanentes recomposiciones sociales y políticas, donde la dimensión étnico-racial es una y otra vez expuesta, ocultada o manipulada en función de contextos demográficos, políticos y económicos. A través de un tiempo relativamente extenso (desde finales del siglo XIX), las estructuras urbanas y las del medio rural circundante, así como sus representaciones, reflejan expresiones identitarias construidas sobre el registro étnico a la vez que territorial.

Los tres enfoques tienen en común no evadir el debate sobre las relaciones entre etnicidad, raza y pertenencias sociales. Bajo diferentes ángulos para cada situación —cada ciudad—, los autores de este capítulo están de acuerdo en el hecho de que los fenómenos identitarios sólo pueden comprenderse bajo una perspectiva contextual, relacional y situacional (BARTH, 1995; HANNERZ, 1980; MITCHELL, 1987). Las aproximaciones difieren en sus formas de apreciación de los contextos (más individuales o culturales en algunos, más colectivas y políticas en otros) y en los métodos utilizados (cuantitativo/cualitativo, diacrónico/sincrónico), pero son complementarias en la medida en que las tres muestran los procesos de construcción de las categorías identitarias y su pertinencia relativa —en el tiempo y en el espacio— tanto a los ojos de los sujetos-actores mismos como a los de los analistas, observadores e investigadores que también participan en esos procesos de construcción.

Las tres ciudades estudiadas están asociadas con representaciones muy diferentes en el imaginario colectivo nacional: Cartagena, ciudad mestiza por excelencia; Cali, que se reivindica desde hace poco “Capital del Pacífico”, aunque haya sido construida por una elite empresarial blanca (industria y agroindustria); Tumaco, ciudad negra de la costa sur del Pacífico, en los confines del país, en la frontera con el Ecuador (mapa 0.1). Las dos primeras son metrópolis y ocupan respectivamente, en el plano demográfico, el sexto y el segundo rangos nacionales (840.000 habitantes en Cartagena; 2.210.000 en Cali según la ENH 2001), mientras Tumaco no puede aspirar, con 76.000 habitantes (proyección DANE 2000), más que al título de polo regional sin envergadura nacional.

Cali y Cartagena forman parte de las 14 primeras ciudades del país, y por eso se dispone de resultados en una reciente encuesta, la ENH 2001, citada arriba, sobre la autodeclaración del “color de la piel” establecida con referencia

a un juego de cuatro fotografías numeradas y presentadas a las personas interrogadas, que asociaremos en nuestro texto a “negros”, “mulatos”, “mestizos” y “blancos”, aunque estas denominaciones no figuran en el cuestionario del DANE. Cartagena aparece como una ciudad cuyos habitantes se declaran, en su gran mayoría, negros y mulatos (50%), mestizos (41%), con una minoría blanca (9%); mientras que en Cali, las poblaciones que se declaran a sí mismas negras/mulatas por una parte y blancas por otra, representan cada una alrededor de un cuarto del total, la otra mitad se declara mestiza. Estas dos ciudades presentan las más altas proporciones de población urbana que se declara a sí misma como “negra o mulata” a nivel nacional⁶, mientras que en Tumaco, no cubierta por la encuesta, podríamos atenernos a una auto-declaración claramente superior. Estos resultados corresponden bastante bien a las representaciones colectivas asociadas con esas ciudades en términos de composición étnico-racial.

Con todo, el asunto no es tan evidente. Al introducir una pregunta étnica en el Censo de 1993⁷, el DANE no obtuvo más que pobres resultados: Colombia no contaría, en el conjunto de su territorio, más que con un 1,6% de población que se declara indígena y un 1,5% de miembros de una comunidad negra. De hecho, las categorías étnicas propuestas en esta pregunta no encontraron una adhesión importante más que en la región del Pacífico, en la Amazonia y en las islas caribes de San Andrés y Providencia. En la región Pacífica⁸ en particular, corazón histórico del poblamiento negro y objeto principal de la Ley 70, se registra una tasa de respuesta positiva muy elevada (44%) en relación con el promedio nacional, marcado por fuertes variaciones regionales y locales. En otro trabajo (BARBARY, 2001: 799 a 803), se han analizado estos datos por medio de regresiones logísticas y se han interpretado esas variacio-

6 Los promedios para las 14 ciudades son los siguientes: auto-declaración en la categoría 1 (negros): 2,4%; en la categoría 2 (mulatos): 15,5%; en la categoría 3 (mestizos): 51,5%; en la categoría 4 (blancos): 30,2%. En las categorías “no sé” y “sin respuesta”: 0,4%.

7 Esta pregunta era: “¿Pertenece usted a una etnia, grupo indígena o comunidad negra? ¿Cuál?”

8 Concebida aquí como el conjunto de municipios de la Costa Pacífica de los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, y la totalidad de los municipios del Chocó.

nes como resultantes del contexto político del momento: en 1993, las tasas de declaración de pertenencia a las “comunidades negras” eran mucho más elevadas en las regiones donde la movilización política alrededor de la Ley 70 había sido más fuerte (Chocó). La hipótesis que proponemos es la siguiente: un “modelo étnico”, instrumentalizado y ampliamente difundido entre las poblaciones del Pacífico, habría ejercido una influencia positiva sobre las tasas de respuesta afirmativa a la pregunta del censo. Las poblaciones más directamente comprometidas por el nuevo dispositivo jurídico habrían adoptado un modelo de afirmación de una identidad neo-étnica que –en cierta forma– la Constitución exige de ellas.

Ahora bien, ese “modelo”, que supone la asociación entre una identidad “negra” etnicizada, un territorio (en tanto que lugar de residencia y en tanto que recurso) y un posicionamiento político (constituirse en interlocutor del Estado) no se aplica, *a priori*, en la ciudad. En las páginas siguientes trataremos de comprender los modos alternativos de identificación y afirmación étnico-racial en varios contextos urbanos.

I. CALI: IDENTIDAD SOCIORACIAL Y PERCEPCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN

¿Cuáles son los modos de afirmación identitaria en Cali?⁹ ¿Cómo se constituyen lógicas y dinámicas sociales y económicas contemporáneas en la ciudad? Trataremos de responder estas dos preguntas principales en dos etapas: en la primera, formulando el modelo de construcción de una “identidad negra” en Cali y precisando el papel del fenotipo en esa construcción; en la segunda, examinando las relaciones entre esos modos de identificación y la percepción de la discriminación tal y como es padecida y relatada por los actores respectivos. De hecho, estas dos aproximaciones están imbricadas puesto que, como trataremos de mostrarlo, la afirmación de una identidad “negra” se construye sobre una dialéctica entre diferenciación racial y social, en la cual la percepción de los problemas de segregación y de discriminación juega un

9 Una descripción de las principales características del poblamiento de Cali ha sido presentada en el capítulo tercero.

papel importante. También allí, la argumentación descansa sobre el análisis por regresiones logísticas de variaciones en la auto-declaración del color de la piel y los niveles de percepción de las discriminaciones raciales de acuerdo con las características de los individuos y los contextos sociales y espaciales en que viven. Las relaciones entre esas respuestas y sus determinantes demográficos, socioeconómicos, geográficos e históricos son complejas, y la interpretación de los resultados sólo es posible en forma global y sistémica, apelando a un conocimiento fino de los contextos locales adquirido gracias a los datos sociológicos y antropológicos acumulados por otros miembros del equipo CIDSE/IRD (AGIER y HOFFMANN, 1999; AGUDELO, 1999; AGUDELO, HOFFMANN y RIVAS, 1999; AGUDELO, HURTADO y RIVAS, 2000; URREA y ORTIZ, 1999; URREA, ARBOLEDA y ARIAS, 2000; HURTADO, 1999; VANIN, 1999).

Gracias a la encuesta realizada en Cali en 1998 (Anexo 2), disponemos de un *corpus* de respuestas a preguntas de autopercepción fenotípica y de percepción de discriminaciones que podemos relacionar, en los modelos logísticos —por una parte— con las características sociodemográficas individuales y —por otra parte— con los descriptores del contexto en el cual son enunciadas (zona de residencia, estatus migratorio, etc.). Este segundo grupo de variables permite acceder a los contextos regionales y locales, y a sus dinámicas políticas y culturales, de las cuales se puede pensar —a semejanza de lo que se observa en el caso de la cuestión étnica del censo en la Región Pacífica— que ejercen una influencia importante sobre las respuestas. Finalmente, también disponemos de otras variables potencialmente determinantes: el fenotipo de los individuos observado por el encuestador y las características mismas del encuestador (sexo y fenotipo).

A. UN MODELO DE CONSTRUCCIÓN DE “IDENTIDADES SOCIORACIALES” EN CALI

A partir de esos datos, nos interesamos en el conjunto de las personas de la muestra que tuvieran un fenotipo negro o mulato (observación del encuestador), con 18 años y más (1.256 individuos); todos respondieron la pregunta: “¿Cuál es el color de su piel?”, y entre ellos, 42% declararon tener la piel negra. Para explicar la variabilidad en las respuestas, hay que tener en cuenta cuatro

factores principales en orden de importancia: el fenotipo, la edad, la categoría socioprofesional y la condición de migración de los encuestados (tabla 4.1).

TABLA 4.1
EFECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE LAS RESPUESTAS A LA PREGUNTA ¿CUÁL ES SU COLOR DE PIEL?
(MODELO LOGÍSTICO SOBRE 1.256 RESPUESTAS) (CALI, 1998)¹⁰

Categorías significativas con probabilidad de: *** 99%; ** 95%, * 90%	Valor estimado parámetro	Frecuencia marginal estimada %	Frecuencia marginal observada %
<i>Categorías de referencia</i>			
Constante	-0.61	35	42
Negro (+)***		61	57
<i>Mulato</i>	1.04	16	12
18-30 años (-)**	-1.04	30	38
<i>Más de 50 años</i>		39	43
Otros asalariados servicios (-) *	-0.23	26	38
Maestro y obreros manufacturera (+)**	0.18	51	55
Desempleados (-)*		26	34
<i>Inactivos</i>	-0.45	27	33
Nacidos Cali y originarios Pacífico Cauca-Patía (+)**	0.63	72	73
Nacidos Cali y originarios Norte del Cauca (-) *	-0.46	24	36
Nacidos Cali y originarios Interior Valle, Cauca, Nariño (-)***	-0.37	20	19
Migrantes resto de Colombia (-)**		22	21
<i>Nacidos Cali y originarios resto de Colombia</i>	1.55	24	19

Fuente: Encuesta CIDSE/IRD de 1998, modelo logístico de O. BARBARY y H. F. RAMÍREZ con el procedimiento Catmod de Sas.

10 El modelo resumido en la Tabla, restringido a cuatro factores principales, es el que suministra los mejores resultados, tanto para prever las respuestas individuales (74% de exactitud) como para estimar las diferentes categorías de población. Otros modelos menos eficientes muestran que el sexo tiene, como lo veremos, un efecto significativo. Ninguna otra variable supera el umbral de significación del 90%. En la tabla sólo figuran las modalidades que tienen un efecto sobre la respuesta significativa para el umbral de confianza de 90% o más. Un ejemplo de lectura de resultados: en el umbral de confianza del 95% –todas las cosas iguales por otro lado (es decir, el fenotipo, la edad y la condición de migración)– los obreros y obreras calificado/as de la industria tienen una probabilidad de declararse con color de piel negra en promedio dos veces superior a los inactivos e inactivas. En efecto, el cociente de respuestas estimadas por el modelo vale: $51/27 \approx 1,9$.

La zona de residencia es determinante solamente cuando no se hace intervenir el fenotipo, lo que muestra una fuerte relación entre las dos variables y nos remite a la “especialización sociorracial” del espacio residencial en Cali, ya estudiada (cap. tercero de este libro y BARBARY et ál., 1999: 37 a 41 y 71 a 76; BARBARY, 2001: 781 a 783; BARBARY, RAMÍREZ y URREA, 1999). El primer resultado notable es la ausencia de efectos importantes del sexo del encuestado y de las características del encuestador. En el conjunto de la muestra, existe un ligero efecto del sexo de los encuestados (significativo con probabilidad del 90%) –teniendo las mujeres una probabilidad de declarar un color de piel negra superior en un 20% aproximadamente, frente a los hombres; pero no hay efecto sistemático de las características del encuestador: estas influyen de maneras distintas según las poblaciones consideradas¹¹. Por lo tanto, la relación encuestador/encuestado no reviste la importancia que se podía temer y que con frecuencia le atribuyen los antropólogos en sus críticas a este tipo de enfoque, enfatizando en el “juego de roles goffmaniano” entre ellos. Si bien el modelo aporta algunos índices para sostener la existencia de tal juego, evidencia sobre todo las limitaciones de sus consecuencias estadísticas. Eso demuestra que el efecto micro de la relación encuestador/encuestado no es unívoco ni su resultado previsible a nivel individual, sino más bien estadísticamente, dentro de un contexto societal mayor donde opera un orden clasificatorio racial implícito y no institucionalizado, pero que todos los individuos, en un menor o mayor grado dependiendo de muchos factores, practican cotidianamente. En la sociedad caleña, los *habitus sociales* de los diferentes grupos o clases tienen, en una gran medida, una matriz común de clasificación fenotípica de los cuerpos¹².

Cuando se analiza la determinación de las respuestas por las características individuales, es el efecto del fenotipo el que predomina ampliamente,

11 Así, entre la población negra, los encuestadores (hombres) afrocolombianos obtuvieron una declaración de color de piel negra superior al promedio (68 vs. 57%), mientras que en la población mulata, son las encuestadoras afrocolombianas quienes obtienen esta sobre-declaración (18 vs. 12%); al contrario, las encuestadoras no-afrocolombianas registran una sub-declaración del fenotipo negro (7 vs. 12%).

12 Cabe precisar que todos los encuestadores residían en Cali desde muchos años.

explicando entre 5 y 30 veces más variabilidad que los otros tres caracteres. Así, siendo iguales los demás factores, las personas de fenotipo negro tienen una probabilidad de declarar un color de piel negra aproximadamente cuatro veces superior a las personas de fenotipo mulato. Sin embargo, este modelo conduce también a rechazar la hipótesis de independencia entre las variables; hay que interesarse, en particular, en las interacciones entre el fenotipo, el origen migratorio, la categoría profesional y la zona de residencia¹³.

En cuanto a los efectos del origen geográfico y de la edad, los resultados conducen a conclusiones opuestas a las que obtuvimos con el modelo de afirmación étnica en la región del Pacífico (BARBARY, 2001: 799 a 802). En Cali, la única región de origen que favorece de manera significativa la afirmación de un color de piel negra es la Costa Pacífica del Cauca. Más aun, el coeficiente significativo no es el que corresponde a los inmigrantes nacidos en la región, sino el de sus descendientes nacidos en Cali (probabilidad dos veces superior al promedio). Contrariamente a lo que se esperaba con la afirmación masiva en el censo, de pertenencia a la comunidad negra por parte de los habitantes del Chocó, las personas oriundas de este departamento encuestadas en Cali no declaran más un color de piel negra, en condiciones de fenotipo, profesión y edad iguales, que las personas de otros orígenes. El efecto de la edad también es inverso a lo que se observaba con los datos del censo en el Pacífico: en Cali, son los jóvenes entre 18 y 30 años quienes afirman ligeramente menos un fenotipo negro que las personas mayores. Y finalmente, las categorías socio-profesionales no juegan, en la afirmación del fenotipo en Cali, el rol determinante que ejercen sobre la afirmación de la pertenencia a la comunidad negra en la región del Pacífico. Sólo los obreros calificados de la industria tienden a declarar con mayor frecuencia un color de piel negra (probabilidad 1,8 veces superior a la de la población inactiva).

De lo anterior se puede concluir que la autoafirmación fenotípica de las poblaciones afrocolombianas en Cali funciona de una manera radicalmente

13 Siendo el tamaño de muestra insuficiente para construir un modelo completo de todas estas interacciones, nos hemos limitado a los tres modelos saturados con dos variables: efectos principales e interacciones, cruzando el fenotipo con las tres otras variables. Los coeficientes, demasiado numerosos, no se reproducen aquí.

diferente de la pertenencia étnica en el Pacífico. Sus variaciones no siguen un principio estructurante único, contrariamente al papel que desempeñan en la afirmación étnica las dinámicas sociopolíticas en el Pacífico, causas o consecuencias de la Ley 70. En la ciudad, la construcción de la identidad “negra” aparece a la vez más compleja y endógena en su elaboración, ante todo en estrecha relación con las categorías raciales de uso común (que fueron utilizadas por los encuestadores), las divisiones y las fronteras que ellas suponen, así como los estigmas, o en forma opuesta, con las connotaciones positivas que ellas conllevan en diferentes contextos. Es necesario primero anotar que la fuerte coherencia estadística entre autopercepción del color de piel y caracterización externa del fenotipo no se puede explicar sino por la existencia de un cierto consenso entre diversos tipos de usos de esas categorías “raciales” –ambiguos, es cierto, pero “neutrales” en muchos contextos de la cotidianidad. Como evidencia, y a pesar de su uso más general estigmatizante, la denominación “negro/a” en Cali, como probablemente en los otros contextos urbanos colombianos, no conlleva siempre y en todas partes subentendidos racistas explícitos; en algunas situaciones su empleo corresponde a maneras intimistas que no tienen carácter despectivo. Pero es igualmente claro que el color de piel y, más ampliamente, la percepción del fenotipo, se colocan en una especie de interacción simbiótica con otras características, tales como el origen migratorio, la edad, la categoría socio-ocupacional, el lugar de residencia o el sexo, para producir y determinar la construcción social de la alteridad y sus consecuencias en términos de segmentación, si no segregación, de los espacios y de los mercados urbanos (cap. tercero). La “raza”, en el sentido que nosotros le damos de categoría fenotípica, percibida e interpretada, eventualmente de modo racista, en las interacciones sociales, es entonces uno de los ingredientes de la “fábrica de las lógicas sociales”, al igual que otras categorías de percepción demográficas (los jóvenes, los viejos, las mujeres), sociales (los obreros, los patrones, la(o)s empleada(o)s doméstica(o)s, los desempleados) o económicas (los pobres, los ricos). Desde esta perspectiva, más que una hipotética transferencia de una identidad étnico-territorial, adquirida a través de la región de origen, el proceso de construcción de la identidad “negra” urbana nos parece que corresponde ante todo a la necesidad de enfrentar, en tanto que ciudadanos(as) sometidos a diferentes tipos de discriminación –o

que perciben dicho riesgo—, las desigualdades de acceso a los mercados de trabajo, la educación, el sistema de salud, el consumo, etc., en suma, a una reivindicación por la igualdad de oportunidades. Para desarrollar más esta hipótesis vamos ahora a retomar el análisis de las respuestas sobre las opiniones en torno a la discriminación.

B. LA PERCEPCIÓN DE LAS DISCRIMINACIONES SOCIORRACIALES EN CALI

Los comentarios que siguen se apoyan en los resultados de regresiones logísticas aplicadas a las preguntas sobre la existencia de discriminaciones raciales en diferentes contextos en Cali y en las declaraciones de experiencias personales de discriminación de parte de los encuestados¹⁴.

Los resultados tienen calidades de predicción inferiores al del modelo de afirmación del color de piel, pero siguen siendo significativos e interesantes¹⁵. Si bien las opiniones sobre discriminación racial están en su conjunto, un poco menos ligadas a los factores sociodemográficos que la afirmación del fenotipo, hay sin embargo una muy fuerte coherencia en los esquemas de determinación de los dos tipos de respuestas; veamos al respecto cuatro ejemplos.

La regresión confirma lo que muestran las frecuencias de la tabla 2: la declaración de una experiencia personal de discriminación, como la autopercepción del color de piel, está ante todo ligada al fenotipo.

En el conjunto de la muestra, las personas caracterizadas “negras” por los encuestadores tienen, siendo iguales los demás factores y de modo extremadamente significativo, una probabilidad muy superior de declarar una experiencia de discriminación (32 vs 20% en promedio). Entre las poblaciones negra y mulata,

14 Esta vez el análisis aplica al conjunto de los individuos de la muestra que contestaron las preguntas del módulo P de la encuesta (anexo 2), cualquiera sea el fenotipo. Son 1.880 ó 1.865 personas según las preguntas, cuyas respuestas se reportan en la tabla 2. Los resultados de las diferentes regresiones logísticas, demasiado voluminosos, no se reproducen aquí.

15 Se ubican entre 55% de respuestas correctamente previstas para la discriminación en los hospitales y centros de salud y 62 % para la discriminación en los transportes y en el barrio. El último modelo explica mejor la declaración de una experiencia personal de discriminación (70% de previsiones exactas).

TABLA 4.2
RESPUESTAS AFIRMATIVAS A LAS PREGUNTAS DE OPINIÓN SOBRE LA DISCRIMINACIÓN,
SEGÚN LA CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA Y EL SEXO DE LOS ENCUESTADOS
(DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS OBSERVADAS)

1. Respuestas a las preguntas sobre la discriminación de los negros en diferentes contextos										
Caracterización hecha por el encuestador	Discriminación hacia los negros									
	Hogares afrocolombianos		Hogares de control		Total					
Contexto	Valores (1)	% (2)	Valores	%	Valores	%				
En los hospitales y centros de salud	1.504	32*	376	27°	1.880	31,0				
En la escuela o en el colegio	1.504	34	376	32	1.880	33,6				
En el transporte público	1.504	39**	376	32°°	1.880	37,6				
En los trámites administrativos	1.504	31*	376	26°	1.880	30,0				
En el trabajo	1.504	57**	376	41°°	1.880	53,8				
Por la policía	1.504	54*	376	50°	1.880	53,2				
En el barrio	1.504	19	376	18	1.880	18,8				

2. Respuestas afirmativas a la pregunta: ¿Usted mismo ha sido víctima de discriminación en su trabajo o en otras situaciones?										
Caracterización hecha por el encuestador	Negro		Mulato		Mestizo		Blanco		Total	
	Valores	% (2)	Valores	%	Valores	%	Valores	%	Valores	%
Hombres	356	30 ⁺⁺	180	14	104	5 ^{<<--}	148	10	788	12 ^{<<}
Mujeres	470	33 ⁺⁺	251	17	154	16 ^{>>}	202	11 ⁻	1.077	16 ^{>>}
Total	826	32 ⁺⁺	431	15	258	11 ⁻	350	10 ⁻	1.865	14

(1) Los valores corresponden al número de personas que respondieron la pregunta. Debido al reducido número de casos, las categorías “indígenas” y “otros” fueron excluidas de las tablas.

(2) Las frecuencias corresponden a las respuestas afirmativas, estimadas a partir de la muestra sobre el conjunto de la población de 18 años y más; los datos han sido ponderados por los factores de extrapolación del muestreo. La prueba de significatividad asociada al diseño muestral, se basa sobre los intervalos de confianza a los niveles de 95 y 99%, con las siguientes anotaciones:

a) >, >> y <, <<: Diferencias positivas (>, >>) y negativas (<, <<) entre sexos, significativas con probabilidades del 95% (>, <) y 99% (>>, <<)

b) +, ++ y -, --: Diferencias positivas (+, ++) y negativas (-, --) para la categoría fenotípica, en relación al promedio de la muestra.

c) •, •• y °, °°: Diferencias positivas (•, ••) y negativas (°, °°) para el tipo de hogar, en relación al promedio de la muestra.

Fuente: Encuesta CIDSE/IRD, junio de 1998.

la diferencia de probabilidad es casi del doble: 32 vs 17%¹⁶. Por supuesto, hay que distinguir la declaración de la ocurrencia real y se puede así objetar que la calificación discriminatoria de tal o cual episodio es un asunto de percepción personal. Sin embargo, no hay duda que esta relación entre el fenotipo observado por los encuestadores y la ocurrencia de episodios discriminatorios prueba que existe en Cali, como ocurre en muchas otras partes, un substrato racista afectando una serie de contextos de la vida social.

Según la opinión de los encuestados, después del color de piel, el origen migratorio es el primer determinante “sociodemográfico” de la discriminación en casi todos los contextos (con excepción de los hospitales y centros de salud y en el barrio). Se observan en efecto diversas asociaciones estadísticas, las cuales varían según los contextos de la relación social (escuela, trabajo, transporte, etc.), entre la percepción de la discriminación y el origen geográfico de los encuestados o de sus padres. En síntesis, una especie de gradiente de exposición al racismo se dibuja: parte de un nivel mínimo para los migrantes de la Costa Pacífica del Cauca (en casi todos los contextos) y del Norte del Cauca y sus descendientes nacidos en Cali (contextos de trabajo, policía), luego se acentúa con los migrantes del Chocó (contexto de trato en la administración pública y privada) y del interior del Valle, Cauca y Nariño (contexto de transporte) y los nativos de Cali originarios de la Costa Pacífica de Nariño (contexto escolar), para llegar a su máximo nivel en los migrantes de Buenaventura y sus descendientes nacidos en Cali (contextos de transporte, trabajo, policía, sistema escolar). Este gradiente corresponde, por una parte, a dispositivos regionales complejos y diferenciados en términos de procesos históricos sociorraciales y sus dinámicas locales, y por otra, como veremos más adelante, a condiciones particulares de inserción de estas diferentes poblaciones en Cali.

Los otros factores determinantes de las opiniones respecto a la existencia de racismo también varían según los contextos donde se produce. La población de los barrios residenciales del sur (clases media y alta) es más sensible a las discriminaciones en el sistema escolar, en los procedimientos administrativos

16 Nuevamente, las características de los encuestadores (sexo y fenotipo) no influyen significativamente en ninguna de las respuestas.

y los transportes (las probabilidades aumentan de 15 a 30%); al contrario, los habitantes de las áreas pobres de la periferia occidental denuncian mucho menos esas discriminaciones (la probabilidad se reduce de aproximadamente 15%). Sin que cause sorpresa, las discriminaciones por parte de la policía golpean sobre todo a los jóvenes (entre 18-30 años) y las categorías profesionales expuestas a controles policíacos (comerciantes ambulantes y de plazas de mercado, trabajadores del transporte). La misma lógica de exposición explica las variaciones de percepción en los transportes: frecuencias más elevadas para las categorías móviles (asalariados de los servicios, obreros manufactureros) que en el caso de los inactivos o las empleadas domésticas. El caso de la percepción del racismo en el barrio es particular, primero porque su nivel promedio es bajo (solamente 19% de respuestas afirmativas), segundo porque sus variaciones según el fenotipo son a la inversa del esquema observado en los otros contextos (las personas caracterizadas negras las perciben ligeramente menos que las personas blancas), y tercero, sobre todo porque aparece claramente la colusión entre estigmatización social y racial. En efecto, tanto para el conjunto de la población como para la población negra y mulata, las frecuencias de percepción aumentan fuertemente entre los desempleados (35%) y los estatus socio-profesionales menos estables (trabajadores no calificados de tipo artesanal, de la construcción y del transporte: 31%), mientras que son particularmente débiles para los patronos artesanales y los obreros calificados manufactureros (15%). Así, a pesar de la referencia explícita a la discriminación de la gente negra, las discriminaciones percibidas en el barrio parecen más relacionadas con la exclusión de las categorías sociales marginales que con manifestaciones propiamente racistas. Nos confrontamos de nuevo aquí ante el fenómeno de la inequidad “sociorracial”, sobre el cual volveremos para interpretar estos resultados.

La percepción de los problemas de discriminación encontrados en el medio escolar se inscribe en una problemática que es indispensable recordar. El profundo atraso y pérdida de calidad del sistema educativo en la primaria y secundaria colombianas, principalmente debido al desplome de la enseñanza pública por causa de las políticas del Estado que favorecen al sector privado con desinterés por la educación pública, al igual que los altos costos de la educación privada (la que puede llegar a ser de aceptable calidad para los estratos

socioeconómicos medios y altos o de pésimo rendimiento en los estratos bajos), en la coyuntura de recesión actual (particularmente crítica en Cali), constituye uno de los principales frenos a la reducción de la inequidad social. De modo progresivo, la carga financiera para los hogares de cualquier estrategia de acceso a un capital escolar valorizable en el mercado de trabajo, termina siendo insoportable para el conjunto de las clases populares y la mayor parte de las clases medias de la ciudad. Esto se convierte en el factor principal de una exclusión económica masiva por el desempleo o el subempleo, conllevando una involución considerable en la historia social de la ciudad (URREA, ORTIZ, 1999; URREA, RAMÍREZ, 2000). En este contexto, la existencia de discriminaciones hacia la población afrocolombiana en la escuela o colegio es denunciada por una tercera parte de los encuestados, sin diferencia significativa de percepción entre la población afrocolombiana considerada en su conjunto y el resto de la población. Además, la regresión logística pone en evidencia tres factores de variaciones importantes.

En primer lugar, al igual que los otros tipos de discriminación, la percepción de las discriminaciones escolares aumenta significativamente en las personas que declaran un color de piel negro y en las personas que han reportado una experiencia personal de discriminación. El análisis de las respuestas abiertas que describen las situaciones de discriminación escolar muestra que, para las personas más expuestas de la muestra, la existencia de una inequidad racial en el acceso a la educación no tiene duda alguna. Por otra parte, el grupo entre 31-50 años se inquieta más por este problema que los mismos jóvenes (18-30 años) que lo sufren o que las personas de más de 50 años. Se observa así una mayor sensibilidad de los adultos encargados de los hogares, quienes en el contexto de la profunda crisis del sistema escolar tienen mayor conciencia de la gravedad del reto que plantea esta situación. Finalmente, a través de las variaciones significativas según el nivel educativo, el lugar de residencia en Cali y el origen geográfico, aparece un gradiente sociocultural en la percepción. Así, las personas con un determinado nivel de estudios universitarios, siendo iguales los demás factores, tienen una frecuencia de declaración muy superior a las que no tienen educación primaria (+64%); de igual manera ocurre con los residentes de los barrios de clases media y alta en relación con los de los barrios pobres (+30%).

El conjunto de estos resultados debe interpretarse evocando al menos tres clases de factores distintos (histórico-culturales, socioeconómicos y residenciales). Como se verá enseguida, cada uno de ellos, considerado separadamente, no permite dar cuenta del conjunto de las diferencias observadas en la percepción de la discriminación, sino que son sus efectos combinados los que ilustran entonces la imbricación de los motivos sociales y raciales de la discriminación. Esto nos pone frente a la complejidad de los retos y de las determinaciones de percepción de la identidad “sociorracial” en Cali.

Podemos primero poner en relación los niveles de percepción del racismo con las condiciones de inserción socioeconómica de unos y otros, y las dificultades que encuentran sus perspectivas y estrategias de ascenso social. Esto concierne tanto a los nativos como a los migrantes. En otros análisis de los datos de la encuesta se mostró que las más fuertes desigualdades de condiciones de vida en Cali afectan a los hogares afrocolombianos de clase media. En estos estratos socioeconómicos los indicadores de hacinamiento en la residencia y el acceso a los servicios y bienes de consumo revelan las mayores disparidades en contra de la población negra y mulata (BRUYNEEL y RAMÍREZ, 1999: 56 a 61). Se llega a una conclusión similar a través de la comparación en los niveles de desempleo y en las estructuras socio-ocupacionales (QUINTÍN, RAMÍREZ y URREA, 2000).

Además, el origen geográfico es un factor importante de diferenciación socioeconómica de las poblaciones negras y mulatas de Cali. En efecto, el contraste es muy fuerte entre las estructuras socio-ocupacionales que se observan entre los migrantes de Buenaventura o del interior del Valle del Cauca, de la Costa Pacífica del Cauca y sus descendientes nacidos en Cali—las cuales son testimonio de una inserción económica satisfactoria—, y las de los originarios de la Costa Pacífica de Nariño y del Departamento del Chocó (migrantes y sus descendientes nacidos en Cali) que demuestran, por el contrario, su fuerte marginalización laboral. En forma de ejemplo, la proporción de mujeres económicamente activas que trabajan como empleadas domésticas son 25 y 12% para los dos primeros orígenes mientras que aumentan al 41 y 37% para los segundos. Igualmente, los hombres activos que ocupan empleos no calificados son solamente el 11% del total en los primeros contra el 19 y el 20% en los segundos.

La hipótesis que podemos avanzar es que las percepciones de las discriminaciones obedecen a lógicas distintas en los dos contextos sociales.

Esquemáticamente podría decirse que los originarios de Buenaventura, en su mayor parte clases medias, reaccionan más frente a la existencia de frenos específicos a la inserción económica y social de la gente negra y mulata, tales como el acceso más difícil a la educación, la discriminación en los enganches o en la promoción laboral, la arbitrariedad policial, etc., que ellos perciben como obstáculos discriminatorios a sus expectativas de ascenso social. Por el contrario, los de la Costa Pacífica de Nariño y del Departamento del Chocó denuncian más moderadamente el origen racial de la exclusión residencial y ocupacional de las que son víctimas, ya que tienen el sentimiento de compartirla, en condición de igualdad de capital económico y social reducido, con las poblaciones blancas y mestizas de los barrios precarios donde todos residen.

Para entender estas diferencias en la percepción de la discriminación racial, es indispensable también pensar en la segregación residencial y la dimensión socioespacial de la discriminación. Hay que volver a los fuertes nexos que existen en Cali entre lugar de residencia, origen migratorio y características fenotípicas de la población. Si bien Cali no se caracteriza por un patrón de segregación sociorracial sistemático o generalizado, la cartografía de los datos del censo y de la encuesta de 1998 muestra una importante desigualdad en la distribución de los lugares de residencia según el origen geográfico (mapa 4.1 y análisis detallado en el cap. tercero y en BARBARY et ál., 1999). Se observa en particular que los migrantes de la Costa Pacífica de Nariño, del Chocó, y sus descendientes nacidos en Cali, tienen una localización residencial muy concentrada en los barrios más pobres en el oriente de la ciudad —el Distrito de Aguablanca y las comunas 6, 7 y 21—, donde se encuentra la mayor proporción de hogares afrocolombianos y personas de fenotipo negro. Como ya se ha dicho, las cifras no atestiguan para nada la existencia de un gueto racial en Cali. Sin embargo, la marginalización económica y social de estos barrios por la pobreza, el desempleo masivo, el menor acceso a la infraestructura de servicios públicos, la delincuencia, etc., es una realidad incuestionable (cap. quinto). Las dos facetas, racial y de clase social, que interactúan una sobre la otra, son el soporte de la estigmatización del Distrito de Aguablanca, al tiempo que juegan un papel en la autorrepresentación de sus habitantes: son la clave de la producción de la alteridad en estas áreas urbanas. Así es como las personas que proceden de la Costa Pacífica de Nariño y del Departamento del Chocó, y que están sobre-

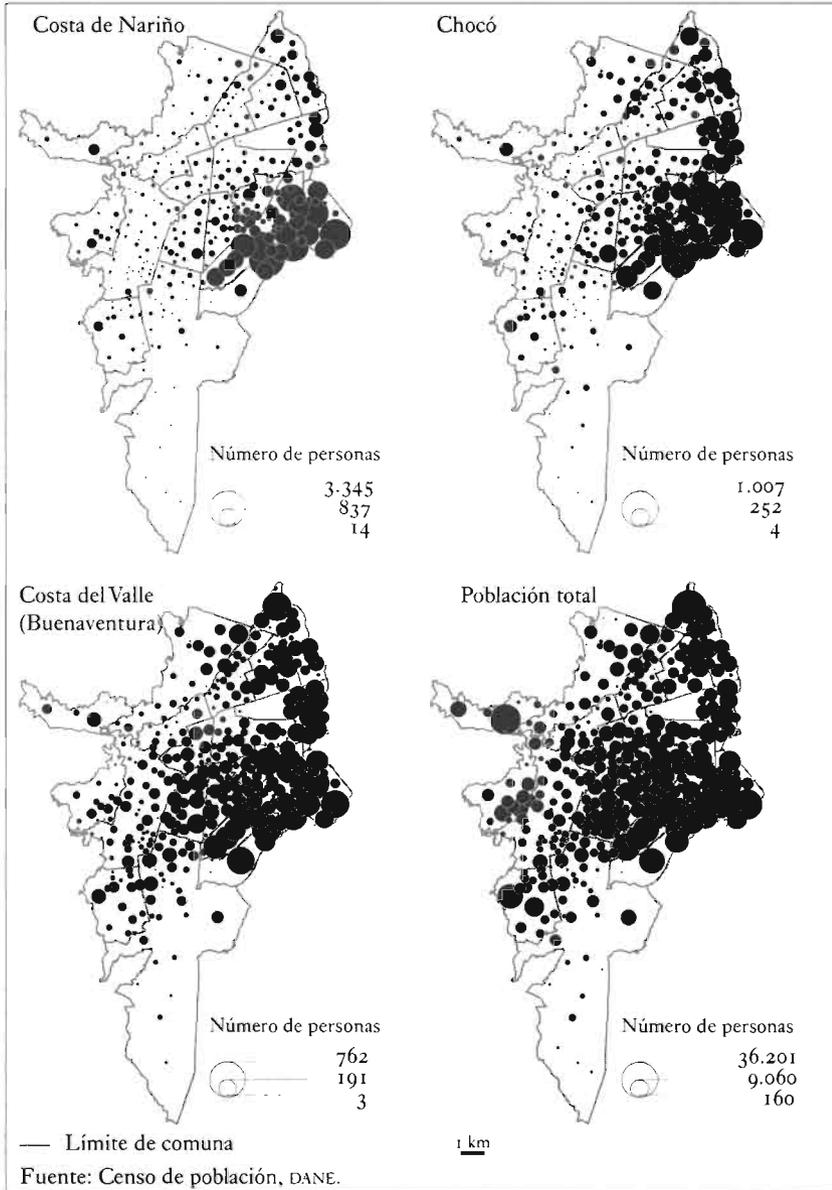
representadas en el Distrito de Aguablanca, perciben la discriminación de una manera más aguda que otras poblaciones negras y mulatas más repartidas en el conjunto de la ciudad, como por ejemplo las que proceden de Buenaventura, de la Costa Pacífica del Cauca o del norte del Cauca.

En Cali como en otros lugares, la afirmación identitaria “negra” se inserta en una serie de dispositivos identitarios variables según el origen regional, la edad, el sexo, la condición socioeconómica, etc., y no se reduce en ningún caso a una identificación estable y única. No obstante, lo hemos visto, el fenotipo –el color de la piel– interviene de manera determinante para explicar la percepción de las discriminaciones y de la exclusión social. A diferencia de otras situaciones que examinamos más adelante (Cartagena y Tumaco), la afirmación de una identidad negra en Cali no reenvía principalmente a pertenencias culturales o territoriales como ha sido previsto en la legislación; refiriéndose sobre todo al color de la piel, ella sirve esencialmente como mediación para situarse en las categorías discriminadas de los mercados urbanos del empleo, la vivienda, y los bienes y servicios. La categoría de “negro” refleja principalmente una posición de subordinado en la sociedad urbana y deviene, por inversión, un elemento de reivindicación ciudadana mediante la integración y no una demanda de reconocimiento de particularismo.

II. CARTAGENA: NEGOCIAR SU IDENTIDAD EN LA CIUDAD

El investigador que trabaja en Cartagena se encuentra en una situación ambigua: sus observaciones le demuestran que entre más se desciende en la escala socioeconómica más negra es la población; entre más urbanidad pierden los barrios, más oscura es la piel de sus habitantes. Pero paradójicamente, resulta difícil expresar esta segregación socioespacial en términos étnicos. Un buen ejemplo de esto se encuentra en los estudios realizados por el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena. Si bien los elementos de estructuración y de segregación socioeconómica son analizados en detalle, si la concentración de la pobreza, el sub-empleo y la carencia de educación son reconocidos y denunciados, la dimensión racial no se menciona jamás, ni en la caracterización de la población ni en la búsqueda de causalidades. Se hablará de “barrios populares” no de barrios étnicos.

MAPA 4.1
 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CALI EN 1993 POR SECTOR
 SEGÚN EL LUGAR DE ORIGEN (TAMAÑO MÁXIMO CONSTANTE)



Concepción y realización: O. BARBARY y O. PISSOAT

De hecho, el problema planteado en Cartagena —en particular después de la instauración del multiculturalismo— es el de la identificación y la definición de las “poblaciones negras”. ¿Se es “negro” por atribución externa? ¿Cuáles son los criterios para establecer esa atribución? ¿Apariencia física, definición *a priori* (rasgos culturales, pertenencia a un territorio...), genealogía? ¿Se trata de una autodefinición? Pero entonces, ¿el investigador se arriesga a reproducir las estrategias, conscientes o inconscientes, de instrumentalización u ocultación cuyos mecanismos precisamente se trata de captar? Por otra parte, ¿esa aproximación no contribuye a reducir la problemática identitaria a una simple interacción entre investigador e investigado? Si el rechazo del etnocentrismo impide plantear una definición *a priori* de la pertenencia racial, entonces es necesario dirigir el interés hacia los mecanismos utilizados por los actores mismos para integrar los rasgos raciales en su propia representación o en su aprehensión del otro.

A. CARTAGENA, ¿CIUDAD MESTIZA?

Cartagena es presentada como la tarjeta postal turística de Colombia, como un remanso de paz en un país conocido por la recurrencia de distintas formas de violencia. Designada como patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO desde 1984, la ciudad se identifica con el Caribe —mucho más que con un interior andino juzgado como conflictivo— para valorar su tradición de integración y mezcla. En adelante, muchas referencias a Cartagena mencionan primordialmente el mestizaje, considerado como la primera característica de una ciudad que valora su pluralismo racial y muestra su origen indígena y africano a través de los símbolos de la India Catalina y la palenquera, o que celebra la diversidad racial de las reinas de belleza locales.

De hecho, Cartagena fue la puerta por donde desembarcaron los colonos españoles y los esclavos africanos, pero también los comerciantes sirio-libaneses, los traficantes de todas partes y los piratas europeos. El número de esclavos, incluso si estaba lejos de ser desdeñable, nunca alcanzó las cifras de las regiones vecinas; Cartagena era antes que nada, un lugar de llegada y de tránsito. J. JARAMILLO URIBE (1994) estima que en 1778 los esclavos representaban un 7% de la población de la ciudad de Cartagena, contra un 39% en la

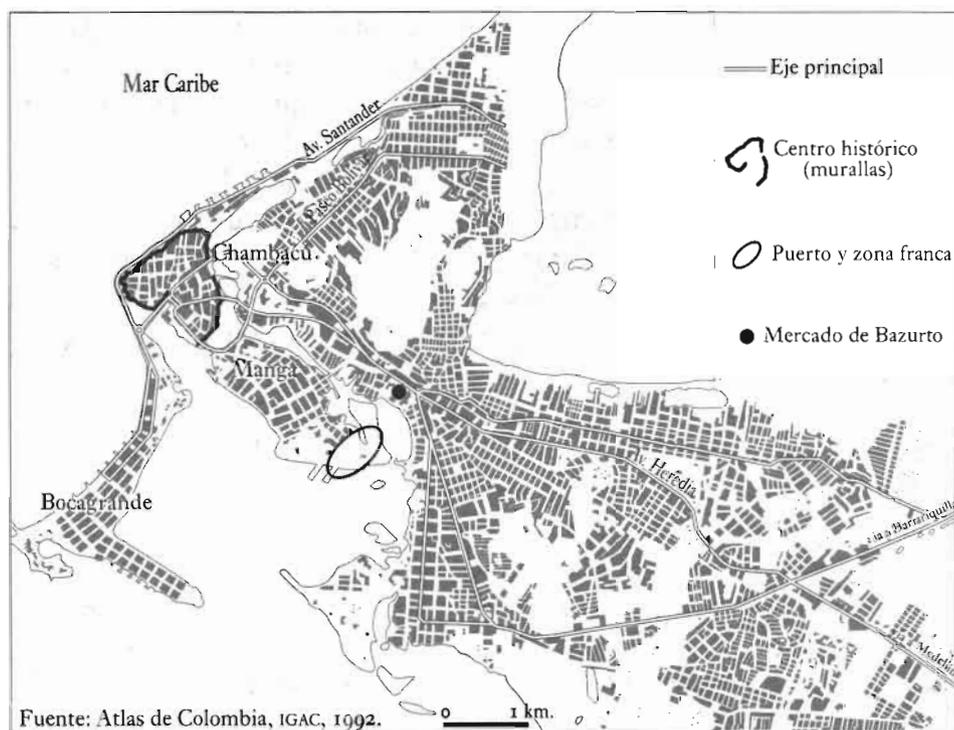
región del Chocó, 19% en Popayán, 18% en Antioquia y 10% en Santa Marta (ibíd., 219 y 220). Considera que en la misma época, la población mestiza constituía el 65% de la población de Cartagena (ibíd., 12). A. MÚNERA, ex director de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Cartagena, concibe el ascenso del mestizaje como el vector esencial del desarrollo de la ciudad y reinterpreta el acontecimiento principal de la historia de Cartagena —el levantamiento independentista del 11 de noviembre de 1811— en términos de una rebelión de los artesanos y pequeños comerciantes mestizos contra la dominación de los criollos de origen europeo (MÚNERA, 1998).

No obstante, esta imagen de “ciudad mestiza”, promovida también por los intelectuales y la prensa, las campañas publicitarias y los mismos residentes, coexiste con una representación bien distinta, mezcla de polarización racial y de paternalismo inferiorizante. En el origen de este segundo discurso sobre Cartagena, se encuentran historiadores pertenecientes a la elite social y política que convierten a los colonos europeos y sus descendientes en los únicos actores de la historia de la ciudad. No solamente recuerdan constantemente su origen europeo, la grandeza de sus proyectos y la nobleza de sus costumbres, sino que reducen las menciones a las poblaciones negras y mestizas a la trata y al estatus de los esclavos, o bien a las rebeliones de los cimarrones o a los esclavos en fuga refugiados en los alrededores de Cartagena (PORRAS TROCONIS, 1965; BOSSA HERAZO, 1967; BUSTAMANTE, 1977). El mestizaje toma entonces la forma de la imposición y la dominación del “blanco”, asimilando así civilización con blanqueamiento (cultural pero no biológico).

Esta doble lectura de la historia de Cartagena revela las ambigüedades propias de su estatus de “ciudad mestiza”. El mestizaje, hoy valorado, tiende a ocultar tras las figuras de lo híbrido, de la fusión y del sincretismo —portadores de cierta modernidad del individuo— la recurrencia de las diferenciaciones raciales y de los antagonismos socioeconómicos. De igual modo, con el pretexto de una presentación no racial de la historia, el discurso de la aristocracia contribuye al mantenimiento de la “línea de color” que preserva al grupo dominante. Pero más allá de esta imagen, la polarización racial está presente en Cartagena. SOLAUN y KRONUS, dos investigadores de la tradición anglosajona de estudios sobre relaciones raciales, caracterizan a la ciudad en su trabajo pionero de 1967, en términos de “discriminación sin violencia”,

dando cuenta de esa mezcla paradójica de discriminación e integración característica de Cartagena.

MAPA 4.2
CIUDAD DE CARTAGENA



Concepción y realización: E. CUNIN y O. PISSOAT

En efecto, se puede oponer una realidad más compleja a la imagen idílica de una Cartagena turística, “Perla del Caribe” que vive armoniosamente los mestizajes de su población. Pues la ciudad ha experimentado profundas transformaciones desde los años 1960-1970: ha abandonado el estatus de ciudad provinciana dormida sobre un pasado glorioso, marginada políticamente, para adquirir el de metrópolis regional, con cerca de un millón de habitantes, abierta a América Latina y el Caribe. A la riqueza turística se han sumado las actividades portuarias y petroquímicas; la denuncia de la oposición centro/periferia ha sido reemplazada por un activismo político que moviliza

los temas de la descentralización y del anclaje en el área del Caribe. Entre las características actuales de Cartagena se cuentan: el crecimiento demográfico, la expansión de los barrios marginales, la llegada masiva de desplazados por causa de la violencia, la insuficiencia de infraestructuras urbanas y la reducción de la política de la ciudad en favor de una política turística. En este contexto urbano trastornado, el paternalismo tradicional y la relativa armonía entre las relaciones raciales coexisten con nuevas formas de construcciones identitarias y con fuentes inéditas de conflicto.

B. CHAMBACÚ: ¿GUETO NEGRO?

La importante segregación socioespacial que hoy caracteriza a Cartagena raramente se expresa en términos étnicos o raciales. Chambacú, antiguo barrio de invasión a los pies de las murallas, que son la encarnación de la Cartagena heroica y turística (mapa 4.2), hoy en día es un terreno baldío sobre el que flotan numerosos proyectos de urbanización; pero es el único que con frecuencia se piensa en términos étnico-raciales. El interés en Chambacú consiste, por una parte, en comprender mejor —a través de los relatos— los procesos de etiquetaje o no etiquetaje étnico y, por otra, estudiar las mutuas dinámicas de etnización y de territorialización.

La noción de gueto —y más aun, la de barrio étnico— ha sido objeto de muchas discusiones sobre su asociación “natural” a la etnicidad especialmente en Estados Unidos, donde se ha erigido en paradigma sociológico. Nosotros retenemos un aspecto de esos debates: el de la disolución de la dimensión racial del gueto, que vendría a designar “un espacio urbano de pobreza extendida e intensa, que oculta el fundamento y el carácter racial de esa pobreza” (WACQUANT, 1997: 341)¹⁷. ¿El gueto se define prioritariamente por su dimensión étnico-racial o es el resultado de un proceso de exclusión socioeconómica? ¿Es necesario privilegiar uno u otro de los factores de causalidad, y cómo aislarlos? ¿Debemos postular una definición *a priori* o apoyarnos en una caracterización empírica? ¿Cuál es el papel de los actores —y del investigador— en la definición del “gueto étnico”? ¿Un barrio es étnico debido a la composición de su pobla-

¹⁷ WACQUANT también critica la idea según la cual el gueto es desorganizado, al igual que la tendencia a “exotizar” el gueto.

ción, o esta etnicidad es el doble resultado de un proceso de etiquetaje y de una territorialización particular? En cierta forma, la reflexión sobre el gueto no admite aquí más que territorios e identidades prefabricadas¹⁸. Al contrario, nos interesan los mecanismos de racialización de las relaciones sociales, en los cuales la relación con el espacio no es ni causa ni producto, sino un recurso y una coacción para los actores.

Eso es lo que nos interesa aquí: no establecer la identidad de un espacio haciendo la genealogía de su singularidad, sino analizar las distintas relaciones que existen entre la idea que tienen las personas sobre el espacio y la idea que tienen sobre sí mismas o sobre los otros (MONNET, 2000: 20).

A fines del siglo XIX, Chambacú no era más que una maraña de manglares entre tierra y mar. Se podían encontrar algunas cabañas de madera pertenecientes a los habitantes de Cartagena que vivían intramuros, o que albergaban a los visitantes que no habían podido entrar en el recinto fortificado cuyas puertas se cerraban al anochecer. Posteriormente, Chambacú comenzó a poblarse gracias a la llegada del ferrocarril a principios del siglo XX. Los primeros trabajos de construcción ferroviaria estuvieron acompañados por la migración de mano de obra proveniente de las localidades vecinas, que naturalmente se instaló a los pies de las murallas, entre la ciudad y el pueblo de origen, pero también en el punto de partida de la vía férrea. Simultáneamente, al otro lado de la ciudad, la construcción —entre el mar y las murallas— de la Avenida Santander, desembocó en la destrucción de los barrios Pekín, Pueblo Nuevo y El Boquetillo, de los cuales una parte de la población fue a refugiarse en Chambacú. Ahora bien, esos tres barrios colgados de las murallas eran los barrios de los libres y de los antiguos esclavos, convertidos —después de la abolición de la esclavitud en 1851— en los lugares de residencia de empleadas de casas, jardineros y otros artesanos.

Desde los años 1960, Cartagena sale de un extenso letargo y busca valorar su pasado, presentado en adelante bajo la forma de un patrimonio nacional e internacional explotable desde la perspectiva turística. Entonces, Chambacú no se ajusta a la imagen de una ciudad que se quiere ordenada y desarrollada,

18 “Admitimos que uno de los elementos constitutivos de la noción de segregación es la idea de fronteras espaciales que separan a grupos bien identificados” (BRUN, RHEIN, 1994: 37).

moderna y turística. Es el Instituto de Crédito Territorial (ICT), organismo público encargado de la política de vivienda social, quien se encuentra en el origen de la erradicación de Chambacú a principios de los años 1970.

¿Cómo los diferentes actores y observadores del “episodio Chambacú” presentan y justifican la supresión de este barrio? Los términos usados respecto al tema son reveladores: si unos se refieren a la “erradicación” del barrio asociándola con un proceso violento y no deseado, otros hablan de “relocalización”, presentando así el mismo fenómeno positivamente y con eufemismos. Si esta doble interpretación del proceso de “limpieza” de los barrios de invasión es finalmente bastante clásica en Colombia y otros lugares, nosotros nos interesamos aquí más precisamente en la racialización diferencial de esas presentaciones, entre la prohibición de toda referencia étnico-racial en los discursos oficiales y la postulación de la lógica racial en los textos literarios que se refieren al mismo “episodio”.

Para la actual directora del INURBE (Instituto Nacional de Interés Social y Reforma Urbana, heredero del ICT), la relocalización de los habitantes de Chambacú es interpretada antes que nada en términos de acceso a la urbanidad:

Era un tugurio sin servicios públicos, la electricidad era pirateada, los residentes no pagaban los servicios. La descomposición social era fuerte, uno no podía pasar por ahí. En los nuevos barrios se les han dado casas, verdaderas casas, con todos los servicios, agua, electricidad¹⁹.

Pero al lado de estos discursos en los cuales toda dimensión racial está excluida, Chambacú también es presentado como un símbolo de la historia africana de Cartagena, desde que MANUEL ZAPATA OLIVELLA la celebrara en su libro *Chambacú, corral de negros*. En unas palabras pronunciadas por Máximo, personaje principal de la novela, la situación se presenta así:

La isla crece. Mañana seremos quince mil familias, el “cáncer negro” como nos llaman. Quieren destruirnos, temen que un día crucemos el puente y una ola de chozas inunde

19 Entrevista, 16 de septiembre de 1999.

la ciudad. Es por eso que no hay calles para nosotros, ni alcantarillado, escuelas y aseo; quieren encerrarnos en la miseria. Pero se equivocan. Lucharemos por nuestra dignidad de seres humanos; no nos dejaremos expulsar de Chambacú. Jamás podrán cambiar el rostro negro de Cartagena; su grandeza y su gloria reposan en los huesos de nuestros ancestros (ZAPATA OLIVELLA, 1990: 199).

Más recientemente, Chambacú también fue glorificado por otra artista, considerada igualmente portavoz de la cultura afrocolombiana: la cantante Totó la Momposina, una de las voces más célebres del Caribe colombiano, quien consagra en su último álbum²⁰ dos canciones dedicadas al barrio, hoy convertido en terreno baldío. El barrio representa entonces un episodio central en la historia de Cartagena, la encarnación de la suerte reservada a las poblaciones negras, de su marginalización y su segregación.

Gueto étnico, tugurio socioeconómico: la identificación también es asunto de etiquetaje y remite a la posición y a los intereses de quien la enuncia. Para algunos, Chambacú debía ser eliminado para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes; para otros, la destrucción de Chambacú expresa una lógica de segregación racial en una ciudad que busca cuidar su imagen. Para MANUEL ZAPATA OLIVELLA, debido a que Chambacú es un “cáncer negro”, no posee calles ni alcantarillado ni escuelas ni aseo; puesto que la población de Chambacú es negra, por eso no tiene acceso a una urbanidad efectiva. Este razonamiento encuentra su expresión simétrica e inversa en las interpretaciones socioeconómicas: la población de Chambacú no se beneficia de infraestructuras públicas y por esta razón es considerada negra; el acceso a la urbanidad se transforma así en sinónimo de blanqueamiento. En testimonio de esto hay un pasaje en un artículo del “Magazín Dominical” que resume, en forma lapidaria, la destrucción de Chambacú:

Un día se creyó que Dios había hecho un milagro cuando algunos negritos de Chambacú se subieron en uno de esos buses que se bambolean, atravesaron uno de los callejones típicos y llegaron a su destino muy bonitos y casi blancos (*El Espectador*, “Magazín Dominical”, 11 de noviembre de 1973).

20 Totó la Momposina, *Pacantó*, MTM, 1999.

Estas asimilaciones, presentadas como naturales, reposan sobre un doble presupuesto: por una parte, existen territorios e identidades definidos de manera independiente los unos de las otras, por otra, existiría una perfecta correspondencia (objetiva y subjetiva) entre esas identidades y esos territorios. Pero, al contrario, se trata de situarse en el entre-dos, en la interacción entre lo social y lo espacial: los individuos se ennegrecen en su asociación con un barrio; un barrio se “guetiza”²¹ según los residentes que lo habitan. Estos procesos no sólo son dinámicos y relacionales, sino que la adecuación entre lógica espacial y lógica identitaria está lejos de ser simétrica.

C. CIMARRONAJES IDENTITARIOS Y TERRITORIALES

Situarse en el corazón del proceso de identificación socioespacial implica concentrarse no sólo en las identidades y los territorios estudiados en forma independiente y sucesiva, sino en sus interacciones y en los mecanismos de su construcción recíproca. Así pues, tomaremos como punto de partida la situación, que permite –hablando en términos de GOFFMAN– dar cuenta de las relaciones, inestables y múltiples, entre el orden estructural y el orden de las interacciones, estudiar la capacidad de los individuos para evaluar su entorno tanto social como espacial y para definir simultáneamente al otro y su territorio. Al estudiar dos formas de “cimarronaje” contemporáneo, se trata de comprender cómo los mecanismos de gestión social de los aspectos raciales revelan modos diferenciales de producción de normas sociales y de construcción del espacio.

Para nuestra investigación, la ciudad de Cartagena presenta el interés de contar con una minoría, los palenqueros²², que ha entrado directamente en la lógica abierta por el reconocimiento del multiculturalismo (más exactamente, no hay que hablar tanto de palenqueros en general sino de una parte de ellos,

²¹ En el original: *guetoïse* (N. del T.).

²² Habitantes del Palenque de San Basilio, pueblo de cimarrones (esclavos huidos) situado a pocos kilómetros de Cartagena, presentado hoy como “el primer pueblo libre de América” después de un acuerdo de no agresión establecido entre la Corona española y los residentes del Palenque en 1713 (ARRAZOLA, 1970).

culta, en pleno ascenso social, que se postula como su representante). Su cimarronaje, concebido en el sentido histórico original del término, parece una forma de distinción, tanto espacial como identitaria. En el contexto actual, adquiere el carácter de una transformación del estigma racial en una valoración étnica. Al instrumentalizar su pasado de cimarrones, se apropian del mito de Benkos Biohó²³, subrayando su especificidad cultural (lengua, prácticas religiosas, organización social); los palenqueros serían hoy –en Cartagena y en la costa Caribe colombiana– los únicos representantes de esta “etnia negra” a la cual le han sido concedidos nuevos derechos, aunque mínimos. Pero este proceso de construcción de un actor étnico en el nuevo paisaje multicultural, también pasa por la exclusión de quienes no pueden exhibir la nueva identidad negra, es decir, la casi totalidad de los habitantes de Cartagena que no se reconocen en el discurso palenquero.

Los “agentes étnicos” palenqueros se han enfrentado con la experiencia urbana: es de su reencuentro con el otro, y de su aprendizaje de un modo de vida caracterizado por relaciones múltiples y parciales, que nace su afirmación de una especificidad cultural. Pero esta experiencia de pluralismo y fluidez en las identificaciones –propiamente urbana– deja lugar para la construcción de un territorio mítico, el pueblo del Palenque de San Basilio, tierra africana de la región Caribe, suficientemente simbólico para constituir un recurso ideológico movilizable y suficientemente objetivo para legitimar la emergencia de un actor étnico. La referencia a este territorio, a la vez imaginario y real, obra entonces como un recurso movilizable en el proceso de construcción identitaria, y contribuye a la formación de una “identidad étnica” tal como la reivindican los líderes palenqueros de Cartagena.

De cierta manera, es la población de Cartagena en su conjunto quien resulta doblemente discriminada debido al surgimiento de esta nueva barrera étnica: la primera, por su exclusión de la ciudadanía efectiva, y la segunda por su exclusión del derecho a la diferencia. La primera porque es negra, la segunda porque no es suficientemente negra. Es más: la asociación entre el principio democrático de la igualdad con la reciente afirmación del multicult-

23 Rey africano que habría encabezado los levantamientos de esclavos y habría fundado el Palenque de San Basilio.

turalismo, finalmente priva a la mayoría de la población de toda posibilidad de reivindicación identitaria. De allí la paradoja: el semi-éxito del igualitarismo republicano sin duda explica el semi-fracaso de la discriminación positiva tal y como se observa en Cartagena. Pues la obsesión con la diferencia, la instrumentalización del multiculturalismo y la afirmación de la etnicidad también producen la exclusión de quien no puede conjugar la identidad propuesta como ejemplo.

Por su parte, las celebraciones contemporáneas de cabildos actualizan una tradición de cimarronaje menos conocido, y por eso menos violento y menos visible, que no toma la forma de una apropiación comunitaria del espacio urbano ni la de una urbanidad desencarnada. En la época colonial, los cabildos eran espacios reservados para los esclavos que, durante un día, dejaban su trabajo para asumir –de manera invertida– las costumbres de los amos, hacer una fiesta, escuchar su música, bailar con toda libertad o practicar sus cultos religiosos. A mediados de los años 1980, un grupo de habitantes de Getsemaní, antiguo barrio de esclavos y artesanos mulatos, decidió actualizar la tradición de los cabildos y organizó desfiles y espectáculos. Al escoger la fecha del 11 de noviembre para sus celebraciones, el cabildo buscó conferir a las fiestas de noviembre su carácter popular y su autenticidad, perdidos bajo la influencia del Concurso Nacional de Belleza y la imposición de intereses ajenos. Compuesto por unos cuarenta grupos en 1998, el cabildo desfiló a lo largo del Paseo Bolívar –una de las vías de comunicación más importantes de Cartagena– antes de retornar a Getsemaní. Después de rendir homenaje al dios yoruba Oyá, ese año celebró a la Ceiba –árbol a través del cual los orishas se comunicarían con los hombres–, presentada como doble símbolo: de América y de África, por parte de NILDA, reina del cabildo²⁴.

El cabildo dio lugar a un trabajo de compilación de relatos orales de los habitantes del barrio de Getsemaní, y de investigaciones sobre las tradiciones festivas y religiosas de la ciudad. La reapropiación de la historia acompaña un programa de educación, de participación ciudadana y de construcción de

24 Presentación del cabildo de 1998 a la prensa, en el restaurante La Carbonera, 22 de octubre de 1998.

ciudadanía, anclado en el proyecto “Gimaní Cultural”. A mediados de la década de 1980, cuando nacen simultáneamente el cabildo y la Asociación Gimaní, el barrio de Getsemaní estaba devastado y su descenso económico, social e incluso arquitectónico era más visible que en el resto de la ciudad histórica; entonces, el barrio experimenta una rehabilitación y un dinamismo ligados al desarrollo turístico y a la llegada de nuevos habitantes. En el proyecto de la Asociación Gimaní Cultural, el rechazo a la estigmatización y a la decadencia socioeconómica da origen a una verdadera propuesta política de reapropiación de la ciudad. A partir de la organización de eventos “cívico-culturales” se trata de favorecer una participación ciudadana que pase por la recuperación y el desarrollo de “valores cívicos festivos en la ciudad” (FUNDACIÓN GIMANÍ CULTURAL, 1997: 4).

Para NILDA, líder comunal que quiere transformar los desfiles del cabildo en carnaval, la valoración de la herencia africana no se traduce en un repliegue comunitario, encarnado según ella en el ejemplo de los palenqueros, sino que al contrario llama a una ampliación de la participación popular donde la identificación racial adquiere el carácter de la referencia al Caribe:

Los palenqueros quieren conservar su raza pura, no se mezclan [...] Nosotros somos más abiertos. Nuestra ciudad es la esquina de la calle, y la esquina de la calle es el Caribe, con todas sus mezclas [...] Queremos incluir a toda la ciudad, es un espacio de participación. El cabildo es el medio de expresión de un pueblo caribe. Cartagena es la única ciudad donde no hay necesidad de llamarse caribeño para serlo²⁵.

Aquí la ciudad es un escenario para mostrar, y vivir, una identidad múltiple –caribeña– sin exclusión. La relación con quien es diferente no es un caso particular o extraordinario; forma parte de las interacciones cotidianas comunes, es la encarnación misma del problema del lazo democrático (MARTUCELLI, 1999: 447), revela las virtudes propias del ingreso a la urbanidad y la ciudadanía. Puesto que la ciudad obliga a la confrontación y a la coexistencia sobre un mismo territorio, da cuenta de los mecanismos que operan en la identificación de sí mismo y del otro; al mismo tiempo, el manejo cotidiano

25 Entrevista, 7 de enero de 1998.

de la diferencia participa en la producción de espacios urbanos, en un vaivén entre identificación y territorialización.

Toda sistematización del principio de discriminación positiva, que tendería a establecer que un espacio justo es un espacio apropiado, desemboca en la negación de dos fundamentos de la ciudad y la urbanidad: primero, la copresencia y sus consecuencias (las dos formas del derecho de visita –la intrusión y el sentido común–) y segundo, la movilidad (JOSEPH, 1995: 35).

Más que como un fracaso, el débil desarrollo del multiculturalismo en Cartagena puede ser concebido como la consecuencia de la gestación de los procesos de identificación situacionales e interaccionales a través de los cuales los habitantes de Cartagena construyen simultáneamente su derecho a la ciudadanía y su derecho a la diferencia –y a la indiferencia–. Al calificar en situación los transeúntes y su entorno, ellos hacen del control de la interacción “cara a cara” una forma de poner a prueba el lazo democrático a escala microsocia y una etapa hacia la reivindicación ciudadana.

III. TUMACO: CIUDAD EN BUSCA DE SU IDENTIDAD

Signada por la marginalidad, la pobreza, la insalubridad y el analfabetismo, subdesarrollada incluso a la luz de las normas del país, la ciudad de Tumaco es, sin embargo, para los habitantes de esta parte sur del litoral pacífico, la puerta de entrada a la modernidad, el polo de actividad económica, del mercado de trabajo, de oferta de educación y salud que no existen en el medio rural, de intensos intercambios comerciales, de posibilidades de salida o de llegada (migraciones, moviidades). Numerosos habitantes denuncian, implícita o explícitamente, el abandono de la ciudad y de la región por parte de los gobiernos nacional y departamental. Lo interpretan como la marca de una discriminación respecto a una población de mayoría negra que no tendría acceso a los beneficios de la modernización y el crecimiento económico que conoció el país desde hace treinta años, a causa de un racismo no declarado. Tumaco, ciudad negra abandonada por el gobierno nacional, se encontraría “huérfana de poder” (HINESTROZA, 1993) incluso hasta el punto de buscar otros lazos del lado del Ecuador (recurrentes amenazas separatistas desde hace más de un siglo).

La historia de la ciudad y de su desarrollo, en realidad reciente (siglo XIX), nos permitirá comprender mejor quiénes son los actores sociales que se han comprometido en la construcción del espacio urbano. A través de las modalidades de repartición y eventual segregación de espacios residenciales, pero también de espacios públicos y de su uso, podremos evaluar el papel jugado por la dimensión sociorracial en la organización urbana. Finalmente, nos preguntaremos por la renovación identitaria negra de los años 1990 y su relación con la ciudad, impregnada de contradicciones: en efecto, la identidad negra reconocida y fundada –legalmente– sobre la apropiación territorial rural, estaría en cierta forma negada a los urbanos, al tiempo que está ampliamente asumida y difundida por ellos, quienes están más escolarizados e integrados en las redes nacionales e internacionales de los movimientos negros.

A. LOS ACTORES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO URBANO

La historia reciente de Tumaco está marcada por desastres y acontecimientos violentos que permanecen en la memoria colectiva: el incendio de 1947, el maremoto de 1979, la gran revuelta popular de 1988 –conocida como “el tumacazo”–, han marcado rupturas en las dinámicas económicas y demográficas de la ciudad y la región.

Originalmente un pequeño pueblo costero sin importancia económica, poblado principalmente por nativos negros y un puñado de comerciantes y funcionarios blancos, Tumaco se afirma como puerto y centro de actividad regional a principios del siglo XX. La exportación de productos forestales (caucho, corozo o “marfil vegetal”) recolectados por los nativos y vendidos por los negociantes, atrae a una población extranjera (especialmente italianos, alemanes, franceses) que edifica la ciudad a su imagen: en la proximidad de los muelles, alrededor de una plaza central flanqueada por la iglesia, el palacio municipal, la aduana y después la notaría, las grandes familias blancas construyen sus viviendas y casas comerciales. Los negros viven en los alrededores y en los intersticios de la ciudad, entre las quintas de los blancos. En los años 1930, las descripciones presentan a Tumaco como la metrópoli del sur, un puerto abierto al extranjero, una ciudad moderna (con vías públicas, electricidad), letrada (con muchos colegios), rica en comercios y casas de negocios, y con

una incipiente actividad manufacturera (fábrica de botones en el barrio de la Taguera) (MERIZALDE, 1921; MINAUDIER, 1992; RESTREPO, 1999a).

La quiebra del modelo de extracción-exportación de productos naturales, en competencia con los derivados del petróleo, debilitó a las elites de comerciantes a partir de los años 1940. El terrible incendio de 1947 que devastó a la ciudad aceleró su ruina. Muchos se replegaron en las localidades del interior y abandonaron definitivamente a Tumaco. Los lugares fuertes que estructuraban la ciudad y simbolizaban los poderes administrativo, político y religioso desaparecieron entre las llamas (catedral, palacio municipal, notaría, tribunal y las residencias alrededor de la plaza Colón). En torno a esa plaza, sólo la catedral fue reconstruida, mientras la Alcaldía fue trasladada a la –hoy– calle principal y las mansiones de las grandes familias fueron reconstruidas sin los lujos de antaño. A pesar de los muchos proyectos²⁶ y salvo algunos barrios reconstruidos, no se realizó ningún programa global de reconstrucción urbana. La ciudad se hunde en el marasmo económico hasta principios de los años 1970, cuando un gran proyecto de industrialización se desarrolla alrededor de las actividades forestales y de transporte marítimo. Pero esta tregua durará poco. Estos dos sectores de actividad –después de emplear una abundante mano de obra urbana– decayeron a fines de los años 1970 debido a razones diversas pero convergentes (modificación de la legislación forestal que restringe la explotación, competencia con los fletes del puerto de Buenaventura, administración inadecuada del puerto, encenagamiento de la bahía de Tumaco). Con ello se frustró la incipiente conformación de un proletariado urbano negro, a pesar de una fuerte movilización popular en 1977 –apoyada por sindicatos y algunos universitarios del interior.

En estos mismos años, el crecimiento urbano es alimentado por las migraciones rurales de proximidad. A pesar de su evidente deterioro, la ciudad permanece como la única ventana abierta a un posible progreso para la mayor parte de una población rural que aspira a un mejor porvenir (salud y educación para los hijos). La ciudad crece sobre sus márgenes cenagosas y arenosas frente al océano. La población urbana, cuyo número se había duplicado entre 1950 y

26 Entre los cuales hubo algunos muy ambiciosos, como el Plan de Reconstrucción Urbana en el que participó LE CORBUSIER y un grupo de expertos nacionales, y al que se debe la urbanización de la isla del Morro (ÁLVAREZ, 1999: 200).

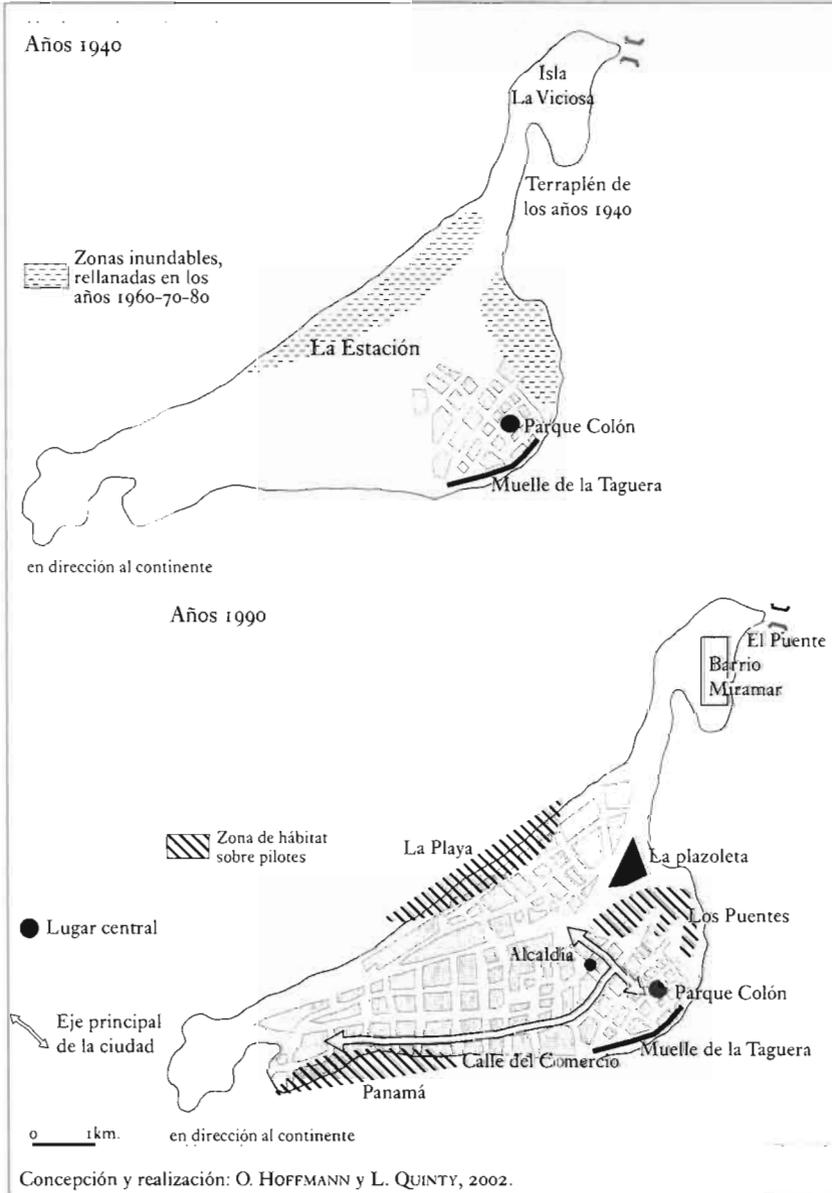
1964, todavía se multiplica por dos entre 1964 y 1985, para alcanzar alrededor de 50.000 habitantes en 1985 y 77.000 en 1998.

A fines de los años 1980, el gobierno comienza a invertir en proyectos de desarrollo regional para el Pacífico. Se afirma el papel de la ciudad como portadora de modernidad y los grandes programas de desarrollo como PLADEICOP (años 1980) y después el Plan Pacífico (años 1990), contemplan aspectos de ordenamiento urbano. En Tumaco, éstos tienen que ver principalmente con redes de saneamiento y electricidad (la interconexión con la red nacional sólo se haría en 1994), las vías (el centro es finalmente pavimentado en 1984), las infraestructuras educativas y sanitarias. Además, dos importantes programas buscan reorientar el crecimiento de la mancha urbana hacia el continente (ÁLVAREZ, 1999).

En medio siglo (1940-1990), Tumaco se convierte en la tercera ciudad del Pacífico después de Buenaventura y Quibdó, una ciudad cuya estructura ha sido profundamente trastornada (mapa 4.3). Las desigualdades socioeconómicas se traducen en el espacio urbano en la proliferación de barrios de invasión construidos en una maraña laberíntica de casas palafíticas, sin instalaciones sanitarias ni redes legales de electricidad, construidas sobre los espacios pantanosos robados al mar; estos lugares son ampliamente estigmatizados por los habitantes del centro de la ciudad, quienes los conciben como focos de inseguridad y delincuencia (RESTREPO, 1999b)²⁷. En cambio, en el extremo norte de la isla se desarrolla un barrio rico –Miramar– alrededor del antiguo barrio del personal directivo de los aserraderos, donde se construyen inmensas viviendas, algunas con un lujo desconcertante, probable producto del tráfico de droga en pleno crecimiento. El centro mismo de la ciudad ha cambiado mucho. La Plaza Colón, símbolo de una hegemonía blanca ahora superada, ha sido abandonada por las elites, o en todo caso, “ex-centrada”. Los centros de actividades –sobre todo comerciales– se han desplazado hacia un tejido urbano cuadrículado por calles bastante grandes y bordeadas de casas habitadas sin distinción por la clase media, blancos –en minoría– y negros. La alcaldía, asediada permanentemente por una multitud de parroquianos, funge como nodo central de la circulación y las movilidades cotidianas.

27 En 1998 (PODM, 1998), se evaluaba en 26% la población urbana que no tenía vivienda propia, y en 6.000 el déficit de viviendas en el área urbana (alrededor de 200 hectáreas de suelo urbanizable).

MAPA 4.3
CENTRO DE TUMACO EN LOS AÑOS 1940 Y 1990



Edición: O. PISSOAT

TABLA 4.3
RESUMEN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO URBANO EN TUMACO

Periodos	Fines del siglo XIX a 1949	Años 1950 a 1970	Años 1980	Años 1990	Actual
Acontecimientos distintivos	Maremoto de 1906 Incendio 1947-1949	Maremoto de 1979	“Tumacazo” de 1988	Infraestructuras 1994-1996	Extensión del conflicto armado: guerrilla, paramilitares
Evolución de las estructuras urbanas	Plaza Colón	Barrios de reconstrucción, el centro cuadrulado, primeros barrios lacustres	Invasiones y barrios lacustres. Primer proyecto Ciudadela	Intraestructuras colectivas. Segunda etapa de La Ciudadela	Barrio Miramar, visibilidad de la economía de la droga
Actores del desarrollo urbano	Negociantes blancos y construcción de una ciudad “moderna” para la época	El Estado y los grandes proyectos de modernización económica. El abandono urbano	Inicio de las políticas urbanas	Descentralización, programas de desarrollo regional (Plan Pacífico, PBP)	
Fenómenos de migración	Hegemonía blanca	Salida de los blancos e inmigración rural	Inmigración rural hacia Tumaco y emigración exterior al municipio	Aumento de inmigración paisa	
Población urbana (censos del DANE)		12.700 en 1951* 25.150 en 1964*	44.800 en 1973* 48.600 en 1985*	71.000 en 1993*	76.800 en 1998**
Tasas de urbanización en el municipio		30 % en 1951* 38,3 % en 1964*	51,3 % en 1973* 49,8 % en 1985*	54,6 % en 1993*	52 % en 1998**
Actividades económicas	Extracción, negocio, exportación	Madera, puerto	Años de crisis, primeras culturas de la coca	Administración Palmicultura Cría de camarones	Palmicultura Extensión de las culturas y del tráfico de coca

Fuentes: * Censos del DANE; ** Proyección de la Oficina de Planeación municipal, Plan operativo de desarrollo municipal, Municipio de Tumaco, 1998.

La ciudad de Tumaco ha sido construida sobre y por el mar –por el tráfico marítimo– por una clase de negociantes frecuentemente extranjeros y cosmopolitas quienes importaron un modelo de ciudad conforme a sus necesidades. Los desastres (incendios, maremotos), la ruina de las actividades de extracción y exportación, el fracaso de las tentativas de industrialización ligado al persistente abandono de las autoridades centrales hacia ese fin del mundo, terminaron con las antiguas marcas territoriales que recordaban los orígenes “extranjeros” (blancos) de Tumaco (tabla 4.3). Las recientes dinámicas urbanas han estado

acompañadas por un desplazamiento del centro de gravedad de la ciudad, que se vuelca hacia el continente en detrimento de sus alrededores fluviales y marítimos. El abandono institucional correspondió claramente con la partida de los “grandes blancos” y la suspensión de las inversiones económicas en la región a mitad del siglo xx. Tumaco se volvió “ciudad negra” en la medida en que se empobreció. La degradación urbana ha sido tal, que la población local –negra y mestiza²⁸– se ha rebelado varias veces: durante las huelgas de 1977 para protestar contra el cierre de los aserraderos; durante el “tumacazo” en 1988 o más recientemente, en 1994, con grandes manifestaciones en contra del deplorable estado del sistema de agua potable. En cada uno de estos acontecimientos, las denuncias acerca del “abandono institucional” se relacionaban más o menos explícitamente con la discriminación racial que sufre Tumaco y su población “nativa”. Los párrafos que siguen tratan de comprender cómo se expresa, en el espacio urbano, esta dimensión sociorracial que marca la identidad de Tumaco.

B. SEGREGACIÓN ESPACIAL E INVERSIÓN EN EL ESPACIO

En el Tumaco de hoy, no se puede hablar de segregación racial en el plano residencial, aún si existen prácticas segregativas. En efecto no se ven “barrios negros” ni “colonias” blancas, pero ningún blanco vive en los barrios pobres y pocos negros viven en el barrio “chic” de Miramar. Además, dos procesos convergen para alimentar un sentimiento de profunda discriminación entre los residentes de los barrios populares: la especialización de las actividades económicas, cada una asociada con grupos raciales o de orígenes diferenciados, y la fuerte segregación socioeconómica que, sin corresponder estrictamente con las jerarquías sociorraciales, de todos modos sostiene las barreras entre los grupos.

28 El término “mestizo” no es usado localmente. Aquí se utiliza en referencia a los blancos que permanecieron en el lugar después de las quiebras de los años 1950-1960, y quienes frecuentemente han establecido alianzas con los habitantes “nativos” negros. Ellos se conciben a sí mismos como “tumaqueños”, a veces como “mulatos”, o “blancos” según los contextos.

A pesar de la ausencia de demarcación espacial residencial, los grupos socioétnicos están claramente identificados en la ciudad. Los “no nativos” –eufemismo para los “blancos”–, con frecuencia son denominados bajo el genérico de *paisas*²⁹. Pero pronto aparecen diferencias en función de las actividades desarrolladas por unos u otros. Los “verdaderos paisas”, originarios de Antioquia, tienden a especializarse en el comercio al menudeo (alimentación, ropa, droguerías, venta de materiales, etc.); ocupan el centro comercial de la ciudad, tanto con sus residencias como con sus actividades. Por su parte los descendientes de los negociantes de origen extranjero o del interior del país, pero instalados desde hace mucho tiempo en Tumaco, han preferido invertir en la pesca y el comercio de pescado al mayoreo y al menudeo, en instalaciones ubicadas a lo largo de los muelles. Viven en hermosas casas en el centro urbano. Una tercera categoría la constituyen los pastusos o serranos, originarios de las sierras vecinas, quienes representan a la mayoría del aparato técnico y administrativo-político de la ciudad, sin ocupar un nicho residencial específico. Finalmente, los vallunos (originarios del departamento del Valle del Cauca y de su capital, Cali) han invertido en el sector económico agroindustrial desde los años 1970-1980, sin por eso residir de manera permanente en Tumaco. En conjunto, estos cuatro grupos constituyen a lo sumo un 8% de la población urbana, pero controlan la mayoría de las palancas del desarrollo político y económico de la ciudad (estimación del episcopado, 1998). En contraste con esta ocupación del espacio productivo por parte de la población no-nativa, el mercado y las calles adyacentes están casi completamente dedicados al pequeño comercio local, constituido por puestos precarios atendidos por mujeres de Tumaco o de los alrededores, muchas de ellas provenientes de los ríos. En los barrios periféricos, los comercios (generalmente de alimentos) siguen en manos de la población negra nativa, a pesar de que los paisas han comenzado a invertir cada vez más lejos del centro.

De igual forma, las modalidades de uso cotidiano del espacio difieren según los grupos sociales. En los espacios privados, los tipos de habitat informan fácilmente sobre la clase socioeconómica, como en todas partes, pero también

29 Cfr. la definición de este término en el anexo 4; en Tumaco, la denominación de *paisa* se extiende al conjunto de los inmigrantes blancos del interior del país.

sobre la identidad cultural y el origen rural o urbano de sus habitantes: presencia e importancia del patio trasero, distribución de espacios masculinos y femeninos, abiertos y cerrados (MOSQUERA, 1993; ÁLVAREZ, 1999). Los espacios domésticos, incluso cuando pueden ser vecinos, están claramente diferenciados y son relativamente herméticos, como indica el dicho local: “en casa de paisa, negro fuera”.

Otros espacios privados funcionan o han funcionado separadamente, no tanto a nivel individual o familiar sino como lugares de segregación abierta que alimentan el distanciamiento entre los “colectivos” racialmente diferenciados. Es el caso de los clubes o lugares de ocio y sociabilidad. El primer “salón” (Salón Nariño) estuvo explícitamente cerrado para los negros hasta los años 1940, y consagrado a tertulias y juegos de sociedad entre la llamada gente de bien (“señores bien”). El “club privado” que lo reemplazó (Club Tropical), fundado por un grupo de accionistas, también estaba prohibido para los negros. Los dos lugares estaban situados alrededor de la Plaza Colón y de la Taguera, cuya función simbólica de representación de la elite en la ciudad ya hemos visto. Posteriormente, las discotecas se multiplican pero con clientelas separadas; aún en 1975, en una de ellas se impidió la entrada a un negro que venía acompañado por una mujer blanca. Se averiguó que el cliente en cuestión era WILLINGTON ORTIZ, jugador de fútbol reconocido en el país y el incidente generó escándalo. Actualmente, la elite local se cita en un “club campestre” al que pueden afiliarse los negros “si tienen los recursos suficientes”³⁰.

Los espacios públicos no escapan a esas distinciones y apropiaciones separadas: el puente, que cada fin de semana se transforma en un gigantesco espacio de rumba, es acaparado por negros jóvenes en su parte norte y por los paisas en la parte sur. Estos últimos dicen que el extremo norte es “más peligroso” porque allí hay “muchos negros”. La playa del Morro, sitio de esparcimiento para la juventud local durante la semana, se convierte en dominio exclusivo de familias de turistas paisas y pastusos durante las vacaciones escolares. Un mismo espacio adquiere “cualidades” y sentidos diferentes en el tiempo. Los habitantes-usuarios poseen la competencia social para descifrar los códigos asociados (CUNIN, 2001) y cada uno conoce muy bien los lugares y las horas

30 Entrevista a un comerciante paisa de Tumaco, abril de 2000.

en que tal o cual lugar será “suyo”. Así, la discriminación no se inscribe en el espacio construido sino en el espacio practicado, en el uso que los diferentes actores individuales y colectivos hacen de él.

A pesar de esas micro-segregaciones y estrategias de evitación mutua, la coexistencia en Tumaco está constituida por una “convivencia distante”, al menos durante el día y en los espacios públicos. Los comportamientos espaciales traducen las expectativas de unos y otros en cuanto al lugar que aspiran a ocupar en la ciudad. Cuando los blancos tenían un “proyecto de vida” en la ciudad, en la primera mitad del siglo xx, intervenían directamente en su organización política y material. Los primeros colonos y sus descendientes, la mayoría de ellos negociantes, habían invertido en la construcción de la ciudad: lugares simbólicos, segregación residencial, espacios privados separados. Ahora pareciera como si los blancos, al conservar y mantener su dominación económica y política, no invirtieran más en el espacio urbano desde el plano simbólico y se limitaran a usar los elementos necesarios para su reproducción y expansión económica. En este sentido se puede observar una distinción entre los blancos instalados hace muchas generaciones, algunos empobrecidos y muy frecuentemente mestizos, y los recién llegados que no hacen más que explotar los recursos locales sin invertir social ni simbólicamente en lo local, sin proyectarse en un futuro anclado en la ciudad. Esto explicaría la aparente ausencia de segregación residencial y le daría otro matiz: lejos de significar una ausencia de discriminación y racismo, constituiría al contrario su más acabada manifestación. A los ojos de los paisas, el espacio local, y por extensión la sociedad local, no serían incluso dignos de interés excepto en el plano económico. A pesar de vivir en Tumaco, su espacio de referencia es otro y continúa siendo “el interior” del país, de donde vienen: es allá donde invierten en objetos y prácticas de ostentación, donde sostienen sus redes de alianza, donde entran en una competencia social entre “pares”. La ciudad de origen representa “una base”, “la seguridad”, “el porvenir de los hijos” (hermanos paisas que llegaron entre 1985 y 1990). Antes, “cuando se tenía éxito, uno se iba a vivir a Cali y desde allí administraba”. Ahora, debido a la crisis, resulta muy difícil invertir en Cali y “uno se queda aquí” más tiempo que antes³¹.

31 Entrevista a un comerciante paisa de Tumaco, abril de 2000.

Lo que comienza a verse en el espacio urbano, en las suntuosas inversiones en el nuevo barrio Miramar, confirma nuestra hipótesis.

La ciudad es un espacio de producción y reproducción sociales para los habitantes nativos (sean negros, mestizos o blancos), mientras que para las nuevas elites (blancas) existe una disociación entre el lugar de acumulación económica y el de inversión social. No se evidencia en Tumaco fenómenos de fronteras o de exclusión socio-espacial porque la competencia se juega en otra parte, a otra escala. Esto explica por que no hallamos aquí una expresión de “lucha de lugares”³² como ocurre en numerosas ciudades americanas donde cada grupo social está asociado con barrios o espacios precisos. En Tumaco, la fijación de la posición de poder/subordinación en la sociedad local no pasa por una demarcación espacial residencial, sino más bien por las formas de uso del espacio.

C. EL DEBATE POLÍTICO: LA DIMENSIÓN ÉTNICO-RACIAL EN LA CIUDAD Y EN EL MEDIO RURAL

Las manifestaciones colectivas urbanas de los años 1980, en protesta contra el abandono y la degradación de la ciudad, pusieron de relieve el tema del respeto hacia una identidad local, tumaqueña, que se oponía a las imposiciones provenientes del “centro”, alternativamente llamado pastuso, andino o serrano (HOFFMANN, 1996b). El paso de la “identidad local” a la “identidad negra” es más tardío y se da en los años 1990, directamente ligado a la evolución de los discursos globales que reconocen una especificidad de las “comunidades negras”. Con la emergencia de un discurso identitario que se apoya en la Constitución de 1991 y la Ley 70 de 1993, la etnicidad negra se define por la pertenencia a un territorio y a un grupo caracterizado por su arraigo espacial, y por el respeto hacia las prácticas tradicionales, elementos que en su conjunto justifican hoy la propiedad (colectiva en ese caso). Elaborado en respuesta a preocupaciones urgentes y fundamentales –garantizar la seguridad territorial de las comunidades rurales–, este discurso encierra la etnicidad negra en su ex-

32 La expresión es de RAÚL VILLA, en un trabajo sobre Los Angeles (MONNET, 2001).

clusiva dimensión rural y territorial. Desde ese momento, se vuelve inaccesible para los urbanos, quienes sin embargo componen la mayoría de la población negra colombiana y la mitad de la población del municipio de Tumaco. Sin territorio ni “ancestralidad” comprobada, ellos no pueden prevalerse de una etnicidad negra tal como se construye en las esferas políticas, académicas y no gubernamentales que privilegian los procesos ligados a la Ley 70.

Es preciso recordar al respecto que incluso antes de la Ley 70, los ciudadanos habían desarrollado un discurso étnico, sin darle siempre ese nombre, especialmente en torno a reivindicaciones y prácticas culturales específicas (danza, teatro, música). Particularmente activo en Tumaco (ARISTIZABAL, 1998; AGIER, 2001), el “sector cultural” negro intervino masivamente en la movilización identitaria de los años 1990. Con lazos rurales frecuentemente cercanos en sus genealogías familiares, algunos de esos ciudadanos asumen la pesada tarea de difundir y explicar las nuevas disposiciones legislativas a un mundo rural todavía muy marginado. Son capaces de comprender el nuevo lenguaje jurídico y traducirlo en recursos tangibles para los campesinos (el acceso al territorio), como también pueden discutir y negociar con las autoridades oficiales. Se transforman así en mediadores indispensables en tanto dirigentes o asesores de las organizaciones campesinas o étnico-territoriales que se multiplicaron a partir de 1993.

Con la intensificación de la movilización en toda la región, esos “intermediarios étnicos” ocupan un lugar cada vez más importante en las escenas local y regional. Y con la complejidad administrativa que implica cierta especialización, se han convertido en verdaderos profesionales étnicos que dependen de su oficio de mediador para su supervivencia económica, social y política. Este sector urbano crece día a día y aspira a tener peso en las orientaciones globales respecto a la sociedad de la cual surgió. En otras palabras, los intermediarios étnicos se transforman en interlocutores políticos y reivindican a ese título un derecho de palabra que concierne a “los asuntos de la ciudadanía”, incluyendo evidentemente los de la ciudad. Si la etnicidad “legal” se construye en referencia al campo y al territorio, único lugar donde —como dijimos antes— “el modelo étnico” funciona, la etnicidad “política” involucra y legitima a actores sociales y políticos estrictamente urbanos. La recomposición del paisaje político urbano se realiza a partir de un reconocimiento étnico adquirido en el

medio rural. El anclaje rural condiciona de alguna forma la acción política en la ciudad. La ciudad suscita así la mitificación de un mundo rural considerado como fuente de identidad étnica, acompañada por una sobrevaloración de la tradición y las “costumbres rurales” que los urbanos redescubren y codifican según sus necesidades. Encontramos de nuevo aquí procesos comunes a otras situaciones analizadas antes a propósito del Palenque de San Basilio en Cartagena. A falta de territorio, la memoria del territorio proporciona la base identitaria indispensable para los individuos y los grupos que reivindican la etnicidad negra en sus actividades públicas y políticas. Los orígenes rurales, al proveer de algún modo un acceso simbólico al territorio, serían las únicas garantías de “ancestralidad”, que condiciona la identidad étnica legítima. Y aquella puede entonces valorizarse en la plaza política urbana (partidos, asociaciones, etc.).

Estos arreglos y ajustes políticos no deben interpretarse en términos de instrumentalización obvia ni reducirse a manipulaciones corto-plazistas. En efecto, la introducción de la problemática étnica tiene repercusiones políticas más amplias en la medida en que obliga a los aparatos administrativos y políticos a revisar sus programas, discursos y formas de reclutamiento para integrar esta nueva dimensión. La reapropiación de la ciudad por los nativos, de la cual ya hemos visto los componentes demográficos y culturales, pasa también, ahora, por la presencia política y la construcción de una “legitimidad negra” que se opone a los “otros” (blancos, pastusos, vallunos, serranos, paisas). La problemática étnica negra se traslada así desde lo rural hacia la ciudad, sin que este traslado conlleve una reconstrucción de los discursos. Éstos se elaboran en el “dolor existencial” (“el dolor de ser negro”, GRUESO et ál., 2001) experimentado por numerosos individuos que “buscan su lugar” por fuera de los esquemas reductores de etnicidad legalmente instituidos. Frente a la dificultad de vivir una etnicidad negra encerrada en su dimensión rural y territorial, ellos buscan del lado de la dimensión racial y política lo que sería la “especificidad” de las poblaciones negras: el hecho de ser de color negro (fenotipo) y por eso expuesto a la discriminación cotidiana e institucional, y el hecho de pertenecer a un colectivo históricamente marginado por las autoridades gubernamentales en todos sus niveles. La definición de “ser negro” sacaría entonces a flote la alteridad basada en la subordinación o la rebelión,

en la relación desigual con el otro y con la sociedad, y no en una identidad fundadora propia de una “cultura afrocolombiana” inmanente.

Los nuevos desafíos identitarios, para los negros, son claramente urbanos³³. ¿Pero habrían dejado de serlo alguna vez? A propósito de los esclavos cimarrones rebeldes del valle del Patía en el siglo XVIII, ZULUAGA concluye: “se podría decir que el ímpetu libertario de la población de color siempre está asociado a la constitución de nuevos barrios urbanos o semiurbanos” (1994, 251). Y la ciudad siempre ha constituido el refugio por excelencia para los negros que, a falta de territorios estables y reconocidos, sabían construir ‘lugares’ íntimos, aunque fueran efímeros como esas tabernas o esas esquinas de las calles usadas algunas noches por negros en la Lima del siglo XVIII: “un lugar donde se es conocido y reconocido, sitio protegido, lugar donde se cumplen los intercambios y las obligaciones recíprocas” (CUCHE, 1981: 110). La reivindicación del territorio rural era sin duda indispensable para el reconocimiento de los negros como grupo étnico por parte de la sociedad nacional. Son muchos los militantes de la causa negra que buscan ahora en la ciudad nuevas formas de territorialidad, de legitimidad y de ciudadanía.

IV. CONCLUSIÓN: PARADOJAS, DIVERSIDAD Y CONSTANTES DE LA IDENTIDAD “NEGRA” EN LA CIUDAD

A primera vista, un elemento bastante paradójico se destaca en la comparación entre las conclusiones alcanzadas en los tres contextos urbanos. En Cali, los datos estadísticos recalcan la coherencia que existe entre la autodeclaración del color de la piel y la caracterización fenotípica asignada por el encuestador; se deduce de ahí que la afirmación de la identidad individual se realiza en estrecha relación con las categorías raciales de uso común, delimitando de hecho a los “grupos” sociorraciales con fronteras visibles. En Cartagena, el análisis antropológico subraya por el contrario un manejo situacional, fluido y múltiple de las categorías raciales, combinando las determinaciones de orden

33 Recordemos que en el año 2000 se estimaba en 68% la tasa de urbanización de la población negra, valor muy ligeramente inferior a la media nacional que es de 71% (URREA et ál., 2002).

estructural con aquellas surgidas de interacciones individuales, incluso con la primacía de estas últimas. Sin comprometerse en ese terreno, el análisis de Tumaco privilegia otra escala, la de la ciudad en su conjunto como lugar pertinente de construcción y negociación identitaria. Se podrían interpretar estas diferencias como resultantes directas de los supuestos metodológicos de cada investigador, encontrando cada uno de hecho lo que quería buscar³⁴. Pero el cruce de perspectivas al que nos sometimos impide este tipo de generalización apresurada y obliga a considerar la diversidad de mecanismos en juego. Respecto a los resultados enunciados, hay que admitir que coexisten las atribuciones exteriores aparentemente insuperables –el color de la piel– y las negociaciones identitarias contextualizadas, bajo el dominio potencial de los actores mismos. La identidad racial impuesta (del fenotipo “negro”) y la afirmación identitaria étnica, racial o social negociada se combinan en diferentes escalas sociales, espaciales o temporales y en grados variables según los casos, dejando a los actores el cuidado de “componer”, en los dos sentidos del término –como se compone un cuadro o como se compone con la adversidad–, las diferentes opciones en función de las presiones coyunturales o estructurales experimentadas (o percibidos por el investigador en el momento de la observación). Nos parece que más allá de su diferente naturaleza, la yuxtaposición de resultados contradictorios permite rebasar los contextos específicos de las tres ciudades y las divergencias disciplinarias o metodológicas, para proponer algunas claves de lectura de la diversidad de las identidades “negras” y de su dinámica reciente en Colombia, y tal vez en otros lugares.

34 Remitir los diferentes resultados sólo a las aproximaciones metodológicas adoptadas (estadística, antropológica o histórico-geográfica) no haría más que soslayar el problema. En efecto, existe la tendencia a decir que, mientras la estadística identifica y jerarquiza determinaciones colectivas por naturaleza, la antropología se enfoca en los actores individuales obrando en la irreductible variedad de situaciones y contextos sociales. Sin embargo, a la inversa, vemos que la estadística se funda sobre datos estrictamente personalizados y muy frecuentemente descontextualizados (o en el contexto muy específico de la encuesta), mientras la antropología estudia las relaciones, los lazos sociales, las colectividades más o menos formalizadas en sus relaciones recíprocas. Los dos argumentos son válidos, y se observa cuán vano sería tratar de paralizar las dos aproximaciones en una oposición irreductible.

A. IDENTIDADES Y TERRITORIOS:
LAS ESCALAS DE LA RELACIÓN

Cada uno a su manera, los trabajos realizados en Cali, Cartagena y Tumaco han interrogado la noción de “territorio étnico”. Este es resultado de un proceso de atribución identitaria (estigmatización del otro) y territorial (inscripción en límites reificados) que no necesariamente se corresponden uno a otro; pero resulta también de un proceso —esta vez interno al grupo— de afirmación de una diferencia y de apropiación de una porción del espacio. Al estudiar la diáspora antillana en Gran Bretaña, C. CHIVALLON (1995, 1997) cuestiona las múltiples significaciones del espacio de un grupo migrante a otro. Según ella, los antillanos parecen caracterizarse por poseer una identidad móvil y cambiante, que escaparía a lo sedentario y a la fijación territorial. Uno puede preguntarse si esas observaciones no se aplican a toda diáspora, a la diáspora negra americana en todo caso (cfr. los trabajos de P. GILROY [1993] sobre el *Black Atlantic*). De hecho, los trabajos desarrollados en Cali, Cartagena y Tumaco ponen en evidencia la fluidez y la variabilidad de los lazos territoriales, reveladoras a su vez de identidades en relación y en devenir. Al mismo tiempo, la referencia a un territorio-raíz, más imaginario que vivido, no está ausente entre las poblaciones negras urbanas que, al igual que la diáspora, construye territorios míticos (como lo demuestra, por ejemplo, la recurrencia de discursos al modo de los del rastafarismo o de los afrocentrismos). Esta territorialización subjetiva, movilizadora como fundamento de la diferencia identitaria, se encarna en una relación de oposición y de complementariedad rural/urbano, tanto en el caso del Palenque de San Basilio en Cartagena como en el de los territorios de las comunidades negras en Tumaco. En los dos casos, el territorio de referencia es suficientemente objetivo para movilizar y agrupar, y suficientemente imaginario para no paralizar ni forzar.

Con notables excepciones (el barrio de Chambacú en Cartagena o los barrios precarios de Tumaco), los análisis revelan la ausencia de relación sistemática y durable entre espacios urbanos e identidades sociorraciales. Sin embargo eso no implica, lo hemos visto, una “indiferencia” sociorracial del medio urbano. Las redes de afinidad, que en la ciudad substituyen a las sociabilidades “orgánicas” preñadas del medio rural, integran la dimensión

sociorracial al mismo tiempo que a otros factores de identificación (parentesco, clase social, etc.). Tanto para los migrantes como para los nativos urbanos, a pesar de su movilidad residencial y de trabajo (caps. segundo y tercero), la ciudad se estructura en espacios significantes en el plano étnico. Pero más que los espacios, las prácticas urbanas (circuitos utilizados, frecuentación de algunos lugares en ciertos momentos, apropiación diferenciada de espacios públicos) informan sobre las pertenencias sociorraciales de los actores. La relación con el territorio nunca es neutra y se refiere a las identificaciones asumidas o impuestas, pero según formas que no tienen nada de regular ni permanente, ni en el tiempo ni en el espacio. Las temporalidades varían, lo hemos visto, desde la velada nocturna o el acontecimiento (el tiempo de la rumba, del carnaval) hasta la instalación duradera (el barrio de la ciudad) o incluso, aunque sea en el registro mítico, hasta la “ancestralidad” (el territorio original). La diversidad de escalas espaciales ligada a la temporalidad también se ha puesto en evidencia. En Tumaco, la identificación étnica alcanza su sentido a escala de toda la ciudad, que aparece como la entidad donde se juega la relación con el otro, donde se elabora una nueva “etnicidad negra”. En cambio, en Cali, no es a nivel de la ciudad sino del barrio o del Distrito donde se articulan las dimensiones sociorraciales, étnicas y ciudadanas, donde se dejan ver las identificaciones sociales marcadas en el territorio urbano. En Cartagena, las identificaciones étnicas se manejan primero en espacios aparentemente compartidos pero que adquieren, gracias a las prácticas y a las significaciones que les otorgan sus habitantes, un sentido social que es necesario descifrar antes de interpretarlo en simples términos de segregación o de mezcla. Se observa entonces cómo la relación identidad-territorio, lejos de desaparecer en el medio urbano, se expresa en escalas y bajo modalidades diversas, invalidando así algunos estereotipos existentes en materia de segregación urbana o al contrario, de convivencia ciudadana. Estas conclusiones responden en parte a las preguntas planteadas en la introducción: la ciudad produce la etnicidad desde el momento en que las condiciones de vida imponen o suscitan agrupamientos interpretados por los actores en términos étnicos: los “barrios negros” de Cali y los palenqueros de Cartagena son los ejemplos más impactantes. A la inversa, la etnicidad reafirmada produce a la ciudad mediante prácticas culturales (la rumba en Tumaco o Cali, el cabildo

en Cartagena) o políticas (las instituciones urbanas especializadas en Cali, el cabildo igualmente en Cartagena) que ella instaura o legitima. La imagen de la ciudad se encuentra modificada, y con ella la concepción del “vivir juntos” entre individuos y grupos que reivindican identificaciones diferentes.

B. IDENTIDADES Y CIUDADANÍA: EXCLUSIÓN-INCLUSIÓN

De las diferentes interpretaciones sobre los procesos de afirmación identitaria que conciernen a la población afrocolombiana –en primer lugar, el modelo propuesto por la Ley 70 en la región del Pacífico; los tres contextos urbanos después– emerge un eje que estructura las variaciones de la identidad “negra” a lo largo de una oposición entre dos definiciones aparentemente irreconciliables. Por una parte, el principio étnico-territorial promovido por la Constitución, cuyo arquetipo es la “comunidad negra” rural (comunidades del Pacífico, Palenque de San Basilio), postula que el lazo ancestral con un territorio precisamente delimitado es el único criterio de inclusión o exclusión. En el otro extremo, aparecen en el medio urbano, fuera del marco jurídico precedente, diferentes formas de afirmación de una identidad afrocolombiana que combinan los registros de afiliaciones sociales, culturales y políticas con un punto de partida común: la percepción de un componente propiamente racial de la segregación residencial (marcación racial y estigmatización de los barrios con alta concentración de población negra) y de la exclusión socioeconómica (discriminación en el acceso al trabajo, a la educación, etc., desigualdad en las condiciones de vida). La atribución de una “etiqueta étnica” a ciertos espacios, no solamente urbanos y tanto desde el interior (denuncia del gueto) como desde el exterior (estigmatización de barrios y pueblos de negros), es a la vez el motor y el resultado de una racialización de las relaciones sociales que no es reciente y ciertamente no fue producida principalmente –como afirman algunos analistas– por la institución oficial y jurídica del multiculturalismo. Se encuentran ejemplos tanto en Cali, en el Distrito de Aguablanca, como en Cartagena, con el episodio de la erradicación de Chambacú y, en menor medida, la imagen racial de Getsemaní, o incluso en Tumaco y en la región Pacífica, con un déficit histórico de integración económica, política y cultural.

El hecho de que este fenómeno sea común en las tres ciudades, y en otros contextos de Colombia y de otros países, no debe ocultar su diversidad ni

su dinámica: hoy en día, la diferenciación y la identificación étnicas pasan, según los espacios considerados y en el seno mismo de sus poblaciones, por modos operatorios diferentes que, lejos de ser estáticos se encuentran en rápida evolución.

Así, en Cali las percepciones de la alteridad y de la discriminación hacia la población negra varían según las clases sociales. Bastante ligadas a la fuerte segregación residencial de los estratos más pobres, son interpretadas entonces como una verdadera exclusión territorial sobre una base racial. Al contrario, no están asociadas al espacio residencial en el caso de la clase media negra y mulata, más sensible a las discriminaciones en el mercado de trabajo, en el sistema escolar y en los espacios urbanos de circulación y de consumo. Que esos desafíos sociales no hayan logrado expresarse en el plano electoral —el fracaso de los candidatos apoyados por el Proceso de Comunidades Negras en las últimas elecciones locales de Cali y en el departamento dan fe de ello— no impide su traducción política mediante el movimiento asociativo de los barrios y en el seno de las Juntas Administradoras Locales (JAL), en términos de la definición de prioridades de acción social y de repartición del gasto público por ejemplo.

En Cartagena, las dimensiones residencial y socioeconómica de la discriminación racial parecen estar relativamente ocultas por la pregnancia real del mestizaje, pero también y sobre todo por su papel de paradigma fundador de la identidad cultural y de la imagen turística de la ciudad (se podría analizar en los mismos términos la imagen de armonía multi-racial que Cali promueve cuando se declara a sí misma como ciudad festiva, capital de la salsa). Pero las iniciativas que favorecen el reconocimiento y la valoración de los aportes históricos y contemporáneos afrocolombianos al crisol cultural de la ciudad caribeña (palenqueros, cabildo), más allá de las opciones identitarias más o menos radicales —incluso excluyentes— que las caracterizan, conllevan a la subversión del orden racial implícitamente asociado con el modelo de “mestizaje” que combina integración y discriminación, promovido por la clase dominante blanca. ¿Hasta cuando este cuestionamiento permanecerá limitado al campo cultural?

Por último, Tumaco es sin duda el ejemplo más significativo de las contradicciones y de las perspectivas abiertas por la “vía multiculturalista” en la

cual se empeña el país. La introducción de la problemática étnica, más que en los otros dos contextos y debido a la proximidad de un territorio rural directamente comprometido por la Ley 70, participa de una lógica de discriminación positiva que beneficia a amplios sectores de población negra, aunque no a su componente urbano. Por otra parte, la historia de la ciudad muestra cómo la identidad local tumaqueña contemporánea integra a la mayoría negra de la población paralelamente a un proceso de pauperización y marginalización socioeconómica y política duradera; de ahí que el sentimiento de exclusión se vuelva constitutivo de las identidades “negras” regionales tanto rurales como urbanas.

La visión en perspectiva de los tres contextos conduce a una última conclusión, esta vez de alcance más general. Si es un hecho que la existencia –probada o percibida– de una dimensión racial irreductible en la segmentación residencial, económica, social y cultural de la ciudad es el soporte para construcciones de identidades individuales y colectivas “racializadas”, estas últimas no son por eso, en la mayoría de los casos, la expresión de una crispación étnica, de un repliegue sobre una comunidad excluyente. En la relación múltiple y compleja con la ciudad que determina las percepciones de alteridad (aspiración a un acceso a los bienes, servicios y mercados urbanos, prácticas de uso residencial, económico y social de la ciudad, posicionamiento frente a las prácticas sociales y espaciales del otro, etc.), la afirmación de una identidad afrocolombiana participa, al contrario, en una reivindicación de ciudadanía durante mucho tiempo negada o devaluada por tratarse precisamente de una identidad diferente, pero nunca expuesta. En todo caso, no vemos, en ese proceso, contradicción entre el principio de ciudadanía universal y la reafirmación de un particularismo étnico; al contrario, observamos una tensión creadora, en el sentido de que esta nueva visión nos obliga a renovar nuestro modo de comprender el mundo. La ciudad es, en este respecto, un “laboratorio” revelador; si seguimos a I. JOSEPH: “Es en el corazón mismo de la tensión entre proximidad espacial y distancia social y étnica que ella (la ciudad) hace trabajar el lugar común. Las ciudades no son ni dispositivos de asimilación ni operadores de integración. Al contrario, producen la disimilitud, la segregación y la exclusión. Simplemente, por la visibilidad que imponen a esos procesos de distanciamiento y por el hecho de exponer los umbrales que fabrican, ellas dramatizan los problemas

de la igualdad en el acceso, de la pertenencia comunitaria y de la ciudadanía: las ciudades pasan esas nociones por el tamiz de la crítica pública, multiplican a los mediadores y a las mediaciones” (JOSEPH, 1994: 7).

Hoy en día, desde el punto de vista de los líderes del movimiento negro, el combate por el reconocimiento étnico se juega en la ciudad, es decir, allí donde no hay relación evidente entre identidad y territorio, allí donde cada uno se define por sus propias prácticas, sin definición exógena estable ni “comunidad” instituida por el Estado o las legislaciones (como el INCORA o la Ley 70 en el medio rural). Para los responsables encargados de concebir políticas públicas, la ciudad obliga a imaginar nuevos modos de gestión de la diferencia, reivindicados bajo el ángulo de una competencia más igualitaria en torno al espacio urbano y sus recursos (empleo, vivienda, entretenimiento, servicios). Tanto los actores sociales como las instituciones buscan desde ahora una nueva definición del ser-en-la-ciudad, donde el reconocimiento de la etnicidad y de la dimensión racial se combinaría con las reivindicaciones ciudadanas más globales y compartidas por el conjunto de la población (demanda de mayor participación política, exigencia de respeto, dignidad, etc.).

BIBLIOGRAFÍA³⁵

- AGIER, M. *L'invention de la ville*, Paris, Archives Contemporaines, 1999.
- BARTH, F. “Les groupes ethniques et leurs frontières”, en *Théories de l'ethnicité*, Poutignat Ph., Streiff-Fenart, Paris, PUF, 1995.
- BRUN, J. y C. RHEIN (dirs.), *La ségrégation dans la ville*, Paris, L'Harmattan, 1994.
- CHAPOULIE, J.-M. *La tradition sociologique de Chicago: 1862-1961*, Paris, Le Seuil, 2001.
- CHIVALLON, C. “Les espaces de la diaspora antillaise au Royaume-Uni. Limites des concepts socio-anthropologiques”, *Les Annales de la Recherche Urbaine*, n.º 68-69, 1995.

35 No figuran aquí las referencias bibliográficas que tratan específicamente sobre Colombia: éstas se encuentran en la bibliografía general ubicada al final de la obra.

- CHIVALLON, C. "Du territoire au réseau: comment penser l'identité antillaise", *Cahiers d'Etudes Africaines*, XXXVLL (4), n.º 148, 1997.
- CUCHE, D. *Pérou Nègre*, Paris, L'Harmattan, 1981.
- GILROY, P. *The Black Atlantic. Modernity and Double Consciousness*, London, Verso, 1993.
- HANNERZ, U. *Explorer la ville. Eléments d'anthropologie urbaine*, Paris, Les Éditions de Minuit, 1980.
- JOSEPH, I. "Le droit à la ville, la ville à l'oeuvre. Deux paradigmes de la recherche", *Les annales de la recherche urbaine*, n.º 64, 1994.
- JOSEPH, I. "Reprendre la rue", en *Colloque de Cerisy (textes réunis par I. Joseph)*, *Espace public et culture dramaturgique*, Paris, Editions Recherches-Plan Urbain, 1995.
- LESTAGE, F. "La 'adaptación' del migrante, un compromiso entre varias representaciones de sí mismo", *Scripta Nova*, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, n.º 94 (16), 1.º de agosto de 2001.
- MARTUCELLI, D. *Sociologies de la modernité*, Paris, Folio Essais, 1999.
- MITCHELL, J. C. "The situational perspective", en *Cities, Society and Social Perception. A Central African Perspective*, Oxford, Clarendon Press, 1987.
- MONNET, J. "La ville comme OSSI (Objet Socio-Spatial Identifiable). Les catégories de l'expérience et de la connaissance de l'espace urbain", en G. CAPRON y J. MONNET (eds.). *L'urbanité dans les Amériques. Les processus d'identification socio-spatiale*, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, Villes et Territoires, n.º 14, 2000.
- MONNET, J. "Las escalas de la representación y el manejo del territorio", en B. NATES CRUZ (comp.). *Territorio y Cultura, del campo a la ciudad. Últimas tendencias en teoría y método*, Abya-Yala, Universidad de Caldas y Alianza Colombo-Francesa, 2001.
- PARK, R. E. *Race and Culture, The Collected Papers of Robert Ezra Park*, vol. 1, Glencoe, Illinois, The Free Press, 1950.
- WACQUANT, L. "Three pernicious premises in the study of the American gueto", *International Journal of Urban and Regional Research*, vol. 21, n.º 2, junio, 1997.

CAPÍTULO QUINTO

*Violencias y ciudades**

OLIVIER PISSOAT (COORD.)

OLIVIER BARBARY

Colombia es un teatro de violencias cuya acumulación ha creado una situación comparable a una guerra. A la lucha entre el Estado y las más antiguas guerrillas de América Latina, han venido a sumarse los narcotraficantes y, más recientemente, los paramilitares, quienes han alcanzado tal poder que hoy reclaman su participación oficial en las negociaciones entre el gobierno y la insurrección armada. En este contexto, marcado también por la urbanización creciente de la población, las grandes ciudades se convierten en nuevos soportes para el desarrollo de la violencia. ¿Cómo repercuten en las metrópolis los combates librados por los distintos contrapoderes insurreccionales? ¿En qué medida responde igualmente la violencia a las especificidades del medio urbano y a las condiciones socioeconómicas de sus habitantes? Resulta necesario detenerse en algunas condiciones metodológicas ineludibles antes de ofrecer elementos para responder esas dos preguntas.

La violencia es un término usado para describir situaciones muy diversas. En ausencia de una definición común y limitada, la polisemia del término genera múltiples interpretaciones, incluso contradictorias. F. GAITÁN lo subraya a propósito de las investigaciones sobre el tema en Colombia: los acontecimientos y los factores explicativos considerados son tan diferentes que terminan sin referirse todos al mismo fenómeno (GAITÁN, 1997: 86 y 87). Hay que reconocerlo, las clasificaciones de las distintas formas de violencia son numerosas, variables, con frecuencia están imbricadas y en ocasiones no responden más que a la necesidad específica de quien las aplica. En lo que nos concierne, queremos centrar nuestro trabajo sobre la violencia intencional, incluso si este propósito general no excluye la posibilidad de conjugar categorías más finas¹ para su análisis. Bajo esta óptica, retendremos como indicador principal su manifestación extrema: el homicidio voluntario, medido por los registros del

* Con la colaboración de JUAN CARLOS ROJAS ARIAS.

1 Nuestra terminología para la definición de formas graduales de violencia intencional es la siguiente. Violencia homicida: homicidios voluntarios fuera del suicidio. Gran bandiderismo: acciones delictivas de grupos de mafiosos, en niveles económicos altos. Delincuencia común: delitos que no son homicidios en niveles económicos menores, cometidos por individuos aislados o agrupados en bandas. Delincuencia menor: delitos en niveles económicos débiles, en general sin atentar contra la integridad física.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE (1982-1998). Más allá de su validez estadística (tratada en el anexo 2), esta elección es resultado de la constatación –unánime en Colombia– que la solución de los conflictos mediante la eliminación del “oponente” es una de las características de la violencia nacional. El homicidio, primera causa de mortalidad de los hombres adultos en el país, se convierte en problema nacional. En este punto, seguimos la aproximación del conjunto de los investigadores colombianos sobre el tema. No obstante, si la pertinencia de este indicador no representa duda alguna para la comunidad científica, parece que los niveles objetivos de violencia, tal como se expresan en el número de homicidios, pueden no coincidir con la percepción de la población. La frecuencia de algunas formas menos graves de violencia, desde la delincuencia común hasta la incivilidad, provoca un sentimiento de inseguridad entre la población que debe ser analizado. Por esta razón, completaremos los hallazgos derivados de la violencia letal mediante los resultados sobre los delitos de robo, que reflejan mejor esta otra dimensión del problema. Al seguir esta perspectiva, queremos evitar la mezcolanza que consiste en atribuir el conjunto de las manifestaciones de violencia a las modalidades y dinámicas específicas del conflicto armado, que tanto se impone en Colombia. Incluso si resulta comprensible, esta confusión desemboca, en el peor de los casos, en el sensacionalismo, y en el mejor, en análisis que subrayan, exclusivamente y en todo lugar, la confrontación entre el Estado, las guerrillas, los narcotraficantes y los paramilitares. La distinción entre el homicidio y el *continuum* de las formas más reducidas de violencia nos conducirá a un diagnóstico más matizado.

En Colombia, como en otros lugares, la agenda política influye exageradamente en el debate público sobre la violencia y la inseguridad: el aumento real o supuesto de la criminalidad se ha convertido en el argumento fundamental para el tratamiento de los problemas sociales y la seguridad pública². Por eso, más que en otros dominios de las ciencias sociales, la explotación de los datos requiere una vigilancia redoblada. Respecto a la delincuencia, el investigador

2 L. WACQUANT denunció de tiempo atrás, en los países desarrollados, esta lógica oculta que constituye no sólo un objetivo electoral sino que reenvía a la doctrina de la retirada del Estado social y el reforzamiento del Estado punitivo.

dispone de diversas fuentes, cada una en el origen de diferentes sesgos, tanto por causa de las dificultades metodológicas propias de la observación de esta compleja realidad, como en razón de los marcos conceptuales con frecuencia más determinados por el uso ideológico de los datos que por criterios del análisis científico. Cuando los estudios se apoyan en registros de administraciones responsables de la seguridad, no es la violencia real lo que captan. Al evaluar el fenómeno “aparente” (es decir, conocido e inventariado por los servicios policiales o judiciales), esas estadísticas sólo muestran el trabajo cumplido por los organismos del Estado y su evolución. A este obstáculo metodológico se unen otras incoherencias ligadas a los indicadores utilizados para la violencia no homicida. Por tanto, preferimos no usar los datos relativos a la delincuencia constatada más que a título de orden de magnitud. Siguiendo recientes trabajos de criminología, privilegiaremos en nuestro análisis los resultados obtenidos en una encuesta realizada a las familias: la emprendida en Cali en 1998, en el seno del programa de investigación CIDSE-IRD (anexo 2).

Por otro lado, parece que el problema de la inseguridad —experimentada o presentida— es común en el conjunto de metrópolis del planeta. La vida cotidiana de los ciudadanos estaría cada vez más afectada por la incivilidad, los desórdenes, las exacciones, en una palabra, las “violencias” que, por añadidura, serían específicas del medio urbano. A pesar de la recurrencia en el uso de la noción de “violencia urbana” —en los medios de comunicación y en numerosas obras especializadas donde se tratan otros aspectos de la ciudad—, su rigurosa definición todavía es una tarea pendiente. Según L. WACQUANT, su uso no siempre reposa sobre un fundamento científico: “puro artificio burocrático desprovisto de coherencia estadística y de consistencia sociológica”; se trata de una noción “sobre la cual cada uno puede establecer lo que le convenga dado que no corresponde casi a nada” (WACQUANT, 1999: 49 a 57). En una concepción “a la francesa”, la “violencia urbana” es de hecho un término genérico que designa a los problemas causados por grupos de jóvenes surgidos de las afueras desfavorecidas (MACÉ, 1999: 59 a 64)³. Circunscrita

3 L. BUI-TRONG, comisario principal de la Dirección Central de Información General, limita más esta definición, y entre los actos delictivos imputados a este sector de la población, insiste en los perpetrados contra las instituciones (BUI-TRONG, 1998: 215 a 224).

de esa manera, la “violencia urbana” no incluye pues los crímenes o delitos debidos al gran bandolerismo, aunque sean cometidos frecuentemente en la ciudad, y corresponde a formas de delincuencia localizadas *a priori*, espacial y socialmente. En Estados Unidos los niveles de violencia superan a los vividos en Europa⁴. A pesar de esto, los debates estadounidenses tienden a imponer una problemática común al conjunto de los países desarrollados, en la cual Estados Unidos puede representar una situación extrema para evitar, pero al mismo tiempo el modelo a imitar en materia de represión, adaptándolo a otros contextos. Testimonio de esto es la generalización de las políticas llamadas de “cero tolerancia”. ¿Existe, en el contexto colombiano, alguna pertinencia de la acepción que tiene la noción de violencia urbana en los países desarrollados? Se puede poner esto en duda, pues a pesar de la similitud del término, los especialistas colombianos no han ofrecido una definición precisa de lo que también llaman “violencia urbana”⁵. Es cierto que la violencia en la ciudad ha sido estudiada a nivel nacional desde hace apenas quince años, a diferencia del conflicto armado, predominantemente “escudriñado” y convertido con el tiempo en un campo tradicional de la investigación (PISOAT y GOUËSET, 2002). Al igual que en Europa, la violencia en las ciudades es presentada por los investigadores como un fenómeno multidimensional con límites imprecisos pero con una atención suplementaria dirigida hacia los perjuicios experimentados por las personas en la vida cotidiana. La “violencia urbana” es entonces una categoría práctica muy general cuya única condición es topológica: su especificidad se reduce a agrupar las exacciones perpetradas en las ciudades, sin que algún tipo específico de violencia sea particularmente designado o dejado de lado. Las características principales del problema, dada su heterogeneidad, son todas sus modalidades, que son consideradas tanto en las ciudades como en el resto del país. Y privilegiar los hechos del derecho común corresponde a la percepción compartida por toda la población⁶.

4 Cfr. los balances sucesivos establecidos por S. BODY-GENDROT (1993, 1998, 2001).

5 Los investigadores más reconocidos, A. CAMACHO y A. GUZMÁN, se preguntan al respecto en los preámbulos de casi todas sus publicaciones.

6 “En el lenguaje cotidiano, la violencia urbana es vista como difusa, de la delincuencia, o como violencia común” (CAMACHO y GUZMÁN, 1997: 26). En ausencia de una definición

Nuestro trayecto estará guiado por la articulación y la discusión de dos paradigmas. El primero, reductor e incluso oculto, el de la “violencia urbana” en su definición típica de los países desarrollados, que señala como objeto problemático y social a la delincuencia juvenil en las zonas “sensibles”. El segundo, propio de Colombia, se apoya sobre la constatación de una “guerra contra la sociedad”, la cual se encuentra “como rehén” en manos de los protagonistas del conflicto armado (PÉCAUT, 1999a). Insistiendo en las interacciones que vinculan a todas las modalidades de violencia homicida (homicidio y no homicidio, en la ciudad y en el campo), esta interpretación puede conducir a una aproximación unívoca a los fenómenos, puesto que algunos son –más de lo que se supone– tal vez independientes de los otros. Por una parte, nos parece pertinente separar analíticamente a la delincuencia de la violencia “política”, pues esta separación permite evaluar de nuevo el particularismo colombiano que con frecuencia conduce –con un gran refuerzo de fórmulas de choque– a fortalecer la imagen caricaturesca del país. Por otro lado, compartimos las críticas a la noción de “violencia urbana”, pues ellas denuncian el tratamiento represivo y con un blanco social determinado, de una supuesta patología de los jóvenes.

Para abordar esta problemática rápidamente bosquejada, comenzaremos por establecer un diagnóstico que describe el “comportamiento” de las ciudades en el contexto de la violencia nacional, esta última situada de nuevo bajo una rápida comparación internacional. En una segunda parte, centrada sobre la violencia homicida, intentaremos evaluar las particularidades comunes a las metrópolis, tomadas globalmente y luego en sus especificidades, caso por caso. La tercera parte tratará sobre la delincuencia menor e identificará sus determinantes en Cali. En concreto, el estudio propondrá un diagnóstico espacial de la violencia homicida en las ciudades desde 1982 y un balance estadístico sobre la delincuencia en Cali en 1998. Con estos resultados empíricos intentaremos, por una parte, identificar el impacto de los enfrentamientos “políticos” sobre la ciudad, donde mostraremos que la violencia homicida en

precisa de la “violencia urbana”, y de acuerdo con CAMACHO y GUZMÁN cuando concluyen que “no parece muy productivo embarcarse en debates que tienen más de semántica que de capacidad teórica” (ibíd.: 27), preferimos emplear la expresión “violencia(s) en la ciudad”.

Cali y Bogotá está marcada sobre todo por las dinámicas de penetración del gran bandolerismo en la ciudad; por otra parte, veremos que el análisis de los factores de exposición a la pequeña delincuencia en Cali vuelve a poner en el orden del día las interpretaciones sociológicas ligadas a la ruptura del lazo social y la exclusión económica.

I. LA AMPLITUD DE LAS VIOLENCIAS EN COLOMBIA

De 1992 a 1997 el número de homicidios se redujo un 25% en Colombia. En esta fecha, Colombia permanecía bajo el yugo de una violencia extrema, aunque no era el único país del mundo en esa situación. La dificultad para captar la violencia proviene de su característica mayor, que es la heterogeneidad, generada esencialmente por las interferencias debidas al tráfico de drogas y al conflicto armado. La víctima principal es la población civil. Lo mostraremos en las ciudades, cada vez más afectadas no sólo directamente por los enfrentamientos armados sino por la extensión al medio urbano de las prácticas del gran bandolerismo, y en el campo, donde no existe otra alternativa que la aceptación de la soberanía de las facciones en lucha o la huida. Las ciudades más grandes se convierten así en el destino para un nuevo tipo de éxodo rural por parte de los *desplazados*, para quienes las escasas ayudas de inserción no logran librarlos de sus estigmas. Si es la sociedad entera la que ahora se siente amenazada, es importante sin embargo interrogarse sobre el papel efectivo del conflicto armado en la generalización del sentimiento de inseguridad.

A. LAS TASAS COLOMBIANAS DE HOMICIDIO EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

Los datos del *Demographic Yearbook* indican que de 1955 a 1969, las tasas de homicidio en Colombia formaron parte constantemente de las cinco más elevadas del mundo (LOSADA y VÉLEZ, 1988: 38 a 41), con un promedio de 31 hpcmh (homicidios por cien mil habitantes)⁷. Durante los años 1970, la

7 Una país sería “violento” cuando su tasa supera los 10 hpcmh (DEAS y GAITÁN, 1995:

cifra descendiendo para situar al país entre el quinto y el décimo lugar en el rango mundial, con un promedio de 20 hpcmh durante los diez años, es decir, cuatro veces más que el de los países europeos, pero dos veces menos que el de la dictadura chilena de fines de la década (45 hpcmh). En cambio, durante los años 1980, Colombia es clasificada en el trío que va a la cabeza, con una tasa creciente sin cesar. Situada después de El Salvador y Guatemala entonces en guerra, hasta 1984, Colombia alcanza el primer lugar hacia fines de la década⁸. América Latina es un continente particularmente violento, e incluso en ese contexto Colombia alcanza la “cumbre”, superando por tres veces el promedio subcontinental. A fines de los años 1980 Colombia presenta una tasa dos o tres veces más alta que la de Venezuela, cuyo nivel de desarrollo es similar a la de grandes países como Brasil o México, e incluso cinco veces más elevada que la de Estados con estructuras sociales semejantes, pero más pobres, como Perú o Ecuador.

Un paralelo idéntico en 1994 (Naciones Unidas, 1994) permite apreciar evoluciones recientes. Si la violencia homicida aumenta en la inmensa mayoría del país, la jerarquía del período precedente es globalmente respetada: Asia, donde en verdad pocos países han sido objeto de inventarios, permanece como la región más protegida, seguida por Europa, Estados Unidos y por último Latinoamérica, dos veces más violenta que el resto del mundo. Sin embargo, aparecen dos zonas suplementarias anteriormente mal o no inventariadas. Se trata en primer lugar del continente africano, que se encuentra en el segundo lugar. La situación africana legitimaría una aproximación con América Latina, como se hizo en 1998 en un estudio del Interregional Crime and Justice Research Institute⁹. La segunda zona, en adelante presente en las estadísticas internacionales, abarca a los países surgidos del desmembramiento de la

212) y estaría en situación de “guerra” cuando tiene una tasa superior a 50 hpcmh (RUBIO, 2000: 158).

8 Las encuestas internacionales de victimización o las cifras de la INTERPOL confirman la jerarquía propuesta aquí, fruto de la combinación y verificación de las cifras ofrecidas por diferentes trabajos de las Naciones Unidas que desembocan en los inventarios de cincuenta países a mediados de los años 1980 y de más de cien a mediados de los años 1990.

9 Fuente: [www.unicri.it]

Unión Soviética, donde la violencia, invisible hasta entonces en este tipo de inventarios, parece muy reciente. Es al menos el caso para Rusia, cuya tasa se ha más que duplicado en relación a la de los años 1980 (CHESNAY, 1999: 128). Clasificada después de las Bahamas, Colombia conserva en 1994 –según las Naciones Unidas¹⁰– un puesto preponderante con una tasa de 76 hpcmh. Para ilustrar este punto retomaremos el comentario evocador de J. A. BEJARANO (1997: 15), quien utiliza otras fuentes pero cuyos resultados son corroborados aquí: la tasa departamental más baja de Colombia, obtenida por el Chocó, supera la de otras naciones de América del Sur, y permanece en un nivel diez veces superior al de los países más pobres del mundo, como Sudán.

Este breve panorama internacional muestra que la repartición y la evolución de los homicidios en el mundo siguen tendencias geográficas fuertes y duraderas. También permite observar “nuevas” regiones cuya situación parece agravarse o convulsionarse, como las de algunos países de la antigua Unión Soviética, y especialmente de África, que en su zona meridional se parece a Colombia y supera los niveles registrados en varios países latinoamericanos. Colombia se distingue por una tasa de homicidios que permanece como una de las más elevadas del planeta desde hace casi cincuenta años. No obstante, esta característica excepcional debe ser relativizada mediante dos consideraciones: en primer lugar, la disminución de la distancia que la separa de los “siguientes”; en segundo lugar, y sobre todo, la carencia de datos o de fuentes cronológicas fiables sobre algunos países de Asia y África, que impide una comparación rigurosa en el largo plazo.

B. VIOLENCIAS HETEROGÉNEAS: CONFLICTO ARMADO Y TRÁFICO DE DROGAS

El último medio siglo constituye en Colombia un momento singular de renovación de la violencia, concentrado en dos períodos particularmente asesinos. Uno de ellos, objeto de nuestro estudio, dura desde 1980; el otro, llamado *La Violencia*, se desarrolla alrededor de los años 1950, cuando se enfrentaron

10 En cambio, las estadísticas del DANE indican un descenso sensible en las tasas de homicidio a partir de 1992 (tabla 5.1).

liberales y conservadores, los dos partidos políticos tradicionales. Entre estos dos momentos, la violencia se atenuó y permaneció relegada a las zonas periféricas donde se implantaron las guerrillas, en su mayoría constituidas a partir de los núcleos de resistencia campesina creados durante los años 1950. De *La Violencia* al fenómeno contemporáneo de “nueva violencia” que viven los colombianos, las continuidades son patentes. El segundo período comienza con la decisión de las organizaciones guerrilleras de redoblar y desplegar de nuevo sus frentes, y se amplifica con el surgimiento de quienes quieren imponerse como sus más temibles adversarios: los paramilitares. Frente a esta recurrencia, en la cual muchos colombianos ven la reproducción ineluctable de un destino que compone la trama de la historia nacional, proliferan, entre algunos observadores, interpretaciones culturalistas o esencialistas de lo que sería “el caso colombiano”.

Pero las discontinuidades son igualmente profundas: contradicen esas tesis y ayudan a comprender mucho mejor la situación actual. El giro que se produjo en los enfrentamientos no puede comprenderse más que al integrar un elemento nuevo y capital: el auge del comercio de estupefacientes. Esta ruptura no se produjo en forma repentina, y el peligro que implicaba esa nueva economía sólo fue percibido tardíamente por las autoridades y la población. De hecho, durante los años 1970 la sociedad colombiana se mostró bastante tolerante hacia las mafias de la droga, hasta el punto de considerarlas como una “clase emergente” (CAMACHO, 1993: 49 a 53) y los principales “padrinos” alcanzaron el rango de las más grandes fortunas del país, con todo el poder que tal estatuto puede conferir. Cuando, a principios de los años 1980, se elevaron voces contra el ascenso del poderío del cartel de Medellín, los narcotraficantes irrumpieron entonces en las primeras instancias del escenario nacional al eliminar a cualquiera que osara pronunciarse contra sus maniobras. Esta táctica de asesinato selectivo explica el desarrollo del reclutamiento de asesinos a sueldo entre los jóvenes delincuentes de las periferias urbanas. A fines del decenio, a la presión ejercida por el gobierno y a la aplicación del tratado de extradición firmado con Estados Unidos, los jefes mafiosos responden con una “guerra total” contra el Estado a través de atentados indiscriminados que producen cientos de víctimas. Al mismo tiempo, el alcance político de los narcotraficantes va más allá de su enfrentamiento con el Estado, cuando

conforman milicias que encarnan su visión “neonazi de la miseria” (SÁNCHEZ, 2000: 277) y su odio feroz a la “subversión”. A mediados de los años 1980, financian la “guerra sucia”, emprendida simultáneamente en dos escalas, con la complicidad de militares y policías. En las ciudades, cumplen un papel mayor en la propagación de los escuadrones de la muerte, que tienen el objetivo anunciado públicamente de realizar una “limpieza social” de la ciudad, mediante la ejecución sistemática de individuos marginados o abandonados por la sociedad. En el plano nacional, fundan los más importantes comandos paramilitares con el apoyo de grandes terratenientes que quieren, como ellos, escapar al pago de los impuestos revolucionarios y permanecer como amos de sus tierras. Las víctimas de estas milicias paramilitares fueron, en primer lugar, los militantes (o supuestos militantes) de la izquierda legal, política o sindical, metódicamente eliminados durante la segunda mitad de los años 1980. Después, a medida que los magnates de la droga compraban nuevas haciendas y posesiones (REYES, 1996), las milicias se multiplicaban y reforzaban hasta el punto de estructurarse hacia 1994 como “un verdadero ejército anti-guerrilla” (PÉCAUT, 1999a: 11), que se volvió cada vez más autónomo mediante la explotación lucrativa de los cultivos ilícitos que controlaba.

Sin embargo, los “narcos”, sus aliados y sus auxiliares no fueron los únicos grupos bélicos que se beneficiaron del “dinero sucio”. Gracias a las colusiones más o menos temporales, al origen de las cuales se encuentran formidables ganancias derivadas de la venta de estupefacientes, los frentes guerrilleros —establecidos en las principales zonas de producción de coca y de amapola— también se han beneficiado, desde hace cerca de quince años, de este recurso financiero providencial para aumentar sus efectivos, mejorar su armamento e intensificar sus acciones. Pero eso no es todo. La economía de la droga incluso contaminó el funcionamiento de la Nación colombiana. En primer lugar, extendió su empresa corruptora al conjunto de las instituciones estatales y políticas, al igual que en algunos sectores de la economía como la construcción y el comercio de mercancías y, a largo plazo, provocó una crisis de valores al conmocionar las jerarquías tradicionales y los resortes de la movilidad social. El repudio hacia las antiguas normas es particularmente intenso entre los jóvenes urbanos de los barrios pobres, listos hoy a arriesgar su vida para ingresar en la sociedad de consumo. En rebelión contra la exclusión de

la que son víctimas, estos jóvenes unidos en bandas delincuenciales son fascinados por el fulgurante enriquecimiento de los malhechores más famosos. Con esos modelos, la violencia se ha convertido —a sus ojos— en el único medio para ascender socialmente, en forma inmediata, pese a su eventual precariedad. Así, como lo muestra A. SALAZAR (1998), tanto las exacciones cometidas directamente por las mafias establecidas, como la adopción de la “subcultura del narcotráfico” por esta juventud rebelde (y la atracción por el dinero fácil) —efectos indirectos del gran bandolerismo— aumentan la delincuencia en las ciudades.

C. LA PENETRACIÓN DE LA VIOLENCIA EN LAS GRANDES CIUDADES

Desde los años 1980, nuevos actores se sumaron a los frentes guerrilleros. Las distintas estrategias de todos esos protagonistas generaron formas de violencia heterogéneas que el informe de la Comisión de Estudios sobre la Violencia diferenció formalmente en 1987¹¹. A partir de esta tipología novedosa, por primera vez los expertos han podido evaluar especialmente el peso de la violencia “política”: en verdad, ella no representaría más que entre un 5 y un 15% de los homicidios cometidos en el país.

También es en esta fecha cuando aparece la “violencia urbana” en las categorías identificadas, señalada en primer lugar por su intensidad: “Mucho más que las de los montes, las violencias que pueden matarnos son las de la calle” (ibíd., 18). A continuación los autores insisten en la ambivalencia del fenómeno, que “también proviene de las conductas extremas debidas tanto a la enorme pobreza como a las formas para obtener y proteger la riqueza; de la rebelión como de la dominación; de la intolerancia como de la búsqueda de

11 La afirmación del carácter proteiforme de la violencia en Colombia marca un cambio importante en el paradigma en relación con la tradición anterior, que buscaba una causa única. Pionero en esta nueva aproximación, D. PÉCAUT anticipó muy pronto la multiplicidad de causas de la *violencia*. Después, M. V. URIBE relativiza el peso de las afiliaciones partidistas de los años 1950, para subrayar la escalada prosaica de rencores personales y la venganza de sangre (URIBE, 1990).

reconocimiento” (ibíd., 69). Esta violencia recíproca es entonces juzgada como “no negociable”, porque añade a los hechos ligados a la lucha por el poder y el control del Estado acciones inherentes a las relaciones interpersonales tanto en el dominio público como en el privado. Su solución no reclamaría tanto un acuerdo debatido entre estructuras combatientes como una transformación en la mentalidad de los ciudadanos, sean éstos delincuentes o no.

Semejante balance conduce a matizar la idea de la imposición del conflicto armado sobre la violencia en las grandes ciudades. No se trata de olvidar los “campamentos” establecidos por algunas guerrillas, hacia 1985, en los barrios pobres de las principales aglomeraciones para educar militarmente a los jóvenes reclutados, ni callar sobre el reciente reforzamiento de las milicias emanadas de organizaciones de extrema izquierda o de extrema derecha. Pero, en la mayoría de los casos, no existe un compromiso explícitamente político entre las bandas juveniles prestatarias de servicios a los paramilitares o a las guerrillas (algunas veces de manera concomitante). Su conducta –guardadas las proporciones– puede recordar a la de grupos de jóvenes que causan estragos en otros países (desarrollados o no, con insurrecciones o no), en la medida en que responde a la combinación de actitudes observadas en otras partes: la rabia contra un mundo que los mantiene en la exclusión y la voluntad de acceder a toda costa al éxito material y a los signos exteriores de riqueza (maneras de vestirse, vehículos, etc.). Igualmente, hechos como los crímenes pasionales (donde intervienen la soberbia y el machismo), las riñas asesinas (con frecuencia debidas a estados de intoxicación etílica) o, según la fórmula de S. ADORNO¹² a propósito del Brasil, los “muertos al detalle” (concebidos como la última manifestación de la incivilidad), obedecen –en esta sociedad colombiana en situación de anomia– a lógicas comportamentales, más bien indiferentes a las hostilidades que ocurren a nivel nacional.

No obstante, es necesario volver a la dinámica del conflicto armado y a las prácticas del gran bandolerismo que le están asociadas, para comprender la evolución de la percepción de las violencias en las metrópolis. Los ciudadanos, a la vez compadecidos, indignados y a pesar de todo espectadores impotentes,

12 Citado por PERALVA: seminario “Ciudades y violencias”, Universidad de Toulouse 3, 19 de marzo de 2000.

se han sentido durante mucho tiempo extranjeros a los combates librados en las zonas rurales. En cuanto a las batallas sangrientas entre mafias y a los asesinatos “políticos”, ciertamente concernían a la ciudad, pero apuntaban a objetivos bien identificados: dirigentes o militantes de todo bando. Esta percepción paradójica de una violencia a la vez próxima y distante se modifica radicalmente en la bisagra de los años 1980-1990, durante la ola de atentados perpetrada por los narcotraficantes. El hombre de la calle se sabe entonces como objetivo militar potencial y el miedo se instala en todas las capas de la población. Después de la calma que sucedió al desmantelamiento de los carteles de Medellín y después de Cali, el sentimiento de inseguridad física desciende en las ciudades y es la exposición a los delitos comunes lo que progresivamente genera una nueva aprehensión. La actual estrategia de las guerrillas y los paramilitares, fundada en la coerción, el terror y la implicación de la sociedad civil, cambia la situación de nuevo y en profundidad. Los secuestros realizados en una escala sin precedentes en Colombia (masivos abusos de autoridad en las ciudades, “pescas milagrosas” en las carreteras del país) testimonian una violencia más prosaica practicada por sus actores. Los ciudadanos se sienten hundidos en esta escalada, por lo demás ampliamente difundida en los medios de comunicación, que los toca cada vez más directamente. Es probablemente allí donde se sitúa el punto de ruptura con los años anteriores. Lo que está en causa no es el aumento global del número de víctimas de la violencia “política”. Las cifras ofrecidas por la Comisión de estudio en 1987 no se pueden actualizar para el período reciente, pero los investigadores convienen unánimemente en que: a nivel nacional (al integrar así las zonas rurales donde, al contrario de las ciudades, están muy presentes), los protagonistas del conflicto armado no son responsables más que de una reducida parte de los homicidios y solamente de la mitad de los secuestros. Es por eso que una fracción cada vez más amplia de la población urbana, perteneciente principalmente a la clase media, ahora puede ser objeto de esos actos que golpean la imaginación, restringen todas las formas de libertad y, más aun, se añaden al incremento de la delincuencia ocurrido a principios de los años 1990, y se desarrolla un sentimiento general de inseguridad que a su vez se ha convertido hoy en algo insostenible para el conjunto de la sociedad.

Las guerrillas nunca han tenido la capacidad de introducir el conflicto en las ciudades (ECHANDEA, 2002: 34). Sin embargo, pueden dejar que eso se

crea aprovechando igualmente la “vulnerabilidad de las sociedades modernas” (DAVID, 1999: 81 a 84), especialmente en las áreas urbanas. El bloqueo de las vías de acceso o del aprovisionamiento de energía o de agua es un buen ejemplo de este tipo de combate que, sin necesidad de librar batalla afecta cotidianamente la vida ciudadana e impacta fuertemente a los espíritus. En tal contexto, es seguro que los atentados homicidas cometidos en las metrópolis y en las cabeceras departamentales desde el advenimiento del presidente URIBE en agosto de 2002 llevan la exasperación de los habitantes al colmo. Sin embargo, la toma de conciencia de la amplitud del conflicto armado por parte de la población urbana también supone la llegada continua a las ciudades de “desplazados”, esos migrantes internos desalojados por los combates.

D. LOS DESPLAZADOS, ¿“NUEVO PROBLEMA URBANO”?

En realidad, los desplazamientos forzados son una de las consecuencias más graves de la violencia que causa estragos en Colombia, por el número de personas afectadas y por la brutalidad y profundidad de las rupturas que provocan. El problema no es nuevo y ha ocurrido en las diferentes etapas de la historia del país. Los cálculos sobre los desplazados son recientes¹³ a pesar de todo, y aun fragmentarios: especialmente, no alcanzan a diferenciar los flujos debidos directamente a la violencia, de aquellos cuyos móviles son primero que todo económicos. Según D. MERTEENS (2000), los mejores datos son los de la CODHES (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento)¹⁴. Es posible derivar algunas tendencias generales, a pesar de la enorme diversidad de situaciones consideradas. Entre 1985 y 1998, cerca de dos millones de personas han sido desplazadas, pero el fenómeno experimenta una aceleración considerable durante este período: alrededor de 700.000 personas durante el primer decenio (entre 1985 y 1994), y más de un millón de personas durante los cinco años siguientes (1995-1999)¹⁵. En cuanto al Gobierno colombiano, éste reconoce

13 El primer balance realizado a escala nacional fue el de la Conferencia Episcopal de Colombia, en 1994.

14 [www.codhes.org.co].

15 1995, 89.000; 1996, 181.000; 1997, 257.000; 1998, 308.000; 1999, 228.000; 2000, 317.000; 2001, 342.000; 2002 (enero-junio), 204.000 (CODHES, 2001 y 2002).

una población desplazada de sólo 381.755 personas para el período 1996-1998, es decir, alrededor de la mitad de la cifra expresada por el CODHES.

Esos desplazamientos, de los cuales son responsables –en un 90% de los casos– los actores del conflicto armado¹⁶, tienen como punto de partida las zonas sometidas a los rigores de la guerra. Ocurren como consecuencia directa de los combates, para escapar de la llegada anunciada de los beligerantes¹⁷, o por expulsiones con el fin de apropiarse de las tierras. Además, aunque no todos provienen siempre del mundo agrícola y en ocasiones algunos sean ciudadanos, los desplazados esencialmente son de origen rural. Por otra parte, si bien se han registrado algunos desplazamientos colectivos, generalmente imputables a las acciones de los paramilitares, la inmensa mayoría de los desplazados huyen individualmente o en familia¹⁸. En primer lugar, ellos tratan de instalarse cerca de su antigua residencia y de las redes locales que han tejido. Sin embargo, la persistencia de las persecuciones y la precariedad económica con frecuencia los conducen –a corto o mediano plazo– hacia las cabeceras municipales, departamentales y, finalmente, hacia las metrópolis. A medida que aumentan los flujos evoluciona el espectro de los lugares involucrados: hasta 1995, los municipios de salida permanecían iguales mientras el abanico de lugares de llegada se extendía. Desde 1996, al contrario, se opera una diversificación de las zonas de expulsión y una concentración de los flujos hacia los centros intermedios y las metrópolis.

Las ciudades más grandes son escogidas preferencialmente pues ofrecen la posibilidad de perderse en el anonimato, presentan más oportunidades económicas y un acceso al estatus de víctimas jurídicas y de asistidos sociales que confiere la ayuda pública. Pero si las ciudades son un escape para los enfrentamientos armados, también guardan otras manifestaciones de violencia y de

16 Paramilitares: 47%; guerrillas: 35%; Fuerzas Armadas: 8%. El 10% restante es atribuible a desconocidos, narcotraficantes, milicias, etc.

17 Estos desplazamientos preventivos son hoy mayoritarios (74% de los casos censados en 1997: AGIER, 2003), ocasionados por el miedo, por el peligro de enrolamiento de los hijos o por amenazas directas.

18 Más del 30% de los hogares de los desplazados tiene a una mujer como cabeza de familia, entre las cuales el 40% son viudas (MERTEENS, 1999: 409).

exclusión que afectan sobre todo a la población más vulnerable. Esas condiciones se intensifican para los desplazados que son forzados a reconstruir un proyecto de vida en un contexto desconocido y distante. De hecho, su difícil inserción no sólo proviene de los obstáculos para alojarse (las redes de contactos juegan aquí un papel esencial), o por encontrar la manera de resolver sus necesidades en un mercado de trabajo donde la competencia ha sido acrecentada por la crisis económica (la economía informal, el sector de la construcción y el “rebusque” son sus únicas fuentes de ingreso¹⁹). Igualmente, los desplazados están confrontados a una estigmatización que opera en dos niveles: por haber abandonado su lugar de residencia y su vida anterior, se sospecha que están implicados en uno de los dos grupos principales de la confrontación; por encontrarse en la miseria total, se les atribuye un comportamiento potencialmente violento. Sin embargo, los estudios contradicen esta segunda suposición: no son los inmigrantes recientes quienes generan violencia en las ciudades. Ésta sólo se manifestó con fuerza a partir de finales de los años 1980, mientras el crecimiento urbano causado por el flujo de migrantes se consumó en el decenio anterior (caps. primero y segundo). Los desplazados, que “no son otra cosa que individuos comunes confrontados a situaciones anormales, encerrados en una lógica de lucha permanente y no deseada, de supervivencia y de resistencia” (OSORIO, 2002: I y II), son entonces, por distintos conceptos, las víctimas “por excelencia”: primero, por la violencia de los actores armados y, luego, por la mirada que los estigmatiza como un “nuevo problema urbano”.

E. ¿UNA VIOLENCIA GENERALIZADA?

En esta primera parte hemos planteado la necesidad de hacer una distinción de las diferentes formas de violencia según sus manifestaciones (homicidio, gran bandolerismo, delincuencia menor...), sus contextos (rural, urbano) y sus motivaciones (conflicto armado, tráfico de drogas, intolerancia, etc.). Pero estas clasificaciones útiles para el análisis se muestran insuficientes, tanto más

19 Por lo general, las mujeres encuentran trabajo rápido (empleadas domésticas, vendedoras ambulantes, etc.). Los hombres, cuyas competencias raramente están adaptadas al mercado urbano, son más dependientes de los dispositivos de ayuda del Estado o de las ONG.

cuando interfieren los fenómenos entre ellas y se refuerzan mutuamente. Las múltiples y cambiantes conexiones que se establecen entre los actores impiden descomponer con precisión los hechos, según si se inscriben en el campo político, económico o social²⁰. ¿Dónde se detiene “la violencia política” y dónde comienza la delincuencia “económica” o la “violencia social”, en un país que no ha resuelto las injusticias que legitimaron el nacimiento de la “rebelión” hace más de 30 años? ¿En qué medida intervienen la intolerancia exacerbada o la venganza personal en el paso al acto violento? ¿De qué modo pesan los tormentos económicos experimentados por los más desfavorecidos, cuando se sabe que las armas son un “oficio” que se les ofrece bajo forma asalariada, cuya afiliación no es nada definitivo y no está dictada más que por las circunstancias? Estas preguntas pueden conducir a la constatación de una violencia “generalizada”, en el sentido planteado por D. PÉCAUT “cuando diversos fenómenos de violencia entran en resonancia y definen el contexto de la mayoría de interacciones colectivas” (PÉCAUT, 1996: 226). En esta perspectiva puede subsistir, incluso implícitamente, la idea de una preponderancia del conflicto armado sobre la dinámica de conjunto de las violencias en Colombia.

Nosotros pensamos que la población colombiana no es afectada uniformemente. El clima de agresividad difusa puede interpretarse como una reacción a una vida cotidiana bajo tensión, pero los pasos al acto responden sobre todo a motivaciones cuyo origen es un objeto a investigar en el dominio socioeconómico, en el seno de una sociedad donde reinan la iniquidad y la impunidad. Por otra parte, mientras que en el pasado la violencia estaba circunscrita sobre todo a las zonas rurales y a los frentes pioneros, desde hace quince años las ciudades han sido igualmente afectadas. De ahí también proviene la generalización expresada por la mayor parte de los especialistas, quienes coinciden en describir un país en adelante golpeado en su conjunto por la violencia política. Pero la violencia en las ciudades permanece, en su mayor parte, como un fenómeno imputable a otros actores, distintos a los del conflicto armado. Hoy en día, las guerrillas sólo han logrado establecer en las ciudades redes

20 Construida a partir de la lectura de trabajos colombianos, esta categorización es actualmente la del Banco Mundial. El primer tipo de violencia sería producido por los insurgentes de todos los bandos y partidos; en el segundo se incluyen las acciones del gran bandolerismo y la delincuencia; el último corresponde a la esfera privada (MOSER y SHRADER, 1999).

limitadas de agentes cuya misión esencial se limita a un apoyo logístico para las columnas que operan en las zonas rurales. A pesar de los recientes atentados, mortales, espectaculares y simbólicos por la elección de sus blancos, el grueso del tributo pagado por las ciudades a la violencia homicida es responsabilidad de organizaciones delincuenciales desprovistas de móviles políticos.

II. LA DINÁMICA ESPACIAL DE LOS HOMICIDIOS

La situación colombiana es tal que “los enfrentamientos y las interferencias que la caracterizan pueden suscitar un contexto que sustituye al contexto inicial” (PÉCAUT, 1996: 245). Así se establece un proceso de auto-mantenimiento de las rivalidades, que tiene como consecuencia una fuerte inercia espacial de la violencia. La persistencia del fenómeno en un mismo lugar también constituye un elemento tan significativo como el grado que alcanza. Es entonces el estudio simultáneo de estos dos criterios (intensidad y duración) lo que mejor da cuenta del impacto de la violencia en los espacios afectados. En la distribución y evolución de los números y las tasas de homicidio observadas hasta 1998, aparecen los dos principales factores estructurantes de la geografía de la violencia en Colombia: la densidad de la población y la de los recursos económicos en las zonas rurales. Las metrópolis (Bogotá, Medellín y Cali) tienen, en la evolución de las estadísticas nacionales, un papel preponderante pero diferenciado que merece un examen particular. A escala intraurbana, la comparación entre Bogotá y Cali muestra algunas regularidades en la temporalidad, las características de las víctimas y la repartición espacial de los homicidios. Por último, al hacer una comparación internacional con otras capitales, Bogotá no merece su imagen de ciudad afectada por una violencia paroxística.

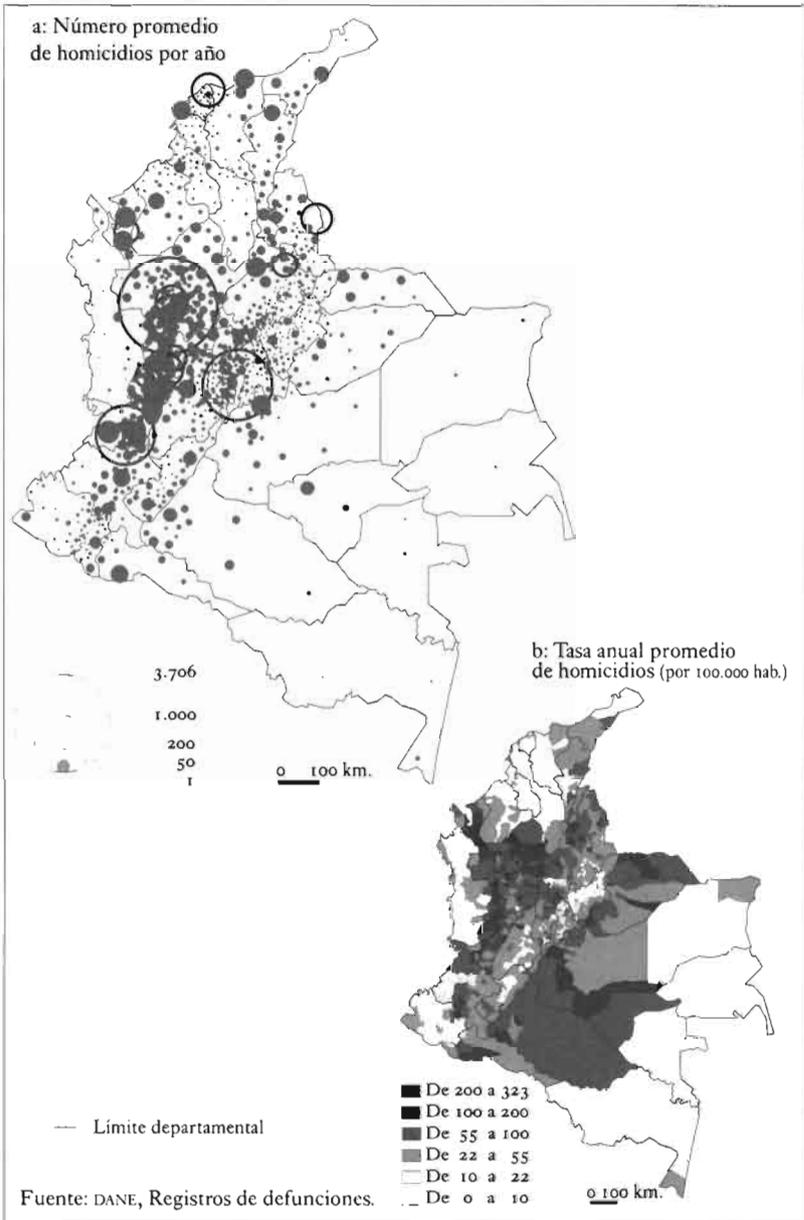
A. LA IMPLANTACIÓN DE LOS HOMICIDIOS: POBLACIÓN Y RECURSOS COMERCIALES

Observada bajo el ángulo del número de hechos perpetrados (mapa 5.1a), la distribución de los homicidios por municipio traduce las estructuras elementales del poblamiento del territorio y arroja luz sobre la intensidad del problema en algunas ciudades. La correlación global entre número de habitantes y nú-

mero de homicidios no obstante se contradice en las tres primeras aglomeraciones del país, con una importancia desproporcionada de los homicidios en Medellín, mientras que su número es mucho menor en Bogotá y Cali. En la sección siguiente volveremos sobre estas diferencias. Por supuesto, es necesario razonar a través de tasas para completar esta visión (mapa 5.1b). El mapa de intensidad de la violencia homicida se diferencia entonces claramente del mapa del poblamiento. Más allá de la larga banda meridiana que coincide con la Colombia andina y caribe, efectivamente muy pobladas, se destacan algunas partes del territorio muy afectadas aunque débilmente ocupadas: por ejemplo, los municipios del piedemonte oriental. En el seno de las regiones pobladas, las ciudades costeras caribes están relativamente salvaguardadas, al igual que el Altiplano de la cordillera oriental, especialmente con la reducida tasa registrada en Bogotá. La cartografía de los municipios menos y más violentos entre 1982 y 1998 (mapa 5.2) confirma que municipios de tamaños muy diferentes pueden pertenecer a una misma clase, pero su concentración geográfica demuestra una lógica espacial de repartición. La interpretación de esas diferencias entre las distribuciones espaciales de los habitantes y los homicidios nos vuelve a conducir al conflicto armado. Más que la repartición de la población, es el interés estratégico en los lugares y los recursos económicos que guardan lo que explica la localización de los grupos armados y, por tanto, de las regiones donde prima el uso de la fuerza. Como lo prueban los trabajos de C. ECHANDÍA, el control de la producción y comercialización de las riquezas, lícitas o no²¹, es en adelante un desafío esencial para los protagonistas del conflicto. Por lo demás, estos últimos se alejan cada vez más de sus bases sociales, dispensados como están —gracias a esos recursos financieros— de adquirir un apoyo popular para asentar su capacidad militar (PÉCAUT, 2002: 15).

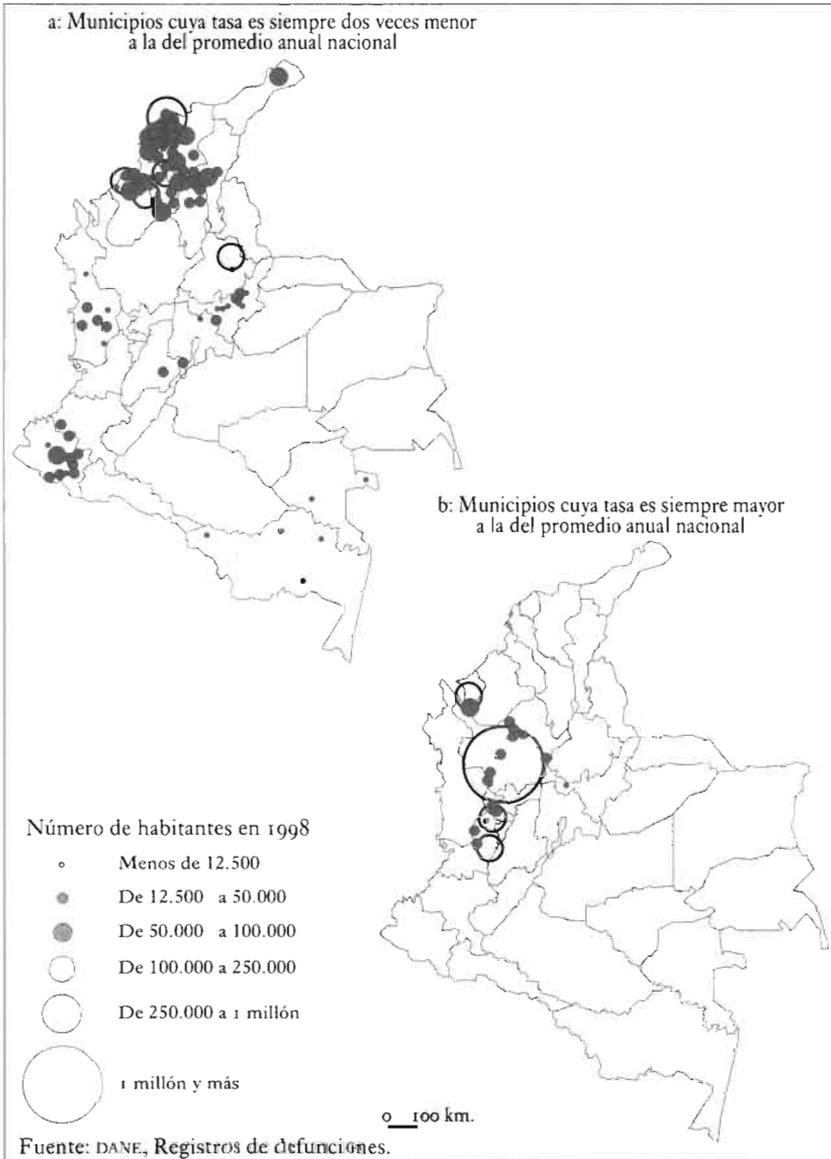
21 Se pueden citar especialmente las plantaciones de banano del Urabá, las cuencas auríferas del bajo Cauca y del sur de Bolívar, las cuencas petrolíferas al norte del piedemonte oriental, la región de esmeraldas de Boyacá, la coca sobre todo en las planicies orientales y la cuenca del Amazonas, el opio en las cordilleras central y occidental donde las tierras del eje cafetero, en crisis, son muy propicias para su explotación, que comenzó en 1990.

MAPA 5.1
VIOLENCIA HOMICIDA POR MUNICIPIO DE 1982 A 1998



Concepción y realización: O. PISOAT

MAPA 5.2
 MUNICIPIOS POCO VIOLENTOS Y MUY VIOLENTOS
 ENTRE 1982 Y 1998, SEGÚN SU TASA DE HOMICIDIOS POR 100.000 HABITANTES



Concepción y realización: O. PISOAT

Trabajos estadísticos como los de GAITÁN (1995: 236 a 245) han mostrado la marcada ausencia de correlación entre número de habitantes y tasa de homicidio. En efecto, las lógicas que las subtienden son distintas. El número de homicidios sigue en gran medida a la concentración de la población y nos reconduce a la violencia del derecho común, principalmente urbano, del cual hemos visto a todo lo largo de la primera parte que generalmente se trata de una violencia desprovista de móviles políticos. Por estar de algún modo “disuelta” en importantes cifras de población, y por eso menos visible en las tasas, esta “violencia ordinaria” no es menos el hecho estadístico mayoritario. La lógica de la tasa está en sí muy ligada a las estrategias de los actores del conflicto armado y a la competencia que libran por acceder a los recursos comerciales: en consecuencia, ella depende más de la distribución espacial de estos últimos que de la de los habitantes. Estas dos lógicas en ocurrencia son percibidas con mucha frecuencia como antinómicas en el campo de la “violentología”²². De hecho, ellas operan simultáneamente, interactúan en algunos casos, pero se impone su identificación por separado si se quiere situar, como acabamos de hacerlo, la desigual importancia estadística de sus dos motores: el homicidio objeto del derecho común domina entonces ampliamente sobre el homicidio de origen político.

¿Cómo evolucionan, en nuestro período de observación, la estadística de los homicidios y su distribución espacial? La observación de la tasa de homicidios en Colombia de 1982 a 1998 (tabla 5.1) muestra en primer lugar un aumento general de la violencia durante el primer decenio, hasta alcanzar un máximo en 1991 y 1992, seguido por un descenso global en 1998.

TABLA 5.1
TASA DE HOMICIDIOS EN COLOMBIA (1982-1998)

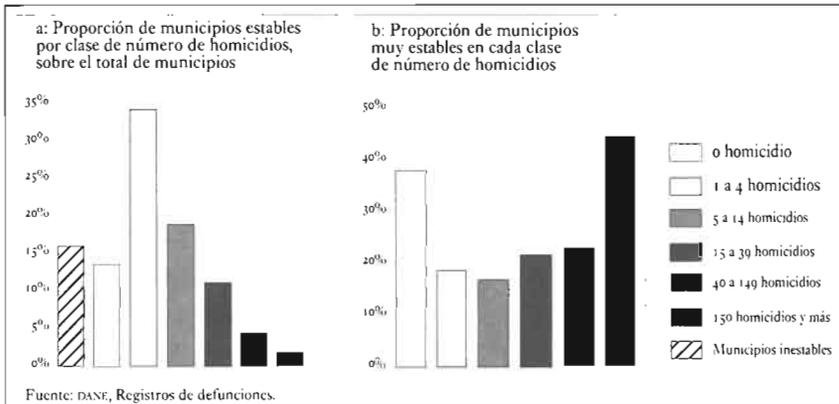
Años	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
Tasa (número de homicidios por 100.000 habitantes)	31	31	31	39	46	50	57	63	65	78	79	73	69	63	66	55	59

Fuente: DANE, Registros de defunciones.

22 Neologismo de los medios de comunicación colombianos para designar el estudio de la violencia.

En el contexto nacional, para situar las zonas que aquí llamaremos “estables” e “inestables”, hemos definido como estables a los municipios afectados de manera similar (incluyendo la clase del número de homicidios) durante la mayor parte del tiempo, en 9 años o más (gráfico 5.1a). Tal categorización arroja luz sobre dos hechos principales. Por una parte, el 84% de los municipios colombianos puede ser considerado estable. Semejante proporción indica hasta qué punto se encuentra anclada la violencia en el territorio y reposa sobre bases que perduran en el tiempo.

GRÁFICO 5.1
ESTABILIDAD DE LA REPARTICIÓN DE LOS HOMICIDIOS
(1982-1998)

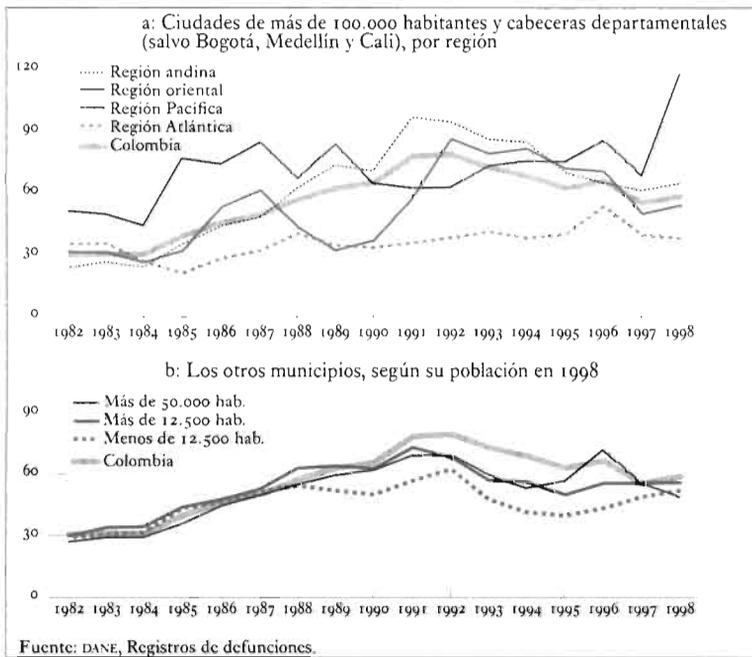


Concepción y realización: O. PISSOAT

Pero por otra parte, entre esos municipios, la situación está contrastada de una clase a otra. Las diferencias se muestran más cuando uno se sitúa del lado de los municipios que podemos calificar como “muy estables”, es decir que permanecen durante más de tres cuartas partes del tiempo (13 años o más) en una clase idéntica (gráfico 5.1b). Allí, los municipios inventariados en las clases extremas se distinguen claramente por una constancia mayor: 38% de ellos, muy calmados, donde no se registran homicidios, son muy estables; al igual que un 44% de ellos, muy violentos, donde ocurren 150 homicidios o más por año. Las zonas muy calmadas (0,9% de la población colombiana) y más aun las zonas muy violentas (30,7% de la población colombiana) lo son entonces de manera endémica.

Evidentemente, esta estabilidad de conjunto no impide la manifestación de fluctuaciones coyunturales a escala local, muy ligadas a episodios y escenarios de operaciones militares (gráfico 5.2a). Así, resulta posible oponer la región oriental con una tasa casi siempre superior a la de Colombia, a la región Atlántica, mucho más clemente, o incluso a la región andina, cuya curva permanece en una tendencia próxima a la del país, y a la región pacífica donde alternan fases de calma y de empeoramiento²³. A la inversa, al diferenciar a los otros municipios según las dimensiones de su población, todas las evoluciones son similares (gráfico 5.2b).

GRÁFICO 5.2
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE HOMICIDIOS POR 100.000 HABITANTES,
POR RANGO O TAMAÑO DE MUNICIPIO (1982-1998)



Concepción y realización: O. PISOAT

23 El deterioro de la situación en la Costa Pacífica durante estos últimos años ha sido ocultado en buena parte por el peso de Buenaventura, que es el puerto de Cali y que sigue por completo la evolución de su metrópoli.

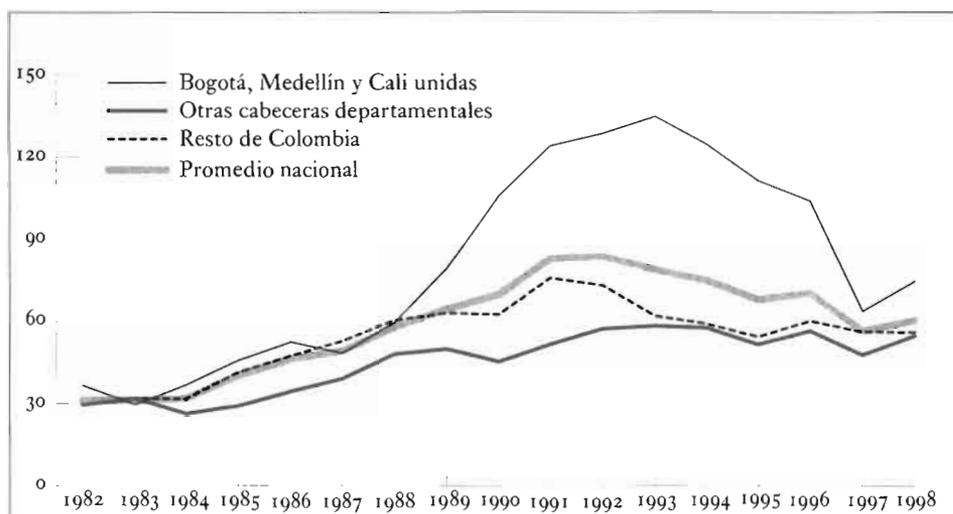
En total, sobre la parte más grande del territorio, la implantación de los diferentes niveles de violencia no varía mucho en el tiempo. La inscripción espacial del fenómeno no es aleatoria y responde a un sistema causal duradero. En efecto, la inercia es una de las características fundamentales de esos dos determinantes principales: la distribución de la población y la de los recursos económicos.

B. EL PESO DE LAS METRÓPOLIS

En la evolución de la tasa de homicidio por tipos de municipios colombianos desde 1982, se debe distinguir dos períodos (gráfico 5.3). De 1982 a 1988, las tasas de Bogotá, Medellín y Cali unidas, de las otras cabeceras departamentales y del resto del país aumentan en forma paralela: las tres metrópolis y el resto del país conservan tasas muy próximas (44 y 42 hpcmh en promedio respectivamente), mientras las otras cabeceras departamentales, menos tocadas (34 hpcmh), permanecen debajo del promedio nacional. Entre 1989 y 1996 se instauró una fuerte diferenciación. Las tres metrópolis se distancian claramente y ven —a pesar de un fuerte descenso después de 1993— a sus tasas promedio del período alcanzar la cifra de 114 hpcmh, es decir un alza de 159% en relación a las del período precedente. Para las otras dos categorías este crecimiento es mucho menor (57 y 52%), pero sobre todo, mientras que para las cabeceras departamentales el nivel de violencia se eleva ligeramente, el del resto del país —en lo sucesivo inferior al promedio nacional— disminuye globalmente de forma moderada pero regular hasta 1997. En resumen, mientras que durante los años 1980 la violencia homicida sigue las mismas orientaciones en el conjunto del país, en los años 1990 se intensifica en los principales centros urbanos y especialmente en las metrópolis; de manera que el peso de éstas en la evolución de las estadísticas nacionales se convierte entonces en determinante. El año de 1997 parece marcar al mismo tiempo el retorno a tasas nacionales comparables a las de fines de los años 1980 y el restablecimiento de un régimen de evolución común al conjunto del país²⁴.

²⁴ Esta hipótesis sigue siendo frágil, porque nuestra serie cronológica detallada por municipio se detiene en 1998. Sin embargo, los datos suplementarios de los que disponemos

GRÁFICO 5.3
 EVOLUCIÓN DE LA TASA DE HOMICIDIOS POR 100.000 HABITANTES
 DE LOS MUNICIPIOS SEGÚN TRES CATEGORÍAS (1982-1998)



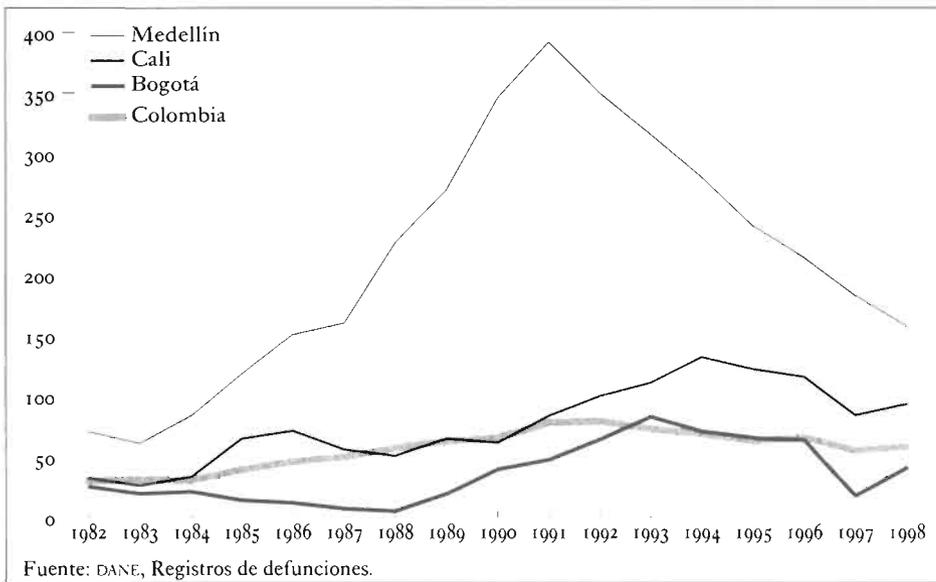
Concepción y realización: O. PISOAT

No obstante, no hay un comportamiento homogéneo en las tres metrópolis (gráfico 5.4). La singularidad de Medellín es patente. Ya en el doble del conjunto del país a comienzos de los años 1980, su tasa está en progreso constante hasta 1991, cuando muestra 392 hpcmh, el quintuple de las estadísticas nacionales. A pesar de un descenso constante desde entonces, en 1998 permanece en un nivel tres veces más alto que el promedio colombiano. Para encontrar elementos que expliquen este nivel de violencia excepcional, existen tres pistas principales. Capital del departamento de Antioquia, en el corazón de una importante zona de colonización agraria, Medellín hereda una extensa tradición de conflictos sociales que con frecuencia concluyeron con violencia. Más recientemente, la ciudad se ve en el centro de espacios que son objetivos del conflicto armado y del tráfico de drogas y, por eso, es el lugar por excelencia para la interacción de

para las tres grandes metrópolis hasta el 2001 no lo desmienten: ellos muestran una ligera tendencia al aumento (alrededor de 83 en 1999, y 84 en 2001 en promedio para las tres ciudades), completamente atribuible a las tasas de Medellín (169 en 1999, 211 en 2001).

la violencia política y del gran bandolerismo (limpieza social, milicias de todo bando, etc.). Por último, los estudios de SALAZAR (1992 y 1998) han ilustrado bien la profunda penetración social de las prácticas delincuenciales y su impacto homicida en los barrios populares de la ciudad; una dinámica que no se encuentra, en semejante intensidad, en Cali e incluso menos en Bogotá.

GRÁFICO 5.4
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE HOMICIDIOS POR 100.000 HABITANTES
EN MEDELLÍN, CALI Y BOGOTÁ (1982-1998)



Concepción y realización: O. PISOAT

Sin una medida común con el de Medellín, el nivel de violencia homicida en Cali es elevado. Su tasa anual, con frecuencia equivalente al promedio nacional, lo supera en dos momentos. El primero, limitado a los años 1985-1986, corresponde a circunstancias específicas de Cali: la plena actividad del cartel de la droga y de las organizaciones de limpieza social que fomentó (CAMACHO y GUZMÁN, 1990: 80 y 123). El segundo, que se inicia en 1991, corresponde en primer lugar a la dinámica económica común al conjunto del país: la crisis de empleo producto de la política de apertura económica (1991-1993). Este proceso también influye en el aumento de los homicidios en Bogotá, como lo testimonia el paralelismo casi constante de las dos curvas a partir de esa

fecha. Sin embargo, desde 1994 la diferencia entre las tasas de las dos ciudades aumenta. El Estado, luego de “terminar con Medellín” y ejecutar a PABLO ESCOBAR, se compromete con la represión de la organización de los hermanos RODRÍGUEZ OREJUELA. En Cali, el hundimiento de la economía inducido por el dinero sucio se suma entonces al impacto de la crisis económica sobre el empleo, hoy en día vigente.

Al contrario de Medellín y Cali, Bogotá permanece casi siempre menos violenta que el conjunto del país. Durante los años 1980, la ciudad incluso ve disminuir su tasa mientras ésta aumenta en las demás zonas del país. A partir de los años 1990, la violencia se agrava en Bogotá hasta el punto de alcanzar por un tiempo el nivel nacional. La diferencia entre la capital y las otras dos metrópolis tiene una explicación principal, que siempre vuelve a mencionarse en las entrevistas a los especialistas: en Bogotá, las redes de los narcotraficantes no están tan fuertemente establecidas como en Medellín y Cali. En la capital del país, el comercio de estupefacientes se desarrolla esencialmente en función del consumo local (en permanente aumento) y, si se trata de la exportación, Bogotá no sirve más que de punto de partida para las “mulas” hacia el extranjero²⁵. La influencia de las mafias de la droga, “más tardía y exógena”²⁶, no se apoya sobre los mismos dispositivos y no entraña la misma proliferación de bandas armadas organizadas para cometer asesinatos. Para explicar la violencia homicida en Bogotá, es necesario considerar factores económicos y sociales endógenos, que vamos a abordar ahora por diferentes vías.

C. BOGOTÁ Y CALI: REGULARIDADES ESTRUCTURALES QUE SUPERAN EL MARCO COLOMBIANO

La evolución análoga de Bogotá y Cali a todo lo largo de los años 1990 es otro tanto más notable, pues la violencia letal parece reaccionar a una serie

25 Entrevista con el coronel RICAURTE, noviembre de 2000: “El papel de Bogotá incluso está muy atenuado; todos los procesos verbales se cortan aquí: las mulas detenidas en el aeropuerto no son acusadas en Bogotá sino sobre todo en la región cafetera, por ejemplo en Pereira”. Esta opinión se verifica con la lectura de los testimonios reunidos por A. MOLANO (1997).

26 Entrevista con M. V. LLORENTE, noviembre de 2000.

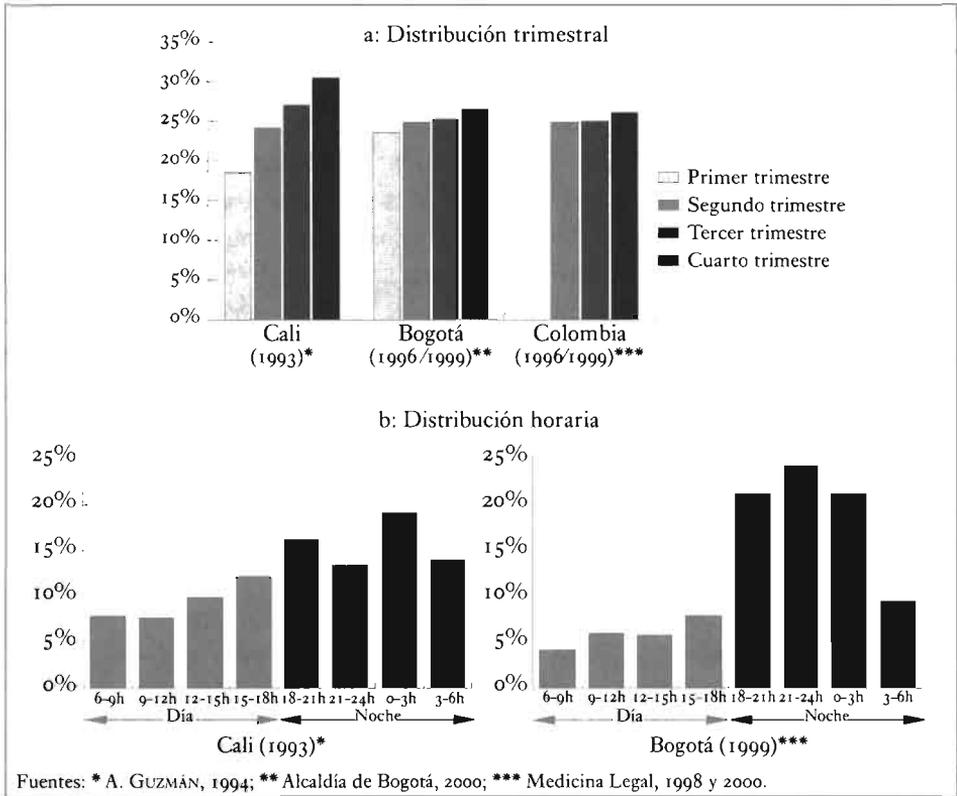
de factores comunes. La diferencia de intensidad proviene de condiciones específicas, entre las cuales juega un papel esencial la implantación del crimen organizado.

I. LOS “HITOS” DE LA VIOLENCIA HOMICIDA

Como lo muestra el gráfico 5.5a, el número de homicidios aumenta progresivamente en el curso del año, para culminar en el último trimestre. Esta tendencia, más marcada en las metrópolis, se reconoce en el conjunto de Colombia²⁷. Las fiestas de fin de año son la ocasión para numerosas compras, con frecuencia onerosas. Entonces, algunos se ven tentados a recurrir a la violencia para procurarse los medios de participar en los regocijos comunes. Otras semejanzas en los calendarios del homicidio en Bogotá y Cali remiten a explicaciones económicas. Por lo general, los empleados colombianos reciben sus salarios por quincenas, luego cada quince días se registra un aumento del número de homicidios, determinado por GUZMÁN para Cali (GUZMÁN, 1994: 20) y por SEGOVIA para Bogotá (SEGOVIA, 1994: 22). Igualmente, el análisis de datos diarios revela una frecuencia superior de los homicidios durante los fines de semana, los días viernes, sábado y domingo concentrados en mitades de mes. Confirmados por el estudio de SEGOVIA, quien también señala en forma idéntica los días feriados y los “puentes” (ibíd.: 20 a 22), estos resultados demuestran los efectos de lo que GUZMÁN llama la “rumba pesada” (GUZMÁN, 1994, 28), es decir, los comportamientos violentos asociados con la fiesta y el consumo de alcohol y drogas. Finalmente, la distribución horaria de los homicidios demuestra en las dos ciudades una recrudescencia durante la noche (gráfico 5.5b). Sin duda, ninguno de estos resultados es exclusivo del contexto colombiano.

27 Sin embargo, hay que hacer notar que fuera de las ciudades las estacionalidades son otras. Así, en la zona cafetera se produce un aumento de los homicidios en el momento de las cosechas, con la migración estacional de mano de obra mayoritariamente masculina. A nivel nacional, la distribución también puede mostrar algunos picos circunstanciales, especialmente durante la aproximación de elecciones que entrañan una recuperación de la actividad de actores del conflicto armado con el fin de influir en la votación e impedir su acceso en las zonas que controlan.

GRÁFICO 5.5
DISTRIBUCIONES TEMPORALES DE LOS HOMICIDIOS
EN CALI (1993) Y BOGOTÁ (1999)



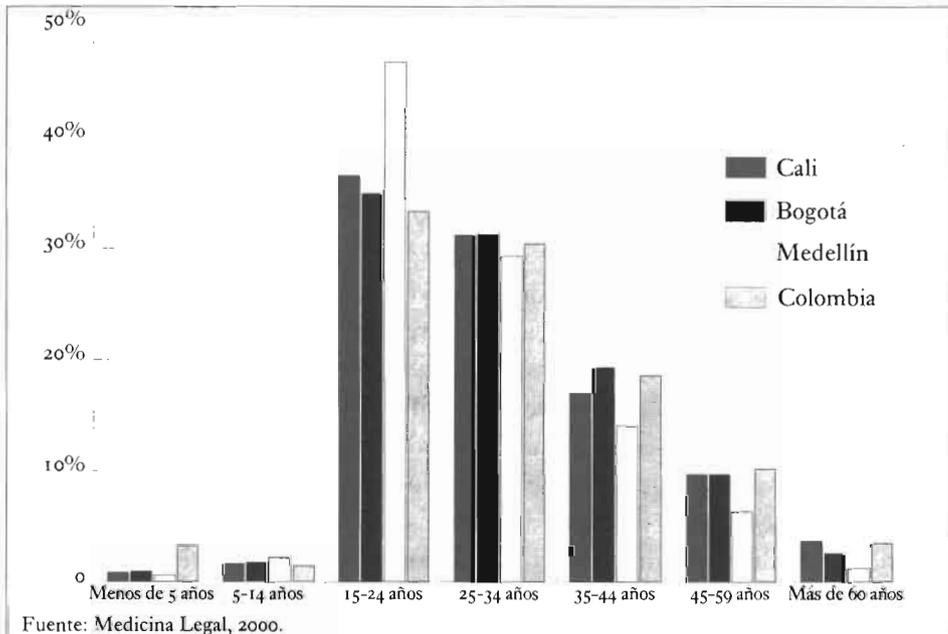
Concepción y realización: O. PISSOAT

2. LAS CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LAS VÍCTIMAS DE HOMICIDIO

Los grupos de edad más tocados por la violencia son los jóvenes (15-24 años) y los jóvenes adultos (25-34 años), tanto en las metrópolis como en el conjunto del país (gráfico 5.6). Allí tampoco hay nada exclusivo de Colombia: los trabajos del BID, por ejemplo, se basan en esos grupos de edad y sus proyecciones demográficas para prevenir la evolución de la violencia en América Latina (BID, 2000: 71 a 78). Del mismo modo, como en otras partes del mundo, los hombres son de lejos los más afectados (alrededor del 93% de las víctimas,

tanto en Cali como en Bogotá, o en el resto del país). Ahora bien, según CHENY (1999:128), la amplitud del desequilibrio entre los sexos es un índice de la gravedad de la situación: “En las sociedades avanzadas, donde el crimen sólo ocupa un lugar marginal, con frecuencia limitado en lo esencial a la esfera familiar, el número de víctimas masculinas generalmente no supera mucho el número de víctimas femeninas, y la relación entre pérdidas masculinas y femeninas es sistemáticamente inferior a dos. En cambio, allí donde el Estado es deficiente y el crimen organizado campea, las víctimas están en una relación de 4/5, o más, a favor de los hombres en razón de los enfrentamientos entre bandas rivales. Ese es el caso hoy en Rusia”. Así, la sobremortalidad masculina por homicidio es común, pero en el nivel que alcanza en Colombia no lo es. En el grupo de los 25-45 años, esa sobremortalidad se traduce en “una diferencia cada vez más clara en la esperanza de vida al nacer de los dos sexos, de casi ocho años en la década de 1990” (DUREAU y FLÓREZ, 1996: 142 y 143).

GRÁFICO 5.6
GRUPOS DE EDAD DE LAS VÍCTIMAS DE HOMICIDIO
EN CALI Y BOGOTÁ (1996)



Concepción y realización: O. PISOAT

3. LOS MÓVILES DE LOS HOMICIDIOS

Sin duda alguna, la determinación del móvil de un homicidio debe ponerse en duda, y las categorías empleadas son vagas. Bajo lo que se llama “ajuste de cuentas” se pueden agrupar diferentes tipos de homicidios, puesto que generalmente no se conoce a los responsables (¿actor político o delincuente?). En estos casos, es el conocimiento disponible sobre el tema y el terreno lo que hace decir a los expertos que se trata de criminales más que de guerrilleros o de paramilitares. Con todo, las cifras son instructivas.

TABLA 5.2
PRESUNTOS MÓVILES DE HOMICIDIOS EN CALI (1993) Y BOGOTÁ (1998)

	Cali (1993) %	Bogotá (1998) %
Ajuste de cuentas	51	37
Atraco/Robo	19	26
Crimen pasional, disputa, riña	15	21
“Intolerancia social”	7	5
Otros	8	11

Fuentes: * GUZMÁN et ál., 1994; ** Instituto nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 1999.

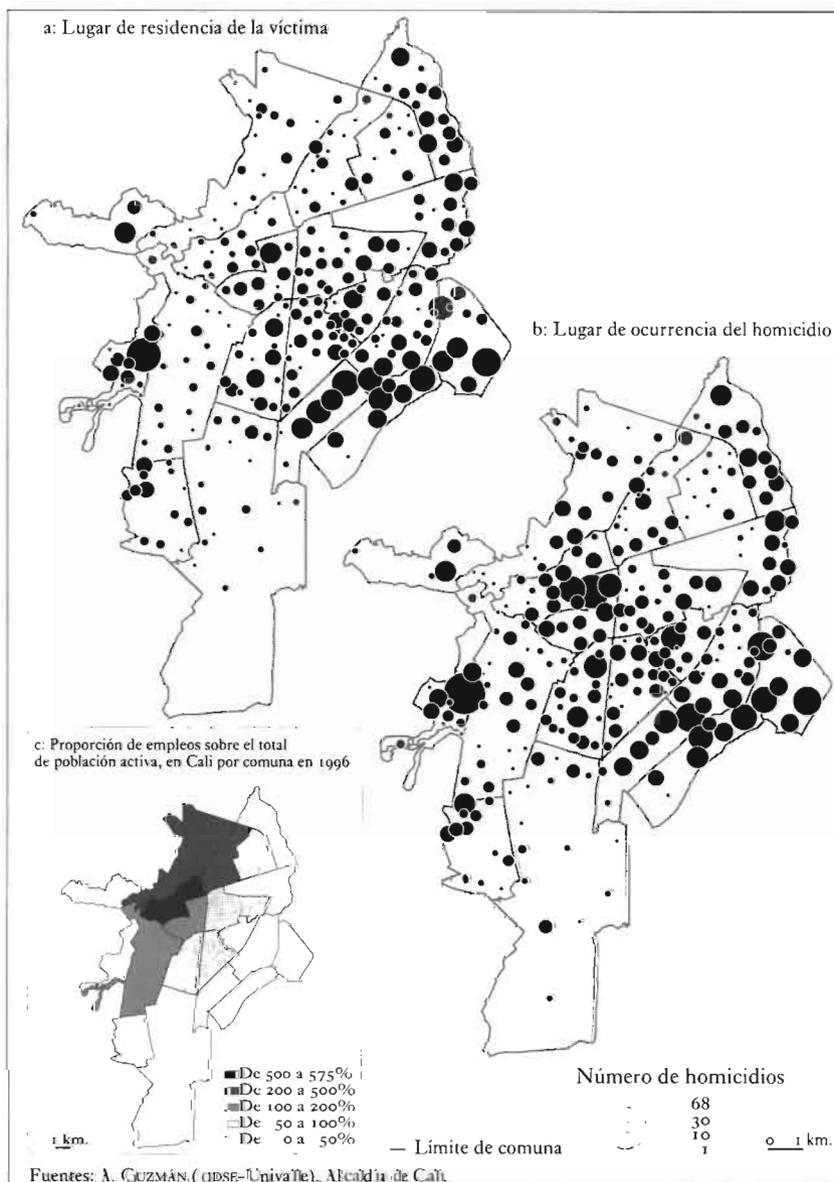
En más del 40% de los casos, ningún móvil puede ser definido y, en cuanto a la información que existe, no resulta preponderante la violencia extrema en las relaciones privadas y sociales (crimen pasional, disputa, riña). Decididamente, la hipótesis sobre una “cultura de la violencia” sostenida por algunos observadores no es válida. Pero sobre todo, resulta manifiesto que la situación vivida en Cali y Bogotá no tiene relación directa con el conflicto nacional: las rivalidades entre delincuentes (ajustes de cuentas) y los crímenes por razones económicas (atracos) totalizan respectivamente el 70% y el 63% de los móviles identificados. Por lo demás, sí existe concordancia entre el arma utilizada y el móvil: al recurso más frecuente del arma de fuego en Cali le corresponde la importancia mayor de los ajustes de cuentas, mientras que en Bogotá el uso más frecuente de armas blancas coincide con la abundancia de las disputas. Estos resultados indican claramente la preeminencia de la delincuencia eco-

nómica sobre la violencia homicida en las dos ciudades (gran bandolerismo, pero también sectores delincuenciales y criminales menos organizados), de todas maneras con una mayor influencia mafiosa impuesta en Cali.

4. REPARTICIÓN DE LOS HOMICIDIOS EN LA CIUDAD

Los datos utilizados en el caso de Cali permiten comparar los lugares donde ocurren los homicidios (de hecho, se trata del sitio donde se encontró el cadáver) con los lugares de residencia de las víctimas. En los casos de los lugares de residencia, se observa una clara concordancia entre el nivel socioeconómico y la intensidad de la violencia, pues las zonas más afectadas son las más pobres (mapa 5.3a). En cambio, los lugares de ocurrencia están repartidos entre los barrios populares y el eje central donde se concentran el comercio y los servicios, con un peso mayor del primero (mapa 5.3b). Y gracias a los mapas elaborados por la Alcaldía entre 1992 y 1998 se sabe que esta distribución se conserva estable en el tiempo. Por otra parte, sin tener en cuenta más que los hechos gracias a los cuales los dos sitios son conocidos, existe entre el lugar de ocurrencia y el de residencia una coincidencia espacial elevada. La ciudad esconde lugares peligrosos cuyas víctimas principales son sus mismos habitantes. Este es el caso más representativo. Sin embargo, no es el único, y los mapas 5.3a y 5.3b ponen en evidencia un proceso de “densidad inestable”, es decir, de variación en la intensidad del poblamiento a lo largo de las horas del día (MILLE, 2000). En efecto, las zonas de empleo hacia las cuales fluyen cotidianamente los trabajadores (mapa 5.3c), que son las que concentran igualmente a los “lugares conflictivos” (según la expresión de Paz Pública: bares, discotecas, etc.), corresponden a los barrios cuyo número de homicidios constatados es muy superior al de residentes muertos. Se descubre así una violencia que acompaña a las movilidades funcionales de los ciudadanos (cotidianas o semanales), a su vez estructuradas por las zonas de actividad (empleo, comercio, diversión).

MAPA 5.3
 HOMICIDIOS EN CALI POR BARRIO EN 1996,
 SEGÚN SU LUGAR DE OCURRENCIA Y EL LUGAR DE RESIDENCIA DE LA VÍCTIMA

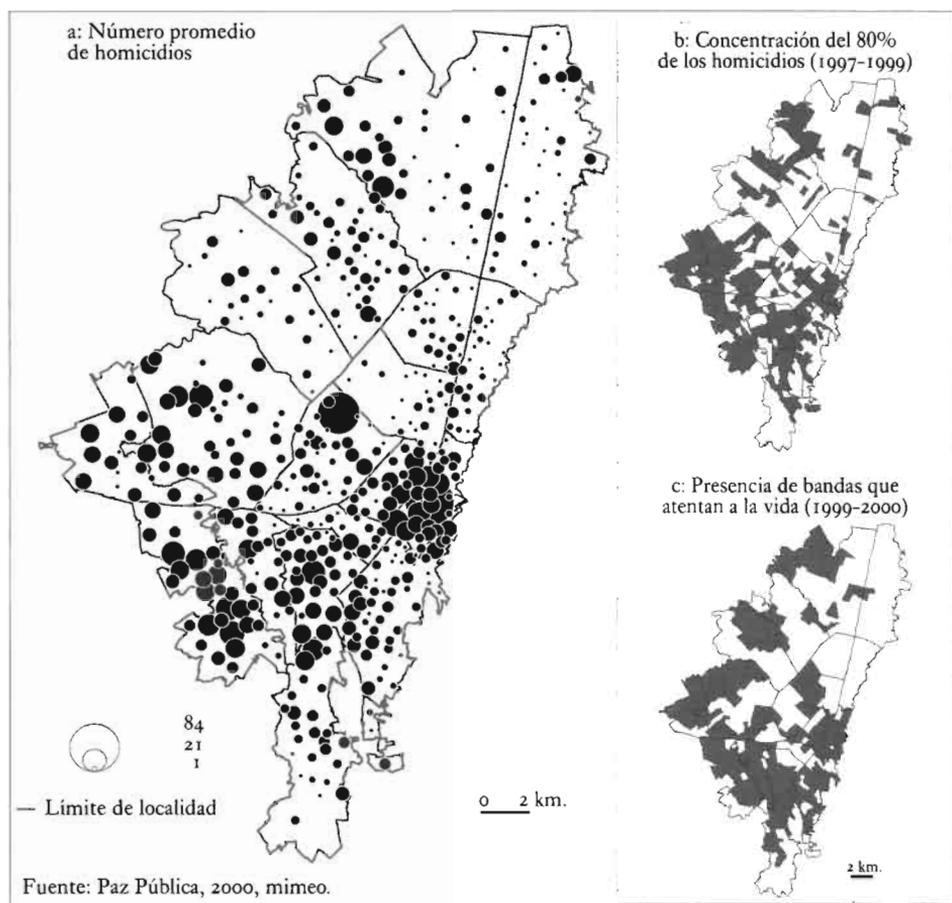


Concepción y realización: O. PISSOAT

Los datos utilizados en el caso de Bogotá no informan sobre el lugar de residencia de las víctimas. Pero estos datos pueden descomponerse según la hora de ocurrencia del crimen y también confirman las tendencias identificadas en Cali (mapa 5.4a). La repartición espacial de los homicidios revela su concentración en las zonas desfavorecidas y se conserva estable en el tiempo. En cuanto a la distribución temporal, sólo pudo ser analizada por barrios, lo que impide sacar conclusiones precisas; sin embargo, confirma la tesis del papel jugado por las movilidades domicilio-trabajo durante el día y las movilidades hacia los lugares para diversión cuando llega la noche.

Tanto en Bogotá como en Cali, los grupos más pobres de la población son así las víctimas preferenciales de la violencia homicida que frecuentemente afecta a los lugares de residencia, pero también sigue los desplazamientos intraurbanos. Así, la dinámica de la violencia en la ciudad está regida por otros fenómenos distintos al conflicto armado. Los investigadores de Paz Pública (mapas 5.4b y 5.4c) llegan a una conclusión similar. Según ellos, es la presencia de la delincuencia organizada, ligada a mercados ilícitos (drogas, armas, prostitución, etc.), lo que explica la distribución de los homicidios: “un diagnóstico público sobre el homicidio en un centro urbano como Bogotá no puede seguir ignorando la violencia engendrada por las estructuras criminales que operan allí” (LLORENTE et ál., 2000: 20). Sin embargo, mientras que en Cali el peso de las mafias explica la elevada tasa de homicidio, Bogotá parece sufrir una violencia mucho más corriente, que algunos denominan “síndrome de las grandes ciudades”.

MAPA 5.4
HOMICIDIOS EN BOGOTÁ POR SECTOR CENSAL (1997-1999)



Concepción y realización: O. PISSOAT

D. LAS METRÓPOLIS COLOMBIANAS EN COMPARACIÓN CON OTRAS GRANDES CIUDADES DEL MUNDO

Los resultados de una comparación internacional, centrada en las metrópolis en 1994, coinciden con la jerarquía entre los Estados durante el mismo año (Naciones Unidas, 1994)²⁸. Con tasas generalmente más elevadas que las de sus

²⁸ Al reunir las estadísticas de las Naciones Unidas, del ISS y del FBI, la comparación evaluó a más de 70 ciudades. Estos datos, muy voluminosos, no se reproducen aquí.

respectivos países, en las capitales de América²⁹ se confirma la ocurrencia de la más alta violencia registrada. En Colombia, Cali y especialmente Medellín, manifiestamente se distinguen del resto del mundo. En cambio la cifra para Bogotá no es tan prominente. Es notablemente inferior a la de Washington y próxima a las de otras metrópolis de Estados Unidos. Las consideraciones coyunturales no pueden servir como explicaciones, pues las cifras del BID para 1999, más fragmentarias, muestran las mismas tendencias.

TABLA 5.3

TASAS DE HOMICIDIO POR 100.000 HABITANTES EN ALGUNAS METRÓPOLIS DEL MUNDO (1999)

Colombia	América central	América del Sur	América del Norte	Europa/Asia
Medellín 169	Guatemala 101	Caracas 76	Washington 73	Madrid 3
Cali 103	San Salvador 95	Río 63	New York 16	Paris 2
Bogotá 40	México 20	São Paulo 48	Ottawa 1	Londres 2
		Lima 25		Tokyo 1
		Buenos Aires 3		
		Santiago 2		

Fuente: H. ACERO, 2000.

ACERO³⁰, a la cabeza del servicio “Seguridad y Convivencia” de la Alcaldía de Bogotá, puede lamentar así la extendida confusión de la realidad bogotana con la situación de violencia sufrida en Medellín y Cali. De hecho, la capital de Colombia se mantiene en una tasa completamente similar a muchas otras grandes ciudades del continente. Es una tasa dos veces más baja que la de Caracas o Washington y permanece más abajo que las de Río de Janeiro y

29 Con las excepciones de Toronto, Buenos Aires y Santiago, comparables a las capitales europeas.

30 Entrevista, Bogotá, noviembre de 2000.

São Paulo donde actúan, como en Colombia, escuadrones de la muerte; todas estas aglomeraciones pertenecen a naciones que no sufren ninguna “guerra interna” (PÉCAUT, 2000: 6). La opinión de P. CASAS, director del Observatorio de Seguridad de la Cámara de Comercio de Bogotá, encuentra aquí argumentos: “No existe ninguna relación entre la violencia política y la violencia urbana. La primera no tiene ningún impacto sobre la segunda. Son dos cosas completamente diferentes, y además, el problema de la inseguridad en Bogotá se parece bastante al que viven otras metrópolis americanas. De hecho, es un fenómeno común a todas las grandes ciudades desarrolladas del mundo entero”³¹. En el contexto colombiano esta afirmación puede parecer excesiva, pero eso no impide que –al contrario de muchos “violentólogos”– quienes trabajan específicamente sobre esta ciudad³² separen el conflicto nacional de las violencias de la capital del país. Ciertamente, Bogotá no está aislada del resto del país y de los combates que se desarrollan, pero ella padece sobre todo de un mal común a muchas otras metrópolis que no han podido controlar su criminalidad.

Una vez admitida su disociación del conflicto armado, las interpretaciones sobre la violencia centradas en las diferencias económicas y sociales pueden ser abordadas de nuevo. Puesto que condensa las divisiones de la sociedad, la ciudad refleja, en un solo lugar, el conjunto de las violencias que agobian al país (GUZMÁN et ál., 1993: 15). La violencia, hecho social total, se exagera en la ciudad porque ése es el lugar del poder, de la anomia, donde todo se compra, y donde las discriminaciones y las brutalidades hacia algunos grupos humanos son flagrantes. De acuerdo con J. PINHEIRO (1993: 3), no creemos que la ciudad misma sea la causa, sino la concentración del conjunto de esos factores en las sociedades urbanas particularmente fragmentadas donde se identifica al pobre como el criminal. Sin duda alguna, el mecanismo de repercusión de las crisis económicas y de las recomposiciones sociales urbanas sobre la violencia y su manifestación extrema, el homicidio, es complejo; su análisis pasa por

31 Entrevista, Bogotá, noviembre de 2000.

32 En todo caso, las que hemos entrevistado, quienes trabajan en las administraciones municipales o gubernamentales, en instituciones privadas, en ONG o en centros universitarios de investigación.

el estudio –tanto antropológico como estadístico– del conjunto del grupo sociales implicados en los diferentes tipos de delincuencia, de sus lógicas de paso al acto y de sus interacciones. Ese es uno de los desafíos mayores de la criminología moderna que supera ampliamente el marco de este capítulo. Más modestamente, nos concentraremos ahora en el análisis de la dinámica reciente de la delincuencia menor en Cali.

III. DETERMINANTES ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA DELINCUENCIA COMÚN EN CALI

En su acepción más general, en particular en Colombia, la expresión “delincuencia común” abarca el conjunto de crímenes y delitos del derecho común, cualquiera sea su gravedad, por oposición a los que engendran la violencia política y el conflicto armado. No obstante, muchos análisis recientes sobre la violencia en Colombia³³, como las dos primeras partes de este capítulo, insisten sobre la interpenetración de las prácticas de delincuencia “común” y “política”, en particular cuando se trata de los crímenes más graves (homicidio, atraco, secuestro, etc.), hasta tal punto que uno podría dudar de la pertinencia analítica de esta distinción. En esta sección, adoptaremos una definición más restringida de la “delincuencia común”, como sinónimo de delincuencia menor (principalmente los robos, con o sin violencia). A pesar de lo poco ortodoxa, esta elección nos parece indispensable en Colombia, donde la imposición del homicidio ejerce un efecto contaminante sobre el conjunto del campo de la criminología: al contrario, ella permite conservar una distinción descriptiva y explicativa entre formas fuertes y débiles de delincuencia.

Por otra parte, al menos en cuanto a su frecuencia real y la evolución de las cifras, son paradigmas de la interpretación sociológica los que forjan las percepciones y los diferentes análisis del fenómeno. Muy esquemáticamente –más adelante volveremos sobre esto– se oponen dos tesis: (1) La del dicho popular “quien se roba un huevo se roba un buey” (y sus variantes eruditas), plantea un encadenamiento causal entre las formas débiles y fuertes de violencia que

33 Cfr. por ejemplo CAMACHO y GUZMÁN (1990), DEAS y LLORENTE (1999), GAITÁN (1995) y FRANCO (1999).

conduce a la ideología de la “tolerancia cero” y a políticas totalmente represivas; (II) La que, al contrario, insiste sobre la independencia de la delincuencia menor respecto a la gran criminalidad, y también sobre los determinantes sociales y económicos de la primera, que justifica las políticas de prevención y de tratamiento social. Sin negar que existan casos de “adiestramiento” —especialmente en el medio carcelario— que pueden conducir desde pequeños delitos hasta crímenes más graves, nosotros defenderemos desde un punto de vista estadístico y sociológico la segunda tesis. Hay dos argumentos que nos parecen decisivos. El primero, que sólo aparecerá en filigrana en nuestras interpretaciones, al contrario está en el centro de muchas investigaciones en sociología, economía y antropología, conducidas actualmente en Cali (ver los trabajos de GUZMÁN y los de SALAZAR citados antes): se dirige a las motivaciones económicas y a las formas de capital y de organización implícitas en la delincuencia menor (armas, logística, división jerárquica del trabajo, etc.), radicalmente diferentes de las que caracterizan a los medios “profesionales” de la gran criminalidad y de la violencia institucional. De hecho, esta diferencia sólo raramente autoriza a los actores a pasar de un tipo de actividad a otro. El segundo argumento, que nos interesa directamente aquí, es la importancia de los efectos de la coyuntura socioeconómica global y los contextos sociales y espaciales locales sobre los niveles de la actividad delincriminal en la ciudad. Para desarrollar este argumento en dos tiempos, adoptaremos el punto de vista de la exposición de las poblaciones urbanas al robo. En primer lugar, situaremos el nivel y la evolución de las tasas de atentados a la propiedad en Cali, en el contexto nacional e internacional, para evaluar el efecto de la crisis social sobre la delincuencia común durante el período 1995-1998. Luego, analizaremos en detalle, a escala intraurbana, la exposición diferencial al robo según los contextos espaciales y sociales.

A. NIVELES Y EVOLUCIÓN DE LA DELINCUENCIA MENOR EN UNA COYUNTURA DE CRISIS SOCIAL

Como ya se dijo, la comparación internacional de los niveles de delincuencia común tropieza, mucho más aun que la del homicidio, con múltiples dificultades. La variabilidad en los indicadores, la incoherencia entre las encuestas

realizadas y las fuentes policiales, los diferentes métodos para calcular las tasas (en particular, según la definición de la población de referencia), la fragilidad de los métodos para la recolección de información respecto a los hogares (mala redacción de las preguntas, que entraña cuentas dobles, sondeos sesgados) y la inestabilidad de los tipos de delitos incluidos en las encuestas (robos con o sin violencia, agresión, incivildades, etc.) son otros factores de distorsión de las cifras que permiten la entrada a interpretaciones divergentes y a usos tendenciosos de las estadísticas.

Hasta donde sabemos, el más serio y reciente esfuerzo de síntesis sobre el tema en América Latina fue el que puso en marcha, en 1996, una red de siete centros de investigación coordinados por el BID³⁴, cuyos resultados fueron publicados entre 1999 y 2001. A pesar de los medios y de los criterios de exigencia implementados en este trabajo, los autores del primer informe reconocen que “la estimación de la violencia contra la propiedad ha conducido sin embargo a cifras menos creíbles y comparables (que para la violencia homicida)” (LONDOÑO y GUERRERO, 1999: 20). En efecto, son raras las cifras —citadas en este documento— que fueron establecidas mediante una metodología estable y rigurosa; entonces, no utilizaremos, a título de comparación, más que algunas estimaciones surgidas de las encuestas específicas de hogares conducidas bajo la tutela del BID en 1996 y 1999.

En primer lugar, situemos el nivel global de criminalidad no homicida que permite estimar la encuesta CIDSE-IRD realizada en 1998 en Cali (anexo 2) gracias a un indicador comúnmente utilizado: el número de delitos por cada 1.000 habitantes³⁵. En promedio, en el universo de la encuesta, representativo de alrededor del 80% de la población total de Cali, se produjeron entre mayo

34 Cfr. en particular LONDOÑO y GUERRERO (1999) y FAJNZYLBER, LEDERMAN y LOAYZA (eds.) (2001).

35 Lo obtenemos al sumar las declaraciones de acontecimientos que constituyen delitos jurídicos: por una parte los robos y por otra los golpes y heridas (sin armas, con arma blanca o con arma de fuego). Sin embargo, es muy necesario guardarse de establecer cualquier equivalencia entre los datos de la encuesta y las estadísticas de la policía, porque los hechos reportados por las encuestas no han sido objeto de calificación alguna por parte de la autoridad policial o judicial, mientras que las fuentes policiales o judiciales no reflejan en sí mismas más que los hechos reportados a la autoridad y calificados por ella.

de 1997 y mayo de 1998 cerca de 114 delitos por 1.000 habitantes. El 22% de los hogares reportó al menos un delito y los hogares afectados declararon en promedio 2,4 delitos en el año. Gracias al modelo “criminalidad” de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH), realizada en las once principales ciudades del país en 1995, disponemos de un punto de referencia en el tiempo³⁶. Ese año, la tasa de criminalidad elaborada de la misma manera (robos, golpes y heridas, y hurtos voluntarios) y medida bajo el mismo método, se elevó a 44‰ en Cali, es decir, una tasa próxima al promedio observado en las 11 ciudades (48‰) y a la cifra de Bogotá (50‰)³⁷. En Cali, la proporción de hogares afectados no conoció la misma alza que el número de delitos: en 1995, alcanzó un 16,5% (la cifra de 1998 alcanza entonces un aumento de 33%). La duplicación del número de delitos reportados por los hogares en el curso del año (1,2 en promedio en 1995 *vs.* 2,4 en 1998) es responsable del aumento de las tasas de criminalidad³⁸.

La comparación a escala latinoamericana de las frecuencias del robo en la población adulta, medidas por las encuestas dirigidas por el BID durante el período 1995-1999 (tabla 5.4), hace caer, en lo que concierne a la criminalidad no homicida, el presupuesto frecuente entre los analistas sobre el carácter excepcional del caso colombiano. De hecho, cuando uno se esfuerza —como lo hicimos aquí en las seis ciudades del subcontinente— para no comparar más que los indicadores idénticos obtenidos con métodos homogéneos, el nivel de delincuencia común en Cali figura entre los más bajos: es semejante a los de las metrópolis brasileñas (o los de los países del cono sur), más bien reducido

36 Los resultados citados aquí fueron extraídos de M. RUBIO (1996 y 1999).

37 Mientras que el mínimo y el máximo son observados en las ciudades de menor importancia: 10‰ en Montería y 120‰ en Bucaramanga.

38 Como ya se dijo, la encuesta realizada en 1998 en Cali no representa más que cerca del 80% de la población de la ciudad, en razón de la exclusión de los barrios del norte. Esta falta de representatividad es tal vez la causa de cierta sobrevaloración de la criminalidad promedio (concentración de la observación en los barrios que tienen tasas elevadas). Sin embargo, incluso reteniendo la hipótesis de que las comunas no observadas conocen tasas inferiores a la mitad del promedio observado por la encuesta, la tasa promedio para el conjunto de la ciudad se elevaría al menos a 103‰, es decir, un aumento de 134% en relación a 1995.

en el contexto de los países andinos y sin común medida con los de los países de América central y de México³⁹. Así, si Colombia se sitúa por su tasa de homicidios entre los países más violentos del mundo, en cambio resulta erróneo extender esta calificación al campo de la delincuencia menor, como lo hacen algunos autores que consideran el fenómeno como evidente.

TABLA 5.4
ROBOS CON O SIN VIOLENCIA EN SEIS CIUDADES DE AMÉRICA LATINA

Ciudades y orígenes	Cali 1995 (1)	Cali 1996 (2)	Cali 1998 (1)	Caracas 1996 (2)	México 1999 (4)	Rio de Janeiro 1996 (2)	San Salvador 1996 (2)	São Paulo 1999 (3)
Tasas de declaración individual * (%)	7,9	8,9	10	17	30	8,7	20	5.5

Fuentes: Según FAJNZYLIBER, LEDERMAN y LOAYZA (eds.), 2001, para las encuestas del BID y el BM; RUBIO, 1996 (según la ENH 1995) para las cifras de Cali en 1995; y Encuesta CIDSE-IRD de 1998 en Cali.

* Frecuencia individual de respuesta positiva para la pregunta sobre la ocurrencia de al menos un robo con o sin violencia durante el período de referencia entre la población adulta total. (1) año anterior, población de 18 años y más; (2) año anterior, población de 15 años y más; (3) año anterior, población total; (4) seis meses anteriores, población de 15 años y más.

Para volver con el tema en Cali, es innegable que en el intervalo de 1995-1998 la delincuencia común sufrió un aumento importante, que registra la encuesta CIDSE-IRD y confirman otras fuentes⁴⁰. El aumento no puede interpretarse sin algunas observaciones complementarias. En primer lugar, la disminución comprobada –durante el mismo período– de la violencia homicida⁴¹ es una primera prueba de la independencia, en relación a esta última, de una delincuencia menor, ligada principalmente a los atentados contra la propiedad para la rápida obtención de valores económicos muy limitados. Pero esencialmente, es necesario volver a situar este aumento en el contexto de la muy fuerte recesión que afecta al conjunto del país y particularmente a la región de Cali desde 1995; sus consecuencias económicas y sociales han sido analizadas en

39 Cfr. también LONDOÑO y GUERRERO (1999: 20).

40 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (1999: 57) y GUZMÁN, en URREA y ORTIZ (1999: 45 y 46).

41 Entre 1994 y 1999, las tasas en Cali pasaron de 130 a 100 hpcmh (-23%); en Medellín de 280 a 170 hpcmh (-39%); y en Bogotá de 70 a 40 hpcmh (-43%).

detalle en un informe de coyuntura para el Banco Mundial (URREA y ORTIZ, 1999), del cual citaremos algunos apartes.

Entre 1995 y 1998, el crecimiento económico en Cali –situado alrededor del 5% en promedio para el período de 1990–1994– experimentó una caída brutal debida al deterioro de la coyuntura nacional, que se extendió gravemente por los efectos directos e indirectos de la caída del cartel de la droga⁴². La recesión estuvo acompañada por una muy grave crisis social: caída casi general del poder adquisitivo y un crecimiento sin precedentes de las desigualdades socioeconómicas. Durante el período de 1994–1998, la población que vivía por debajo del umbral de pobreza pasó de 30% a 39%, y la que estaba bajo el umbral de indigencia pasó de 5% a 10% (ibíd., 1999: 20). El desempleo, situado en alrededor del 10% a comienzos de 1995, experimentó la cifra récord de 21% en junio de 1999 y afectó de manera muy injusta a la población según el sexo, la edad y el nivel de ingresos (ibíd., 1999: 27 a 43). Así, por ejemplo el desempleo entre los jóvenes es catastrófico (45% entre los 15 y 19 años, duplicó su tasa desde 1995) mientras se añade un subempleo considerable en la misma franja de edad (21%). Pero sobre todo es según el ingreso donde la desigualdad en el mercado de trabajo es patente y tiende a crecer: de una tasa de desempleo de 21% en 1994 entre la población del más bajo quintil de ingreso, se pasó a 38% en 1998, es decir 5 veces más que en el más alto quintil (8%). Si se tiene en cuenta el subempleo, evaluado en 20% para el primer quintil, entonces se observa que la quinta parte más pobre de la población de Cali es víctima de una exclusión masiva del mercado de trabajo. En efecto, se pueden imaginar –la muestra de la ENH no permite su estimación– las tasas de desempleo y de subempleo que golpean, localmente, a los jóvenes de los medios más pobres en los barrios marginales de la ciudad.

42 La evolución del PIB del departamento se invirtió por primera vez en 20 años, pasando de +3,5% en 1995 a -2,8% en 1998 (URREA y ORTIZ, 1999: 25, 52 y 53).

B. LOS FACTORES DE LA EXPOSICIÓN DIFERENCIAL AL ROBO EN CALI

En el contexto de la crisis social en Cali, ya sugerimos la existencia de un impacto muy real de la exclusión masiva del mercado de trabajo de la franja más pobre de la población en el ascenso de la delincuencia. Para abordar los determinantes espaciales y sociodemográficos de la exposición a la delincuencia, hemos decidido relacionar las declaraciones de robo sin atentados físicos⁴³ recogidas en la encuesta CIDSE-IRD con las características de los encuestados (recuadro 5.1). Examinamos en primer lugar la variación espacial del fenómeno (mapa 5.5). Las tasas por barrio muestran un nexo entre el contexto socioeconómico local y la frecuencia de los atentados contra la propiedad: en general, a medida que aumenta la inseguridad económica de los habitantes aumenta igualmente la inseguridad sobre los bienes. Así, las tasas más altas son las de los barrios populares del este⁴⁴. Sin embargo, hay una excepción en los barrios pobres del oeste, donde se observan las más bajas frecuencias en Cali. Entonces hay que notar que, incluso cuando se trata de un habitat autoconstruido tan precario –en promedio– como los barrios populares del este, la homogeneidad económica y social es mucho más fuerte⁴⁵. La hipótesis sugerida por el mapa 5.5 es entonces la de una injusticia social de exposición al robo irreductible al umbral del nivel medio de pobreza en el contexto residencial. Así mismo, es la heterogeneidad socioeconómica local la que produce el “mercado de la delincuencia” mientras, al contrario, la homogeneidad lo suprime, al mismo tiempo que una fuerte “cohesión” social aumenta el control de la desviación. A continuación, vamos a probar estadísticamente esta hipótesis a partir de datos individuales.

43 Hay dos razones para explicar esta elección: por una parte, los robos sin atentados físicos constituyen el 85% de los delitos comprendidos en la encuesta; por otra parte, su elevada frecuencia permite estimaciones fiables, a partir de la muestra, para los análisis selectos que seguirán, lo que no será el caso para los golpes y heridas.

44 Para tener una descripción precisa de la injusticia social y económica en Cali, por barrio, cfr. GUZMÁN y URREA, en ORTIZ (1999: 7 a 17).

45 G. VANEGAS (1998: 63 a 85) subraya la homogeneidad arquitectónica y social de esta parte de la ciudad, que se opone a la periferia oriental, mucho más contrastada.

RECUADRO 5.1
 MODELIZACIÓN LOGÍSTICA DE LA EXPOSICIÓN AL ROBO EN CALI

Nos proponemos analizar la variabilidad de la frecuencia del robo en Cali (es decir, el porcentaje de individuos de 18 años y más, que hayan declarado al menos un robo en el año 1997-1998, que alcanza en promedio un 8%) en relación con tres tipos de variables:

1. Las características sociodemográficas: sexo, edad, situación matrimonial, nivel de educación, categoría socioprofesional y fenotipo del encuestado;
2. Algunos descriptores del contexto espacial y social al cual están expuestos los individuos: localización y estrato socioeconómico del lugar de residencia, lugar de trabajo (definido en el anexo 3), condición de migración;
3. Las respuestas a dos preguntas planteadas a los encuestados sobre su percepción de la infraestructura policial en el barrio (buena, regular, mala) y de la condición general del barrio (buena, regular, mala).

La regresión logística (procedimientos "Logistic" y "Catmod" de SAS) estima, con ayuda de un ajuste log-lineal de los datos, los efectos de las variables explicativas (parámetros de la ecuación) sobre la variable dependiente (presencia o ausencia de al menos un delito en el año): efectos principales de las variables consideradas independientes unas de otras y efectos cruzados de variables no independientes. El signo del parámetro indica el sentido del efecto: aumento (+) o disminución (-) de la probabilidad de ser robado (ofrecida por la respuesta marginal estimada). A cada parámetro está asociado un test estadístico (χ^2 de WALD) que mide la significatividad del efecto (indicado por los umbrales de confianza). Así por ejemplo, en el modelo final aceptado (tabla 5.5), por lo demás con todas las cosas iguales, los hombres tienen —de manera extremadamente significativa (umbral de confianza del 99,9%)—, una probabilidad de ser robados de alrededor de tres veces superior a la de las mujeres (13% versus 4%).

El proceso que permite desembocar en un modelo correctamente especificado es laborioso, debido al número de variables aceptadas desde el principio y al complejo juego de sus interacciones. Los modelos lógicos de predicción de respuestas individuales permiten, en un primer momento, poner orden al interior de los efectos directos, eliminando de inmediato las dos variables de percepción del barrio que se muestran muy redundantes junto a la localización y el estrato socioeconómico del lugar de residencia. Todos los otros efectos directos son muy significativos, excepto la situación matrimonial, eliminado del modelo final, y la edad, cuyo efecto depende del sexo. En cuanto a los efectos cruzados, los numerosos tests de especificación del modelo de frecuencias marginales dejan ver que el tamaño de la muestra no permite observar correctamente más que el del fenotipo del individuo con su categoría socioprofesional. Entonces llegamos a un modelo de ocho variables donde están especificados siete efectos: el sexo, el efecto cruzado del sexo y la edad, el nivel de educación, la caracterización del lugar de residencia, el lugar de trabajo, la condición de migración y el efecto cruzado del fenotipo y la categoría socioprofesional.

En este modelo, la hipótesis de la independencia de los residuos es rechazada, señal de no haber tenido en cuenta algunas interacciones, pero desafortunadamente el tamaño de las muestras no permite ir más lejos. Con todo, el modelo explica el 31,4% de la variabilidad total. Teniendo en cuenta el hecho de que el tamaño de la muestra nos ha forzado a utilizar nomenclaturas simplistas para la caracterización sociodemográfica de los individuos, y niveles de agregación geográfica toscos para la descripción de los contextos, esa cifra demuestra ampliamente la existencia de una conexión estadística fuerte entre esos factores y la exposición al riesgo de robo.

TABLA 5.5
EFECTOS SIGNIFICATIVOS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS INDIVIDUOS
SOBRE LA EXPOSICIÓN AL ROBO EN CALI (1997-1998)

Modalidades de las variables	Modalidad de referencia	Parámetro estimado ⁽¹⁾	Respuesta marginal estimada
Constante		-2,49	8%
Sexo	Hombre	0,58****	13%
	Mujer	-0,58	4%
Edad (hombres)	Hombres 25-29 años	-1,11***	3%
	Hombres 50-59 años	1,52****	28%
	Hombre 60 años o más	-0,18	6%
Edad (mujeres)	Mujeres 18-24 años	0,52*	12%
	Mujer 60 años o más	-0,50	5%
Nivel de educación	Secundaria incompleta	0,74****	15%
	Universitaria	-1,00	3%
Estrato socioeconómico y lugar de residencia	Muy bajo y bajo (1,2) barrios norte y este	0,71****	14%
	Muy bajo y bajo (1,2), barrios oeste	-0,86**	3%
	Alto y muy alto (5,6), barrios sur	-0,02	8%
Condición de migración	Nacido en Cali de padres nacidos en Cali, migrante del interior del Valle, Cauca o Nariño	-0,76****	4%
	Migrante del resto de Colombia	0,32	10%
Lugar de trabajo	A domicilio, local público (comercio, taller), vehículo (taxi, bus), puerta a puerta.	0,83****	16%
	Muestrario, quiosco, vendedores en calles	-0,94	3%
Prof. liberal, ejecutivo, secretaria, personal administrativo	Mulato	1,66***	30%
	Blanco	-1,16	3%
Vendedor fijo y ambulante, obrero calificado de la industria	Sin efecto de fenotipo		
	Blanco	-0,07	7%
Asalariado en servicios, obrero no calificado, desempleado	Negro	0,81**	16%
	Mestizo	-1,35**	2%
	Blanco	-0,01	8%
Obrero calificado del artesano, de la construcción, del transporte	Sin efecto de fenotipo		
	Blanco	0,84	16%
Empleado doméstico, mensajero, doméstica, jubilado, estudiante	Mestizo	-1,02***	3%
	Blanco	0,24	10%

(1) Efectos significativos en umbrales de confianza de: *90%, **95%, ***99%, ****99,9%.

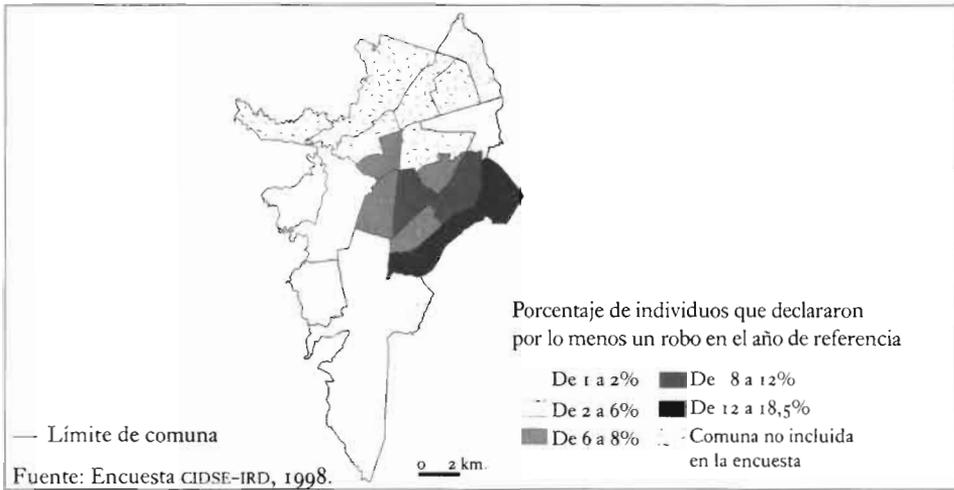
En esta tabla sólo se incluyen las modalidades de variables cuyo efecto es significativo.

Fuente: Encuesta CIDSE-IRD, junio 1998.

En primer lugar, se constata que la varianza explicada por el modelo se reparte de manera desigual entre dos tipos de factores: alrededor de un tercio es imputable a los efectos del sexo y la edad, mientras los dos tercios restantes son debidos a factores sociales y espaciales (de los cuales el 25% se debe sólo al efecto cruzado de la categoría socioprofesional y el fenotipo). En Cali, en 1998, entre las personas de 18 años y más, los hombres tienen una probabilidad tres veces superior a la de las mujeres de ser víctimas de un robo, por otra parte con todas las cosas iguales⁴⁶. La edad opera de manera muy diferente en los casos de la exposición al robo y en el de las formas graves de criminalidad que, sabemos, están fuertemente asociadas con los jóvenes adultos (tanto víctimas como actores). Según el modelo, los hombres de estos grupos de edad (sobre todo los que se encuentran entre los 25-29 años) al contrario están menos expuestos al robo que los de 60 años y más, mientras el riesgo más alto se sitúa entre los 50 a los 59 años; en total, los hombres de 50-59 años pueden ser robados diez veces más que los de 25-29 años. La lógica en el caso de las mujeres opera inversamente; la exposición al robo disminuye regularmente con la edad: las menores de 25 años se exponen así a un riesgo 2,5 veces superior al que corren las de más de 60 años.

46 Se trata de una constante en la criminología. En Colombia, entre los delitos registrados por la ENH en 1995, la proporción de hombres entre las víctimas era de 56%, mientras que la proporción en las 11 ciudades comprendidas en la encuesta es mayoritariamente femenina (RUBIO, 1996, tabla 11). Por otra parte, la tasa de masculinidad aumenta de acuerdo con la gravedad de los delitos; esta tasa alcanzaba el 67% en 1998 como promedio nacional para los golpes y heridas voluntarias (Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 1999: 55 y 68) y puede volverse extrema en los casos de homicidios: 93,2% en 1996 en Cali (GUZMÁN, en URREA y ORTIZ, 1999: 51).

MAPA 5.5
ROBO SIN AGRESIÓN FÍSICA EN CALI POR COMUNA (1998)



Concepción y realización: O. BARBARY y O. PISSOAT

Ahora bien, conviene recordar algunas características de la población acusada de los crímenes o delitos. En su inmensa mayoría, se trata de una población joven y masculina. Según las estadísticas de la policía en 1995 en Cali, entre las personas implicadas en el conjunto de los delitos había un 96% de hombres, 58% de individuos entre los 18 a 30 años y un 12% de menores de 18 años, mientras la participación de mayores de 50 años fue marginal (2,6%). Entonces se puede sostener, siguiendo a GUZMÁN, que los crímenes graves se juegan “entre pares”; por tanto, víctimas y autores comparten las mismas características sociales: “hombres jóvenes, con bajo nivel de educación, trabajadores informales, obreros o empleados” (GUZMÁN, en URREA y ORTIZ, 1999: 51). Al contrario, en el caso de los pequeños delitos, la población delincuente (hombres jóvenes, incluyendo adolescentes) y la población de las víctimas principales (hombres de más de 40 años y mujeres de menos de 40 años) están disociadas. RUBIO deriva un argumento de esta misma constatación alcanzada en 1995 a partir de los datos de la ENH, para apoyar la tesis de un comportamiento “racional” de los delincuentes, quienes buscan reducir el riesgo atacando con mayor frecuencia a las personas mayores y a las mujeres (RUBIO, 1999: 250 y 252). En efecto, se sabe el papel que cumple el “cálculo” en

los comportamientos delictivos, pero en la lógica también prosaica del mercado, se puede llegar a pensar que los pequeños delincuentes no roban a sus pares, del mismo sexo y edad, en primer lugar porque éstos en general no tienen nada que robarles. El análisis de la exposición al robo según las características sociales y los contextos urbanos en Cali aclara esa discusión.

Los parámetros del modelo, analizados en su conjunto, permiten describir las categorías sociales más expuestas al riesgo de robo. Ellas se componen de activos surgidos de las clases populares con un nivel de educación intermedio (particularmente los trabajadores independientes y los obreros calificados del artesanado, la construcción, la industria y el transporte), quienes con mucha frecuencia residen en sectores muy bajos, bajos o medios de las zonas periféricas del este y el noreste de la ciudad (estratos socioeconómicos 1, 2 y 3). Así, con todo lo demás igual, las personas de nivel escolar secundario incompleto sufren una exposición al robo cinco veces superior a las que tienen un nivel universitario; los residentes de los tres más bajos estratos socioeconómicos de los barrios del este y el noreste, dos veces superior a quienes viven en los barrios medios y acomodados del sur de la ciudad, mientras que —como lo sugería la cartografía de las tasas— en los barrios auto-construidos de las franjas occidentales, esta exposición es cuatro veces menor que en los barrios populares del este. Respecto al efecto del contexto socioespacial, esos resultados, confirmados mediante los análisis antropológicos más finos (URREA, 2000), muestran que no es el nivel de precariedad socioeconómica lo que modula exclusivamente la actividad de la pequeña delincuencia, incluso si en la escala de los grandes rasgos de la geografía social de la aglomeración, la frecuencia de los delitos parece estar ligada a la tasa de pobreza. En la escala intermedia de los tipos de barrios de Cali, la situación que aparece como “criminógena” es la coincidencia de dos dinámicas: en primer lugar, la multiplicación de núcleos de extrema precariedad que genera la crisis económica y social, y en los cuales los hombres jóvenes en particular se encuentran prácticamente excluidos del mercado de trabajo⁴⁷; en segundo lugar, el incremento local

47 Es necesario asociar con esta exclusión el absentismo y la deserción escolar de los adolescentes, que alcanza niveles muy elevados entre los muchachos.

de la injusticia social. Esta yuxtaposición espacial a escala del barrio o, más frecuentemente, a escala de un conjunto de barrios contiguos incrementa la tensión entre la precariedad de los más pobres y el desahogo, muy relativo, de los menos pobres.

Trabajar a domicilio, en los espacios abiertos al público, en los transportes o bajo la modalidad puerta a puerta, multiplica los riesgos de robo por cinco en referencia a los lugares de trabajo más informales: muestrarios o escaparates, quioscos, ventas o servicios en la calle. Por otra parte, haber nacido en Cali de parientes nacidos en Cali, o ser migrante de origen relativamente cercano (interior del Valle, Cauca o Nariño), disminuye por dos la exposición al robo, en relación con los otros estatus migratorios. Estos efectos del lugar de trabajo y de la condición de migración testimonian, en forma indirecta, una dimensión importante de la exposición al riesgo ya evocada en la sección II. C: ésta varía en función de las prácticas espaciales y de la experiencia urbana de los actores delincuentes como de sus víctimas. En ausencia de datos sobre los lugares de la actividad delincencial, la movilidad entre la vivienda y el lugar de trabajo, los medios de transporte utilizados, los mapas mentales de las zonas de riesgo, etc. (para obtenerlos es menester emprender una encuesta específica), esos dos resultados no proveen más que una pista para la investigación. Las ocasiones para cometer un acto delictuoso –la localización y la identificación de una víctima potencial– están situadas precisamente en el espacio y el tiempo urbanos por una parte y, por otra, son resultado de la percepción *a priori* de la interacción social (elección de los lugares y las circunstancias en función del riesgo y del beneficio previstos, lectura de los comportamientos propicios o dudosos para los actores). ¿Se podrían, a partir de datos más precisos, actualizar las lógicas de esta exposición diferencial al robo según las prácticas espaciales, para ver cómo están socialmente determinadas o, al contrario, cómo dejan desarrollar a los actores estrategias preventivas? Estas preguntas permanecen abiertas para estudios específicos.

Ninguna fuente estadística disponible permite relacionar a las víctimas con los autores de los delitos que las han afectado, para estudiar directamente sus condiciones respectivas. Sin embargo, se pueden extraer de los resultados empíricos precedentes algunas conclusiones sobre la determinación contextual de la exposición a la delincuencia menor y su impacto social. La imagen

que se deriva es doble. Por una parte, la delincuencia menor en Cali se ejerce principalmente al seno de los barrios populares, bajo cierta proximidad espacial y social entre los autores y sus víctimas. Por otra parte, la exposición diferencial según el sexo, la edad, la categoría socioprofesional y la pertenencia racial establece muchas líneas de demarcación al seno de la población de esos barrios: entre hombres adultos o mujeres jóvenes más expuestos y entre hombres adolescentes o jóvenes menos expuestos, entre activos de las categorías socioprofesionales más expuestos y otras categorías o estatus de actividades menos expuestas (desempleados, jubilados, domésticas, estudiantes) y, en algunos casos, entre población negra y mulata más expuesta y población blanca y mestiza menos expuesta. Es probable que estas divisiones demográficas y sociales ahonden la cesura entre la población expuesta al riesgo de robo y la que lo comete. En opinión de URREA y ORTIZ (1999: 54 a 62), uno no puede menos que inquietarse respecto a las consecuencias sobre la cohesión social del mantenimiento de estas fracturas, que se traducen especialmente en una aguda presión de la delincuencia sobre los hogares menos pobres de los barrios populares. La recesión económica –más fuerte en Cali que en otras grandes ciudades colombianas– no sólo le hace perder a las colectividades locales (departamento y municipalidad) una gran parte de sus recursos financieros, sino que en este contexto los investigadores concluyen que:

Cali, comparada con las otras ciudades del país, ha realizado un esfuerzo mínimo de inversión social, particularmente en lo que concierne a la educación secundaria y tecnológica [...] por añadidura, la repartición del total de los gastos municipales se realiza en forma muy injusta, en detrimento de los barrios más pobres de las periferias orientales y occidentales (ibíd.: 63).

C. CONCLUSIÓN: CONFLICTO ARMADO Y “SÍNDROME DE GRANDES CIUDADES”

Las violencias que afectan a Colombia se han vuelto más complejas en el curso de los dos últimos decenios. Han entrado en resonancia unas con otras a medida que a las guerrillas se han sumado nuevos actores, cada vez más influyentes y activos (organizaciones de narcotraficantes, grupos paramilitares, escuadrones de la muerte, bandas de delincuentes en las ciudades, etc.). En el origen de

esta conmoción reside especialmente el progreso alcanzado por el comercio de estupefacientes, que le ha otorgado a la lucha entre los beligerantes sus características actuales (PÉCAUT, 2002: 30). El giro seguido por el conflicto, siempre más prosaico, por otra parte conduce a compararlo con muchas guerras civiles contemporáneas, en las cuales los protagonistas apuntan al control de las riquezas locales mediante estrategias que pretenden más bien acrecentar su propio poder que defender a las poblaciones que dicen representar.

La economía de la droga –responsable principal del establecimiento de redes mafiosas– al igual que de la criminalización y la ampliación del conflicto armado, alcanzó finalmente tal dimensión que llegó a hacer tambalear las mismas estructuras de la sociedad. Es así como ésta ha participado plenamente en el surgimiento del sentimiento de inseguridad experimentado por los ciudadanos, al favorecer la corrupción, la impunidad y, tal vez más aún, al alentar comportamientos extremos entre las bandas juveniles de las periferias urbanas. Pues en ese país, desde entonces urbano, son antes que todo –y como en otras partes– las exacciones enarboladas por la delincuencia común las que amenazan más directamente la vida cotidiana de los habitantes. Esos jóvenes delincuentes están, como en otras partes, motivados esencialmente por la voluntad de escapar a la marginación de la que son víctimas. Bien dispuestos a servir a uno u/ y otro bando por dinero, no están afiliados en lo absoluto a algún movimiento ideológico. El análisis tradicional del fenómeno, al permanecer centrado sobre los aspectos “institucionales” –insuficientes para describir las dinámicas en ocurrencia en el medio urbano–, no permite más que una lectura incompleta de la evolución de la violencia en ese mismo medio. Por lo demás, poner fin a los enfrentamientos “políticos” no resolvería más que parcialmente el problema general de la violencia en Colombia.

Sin embargo, no es cuestión de separar aquí de manera absoluta los combates librados en el campo de los crímenes perpetrados en las ciudades. Las interferencias entre los diversos tipos de violencia son indiscutibles y la distinción que establecemos es principalmente analítica. Del mismo modo, insistir sobre el papel de la delincuencia organizada no busca en modo alguno estigmatizar a los jóvenes de los barrios desfavorecidos, ni mucho menos. Sólo se trata de subrayar el peso del gran bandolerismo y de sus nebulosas, y mostrar cómo la violencia ligada al contexto guerrero repercute en las ciudades, recurriendo justamente a esa mano de obra capaz de todos los sacrificios.

La violencia en la ciudad está directamente ligada a ciertos disfuncionamientos de la sociedad. Es por eso que trabajar a nivel intraurbano arroja luces sobre los puntos abandonados por los expertos. Así ocurre con la pobreza, relegada a justo título para explicar el fenómeno en el plano nacional, pero que resulta imperativo tener en cuenta cuando se aborda el tema a nivel de las metrópolis. Nosotros lo hemos hecho a propósito de Bogotá y Cali, que a fin de cuentas son casos ejemplares (la una por ser la capital del país, la otra por haber sido la sede de uno de los carteles más poderosos de Colombia). Lo mismo vale para procesos como las densidades, las movilidades espaciales y luego las “densidades inestables”, o incluso las desigualdades socioespaciales que son temas poco estudiados en su asociación con la violencia. Si ellas no son propiamente urbanas, al menos son reconocibles, una vez más, en todas las aglomeraciones del planeta. Sobre todo, determinan una exposición diferencial a los riesgos y encierran elementos de interpretación que nos parecen útiles para la comprensión del funcionamiento de las ciudades, al igual que la de los mecanismos de la violencia.

BIBLIOGRAFÍA⁴⁸

- AGIER, M. “Colombie. La violence contre la politique”, en F. WEISSMAN (dir.). *A l'ombre des guerres justes. L'ordre cannibale et l'action humanitaire*, Paris, Flammarion/Médecins sans frontières, série Populations en Danger, 2003.
- ALVAZZI DEL FRATE, A. *Victims of crime in the developing world*, publicación 57, Roma, UNICRI, 1998.
- BODY-GENDROT, S. *Villes et violence. L'irruption de nouveaux acteurs*, Paris, PUF, Recherches politiques, 1993.
- BODY-GENDROT, S. y N. LE GUENNEC. *Mission sur les violences urbaines*, Paris, La Documentation Française, 1998.
- BODY-GENDROT, S. *Les villes la fin des violences?*, Paris, Presses de Sciences Po, 2001.

⁴⁸ No figuran aquí las referencias bibliográficas que tratan específicamente sobre Colombia: éstas se encuentran en la bibliografía general ubicada al final de la obra.

- BUI-TRONG, L. "Les violences urbaines à l'échelle des R. G. État des lieux en 1998", en *Les cahiers de la sécurité intérieure*, n.º 33, Paris, Ministère de l'Intérieur, 1999.
- CHESNAY, J. C. "L'homicide et le suicide dans le monde industriel: le cas russe", *Population*, n.º 1, Paris, 1999.
- DAVID, D. "Violence internationale: une scénographie nouvelle", *Ramses 2000*, Paris, IFEA-Dunod, 1999.
- Direction Centrale de la Police Judiciaire. *Aspects de la criminalité et de la délinquance constatées en France en 1998*, Paris, La Documentation Française, 1999.
- FAJNZYLBER, P.; D. LEDERMAN y N. Loayza (eds.). *Crimen y violencia en América Latina*, Bogotá, Alfaomega y Banco Mundial, 2001.
- GÓMEZ, H. (coord.). *Urban crime: global trends and policies*, Tokyo, United Nations University, 1989.
- LONDOÑO, J. L. y R. GUERRERO. *Violencia en América Latina, epidemiología y costos*, BID, Documento de trabajo de la Red de Centros de Investigación, R 375, 1999.
- MACÉ, A. "Les violences dites "urbaines" et la ville", *Annales de la Recherche Urbaine*, n.º 83-84, Paris, 1999.
- MILLE, M. "Les temporalités quotidiennes urbaines. L'exemple de la métropole lilloise", Lille, tesis de Doctorado en geografía humana de los espacios industriales, Université de Lille 1, 2000.
- MOSER, C. y E. SHRADER. *A Conceptual Framework for Violence Reduction*, Washington, World Bank, LCR, Sustainable Development Working Paper n.º 2, 1999.
- Naciones Unidas. *Demographic Yearbook*, New York, 1994 y 1999.
- PINHEIRO, P. S., "Reflections on urban violence", *The Urban Age*, vol. 1, n.º 4, Washington, 3, The London School of Economics and Political 1993.
- SCHÖNTEICH, M. "South Africa's position in Africa's crime rankings", *African security review*, vol. 9, n.º 4, Institute for Security Studies, Halfway House, 2000.
- SCHÖNTEICH, M. and A. LOUW. *Crime in South Africa: a country and cities profile*, Occasional Paper n.º 49, Centurion, shot Africa, Institute for Security Studies, Halfway House, 2001.
- WACQUANT, L. *Les prisons de la misère*, Paris, Raisons d'agir, 1999.

CAPÍTULO SEXTO

*Bogotá: crecimiento, gestión urbana y democracia local**

THIERRY LULLE (COORD.)

FRANÇOISE DUREAU

VINCENT GOUËSET

La producción de la ciudad se deriva de las interacciones entre sus diversos actores, públicos y privados, colectivos e individuales. El papel del Estado en la definición de las formas y la extensión del crecimiento urbano –papel con frecuencia considerado como limitado en Colombia–, no resulta menos determinante, incluso cuando en ocasiones actúa de manera indirecta o inesperada (LULLE y LE BRIS, 2000). El objetivo de este capítulo es analizar –apoyándose en el ejemplo de Bogotá y su región metropolitana– la influencia de los poderes públicos sobre las dinámicas urbanas a lo largo de los tres últimos decenios del siglo XX, período caracterizado a la vez por la continuidad del movimiento de crecimiento urbano iniciado en el curso del período precedente y por una profunda reforma de las modalidades de la acción pública, dirigidas hacia una mayor democracia y descentralización.

En los capítulos anteriores, se insistió en el análisis de las prácticas sociales y residenciales de la población en comparación con detrimento del examen de las políticas públicas, aunque estas últimas fueron mencionadas con cierta frecuencia. Ahora bien, estas políticas –sean nacionales o locales– han vivido etapas bien diferenciadas en Colombia, a lo largo de las cuales emergieron teorías o prácticas de planificación urbana que perduraron, fracasaron y en ocasiones resurgieron, ajustándose a diversas condiciones. Como en otras regiones de América Latina (SABATÉ y ROBERT, 1990), desde los años 1950 la planificación económica y el ordenamiento del territorio han estado a la orden del día, debido al incremento de los desequilibrios socioespaciales a escalas nacional y local, si bien la puesta en marcha de esas políticas sigue resultando difícil. Desde los años 1970, pero especialmente después de mediados de la década de 1980, la situación evolucionó gracias a los cambios que introdujeron en la gestión urbana las políticas de descentralización, democratización y racionalización de los procedimientos administrativos. Estas reformas, que se inscriben en una lógica latinoamericana e incluso mundial, han sufrido igualmente las consecuencias de la coyuntura colombiana: ciclos económicos del café, del petróleo y del narcotráfico, apertura económica y reformas neoliberales, problemas políticos ligados a la acción de grupos subversivos armados

* Con la colaboración de ÉVELYNE MESCLIER.

pero también debidos al debilitamiento relativo de la clase política tradicional, aspiración creciente de la sociedad civil hacia la apertura y el cambio social, político y cultural.

La acción pública tiende entonces a ser reformulada según la evolución de las relaciones entre los diferentes actores del desarrollo urbano. Aquí nos referimos al caso de Bogotá. La capital colombiana experimentó —en el curso de la segunda mitad del siglo xx— un doble proceso de densificación de su perímetro urbanizado y de “metropolización”, es decir, de continuación de su crecimiento más allá de sus límites administrativos (caps. primero y tercero). Gracias a su dinamismo, esta ciudad no ha cesado de afirmar su poder de atracción sobre el aparato productivo y los flujos migratorios del conjunto del país, ejerciendo un creciente dominio sobre la red urbana nacional. En su calidad de capital, ha sido objeto de un estricto control por parte del poder central, lo cual no le ha impedido —o más precisamente le ha permitido— beneficiarse de algunas experimentaciones políticas y urbanas en ocasiones audaces, especialmente a lo largo del último decenio del siglo xx. La fuerza del crecimiento de Bogotá y la especificidad de las políticas urbanas que se han emprendido allí, nos incitan a plantear las siguientes preguntas:

— Las recientes reformas en materia de descentralización, de democratización y de planificación urbana, ¿pueden responder a los problemas planteados por las nuevas formas de crecimiento y de segmentación socioespacial observables en Bogotá y su periferia metropolitana desde los años 1980? Si es así, ¿en qué forma?

— ¿Cómo se han renovado las políticas territoriales y los instrumentos para implementarlas? ¿Son ellos los llamados a mejorar la concertación entre los diferentes actores de la ciudad, en el marco de la Constitución de 1991 y de las transformaciones que generó?

— ¿Cómo evolucionan las lógicas temporales y territoriales de los poderes públicos y cómo se articulan con las lógicas de los otros actores? Las prácticas tradicionales de poder ¿están realmente amenazadas, se están reformando o, en el fondo, apenas se están reformulando?

En los estudios urbanos, particularmente en Colombia, las aproximaciones que confrontan las políticas urbanas con el crecimiento socioespacial aún están relativamente poco desarrolladas. Si bien existen trabajos sobre, por una parte, las formas del crecimiento urbano y, por otra parte, los impactos de la

descentralización, la democratización o la planeación y gestión sobre el desarrollo de las ciudades, son mucho más escasos los trabajos que se proponen analizar específicamente las interacciones entre esos dos niveles.

Tal es, precisamente, el objetivo de este capítulo, centrado en la acción pública en materia de ordenamiento urbano en Bogotá desde los años 1970. Después de mostrar a grandes rasgos la evolución de las políticas urbanas en la capital colombiana y observar los desafíos de las recientes reformas institucionales, veremos en forma más detallada cómo operan las políticas sectoriales de vivienda, de servicios públicos y de transporte sobre las dinámicas socioespaciales en esta aglomeración.

I. LOS RETOS DEL CRECIMIENTO URBANO: ¿CONCILIAR UNA MAYOR DEMOCRACIA CON UNA MEJOR PLANIFICACIÓN?

A todo lo largo del siglo XX, el rango de capital ha hecho de Bogotá una ciudad muy controlada por el poder central. Hasta fines de los años 1980, la dirección de su alcaldía era todavía el único cargo en Colombia nombrado directamente por el presidente de la República, y la alcaldía de Bogotá sirvió a veces como trampolín para acceder a la presidencia del país. Este estatus privilegiado también le permitió a Bogotá servir como laboratorio para la elaboración y ejecución de nuevas políticas de desarrollo. Durante los decenios de mayor crecimiento urbano, desde los años 1950 a los años 1970, los poderes públicos no tuvieron éxito —a pesar de sus deseos— en poner freno a la rapidez del crecimiento urbano ni limitar la amplitud de los problemas generados por el mismo. Estos decenios, de tanteo en materia de políticas urbanas, han dejado una herencia de dificultades que las reformas democráticas de los años 1980 estaban llamadas a resolver mediante respuestas innovadoras y apropiadas.

A. LAS VELEIDADES DE LA PLANIFICACIÓN DE LOS AÑOS 1970: UNA ACCIÓN PÚBLICA SUPERADA POR LA AMPLITUD DEL CRECIMIENTO URBANO

Si durante los años 1950, y más aún en el curso del decenio siguiente —con la creación del Departamento Nacional de Planeación (DNP)—, la planificación empezó a ocupar un lugar innegable en la Administración Pública nacional,

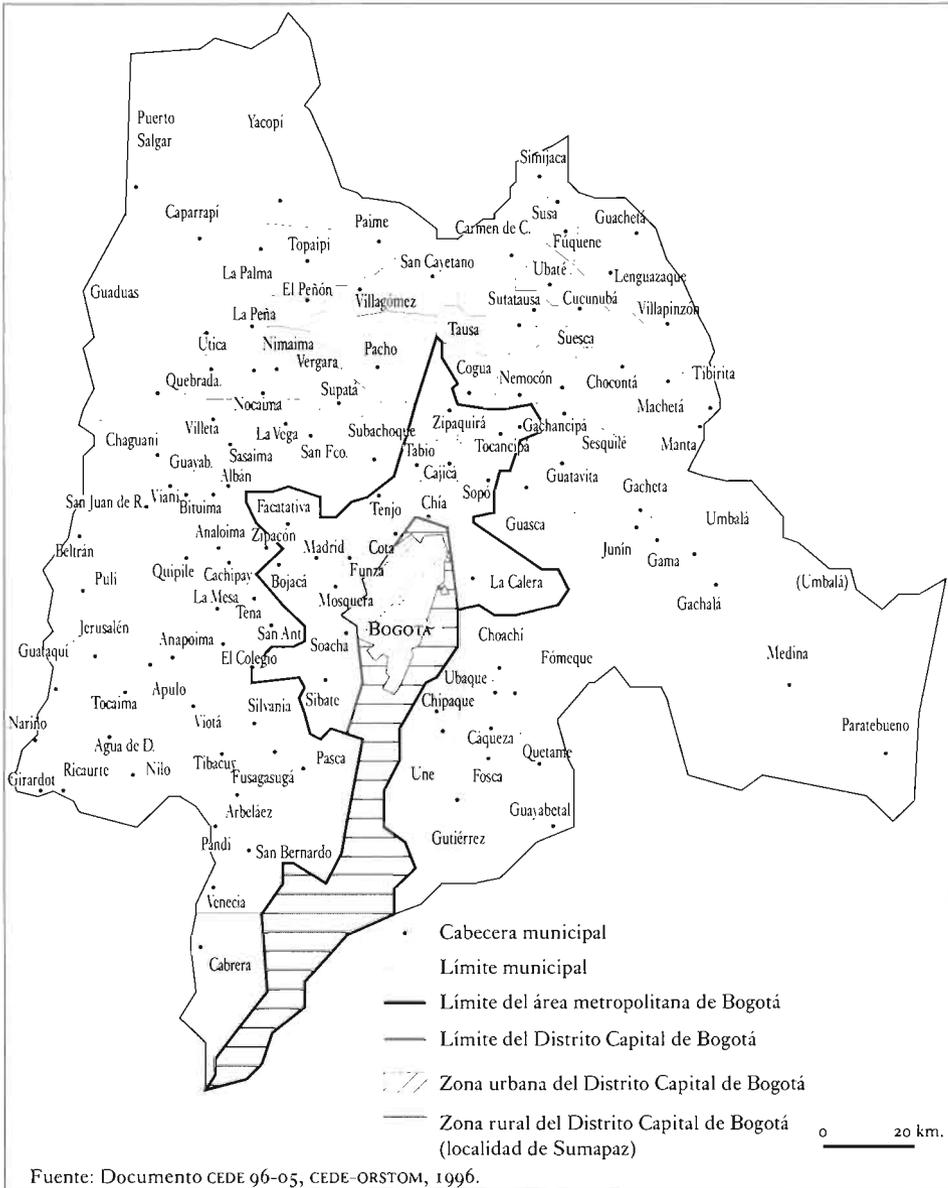
sus efectos en materia de desarrollo territorial son escasos. Aunque el campo —que en la época es el punto de partida de muchos flujos— y las ciudades —que crecen muy rápidamente— son objetos de políticas específicas, estas últimas sólo son parcialmente aplicadas y sus efectos permanecen limitados: los gobiernos de LLERAS (1966-1970) y después el de LÓPEZ (1974-1978) afirman querer volver a dar sus atractivos al campo a través de una reforma agraria (política de “Vínculos con la tierra” y luego “Desarrollo rural integral”); el gobierno de PASTRANA (1970-1974) busca equilibrar el desarrollo de las ciudades al reforzar las ciudades medianas y contener el crecimiento de las más grandes (plan denominado “Las cuatro estrategias” seguido por el de “Ciudades en la ciudad”). Lo mismo vale para la legislación urbana, caracterizada por una larga serie de ensayos infructuosos. Estas contradicciones han sido analizadas como resultado de presiones de grupos socioeconómicos que buscaban obtener provecho del desarrollo urbano (PRADILLA, 1974).

Esta situación se manifiesta muy particularmente en Bogotá, donde el crecimiento era entonces muy fuerte: algunas de estas políticas nacionales, como la de “Ciudades en la ciudad”, o el innovador sistema de crédito para acceso a la propiedad basado en la Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC) sobre el cual volveremos, aspiran en vano a canalizar este crecimiento. Al mismo tiempo, las autoridades municipales proceden a realizar intervenciones que, sin tener como objetivo el control de la expansión urbana, no dejan de tener un efecto determinante sobre éste: es el caso especialmente de la construcción de grandes ejes de circulación.

I. UN ESTATUTO ADMINISTRATIVO Y UNA REORGANIZACIÓN TERRITORIAL QUE ANTICIPAN EL CRECIMIENTO DE LA CAPITAL COLOMBIANA

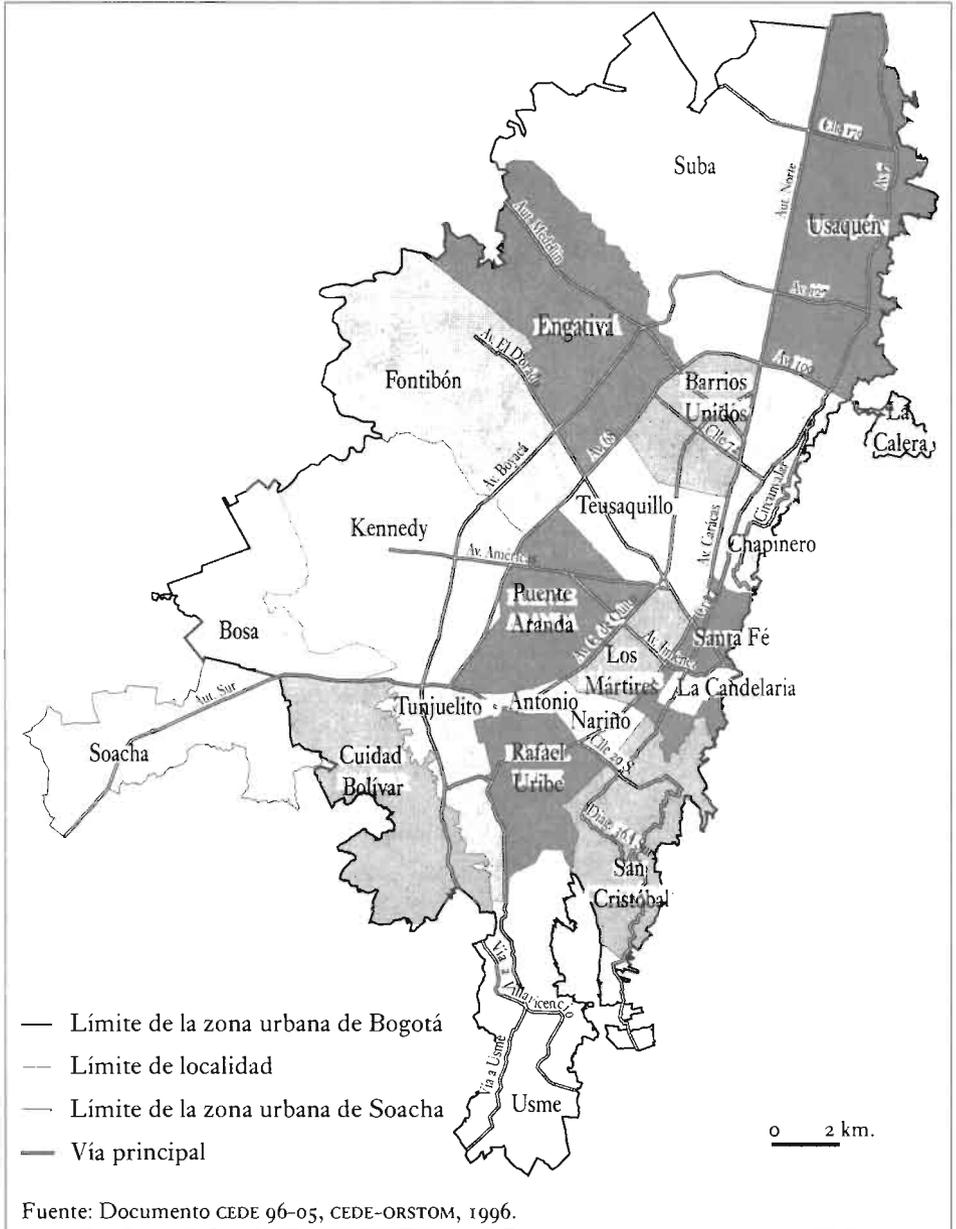
El nuevo estatuto de *Distrito Especial* (DE) conferido a la capital en 1945 y luego reforzado en 1954 mediante un decreto del gobierno militar de ROJAS PINILLA, le permitió a Bogotá librarse del régimen municipal ordinario. Este decreto de 1954 también extendió los límites territoriales de la ciudad, al anexas seis municipios de su periferia que se transformaron en seis nuevas alcaldías menores (futuras localidades), que a su vez se unieron a las once existentes (mapas 6.1 a 6.3): Usaquén, Engativá, Fontibón, Bosa, Suba y Usme. La su-

MAPA 6.1
LÍMITES ADMINISTRATIVOS DE CUNDINAMARCA
Y DEL ÁREA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (1993)



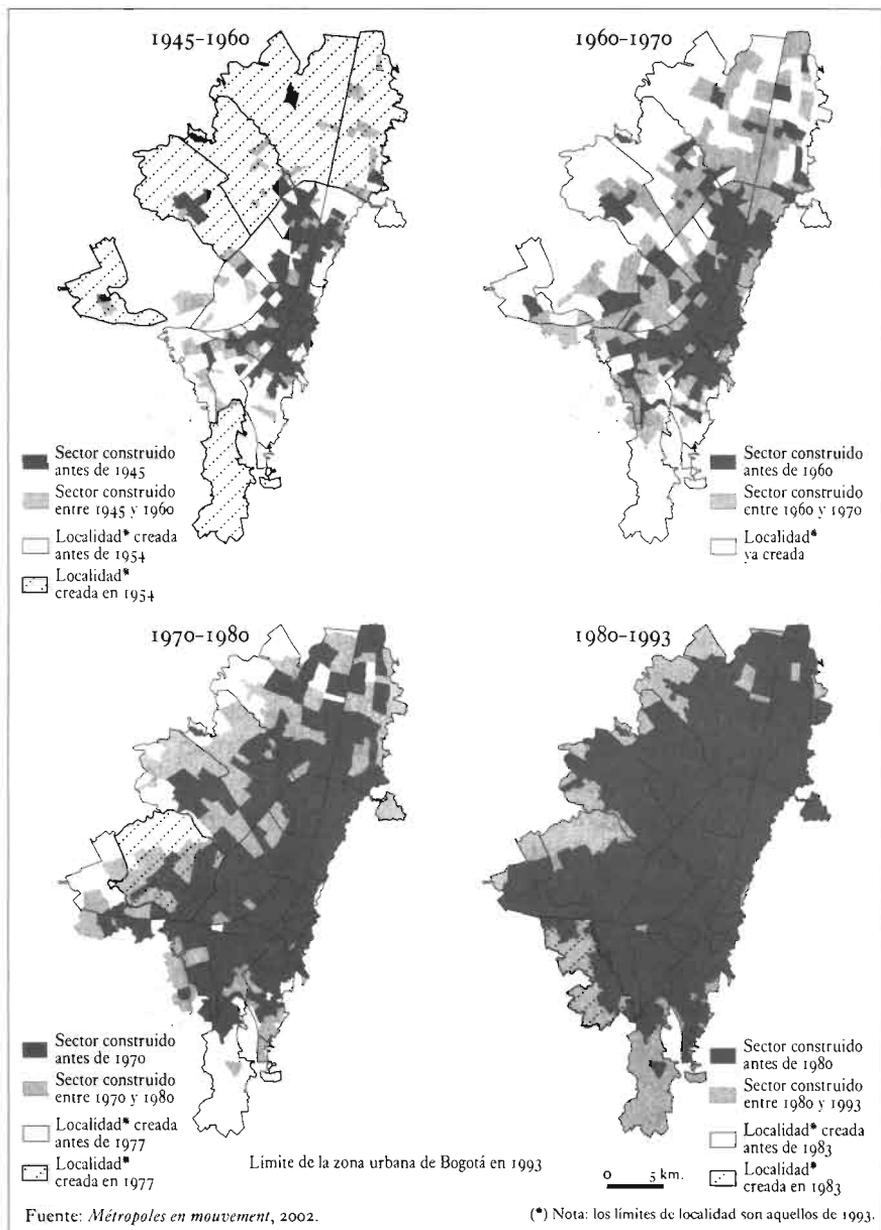
Concepción y realización: F. DUREAU y O. PRISOAT

MAPA 6.2
LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ (1993)



Concepción y realización: F. DUREAU y O. PISSOAT

MAPA 6.3
EXPANSIÓN ESPACIAL DE BOGOTÁ (1945-1993)



Concepción y realización: O. PISSOAT, F. DUREAU, R. MONTEZUMA y T. LULLE

perficie delimitada por este nuevo perímetro administrativo alcanzaba entonces las 59.000 ha², de las cuales sólo 8.000 estaban urbanizadas (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2000). Más tarde, se crearon dos nuevas localidades (Kennedy en 1977 y Ciudad Bolívar en 1983), lo cual convierte la superficie del Distrito en un área cercana a las 85.000 ha. Por último, en 1986 se creó la vigésima y última localidad, la de Sumapaz, inmensa zona rural que se extiende al sur de la ciudad y le permite alcanzar un total de 173.000 ha (mapa 6.1). Esta superficie se subdivide hoy en 28.000 ha urbanas, 20.000 ha suburbanas y 125.000 ha de zona rural (no sólo en el macizo de Sumapaz, sino también en las orillas de las localidades periféricas).

Los documentos administrativos y técnicos testimonian la presencia de importantes vacilaciones entre los planificadores respecto al uso de distintas nociones, como “límites administrativos”, “perímetro urbano”, “perímetro de servicios”; ahora bien, el desafío es considerable, pues del empleo de una u otra de estas nociones dependen tanto la regularización de la urbanización informal como los resultados de la estimación de las superficies todavía urbanizables legalmente.

Según el POT (Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, 2000), en 1964 la ciudad tenía un perímetro urbano —que obedecía a los reglamentos de urbanismo— de 14.615 ha, de las cuales sólo el 54% se encontraba urbanizado o construido. En otras palabras, los márgenes rurales y suburbanos de Bogotá eran muy extensos (alrededor de 51.000 ha); esta enorme disponibilidad de suelo urbanizable facilitó una expansión rápida y lineal hasta mediados de los años 1980.

En 1979, el Acuerdo 7 redefinió el territorio de Bogotá en forma más explícita pero todavía imprecisa. Allí se distinguía el perímetro de servicios del perímetro urbano: el primero delimitaba el área que debía ser cubierta por los servicios públicos, mientras el segundo, situado más allá del primero, incluía el conjunto de espacios urbanizados (especialmente los barrios de origen ilegal en los cuales esos servicios no estaban asegurados). Esta distinción, abandonada a comienzos de los años 1990, resulta interesante. Demuestra claramente la voluntad de las autoridades públicas para controlar la expansión urbana, al

2 Fuente: sitio web animado por investigadores de la Universidad Nacional de Colombia [www.redbogota.com] y la Contraloría de Santafé de Bogotá (1977).

rehusarse a dotar de servicios públicos a los sectores cuya urbanización era juzgada indeseable (zonas inundables, tierras agrícolas muy ricas, vertientes inestables, sectores montañosos muy elevados, etc.). Pero al mismo tiempo, también muestra su incapacidad para lograr este control pues al definir el perímetro urbano se reconocía el estado de la urbanización real. De hecho, los dos perímetros se superponían más o menos, y la mayoría de las zonas urbanizadas ilegalmente por fuera del perímetro de servicios terminaron integradas en éste. En 1985, el perímetro urbano alcanzaba las 24.800 ha (esta superficie creció, pues, en 20 años, un 70%), de las cuales el 85% estaba realmente urbanizado. De acuerdo con los autores del POT, este aumento se explica gracias a un crecimiento muy rápido de la demanda, con un modelo de ocupación del suelo muy poco denso mientras las reservas de tierras del Distrito parecían todavía muy importantes.

Esta acumulación de iniciativas —a todo lo largo de la segunda mitad del siglo XX— que aspiraban a dotar a la ciudad de nuevas delimitaciones territoriales y a incrementar el perímetro oficialmente urbanizado, incluso si no es el resultado de una política explícita, se ha anticipado sin duda al crecimiento de Bogotá. Además, esa acumulación no es extraña a la relación de fuerzas entre la capital y el departamento de Cundinamarca que la rodea. Volveremos sobre el tema al analizar las tensiones subyacentes al fracaso de la creación de un área metropolitana.

Al margen de estas iniciativas estrictamente territoriales, el estatuto administrativo del Distrito fue objeto de una reorganización completa durante los años 1960 y comienzos de los años 1970, principalmente mediante el decreto 3.133 de 1968. Las dos estructuras principales, creadas con el fin de hacerse responsables de la planificación urbana, fueron el Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD) y, en 1972, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), este último encargado de la construcción, el mantenimiento y la extensión de la red vial.

2. PLANES DE URBANISMO EN PERMANENTE DESFASE RESPECTO A LA EXPANSIÓN URBANA

Aunque sólo fue parcialmente implementado, el *plan regulador* del equipo constituido alrededor de LE CORBUSIER en 1947 fue decisivo para los dos

decenios siguientes: esta intervención de naturaleza espacial, al esbozar especialmente el trazado de la red vial actual, contribuyó en seguida a orientar los grandes ejes de la expansión urbana. A partir de 1968, cambia la aproximación a la planificación urbana de Bogotá: de ser puramente espacial pasó a ser más integral, más socioeconómica (CORTÉS y DEL CASTILLO, 1994). El Decreto 3.133 de 1968 la define como un conjunto de reglamentos conducentes a crear y conservar las condiciones sociales, económicas y espaciales favorables para el desarrollo de la comunidad. El plan de 1968 privilegiaba entonces la zonificación (teniendo en cuenta especialmente las densidades de población para definir las zonas urbanizables), la renovación urbana, los programas de vivienda (integrando las nociones de propiedad individual y copropiedad) y los programas de inversión en los servicios públicos y sociales. No obstante, a falta de mecanismos eficaces de gestión, el plan de urbanismo de 1968, al igual que los que le sucedieron (el plan Fase II de 1972, que aplicaba algunos aspectos de las políticas nacionales a las ciudades, como el sistema UPAC; el Plan Integral de Desarrollo Urbano de la Zona Oriental de Bogotá –PIDUZOB–, etc.) tuvieron pocos efectos en relación con el manejo del crecimiento de Bogotá.

El Acuerdo 7 de 1979, concebido para constituir un nuevo plan de desarrollo integral de la ciudad, se fundaba en gran medida en el control del uso de tierras. Se trataba de traducir en reglamentos los objetivos enunciados en Fase II, al racionalizar especialmente la repartición espontánea de las funciones urbanas con el fin de inscribirlas en un modelo coherente de estructuración del espacio. Igualmente, el Acuerdo 7 definió un perímetro de extensión de los servicios públicos y propuso una reglamentación de uso del suelo, un plan de red vial y un código para la construcción. Se anticipaba a la expansión de la ciudad hacia el sur y el occidente, pero también a la densificación en las zonas existentes y en curso de consolidación. Con todo, este Acuerdo no incluía un verdadero plan de desarrollo y permanecía desconectado de algunas grandes políticas nacionales, como la de vivienda social.

Pero sobre todo, este Acuerdo constituyó un documento de transición que, a despecho de una aparente voluntad de “poner al día las normas”, dejó el campo libre a los promotores y a los constructores. Igualmente, se prestó para el desarrollo de lo informal, especialmente al convertir en ilegales las operaciones de construcción fuera del perímetro de los servicios, lo que, pa-

radóticamente, se convirtió –a los ojos de numerosos constructores– en una garantía de que sus barrios serían, a más o menos largo plazo, cubiertos por los servicios públicos, para ser posteriormente legalizados.

El balance de la situación es entonces muy moderado. De todas maneras, aquí es necesario tener en cuenta dos aspectos adicionales que finalmente fueron determinantes para el proceso de urbanización: por una parte, las políticas nacionales que favorecían la construcción de vivienda para las clases medias; por otra parte, la elaboración simultánea –desde finales de la década de 1950– de planes viales (1957, 1967, 1973-76, 1980). Entre estos planes, algunos –ejecutados tardía y parcialmente (el de 1980 sólo se ejecutó a medias en 1987, según ACEVEDO, 1990)– tuvieron un efecto estructurante para el crecimiento de la ciudad, al favorecer la expansión de la superficie edificable más allá del perímetro urbano (MONTEZUMA, 1997) o bien al introducir nuevos trazados, ligados al surgimiento de barrios clandestinos en el occidente.

La planificación estuvo entonces limitada al mínimo, pero tuvo éxito al menos en la organización de los principales ejes de desarrollo urbano y en la garantía de la accesibilidad. Finalmente, es este modo de intervención el que permitió orientar, “acompañar”, el crecimiento espacial. Pero esta lógica, consistente en marcar el territorio y acondicionarlo, no fue suficiente para satisfacer la muy alta demanda de viviendas sociales y equipamientos. La regularización *a posteriori* de los barrios informales fue preferida a cambio de una intervención que tratara desde más arriba el problema de la vivienda popular. Ese proceso de legalización, emprendido desde 1949, por lo demás ha permanecido muy lento.

B. EL GIRO DEMOCRÁTICO DE LOS AÑOS 1980 Y 1990: HACIA UNA REDEFINICIÓN DE LOS PODERES LOCALES Y DE LAS INSTITUCIONES TERRITORIALES

En el curso de la década de 1980, Bogotá entra claramente en un proceso de metropolización. La urbanización alcanza en numerosos lugares los límites del Distrito, mientras algunas zonas se densifican. Los municipios vecinos crecen todavía más que Bogotá, de tal manera que la expansión se cumple a veces sin discontinuidad física. Al mismo tiempo, las disfunciones ligadas a las debilida-

des de la planificación urbana del pasado se vuelven flagrantes: insuficiencia de transporte colectivo, deficiencia de servicios públicos domiciliarios y sociales, medio natural degradado, etc. Las reformas emprendidas en el curso de los años 1980 en materia de democratización y descentralización hacen emerger, de todos modos, un arsenal de nuevas reglas y herramientas, tanto en el plano nacional como local, que redefinen los poderes de los alcaldes, en lo sucesivo elegidos, y fundan o acompañan sus políticas territoriales. Los últimos alcaldes en la fecha contribuyeron—cada uno a su manera— a cumplir con estos cambios: JAIME CASTRO (1992-1994) emprendió una importante reforma institucional y financiera; ANTANAS MOCKUS (1995-1997) se comprometió con la promoción de la “cultura ciudadana”; ENRIQUE PEÑALOSA (1998-2000) centró su política sobre la reconquista de los espacios públicos³.

I. UN NUEVO MARCO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO AL SERVICIO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

Las reestructuraciones políticas y administrativas del último decenio responden a nuevas exigencias que provienen de dinámicas tanto mundiales como nacionales. Las organizaciones internacionales (Naciones Unidas, BM, BID, CEPAL) ponen a circular numerosos conceptos nuevos, como los de “democracia participativa”, “*governance*”, “desarrollo sostenible”, “ciudad autorregulada”, “desarrollo integral de los barrios populares”, etc., que localmente devienen referencias corrientes, sin que sus diversos usuarios perciban siempre las ambigüedades. En efecto, estos conceptos con connotaciones democráticas también dejan pasar, en las economías nacionales, profundas reformas neoliberales (OSMONT, 1995). Pero esos cambios también responden a nuevas exigencias específicamente locales. Tras el final del Frente Nacional (1974), se vuelve cada vez más imperiosa la necesidad de restaurar la legitimidad del

3 MOCKUS y PEÑALOSA también perciben la necesidad de una reorganización de la administración del Distrito, que prácticamente no se había modificado desde 1970. Fue así como MOCKUS se propuso, durante su primer mandato y de nuevo en el segundo (que comenzó en 2001), fusionar los diversos servicios ligados con la gestión de los transportes y del espacio público en un solo servicio de “Tiempo y espacios públicos”, proyecto que hasta la fecha no ha alcanzado resultados.

Estado, no sólo mediante la democratización de las instancias representativas sino también con la instauración de mecanismos de participación ciudadana. En efecto, los ciudadanos colombianos, quienes también son en proporciones crecientes ciudadanos, aspiran a una mayor participación en los procesos de toma de decisión y experimentan nuevas preocupaciones: la calidad del ambiente, los espacios públicos, la seguridad, etc. Por último, en el plano nacional, el Gobierno debe ser reorganizado para poder administrar las regiones más apartadas. Es en este contexto donde se ponen en ejecución las políticas de descentralización y democratización (recuadro 6.1), consagradas por la nueva Constitución de 1991. Al mismo tiempo, el gobierno Gaviria (1990-1994) aprueba la apertura económica, la reforma del Estado y el desmantelamiento de algunas instituciones de intervención sectorial.

RECUADRO 6.1

EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN

Las primeras medidas para cumplir el proceso de descentralización fueron tomadas en el curso de los años 1980. La Ley 14 de 1983 reforzó la capacidad de las comunidades locales (departamentos y municipios) para generar recursos propios. En 1986 se inicia una fase decisiva: el municipio recibe las competencias y los recursos que hasta entonces estaban en manos de la Nación (leyes 11 y 12 del mismo año y luego decretos reglamentarios de 1987). Otras medidas importantes se implementaron especialmente mediante nuevos códigos administrativos departamentales y municipales.

De esto resulta que:

- Los alcaldes son elegidos desde entonces popularmente mediante sufragio universal y por un período de dos años (posteriormente, la duración de este mandato se extiende a tres años y luego a cuatro).
- Los departamentos son dotados de funciones propias.
- El Concejo Municipal puede dividir el territorio en comunas (en el perímetro urbano) y corregimientos (en la zona rural), con una Junta Administradora Local (JAL) en los dos casos y en la cual al menos un tercio de los miembros son elegidos por sufragio universal directo.
- Se establece la presencia de representantes de los usuarios en los consejos de administración de las empresas de servicios públicos.

La nueva Constitución de 1991 y las leyes orgánicas que se derivan favorecen otros cambios, como:

- La posibilidad de creación de nuevas entidades territoriales, en particular las áreas metropolitanas (cuya creación estaba prevista desde 1979 en el decreto 3104, y se formalizará en la Ley Orgánica 128 de 1994) y las asociaciones de municipios (Ley 136 de 1994).

- La conversión de las antiguas intendencias en departamentos.
- La elección de gobernadores de departamentos que pueden nombrar libremente a los directores de las entidades descentralizadas.
- La creación del sistema nacional de planificación, mediante el cual se constituyen los Consejos de Planificación municipal, departamental y nacional, con la participación de representantes de los grupos económicos, de la comunidad y de otros intereses diversos.
- La obligación de elaborar los planes de desarrollo sectorial, conforme a los objetivos definidos en el plan nacional de desarrollo y con el objetivo de ofrecer coherencia al uso de los recursos transferidos.
- La consagración del principio de participación comunitaria y su aplicación en la elaboración, ejecución, establecimiento de contratos, seguimiento y control de la política pública.

Las orientaciones y medidas adoptadas en el plano nacional generan numerosas consecuencias en la gestión municipal, especialmente en Bogotá, que deviene en 1993 un Distrito Capital (DC)⁴. Aquí nos dirigimos hacia dos de ellas, que presentan fuertes implicaciones territoriales: a escala intraurbana, la revalorización de las localidades; y, a escala regional, la posibilidad de crear un área metropolitana al servicio de una mayor solidaridad intermunicipal.

2. LA DESCENTRALIZACIÓN A ESCALA DE LAS LOCALIDADES: LAS JAL, ¿AL SERVICIO O EN DETRIMENTO DE LA DEMOCRACIA LOCAL?

Las localidades (más precisamente “alcaldías locales”, antes “alcaldías menores”) son entidades que existen formalmente desde los años 1950, pero su importancia fue reforzada a comienzos de los años 1990, especialmente con la creación de un consejo de la localidad –la Junta Administradora Local (JAL)– (recuadro 6.2). Se trata de una nueva instancia de naturaleza a la vez representativa (los miembros de esta Junta –los ediles–, son elegidos por sufragio universal) y también participativa, puesto que una de sus misiones es promover la participación de la población en los procesos de planificación y gestión del desarrollo local.

4 Cfr. el Decreto 1421 del 21 de julio de 1993, incluido en el Estatuto Orgánico del Distrito Capital.

Incluso si la JAL no interviene directamente en los temas de vivienda, ni en los de transporte o servicios públicos (administrados a escala distrital), su influencia sobre la orientación de las dinámicas intraurbanas no es desdeñable, especialmente en virtud de la posibilidad que tiene para conjugar la demanda de los habitantes con las orientaciones tomadas por los responsables (los políticos elegidos y la Administración).

Después de una decena de años de ejercicio, se han presentado muchos balances sobre la acción de las JAL (GARCÍA y ZAMUDIO, 1997; GUTIÉRREZ, 1998; HATAYA, 2002; GONZÁLEZ, 1999; LULLE, 2002), que se concentran especialmente en su capacidad de ejecución y de gestión financiera, en su legitimidad política (permanecen como algo irregularmente conocido por la población), e incluso, su lugar en el tejido sociopolítico del Distrito. En general, estos balances destacan poca eficacia en la gestión de las JAL, pero también subrayan los obstáculos que podrían ser su causa: sus recursos (económicos, técnicos y humanos) son con frecuencia muy limitados; su coordinación institucional con los otros niveles de la administración del Distrito, al igual que con las otras localidades o los municipios vecinos es muy débil; por último, la confusión de sus funciones, a la vez representativas y participativas, que conduce a que ni las unas ni las otras estén completamente garantizadas. En efecto, para la elaboración del Plan de Desarrollo Local (PDL), los ediles deben –paralelamente– consultar a los habitantes para identificar sus necesidades, y proceder con la administración del Distrito a la definición de las prioridades –siempre restringidas en razón de las limitaciones presupuestales–, y luego a la ejecución del plan. Este papel de intermediación no se desarrolla sin tensiones ni contradicciones.

RECUADRO 6.2

LAS LOCALIDADES, PROVISTAS DE NUEVOS PODERES

Los nuevos poderes otorgados a las localidades están definidos en diversos textos: la Constitución de 1991, el nuevo régimen municipal de 1993, la Ley 1 de 1992 que prevé la organización y el funcionamiento de las JAL en el Distrito y, finalmente, el nuevo estatuto del Distrito, aprobado mediante el Decreto 1421 del 21 de julio de 1993 que, en materia de definición de las competencias locales, resulta más tímido que la Ley de 1992. Ninguno de estos textos afecta los límites territoriales de las localidades.

En la medida en que la competencia del Distrito también implica funciones al interior de las localidades, se establece que estas funciones se encuentran sometidas simultánea-

mente tanto a la autoridad del alcalde del DC, a la de las JAL y a la del alcalde de la localidad. Por otra parte, un fondo propio, el Fondo de Desarrollo Local (FDL), le permite a las localidades establecer contratos, ejecutar el presupuesto local y, en general, suplir las necesidades de la administración local.

– La JAL

La Ley 1.^a de 1992 y el Acuerdo 6 de 1992 definen a las JAL como corporaciones públicas al mismo título que los concejos municipales y las asambleas departamentales. Las JAL son elegidas por sufragio universal y están compuestas por un número de miembros, llamados ediles, que varía de seis a once de acuerdo con la población de la localidad. Estos ediles son elegidos al mismo tiempo que el alcalde del Distrito y los concejos municipales, por un período de tres años (luego pasó a cuatro años). La primera función de las JAL es distribuir y asignar los fondos que el Distrito entrega a cada localidad. La JAL planifica y ejecuta un presupuesto, definido a partir de un plan de inversión conforme con el plan de desarrollo local que la misma JAL debe concebir en función de, al mismo tiempo, las orientaciones del plan del Distrito y las demandas de los habitantes. La JAL debe vigilar y controlar la prestación de los servicios públicos y las inversiones realizadas con los recursos públicos; también debe apoyar, solicitar o promover la realización de actividades, proyectos o manifestaciones desarrolladas por la comunidad. Por último, la JAL también alcanza funciones políticas con el establecimiento de una “terna” (una lista de tres candidatos) propuesta al alcalde del Distrito para que él escoja al alcalde de la localidad.

– El alcalde de la localidad

Los alcaldes de las localidades son funcionarios públicos que detentan la calidad de directores de la administración local y también son agentes del alcalde del Distrito. Son nombrados por un período de tres años (luego pasó a cuatro años). El alcalde de la localidad debe cumplir las funciones que le asigna el alcalde del Distrito, al igual que las funciones que le delega el Concejo Distrital. En su desempeño como ejecutor de las decisiones de la JAL, a él le corresponde hacerlas cumplir. Es responsable del mantenimiento del orden público en su territorio y debe controlar la aplicación de los reglamentos urbanísticos. También es responsable de la prestación de los servicios, de la construcción de obras y de la delegación de funciones públicas a sociedades o personas privadas. Por último, debe asumir la coordinación de las intervenciones de las diversas entidades del Distrito en el territorio de la localidad.

Los proyectos que predominan en los PDL tratan principalmente del acceso a los barrios (mejoramiento de las vías), la construcción o el mantenimiento de equipamientos sociales (educación, salud, deportes y recreación, etc.) mientras el financiamiento de actividades de carácter institucional (animación, formación, asistencia, etc.) permanecen como algo secundario (GARCÍA y ZAMUDIO, 1997).

En muchos barrios, la construcción de infraestructuras responde a necesidades imperiosas que contribuyen, bien sea a reducir el aislamiento de algunas zonas y a favorecer la movilidad cotidiana de la población, sea a dotar a esos barrios de equipamientos sociales al alcance. En ese sentido, la JAL cumpliría entonces un papel decisivo en el proceso de “desmarginalización” de barrios generalmente construidos en forma ilegal y por eso desatendidos durante mucho tiempo por la administración del Distrito. Pero esta interpretación debe ser matizada aquí.

En efecto, este tipo de intervención parece restablecer más bien estrategias políticas clientelistas tradicionales. Las JAL se insertaron rápidamente en la lógica vertical del sistema sociopolítico preexistente, y se convirtieron en el eslabón intermediario entre, por un lado, las Juntas de Acción Comunal (JAC)⁵, que actúan desde la base, en el nivel de los barrios, y por otro lado, el nivel superior (el Concejo Distrital, inclusive el Congreso). Son numerosos los casos de ediles que, provenientes de las JAC, han podido comenzar gracias a las JAL una carrera política lucrativa⁶, que buscan proseguir en seguida postulándose al Concejo Distrital e incluso al Congreso de la República. Al igual que los otros elegidos, los ediles parecen haber comprendido que, en el contexto de un imaginario colectivo largo tiempo marcado por la necesidad de construir y equipar los barrios, los gastos en infraestructuras imponentes hacen más visible su acción política y son más rentables en el plano electoral. Además, las visitas al terreno demuestran que las ejecuciones más visibles (como el asfaltado de las calles) a veces no benefician más que a algunas familias ligadas directamente con miembros de las JAL (e incluso de las

5 Las JAC, creadas desde los años 1960, son “comités de barrio” cuyos miembros son elegidos por los habitantes del mismo barrio, en forma independiente de las elecciones municipales tradicionales —contrariamente a las JAL—. Una localidad de Bogotá puede incluir cientos de barrios y por eso, también puede llegar a reunir el mismo número de JAC. Movilizadas al principio alrededor de reivindicaciones elementales de necesidades básicas (posibilidad de construir viviendas y legalizarlas, después conectarlas con las redes de servicios públicos), las JAC experimentaron una disminución de su acción y poder a medida que estas mismas necesidades encontraron satisfacción, y se recentraron sobre otros objetivos menos movilizados, como los servicios sociales.

6 Los miembros de las JAL reciben una remuneración, contrariamente a los de las JAC.

JAC), mientras que en el mismo barrio otras prioridades, especialmente en materia social, beneficiarían a grupos mucho más numerosos. Así, la lógica que preside las escogencias de la naturaleza y localización de las inversiones públicas a veces está lejos de ser tan objetiva como lo pretende la metodología participativa preconizada oficialmente por el Distrito: al apoyarse sobre las redes sociopolíticas, resulta fácil controlar el perfil de los participantes a las reuniones de concertación y, por consiguiente, la dinámica y las conclusiones de las mismas.

En cuanto a los alcaldes —excluyendo a CASTRO, quien las creó—, con frecuencia han percibido a las JAL como una amenaza. De ahí que MOCKUS haya creado un “encuentro ciudadano” (Dcto. 425 de 1996), un nuevo espacio de participación que establece un lazo más directo con la misión de las JAL. Pero a su vez, las JAL supieron controlar rápidamente esta nueva instancia. Después, PEÑALOSA, al sospechar que las JAL se habían convertido en focos de corrupción, les retiró —desde su posesión en 1998— la facultad de ejecutar contratos públicos en el marco de los proyectos del PDL (Dcto. 176 de 1998). Las nuevas Unidades Ejecutoras Locales (UEL), controladas directamente por la administración del Distrito, fueron las herederas de esa función. Igualmente, PEÑALOSA impuso por decreto (el 730 de 1998) los criterios objetivos para establecer las prioridades entre las necesidades de la población y, sobre todo, entre los proyectos del PDL, con el fin de evitar todo efecto de clientelismo o cualquier tipo de favoritismo. Pero en los hechos, esas dos medidas no produjeron grandes efectos y las JAL no fueron realmente afectadas.

Así, la “instrumentalización” de una de las medidas más innovadoras entre las reformas participativas —la creación de las JAL— permitió la consolidación de las prácticas tradicionales del sistema electoral, clientelista, en lugar de hacer emerger nuevas formas de funcionamiento democrático, fundadas sobre otra articulación entre los intereses particulares de los habitantes y los intereses de la esfera pública. El devenir de las JAL ha suscitado numerosos debates, en el curso de los cuales se han propuesto diversas reformas respecto a su funcionamiento, pero también se ha sugerido una nueva división de las localidades, consideradas inadecuadas para la gestión descentralizada de una ciudad como Bogotá.

3. LA DESCENTRALIZACIÓN A ESCALA METROPOLITANA: ¿BOGOTÁ Y LOS MUNICIPIOS VECINOS SON CAPACES DE CONCILIAR SUS INTERESES?

Las contradicciones que las reformas institucionales de los años 1980 y 1990 introdujeron en el funcionamiento del Distrito también se encuentran más allá de los límites administrativos de la capital colombiana, en la gestión de lo que se ha dado en llamar hoy su “área metropolitana”. En efecto, la Constitución de 1991 consagró al mismo tiempo el principio de la autonomía del poder municipal y el establecimiento de figuras jurídicas de cooperación supra e inter municipal (recuadro 6.1). Estas últimas permanecen ineficaces hasta el momento, lo que hace difícil la gestión del desarrollo metropolitano en diferentes dominios: servicios públicos, medio ambiente, transporte colectivo e incluso vivienda social.

La gestión de una aglomeración de siete millones de habitantes –además capital nacional– plantea un problema de liderazgo político que concierne, aparte de las injerencias directas del gobierno central, a las diferentes escalas del poder público local:

– El Distrito, emancipado de la tutela administrativa del departamento de Cundinamarca desde hace medio siglo, dispone de poderosas instituciones (cuyas actuaciones son a veces contradictorias) y de medios financieros o técnicos que faltan en los municipios vecinos, por ejemplo sus gigantescas empresas de servicios públicos. En contraposición, el DC carece hoy de espacio para continuar su expansión urbana.

– Los municipios vecinos al Distrito (mapa 6.1), a la vez traumatizados por el recuerdo de la anexión forzada de seis de ellos a Bogotá en 1954 (mapa 6.3), asustados por la proximidad de tan poderoso vecino y afectados por la extensión del proceso de metropolización (DUREAU, 2000b; BARCO, 1998; ALFONSO, 2001), tienen en conjunto una posición defensiva respecto a la capital colombiana: temen su influencia negativa pero también buscan sacar todas las ventajas posibles derivadas de su proximidad.

– El departamento de Cundinamarca, uno de los más ricos y poblados de Colombia (MESCLIER et ál., 1999: 108 y 109), se beneficia ampliamente de la presencia de Bogotá en el centro de su territorio (mapa 6.1), al mismo tiempo

que padece esa cercanía, puesto que no tiene ninguna autoridad ni medio de presión sobre el Distrito. Los temas de tensión entre el departamento –que ve con malos ojos la creciente influencia de Bogotá sobre su área metropolitana– y la capital colombiana no faltan: esquema de carreteras regional y política de transportes, gestión de los servicios públicos y del medio ambiente, lucha contra la pobreza, vivienda social en el área metropolitana, etc.

– La única institución transversal de la región, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), agencia para la cuenca-vertiente del río Bogotá, dispone de un derecho de inspección sobre los POT en virtud de leyes acerca del medio ambiente (1993) y del ordenamiento del territorio (1997). Pero ella sigue careciendo de poder político sobre los municipios, cuya autonomía está protegida por la Constitución de 1991. Por principio poco favorable a la expansión metropolitana de Bogotá, la CAR se opuso intensamente a los proyectos de crecimiento urbano de la capital entre 1998 y 2000, hasta el punto de crear un violento conflicto que hizo necesaria la intervención del Ministerio del Medio Ambiente (que le dio la razón a la CAR).

En cambio, la opinión pública, durante mucho tiempo muy movilizadora respecto a los asuntos que tenían que ver directamente con sus condiciones de vida (vivienda, servicios públicos, transporte urbano), se manifestó poco respecto a las relaciones entre Bogotá y su periferia metropolitana. Del mismo modo, el sector privado y los medios empresariales, bien representados en Bogotá –donde se han constituido en *lobbies* nacionales– tampoco se interesaron mucho en el debate público sobre el tema. Sólo la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) defiende desde hace mucho tiempo la idea de que Bogotá y la sabana funcionen como una “ciudad-región”, cuyas economías están estrechamente integradas y son interdependientes, al mismo tiempo que están abiertas hacia el exterior⁷.

El proyecto de constitución de un área metropolitana apareció tardíamente en Bogotá, a mediados de los años 1990, mientras que esta figura institucional existía en otras ciudades de Colombia desde 1979. La idea metropolitana

7 Cfr., entre otros, *Misión Bogotá Siglo XXI* (1994 y 1995), TERNENT y RODRÍGUEZ (1998), Cámara de Comercio de Bogotá (2000), ISAZA (2000).

emergió en razón del carácter cada vez más afirmado del proceso de metropolización, y de una toma de conciencia colectiva nacida bajo la influencia de estudios decisivos conducidos por autores que en ocasiones estaban próximos a los medios políticos⁸.

Sólo en el mandato de PEÑALOSA (1998-2000) el tema se convirtió en una prioridad política importante para el Distrito. El alcalde creó, desde el principio de su mandato, un servicio encargado de iniciar un diálogo con los municipios de la sabana, la Consejería para Cundinamarca; después nombró a una experta en temas urbanos que había estudiado el proceso de metropolización, CAROLINA BARCO, en la dirección del DAPD, donde ella estableció una oficina encargada de los asuntos metropolitanos. La Alcaldía de Bogotá propuso directamente a los municipios vecinos fundar con ellos un área metropolitana (DEL CASTILLO, 2001). Sin duda, esta oferta no era desinteresada, puesto que muchos temas importantes para Bogotá merecían ser tratados en un marco metropolitano: la redacción del POT, con la inquietud de armonizar la zonificación urbana del Distrito con la de los municipios vecinos; los grandes proyectos viales y de transporte urbano masivo (Transmilenio), con el deseo de conferirles una coherencia regional; los programas de vivienda social que se querían desarrollar fuera de la capital (Metrovivienda); etc.

Inmediatamente incómodos por el tono autoritario que se dio a las negociaciones, los representantes de los municipios vecinos se sintieron inquietos frente a la amenaza que, a sus ojos, constituía la creación de un área metropolitana: pérdida de autonomía al interior de una administración comunitaria que, en virtud de la Ley 128, habría concedido la mayor parte de los

8 Mencionamos especialmente los estudios del CES (Universidad Nacional) sobre la urbanización, la modernización agrícola y los conflictos socioambientales en la sabana (MONTAÑEZ, 1992; MONTAÑEZ, ARCILA y PACHECO, 1994); el proyecto CEDE-ORSTOM sobre la movilidad residencial y su impacto sobre la urbanización en el área metropolitana (DUREAU, FLÓREZ y HOYOS, 1993; DUREAU, BARBARY y FLÓREZ, 1994; etc.); los numerosos estudios conducidos por la Cámara de Comercio de Bogotá sobre el tema (ob. cit.); los trabajos iniciados en el CEDE (Universidad de los Andes) sobre el tema de la integración metropolitana *Bogotá-Sabana* (BARCO, 1998; BARCO y CORTÉS, 1999, etc.); por último, los estudios conducidos por la Sociedad Geográfica de Colombia en colaboración con la CAR (MENDOZA, 1996; SGC, 1998; VAN DER HAMMEN, 1998; CAR, 1999).

poderes a Bogotá; miedo de ver que Bogotá, con METROVIVIENDA, expulsaría a sus pobres hacia la periferia, etc. En esas condiciones, la mayor parte de los municipios rompió el diálogo y sólo un puñado de ellos lo mantuvo: Soacha, Funza, Mosquera y Madrid. Esta persistencia no se debió al azar: se trata de cuatro municipios muy próximos a Bogotá, que experimentan en la actualidad un crecimiento demográfico muy fuerte, que tienen urgentes necesidades en materia de transporte, vías, agua potable, electricidad, espacios verdes y diversas planificaciones, pero padecen de carencia de recursos y dependen de los servicios públicos de Bogotá. De tal manera que fueron sensibles a la posibilidad de beneficiarse de un presupuesto comunitario alimentado principalmente por el DC, así como de un tratamiento favorable por parte de las autoridades del Distrito, preocupadas por dar ejemplo para convencer después a los otros municipios de la oportunidad de integrarse al área metropolitana. El proyecto fue finalmente anulado por la Registraduría Nacional del Estado Civil en razón de impedimentos de orden jurídico, especialmente por una falta de concertación sobre los concejos municipales respectivos.

MOCKUS, el sucesor de PEÑALOSA desde 2001, anunció una fuerte voluntad por continuar la empresa metropolitana de su antecesor. Por eso mantuvo las estructuras existentes pero, teniendo en cuenta la lección del fracaso del alcalde saliente, abandonó el proyecto formal de un área metropolitana, para orientarse hacia una aproximación más técnica a los problemas metropolitanos. Él también creó una oficina de planificación regional, estructura tripartita que asociaba a los principales interlocutores regionales (Distrito, Departamento y CAR). No obstante, su prioridad no era tanto buscar soluciones colectivas para los problemas de urbanismo y de servicios públicos que se le planteaban al conjunto de la región metropolitana, sino más bien mejorar la competitividad económica de la sabana de Bogotá. Puesto que la gran mayoría de las actividades productivas de la región estaba localizada al interior del Distrito, eso nos lleva a suponer –a despecho de un proceso actualmente importante de emigración de las empresas hacia la periferia metropolitana– que los municipios de la corona periurbana sintieron poco interés en continuar con las discusiones si permanecían centradas en ese objetivo.

Como en el caso de las JAL, el balance de las iniciativas metropolitanas es moderado. No se pudo implementar ningún mecanismo fuerte de solidaridad

territorial, y tampoco ningún sistema de subsidio financiero entre Bogotá –de lejos la ciudad más rica de Colombia– y sus periferias, sobre todo las más pobres. Este fracaso relativo no proviene solamente de las posibles torpezas de los actores locales. También es efecto de bloqueos ya señalados aquí y allá: la inconsistencia institucional o la carencia de marcos legales de cooperación intermunicipal; la primacía conferida, en la Constitución colombiana, al principio de la autonomía municipal; el conflicto de competencias entre las dos instancias elegidas del poder local (Alcaldía y Concejo Municipal); e incluso la brevedad de los mandatos, que favorece una carrera de proyectos a corto plazo y vuelve muy improbable la opción de comprometerse en proyectos políticos ambiciosos y generosos pero difíciles de desarrollar en el largo plazo.

C. LA EVOLUCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN URBANA: HACIA UNA GESTIÓN MÁS RACIONAL DE LA CAPITAL COLOMBIANA

Desde mediados de los años 1980, se asiste a ensayos de políticas urbanas nacionales más integrales:

– Durante la presidencia de VIRGILIO BARCO (1986-1990), la política conocida como las ciudades *alternas* apuntaba al reforzamiento del papel de relevo de las ciudades intermedias o satélites en el desarrollo regional.

– Bajo la presidencia de ERNESTO SAMPER (1994-1998) aparece por primera vez una política nacional específicamente centrada en el desarrollo urbano, que integraba diversos niveles territoriales (el sistema urbano nacional, el área metropolitana, la ciudad) y estaba fundada sobre una coordinación entre los diferentes actores institucionales.

Igualmente, en materia de legislación urbana, la Ley 9 de 1989, llamada “ley de reforma urbana”, constituye un avance notable. Por primera vez, ella impone el principio de la planificación municipal y establece herramientas reglamentarias y financieras que permiten regular el mercado del suelo. Esta ley también reestructura al principal organismo público que interviene en el tema de la vivienda social: el ICT, convertido en INURBE (recuadro 6.3). También es necesario mencionar la Ley 388 de 1997, que impone a todos los municipios colombianos la adopción de un “plan de ordenamiento territorial” (POT), y a los departamentos el de las “Directrices y Orientaciones para el Ordenamiento Territorial” (DOT). En 2002, no sin dificultades, una gran mayoría de POT había

sido concluida. No obstante, todavía se carece de una ley de ordenamiento territorial nacional, no a falta de propuestas, sino porque el proyecto despierta rivalidades regionales tradicionales y se enfrenta con la extensión del conflicto armado sobre el conjunto del territorio.

I. LA SEGUNDA MITAD DE LOS AÑOS 1980: REFORMAS REGLAMENTARIAS AL SERVICIO DEL SECTOR INMOBILIARIO

En Bogotá, este período se caracteriza por las modificaciones al Acuerdo 7 de 1979, de inspiración liberal (decretos 1025 de 1987 y 067 de 1988). La reglamentación, que favorece las iniciativas inmobiliarias, los cambios de uso y la densificación de lo edificado, se convierte no tanto en un instrumento de control como de revalorización del suelo, lo que genera inmediatos efectos sobre el paisaje urbano (por ejemplo, en barrios del pericentro norte, donde las antiguas casas burguesas son reemplazadas por edificios de más de diez pisos para uso residencial). Al mismo tiempo, progresa la regularización de los barrios ilegales.

En Bogotá, la Ley 9.^a de 1989 se traduce en la adopción del Acuerdo 6 de 1990, fundado sobre nuevos principios, como la protección y revalorización de lo existente: desde los patrimonios urbanos y naturales hasta los llamados barrios “espontáneos”, pasando por los espacios públicos. La consideración hacia estos últimos se concibe como indispensable para mejorar la funcionalidad y el desarrollo económico de la ciudad. Para facilitar la intervención de los poderes públicos sobre los mercados del suelo y de la finca raíz, ven la luz nuevos instrumentos jurídicos: derecho preferente de compra, expropiación, cesión voluntaria, bancos de tierras, etc. Se privilegian intervenciones sectoriales en materia de circulación o de servicios públicos. Se abandona la distinción entre perímetro de servicios y perímetro urbano, heredada del Acuerdo 7 de 1979: sólo subsiste el perímetro urbano, extendido considerablemente. La nueva noción de áreas “suburbanas” se define como

... la franja de transición que rodea las áreas urbanas de la ciudad y los núcleos urbanos de corregimientos y veredas, así como las áreas que se extienden a lo largo de las vías de acceso y en donde coexisten los modos de vida rurales y urbanos, como una prolongación de la vida urbana en el campo (Acuerdo 6, cap. vi, art. 185).

En otros términos, lo que se encuentra codificado así es una suerte de zona “rurbana”, situada siempre al interior de los límites administrativos del Distrito. Esta distinción dio paso a numerosas legislaciones: 381 ha en 1993, 477 ha en 1998, 455 ha en 1999, con una máxima de 1.255 ha en 1996 (DAPD, 2001). Sin embargo, la sofisticación formal de este acuerdo hizo difícil su comprensión y su aplicación—durante mucho tiempo limitada a tres localidades—y disimuló las ventajas concedidas al sector inmobiliario.

Al margen de los acuerdos concebidos para el conjunto de la ciudad, en el curso del mismo período se multiplicaron planes específicos centrados en los sectores de la ciudad más afectados por la pobreza y la degradación de lo construido. Estos planes se inscriben en gran medida en la filosofía que concibieron las Naciones Unidas frente al desarrollo integral de los barrios populares.

2. LOS AÑOS 1990: BÚSQUEDA DE NUEVOS DISPOSITIVOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

La década de los años 1990, marcada por la sucesión al poder municipal de equipos constituidos por alcaldes ahora elegidos sobre la base de programas políticos precisos, también se caracteriza por un mejoramiento sensible en las prácticas de planificación urbana: establecimiento sistemático de diagnósticos más rigurosos realizados a partir de datos mejor recogidos, tratados y actualizados; esfuerzos más sistemáticos para identificar las necesidades de la población; articulación argumentada entre el diagnóstico y los planes de acción; referencia a un plan de conjunto que responde a un modelo de ciudad claro y compartido por el conjunto de los ciudadanos; mayor cuidado conferido al montaje técnico y financiero de los programas de intervención, etc. Los cuatro principales documentos relativos a la gestión de Bogotá durante este período lo ilustran claramente: dos planes de urbanismo (“Bogotá 2000”, en 1996 y el POT de 2000) y dos programas de gestión municipal (“Formar ciudad”, de 1995 a 1998, y después “Por la Bogotá que queremos”, de 1998 a 2000).

El plan Bogotá 2000, elaborado entre 1994 y 1996, comprende 40 proyectos (seleccionados entre 150), entre los cuales siete son considerados como prioritarios y fundan las reglas de ordenamiento y reestructuración de la ciudad. Al

menos al principio, existió participación de la población a través de representantes de diferentes gremios, corporaciones, ONG, universidades, grupos sociales, etc. Del mismo modo, la influencia de Naciones Unidas, por otra parte comprometida en operaciones más específicas, y la de la “escuela catalana” de JORDI BORJA, fueron determinantes. Las principales orientaciones del plan inscriben el desarrollo de Bogotá en el contexto próximo (el área metropolitana) como en el lejano (el internacional) y privilegian el tratamiento del espacio público en sentido amplio (integrando el transporte, los problemas de seguridad), la equidad y la calidad de vida de los ciudadanos, la reforma de la organización administrativa mediante la descentralización, el mejoramiento de la competitividad y de la imagen de la ciudad. La aplicación de este plan permaneció suspendida con el anuncio, poco después, de la elaboración del POT.

El plan Formar ciudad de la administración MOCKUS-BROMBERG (1995-1997) es el resultado del primer esfuerzo de planificación integral propuesto a la capital; las “prioridades” y las “estrategias” sustituyen a las habituales intervenciones sectoriales. También dispone las cosas de manera que cada proyecto responda a una de las prioridades y sea compatible con la política sectorial de la entidad a la que corresponde. Las seis prioridades son: la cultura ciudadana, la protección del medio ambiente, la recuperación del espacio público, el progreso social, la productividad urbana y la legitimidad institucional. Paralelamente, se identificaron “megaproyectos”: un plan integrado para el transporte, la recuperación del río Bogotá, el desarrollo de los sectores del borde occidental del Distrito, la construcción de infraestructuras metropolitanas, un plan de acción social en materia de salud, de educación, de empleo y, finalmente, el mejoramiento de la seguridad civil. Este plan también fue resultado de procesos de concertación: se constituyó un consejo territorial especialmente para canalizar las opiniones de la población y tuvieron lugar comunicaciones de ida y vuelta con las localidades, donde simultáneamente se elaboraban los PDL. Este plan fue relativamente innovador en la forma como se apoyaba a la vez sobre un método audaz de seguimiento sistemático de las operaciones desarrolladas y sobre una reducción masiva de los recursos humanos del conjunto de la Administración. En cambio, el problema del área metropolitana fue dejado de lado.

El plan de la administración PEÑALOSA, Por la Bogotá que queremos (1998-2000), volvió a usar la misma estructura que el plan precedente, definiendo a

su turno siete prioridades y cinco megaproyectos. Las prioridades fueron: la “desmarginalización” de los barrios informales; la articulación de las inversiones sociales (salud, acción social, educación, cultura, etc.); la promoción de un modelo de ciudad a escala humana mediante la recuperación de los espacios públicos; la implementación de un sistema de transporte que garantizara una reducción en la duración de los desplazamientos cotidianos; la búsqueda de un equilibrio entre expansión y densificación, tratando de limitar el déficit de viviendas planificadas; la relegitimación de las autoridades públicas competentes en materia de seguridad y de prevención; y por último, el reforzamiento de la eficacia institucional mediante el seguimiento de la descentralización y de la modernización de la administración del Distrito. Los megaproyectos consistían en un sistema integrado de transporte masivo (Transmilenio); la construcción y el mantenimiento de la red vial; la constitución de una reserva de tierras para desarrollar proyectos de vivienda social (Metrovivienda); el desarrollo de redes de parques y bibliotecas en el Distrito; la definición de una estrategia financiera que permitiera asegurar mejor la cobranza de impuestos, utilizar mejor los recursos externos y obtener ingresos extraordinarios mediante la venta de la Empresa de Teléfonos de Bogotá.

Todos los proyectos fueron concebidos con la idea de integrar mejor los aportes del sector público, las ONG y el sector privado. Y de hecho, ese plan fue realizado en gran parte gracias a recursos financieros exteriores y a una gestión empresarial de la administración del Distrito que hasta entonces jamás se había puesto en práctica. En cambio, aunque el plan haya sido teñido con alusiones a la participación y la concertación, y se hayan realizado algunas tentativas en esa dirección, esta gestión fue globalmente bastante autoritaria y las relaciones con el Concejo Distrital permanecieron tensas.

El POT, cuya elaboración se inició a partir de 1998 para todos los municipios colombianos, en aplicación de la Ley 388 de 1997, no fue culminado sino hasta agosto de 2000 en razón de dificultades tanto políticas como técnicas. Con una vigencia de nueve años, constituye el documento de referencia para la gestión urbana de Bogotá: a la vez diagnóstico socioterritorial, programa de desarrollo y plan de zonificación urbana; con él se pretende también ofrecer respuestas a las dinámicas de una metropolización ya bastante avanzada. El DAPD, durante mucho tiempo relegado a desempeñar un rol técnico relativamente secundario

(esencialmente la aprobación de licencias de construcción y la regularización de la urbanización informal), recobró, con la elaboración del POT, un papel preponderante en la gestión de la capital colombiana.

El POT comporta dos documentos: uno técnico, que consiste en un diagnóstico, un modelo, objetivos y estrategias de desarrollo urbano; el otro, de carácter jurídico, versa sobre los reglamentos de urbanismo al interior del Distrito. El POT tiene como objetivo principal identificar las potencialidades físicas, económicas y sociales de la ciudad y definir las estrategias adecuadas para transformar estas potencialidades en verdaderas ventajas competitivas. Al apoyarse durante mucho tiempo sobre las nociones de desarrollo sostenible, planificación estratégica e incluso modelo territorial equilibrado, el POT de Bogotá contempla el desarrollo de la capital colombiana bajo diferentes escalas, desde el barrio hasta el “territorio regional” (la sabana de Bogotá), y plantea claramente la pregunta sobre la dosificación entre una densificación de la superficie ya construida, que debe permanecer moderada, la elección de densidades elevadas en algunas zonas y, además, las posibilidades de expansión hacia la periferia urbana, especialmente hacia el exterior del Distrito —un equilibrio que reposa obligatoriamente sobre un dominio, al menos parcial, del mercado del suelo y la implementación de un sistema de transporte urbano eficaz—.

El objetivo es entonces terminar de urbanizar y densificar, cuando sea posible, el espacio situado al interior del perímetro urbano; un espacio sin embargo escaso, pues con el tiempo los límites de este perímetro urbano casi han terminado por coincidir con las fronteras administrativas del Distrito (mapa 6.3). Al argumentar sobre la saturación del actual perímetro urbano y de la escasez de tierras disponibles, el POT expresa la voluntad de convertir en susceptible de construcción todo el espacio potencialmente urbanizable situado en la parte plana del Distrito, en la sabana de Bogotá⁹.

9 Según los autores del POT, entre las 28.153 ha del perímetro urbano en 1999, 22.554 ha ya estaban urbanizadas, lo que se traduce en un índice de saturación de 89,5%. Por fuera de este perímetro, 4.053 ha estaban ocupadas por urbanizaciones clandestinas y, si se descuentan las reservas naturales y los espacios dedicados a funciones no residenciales, en esa fecha no quedarían más que 2.094 ha urbanizables en el interior del Distrito Capital.

El POT proyecta consolidar y cualificar de nuevo lo existente, para lo cual procede a conferir un nuevo equilibrio a las diferentes zonas del Distrito. Bajo esta misma lógica, la planificación se conjuga en escalas territoriales cada vez más precisas, y la que resulta más operativa es la Unidad de Planeación Zonal (UPZ). En cambio, aunque la cuestión del territorio metropolitano regional es ampliamente abordada en el diagnóstico y los objetivos, desaparece en la parte reglamentaria del POT, y el Distrito quedaría con dominio sólo sobre su propio territorio, puesto que los municipios vecinos gozan de una autonomía garantizada por la Constitución.

La elaboración del plan suscitó dos polémicas principales: acerca de la expansión hacia el norte de la ciudad y, la segunda, sobre la participación ciudadana. El problema de la expansión urbana apareció rápidamente como peligrosa a los ojos de algunos actores: en primer lugar la CAR, después algunos expertos y finalmente una parte de los elegidos al Concejo de Bogotá. La localización estratégica de los últimos espacios verdes situados al norte de la ciudad, en la prolongación de su zona más rica, y que está en contacto con municipios que han recibido —a favor del movimiento de metropolización— poblaciones relativamente acomodadas, ha producido crispaciones que condujeron rápidamente a un bloqueo institucional. Estas tensiones, atizadas por el temor a contemplar una especulación sobre la tierra que habría excluido todavía más a las clases medias y populares del sector norte de la ciudad, alcanzaron las proporciones de un verdadero problema de Estado, suscitando debates en el Congreso de la República y el Concejo Distrital, y exigiendo finalmente la mediación del Ministerio del Medio Ambiente, que se opuso a la voluntad del DAPD de extender el perímetro urbano de Bogotá.

La segunda polémica, más discreta, tuvo que ver con la participación de la comunidad, la cual fue impuesta por la ley. Incluso si desde la puesta en marcha de la elaboración del POT hubo iniciativas en esa dirección, especialmente con la creación del Consejo Territorial de Planificación (CTP) compuesto en una mitad por representantes de los sectores público, privado y asociativo, y la otra mitad por ediles de cada una de las localidades del Distrito, los resultados fueron muy poco convincentes. De hecho, el lugar otorgado al CPT fue limitado, lo que generó insatisfacción entre todos sus miembros, excepto en los representantes del sector privado (cámaras de comercio, de la construcción, etc.), que se beneficiaron de otros canales para negociar e incluso para ejercer presión.

II. LA EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS SECTORIALES DE LA CIUDAD: ¿HACIA UNA REDEFINICIÓN DEL PAPEL DEL ESTADO EN BENEFICIO DE LAS NECESIDADES DE LOS MÁS NUMEROSOS?

Al igual que las reformas políticas e institucionales del poder local, o las nuevas orientaciones tomadas en materia de planificación urbana, las políticas sectoriales de vivienda, de servicios públicos y de transportes han sido determinantes para los nuevos modos de producción de la ciudad. Ampliamente influidas por el cambio de modelo de desarrollo económico de los años 1980 y 1990 (dirigido hacia la reducción de la presencia del Estado y una liberalización de las actividades productivas), esas políticas tuvieron efectos decisivos—y a veces contradictorios— sobre la dinámica urbana de la capital colombiana.

A. EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA, NUNCA RESUELTO POR LOS PODERES PÚBLICOS

La acción de los poderes públicos en el campo de la vivienda se dirige prioritariamente hacia dos segmentos de la demanda: las clases medias y las populares. Si en el primer caso esa acción ha podido ser eficaz durante suficiente tiempo, en el otro caso el desequilibrio entre la demanda—evidentemente más importante— y la oferta no ha sido subsanado jamás, a pesar de todos los esfuerzos invertidos, a veces con el apoyo de ONG, cajas de compensación u organizaciones internacionales. En los dos casos, la coyuntura económica y las estrategias del sector inmobiliario han sido determinantes y han ejercido una influencia más o menos visible pero decisiva sobre la política de planificación urbana.

I. LA VIVIENDA DE LAS CLASES MEDIAS: DE LA ABUNDANCIA A LA CRISIS

El segmento de la vivienda de las clases medias es administrado en gran medida por el mercado mismo. Pero algunas medidas por parte del Estado pueden estimularlo en ciertos momentos. Fue así como bajo el gobierno de MISAEL PASTRANA (1970-1974) se estableció por primera vez un sistema de crédito llamado UPAC, ajustado a la inflación, con el fin de estabilizar el

financiamiento del sector inmobiliario al facilitar el acceso a la propiedad. Este sistema se dirige hacia las clases medias que pueden justificar ingresos estables y suficientes como para beneficiarse de préstamos a largo plazo; funcionó adecuadamente hasta mediados de los años 1990, y sirvió también a los intereses del sector inmobiliario. Este último se benefició igualmente de la flexibilidad en las reglas de aprobación de los permisos para construir (Acuerdo 7 de 1979). Pero éste se consagró entonces sobre todo a la construcción para las clases medias y acomodadas, y muy poco para las clases populares. La fisonomía de algunos sectores de la ciudad cambió bajo el efecto de esas medidas: entre 1972 y 1986 se observa una densificación ligada a la aparición de conjuntos residenciales (sean conjuntos cerrados con casas o pequeños edificios colectivos, sean edificios de una decena de pisos) para los diferentes segmentos de las clases medias en el pericentro y en la periferia (especialmente en el norte y en el noroccidente).

El sistema UPAC, que no había sido reajustado desde su creación, entró en crisis a mediados de los años 1990, y luego fue liquidado: el costo del crédito se volvió prohibitivo mientras los precios de los inmuebles alzaban el vuelo bajo los efectos de la especulación, la oferta comenzaba a saturar a los segmentos medios y acomodados del mercado y la economía colombiana entraba en un ciclo de recesión. Las tensiones entre la defensa de los intereses de los usuarios y la del sector inmobiliario hicieron muy difícil la adopción de una política pública clara en ese tema. El mercado inmobiliario se vio paralizado, lo que contribuyó a detener la evolución de los barrios residenciales formales de Bogotá a partir de la segunda mitad de la década de 1990, en fuerte contraste respecto del formidable crecimiento de los años precedentes, y mientras que el parque residencial de las clases medias continuaba creciendo en algunos municipios vecinos de Bogotá, donde el precio de los terrenos se conservaba sensiblemente menos costoso.

2. LA VIVIENDA DE LAS CLASES POPULARES: ¿QUÉ VOLUNTAD DE SOLUCIONAR LA PENURIA?

Entre los años 1950 y mediados de los años 1980, en Bogotá la producción pública de vivienda social fue cumplida principalmente por el ICT, entidad

nacional, y la CVP, entidad del Distrito (recuadro 6.3). Se trataba sobre todo de parcelaciones para casas individuales o de pequeños edificios colectivos, raramente de grandes conjuntos. Entre 1973 y 1985, esa producción estatal no era desdeñable: representaba el 19,5% de la producción formal de viviendas (JARAMILLO, 1992).

La producción de vivienda social, importante en algunas épocas, es a pesar de todo insuficiente —al menos desde los años 1940— para satisfacer las necesidades de los hogares (JARAMILLO, 1992). Por lo tanto, las clases populares son entonces obligadas a recurrir a dos estrategias principales:

- Los inquilinatos, que consisten en la ocupación de un edificio más o menos grande (fenómeno difícilmente medible), en arriendo o subarriendo por parte de varios hogares;

- La autoconstrucción, que está ligada frecuentemente con la ocupación ilegal de tierras. Desde los años 1940, la autoconstrucción creció fuertemente: alcanzaba un 54,8% del conjunto de viviendas construidas. Luego varió al compás de diversos factores; la intervención del Estado en este campo no ha sido siempre determinante¹⁰.

La escasez de viviendas populares, jamás resuelta, poco a poco dio como resultado formas más complejas de urbanización ilegal, con la aparición de agentes intermediarios (organizaciones populares llamadas “viviendistas”, pero también urbanizadores informales). Estos últimos han extendido su campo de intervención y han consolidado un circuito ilegal de acumulación de capital. Igualmente, es necesario subrayar el peso del sistema clientelista: algunos políticos elegidos, que en algunos casos también son promotores de terrenos clandestinos o intervienen en barrios ya autoconstruidos, refuerzan su posición al obtener del DAPD o de las juntas directivas de las empresas de servicios públicos, la legalización de esos barrios o su equipamiento en servicios públicos, luego en servicios sociales, para asegurar el apoyo electoral de los habitantes.

¹⁰ La relación entre la escasez de vivienda social y los ciclos de autoconstrucción no es siempre directa. Esas variaciones se explican también gracias a algunas características del proceso de autoconstrucción, especialmente la variación de las reservas de tierras disponibles (JARAMILLO, 1992).

A pesar de las consecuencias –costosas desde todos los puntos de vista– de esas prácticas informales sobre el desarrollo urbano, los poderes públicos disminuyen sensiblemente la oferta de vivienda social a fines de los años 1980. Así ocurre con el ICT, convertido en INURBE, que no produce ninguna vivienda pero opta por conceder un subsidio a las familias que planean construir o comprar una vivienda nueva. Los responsables justifican este cambio de orientación como algo debido simultáneamente a la presión del mercado y a la racionalización del modo de gestión de la empresa. Pero la política de subsidios también presenta limitaciones: por una parte, no responde siempre a los segmentos más necesitados de la población y, por otra parte, convierte fácilmente en soporte de estrategias clientelistas la atribución de las ayudas, que están ligadas con frecuencia a las intervenciones de los políticos elegidos. Junto con esta reforma también hay que mencionar que, en aplicación especialmente de la ley de reforma urbana y del nuevo acuerdo de gestión del Distrito (Acuerdo 6 de 1990), se presentan interesantes propuestas para la vivienda usada, que desde ese momento es percibida como una de las soluciones posibles para el déficit de viviendas populares. Se sugieren diversas medidas: mecanismos para el control de los alquileres; ayudas financieras para la compra y renovación de viviendas usadas; creación de un fondo de inquilinatos y de casas de paso, etc. Pero la crisis económica de fines de los años 1990 suspendió, al menos provisionalmente, su puesta en marcha.

RECUADRO 6.3

LA PRODUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL EN BOGOTÁ

La construcción de vivienda “obrera” o social aparece en Bogotá a comienzos del siglo XX bajo el impulso conjunto de los sindicatos, las empresas y la Iglesia; no obstante, esas realizaciones fueron limitadas. Fue en las décadas de 1930 y 1940 cuando el papel del Estado resultó determinante al entregar esa misión al BCH (Banco Central Hipotecario, que en adelante se consagró a la clase media) y con la creación del ICT (Instituto de Crédito Territorial) y la CVP (Caja de Vivienda Popular) en Bogotá. Estas instituciones, que después se unen con otras –públicas o no–, constituyen desde los años 1944 las entidades encargadas de la producción de vivienda social. Hay que precisar que en Colombia, la producción de vivienda social siempre se orientó hacia el acceso a la propiedad y nunca hacia el mercado de vivienda en alquiler.

– El ICT-INURBE

Entre 1951 y 1985, el ICT produjo entre el 15 y el 20% del conjunto de viviendas construidas en Bogotá (JARAMILLO, 1992). A fines de los años 1980, el ICT sufre un grave desequilibrio financiero y comienza a cambiar su orientación: cada vez financia menos la producción directa de viviendas nuevas y se orienta más hacia la cofinanciación de programas colectivos, el mejoramiento de las viviendas ya construidas o la adquisición de viviendas ya existentes. En 1990, en aplicación de la “Ley de reforma urbana” (Ley 9.^a de 1989), el ICT se convierte en el INURBE. Se confirma su papel en el financiamiento de la vivienda social, pero sus ambiciones vuelven a caer. En 2003 el INURBE es liquidado y su misión es confiada a FONVIVIENDA, en el seno del nuevo Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

– El FNA

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) fue creado durante la reforma administrativa de 1968. Su misión es facilitar el acceso a la vivienda para los empleados públicos.

– La CVM

La Caja de Vivienda Militar (CVM) produce viviendas para el personal militar en retiro.

– La CVP

La Caja de Vivienda Popular (CVP) fue creada en 1944 por el Gobierno Nacional. Está orientada especialmente hacia los sectores de bajos ingresos. Fue integrada al Distrito de Bogotá en 1968, y se dirigió, al igual que el ICT, hacia programas de envergadura, de viviendas llamadas “de desarrollo progresivo”. En los años 1985-1995 experimentó numerosas dificultades. Bajo la primera administración MOCKUS, su papel fue modificado: fue encargada de equipar y legalizar las urbanizaciones informales, ofrecer viviendas para los empleados de la policía, realojar a las familias víctimas de proyectos de renovación o residentes en zonas de riesgos naturales.

– El DAPD

Aunque la planificación de vivienda sea una de las misiones del Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD), éste no tiene un papel activo en ese campo, fuera del control de la legalidad de las construcciones.

– El FAVIDI

El Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital (FAVIDI) fue creado en 1977 para los empleados del Distrito. Financia el acceso a vivienda para sus inscritos a través de convenios con la CVP, el ICT y el FNA.

– Metrovivienda

Es una “empresa industrial y comercial” del Distrito, creada en 1998, cuya misión es adquirir y equipar terrenos para desarrollar proyectos “integrales” de vivienda social (es decir, que incluyen todos los equipamientos públicos elementales y una parte de los servicios sociales). Esta empresa posee la suficiente capacidad financiera para emprender sus propios proyectos. No obstante, Metrovivienda, que si bien tenía la misión inicial de intervenir a escala metropolitana, de hecho no interviene más que en el Distrito, tropieza con el problema de la escasez de tierras disponibles.

Por último, hay que señalar que a lo largo de los años 1980, aparece una nueva oferta desde la intervención de cajas de compensación (Colsubsidio, Cafam, Compartir), instituciones religiosas (Minuto de Dios) y finalmente, ONG “viviendistas”.

Paralelamente, el Distrito de Bogotá ha intentado reestructurar la CVP a comienzos de los años 1990, sin gran éxito, excepto por algunas acciones como la relocalización de familias instaladas en zonas de riesgos naturales o en zonas fuertemente degradadas del antiguo centro de la ciudad.

La creación de Metrovivienda bajo el mandato de PEÑALOSA, a fines de los años 1990, se proponía la construcción de viviendas sociales y sus equipamientos correspondientes en zonas completamente periféricas, especialmente en Usme y Bosa. Esta nueva aproximación al problema (recuadro 6.3) es interesante, puesto que busca superar un problema histórico en la construcción de la vivienda social: la dificultad –financiera, pero también burocrática– para las empresas interesadas de acceder a terrenos a un costo y plazo razonables. Precisamente, Metrovivienda asume los riesgos financieros de la operación para volver viables los terrenos, al igual que la recepción de demandas para compra de vivienda y su selección, de acuerdo con criterios sociales. Pero esta experiencia es aún hoy decepcionante, pues sólo hasta el 2002 –en tierras cuyo proceso de adquisición había comenzado en 1999– comienzan a construirse viviendas sociales en un número todavía insuficiente y destinadas a categorías socioeconómicas bajas pero estables y no para la población más desposeída. Con todo, este procedimiento innovador y valiente rompe con la aproximación tradicional hacia la vivienda popular, que mezclaba en forma malsana al clientelismo, el mercado inmobiliario y las políticas sociales. Sin duda, los resultados de esta política sólo serán tangibles a largo plazo. A pesar de diversas experimentaciones, la vivienda social sigue planteando problemas a los poderes públicos.

B. LA GESTIÓN AMBIGUA
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS:
EL LENTO DESLIZAMIENTO HACIA LA PRIVATIZACIÓN

Los servicios públicos domiciliarios (agua potable, alcantarillado, electricidad, gas, teléfono, recolección de basuras) que habían sido municipalizados a comienzos del siglo XX (VARGAS y ZAMBRANO, 1988), al precio de grandes esfuerzos financieros para garantizar la extensión en la cobertura de las redes, fueron reorganizados desde el punto de vista institucional a lo largo de los años 1980. La extensión de las redes de servicios acompañó durante mucho tiempo al movimiento de crecimiento urbano de Bogotá durante el siglo XX, reforzando especialmente el proceso de segregación socioespacial, en razón de una estrategia netamente comercial que favorecía a los barrios acomodados del norte. Desde la década de 1950, las Empresas de Servicios Públicos (ESP) se consolidaron bajo la forma de empresas del Distrito con carácter “descentralizado”, es decir, que tenían un estatus jurídico y un patrimonio propios. Esta forma de gestión, que concedía una amplia autonomía administrativa al Distrito a través de poderosas ESP, le permitió a Bogotá controlar con relativa eficacia el fuerte crecimiento de la década de 1960.

Con todo, en el curso de los años 1980, ese mismo estatus autónomo comenzó a perjudicar a las ESP (CUERVO et ál., 1988; DÍAZ, 1988; SANTANA y RODRÍGUEZ, 1990). Si las tasas de cobertura de energía y agua eran elevadas en el conjunto del Distrito (contrariamente a las de alcantarillado y recolección de basuras), la calidad y la continuidad de esos servicios dejaban mucho que desear, especialmente en lo que concierne al agua en los barrios populares: agua de una calidad inconstante, frecuentes racionamientos, tarifas percibidas como muy altas por parte de la población. Esas ESP experimentaban entonces dos problemas comunes: en primer lugar, el crecimiento de su deuda, que limitaba las inversiones, y en segundo lugar, las pérdidas, causadas ya sea por un pésimo estado de la infraestructura, ya sea por conexiones ilegales, que terminaron por elevar los costos del servicio.

Para resolver el problema de las tarifas se adoptó una solución ingeniosa, que después hizo escuela en otras ciudades de Colombia y de América Latina: se procedió, entre 1983 y 1985, a una estratificación de toda la ciudad,

clasificando las manzanas en categorías comprendidas entre uno (para los más pobres) y seis (para los más ricos), con el fin de fijar costos progresivos en función del nivel socioeconómico de la población. La eficacia de este original procedimiento no permitió, con todo, sanear las finanzas de las ESP.

Del mismo modo, la autonomía de las ESP las ha conducido a veces a manejar en forma ambigua la expansión de las redes:

– Ellas están llamadas a garantizar una cobertura satisfactoria, pero bajo una lógica comercial que favorece a las clases acomodadas, mientras las clases populares obtienen un servicio mediocre.

– El equipamiento de los barrios, algunos de los cuales están situados fuera del perímetro urbano, ha sido con frecuencia objeto de una gestión clientelista (algunos elegidos también eran miembros de la junta directiva de las ESP).

– En cambio, otros barrios permanecen mal equipados, ya sea por negligencia o al contrario, por una voluntad de controlar la expansión urbana en sectores cuya urbanización fue juzgada como indeseable (por ejemplo, en flancos de montaña o en zonas inundables).

En la década de 1990 se emprendió el proceso de privatización pero de manera muy desigual: muy pronto y no sin problemas respecto a la recolección de las basuras, que presentaba graves disfunciones (hoy resueltas); muy difícil en el caso de las telecomunicaciones, en razón de una fuerte resistencia sindical; muy parcialmente respecto a la electricidad, y al mismo tiempo en forma costosa, parcial y controvertida respecto al tratamiento de las aguas servidas, y sin éxito hasta hoy en el caso del agua potable. Esta privatización progresiva le procuró a la ciudad nuevos recursos, reinvertidos en general en la revalorización del espacio público. En 1996, el sistema de estratificación socioeconómica fue ajustado y las clasificaciones de las manzanas volvieron a elevarse, de manera que pudieran aumentar los ingresos de las ESP.

Hoy en día, teniendo en cuenta la buena tasa de cobertura de los servicios públicos al interior del Distrito, ya no se trata de un desafío mayor para el proceso general de urbanización, fuera de las estrategias de los promotores en algunas grandes operaciones inmobiliarias; esto, contrariamente a los servicios sociales como la educación o la salud, que tienen un papel decisivo en las elecciones residenciales de los hogares. En cambio, las ESP de Bogotá, al haber extendido su campo de intervención por fuera de los límites del Distrito, enfrentarán un problema importante en toda la sabana y más allá: el

de la “solidaridad territorial” entre el Distrito y los municipios vecinos. En materia de política tarifaria especialmente, se enfrentan las dos lógicas de la rentabilidad económica y la solidaridad socioespacial (GOUËSET, 2002). Volvemos a encontrar allí consideraciones evocadas más arriba a propósito de la cuestión metropolitana.

C. EL DIFÍCIL MANEJO DEL TRANSPORTE URBANO

Las políticas viales y de transporte han orientado claramente o facilitado algunas formas de expansión de la ciudad de Bogotá desde las décadas de 1950 y 1960 (MONTEZUMA, 1997b). En efecto, recordemos que las vías constituyen en ese momento un objetivo importante de la planificación y la gestión urbanas, con la creación anticipada de vías principales y luego de vías de conexión secundarias.

La situación del transporte es diferente a la de los servicios públicos domiciliarios. Durante mucho tiempo, una gran rivalidad opuso al sector público (que interviene desde 1910) contra el sector privado. Al principio con el tranvía y después con la Empresa Distrital de Transporte Urbano (EDTU), creada en 1958, el Distrito no ha dejado de enfrentar los riesgos que representaba el desarrollo de empresas privadas de transporte colectivo (VARGAS y ZAMBRANO, 1988; MONTEZUMA, 1997b; PÁRIAS, 2002). Pero en 1975, probablemente gracias a la existencia de estrechos lazos entre los empresarios privados y los elegidos del Distrito, las empresas privadas tuvieron éxito al reintroducir el principio de un subsidio público para su actividad, lo que les permitió importar nuevos buses y ha multiplicado la creación de pequeñas y medianas empresas en ese sector. Sin embargo, a pesar del fuerte crecimiento de la demanda, las empresas privadas no extendieron en forma suficiente sus servicios de transporte para los barrios marginales y de difícil acceso, prefiriendo competir contra la EDTU en las líneas más rentables y dejar el mercado de los barrios populares para las pequeñas empresas informales. La EDTU no dejó de perder terreno desde entonces, y entró en una grave crisis financiera a partir de 1978.

En los años 1980, mientras la ciudad continuaba siendo dotada muy desigualmente de infraestructuras viales (especialmente con una muy escasa producción de vías de conexión entre los barrios) y el sistema vial se degra-

daba rápidamente, la ciudad de Bogotá contempló el desarrollo de un sistema bimodal de transporte: junto a un servicio de bus esencialmente privado y frecuentemente informal cuya calidad se deterioraba, el número de vehículos particulares aumentaba rápidamente. Esta evolución tuvo consecuencias importantes sobre algunas formas de crecimiento espacial: densificación de algunas zonas pericentrales, antes abandonadas por las clases medias en beneficio de la periferia (sobre este punto, cfr. el cap. tercero), segregación socioespacial incrementada, disociación entre las zonas de trabajo y las zonas residenciales (MONTEZUMA, 1997b; PÁRIAS, 2002).

Frente a esta situación, los poderes públicos buscaron diversas soluciones pero sin éxito. La administración DURÁN DUSSÁN (1978-1980) reflexionó seriamente por primera vez sobre la construcción de un metro, solución nombrada sin cesar pero jamás emprendida. Un programa de trole eléctrico, previsto como complemento del metro, también fue abandonado en razón de la gravedad de las dificultades financieras de la EDTU, que culminó en su liquidación (oficialmente: su privatización) entre 1989 y 1990. Al mismo tiempo, la política de apertura económica y la disminución de las barreras aduaneras favorecían la importación de automóviles a menor costo, lo que provocó —mientras las condiciones para el desplazamiento en bus continuaban deteriorándose— un aumento del parque automotor y una creciente saturación del tráfico.

Los límites de un sistema de transporte casi enteramente administrado por actores privados surgieron rápidamente. El problema no se limita a una posible inadecuación entre el crecimiento territorial de la ciudad y la expansión de las redes de transporte colectivo: este último siempre ha acompañado, en forma casi simultánea, al crecimiento urbano de Bogotá (MONTEZUMA, 1997b). En cambio, la oferta de transporte colectivo se ha desarrollado según una doble lógica: mientras las empresas formales (y los mejores buses, que también son los más costosos) se concentraban en los barrios y los trayectos más rentables, los barrios marginales veían su servicio de transporte asegurado por empresas informales, menos confiables desde el punto de vista de la calidad del servicio (confort, seguridad, regularidad, nivel de contaminación, e incluso tarifas). Las condiciones de transporte en la ciudad de Bogotá se degradaron fuertemente a lo largo de los años 1990: aumento del parque de vehículos importados —tanto individuales como colectivos— y congestión casi permanente de las

vías; creciente contaminación; precio alto, incomodidad e inseguridad en los transportes colectivos, etc.

Los poderes públicos, durante un momento superados por la magnitud del problema y en ocasiones tentados a resolverlo mediante el simple mejoramiento de las vías, finalmente decidieron enfrentarlo en conjunto en el curso de la segunda mitad de los años 1990. En una primera etapa, los estudios los inclinaron a favorecer a los automóviles y así, a las vías, o bien a construir el metro; pero las recomendaciones no fueron seguidas exceptuando a las que se referían al mejoramiento de las vías (puentes y ejes de las autopistas –una solución necesaria pero no suficiente, y castigadora de las finanzas del Distrito–). Después, con PEÑALOSA, surgió la idea de un sistema diversificado derivado de diferentes modos de transporte. Se crearon simultáneamente dos sociedades para administrar el transporte público (la del metro y la de Transmilenio), se abrieron nuevas vías, y se tomaron medidas para favorecer el uso de la bicicleta (que MOCKUS había empezado a promocionar) y restringir el tráfico de automóviles (con la implantación del programa de circulación alternada de automóviles, Pico y Placa, lanzado por MOCKUS, el predecesor de PEÑALOSA). El proyecto para la construcción del metro fue abandonado rápidamente una vez más, y los esfuerzos terminaron en la ejecución del programa Transmilenio, un proyecto de transporte público en autobús; solución flexible y económica que ya había dado resultados en algunas ciudades del Sur, aunque ciertamente de tamaño menor (como Curitiba, en Brasil). Este sistema, inaugurado a principios del año 2001 a lo largo de algunos ejes viales estratégicos, mostró su eficacia y generó profundas mejoras tanto en la organización del sector del transporte urbano como en el comportamiento de los usuarios. Este éxito innegablemente tiende a relegitimar la acción del Estado en la gestión de los servicios públicos y muestra, *a contrario*, que una política que privilegie al automóvil contribuye, a la inversa, a reforzar la segregación social, tanto en el uso del transporte como en el acceso a la vivienda.

En resumidas cuentas, el período reciente ha sido particularmente fecundo en reformas, en tentativas y en innovaciones en materia de políticas urbanas en Bogotá. Algunas iniciativas, como el Transmilenio, parecen haber tenido más éxito que otras como Metrovivienda o, en otro campo de actividades, la privatización de las más grandes ESP de Bogotá (telecomunicación, electricidad). El papel del Estado es bastante ambivalente: si, por un lado, afirma una

voluntad de liberarse (en materia de producción de vivienda, de servicios públicos), por otro lado despliega un arsenal de ideas innovadoras y de estrategias que parecen comenzar a dar frutos. Del mismo modo, la promoción de la participación ciudadana, una idea fuerte de las décadas de 1980 y 1990, ha dado en Bogotá —como en la mayoría de las ciudades donde el fenómeno ha sido estudiado— un poder real a los individuos y a los grupos sociales mejor organizados, mientras que las personas que permanecen al margen de las redes políticas y sociales han sido excluidas de los nuevos espacios de negociación abiertos por el Estado.

CONCLUSIÓN

Las décadas de 1980 y 1990 constituyeron un rico período de cambios para el desarrollo de la metrópoli de Bogotá, con reformas democráticas y una política de descentralización que transformaron en profundidad las prácticas de planificación urbana. Los efectos de esas transformaciones sobre la sociedad y el paisaje urbanos son aún poco visibles, si bien está en trance de surgir una nueva imagen de Bogotá: espacios públicos renovados y resignificados por sus habitantes, un sistema de transporte radicalmente transformado e innovador en su configuración, un mayor control de la inseguridad, etc. Probablemente es demasiado temprano para evaluar la duración de estas transformaciones. Sin embargo, ya aparece bastante clara la necesidad de proceder a realizar ajustes en las reformas emprendidas en el curso de los últimos veinte años. Por una parte, el nuevo modo de gestión de las localidades se muestra poco eficaz, sobre todo en su dimensión participativa. Por otra parte, la región metropolitana de Bogotá sigue desprovista de instrumentos de gestión apropiados, especialmente para manejar los problemas que se plantean a escala de la aglomeración, como la vivienda popular (frente al cual el Distrito y los municipios de la sabana se reenvían mutuamente la responsabilidad), el transporte público (cuya integración a escala metropolitana es una necesidad urgente) y aun los servicios públicos (cuando incluso las empresas de Bogotá tienen un radio de acción que supera ampliamente los límites del Distrito).

Esas reorientaciones, elecciones y decisiones inevitablemente reposan sobre una redefinición de las relaciones entre los distintos actores de la ciudad, pues esas relaciones permanecen todavía muy marcadas por la herencia de

los sistemas políticos tradicionales: control de las instituciones por parte de los partidos (incluso cuando el mecanismo bien engrasado del bipartidismo felizmente está en decadencia en Bogotá), inmovilismo, efectos perversos del clientelismo o de la corrupción, etc. Las resistencias al cambio podrían provenir de la falta de claridad, e incluso de las contradicciones inherentes a la nueva Constitución y a las leyes que se derivan de ella. Los engranajes de la democracia representativa han sido reformados y los mecanismos de la democracia participativa se han establecido, pero hoy se tiene la sensación de que ninguna de las dos es verdaderamente eficaz y que esas dos vertientes de la democracia colombiana funcionan más en competencia que en verdadera complementariedad. En efecto, el principio mismo de la participación ciudadana, frecuentemente idealizado, contribuye a veces a desvalorizar la legitimidad de las instituciones formales, sin pasar por la prueba de su eficacia. Los habitantes de Bogotá parecen experimentar dificultades para responder a las “exhortaciones participativas” que les hace, paradójicamente, el poder de turno, en otro tiempo muy centralista y bastante poco dado a escuchar a sus conciudadanos. Estas dificultades institucionales también provienen del desfase entre las diferentes lógicas propias de las diversas categorías de actores de la ciudad: elegidos, administradores, actores económicos, movimientos asociativos, habitantes, etc., categorías que, en sí mismas, son muy heteróclitas y portadoras de aspiraciones o de proyectos a veces opuestos.

Por último, uno podría asombrarse del porvenir de una metrópoli en plena recomposición y que continúa creciendo sin suscitar en adelante debates, controversias y propuestas alternativas; los cuestionamientos alrededor de los grandes desafíos urbanos con frecuencia son reducidos a discusiones técnicas entre elegidos y expertos. El actual marasmo económico, al igual que las incertidumbres políticas y cierta anomia social que pesan sobre todo el país, explican sin duda esta situación, que resulta perjudicial para el funcionamiento de la democracia local. Afortunadamente, la historia reciente nos ha mostrado, particularmente en Bogotá, cómo la imaginación y la capacidad de innovar podrían permitirle a esta ciudad y a sus actores encontrar soluciones ante los desafíos que enfrentan.

BIBLIOGRAFÍA ¹¹

LULLE, T. y E. LE BRIS. “L’action publique à l’épreuve des pratiques”, en F. DUREAU et ál. (coord.). *Metrópolis en movimiento. Una comparación internacional*, Bogotá, Alfaomega e IRD, colección Economía de América Latina, 2002.

OSMONT, A. *La banque mondiale et les villes: du développement à l’ajustement*, Paris, Karthala, 1995.

SABATÉ, A. F. y F. G. ROBERT. “Planificación urbana. Evolución y perspectivas”, en J. L. CORRAGIO (ed.). *La investigación urbana en América Latina*, t. 3, Quito, Ciudad, 1990.

¹¹ No figuran aquí las referencias bibliográficas que tratan específicamente sobre Colombia: éstas se encuentran en la bibliografía general ubicada al final de la obra.

En esta obra, la sucesión de capítulos habrá podido sorprender al lector. Nos ha conducido desde las movilidades intraurbanas hasta las identidades étnicas en la ciudad, desde las distribuciones residenciales hasta la violencia, del estudio de la red urbana y las migraciones al problema de la gestión de las ciudades. Pero lejos de constituir una simple sucesión temática de la situación de las ciudades colombianas en estos principios del siglo XXI, los seis capítulos sirven como pretexto para subrayar las características eminentemente sociales de la producción del espacio. Las relaciones de los comportamientos individuales y colectivos de los ciudadanos con el espacio, y los efectos de esos comportamientos sobre la producción de los territorios, constituyen el hilo conductor de la obra. Entonces, los procesos que construyen cada uno de los dominios estudiados por los autores son los que fundan el interés del libro, pero también la lectura transversal y acumulada.

De hecho, el enfoque y el contenido de la obra trascienden una investigación urbana que —como lo subrayan los autores— se encuentra a la espera “de un nuevo paradigma que permitiría leer la gran ciudad existente con las transformaciones y redistribuciones que la atraviesan”. Pero más aun, implican una renovación de las aproximaciones en ciencias humanas y sociales.

En primer lugar, esta renovación es legible en los marcos establecidos en el transcurso pluridisciplinar. Los métodos estadísticos, antropológicos, demográficos, sociológicos, las aproximaciones geográficas y los modelos espaciales son convocados por turnos, de acuerdo con los objetos estudiados e incluso para estudiar el mismo objeto, en un intento de aproximación global e innovadora al espacio. Esta aproximación sitúa a los habitantes en el centro del análisis territorial, relacionando sus comportamientos con la historia de las ciudades, la intervención político-administrativa, los diversos modelos culturales, los conflictos sociales, guerreros o mafiosos, las concurrencias y las distancias territoriales, entre otros. Ella demuestra que en Colombia, como en otras partes, los márgenes de maniobra de los habitantes les permiten superar las restricciones y, a cambio de aceptarlas, al menos adaptarse a ellas o resistirlas mediante sus modos de vida, su sedentarismo o su movilidad. Como resultado, los factores económicos no representan más los elementos

explicativos mayores para las evoluciones metropolitanas. Si la ciudad global existe, si la mundialización produce sus efectos, es también porque los habitantes aprenden a “hacer con ellas”.

Las conclusiones de esta obra trascienden entonces el puro contexto colombiano, e incluso el de América Latina. Sin romper por eso con las aproximaciones temáticas a los procesos urbanos, los diferentes capítulos apuntan a presentar un embrión de lo que podría ser, a término, un enfoque que articula los grandes sistemas espaciales y las prácticas individuales y colectivas de los actores que las producen. Esta investigación de una “globalidad temática” organiza la obra. Detrás de los resultados propios del dominio desarrollado por cada uno de los capítulos, tres hilos conductores estructuran el conjunto del libro: la simultaneidad de los procesos que actúan en distintos niveles espaciales y sociales, la movilidad espacial entendida como un elemento central en las recomposiciones territoriales, y la importancia de las representaciones en el desarrollo de los procesos socioespaciales.

PROCESOS QUE ACTÚAN EN MÚLTIPLES NIVELES

La voluntad de ceñirse a las realidades urbanas requiere hoy una aproximación a la ciudad y a sus habitantes que dé cuenta de la simultaneidad de las evoluciones que afectan las diferentes escalas de los territorios. Se trasciende así la noción de escalas ‘encajadas’, en la cual las evoluciones en un grado o nivel dado se interpretan en sus relaciones con los otros niveles, donde finalmente el proceso global no es más que la resultante de procesos que se producen en escalas inferiores. En el enfoque defendido por los autores, en cualquiera de los dominios abordados cada grado es un *nivel de realidad*, que indica en parte la existencia de lógicas de actores específicos.

Lo que equivale a decir que cada uno de los niveles es parcialmente autónomo porque evoluciona bajo presiones que le son particulares, y que los diferentes actores representan en marcos preestablecidos. Pero los gestores, los políticos o los habitantes también pueden construir su lógica de acción al tener en cuenta varios *niveles de realidad*. Entonces, son las relaciones entre esos niveles las que constituyen un grado o nivel completo, nivel que reposa sobre lógicas propias de las relaciones entre los niveles.

Por ejemplo, este libro nos enseña que el sistema espacial colombiano se ha transformado profundamente a lo largo de los dos últimos decenios, mediante el reforzamiento de la influencia de las grandes ciudades según un proceso que engloba metropolización y periurbanización. La organización del nuevo modelo espacial nacional sólo es legible a partir de una aproximación global al espacio colombiano y a su sistema de ciudades, que constituyen un *primer nivel de realidad* que implica modos específicos de ordenamiento del territorio. Al mismo tiempo, esta redistribución es atribuible a las migraciones de individuos y grupos de los que se puede pensar que no tienen conciencia alguna de los efectos producidos por sus actos. Esas migraciones obedecen, por ejemplo, a la violencia rural, la búsqueda de trabajo, la educación para los hijos, etc. Al igual que causas propias de un *segundo nivel de realidad*, que expresa a la vez la situación de las ciudades y los campos pero se traduce concretamente en los movimientos de los migrantes rurales hacia las ciudades, o a través de circulaciones de ciudad en ciudad. La periurbanización constituye finalmente un *tercer nivel de realidad*, que ciertamente remite a la historia de los lugares y las densidades urbanas, pero también a la intervención de los promotores inmobiliarios, quienes han sabido vender a las clases medias en expansión numérica unas formas de habitat que responden a sus aspiraciones sociales y residenciales.

Este ejemplo muestra claramente que la ciudad se interpreta como una combinación de “espacios de acciones” de múltiples actores que razonan bajo *niveles de realidad* y temporalidades que les son propias. De ahí igualmente la verdadera importancia que le conceden los investigadores a los procesos pasados y presentes en los diferentes dominios que concurren en la producción y evolución de la ciudad.

Paradójicamente, para quien se interesa en las transformaciones de la sociedad, en esta maraña de complejas lógicas de actores, los territorios adquieren sentido. El espacio es probablemente uno de los raros elementos concretos susceptibles de traducir en sus formas, al igual que en sus evoluciones, el “resultado” de esas lógicas y de esas temporalidades múltiples. Entonces, como lo muestra esta obra, las distintas disciplinas pueden debatir en torno a objetos y conceptos comunes. Por ejemplo, la periurbanización o la metropolización implican estudiar, al mismo tiempo, las interacciones entre las ciudades a

partir de grandes modelos espaciales, las formas y motivaciones de las migraciones, las lógicas económicas y espaciales de los promotores, las causas que empujan a las clases medias a protegerse en conjuntos residenciales cerrados y a desarrollar prácticas propias, los modos de gestión urbana que favorecen mecanismos de exclusión y formas de violencia derivadas.

Esto explica la voluntad de los autores para construir problemáticas alrededor de objetos bien identificados. La complejidad de la ciudad contemporánea sólo resulta visible desde una segmentación de la cuestión urbana, incluso la única que puede expresar la segmentación de las lógicas de los actores más o menos organizados. Contrariamente a lo preconizado por la investigación urbana estructuralista, muy en boga hace treinta años, la atención hacia el conjunto de los actores que operan en la ciudad –los habitantes en primer lugar– ha mostrado que resultaría vano buscar uno o varios modelos urbanos que permitan captar a la ciudad en todas sus dimensiones, tanto en Colombia como en otras partes. Es inútil entonces intentar una lectura sintética de los resultados de cada uno de los capítulos de este libro; cada uno de ellos se interesa en un nivel de lectura de una realidad urbana que no podría reducirse a los otros niveles.

MOVILIDADES Y RECOMPOSICIONES ESPACIALES

En ese marco, la movilidad es uno de esos “objetos bien identificados” para estudiar la o las ciudades, porque revela múltiple factores que comprometen a la vez a las formas espaciales y a las lógicas sociales y económicas; y porque influencia igualmente a la intervención política, la movilidad probablemente constituye uno de los procesos más importantes para comprender las evoluciones urbanas contemporáneas. Los autores de esta obra no se han equivocado al respecto, porque le han consagrado la mitad de los capítulos, donde aparece en diversos grados en los problemas de etnicidad, violencia urbana o gestión de la ciudad.

Es gracias al estudio de las migraciones que el libro puede describir los ciclos principales de evolución de las ciudades colombianas: migración rural hacia las ciudades, desarrollo de las metrópolis, debilitamiento de los flujos rurales, incremento de los flujos interurbanos y expansión de las pequeñas

ciudades, periurbanización y, más recientemente, desarrollo de movilidades intraurbanas y densificación de los intersticios.

Uno no puede abstenerse de comparar estas fases con las evoluciones de las metrópolis descritas en el libro, especialmente las de Bogotá. Si la transición urbana implica una pérdida de las capacidades de atracción de las grandes ciudades en beneficio de un desarrollo más endógeno conferido por el saldo natural en detrimento del saldo migratorio, el espacio periurbano de la capital no atrae más a los habitantes del centro y se densifica gracias a las mudanzas en las proximidades.

¿Última etapa del proceso? La constatación es importante, pues significa que, cruzado un umbral de crecimiento, las ciudades se desarrollan sobre sí mismas, autoalimentándose, sea mediante los flujos interurbanos (sistema de ciudades), o bien a través de las movilidades intraurbanas (periurbanización). Lo que resulta nuevo es que en adelante se añaden a esos ciclos, conocidos, mecanismos de endogenización propios de cada uno de los sectores urbanos. En otros términos, la autoalimentación de las ciudades se cumpliría a la vez mediante formas de movilidad interurbana, intraurbana y, ahora, movimientos residenciales infrasectoriales. Se encuentran entonces niveles de realidad complejos y simultáneos que producen y hacen evolucionar las formas y las prácticas de la ciudad.

Pues los capítulos de la obra muestran que esos movimientos no se suceden de manera cronológica sino que actúan al *mismo* tiempo. A este respecto, el caso de Bogotá es bastante explícito. La capital se ha convertido en el pivote del sistema territorial colombiano, polarizando las movilidades interurbanas. Lo que está ocurriendo es una remodelación de las cuencas migratorias regionales. Al mismo tiempo, el objetivo pregonado por el POT de Bogotá es terminar de urbanizar y densificar el espacio situado al interior de los sectores periféricos. El poder público rechaza así la extensión urbana, sin por eso bloquear los movimientos residenciales desde el centro hacia la periferia. Por último, los autores del libro constatan que las mudanzas hacia distancias cortas tienden a conservar a la población en los barrios donde inició su recorrido residencial.

En consecuencia, por una parte la capital continúa atrayendo y devolviendo a los hogares; por otra parte, se mantiene la densificación de los espacios periurbanos. Pero la ciudad también se desarrolla a través de mudanzas de

proximidad que contribuyen a reproducir en forma idéntica las desigualdades socioespaciales generadas en su producción. Así se explican los mecanismos contradictorios en curso en la mayor parte de las metrópolis mundiales, sometidas a una expansión periurbana intensiva, a rápidas transformaciones sociales de algunos barrios centrales, pero también a un incremento de las fracturas socioespaciales preexistentes.

Para el conocimiento del poblamiento urbano, el desafío es captar en un solo sistema los efectos producidos por el conjunto de esos movimientos, a riesgo de hacer aparecer los disfuncionamientos. Pero, para la gestión urbana, la tarea es más delicada, en la medida en que se trata de hacer coherente, en un “pensamiento de la ciudad”, prácticas espaciales a veces paradójicas.

Así, en adelante el espacio se concibe como un sistema de lugares en el cual los movimientos ponen en relación a las ciudades entre sí y a los barrios entre ellos. El arribo a un nuevo marco de vida no significa sin embargo una ruptura con el medio de origen. La pertenencia “multilocal” ha devenido una regla en las prácticas urbanas, que no deja de tener repercusión sobre los ritmos, las distancias y los modos de desplazamiento de los individuos en el espacio. En ese contexto, migrantes y sedentarios, arraigo y movilidad, dejan de oponerse. Los sedentarios facilitan la llegada de migrantes en el espacio de acogida; la instalación de larga duración en un barrio o una vivienda puede ir a la par con desplazamientos frecuentes a diferentes partes de la ciudad e incluso del exterior.

Lejos de contribuir con una democratización del acceso a la ciudad, los desplazamientos y sus movimientos generalizados concurren a acrecentar las desigualdades espaciales. Estas sólo reflejan en parte las injusticias sociales. La inserción de un migrante en el espacio urbano es difícil si él no conoce a un inmigrado que pueda acogerlo. Una débil capacidad de movilidad impide el acceso al empleo, al consumo y a las distracciones de los periurbanos.

A las categorías que traducen las desigualdades sociales se asocian hoy otras categorías surgidas de las evoluciones de las formas de la ciudad y de las prácticas urbanas (accesibilidad, recursos urbanos, multi-residencia, etc.). Ellas ciertamente permiten afinar el conocimiento de las desigualdades espaciales, pero también contribuyen a forjar un nuevo pensamiento dominante de la ciudad que, lejos de disminuir las desigualdades, las mantiene y las acentúa.

REPRESENTACIONES Y PENSAMIENTO URBANO DOMINANTE

El libro también demuestra con fuerza que, en una ciudad en movimiento donde uno descubre cada día más la complejidad de los procesos, el recurso a las representaciones para descifrar los nuevos códigos espaciales o para conducir una política pública se convierte en regla.

En la mayoría de los casos, esas representaciones reposan sobre una proyección de las realidades sociales en el espacio. En otras palabras, si como lo señalamos más arriba, el espacio es uno de los raros elementos capaces de proporcionar una forma material a procesos sociales que se han vuelto complejos y abstractos, por lo mismo también deviene a la vez el significante de las desigualdades de la sociedad global y el componente simbólico de las reivindicaciones y la acción urbana. En consecuencia, las correspondencias entre sociedad y territorio tienden a desarrollarse hacia la construcción de identidades y el establecimiento de políticas que afirman la lucha contra las desigualdades.

La asociación no está desprovista de ambigüedades. Ella reduce a una intervención espacial la solución de las desigualdades sociales y los conflictos urbanos. Ahora bien, destruir los lugares de la pobreza jamás ha erradicado la pobreza, como tampoco una construcción identitaria se reduce al reconocimiento simbólico de un lugar, aunque esté cargado de historia.

En un período en el cual el territorio se ha convertido en un concepto común a un mayor número, se descubre el rol jugado por las representaciones en la conducta de las políticas urbanas que sustituyen en forma recurrente a las políticas sociales. Transmitidos por las grandes organizaciones internacionales, los objetivos estratégicos devienen monolíticos y, como afirman los autores, aspiran a conferir una dimensión democrática a operaciones profundamente neoliberales. *Desarrollo sostenible, democracia participativa* o “*governance*” son hoy conceptos corrientemente usados por urbanistas y políticos del Norte o del Sur. Ellos impulsan modos de intervención que de cierta manera ratifican y coagulan en las mentalidades las jerarquías sociales del espacio urbano. Como por ejemplo, cuando se establecen políticas tarifarias de servicios domésticos en función de una jerarquía socioeconómica de los sectores urbanos y no de los ingresos de sus usuarios.

Hasta tal punto son compartidas esas representaciones, que de hecho participan en la construcción de la alteridad. Los lugares de origen y las localizaciones residenciales contribuyen a la estigmatización de las personas; como en el caso de los exiliados por causa de la violencia política señalados con el dedo cuando llegan a la ciudad. Los habitantes de los barrios no entran en una posición claramente definida debido a las representaciones que concurren a construir las jerarquías de los sectores urbanos; ellos devienen “invisibles” en la ciudad y son poco tomados en cuenta por las políticas públicas.

De ello resultan una desconfianza generalizada hacia los residentes de los barrios situados en lo “bajo” de la jerarquía urbana, estrategias de evitación en las elecciones residenciales y el surgimiento de espacios que apuntan a la protección contra las “clases peligrosas”. Más aun, el peso de esas representaciones bloquea toda tentativa de instauración de una solidaridad entre los municipios, por el temor de tener que administrar a los pobres venidos de otra parte.

Sobre este punto, y sobre los demás, queda mucho por hacer. No es el menor valor de esta obra mostrarnos la amplitud y la dificultad de la tarea; también nos abre el camino hacia una movilización común de los saberes especializados. Este transcurso se impone para convertir la complejidad de la ciudad en algo más inteligible, sin ceder por eso a las conminaciones utópicas producto de un modelo globalizante y uniforme.

JEAN-PIERRE LÉVY

ANEXO I

LISTA DE LOS INVITADOS AL SEMINARIO

1. Expansión de la red urbana

- L. M. CUERVO (Universidad de los Andes, Bogotá)
- N. DEMYK (Université de Paris 7)
- O. DOLLFUS (Université de Paris 7)
- G. LOMNÉ (Université de Marne-la-Vallée)
- A. MUSSET (EHESS, Paris)
- H. THÉRY (CNRS, ENS Paris)
- T. SAINT-JULIEN (Université de Paris 1)
- C. ROZENBLAT (Université de Montpellier)

2. Movilidades y sistemas de lugares

- C. BEAUCHEMIN (Université de Paris 4)
- D. DELAUNAY (IRD, Bondy)
- H. DOMENACH (IRD, Marseille)
- F. URREA (Universidad del Valle, Cali)

3. Dinámicas de poblamiento y segregaciones urbanas

- G. CAPRON (CNRS, GRAL, Toulouse)
- A. DEBOULET (Université de Nantes)
- J.-C. DRIANT (IUP, Université de Paris 12)
- P. GERVAIS-LAMBONY (Université de Paris 10)
- M. GUILLON (Migrinter, Poitiers)
- J.-P. LÉVY (CNRS, CRH-LOUEST, Nanterre)

4. Ciudad y etnicidad: configuraciones de la etnicidad negra en la ciudad

- M. AGIER (IRD, Paris)
- J. MONNET (Université de Toulouse-Le-Mirail)
- R. OTAYECK (CNRS, CEAN, Bordeaux)
- P. SIMON (INED, Paris)

5. Violencias y ciudades

- P. GUILLAUME (Université de Reims, IEP)
- M.-C. JAILLET (CNRS, CIEU, Toulouse)
- J. MONNET (Université de Toulouse-Le-Mirail)
- A. PERALVA (Université de Toulouse-Le-Mirail)

6. Bogotá: crecimiento, gestión urbana y democracia local

J.-M. BLANQUER (IHEAL, Paris)

J.-P. GAUDIN (CNRS, CEPEL, Montpellier)

M.-F. PRÉVÔT-SCHAPIRA (Université de Paris 8)

F. E. OSORIO (Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá)

F. TOMAS (Université de Saint-Étienne)

I. LOS CENSOS DE POBLACIÓN

Los tres primeros capítulos acuden ampliamente a los datos de los censos, desde el de 1938 hasta el de 1993. La frecuencia, la exhaustividad y la fiabilidad de la observación hacen de los censos una fuente ineludible para estudiar las poblaciones urbanas a escala de la red urbana nacional (cap. primero), a escala local (cap. segundo)¹ o, gracias al acceso a los microdatos, al nivel de sectores cartográficos urbanos (cap. tercero). Sin entrar en los detalles de las evoluciones experimentadas por el censo colombiano y conocidas desde 1938 hasta el presente, señalamos tres cambios importantes.

El primero consiste en la introducción de la noción de residencia habitual: a partir de 1985, la población es censada no en el lugar de presencia en el momento del censo (población de hecho) sino en su lugar de residencia habitual (población de derecho).

El segundo cambio reside en el carácter excepcional de la metodología empleada en el Censo de 1985, que escapa a la regla de base de las operaciones censales: la exhaustividad. En 1985 el cuestionario básico aplicado a la población de todas las viviendas ordinarias se limitó a algunas preguntas sobre la vivienda, el sexo, la edad y el lazo de parentesco de los individuos con el jefe de hogar. El cuestionario completo, que incluía las preguntas habituales sobre la vivienda y la población (nivel de educación, empleo y migración) sólo fue aplicado en una muestra del 10% de los hogares. A los errores de cobertura del censo (omisiones y recuentos múltiples), se añade así el error de la muestra. El diseño muestral fue definido para producir estimaciones aceptables para las sub-poblaciones de más de 15.000 habitantes. La cifra promedio de los

1 Localmente, en algunas zonas rurales del país, la fiabilidad de los datos censatarios no está verificada. En las zonas rurales del Pacífico, los datos de 1993 relativos a las migraciones reflejan poco las dinámicas demográficas constatadas a partir de otras fuentes. En ese caso (secc. III cap. segundo), nosotros hemos preferido trabajar con datos del DPT (Departamento de Patologías Tropicales).

sectores cartográficos de Bogotá ciertamente es bien inferior; sin embargo, la importancia de la varianza entre sectores en relación con la varianza intra-sector, conduce a considerar como aceptables los análisis espaciales basados en datos por sectores, tales como los observados en el capítulo tercero (DUREAU et ál., 1993: 89-92).

La realización, a partir de 1973, de encuestas postcensales permitió evaluar los censos en términos de cobertura y de calidad de los datos recogidos: para la población del conjunto del país, la tasa de no cobertura fue evaluada en las publicaciones del DANE en 11,7% en 1993, es decir, sensiblemente más que el 7% de los censos de 1973 y 1985, lo que significa una disminución sensible de la calidad promedio de los censos colombianos en materia de cobertura de la población².

Establecidos por el DANE a nivel departamental (con la distinción entre capital de departamento, cabecera municipal y “resto” del municipio), los coeficientes de ajuste deducidos de los resultados de las encuestas postcensales son aplicados de manera homogénea al conjunto de cada uno de esos tres componentes. Ahora bien, la calidad del censo puede variar de manera sensible en el seno de un departamento: ese es manifiestamente el caso de Casanare, donde las evoluciones de las poblaciones rurales entre 1973, 1985 y 1993 son incoherentes (FLÓREZ et ál., 1996: 27). La capital del país no es ajena a esas variaciones locales de calidad, como lo demuestra la comparación de las cifras de hogares censados por el DANE en 1993 y de los resultados de los recuentos de hogares efectuados en las manzanas de la muestra de la encuesta CEDE-ORSTOM en el mes precedente al censo. Localmente, sobre pequeñas cifras, ajustes importantes pueden producir resultados sujetos a precaución. Pero, a falta de algo mejor, las cifras de población ajustadas por el DANE fueron sistemáticamente utilizadas en este libro.

2 La evolución de esta tasa promedio calculada para el conjunto de la población del país puede enmascarar evoluciones opuestas: es así como la tasa de no cobertura de Bogotá pasa de 10% en 1973 a 6% en 1985, para remontar hasta un 9,5% en 1993 (DANE, 1981, 1990 y 1996).

II. LAS ENCUESTAS BIOGRÁFICAS SOBRE LA MOVILIDAD

Desde las encuestas pioneras de los años 1960, las recolecciones biográficas cuantitativas se multiplicaron a través del mundo. Las tres encuestas realizadas en el curso de los años 1990 en Colombia gozan, junto con las encuestas realizadas en Europa o África, de un mejoramiento progresivo en las técnicas de recolección biográfica (GRAB, 1999). Esas tres encuestas, cuyas características generales están resumidas en la tabla a.1, tienen en común cierto número de elecciones metodológicas en materia de técnica de selección de la muestra y de concepción del cuestionario. Después de haber presentado la primera de ellas, realizada en Bogotá en 1993, no evocaremos respecto a las otras dos más que las particularidades correspondientes a enseñanzas derivadas de la experiencia de Bogotá o a las especificidades de la problemática y del contexto de las ciudades estudiadas.

Los datos recolectados en las tres encuestas permiten abordar, sobre una base de información común, varios temas importantes:

– En el capítulo segundo, las prácticas migratorias hacia Bogotá, Cali y las ciudades de Casanare, su diferenciación según el origen geográfico y las características sociales de los migrantes y su articulación con las lógicas de reproducción socioeconómica de los grupos familiares y sociales; el impacto de esas migraciones sobre las estructuras demográficas y sociales de los medios de origen y destino; las circulaciones entre los diferentes lugares que conforman los espacios de vida.

– En el capítulo tercero, las dinámicas de especialización demográfica, social y racial del poblamiento en Bogotá y Cali.

Además, los módulos desarrollados en la encuesta de Cali proporcionan el material para análisis específicos sobre esta ciudad, en lo que se refiere a la construcción de las identidades étnica y racial (cap. cuarto), la pequeña delincuencia y los factores de exposición al robo (cap. quinto).

A. LA ENCUESTA CEDE-ORSTOM DE BOGOTÁ (1993)

El sistema de encuestas “Movilidad espacial en el área metropolitana de Bogotá”³ se propone observar las diferentes formas de prácticas residenciales y

3 Realizado en el marco de un convenio ORSTOM-Universidad de los Andes, el proyecto

movilidades espaciales utilizadas por las poblaciones de Bogotá y analizar las transformaciones que entrañan sobre la dinámica de la ciudad, tanto a nivel global del área metropolitana como a nivel intrametropolitano. Al combinar los enfoques estadístico y antropológico, el sistema de encuestas comporta dos informes principales: una encuesta demo-estadística en dos etapas (1993 y 1994) y entrevistas semi-dirigidas junto a una sub-muestra de hogares. Las informaciones que siguen sólo conciernen al primer paso de la encuesta estadística; el segundo paso no fue utilizado en el marco de este libro.

El área metropolitana, definida a partir de criterios geográficos, demográficos y funcionales, comprende el Distrito de Bogotá y 17 municipios (anexo 3). Teniendo en cuenta la problemática, el presupuesto disponible y los imperativos estadísticos para obtener una representatividad aceptable a nivel de los barrios, se decidió no realizar encuestas con una muestra dispersa sobre el conjunto del área metropolitana, lo que habría impedido todo análisis local. Por el contrario, el equipo optó por una reducción de su universo de estudio, seleccionando 11 zonas de encuesta. Esta reducción permitió disponer no sólo de una observación estadísticamente correcta de la movilidad a nivel de cada una de las zonas seleccionadas, sino también de un buen conocimiento del contexto. Los criterios de selección de los barrios se dirigieron a dar cuenta de la diversidad de localizaciones en el área metropolitana, la composición socioeconómica de la población, la dinámica demográfica y la forma de producción de las viviendas.

La población sometida a la encuesta corresponde al conjunto de hogares que habitan en viviendas comunes en las 11 zonas de la encuesta. A este respecto, es necesario precisar que la lista de los miembros de hogar se establece al aplicar criterios de definición distintos de los empleados habitualmente, con el fin de captar las migraciones temporales y los sistemas complejos de residencia. Además de los residentes habituales (personas que viven la mayor

“Nuevas formas de movilidad de las poblaciones de Bogotá y su impacto sobre la dinámica del área metropolitana” también se benefició de apoyos financieros, humanos y materiales de las siguientes instituciones: CNES, PIR-Ville, DAPD, DNP y la Universidad Nacional de Colombia; el equipo de investigación pluridisciplinar franco-colombiano fue codirigido por F. DUREAU y C. E. FLÓREZ.

parte del año en el hogar, sea que se encuentren presentes o no en el momento de la encuesta) también pertenecen al hogar las personas que viven la mayor parte del año en otra vivienda, pero que han vivido al menos 30 días (consecutivos o no) en la vivienda encuestada, en el curso del año.

Las dos primeras secciones del cuestionario están centradas en las características de la vivienda (tipo de vivienda, número de hogares, número de habitaciones, forma de tenencia de la vivienda y condiciones de acceso a la propiedad). Las tres secciones siguientes están consagradas a las características demográficas y socioeconómicas de los miembros del hogar (sexo, edad, estado civil, nivel de educación, características del empleo principal y el secundario), y a los desplazamientos desde la vivienda hasta el lugar de estudio o de trabajo. Una sección sobre las etapas migratorias permite recoger un resumen de la trayectoria migratoria de todos los miembros del hogar: esta sección provee la información necesaria para estimar el volumen migratorio hacia el área metropolitana y en su seno, y para caracterizarla mediante datos individuales y según los tipos de trayectorias que pueden ser deducidas de las preguntas planteadas. Después de estas secciones del cuestionario dedicadas a una observación transversal de las características de los miembros del hogar y al resumen de su trayectoria migratoria, sigue una sección que apunta a captar la práctica de los miembros del hogar en materia de sistemas de residencia y a detectar las prácticas bi o tri-residenciales de la población, basadas sobre las migraciones temporales.

Mientras que las secciones anteriores se aplican a todos los miembros del hogar, la segunda parte del cuestionario, consagrada a la recolección de una biografía, se aplica sólo a uno de los miembros del hogar seleccionado por un sistema de cuotas (tabla a.1). El cuestionario biográfico está compuesto por dos matrices que tienen un calendario en común. Cualquiera sea el tipo de información recogida, la duración mínima tomada en consideración es el año.

La primera matriz corresponde a la recolección de las biografías residencial, educativa y profesional de la persona encuestada. En Bogotá y el departamento de Cundinamarca todo cambio de vivienda se considera como una migración, y así debe ser registrado. En otra parte sólo se registran los cambios de municipio. También se recolectan: la relación de parentesco de la persona con el jefe del hogar donde vive; la forma de tenencia de la vivienda;

TABLA A.2
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ENCUESTAS BIOGRÁFICAS SOBRE MOVILIDAD ESPACIAL

	Bogotá	Ciudades petroleras del Casanare	Cali
Fecha de recolección	Septiembre-octubre 1993	Agosto-octubre 1996	Abril-mayo 1998
Instituciones	CEDE-ORSTOM	CEDE-ORSTOM	CIDSE-IRI (ex-ORSTOM)
Universo	Población de viviendas ordinarias de 11 zonas del área metropolitana (7 barrios de Bogotá y 4 municipios de la periferia)	Población de viviendas comunes (PV) y de hoteles (PH) de las ciudades de Yopal, Aguazul y Tauramena delimitadas por fotos aéreas	Población de viviendas comunes de Cali, con excepción de algunos barrios de débil densidad de población afrocolombiana
Estructura general del diseño muestral	Muestreo de áreas, sistemático, estratificado triéptico (manzanas, viviendas, hogares)	PV: muestreo sistemático estratificado bietápico (lados de manzanas, hogares). PH: muestreo aleatorio triépticos (hoteles, habitaciones ocupadas, hogares), estratificado en Yopal	Sondeo aleatorio estratificado bietápico (manzanas, hogares)
Estratificación	2 o 3 estratos por zona de encuesta según la estratificación socioeconómica (en Bogotá) y características físicas surgidas de la imagen SPOT	PV: estratificación socioeconómica de lados de manzana + info, sobre movilidad de algunas poblaciones. PH (Yopal): categoría de confort	Estratificación combinada: composición étnica de manzanas e indicadores socioeconómicos (sintetizados por AFC y CAH)
Selección de unidades primarias	Selección sistemática con ayuda de una malla superpuesta a la imagen SPOT o a un mapa, con probabilidad proporcional a la superficie de la manzana -> 212 manzanas	PV: selección sistemática equiprobable de lados de manzana sobre lista de lados clasificada según identificaciones -> 592 lados de manzana. PH: selección de todos los hoteles -> 74 hoteles	Selección sistemática sin restablecimiento, con probabilidad proporcional al número de hogares comunitarios originarios de la zona de poblamiento afrocolombiano residencial. En la manzana -> 376 manzanas
Selección de unidades secundarias	Selección sistemática equiprobable de 5 viviendas por manzana (después del recuento de las viviendas de las manzanas de la muestra)	PV: selección sistemática equiprobable de 3 hogares por lado de manzana. PH: selección sistemática equiprobable de habitaciones ocupadas sobre lista de habitaciones ocupadas de cada hotel	Selección sistemática equiprobable de 4 hogares afrocolombianos y 1 hogar de control por manzana (después del recuento de los hogares y la caracterización en hogares afrocolombianos u hogares de control)
Selección de unidades terciarias	Selección de todos los hogares de cada vivienda de la muestra	PH: selección de todos los hogares de cada una de las habitaciones de la muestra	
Muestra	1.031 hogares	2.057 hogares (PV: 1.814 y PH: 243)	1.880 hogares (1.054 afrocolombianos y 376 control)
Módulo biográfico	1 individuo de ≥ 18 años por hogar. Quotas: sexo, edad, parentesco con el jefe de hogar, lugar de nacimiento	1 individuo de 18 años por hogar. Quotas: sexo, edad, parentesco con el jefe de hogar, lugar de nacimiento, tipo de actividad	1 individuo de 18 años por hogar. Quotas: sexo, edad, parentesco con el jefe de hogar, lugar de nacimiento, estatus de actividad
Fuentes	DUREAU y FLÓREZ, 1999: 241-278	DUREAU y FLÓREZ, 2000: 277-293	BARBARY et ál., 1999: 15-22

los períodos de estudio; y cada uno de los trabajos desempeñados al igual que los períodos de inactividad.

La segunda matriz está dedicada a la recolección de información sobre eventos familiares y a la co-residencia con los padres de la persona encuestada. A cada uno de los miembros de la familia de la persona encuestada (padre, madre, cónyuge e hijos) le corresponde una columna. Cada columna está compuesta por tres partes donde se recoge: 1. El año de nacimiento del padre, de la madre y del o de los cónyuges, y el sexo de los hijos; 2. En la parte central (bajo la forma de una matriz graduada por años), los datos vitales del pariente (años de nacimiento y muerte); los datos de nupcialidad (años de comienzo y fin de la o las uniones); los datos de co-residencia (años de comienzo y fin del o de los episodios de co-residencia con la persona interrogada), y 3. El lugar de residencia y actividad actual del pariente (si está vivo y no habita en la vivienda encuestada). Esta parte del módulo biográfico responde a la inquietud de introducir a la familia como unidad de análisis de la movilidad y recoger, evitando toda repetición, las informaciones relativas al calendario familiar.

B. LA ENCUESTA CEDE-ORSTOM EN EL CASANARE (1996)

El objetivo de esta encuesta, realizada en el marco del programa “Movilidad espacial en ciudades de zonas de expansión: los casos de Yopal, Aguazul y Tauramena”⁴, fue producir la información necesaria para analizar las movilidades espacial y profesional de las poblaciones de Yopal, Aguazul y Tauramena, al igual que las relaciones entre las prácticas y las dinámicas demográficas y económicas de esas ciudades.

Para cada una de las ciudades, la definición del universo espacial se basó en tres criterios: el perímetro urbano legal, la continuidad física de la urbanización (basada en fotointerpretación) y la integración funcional. Además de las cabeceras urbanas, el universo comprendió los barrios situados más allá del perímetro urbano, que en términos funcionales están ligados a las ciudades estudiadas. Con el fin de captar la movilidad espacial y profesional temporal, el universo

4 Esta investigación, conducida por un equipo CEDE-ORSTOM de composición semejante a la del proyecto de Bogotá, fue financiada por Colciencias y el Ministerio del Medio Ambiente.

no sólo incluyó las viviendas comunes sino también los hoteles y las pensiones. Y, como en Bogotá, la observación no se limitó exclusivamente a los residentes habituales. El universo de estudio incluyó entonces: *los residentes habituales de las viviendas particulares* (personas que residieron en la vivienda encuestada durante la mayor parte del año precedente a la encuesta, sea que estuvieran o no presentes en el momento de la encuesta); *los residentes no habituales de las viviendas particulares* (personas que vivieron la mayor parte del año precedente a la encuesta en otra vivienda, pero que habitaron al menos durante 28 días⁵, consecutivos o no, en la vivienda encuestada, en el curso del año precedente a la visita del encuestador, sea que hubieran estado o no presentes en el momento de esa visita); *los residentes de hoteles y pensiones* que habían vivido al menos 28 días, consecutivos o no, en la ciudad encuestada.

La encuesta se aplicó en 2.057 hogares (1.110 en Yopal, 504 en Aguazul y 443 en Tauramena). El cuestionario aplicado en 1993 en Bogotá fue objeto de algunas adaptaciones, especialmente: una sección sobre la vivienda claramente más desarrollada (con una serie de preguntas relativas a las características físicas de la vivienda, el acceso a los servicios públicos y a las modalidades de adquisición de vivienda); la adaptación de la técnica aplicada para captar los sistemas de residencia durante el año anterior —ya probada— a la observación de los sistemas de empleo (importante tema en ciudades donde el empleo temporal está particularmente desarrollado); preguntas adicionales sobre el nivel escolar del pariente y las remesas enviadas a ese pariente por el individuo encuestado para cada uno de los familiares (padres-cónyuges-hijos) identificados en la segunda matriz biográfica (frecuencia, monto y uso de ayudas financieras recibidas durante el año precedente a la encuesta). Se definieron dos cuestionarios: uno para los hogares comunes y otro para los hogares de hoteles; estos dos tipos de cuestionarios sólo difieren realmente en las secciones consagradas a las características de la vivienda.

C. LA ENCUESTA CIDSE-IRD EN CALI (1998)

La encuesta “Movilidad, urbanización e identidades de las poblaciones afrocolombianas”, realizada en Cali en el marco del programa de cooperación

5 Los contratos de trabajo establecidos por las compañías petroleras son de 28 días.

entre el CIDSE y el IRD⁶, tuvo como objetivo la observación y comparación de las condiciones sociodemográficas, socioeconómicas y socioculturales en las que se encontraban las poblaciones afrocolombianas y no afrocolombianas de la ciudad. Entre los determinantes de las dinámicas sociales que afectan estas poblaciones, el factor “racial” fue privilegiado con fin de efectuar un diagnóstico sobre la segregación residencial de la población negra y mulata, la desigualdad en el acceso a los recursos y los procesos de discriminación sociorracial en Cali.

La selección de una muestra representativa en una subpoblación minoritaria y espacialmente segregada presenta ciertas dificultades, en particular por la ausencia de un registro confiable. Aunque el censo de 1993 no ofrece directamente ese registro, se puede obtener una aproximación, a partir del origen geográfico, de la distribución espacial de la población afrocolombiana, y luego utilizarla en el diseño del muestreo. Para obtener una representatividad aceptable de esta población y reducir a la vez la dispersión de la muestra y el costo de la encuesta, excluimos del estudio el sector de la ciudad con la más baja densidad de población afrocolombiana. El universo se compone entonces de cinco dominios de estudio, de los cuales cuatro están incluidos en el censo, el quinto corresponde a una urbanización periférica (Desepaz). Este conjunto agrupa el 76% de los hogares censados en el área urbana de Cali y cerca del 90% de los hogares originarios de zonas de poblamiento afrocolombiano. Además, es fundamental que la encuesta capte correctamente la heterogeneidad de esta población, lo que supone una estratificación minuciosa de la base del sondeo. La información censal se utilizó para caracterizar la población de cada sector censal, por su composición étnica y un conjunto de indicadores socioeconómicos que el análisis factorial permite sintetizar. Luego, se procedió a una clasificación ascendente jerárquica de los sectores censales en cada dominio que proporciona estratos homogéneos de acuerdo con los criterios étnico y socioeconómico.

6 El equipo responsable de diseñar y aplicar la encuesta estuvo compuesto, por parte del CIDSE: F. URREA, H. F. RAMÍREZ y A. ESTACIO; y por parte del IRD: O. BARBARY y S. BRUYNEEL; la coordinación estuvo a cargo de O. BARBARY y la logística de terreno bajo la responsabilidad de V. ROBAYO.

La técnica de sondeo consiste en un muestreo aleatorio bietápico: manzanas y hogares. La estratificación garantiza la representatividad de un conjunto de componentes socioeconómicos de la población, observados en sus respectivos medios urbanos; medios que podemos describir con variables contextuales puestas a la vez en relación con la información de la encuesta. Esa propiedad es fundamental para comparar las poblaciones afrocolombianas y de control en condiciones de igualdad del contexto, y evitar así, en la interpretación sociológica, la confusión entre determinaciones raciales y sociales. Con posterioridad se llevó a cabo la encuesta CIDSE-Banco Mundial, la cual retomó en forma adaptada el mismo diseño de muestra. A partir de la sumatoria de las muestras de las dos encuestas, obtuvimos una base confiable para calcular los índices de segregación residencial correspondientes a los diversos componentes fenotípicos del poblamiento, sobre los cuales se soporta el estudio de segregación sociorracial en la ciudad presentado en el capítulo tercero.

Apoyándose en la experiencia acumulada por diversas encuestas biográficas (GRAB, 1999) y por los trabajos del DANE, el conjunto del equipo realizó una reflexión multidisciplinaria⁷ y diferentes pruebas piloto que dieron como resultado el cuestionario final. La primera parte aborda las características del hogar y de los individuos: condiciones de vivienda y de equipamiento del hogar, caracterización sociodemográfica de los miembros del hogar (fenotipo observado, sexo, edad, estado civil, nivel de educación alcanzado, actividades principal y secundaria, resumen de la trayectoria migratoria, sistema de residencia durante el año anterior a la encuesta en Cali), los viajes a los lugares de origen, la participación social y política, y la red de solidaridad doméstica del hogar. Este conjunto de informaciones aporta las variables transversales (a la fecha de la encuesta) sobre los individuos, los hogares y las viviendas.

La segunda parte del cuestionario se realizó bajo la forma de una entrevista con uno de los miembros del hogar de 18 años y más, orientada a conocer su biografía residencial, familiar y laboral, y sus percepciones y opiniones sobre

7 En este trabajo han participado: M. AGIER (antropólogo), O. BARBARY (estadístico), O. HOFFMANN (geógrafa), P. QUINTIN (antropólogo), F. URREA (sociólogo) y H. F. RAMÍREZ (estadístico), y en ciertos temas específicos, C. E. AGUDELO, T. HURTADO, F. MURILLO, N. RIVAS, V. ROBAYO y A. VANIN.

eventos de discriminación. La información se levantó con dos matrices cronológicas, siguiendo la misma técnica utilizada con anterioridad en Bogotá.

La encuesta concluye con dos módulos de preguntas abiertas y semiabiertas sobre las percepciones y opiniones de la encuesta biográfica, que alimentan los análisis de los capítulos cuarto y quinto:

– La discriminación: luego de una focalización progresiva hacia el tema de la discriminación profesional y racial en Cali, tres preguntas tratan de recoger los testimonios de eventuales experiencias personales. La pregunta final sobre el color de la piel (“¿Cuál es el color de su piel?”) sirve para el análisis de la autopercepción de los individuos en conexión con su caracterización externa y los otros temas de la encuesta. Estas preguntas contribuyen con un análisis estadístico del proceso de autoconstrucción social de las identidades raciales en Cali y su relación con la percepción de las discriminaciones en el acceso a los recursos urbanos (seccs. I.A y I.B cap. cuarto).

– El barrio y la violencia: la percepción del nivel de infraestructuras y de la calidad de vida en el barrio es objeto de una primera secuencia. Las cuatro últimas preguntas sobre episodios de violencia que habían afectado al encuestado o a otro miembro del hogar durante el año pasado permitían, en primer lugar y sobre la base del declarativo de acontecimientos factuales, calcular las tasas de criminalidad no homicida, que se pueden comparar, en el espacio y el tiempo, con las obtenidas por otras encuestas en los hogares como la ENH de 1995, o las encuestas del BID realizadas en diferentes ciudades de América Latina en 1996. Esas cifras son el soporte de análisis sobre la delincuencia menor a fines de la década de 1990 en Cali (secc. III.A cap. quinto). El tamaño de la muestra y la elevada frecuencia de las declaraciones de robo también se prestan para un estudio espacial y para la modelización logística de los factores de exposición diferencial al robo, desarrollados en la sección III.B del capítulo quinto.

III. LAS ENCUESTAS CUALITATIVAS

Las investigaciones que están en el origen de esta obra han conducido a la realización de muchas encuestas cualitativas. Las encuestas realizadas en las ciudades petroleras y en Bellavista (Tumaco) contribuyen a apoyar el capítulo

segundo, las que se efectuaron en Bogotá el capítulo tercero; las entrevistas de 1993 junto a la sub-muestra de la encuesta biográfica, al igual que las de 1994 y 1996, efectuadas a las clases medias, son utilizadas a propósito de las prácticas residenciales (secc. II.B); esas entrevistas a las clases medias y las dirigidas a los actores de la gestión urbana alimentan el análisis de las representaciones de la segregación en la sección III.D.

A. LAS ENTREVISTAS A UNA SUB-MUESTRA DE LA ENCUESTA BIOGRÁFICA DE BOGOTÁ (CEDE-ORSTOM, 1993)

Con el objetivo de profundizar en la comprensión de los comportamientos de movilidad y observar en detalle las redes de solidaridad que intervienen en las estrategias residenciales, la encuesta antropológica se aplica únicamente en algunas poblaciones residentes en las cuatro zonas de encuesta de la periferia metropolitana. En cada una de ellas, y en función de las características sociales de la población residente, se escogió a una subpoblación específica: en Soacha, a los trabajadores del sector informal; en Madrid, a los obreros de la floricultura; en Chía y Tabio, a los ejecutivos que trabajan fuera de su municipio de residencia. La selección de las personas a entrevistar en la muestra de la encuesta biográfica correspondiente a estas poblaciones de estudio fue controlada por cuotas de sexo, edad, tipo de barrio (Chía), lugar de nacimiento (Madrid y Soacha) y duración de residencia en el municipio (Madrid) o en la vivienda (Soacha). Con el fin de evitar pérdidas en la muestra, M. C. HOYOS (1996) realizó las 53 entrevistas en continuidad directa con la encuesta biográfica.

B. LAS ENTREVISTAS SOBRE LAS PRÁCTICAS RESIDENCIALES DE LAS FAMILIAS DE CLASES MEDIAS EN BOGOTÁ (1994 Y 1996)

Al contrario de las entrevistas que abarcan un amplio espectro social, otras dos encuestas realizadas en Bogotá se dirigieron específicamente hacia las clases medias:

– Las entrevistas semidirigidas realizadas en 1994 por estudiantes de la Universidad de los Andes en una muestra de 15 empleados de la fábrica Ico-llantas situada en el municipio de Soacha: sobre la base de datos del archivo

de personal de la empresa, seleccionaron e interrogaron a empleados que se habían trasladado de Soacha para vivir en el norte de Bogotá;

– La encuesta realizada en 1996 por T. LULLE (1997a) a 50 personas que habitaban principalmente el centro y el pericentro de Bogotá, de los estratos 3 (medio) y 4 (medio alto). Esta encuesta se inscribía en una investigación sobre “Las prácticas residenciales y las formas de movilidad profesional y social de las clases medias en Bogotá”, realizada en el CIDS de la Universidad Externado de Colombia y financiada por el Observatorio de Cultura Urbana del IDCT.

C. LAS ENCUESTAS A LOS ACTORES DE LA GESTIÓN URBANA EN BOGOTÁ (1996 Y 2000)

T. LULLE realizó dos series de entrevistas:

– En 1996 se cumplieron 29 entrevistas en el marco del programa “Prácticas residenciales e impacto sobre las dinámicas y la segmentación de las grandes metrópolis. Estudio sobre las formas de movilidad espacial de las poblaciones de Bogotá y Delhi”; su análisis fue presentado en un informe específico (LULLE, 1997b). La muestra estaba compuesta esencialmente por profesionales del sector público (27), que intervenían en diferentes niveles de la jerarquía territorial (nacional: 1; departamental: 1; del Distrito: 13; de las localidades: 9; de los barrios: 3); los actores del nivel local fueron escogidos en el universo de las 11 zonas de la encuesta CEDE-ORSTOM de 1993;

– En 2000, en el marco de la investigación “Movilidades y formas de gestión urbana. El caso de Bogotá” (IRD-Universidad Externado de Colombia), se realizó otra serie de entrevistas en profundidad a algunas decenas de personas.

D. EL INFORME ANTROPOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS CIUDADES PETROLERAS (CEDE-ORSTOM, 1997)

En razón del fuerte deterioro del contexto político local los objetivos y métodos previstos inicialmente tuvieron que ser revisados en el curso de la encuesta. Finalmente, las entrevistas buscaron profundizar en el análisis de las prácticas de movilidad en lo que concierne a tres aspectos: el contexto familiar y regional de la migración; las redes de solidaridad y los modos de inserción profesional y residencial de los migrantes; las percepciones y proyectos de los migrantes

y de los nativos. Las 144 entrevistas con los migrantes y actores locales realizadas por M. C. HOYOS y O. I. SALAZAR en las tres ciudades y en la estación de Sogamoso (ciudad del departamento de Boyacá, sobre la principal carretera que conduce al Casanare), fueron completamente registradas y transcritas (HOYOS y SALAZAR, 1997a y 1997b). Estas informaciones subtienden e ilustran los diversos análisis sobre el proceso migratorio emprendidos en el capítulo segundo: composición de los flujos (secc. 1.A), percepción del fenómeno migratorio (secc. 1.C) y prácticas residenciales plurilocales (seccs. II.A y I.B).

E. LAS ENCUESTAS DE BELLAVISTA, AL NORTE DE TUMACO (CIDSE-IRD, 1996-1998)

Durante varias encuestas en el terreno, O. HOFFMANN y N. RIVAS han recolectado datos sobre el poblado de Bellavista, en el río Mejicano, al norte del municipio de Tumaco. En un trabajo anterior se había elaborado la “red genealógica” del conjunto de los habitantes de Bellavista en 1996-1997, a fin de entender las relaciones de parentesco y de residencia en el poblado. En una nueva etapa se indagaron, a partir de este registro, los trayectos de los individuos que habían residido un tiempo en Bellavista, tanto los nativos (la mayor parte) como las personas que habían residido un largo tiempo antes de su salida (los esposos o casados con nativos: 6 casos sobre 142), ya sea que habitaran o no en el poblado en el momento de la encuesta.

CUADRO A.2
LUGARES DE RESIDENCIA EN 1998 DE LOS NATIVOS (BELLAVISTA, 1998)

Residencia en 1998	% hombres	% mujeres
Bellavista	37	24
Otros ríos	7	6
Tumaco	21	39
Cali	25	15
Otras ciudades del Pacífico	7	6
Otras (Venezuela, Meta y en el ejército)	3	10
Sub-total región cercana	65	69
Total	100	100

Fuente: Encuesta Bellavista, CIDSE-IRD, 1998.

El método se basa en entrevistas en profundidad con un número limitado de personas (30), solicitándoles la reconstrucción de sus propias trayectorias migratorias y las de sus familiares más cercanos (padres, hijos, y a veces colaterales, en edades de más de 15 años y no fallecidos). Los informantes eran tanto hombres como mujeres (16 y 14); la mayoría tenían más de 30 años (24); 28 eran nativos del río Mejicano, pero solo 21 de ellos aún residían allí ya que los otros vivían en Cali (1), Tumaco (6) o en bi-residencia Tumaco-Bellavista (2). La mayor parte de las entrevistas tuvieron lugar en Bellavista, o en Tumaco. Se pudo así recoger información sobre los presentes y los ausentes en 1998 (142 personas en total, descritas en el cuadro a.2), con una repartición por rangos de edad cercana a la estructura promedia en Bellavista (datos de la Corporación del Valle del Cauca –CVC–). Los sesgos de este método eran múltiples, por ello no se ha considerado útil profundizar los análisis en términos de “motivos de migración”, o de “percepción de la migración”, con excepción de las personas directamente encuestadas. Esto explica el carácter más bien cualitativo de los resultados presentados en la sección III del capítulo segundo.

IV. LAS OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN

Fuera de la encuesta CIDSE-Banco Mundial (Cali, 1999), aprovechada en los capítulos segundo y tercero, el conjunto de las fuentes de información descritas a continuación conciernen al estudio de la violencia (cap. quinto). Fuera de las informaciones sobre episodios de violencia vividos por las personas interrogadas en la encuesta CIDSE-IRD de 1998 en Cali (ya presentadas), los análisis propuestos en el capítulo quinto reposan exclusivamente sobre fuentes oficiales accesibles:

– Para la violencia homicida, a nivel nacional e intraurbano: las estadísticas de defunciones del DANE y el inventario de Medicina Legal sobre “lesiones por causas externas”;

– Para la delincuencia común en Cali, el módulo de criminalidad de la ENH-90, realizada por el DANE en 1995.

Los datos del Ministerio de Justicia o los de la Presidencia de la República sólo se divulgan al gran público en publicaciones donde los resultados no están acompañados por los descriptivos completos de las variables y medidas

utilizadas, por lo que no hicimos más que evocar en el capítulo quinto algunos estudios realizados por investigadores colombianos que tuvieron acceso a las fuentes. En cuanto a las estadísticas ofrecidas por profesores universitarios o las difundidas por centros privados (especialmente el Banco de datos del CINEP), no fueron incluidas en esta obra centrada en la ciudad en razón del tipo de violencia estudiada allí, pues conciernen más bien a las zonas rurales.

A. LAS ESTADÍSTICAS DE DEFUNCIONES DEL DANE

En Colombia, la producción de estadísticas a partir de registros del estado civil ha conocido una agitada historia desde comienzos de 1875: el número de instituciones implicado y los continuos cambios impuestos por la legislación han afectado la producción de estadísticas, conduciendo a un diagnóstico severo sobre la situación colombiana a comienzos de los años 1990 (RUIZ, 1994: 58). Con la reestructuración del DANE en 1992 y la reforma del sistema general de seguridad social relativa a la salud en 1994, la producción de estadísticas sobre decesos, temporalmente interrumpida, se reinicia sobre nuevas bases. Además de la causa o el lugar de deceso, el certificado de fallecimiento comprende ahora informaciones útiles para la caracterización de la mortalidad: sexo, edad, situación matrimonial, lugar de nacimiento y de residencia de la persona muerta.

Las vicisitudes del sistema de producción de estadísticas de defunción no han afectado gravemente el proceso mismo de su registro. M. RUIZ (1994: 63) estima que más del 80% de los decesos de personas de más de 5 años fueron objeto de registro durante el período 1989-1991. Esta evaluación coincide con las de otros demógrafos (FLÓREZ y MÉNDEZ, 1995) y la de RUBIO (1998), quienes estiman respectivamente el subregistro de decesos en el DANE en 20% para el período 1980-1985 y en 18% para el período 1985-1993. La calidad del registro varía fuertemente según los departamentos y la causa de muerte: la mortalidad por accidente estaría mejor medida que la mortalidad por enfermedad. M. RUIZ considera que, teniendo en cuenta la legislación particular de la que son objeto, los homicidios reciben un registro casi exhaustivo entre 1989-1991 (RUIZ, 1994: 63). De acuerdo con M. RUBIO (1998), se puede sin embargo plantear la hipótesis de un deterioro en la cobertura de los homicidios

en el curso de los años 1990 en relación con la intensificación del conflicto armado: en un país en guerra, son muchos los actores que buscan evitar que los homicidios sean catalogados.

Sea como sea, dos argumentos favorecen la fiabilidad de las estadísticas del DANE sobre homicidios. El equipo de CISALVA (Centro de Investigación en Salud y Violencia), realizó nuevos cálculos sobre las tasas nacionales de homicidios en 1998, teniendo en cuenta los resultados de FLÓREZ y MÉNDEZ (1995) sobre las disparidades en el registro de los decesos según los departamentos, y las variaciones, señaladas desde hace mucho tiempo, según el sexo y la edad de las víctimas. Incluso cuando los valores difieren un poco, las tendencias observadas luego de las correcciones de los datos del DANE permanecen idénticas, corroborando los análisis ya realizados y testificando sobre la validez de los datos utilizados hasta entonces. La fuerte coherencia de la serie estadística de los homicidios por municipio del DANE con la producida por la Policía Nacional, constituye un argumento complementario sobre la robustez de las estadísticas del DANE: los dos investigadores que realizaron este ejercicio (FRANCO, 1999: 59 y 60; GAITÁN, 1997: 87 y 88) concluyen que las informaciones del DANE valen lo mismo que las de la Policía Nacional, más utilizadas. Las dos series permiten evaluar el fenómeno sobre un período extenso, pero la del DANE presenta la ventaja de ofrecer una cobertura nacional. Fue entonces esta fuente la que preferimos para analizar la evolución de la violencia homicida en los municipios de Colombia entre 1982 y 1998 (secs. II.A y II.B cap. quinto).

B. LAS ESTADÍSTICAS DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA LEGAL SOBRE LESIONES POR CAUSAS EXTERNAS

Los servicios del Instituto de Medicina Legal proceden a un registro muy completo de los homicidios, pero desafortunadamente su cobertura no es nacional. La presencia de estos servicios, inicialmente limitados a las cabeceras departamentales, se extendió poco a poco hacia otras ciudades, hasta incluir, en 1991, a 123 municipios (urbanos y rurales). El criterio establecido para instalar una unidad en un nuevo sitio fue el aumento de su población, o el de las lesiones por causas externas constatadas por los médicos locales (heridas, homicidios). Tal criterio condujo a la institución a cubrir el territorio de cerca de un 65% de la población colombiana.

Si este sistema de recolección no ofrece información más que para el último decenio, en cambio guarda numerosas informaciones reunidas durante los exámenes médicos a las víctimas, recibidos en los centros, especialmente: las direcciones precisas del lugar donde se encontró el cuerpo y el lugar de residencia de la víctima, al igual que la hora del deceso. De acuerdo con A. GUZMÁN (1994: 18), consideramos las estadísticas del Instituto de Medicina Legal como la mejor fuente para analizar la violencia por homicidio en el seno de las ciudades: fue entonces esta fuente la que utilizamos para la sección II.C del capítulo quinto, consagrada al análisis espacial de los homicidios en las ciudades de Bogotá y Cali.

C. EL MÓDULO DE CRIMINALIDAD EN LA ENH-90 DEL DANE (1995)

En 1995 la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) efectuada por el DANE integra, por tercera vez desde su creación, un módulo llamado “de criminalidad”⁸¹. Esta encuesta recoge, junto a una muestra de 21.130 hogares, representativa de la población de las once primeras ciudades del país –según una nomenclatura de tipo jurídico– la declaración del número de ocurrencias de delitos en el curso del año precedente a la encuesta. Estos datos, surgidos de una encuesta declarativa, no son directamente comparables con los surgidos de un inventario de delitos constatados por una institución pública. Si las estadísticas oficiales son obviamente subevaluadas, las respuestas en las entrevistas tienden en cambio a exagerar la realidad. Por una parte, la memoria guarda el recuerdo de estos acontecimientos durante mucho tiempo; de ahí el riesgo de recibir reportes de algunos delitos que tal vez ocurrieron hace mucho tiempo, pero se relatan como si hubieran ocurrido el año anterior. Por otra parte, cuando la autoridad califica una infracción como tal, las personas interrogadas cuentan episodios que experimentaron como si se tratara de agresiones, pero no pueden ser tomados en cuenta desde el punto de vista penal o de la calificación judicial o policial. El método de calificación de los delitos declarados en las encuestas

8 Las ediciones precedentes de ese módulo corresponden a las ENH-50 (1985) y ENH-72 (1991). Los resultados de la ENH-90 son analizados en detalle en RUBIO (1996).

consiste en su poscodificación a partir de la agregación de definiciones del Código Penal. La nomenclatura es la siguiente: 1. Delitos contra el patrimonio económico (robos, robos a mano armada, robos calificados); 2. Atentados contra la vida y la integridad física; 3. Atentados contra la libertad sexual y el pudor; 4. Delitos contra la libertad individual y otros derechos constitucionales; 5. Delitos contra la familia; 6. Atentados contra la seguridad pública; 7. Atentados contra la integridad moral, y 8. Otros delitos. La primera definición concentra alrededor del 90% de las declaraciones, la segunda el 6%, el 4% restante se distribuye entre las definiciones 3 a 8. La muestra permite una estimación fiable de las tasas de criminalidad promedio para las once ciudades estudiadas. Para Cali (alrededor de 2.000 hogares encuestados en 1995), la precisión es del mismo orden que la de la encuesta CIDSE-IRD de 1998. Disponemos así de dos puntos de referencia en el tiempo para emprender un análisis diacrónico de los niveles de delincuencia común en Cali (secc. III.A cap. quinto).

D. LA ENCUESTA CIDSE-BANCO MUNDIAL DE CALI (1999)

La Alcaldía de Cali y el Banco Mundial confiaron al equipo CIDSE-IRD la concepción de una encuesta sobre la pobreza, el acceso y la percepción acerca de los servicios públicos en Cali. La caracterización de la población afrocolombiana fue realizada siguiendo el mismo método que en 1998, esta vez a partir de una muestra de 1.888 hogares, representativa de la totalidad de la ciudad, seleccionada con la ayuda del plan de sondeo equiprobable a nivel de los hogares (sin submuestra, pues, de hogares afrocolombianos).

Según esta encuesta, en septiembre de 1999, la población de hogares afrocolombianos en Cali alcanzaba 769.000 personas (37% del total) y la población caracterizada como negra o mulata era de 606.000 (31%). Estos resultados son conformes, en su magnitud, con los de la encuesta de 1998; la diferencia entre las dos fuentes se ha discutido en el capítulo tercero. Por otra parte, la encuesta de 1999 tiene sobre la de 1998 dos ventajas importantes: su representatividad abarca toda el área urbana y su diseño muestral no produce ningún sesgo en términos de orígenes migratorios. Por esta razón, ella ha sido utilizada para evaluar los flujos y describir las estructuras por edad y sexo de los inmigrantes en Cali, según sus lugares de origen (secc. I.A y cuadro 2.1

del cap. segundo). La segunda utilización de sus resultados, ya mencionada, consistió en acumular las dos muestras (1998 y 1999) para el cálculo de los índices de segregación racial (secc. III cap. tercero, cuadros 3.4 y 3.5).

BIBLIOGRAFÍA⁹

Groupe de Réflexion sur l'Approche Biographique (GRAB). *Biographies d'enquêtes. Bilan de 14 collectes biographiques*, Paris, INED-PUF, col. Méthodes et Savoirs n.º 3, 1999. Anexo 3.

9 Aquí no figuran las referencias que conciernen específicamente a Colombia: están incluidas en la bibliografía general que figura al final de esta obra.

I. URBANIZACIÓN Y METROPOLIZACIÓN

A. AGLOMERACIÓN

Existen en Colombia algunos casos de cabeceras de municipios contiguos que están prácticamente aglomeradas dentro de una misma unidad urbana, llamada en este caso “aglomeración”.

La ley colombiana reconoce la existencia de esos casos a partir de 1979, pero esas aglomeraciones legales, consideradas como tales por el DANE, no siempre responden a un criterio preciso de continuidad física del espacio construido entre las diferentes cabeceras. Según este último criterio, 23 de las 179 cabeceras de más de 15.000 habitantes estaban físicamente aglomeradas —es decir, distantes menos de 500 metros— dentro de ocho unidades urbanas en el censo de 1993. Estas ocho aglomeraciones, así definidas en el capítulo primero, son las siguientes: Armenia (que incluye a Calarcá), Barranquilla (que incluye a Soledad), Bogotá (que incluye a Soacha), Bucaramanga (que incluye a Floridablanca), Cúcuta (que incluye a Los Patios y Villa del Rosario), Manizales (que incluye a Villamaría), Medellín (que incluye a Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta) y Pereira (que incluye a Dosquebradas). Por razones de coherencia en el seguimiento longitudinal de las dinámicas urbanas, esas aglomeraciones fueron consideradas con las mismas delimitaciones espaciales en los censos anteriores al de 1993.

B. ÁREA METROPOLITANA

Unidad urbana constituida por varias cabeceras municipales, aglomeradas o próximas, “que presentan características urbanas y [...] tienen relación directa, cotidiana e intensa con la ciudad central” (URIBE, 1993).

Concebidas en su origen por iniciativa del Gobierno, las áreas metropolitanas se constituyen, desde la Constitución de 1991, por iniciativa voluntaria de los mismos municipios que lo deseen. Las áreas metropolitanas de Bogotá y Cali sufren un gran retraso en su implementación institucional: la de Bogotá

ha fracasado y la de Cali por el momento está organizada bajo la forma de una “asociación de municipios” que agrupan a Cali, Jamundí, Palmira y Yumbo. Ahora bien, el análisis de las dinámicas de poblamiento realizado en el capítulo tercero supone definir un marco espacial que corresponda al conjunto del área metropolitana y no sólo a la ciudad central.

En este libro hemos conservado la delimitación del área metropolitana de Bogotá realizada en 1993 por el estudio CEDE-ORSTOM (DUREAU et ál., 1993: 52 a 60). En ese estudio se privilegiaron tres tipos de criterios: geográficos (pertenecer a la sabana de Bogotá, encontrarse a una distancia inferior a 75 minutos en transporte colectivo desde la capital); demográficos (tasas de crecimiento elevadas, altas densidades, fuertes proporciones de migrantes) y funcionales (alta proporción de activos que trabajan en Bogotá). Cuando se aplican estos criterios, por una parte, a los 114 municipios del departamento de Cundinamarca y, por otra, a los resultados de la clasificación sintética establecida por ECHEVERRI (1985), 17 municipios forman, con el Distrito Capital, el área metropolitana de Bogotá. Desde su elaboración, esta definición ha sido retomada con frecuencia en los documentos de planificación o los estudios sobre Bogotá.

Como para Cali no disponemos de indicadores sobre las idas y venidas domicilio-trabajo, no pudo aplicarse criterio alguno de integración funcional. La definición conservada reposa entonces sobre la exclusiva aplicación de criterios geográficos (distancia con relación a Cali y tiempo de transporte en autobús) y demográficos. Al aplicar estos criterios al conjunto de municipios de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, se conservaron diez municipios (fuera de Cali) para el análisis de la dinámica demográfica de Cali en el capítulo segundo; es decir, una definición un tanto más extensiva que la usada generalmente en los diferentes estudios sobre esta ciudad.

C. METROPOLIZACIÓN

El término metropolización y su uso en las ciencias sociales se puede prestar a confusión: se lo encuentra referido, en un país y/o de un autor a otro, a un sentido en ocasiones muy distinto (LACOURT y PUISSANT, 1999; LEROY, 2000). En un primer sentido, que es el más próximo a su raíz etimológica, remite a

la primacía jerárquica y al control funcional que ejerce la ciudad más grande sobre el conjunto de la red urbana. Un segundo sentido se refiere al conjunto de los procesos que permiten el despegue de algunas grandes ciudades, que adquieren un estatus de metrópolis al desprenderse, cualitativa y cuantitativamente, del resto de las grandes ciudades gracias a la acumulación de factores exclusivos de producción, de polos de excelencia, de capacidad de innovación local, de actores públicos y/o privados dinámicos, etc. Un tercer sentido designa más específicamente el proceso de difusión de individuos y actividades en la periferia de las grandes ciudades, al igual que la intensidad en el flujo de personas, bienes y capitales que se alcanza entre una ciudad-centro y una corona periurbana, que se extiende cada vez más lejos gracias al progreso en los transportes y las comunicaciones.

En Colombia, el término metropolización es de reciente aparición, pero hoy en día es muy utilizado, básicamente en el tercer sentido, que le corresponde sobre todo a Bogotá y a su medio regional. En ese sentido se usa entonces en esta obra para designar el desbordamiento del crecimiento y la influencia de Bogotá sobre una periferia cada vez más amplia, más allá de los límites administrativos del Distrito Capital. En una acepción equivalente, se utilizará también el término “expansión” urbana o metropolitana para designar el mismo proceso.

D. ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LAS CIUDADES

Desde 1983, en Bogotá, así como en el conjunto de las ciudades del país desde mediados de la década de 1990, cada manzana es clasificada en un estrato socioeconómico que va desde 1 (el más pobre) hasta 6 (el más elevado). La clasificación de las manzanas, efectuada periódicamente por encuestadores según una metodología común establecida por el DNP (Departamento Nacional de Planeación), reposa sobre la aplicación de una serie de criterios que dan cuenta de la calidad de las construcciones y las vías. Esta estratificación es utilizada para establecer las tarifas de servicios públicos en función del nivel de vida de los habitantes y según un principio de subsidios cruzados. Mientras que el estrato 4 (clase media) paga los servicios al costo de producción, los estratos 5 y 6 (acomodados) son objeto de una sobrefacturación, que contribuye

a financiar los servicios de los estratos 1, 2 y 3 (pobres), que se benefician de una subfacturación.

E. URBANO

El DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) sólo utilizó las categorías de “urbano” y “rural” hasta el Censo de 1964. Existía una cierta confusión en la época: lo “urbano” y la “ciudad” no designaban las mismas realidades, puesto que la población considerada urbana era la de las cabeceras de cada municipio, independientemente de su tamaño, mientras que el umbral mínimo de la “ciudad” se había fijado en general en 2.000 habitantes.

A partir del censo de 1973, el DANE abandonó los conceptos de rural y urbano para quedarse con los de cabecera (parte del territorio municipal donde está localizada la alcaldía y cuyos límites son definidos por el Concejo municipal) y de resto. Si el carácter rural de la población de los “restos” no genera duda alguna, el perfil urbano de las cabeceras municipales es más discutible: entre 1.061 cabeceras municipales censadas en 1993, un tercio tenía menos de 2.000 habitantes. Sin embargo, esas 355 cabeceras no representaban más que el 1,3% de la población total de las cabeceras; entonces no resulta aberrante asimilar la población urbana a la de las cabeceras.

En el capítulo primero, adoptamos no obstante un umbral estadístico más restringido de lo urbano, considerando que solamente las cabeceras de más de 15.000 habitantes reunían las características de una “ciudad”.

F. CIUDAD

La hipótesis según la cual las ciudades de la red urbana nacional forman, en conjunto, un “sistema” interdependiente, supone que se eliminen del análisis las simples aldeas cuyas características morfológicas, demográficas y funcionales presentan un carácter más rural que urbano, lo que supondría el riesgo de confundir los resultados del análisis. Tomando el partido adoptado durante la elaboración de un atlas socioeconómico de Colombia (MESCLIER, GOUËSET et ál., 1999), hemos considerado como “ciudad”, en el capítulo primero, a toda cabecera cuya población fuera superior a 15.000 habitantes en el censo de 1993.

Este umbral, situado a medio camino entre el de 10.000 habitantes aceptado para las ciudades del mundo en la base Geopolis (MORICONI-ÉBRARD, 1994) y el de 20.000 habitantes utilizado con frecuencia en Francia corresponde en el caso de Colombia a una ruptura observable en la distribución por tamaño de las cabeceras. Así, no retuvimos más que 179 cabeceras de más de 15.000 habitantes, es decir, sólo el 17% de ellas, pero con el 89% de su población. Algunas ciudades, poco numerosas, están constituidas por la aglomeración de varias cabeceras de más de 15.000 habitantes.

II. MIGRACIONES: DEFINICIONES, MÉTODOS DE MEDICIÓN Y DE ANÁLISIS

En los capítulos primero y segundo, la migración, entendida como un cambio duradero de lugar de residencia principal, es aprehendida con la ayuda de dos tipos de datos empíricos que corresponden a diferentes fuentes de información:

- Las cifras de migrantes estimadas a partir de preguntas sobre el lugar de nacimiento y de residencia en una fecha dada, planteadas en los censos o en las encuestas regulares a los hogares (datos transversales);
- Las trayectorias migratorias, observadas gracias a encuestas biográficas específicas, que captan el conjunto de lugares de residencia de los individuos desde el nacimiento hasta el momento de la encuesta (datos longitudinales).

A. LAS CIFRAS DE MIGRANTES

A partir de preguntas tradicionalmente planteadas en los censos y encuestas, se identificaron tres lugares: el lugar de nacimiento; el lugar de residencia anterior (el más frecuente es 5 años antes de la encuesta); el lugar de residencia habitual actual, en el momento de la encuesta.

Distinguimos entonces las siguientes situaciones migratorias:

- No migrantes: personas cuyo lugar de nacimiento (o lugar de residencia anterior) es el mismo que aquel donde reside actualmente, y esto, cualquiera sea la trayectoria vivida efectivamente entre las dos fechas;
- Migrantes de toda la vida: personas cuyo lugar de nacimiento difiere del lugar de residencia actual;

– Migrantes recientes (de cinco años): personas cuya residencia 5 años antes difiere de su lugar de residencia actual.

Estas nociones ocultan el conjunto de desplazamientos intermedios entre el lugar de nacimiento (o de residencia 5 años antes) y el lugar de residencia en el momento de la encuesta. No se trata en absoluto de medidas de flujos: lo que se mide en un lugar es el *stock* de inmigrantes presentes en la fecha de la encuesta. Los migrantes presentes en el momento de la encuesta son producto del conjunto de inmigraciones anteriores no seguidas de decesos o de salidas, aunque esas migraciones sean recientes o antiguas.

En el capítulo segundo, el estudio de las migraciones de toda la vida o recientes hacia Bogotá, Cali y las ciudades petroleras del Casanare sólo se apoya sobre los *stocks* de inmigrantes observados en las fechas de los censos o de las encuestas (secc. 1.A tablas 1.1 a 1.4), incluso si, por supuesto, los comentarios tuvieron en cuenta a los flujos migratorios que los soportan.

Cuando se dispone, gracias al censo, de esta información sobre el conjunto del territorio nacional, se puede calcular, para cada unidad espacial considerada, los indicadores utilizados en la sección III del capítulo primero:

– Saldo migratorio (o migración neta) de toda la vida o en 5 años: diferencia entre el número de inmigrantes y el número de emigrantes;

– Migración total de toda la vida o en 5 años: suma del número de inmigrantes y el número de emigrantes;

– Tasa de migración neta de toda la vida o en 5 años: cociente de la diferencia (inmigrantes-emigrantes) para la población total de referencia.

La medición de las migraciones depende además de la división geográfica adoptada. Cuanto más grande es la división, menos exhaustiva es la cuenta. Así, todas las migraciones intramunicipales escapan a la medida, lo que oculta un componente importante del sistema migratorio. La pregunta sobre el carácter urbano o rural del lugar de nacimiento o del lugar de residencia anterior, que fue suprimida desde el Censo de 1985, hizo imposible estimar directamente la migración rural-urbana, incluso aunque concierna a municipios diferentes.

B. LAS TRAYECTORIAS MIGRATORIAS: DESCRIPTORES SIMPLES Y TIPOLOGÍA

La identificación de las trayectorias es esencial para comprender las lógicas de la migración e interpretar los comportamientos de los migrantes, producto de la experiencia que han acumulado en sus diferentes lugares de residencia. Las trayectorias residenciales de los inmigrantes analizadas en el capítulo segundo –recogidas en los módulos biográficos de las encuestas de Bogotá, Cali y las ciudades del Casanare (anexo 2)– pueden ser caracterizadas, en primer lugar, individual y colectivamente mediante indicadores simples (secc. 1.B): número de etapas antes de la llegada al lugar de la encuesta; proporción de inmigrantes directos (que no hayan cumplido una etapa migratoria entre el lugar de nacimiento y la llegada al lugar de la encuesta); duración promedio de las trayectorias de los migrantes indirectos (tiempo transcurrido entre la salida del lugar de nacimiento y la llegada al lugar de la encuesta).

A pesar de su simplicidad, estas definiciones están sometidas a ciertas variaciones. Por ejemplo, el evento que define a la inmigración en el lugar de observación puede ser la primera o la última llegada a ese lugar. Pero sobre todo, la noción de etapa migratoria depende de la unidad territorial utilizada/empleada para registrar los cambios de residencia: cambio de vivienda, desplazamiento desde una residencia rural a una urbana o cambio de corregimiento dentro del municipio, cambio de municipio, etc.

El análisis tipológico de los itinerarios de los inmigrantes de Cali constituye la base de la tabla 3.5 y de la sección III.B del capítulo segundo. Ella reposa sobre un método particular: el análisis armónico cualitativo (AAC), desarrollado por DEVILLE y SAPORTA (1980), SAPORTA (1981) y DEVILLE (1982), y completado mediante su aplicación al estudio de la movilidad espacial por BARBARY (1993, 1996). El AAC es un método de estadística descriptiva que sirve para analizar los procesos estocásticos procedentes de los datos cualitativos longitudinales, es decir, de la evolución en el tiempo de una variable que representa la trayectoria de un individuo en un espacio de estados. La idea es proceder por medio del análisis factorial y la clasificación automática para obtener una tipología de las trayectorias. En primer lugar, se opera una transformación algebraica de los datos, de modo que se posicionen los individuos en un espacio vectorial

determinado por las duraciones de su presencia en los diferentes estados, a lo largo del intervalo de tiempo que se desea analizar. Esta codificación suministra una tabla tridimensional (individuos, estados, tiempos) que, sometida al análisis de correspondencias, es reducida a dos dimensiones (individuos, factores). Por último, una clasificación ascendente y jerárquica de los individuos ofrece la división buscada.

En el caso de los 1.175 migrantes observados en Cali, por medio de este método tratamos las secuencias de lugares sucesivos de residencia, y su duración en un período de análisis que comienza 30 años antes del último ingreso a Cali. El resultado fue una división de la muestra en 34 clases, al interior de las cuales los individuos siguen trayectorias homogéneas desde el punto de vista de la sucesión de los lugares recorridos y las duraciones de residencia. La interpretación se realizó comparando gráficamente la densidad de la presencia de los individuos de la clase en los lugares de residencia y su evolución en el tiempo (perfiles promedio de densidad de residencia). La tabla 2.5 del capítulo segundo describe los grandes tipos de itinerarios agrupados según las principales zonas de origen con la ayuda de indicadores que resumen las características de las trayectorias.

El primer factor estructurante de la tipología es el origen geográfico de los flujos, en primer lugar, porque la residencia en el lugar de nacimiento generalmente ocupa una parte importante del período de análisis; y luego porque determina diferentes trayectorias migratorias. El segundo criterio para la discriminación es la edad en el momento de la llegada al lugar de la encuesta: ella determina la duración total de la observación de los individuos durante el período de análisis y, *a contrario*, la duración del período durante el cual no son observados, que corresponde al tiempo transcurrido entre el inicio del período de análisis y su nacimiento. Igualmente, la edad durante la primera migración y la edad a la llegada al lugar de observación pesan fuertemente sobre la determinación de las clases porque fijan la duración total de la trayectoria. Esta tipología tiene pues características que provienen a la vez de rasgos específicos de los itinerarios observados y de elecciones de métodos y parámetros efectuados por su análisis: elección del AAC, del período de análisis y de un “reloj” según la anterioridad en relación con la última llegada a Cali, el tipo de tratamiento de los datos censurados, el nivel de agregación de las

unidades territoriales mediante la definición de estados, etc. Este comentario no debe conducir a poner en duda las conclusiones del análisis: la observación de la sección III.B reposa sin duda sobre hechos de estructura puestos en evidencia a través de un método riguroso. El comentario simplemente subraya que la tipología propuesta no es la única posible y probablemente no permite identificar otros factores que estructuran las biografías migratorias. Otros análisis, tipológicos o modelizadores, ciertamente aportarían resultados complementarios.

III. CATEGORÍAS ÉTNICAS Y RACIALES EN COLOMBIA

A. EL DEBATE SOBRE LAS CATEGORÍAS ÉTNICAS Y RACIALES EN COLOMBIA

El muy discutido concepto de “etnia” ha evolucionado considerablemente desde sus orígenes coloniales, cuando constituía un instrumento de clasificación de las poblaciones “otras”, “exóticas” y “tradicionales”, en todo caso radicalmente distintas. En la década de los años 1960 los trabajos de FREDRIK BARTH (1969) dieron un vuelco completo al cuadro analítico culturalista dominante hasta entonces: para BARTH, el grupo étnico es un tipo de organización social definido no a través de una serie de características objetivas o “naturales”, sino en función de fronteras de tipo lingüístico, social, territorial, que en determinados períodos históricos los mismos actores sociales construyen en una relación interactiva con otros grupos. La supuesta asociación “natural” entre un determinado grupo de población, una denominación “étnica” y un modo de vida se relativiza y la etnicidad se observa como un proceso social relacional y dinámico.

Durante mucho tiempo referido exclusivamente a las poblaciones autóctonas de América –los indios–, el término “etnia” se aplica posteriormente a distintos grupos de población, que se diferencian dentro de la sociedad nacional por “características” culturales reconocidas. Es así como en Colombia los negros se convirtieron en un “grupo étnico” en la Constitución de 1991, seguidos recientemente por los rom o gitanos. En el caso de las poblaciones negras, esta asignación étnica se asocia con la idea de “raza”. Este término polémico y poco

utilizado en el contexto científico francés, está muy presente en las investigaciones anglosajonas, especialmente en importantes trabajos antropológicos, sociológicos y estadísticos sobre las relaciones raciales e interétnicas. En América Latina, el término “raza” forma parte del lenguaje cotidiano. La raza debe ser comprendida como una construcción social. No es la presencia de diferencias físicas objetivas lo que crea la raza, sino el hecho de que esas diferencias, reales o imaginarias, son socialmente significativas y operantes (SCHNAPPER, 1998). La raza interesa a las ciencias humanas en la medida en que interviene, subjetiva y objetivamente, en el estatus y las prácticas sociales de los individuos; esta noción también está en el corazón de la reflexión sobre las relaciones entre lo social y lo biológico (GUILLAUMIN, 1992; BONNIOL, 1992). Poner en juego la dimensión de la raza significa interesarse en los mecanismos de esta construcción y de su rol social. En una sociedad que ya no está más “naturalmente” formada por grupos étnicos u organizada en “categorías raciales”, esas dos nociones son objeto de análisis tan legítimos en uno como en el otro caso.

B. LA INTRODUCCIÓN DE LA PREGUNTA SOBRE LA PERTENENCIA ÉTNICA EN EL CENSO DE 1993

Los censos colombianos proceden, desde 1973, a la aplicación de un cuestionario específico en las zonas rurales cuya población es mayoritariamente indígena. En cambio, fue necesario esperar una iniciativa política –la introducción del multiculturalismo en la Constitución de 1991– para que el criterio étnico, extendido esta vez a las poblaciones negras, hiciera su aparición en el cuestionario estándar del censo.

El censo de 1993 introdujo una pregunta de autodeclaración étnica (pertenencia “a una etnia, un grupo indígena o una comunidad negra”) que se saldó con un fracaso en relación con las poblaciones urbanas. De acuerdo con los resultados del censo en Cali, por ejemplo, mientras sólo el 0,5% de las personas declaró pertenecer a “la comunidad negra”, había 116.000 migrantes provenientes de municipios con mayoría de población negra, es decir, el 7% de la población total de la ciudad. Estas cifras constituyeron entonces la única evaluación estadística posible, evidentemente muy subestimada, del número de afrocolombianos en la ciudad.

C. LAS CATEGORÍAS FENOTÍPICAS DE LAS ENCUESTAS CIDSE-IRD (CALI, 1998) Y CIDSE-BANCO MUNDIAL (CALI, 1999)

Alrededor de las identidades “étnicas” y “raciales” –productos híbridos de elaboraciones culturales, sociales y políticas– se desarrollan procesos de interacción, de simbiosis o de confrontación entre diversos actores sociales. Las encuestas realizadas en Cali en 1998 y 1999 buscaban una caracterización estadística de los actores de estos procesos, en particular los que se identificaban como negros y mulatos. Algunos (minoritarios) se definen a sí mismos con base en su pertenencia racial. Pero más frecuentemente, es la percepción de las poblaciones no negras lo que tiende a definir las colectivamente como “negras”.

Estas constataciones nos condujeron a aplicar a los individuos encuestados (y a lo que los individuos se aplicaban a ellos mismos) una caracterización fenotípica en lugar de étnica. Por supuesto, esto no significa que nosotros le estemos dando a lo racial un sustrato biológico o cultural, sino simplemente que levantamos acta del hecho de que las construcciones y semánticas soportadas en los fenotipos fabrican, en muchos contextos sociales concretos, las divisiones, jerarquías y segregaciones de las cuales queremos dar cuenta con nuestras categorías de observación.

Todas las personas presentes en el momento de la visita fueron caracterizadas individualmente; el investigador le asignaba al encuestado un fenotipo entre cinco categorías que son objeto de un amplio consenso semántico en Cali:

- Negro: ascendencia africana dominante.
- Mulato: ascendencia africana combinada con ascendencia indígena o europea.
- Indígena.
- Mestizo: cubre el conjunto de cruzamientos de poblaciones indígenas, europeas y africanas, sin que dominen los rasgos específicos de una u otra.
- Blanco: calificativo reservado a los fenotipos europeos.

No se trata, como en el censo de 1993, de autodeclaración de pertenencia étnica, ni de una categorización del origen geográfico a partir de los lugares de nacimiento de los individuos o de sus padres. Nosotros partimos de una

caracterización fenotípica y externa, aplicada por los encuestadores, cuyo carácter arbitrario es el costo que hay que pagar para acercarse a las categorías “raciales” del lenguaje común.

Para las dos encuestas, la unidad principal de observación y análisis es el hogar, y necesitamos de una información equivalente para la población afrocolombiana y no afrocolombiana. En ambos casos, entonces, la muestra se compone de dos submuestras seleccionadas en dos poblaciones separadas (afrocolombiana y no afrocolombiana), a las cuales se les aplica el mismo formulario (anexo 2).

– Hogares afrocolombianos: hogares en los cuales, según la apreciación del encuestador, al menos una persona del núcleo familiar principal (el jefe del hogar, su cónyuge, uno de los hijos-as de los dos, o del jefe o cónyuge), presenta características fenotípicas negras o mulatas.

– Hogares no afrocolombianos (u hogares de control): hogares en los cuales ninguna persona del núcleo familiar principal presenta características fenotípicas negras o mulatas.

Al clasificar a la población a partir de una característica del hogar, y no exclusivamente desde las características individuales, adoptamos una definición bastante amplia de los hogares afrocolombianos. También queremos extender el análisis hacia una amplia gama de situaciones de mestizaje, tanto en el sentido biológico (población mestiza) como en el sentido de la composición de los hogares (hogares mixtos).

BIBLIOGRAFÍA ¹

BARBARY, O. *L'insertion urbaine: le cas de Dakar*, Dakar, ORSTOM-IFAN, 1993.

BARTH, F. “Les groupes ethniques et leurs frontières”, en P. POUTIGNAT y J. STREIFF-FENART (coords.). *Théories de l'ethnicité*, Paris, PUF, 1995.

BONNIOL, J. L. *La couleur comme maléfica. Une illustration créole de la généalogie des Blancs et des Noirs*, Paris, Albin Michel, 1992.

¹ Aquí no figuran las referencias que tratan específicamente sobre Colombia: estas se encuentran incluidas en la bibliografía general que figura al final de esta obra.

- DEVILLE, J. C. y G. SAPORTA. "Analyse harmonique qualitative", en E. DIDAY et ál. (eds). *Data Analysis and Informatics*, North Holland Publishing Company, 1980.
- DEVILLE, J. C. "Analyse des données chronologiques qualitatives: comment analyser les calendriers?", *Annales de l'INSEE* n.º 45, 1982.
- GUILLAUMIN, C. *Sexe, race et pratique du pouvoir. L'idée de Nature*, Paris, Côté-femmes, 1992.
- LACOUR, C. y S. PUISSANT. *La métropolisation: croissance, diversité, fractures*, Paris, Anthropos, col. Villes, 1999.
- LEROY, S. "Sémantiques de la métropolisation", *L'Espace Géographique* n.º 1, 2000.
- MORICONI-ÉBRARD, F. *Géopolis. Pour comparer les villes du monde*, Paris, Anthropos, Col. Villes, 1994.
- SAPORTA, G. "Méthodes exploratoires d'analyse de données temporelles", *Cahiers du Bureau Universitaire de Recherche Opérationnelle* n.º 37-38, Paris, Université Pierre et Marie Curie, 1981.
- SCHNAPPER, D. *La relation à l'autre. Au cœur de la pensée sociologique*, Paris, Gallimard, Essais, 1998.
- URIBE, H. M. "Definición de áreas metropolitanas", *Desarrollo regional y expansión urbana, Ciudades*, n.º 18, México, 1993.

ANEXO 4
SIGLAS Y ABREVIATURAS

BCH	Banco Central Hipotecario
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BM	Banco Mundial
CAR	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
CCB	Cámara de Comercio de Bogotá
CEDE	Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (Universidad de los Andes)
CEPAL	Comisión Económica para América Latina
CIDER	Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales (Universidad de los Andes)
CIDS	Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social (Universidad Externado de Colombia)
CIDSE	Centro de Investigación y Documentación Socio-Económica (Universidad del Valle)
CNRS	<i>Centre National de Recherche Scientifique</i> (Centro Nacional de Investigación Científica)
CODHES	Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
COLCIENCIAS	Instituto Colombiano de Ciencias y Tecnologías
CRECE	Centro de Estudios Regionales, Cafeteros y Empresariales
CTP	Consejo Territorial de Planeación
CVC	Corporación del Valle del Cauca
CVM	Caja de Vivienda Militar
CVP	Caja de Vivienda Popular
DANE	Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DAPD	Departamento Administrativo de Planeación Distrital
DC	Distrito Capital
DE	Distrito Especial
DNP	Departamento Nacional de Planeación
DOT	Directrices y orientaciones para el Ordenamiento Territorial del departamento de Cundinamarca
EDTU	Empresa Distrital de Transporte Urbano
ENH	Encuesta Nacional de Hogares
ESP	Empresa de Servicios Públicos
FAVIDI	Fondo de Ahorros y de Vivienda Distrital
FDL	Fondo de Desarrollo Local
FNA	Fondo Nacional de Ahorro
FONADE	Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo
ICANH	Instituto Colombiano de Antropología e Historia
ICT	Instituto de Crédito Territorial

IDCT	Instituto Distrital de Cultura y Turismo
IDU	Instituto de Desarrollo Urbano
IGAC	Instituto Geográfico Agustín Codazzi
INCORA	Instituto Nacional Colombiano de Reforma Agraria
INURBE	Instituto Nacional de Interés Social y de Reforma Urbana (ex-ICT)
IRD	<i>Institut de Recherche pour le Développement</i> (Instituto de Investigación para el Desarrollo)
JAC	Junta de Acción Comunal
JAL	Junta Administradora Local
LOOT	Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial
ONG	Organización No Gubernamental
PDL	Plan de Desarrollo Local
PIDUZOB	Plan Integral de Desarrollo Urbano de la Zona Oriental de Bogotá
PNUD	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
POT	Plan de Ordenamiento Territorial
SISBEN	Sistema Integrado de Subsidios para el Bienestar Social
UEL	Unidad Ejecutora Local
UMR	<i>Unité Mixte de Recherche</i> (Unidad Mixta de Investigación)
UNESCO	<i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i> (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)
UPAC	Unidad de Poder Adquisitivo Constante
UPZ	Unidad de Planeación Zonal

INDICACIONES BIBLIOGRÁFICAS SOBRE COLOMBIA

En el marco del proyecto “Recomposiciones urbanas en América Latina: una lectura estructurada a partir del caso colombiano”, se realizó una investigación bibliográfica en el curso del primer trimestre de 2000. Así, A. SANTANA (UMR Regards, Bordeaux) y M. BINCAZ (Red América Latina, Toulouse) buscaron en muchas bases de datos documentales: IBISCUS, FRANCIS (Archivo América Latina), IHEAL y URBAMET.

La bibliografía presentada aquí no recupera todo el conjunto de los resultados de esos interrogantes¹. Aquí sólo figuran las referencias bibliográficas sobre Colombia citadas en los seis capítulos de la obra, clasificadas por apellidos de autores y fechas. Las referencias bibliográficas que no tratan específicamente sobre Colombia se encuentran clasificadas al final de cada uno de los capítulos del libro.

El(los) número(s) ubicado(s) en la izquierda de cada referencia remite(n) al (a los) capítulo(s) en el(los) cual(es) está citada:

- 1 Capítulo primero: La expansión de la red urbana.
- 2 Capítulo segundo: Movilidades y sistemas de lugares.
- 3 Capítulo tercero: Dinámicas de poblamiento y segregaciones metropolitanas.
- 4 Capítulo cuarto: Ciudad y etnicidad: configuraciones de la etnicidad negra en la ciudad.
- 5 Capítulo quinto: Violencias y ciudades.
- 6 Capítulo sexto: Bogotá: crecimiento, gestión urbana y democracia local.
a Anexos

- 5 ACERO, H. “Acciones para la recuperación de la seguridad y la convivencia ciudadana en Bogotá”, Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, mimeo, 2000.
- 1,2,5 ACEVEDO, J. “El transporte en Bogotá”, en P. SANTANA (ed.). *Vivir en Bogotá*, Bogotá, Ediciones Foro Nacional, 1990.

1 Para encontrar información francesa y europea sobre Colombia y cualquier otro país latinoamericano, se puede consultar el servidor del GIS Red América Latina, portal francés de información sobre América latina [www.reseau-amerique-latine.fr] o el de REDIAL (Red Iberoamericana de Información y Documentación sobre América Latina) [www.red-redial.org/].

- 4 AGIER, M. "Le temps des cultures identitaires. Enquête sur le retour du diable à Tumaco (Pacifique colombien)", *L'Homme*, n.º 157, Paris, 2001.
- 4 AGIER, M. y O. HOFFMANN. "Les terres des communautés noires dans le Pacifique colombien, Interprétations de la loi et stratégies d'acteurs", *Problèmes d'Amérique Latine*, n.º 32, Paris, 1999.
- 2 AGIER, M.; O. BARBARY, O. HOFFMANN, P. QUINTÍN, H. F. RAMÍREZ y F. URREA. *Espacios regionales, movilidad y urbanización, dinámicas culturales e identidades en las poblaciones afrocolombianas del Pacífico sur y Cali, una perspectiva integrada*, Informe final para Colciencias, Proyecto Movilidad, urbanización e identidades de las poblaciones afrocolombianas, Cali, CIDSE-Universidad del Valle, 2000.
- 2 AGUDELO, C. E. *Aproximación a la dinámica política de un pueblo del pacífico. El caso de Guapi*, Documento de trabajo interno n.º 23, Cali, Proyecto CIDSE-IRD, Universidad del Valle, 1998.
- 4 AGUDELO, C. E. "Participation politique des populations noires en Colombie", *Cahiers des Amériques Latines*, n.º 30, Paris, 1999.
- 4 AGUDELO, C. E.; O. HOFFMANN y N. RIVAS. *Hacer política en el Pacífico sur, algunas aproximaciones*, Documentos de trabajo del CIDSE n.º 39, Cali, Proyecto CIDSE-IRD, Universidad del Valle, 1999.
- 4 AGUDELO, C. E.; T. HURTADO y N. RIVAS. *Impactos de la Ley 70 y dinámicas políticas locales de las poblaciones afrocolombianas: estudios de casos*, Documentos de trabajo del CIDSE n.º 50, Cali, Proyecto CIDSE-IRD, Universidad del Valle, 2000.
- 6 Alcaldía Mayor de Bogotá. *Reforma administrativa del Distrito Especial de Bogotá*, Bogotá, DAPD, 1971.
- 6 Alcaldía Mayor de Bogotá. *Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Santafé de Bogotá, D. C. 1995-1997, Formar Ciudad*, Bogotá, DAPD, 1995.
- 6 Alcaldía Mayor de Bogotá. *Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Santa Fe de Bogotá, D. C. 1998-2001, Por la Bogotá que queremos*, Bogotá, DAPD, 1998.
- 3 Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá. *Segundo diagnóstico de las restricciones y oportunidades de la ciudad. Base del plan de desarrollo económico, social y de obras públicas. Formar ciudad*, Bogotá, DAPD, 1996.

- 3,6 Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá. *Plan de Ordenamiento Territorial. Documento técnico de soporte*, Bogotá, DAPD, 2000.
- 6 ALFONSO, O. "Pautas de localización industrial en la Sabana", en O. ALFONSO (ed.). *Ciudad y región en Colombia. Nueve ensayos de análisis socioeconómico y espacial*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2001.
- 4 ÁLVAREZ, M. "Prácticas espaciales y regímenes de construcción de ciudad en Tumaco", en J. CAMACHO y F. RESTREPO (eds.). *De montes, ríos y ciudades*, Bogotá, ICAN, Fundación Natura y Ecofondo, 1999.
- 2 ANGULO, PAREDES N. DE C.; O. M. SAYA y J. J. RIASCOS TORRES. *Aspectos demográficos de la zona de intervención del convenio CVC-Holanda*, Tumaco, 1991.
- 3 APRILE, GNISET J. "¿Quién planifica la ciudad? A propósito del nuevo plan de desarrollo de Cali", *Comunidad y democracia*, n.º 1, Cali, Convergencia para el proceso democrático, 1990.
- 2 ARBOLEDA, S. *Paisanajes, colonias y movilización social afrocolombiana en el suroccidente*, Simposio internacional Pasado, presente y futuro de los afrodescendientes, Cartagena de Indias, 18 a 20 de octubre 2001, Universidad Nacional de Colombia-IRD-ICANH.
- 4 ARISTIZABAL, M. "El festival del currulao", en M. L. SOTOMAYOR (ed.). *Modernidad, identidad y desarrollo*, Bogotá, ICAN-Ministerio de Cultura-Colciencias, 1998.
- 4 ARRÁZOLA, R. *Palenque, Primer pueblo libre de América*, Cartagena, Editorial Hernández, 1970.
- 1 BANGUERO, H. "El proceso migratorio en Colombia: determinantes y consecuencias", *Boletín socioeconómico de la Universidad del Valle*, n.º 13, Cali, CIDSE, 1985.
- 2,a BARBARY, O. *Análisis tipológico de datos biográficos en Bogotá*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, colección Textos, n.º 24, 1996.
- 4 BARBARY, O. "Mesure et réalité de la segmentation sociorraciale: une enquête sur les ménages afrocolombiens à Cali", *Population*, vol. 56, n.º 5, Paris, 2001.
- 2 BARBARY, O. y H. F. RAMÍREZ. *Tabulación del censo de población y vivienda de 1993 en Cali, Informe de etapa de la parte cuantitativa n.º 1, Proyecto Movilidad, urbanización e identidades de las poblaciones afrocolombianas*, vol. 1, Cali, Universidad del Valle, 1997.

- 3,4,a BARBARY, O.; S. BRUYNEL; H. F. RAMÍREZ y F. URREA. *Afrocolombianos en el área metropolitana de Cali, estudios sociodemográficos*, Cali, Documentos de trabajo CIDSE n.º 38, Proyecto CIDSE-IRD, Universidad del Valle, 1999.
- 4 BARBARY, O.; H. F. RAMÍREZ y F. URREA. “Población afrocolombiana y no afrocolombiana en Cali: segregación, diferenciales sociodemográficos y condiciones de vida”, en F. CUBIDES y C. DOMÍNGUEZ (eds.). *Desplazados, migraciones internas y reestructuraciones territoriales*, Bogotá, CES-Universidad Nacional de Colombia, 1999.
- 3 BARCO, C. *Desarrollo socioespacial de Bogotá durante las dos últimas décadas. Una aproximación preliminar a sus principales rasgos*, Bogotá, Universidad de los Andes, CEDE, 1996.
- 3,6 BARCO, C. (coord.). *Bogotá-Sabana. Un territorio posible*, Bogotá, Universidad de los Andes-CEDE y Cámara de Comercio de Bogotá, Serie Biblioteca CCB, n.º 100, 1998.
- 6 BARCO, C. y R. CORTÉS (coords.). *Tendencias recientes de ocupación territorial en Bogotá y la región*, Informe técnico final, vol. 3, Bogotá, Colciencias-Convenio Gobernación de Cundinamarca-CEDE y Universidad de los Andes, 1999.
- 5 BEJARANO, J. A. (dir.). *Colombia: inseguridad, violencia y desempeño económico en las áreas rurales*, Bogotá, Universidad Externado-FONADE, 1997.
- 3 BELLO, M. y C. MOSQUERA. “Desplazados, migrantes y excluidos: actores de las dinámicas urbanas”, en F. CUBIDES y C. DOMÍNGUEZ (eds.). *Desplazados, migraciones internas y reestructuraciones territoriales*, Bogotá, CES, 1999.
- 6 BLANQUE, J. M. y D. FAJARDO. *La descentralización en Colombia, Estudio y propuestas*, Bogotá, IFEA-Universidad Nacional, 1991.
- 4 BOSSA HERAZO, D. *Cartagena independiente: tradición y desarrollo*, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1967.
- 6 BRUNNER, K. y M. NORIEGA. “Planificación de Bogotá y planificación regional: desarrollo inseparable”, *Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia*, vol. 44, n.º 131, número especial Planeación regional: Bogotá y su entorno, Bogotá, 2000.
- 4 BRUYNELL, S. y H. F. RAMÍREZ. “Comparación de indicadores de condición de vida de los hogares afrocolombianos y no afrocolombianos en Cali”, Documentos de trabajo CIDSE, n.º 38, Cali, Proyecto CIDSE-IRD, Universidad del Valle, 1999.

- 5 CAMACHO, A. "Notas apresuradas para discutir algunas relaciones entre narcotráfico y cultura en Colombia", en *Conflicto social y violencia, notas para una discusión*, Bogotá, IFEA-SAC, 1993.
- 5 CAMACHO, A. y A. GUZMÁN. *Ciudad y violencia*, Bogotá, Ediciones Foro Nacional, 1990.
- 5 CAMACHO, A. y A. GUZMÁN. "La violencia urbana en Colombia: teorías, modalidades, perspectivas", en *Nuevas visiones sobre la violencia en Colombia*, Bogotá, IEPRI-FESCOL, 1997.
- 6 Cámara de Comercio de Bogotá. *Las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca en la década del 90. Un análisis de su competitividad en la Comunidad Andina*, Bogotá, CCB, 2000.
- 6 CEBALLOS, M. y G. MARTÍN. *Participación y fortalecimiento institucional a nivel local en Colombia*, Bogotá, CEJA-Ministerio del Interior-ACAC-CLAS-NED-USAID, 2001.
- 5 Centro de Investigación Salud y Violencia. *Dimensionamiento de la violencia en Colombia*, Cali, BID-Univalle, Documento de trabajo R-339 de la Red de Centros de Investigación, 1998.
- 6 CHAMBRON, N. y L. DE LA TORRE. "La décentralisation infra-municipale comme outil de gestion urbaine: l'exemple de Bogotá en Colombie", *Cahiers des Amériques latines*, n.º 18, 1995.
- 5 Comisión de Estudios sobre Violencia. *Colombia: violencia y democracia*, 5.ª ed., Bogotá, IEPRI-Colciencias, 1995.
- 6 Contraloría de Santafé de Bogotá. *Agendas de participación local*, Bogotá, 1997.
- 6 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. *Hacia la metropolización de la Sabana de Bogotá. Por una planificación del desarrollo sostenible*, Bogotá, CAR-Instituto Caro y Cuervo, 1999.
- 6 CORTÉS, R. y J. C. DEL CASTILLO. "La planeación urbana frente a las nuevas formas de crecimiento urbano de la ciudad", en *Desarrollo urbano futuro*, Bogotá, Ministerio de Desarrollo Económico, DNP, Programa de gestión urbana de Naciones Unidas, 1994.
- 5 CUBIDES, F.; A. C. OLAYA y C. M. ORTIZ. *La violencia y el municipio colombiano 1980-1997*, Bogotá, Facultad de Ciencias Humanas, 1998.

- 1 CUBIDES, F. y C. DOMÍNGUEZ. *Desplazados, migraciones internas y reestructuraciones territoriales*, Bogotá, CES, Universidad Nacional de Colombia, Ministerio del Interior, 1999.
- 3,6 CUERVO, L. M. *Génesis histórica y constitución de Bogotá como ciudad moderna*, Bogotá, CIDER, 1995
- 6 CUERVO, L. M.; J. I. GONZÁLEZ y J. ROJAS. *Economía política de los servicios públicos*, Bogotá, CINEP, 1988.
- 1,3 CUERVO, L. M. y J. GONZÁLEZ. *Industria y ciudades en la era de la mundialización (1980-1991). Un enfoque socioespacial*, Bogotá, CIDER-Colciencias-Tercer Mundo Editores, 1997.
- 3 CUERVO, L. M. y S. JARAMILLO. *Les traits centraux de l'organisation spatiale à Bogotá*, Communication à l'Atelier métropoles en mouvement, Paris, IRD, en [www.bondy.ird.fr/cvd/MUR/atelier/], 1998.
- 2,6 CUERVO, L. M.; F. DUREAU, T. LULLE y A. PÁRIAS. "Bogotá", en F. DUREAU et ál. (coord.). *Metrópolis en movimiento. Una comparación internacional*, Bogotá, Alfaomega-IRD, colección Economía de América Latina, 2002.
- 6 CUERVO, L. M. y O. ALFONSO. "Localización de la actividad económica y el empleo", en O. ALFONSO (ed.). *Ciudad y región en Colombia. Nueve ensayos de análisis socioeconómico y espacial*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2001.
- 4 CUNIN, É. "La compétence métisse. Chicago sous les tropiques ou les vertus heuristiques du métissage", *Sociétés Contemporaines*, n.º 43, Paris, 2001.
- 6 CURRIE, L. *Urbanización y desarrollo. Un diseño para el crecimiento metropolitano*, Bogotá, CAMACOL, 1988.
- 2 CVC-PLADEICOP, *Saneamiento básico integral*, Cali, 1988.
- a DANE. *XIV censo nacional de población y III de vivienda, octubre de 1973, resumen nacional*, Bogotá, DANE, 1981.
- a DANE. *La población de Colombia en 1985. Estudios de la calidad y cobertura del XV censo nacional de población y IV de vivienda*, Bogotá, DANE, 1990.
- a DANE. *XVI Censo nacional de población y V de vivienda. Resumen nacional*, Bogotá, DANE, 1996.

- 6 DAPD. *Estudio de desarrollo urbano de Bogotá, Fase II*, Bogotá, DANE, 1972.
- 3 DAPD. *Monografía sobre el proceso de metropolización de la Sabana de Bogotá*, Documento final, Bogotá, DANE, 1994.
- 6 DAPD. *Estratificación socioeconómica de Santa Fe de Bogotá D. C.*, Bogotá, DANE, 1996.
- 6 DAPD. *Acumulado total de asentamientos de origen clandestino en Santa Fe de Bogotá hasta 2000*, Bogotá, DANE, 2001.
- 5 DEAS, M. y M. V. LLORENTE (comps.). *Reconocer la guerra para construir la paz*, Bogotá, CEREC-Ediciones Uniandes-Grupo Editorial Norma, 1999.
- 4 DE BUSTAMANTE, F. *Cartagena de Indias. Ciudad heroica. Historial de 1533 a 1830*, Cartagena, Editorial Bolívar, 1977.
- 2 DE FRIEDEMANN, N. S. "Güelmambí: formas económicas y organización social", *Revista Colombiana de Antropología*, vol. XIV, Bogotá, ICAN, 1969.
- 2 DE FRIEDEMANN, N. S. "Minería del oro y descendencia: Güelmambí, Nariño", *Revista colombiana de antropología*, n.º 16, Bogotá, ICAN, 1974.
- 6 DEL CASTILLO, J. C. "Región metropolitana polinuclear. Un futuro posible para Bogotá y la Sabana", en G. MONTAÑEZ (ed.). *Espacio y territorios. Razón, pasión e imaginarios*, Bogotá, Red de Estudios de Espacio y Territorio (RET), Universidad Nacional de Colombia, 2001.
- 3 DELAUNAY, D. y F. DUREAU, "Des individus dans la ville: les transitions résidentielles à Bogotá", en *Autrepart*, n.º 25, Paris, 2002.
- 1 DNP. *Desarrollo urbano futuro*, Bogotá, Ministerio de Desarrollo Económico-DNP-Programa de Gestión urbana de las Naciones Unidas, Actas del Seminario Políticas e instituciones para el desarrollo urbano futuro en Colombia, 1994.
- 6 DÍAZ, J. "Los servicios públicos en el Distrito Especial de Bogotá", en *Bogotá 450 años: retos y realidades*, Bogotá, Ediciones Foro Nacional-IFEA, 1988.
- 6 DULCEY, C. *La participation: stratégie institutionnelle ou vecteur de cohésion sociale? L'expérience du POT à Bogotá*, Mémoire de DEA, IFU-Université Paris VIII, 2001.

- 3,6 DUPONT, V. y F. DUREAU (coords.). *Pratiques résidentielles et impact sur les dynamiques et la segmentation de grandes métropoles. Étude des formes de mobilité spatiale des populations de Bogotá et de Delhi. Rapport final*, Bordeaux y New Delhi, ORSTOM, 1997.
- 6 DUREAU, F. “Trajectoires résidentielles et recompositions urbaines à Bogotá, Colombie”, *Cahiers des Amériques latines*, n.º 22, Paris, IHEAL, 1997.
- 3 DUREAU, F. “Les mobilités à géométrie variable des habitants de Bogotá”, *Espace, populations, sociétés*, 2, Lille, Université des Sciences et Techniques, 1999.
- 3 DUREAU, F. “Bogotá: unas estrategias residenciales muy diversas marcadas por un dominio desigual del espacio”, en F. DUREAU et ál. (coords.). *Metrópolis en movimiento. Una comparación internacional*, Bogotá, Alfaomega-IRD, colección Economía de América Latina, 2002a.
- 6 DUREAU, F. “Bogotá: una doble dinámica de expansión espacial y de densificación de espacios ya urbanizados”, en F. DUREAU et ál. (coords.). *Metrópolis en movimiento. Una comparación internacional*, Bogotá, Alfaomega-IRD, colección Economía de América Latina, 2002b.
- 3 DUREAU, F. “Les systèmes résidentiels: concepts et applications”, en J. P. LÉVY. y F. DUREAU (eds.). *L'accès à la ville. Les mobilités en question*, Paris, L'Harmattan, colección. Habitat et Sociétés, 2002.
- 3,6,a DUREAU, F.; C. E. FLÓREZ y M. C. HOYOS. *La movilidad de las poblaciones y su impacto sobre la dinámica del área metropolitana de Bogotá*, Documento de trabajo n.º 1, Análisis de los datos existentes, Bogotá, CEDE-ORSTOM, 1993.
- 2 DUREAU, F.; C. E. FLÓREZ y M.C. HOYOS. “El programa de investigación CEDE-ORSTOM sobre las formas de movilidad de las poblaciones de Bogotá y su impacto sobre la dinámica del área metropolitana: metodología del sistema de encuestas”, *Desarrollo y Sociedad*, n.º 34, Bogotá, Uniandes, 1994.
- 1,6 DUREAU, F.; M. C. HOYOS y C. E. FLÓREZ. “Soacha: un barrio de Bogotá. Movilidad y acceso a la vivienda de la población de los sectores orientales del municipio”, *Desarrollo y Sociedad*, n.º 34, Bogotá, Uniandes, 1994.
- 6 DUREAU, F.; O. BARBARY y C. E. FLÓREZ. *La movilidad de las poblaciones y su impacto sobre la dinámica del área metropolitana de Bogotá*, Documento de trabajo n.º 3, Resultados preliminares de la encuesta cuantitativa, Bogotá, CEDE-ORSTOM, 1994.

- 1,2 DUREAU, F. y C. E. FLÓREZ. “Dynamiques démographiques colombiennes: du national au local”, en J. M. BLANQUER y C. GROS (coords.). *La Colombie à l'aube du troisième millénaire*, Paris, CREDAL, IHEAL, 1996.
- 3, 6 DUREAU, F. y O. PISSOAT. *En mapas: las evoluciones socio-espaciales de Bogotá y su contexto (1973-1993)*, Bogotá, Universidad de Los Andes, Documento CEDE, n.º 96-05, 1996.
- 2 DUREAU, F., T. LULLE y A. PÁRIAS. “Las transformaciones de los barrios de clase alta en Bogotá: nuevas lógicas y estrategias de producción de vivienda en un marco reglamentario altamente permisivo”, en *La investigación regional y urbana en Colombia. Desarrollo y territorio 1993-1997*, Bogotá, Ediciones Carlos Valencia, DNP-FINDETER-ACIUR, 1998.
- a DUREAU, F. y C. E. FLÓREZ. “Les enquêtes Mobilité spatiale à Bogotá et dans trois villes du Casanare (Colombie)”, en *Grab, Biographies d'enquêtes. Bilan de 14 collectes biographiques*, Paris, INED-PUF, col. Méthodes et savoirs, n.º 2, 1999.
- 6 DUREAU, F. y T. LULLE. “Le développement spatial de Bogotá dans les années 90: une difficile reconquête de sa maîtrise par les pouvoirs publics”, *Revue de Géographie de Lyon Géocarrefour*, vol. 74, n.º 4, Lyon, 1999.
- 2,a DUREAU, F. y C. E. FLÓREZ. *Aguaitacaminos. Las transformaciones de las ciudades de Yopal, Aguazul, Tauramena durante la explotación petrolera de Cusiana-Cupiagua*, Bogotá, Tercer Mundo Editores y Uniandes, 2000.
- 5 ECHANDÍA, C. “Les dimensions territoriales du conflit armé”, *Problèmes d'Amérique latine*, n.º 1044, Paris, 2002.
- 3,a ECHEVERRI, R. *Bogotá: área metropolitana*, Bogotá, ESAP, 1985.
- 5 FAJNZYLBER, P.; D. LEDERMAN y N. LOAYZA (eds.). *Crimen y violencia en América Latina*, Bogotá, Alfaomega-Banco Mundial, 2001.
- 1,2 FLÓREZ, C. E. *Las transformaciones sociodemográficas en Colombia durante el siglo XX*, Bogotá, Tercer Mundo Editores-Banco de la República, Economía del Siglo XX, 2000.
- 1 FLÓREZ, C. E.; R. ECHEVERRI y R. MÉNDEZ. “Caracterización de la transición demográfica en Colombia”, en J. A. Ocampo y R. RAMÍREZ (eds.). *El problema laboral colombiano. Informes a la Misión Chenery*, Bogotá, Contraloría General de la República-DNP-SENA, 1987.

- a FLÓREZ, C. E. y R. MÉNDEZ. *El nivel del subregistro de las defunciones en Colombia*, Bogotá, CEDE, mimeo, 1995.
- 2,a FLÓREZ C. E.; F. DUREAU y R. MÉNDEZ. *Movilidad espacial en zonas de expansión: los casos de Yopal, Aguazul y Tauramena (Casanare)*. Documento de trabajo n.º 1: *Análisis de la información secundaria*, Bogotá, CEDE-ORSTOM, Documento CEDE, n.º 96-03, 1996.
- 2 FOURNIER, J. M. y V. GOUËSET. *Movilidad espacial en zonas de expansión: los casos de Yopal, Aguazul y Tauramena (Casanare)*, Documento de trabajo n.º 9, *Petróleo y desarrollo regional en el Casanare: un enfoque geográfico*, Bogotá, CEDE-IRD, Documento CEDE, n.º 2000-05, 2000.
- 5,a FRANCO, S. *El quinto: no matar. Contextos explicativos de la violencia en Colombia*, Bogotá, Tercer Mundo Editores-IEPRI, 1999.
- 4 Fundación Gimani Cultural. *Propuesta para la realización del IX Cabildo en Getsemani. El Carnaval 1997. En tu Santo San Martín*, Cartagena, mimeo, 1997.
- 1 Fundación Social. *Municipios y regiones de Colombia. Una mirada desde la sociedad civil*, Bogotá, Vicepresidencia de Planeación, 1998.
- 5 GAITÁN, F. "Una indagación sobre las causas de la violencia en Colombia", en M. DEAS y F. GAITÁN (dirs.). *Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia*, Bogotá, FONADE-DNP, 1995.
- 5,a GAITÁN, F. "El método dialéctico como alternativa para estudiar la violencia en Colombia", en *Nuevas visiones sobre la violencia en Colombia*, Bogotá, IEPRI-FESCOL, 1997.
- 6 GARCÍA, M. C. y J. V. ZAMUDIO. *Descentralización en Bogotá bajo la lupa (1992-1996)*, Bogotá, CINEP, 1997.
- 6 GIRALDO, F. y H. F. LÓPEZ. *El UPAC, la política económica y la construcción 1970-1987*, Bogotá, CAMACOL, 1987.
- 6 GONZÁLEZ, O. L. *¿En qué va la descentralización política en Bogotá?*, Informe final presentado a la Veeduría distrital de Bogotá, 1999.
- 1 GOUËSET, V. *La concentration urbaine en Colombie: de la "quadricéphalie" à la primatie urbaine de Bogotá (1930-1990)*, tesis de Doctorado, Bordeaux, Universidad de Bordeaux 3, 1992.

- 1 GOUËSET, V. “Un siècle de concentration urbaine en Colombie”, en J. M. BLANQUER y C. GROS (coords.). *La Colombie à l'aube du troisième millénaire*, Paris, CREDAL, IHEAL, 1996.
- 1 GOUËSET, V. *Bogotá: nacimiento de una metrópoli. La originalidad del proceso de concentración urbana en Colombia en el siglo XX*, Bogotá, CENAC-FEDEVIVIENDA-IFEA-Observatorio de cultura urbana y Tercer Mundo Editores, 1998.
- 6 GOUËSET, V. “La gestion de l'eau et le défi des services publics dans la Savane de Bogotá”, en *Villes, société et action publique en Amérique latine. Étude de géographie comparée*, Rennes, Université de Haute Bretagne, Dossier d'HDR, vol. 3, Synthèse des positions de recherche, cap. 4.º, 2002.
- 1 GRACIA, J. “Conflictos territoriales y desplazamiento en el litoral Caribe colombiano y el Sinú”, en F. CUBIDES y C. DOMÍNGUEZ (dirs.). *Desplazados, migraciones internas y reestructuraciones territoriales*, Bogotá, CES-Ministerio del Interior, 1999.
- 4 GRUESO, L.; C. ROSERO y A. ESCOBAR. “El proceso de organización de comunidades negras en la región sureña de la Costa Pacífica de Colombia”, en A. ESCOBAR, S. ÁLVAREZ y E. DAGNINO (eds.). *Política cultural, cultura política. Una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos*, Bogotá, Taurus-ICANH, 2001.
- 6 GUTIÉRREZ, F. *La ciudad representada. Política y conflicto en Bogotá*, Bogotá, Tercer Mundo Editores-IEPRI, 1998.
- 5,a GUZMÁN, A. (dir.). *Diagnóstico sobre la violencia homicida en Cali en 1993*, Cali, CIDSE-DESEPAZ, 1994.
- 5 GUZMÁN, A. et ál. “Violencia urbana y seguridad ciudadana en Cali”, *Revista Foro*, n.º 22, Bogotá, Fundación FNC, 1993.
- 6 HATAYA N. “Barrio popular: participación comunitaria y acercamiento estatal”, en *Barrio Taller, Serie ciudad y habitat*, documento n.º 9, Bogotá, Barrio Taller, 2002.
- 4 HINESTROZA, V. G. *Transformaciones socio-culturales y evolución política del hombre y las comunidades de la Costa Pacífica, una visión antropológica*, Popayán, Facultad de Humanidades, Universidad del Cauca, 1993.
- 2 HOFFMANN, O. “Territorialidades y alianzas: construcción y activación de espacios locales en el Pacífico”, en J. CAMACHO y E. RESTREPO (eds.). *De montes, ríos y ciudades. Territorios e identidades de la gente negra en Colombia*, Bogotá, Fundación Natura-ECO-FONDO-ICAN, 1999a.

- 4 HOFFMANN, O. "Identidades locales, identidades negras: la conformación del campo político en Tumaco (1950-1998)", en M. AGIER, A. ÁLVAREZ, O. HOFFMANN y E. RESTREPO (dirs.), *Tumaco: haciendo ciudad. Historia, identidad y cultura*, Bogotá, ICAN-IRD-Univalle, 1999b.
- 6,a HOYOS, M. C. *La movilidad de las poblaciones y su impacto sobre la dinámica del área metropolitana de Bogotá*, Documento de trabajo n.º 5, Metodología y resultados de la encuesta cualitativa, Bogotá, CEDE-ORSTOM, 1996.
- 2 HOYOS, M. C. y O. I. SALAZAR. *Movilidad espacial en ciudades de zonas de expansión: los casos de Yopal, Aguazul y Tauramena (Casanare)*, Informe preliminar, Entrevistas originales, Bogotá, CEDE-ORSTOM, 1997a.
- 2 HOYOS, M. C. y O. I. SALAZAR. *Movilidad espacial en ciudades de zonas de expansión: los casos de Yopal y Tauramena (Casanare)*, Documento n.º 3, El eterno cuarto de hora. Estudio cualitativo, Informe final, Bogotá, CEDE-ORSTOM, 1997b.
- 4 HURTADO, T. "Siervos sin tierra: poblaciones de migrantes en Puerto Tejada entre el estigma, la incertidumbre y la aceptación", Documentos de trabajo del CIDSE, n.º 40, Cali, Proyecto CIDSE-IRD, Universidad del Valle, 1999.
- 4 IGAC. *Atlas de Colombia*, Bogotá, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 1992.
- 5 Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. *Lesiones de causa externa Colombia 1998*, Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Salud, 1999.
- 6 ISAZA, G. *El sector externo de Bogotá y Cundinamarca en 1998: análisis de las exportaciones e importaciones regionales y ranking de las empresas exportadoras más destacadas*, Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá, 2000.
- 3 JARAMILLO, S. "La estructura urbana y la vivienda en Bogotá", en *Vivir en Bogotá*, P. SANTANA (comp.), Bogotá, Ediciones Foro Nacional, 1990.
- 3,6 JARAMILLO, S. *La vivienda en Bogotá*, Bogotá, Universidad de Los Andes, CEDE, Documento CEDE n.º 087, 1992.
- 3 JARAMILLO, S. *Hacia una teoría de la renta del suelo urbano*, Bogotá, Ediciones Unian-des-IGAC, 1994.
- 3 JARAMILLO, S. "La imagen de Bogotá en textos de los años treinta y los noventa", en A. SILDARRIAGA, R. RIVADENEIRA y S. JARAMILLO (coords.). *Bogotá a través de las imágenes y las palabras*, Bogotá, Tercer Mundo Editores-Observatorio de la Cultura Urbana, 1998.

- 1 JARAMILLO, S. "Migraciones e interacción regional en Colombia, 1973-1993", *Territorios*, n.º 1, Bogotá, CIDER-Universidad de los Andes, 1998.
- 1 JARAMILLO, S. y L. M. CUERVO. *La configuración del espacio regional en Colombia. Tres Ensayos*, Bogotá, CEDE, Universidad de los Andes, Serie Estudios, n.º 1, 1987.
- 1 JARAMILLO, S. y L. M. CUERVO. *Urbanización latino-americana: nuevas perspectivas*, Bogotá, Escala, 1993.
- 3 JARAMILLO, S. y A. PARIAS. "Vivienda de alquiler en Bogotá: agentes y acción estatal", en *La investigación regional y urbana en Colombia, desarrollo y territorio, 1993-1997*, Bogotá, DNP-FIDETER-ACIUR y Ediciones Carlos Valencia, 1998.
- a JARAMILLO, S. y O. ALFONSO. "Un análisis de las relaciones de metropolización a partir de los movimientos migratorios", en O. ALFONSO (ed.). *Ciudad y región en Colombia. Nueve ensayos de análisis socioeconómico y espacial*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2001.
- 4 JARAMILLO URIBE, J. *Ensayos de historia social*, t. 1, La sociedad neogranadina, Bogotá, Tercer Mundo Editores y Ediciones Uniandes, 1994.
- 3 JICA. *The Study of the Master Plan for Urban Transport of Santa Fe de Bogotá in the Republic of Colombia*, Study Progress Paper, Bogotá, 1995.
- 3 JIMÉNEZ, L. C. *Organisation de l'espace et politiques publiques dans le sud-ouest de la Colombie: les actions de l'État dans le département du Cauca peuvent-elles conduire à une réduction des inégalités spatiales du développement?*, tesis de Doctorado, Bordeaux, Université de Bordeaux III, 1999.
- 1 JIMÉNEZ, M. y S. SIDERI. *Historia del desarrollo regional en Colombia*, Bogotá, CEREC-CIDER, 1985.
- 3,6 JIMÉNEZ MANTILLA, L. C. "El barrio, lugar entre la ciudad y la vivienda", en *Barrio Taller*, Serie Ciudad y Habitat, documento n.º 5, Bogotá, 1998.
- 5 LOSADA, R. y E. VÉLEZ. *Muertes violentas en Colombia 1979-1986*, Bogotá, Instituto SER de Investigación, 1988.
- 2 LOSONCZY, A. M. *Les saints et la forêt: système social et système rituel des négro-colombiens: échanges inter-ethniques avec les Embera du Chocó (Colombie)*, Bruxelles, tesis de Doctorado, Université Libre de Bruxelles, 1992.

- 3 LULLE, T. *Prácticas residenciales y formas de movilidad laboral y social. El caso de los sectores medios en Bogotá*, Bogotá, CIDS-Universidad Externado de Colombia y Observatorio de Cultura Urbana-IDCT, Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, 1997a.
- 3,6 LULLE, T. *Planification et gestion du développement urbain de Bogotá et de son aire métropolitaine: évolution et tendances actuelles*, Convention CNRS-ORSTOM: CONV940034VILL, Pratiques résidentielles et impact sur les dynamiques et la segmentation de grandes métropoles. Étude des formes de mobilité spatiale des populations de Bogotá et de Delhi, Bogotá, 1997b.
- 6 LULLE, T. “À qui sert la gestion locale participative ? Éléments de réflexion à partir d’une expérience à Bogotá (Colombie)”, *Autrepart* n.º 21, Paris, 2002.
- 6 LULLE, T. y E. LE BRIS, “La acción pública a prueba de las prácticas”, en F. DUREAU et ál. (coords.). *Metrópolis en movimiento. Una comparación internacional*, Bogotá, Alfaomega-IRD, colección Economía de América Latina, 2002.
- 5 LLORENTE, M. V.; R. ESCOBEDO, C. ECHANDÍA y M. RUBIO. *Violencia homicida y estructuras criminales en Bogotá*, Bogotá, Paz Pública-CEDE, 2000.
- 1 MARÍN, R.; F. GIRALDO, L. A. MONDRAGÓN, L. E. GONZÁLEZ y H. GONZÁLEZ. *Ciudades y ciudadanía. La política urbana del salto social*, Bogotá, Ministerio de Desarrollo Económico, Viceministerio de Vivienda, Desarrollo Urbano y Agua Potable, 1995.
- 1 MARTÍNEZ, C. y M. RINCÓN. “Tendencias recientes de las migraciones internas en Colombia”, *Desarrollo urbano en cifras*, n.º 2, Bogotá, 1997.
- 5 MEERTENS, D. “Desplazamiento forzado y género: trayectorias y estrategias de reconstrucción vital”, en *Desplazados, migraciones internas y reestructuraciones territoriales*, Bogotá, CES, 1999.
- 5 MEERTENS, D. “Violencia y desplazamiento forzado en Colombia: miradas sobre lo público, voces desde lo privado”, *Revista Europea de Estudios latinoamericanos y del Caribe* n.º 69, CEDLA, 2000.
- 6 MENDOZA, A. “Sabana de Bogotá: ordenamiento integral”, *Revista Camacol* n.º 65, Bogotá, Camacol, 1996.
- 4 MERIZALDE, DEL CARMEN B. *Estudio de la costa colombiana del Pacífico*, Bogotá, Imprenta del Estado Mayor General, 1921.

- 1,2,6,a MESCLIER, E. (coord.). *Dinámicas socio-económicas en el espacio colombiano*, Bogotá, CRECE-DANE-IRD, 1999.
- 4 MINAUDIER, J. P. *Histoire de la Colombie de la conquête à nos jours*, Paris, L'Harmattan, 1992.
- 6 Ministerio de Desarrollo Económico. *ICT, medio siglo de vivienda social en Colombia, 1939-1989*, Bogotá, INURBE, 1995.
- 6 Misión Bogotá Siglo XXI. *Estudio prospectivo de vivienda*, Bogotá, Granahorrar, Misión Bogotá Siglo XXI, 1993.
- 6 Misión Bogotá Siglo XXI. *Relaciones de Bogotá D. C. con la Sabana*, Bogotá, Misión Siglo XXI y Cámara de Comercio de Bogotá, 1994.
- 6 Misión Bogotá Siglo XXI. *El futuro de la Capital. Estudio prospectivo de las relaciones de Santa Fe de Bogotá con Cundinamarca*, Bogotá, Misión Siglo XXI y Empresa de licores de Cundinamarca, 1995.
- 5 MOLANO, A. *Rebusque mayor*, Bogotá, El Áncora, 1997.
- 3 MONROY, A. *Análisis de la migración Ibagué-Santa Fe de Bogotá. Una aproximación cualitativa*, Bogotá, Universidad de los Andes, Facultad de economía, 1994.
- 6 MONTAÑEZ, G. (dir.). *¿Hacia dónde va la Sabana de Bogotá? Modernización, conflicto, ambiente y sociedad*, Bogotá, CES, Universidad Nacional de Colombia y SENA Regional Bogotá, 1992.
- 6 MONTAÑEZ, G.; O. ARCIL y J. C. PACHECO. "Urbanización y conflictos en la Sabana de Bogotá", *Coyuntura Social*, n.º 3, Bogotá, Fedesarrollo, 1994.
- 3 MONTEZUMA, R. *Le rôle des transports urbains dans le processus d'urbanisation. Le cas de Bogotá (Colombie), 1884-1996*, Informe final de asignación, Paris, ORSTOM, 1997a.
- 6 MONTEZUMA, R. *Les transports urbains: l'organisation, la gestion et le processus d'urbanisation à Bogotá*, Paris, tesis de Doctorado en urbanismo y ordenamiento territorial, ENPC, 1997b.
- 6 MONTEZUMA, R. *Ciudad y movilidad. La transformación de Bogotá (1995-2000), entre redefinición ciudadana y espacial*, Informe final, Bogotá, IRD, 2001.

- 6 MORCILLO, P. *La planeación en Colombia. Historia, derecho y gestión*, Bogotá, Universidad Piloto de Colombia, Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez, 2002.
- 3 MOSQUERA, C. *Acá antes no se veían negros*, Bogotá, Observatorio de Cultura Urbana, Instituto Distrital de Cultura y Turismo, 1998.
- 4 MOSQUERA, G. "La vivienda en el Chocó", en P. LEYVA (ed.). *Colombia Pacífico*, Bogotá, Fen-Biopacífico, 1993.
- 3 MOSQUERA, G. y J. APRILE GNISSET. "Municipio, urbanismo y vivienda: Cali 1920-1995". *Territorio, Construcción y Espacio*, n.º 1, CITCE, Cali, ACIVER, 1999.
- 2 MOTTA, N. *Estratificación social en Salahonda*, tesis, Popayán, Universidad del Cauca, 1975.
- 4 MÚNERA, A. *El fracaso de la nación. Región, clase y raza en el Caribe colombiano (1717-1810)*, Bogotá, Banco de la República y El Ancora Editores, 1998.
- 5 Observatorio de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. *Colombia, conflicto armado, regiones, derechos humanos y DIH 1998-2002*, Bogotá, Presidencia de la República, 2002.
- 3 ORJUELA, J. P.; F. JARAMILLO y M. PÉREZ. Trabajo final, Seminario de investigación, Bogotá, Universidad de los Andes, Facultad de Economía, 1994.
- 2 OSORIO, F. E. *Pobladores rurales en situación de desplazamiento: condiciones y perspectivas*, Bogotá, CODHES, 1995.
- 5 OSORIO, F. E. *Los desplazados, entre survie et résistance. Territorialités et identités en suspens*, tesis de Doctorado en estudios sobre América Latina, Universidad de Toulouse-le-Mirail, 2002.
- 3 PÁRIAS, A. *El mercado de la vivienda en alquiler en Bogotá: una aproximación preliminar a sus principales rasgos*, informe de actividades, Bogotá, CEDE-ORSTOM, 1996.
- 6 PÁRIAS, A. "Transporte y movilidad en Bogotá", *Cuadernos del CIDS*, Serie III, n.º 4, Procesos urbanos y transporte en el siglo XX. Bogotá y la Bahía de Cádiz vistas bajo el mismo prisma, Bogotá, 2002.
- 5 PÉCAUT, D. "Réflexions sur la violence en Colombie", en *De la violence*, Paris, Odile Jacob, 1996.

- 5 PÉCAUT, D. "Colombie: une paix insaisissable", *Problèmes d'Amérique latine* n.º 34, Paris, 1999a.
- 2 PÉCAUT, D. "La pérdida de los derechos, del significado de la experiencia y de la inserción social. A propósito de los desplazados en Colombia", *Estudios políticos*, n.º 14, Medellín, Universidad de Antioquia, 1999b.
- 5 PÉCAUT, D. "Colombie, violence sans fin", *Le Monde des débats* n.º 17, Paris, 2000.
- 5 PÉCAUT, D. "Guerre, processus de paix, polarisation politique", *Problèmes d'Amérique latine* n.º 1044, Paris, 2002.
- 6 PEÑARANDA, R. *Descentralización y participación en las localidades del Distrito Capital*, Bogotá, ESAP, 1993.
- 3 PÉRGOLIS, J. C. y D. MORENO. "El barrio, el alma inquieta de la ciudad. Una mirada desde la semiótica de cuarta generación", documento n.º 5, Bogotá, Barrio Taller, Serie Ciudad y Habitat, 1998.
- 5 PINHEIRO, P. S. "Reflections on urban violence", *The Urban Age*, vol. 1, n.º 4, Washington, 1993.
- 2 PINZÓN, L. M. *Manejo del tiempo en el análisis armónico cualitativo: aplicación al análisis tipológico de datos biográficos*, Bogotá, tesis de magister en estadística, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Matemáticas y Estadística, 1998.
- 5 PISSOAT, O. "La violence homicide en Colombie", *Mappemonde* n.º 60, Paris, 2000.
- 2 PISSOAT, O. y O. HOFFMANN. *Aproximación a la diferenciación espacial en el Pacífico, un ensayo metodológico*, documento de trabajo CIDSE n.º 42, Cali, Proyecto CIDSE-IRD y Universidad del Valle, 1999.
- 1,5 PISSOAT, O. y V. GOUËSET. "La représentation cartographique de la violence dans les Sciences Sociales colombiennes", *Cahiers des Amériques Latines*, n.º 38, Paris, 2002.
- 5 PNUD. *Demographic Yearbook*, New York, Naciones Unidas, 1994 y 1999.
- 4 PODM. *Plan operativo de desarrollo municipal de Tumaco 1998-2001*, Tumaco, Alcaldía de Tumaco, 1998.

- 4 PORRAS TROCONIS, G. *La magna epopeya de Cartagena. El sitio del año 1815*, Bogotá, Editorial Temis, 1965.
- 6 PRADILLA, E. "La política urbana del Estado colombiano", *Ideología y sociedad* n.º 9, Bogotá, 1974.
- 2 QUINTÍN, P. "Memorias y relatos de lugares: a propósito de una migrante de la Costa Pacífica en Cali", en J. CAMACHO y E. RESTREPO (eds.). *De montes, ríos y ciudades. Territorios e identidades de la gente negra en Colombia*, Bogotá, Natura-Ecofondo-ICAN, 1999.
- 4 QUINTÍN, P.; H. F. RAMÍREZ y F. URREA. *Relaciones interraciales, sociabilidades masculinas juveniles y segregación laboral de la población afrocolombiana en Cali*, proyecto CIDSE-IRD, documento de trabajo n.º 49, Cali, Universidad del Valle, 2000.
- 4 RESTREPO, E. "Hacia la periodización de la historia de Tumaco", en M. AGIER, M. ÁLVAREZ, O. HOFFMANN y E. RESTREPO (coords.). *Tumaco haciendo ciudad*, Bogotá, ICAN-IRD-Univalle, 1999a.
- 4 RESTREPO, E. "Aletosos: identidades generacionales en Tumaco", en M. AGIER, M. ÁLVAREZ, O. HOFFMANN y E. RESTREPO (coords.). *Tumaco haciendo ciudad*, Bogotá, ICAN-IRD y Univalle, 1999b.
- 5 REYES, A. "Contra reforma agraria de los narcos", *El Espectador*, Bogotá, 10 de marzo de 1996.
- 2 RIVAS, N. *Prácticas espaciales y construcción territorial en el Pacífico Nariñense, río Mejjicano-Tumaco*, documento de trabajo n.º 41, Cali, Proyecto CIDSE-IRD, Universidad del Valle, 1999.
- 1 RUBIANO, N. *Tendencias migratorias de la fuerza de trabajo y su relación con el empleo urbano (1982-1991)*, Bogotá, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social-PNUD-OIT, 1992.
- 2 RUBIANO, N.; P. GONZÁLEZ y E. GRANADOS. *Estudio nacional sobre migración interna y fuerza de trabajo en Colombia*, Bogotá, CIDS-Universidad Externado de Colombia, 1998.
- 5 RUBIO, M. *Inseguridad y conflictos en las ciudades colombianas*, documento CEDE n.º 96-09, Bogotá, CEDE, 1996.

- 5,a RUBIO, M. *La violencia en Colombia, dimensionamiento y políticas de control*, documento de trabajo de la Red de Centros de Investigación, Bogotá, BID-CEDE, 1998.
- 5 RUBIO, M. "Criminalidad urbana en Colombia", en *Reconocer la guerra para construir la paz*, Bogotá, CEREC-Uniandes y Grupo Editorial Norma, 1999.
- 5 RUBIO, M. "Violencia y conflicto en los noventa", *Coyuntura Social* n.º 22, Bogotá, Fedesarrollo, 2000.
- 1 RUEDA, J. O. "Migraciones internas en Colombia, 1973: una aproximación al análisis regional", *Migraciones Laborales* n.º 3, Bogotá, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, SENALDE, 1979.
- a RUIZ, M. "La mortalidad: estadísticas vitales, reglamentación y análisis", *Desarrollo y Sociedad* n.º 34, Bogotá, Uniandes, 1994.
- 5 SALAZAR, A. *No nacimos pa'semilla* (reed.), Bogotá, CINEP, 1998.
- 5 SALAZAR, A. y A. M. JARAMILLO. *Las subculturas del narcotráfico*, Bogotá, CINEP, 1992.
- 5 SÁNCHEZ, G. "Guerra prolongada, negociaciones inciertas en Colombia", *Bulletin de l'Institut Français d'Études Andines*, t. 29, n.º 3, Breña, Instituto Francés de Estudios Andinos, 2000.
- 2 SÁNCHEZ, J. A. *La estrategia étnica afrocolombiana en el Pacífico: conflicto, territorio y región*, II Seminario Internacional sobre Territorio y Cultura, Territorios de conflicto y cambio socio-cultural, Universidad de Caldas, Manizales, 23 al 27 de octubre de 2001.
- 6 SANTANA, P. y C. R. RODRÍGUEZ. "Los servicios públicos en Bogotá", en *Vivir en Bogotá*, Bogotá, Ediciones Foro Nacional, 1990.
- 5 SEGOVIA, G. *La violencia en Santafé de Bogotá*, Bogotá, ECOE, 1994.
- 6 Sociedad Geográfica de Colombia. *Cuenca alta del río Bogotá. Descripción y diagnóstico*, Bogotá, CAR-SGC, 1998.
- 4 SOLAUN, M. y S. KRONUS. *Discrimination Without Violence. Miscegenation and Racial Conflict in Latin America*, New York, London, Sidney, Toronto, John Wiley and Sons, 1967.

- 6 TERNENT, C. y C. RODRÍGUEZ (coord.). *La Bogotá que todos soñamos*, Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá, Serie Biblioteca CCB, n.º 1001, 1998.
- 6 URIBE, M. T. “Las promesas incumplidas de la democracia participativa”, en *1991-2001 10 años de la constitución colombiana. Seminario de evaluación*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia-ILSA, 2001.
- 5 URIBE, M. V. “Bipartidismo y masacres en el Tolima durante La Violencia”, *Análisis*, n.º 4, Bogotá, CINEP, 1990.
- 2 URREA, F. “Dinámica sociodemográfica, mercado laboral y pobreza urbana en Cali durante las décadas de los años 80 y 90”, *Coyuntura Social* n.º 17, Bogotá, Fedesarrollo e Instituto SER de Investigación, 1999.
- 5 URREA, F. “Relaciones interraciales y clases en la construcción de ciudadanía: el caso de Cali (Colombia)”, documento de trabajo CIDSE n.º 49, Cali, Universidad del Valle, 2000.
- 3 URREA, F. y C. H. ORTIZ. *Patrones sociodemográficos, pobreza y mercado laboral en Cali*, documento de trabajo para el Banco Mundial, Cali, 1999.
- 2 URREA, F. y H. F. RAMÍREZ. “Cambios en el mercado de trabajo de Cali (Colombia), reestructuración económica y social del empleo de la población negra en la década del 90: un análisis de segregación sociorracial a partir de las transformaciones más recientes del mercado de trabajo”, en *Relaciones interraciales, sociabilidades masculinas juveniles y segregación laboral de la población afrocolombiana en Cali*, documento de trabajo n.º 49, Cali, CIDSE-IRD, Universidad del Valle, 2000.
- 4 URREA, F.; S. ARBOLEDA y J. ARIAS. “Redes familiares entre migrantes de la Costa Pacífica a Cali”, *Revista Colombiana de Antropología*, vol. 35, Bogotá, ICAN, 2000.
- 4 URREA, F.; H. F. RAMÍREZ y C. VIÁFARA. “Perfiles sociodemográficos de la población afrocolombiana en contextos urbano-regionales del país a comienzos del siglo XXI”, en *Anuario de Investigaciones 2002*, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Cali, Universidad del Valle, 2002.
- 1,2 URRUTIA, M. (ed.). *Cuarenta años de desarrollo, su impacto social*, Bogotá, Biblioteca Banco Popular, Textos Universitarios, 1990.
- 3 UTRÍA, R. *La metropolización de Bogotá y la Sabana*, Bogotá, Sociedad Colombiana de Planificación, Cuadernos de la SCP, 2000.

- 6 VAN DER HAMMEN, T. *Plan ambiental de la cuenca alta del Río Bogotá. Análisis y orientaciones para el ordenamiento territorial*, Bogotá, CAR, 1998.
- 5 VANEGAS, G. *Cali tras el rostro oculto de la violencia*, Cali, Instituto CICALVA, Universidad del Valle, 1998.
- 4 VANIN, A. "Alianzas y simbolismo en la ruta de los ausentes", *Documentos de trabajo del CIDSE n.º 40*, Cali, Proyecto CIDSE-IRD, Universidad del Valle, 1999.
- 6 VARGAS, J. y F. ZAMBRANO. "Santafé de Bogotá: evolución histórica y servicios públicos (1600-1957)", en *Bogotá 450 años, retos y realidades*, Bogotá, Ediciones Foro Nacional-IFEA, 1988.
- 3 VÁSQUEZ BENÍTEZ, E. *Historia de Cali en el siglo XX. Sociedad, economía, cultura y espacio*, Cali, 2001.
- 2 WEST, R. *The Lowlands of Colombia*, Baton Rouge, Louisiana State University Studies, 1957.
- 2 WHITTEN, N. *Pioneros negros: la cultura afro-latinoamericana del Ecuador y Colombia*, Quito, Centro cultural Afro-ecuatoriano, 1992.
- 2 YEPES, D. y J. ARIAS. "Inmigración a Bogotá: 1922-1972", *Revista de Planeación y Desarrollo*, Vol. 8, n.º 2, Bogotá, 1976.
- 3 YEPES, F. J. y M. BOSONI. *El futuro de la Capital. Estudio prospectivo de salud*, Bogotá, Misión Bogotá Siglo XXI, 1993.
- 4 ZAPATA OLIVELLA, M. (1962). *Chambacú. Corral de negros*, Bogotá, Rei Andes, 1990.
- 4 ZULUAGA, F. "Conformación de las sociedades negras del Pacífico", en *Historia del Gran Cauca*, Cali, Universidad del Valle, Instituto de Estudios del Pacífico, 1994.

ÍNDICE DE RECUADROS

Recuadro 0.1	Sobre los lugares estudiados en esta obra	23
Recuadro 2.1	La observación de los sistemas residenciales en las encuestas de Bogotá (1993) y Casanare (1996)	127
Recuadro 2.2	El sistema residencial multipolar de los malleros	129
Recuadro 2.3	Los lugares de la región del Pacífico	136
Recuadro 3.1	Medidas de la segregación a partir de los datos de los censos	184
Recuadro 3.2	Sumatoria de encuestas para medir la segregación racial en Cali	219
Recuadro 3.3	Comparación con los estudios empíricos de MASSEY y DENTON en Estados Unidos	223
Recuadro 5.1	Modelización logística de la exposición al robo en Cali	340
Recuadro 6.1	El proceso de descentralización	365
Recuadro 6.2	Las localidades, provistas de nuevos poderes	367
Recuadro 6.3	La producción de vivienda social en Bogotá	385

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.1	El crecimiento de las ciudades y su lugar dentro de la población colombiana (1951-1993)	38
Tabla 1.2	Repartición por tamaño de las ciudades de más de 15.000 habitantes en 1993, en el período 1951-1993	46
Tabla 1.3	Tasas de crecimiento anual de las ciudades por categoría de tamaño entre 1951 y 1993	51
Tabla 1.4	Evolución desde 1951 hasta el censo de 1993 de las ciudades consideradas pequeñas y medianas en 1951	53
Tabla 1.5	Evolución de los indicadores de la primacía urbana de Bogotá (1938-1993)	64
Tabla 1.6	Dinámica migratoria de las diez primeras aglomeraciones de Colombia en 1993	76
Tabla 2.1	La inmigración en Cali. Evolución de estructuras por sexo y edad según el lugar de nacimiento (1993 y 1999)	105
Tabla 2.2	Región de nacimiento de los inmigrantes de 5 años y más según la ciudad de residencia: Yopal, Aguazul, Tauramena (1973-1993-1996)	107
Tabla 2.3	Relación de masculinidad según el origen geográfico de la migración a Bogotá (1993)	111
Tabla 2.4	Grupo de edad y relación de masculinidad de los inmigrantes recientes de 15 años o más. Yopal, Aguazul, Tauramena (1973, 1993, 1996)	113

Tabla 2.5	Los principales tipos de itinerarios de quienes migran a Cali observados en 1998 (CIDSE/IRD)	116
Tabla 3.2	Evolución de la densidad. Cali (1945-1993)	175
Tabla 3.3a	Indicadores de segregación (Índice de la raíz cuadrada de Hutchens). Bogotá, 1973-1985-1993	186
Tabla 3.3b	Indicadores de segregación (Índice de la raíz cuadrada de Hutchens). Cali-1993	187
Tabla 3.4	El factor racial comparado con otros factores de segregación residencial en Cali (Índices de Hutchens, 1998-1999)	222
Tabla 3.5	La segregación de las poblaciones minoritarias en Cali (1998-1999) y Estados Unidos (1980). Índices de disimilaridad	224
Tabla 4.1	Efectos significativos sobre las respuestas a la pregunta "¿Cuál es su color de piel?" (Modelo logístico sobre 1.256 respuestas) (Cali, 1998)	247
Tabla 4.2	Respuestas afirmativas a las preguntas de opinión sobre la discriminación, según la caracterización fenotípica y el sexo de los encuestados (Diferencias significativas observadas)	252
Tabla 4.3	Resumen de la construcción del espacio urbano en Tumaco	276
Tabla 5.1	Tasa de homicidios en Colombia (1982-1998)	316
Tabla 5.2	Presuntos móviles de homicidios en Cali (1993) y Bogotá (1998)	326
Tabla 5.3	Tasas de homicidio por 100.000 habitantes en algunas metrópolis del mundo (1999)	331
Tabla 5.4	Robos con o sin violencia en seis ciudades de América Latina	337
Tabla 5.5	Efectos significativos de las características de los individuos sobre la exposición al robo en Cali (1997-1998)	341

ÍNDICE DE MAPAS

Mapa 0.1	Relieve de Colombia y ciudades estudiadas	21
Mapa 0.2	Malla administrativa en 1993	27
Mapa 1.1	Las 164 unidades urbanas de más de 15.000 habitantes y la red vial en 1993	40
Mapa 1.2	Densidades de población rural en 1993	41
Mapa 1.3	Evolución de la red urbana entre 1951 y 1993 a escala de representación constante	48
Mapa 1.4	Evolución de la red urbana entre 1951 y 1993 a tamaño máximo constante	49
Mapa 1.5	Tasa de crecimiento de las ciudades entre 1973 y 1993 a escala de representación constante	56
Mapa 1.6	Las trayectorias demográficas de las ciudades (1951 y 1993)	57
Mapa 1.7	Aparición de las ciudades de 15.000 habitantes o más hasta 1993	62

Mapa 1.8	Cuencas migratorias de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, por municipio de nacimiento de los inmigrantes en 1993	72
Mapa 1.9	Clasificación de los municipios según el lugar de residencia en 1993 de los migrantes	73
Mapa 1.10	Volumen y tasa de desempleo en las ciudades en 1993	81
Mapa 2.1	Organización del espacio de Casanare en 1993	109
Mapa 2.2	Lugar de nacimiento de los migrantes de toda la vida. Yopal, Aguazul, Tauramena (1996)	110
Mapa 2.3	Lugar de origen de los cónyuges de personas naturales de Bellavista en la región de Tumaco	139
Mapa 3.1	Densidad de población en Bogotá en 1973 y 1993	171
Mapa 3.2	Densidad de población en Cali en 1993	172
Mapa 3.3	Condición social de los hogares en Bogotá (1973, 1985, 1993)	190
Mapa 3.4	Condición social de los hogares en Cali en 1993	192
Mapa 3.5	Poblaciones de menos de 15 años y de 60 años o más y hogares unipersonales en Bogotá en 1985	202
Mapa 3.6	Poblaciones de menos de 15 años y de 60 años o más y hogares unipersonales en Cali en 1993	203
Mapa 3.7	Proporción de población negra en Cali en 1998	221
Mapa 4.1	Distribución de la población en Cali en 1993 por sector según el lugar de origen (tamaño máximo constante)	259
Mapa 4.2	Ciudad de Cartagena	262
Mapa 4.3	Centro de Tumaco en los años 1940 y 1990	275
Mapa 5.1	Violencia homicida por municipio de 1982 a 1998	314
Mapa 5.2	Municipios poco violentos y muy violentos entre 1982 y 1998, según su tasa de homicidios por 100.000 habitantes	315
Mapa 5.3	Homicidios en Cali por barrio en 1996, según su lugar de ocurrencia y el lugar de residencia de la víctima	328
Mapa 5.4	Homicidios en Bogotá por sector censal (1997-1999)	330
Mapa 5.5	Robo sin agresión física en Cali por comuna (1998)	343
Mapa 6.1	Límites administrativos de Cundinamarca y del área metropolitana de Bogotá (1993)	357
Mapa 6.2	Localidades del Distrito Capital de Bogotá (1993)	358
Mapa 6.3	Expansión espacial de Bogotá (1945-1993)	359

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1.1	Distribución rango-tamaño de la población de las ciudades colombianas en 1951, 1973 y 1993 (Curvas de ZIPF)	47
Gráfico 1.2	Distribución rango-tamaño de las ciudades colombianas según diferentes indicadores demográficos y económicos en 1993	79

Gráfico 1.3-1	Redes urbanas lineales de las periferias subpobladas	86
Gráfico 1.3-2	Heterogeneidad y paradojas de la malla urbana de los grandes valles	87
Gráfico 1.3-3	Metrópolis y polarizaciones contrastadas	88
Gráfico 1.3-4	Urbanización diferenciada de la Costa Atlántica	89
Gráfico 5.1	Estabilidad de la repartición de los homicidios (1982-1998)	317
Gráfico 5.2	Evolución de la tasa de homicidios por 100.000 habitantes, por rango o tamaño de municipio (1982-1998)	318
Gráfico 5.3	Evolución de la tasa de homicidios por 100.000 habitantes de los municipios según tres categorías (1982-1998)	320
Gráfico 5.4	Evolución de la tasa de homicidios por 100.000 habitantes en Medellín, Cali y Bogotá (1982-1998)	321
Gráfico 5.5	Distribuciones temporales de los homicidios en Cali (1993) y Bogotá (1999)	324
Gráfico 5.6	Grupos de edad de las víctimas de homicidio en Cali y Bogotá (1996)	325

OLIVIER BARBARY. Estadístico, responsable de investigación en el IRD e investigador asociado del CAMS (Centre d'Analyse et de Mathématique Sociales) de la EHESS. Desde 1996, es coordinador del componente cuantitativo de un programa pluridisciplinario de cooperación entre el IRD y el CIDSE sobre inserción de las poblaciones afrocolombianas en Cali. Sus trabajos y publicaciones más recientes tratan sobre el análisis estadístico de la segregación socioespacial, la movilidad y las estrategias de inserción económica y social en la ciudad, al igual que sobre las dinámicas de las identidades y las ciudadanías urbanas [olivier.barbary@ird.fr].

ELISABETH CUNIN. Socióloga, investigadora del IRD, donde trabaja temas relacionados con la construcción de las categorías étnico-raciales y la puesta en escena de las identidades culturales. Es investigadora asociada al Observatorio del Caribe Colombiano (Cartagena) desde 1998 y coordina actualmente el programa "Identidades mestizas, categorías mestizas en las sociedades post-esclavistas. El Caribe de Colombia a México", convenio de investigación entre el Observatorio del Caribe Colombiano, la Universidad de Cartagena, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y el IRD [Elisabeth.Cunin@ird.fr].

JEAN-PAUL DELER. Geógrafo, director de investigación del CNRS. Ha sido director del IFEA (Institut Français d'Études Andines) en Lima y de la UMR REGARDS, CNRS-IRD, en Bordeaux. Sus trabajos en el mundo andino (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) tratan sobre la organización del espacio nacional y las dinámicas territoriales consideradas en diferentes escalas de tiempo, sobre los procesos de urbanización y metropolización, y sobre las formas de representación de las estructuras espaciales en modelos [deler@ades.cnrs.fr].

FRANÇOISE DUREAU. Geógrafa y demógrafa, directora de investigación en el IRD, actualmente es profesora agregada en la Université de Poitiers. Sus investigaciones, desarrolladas primero en África (Côte d'Ivoire), y después en América Latina (Ecuador y Colombia), se articulan alrededor de dos ejes: la comprensión de las dinámicas urbanas a través del análisis de la movilidad espacial de las poblaciones ciudadinas, y el desarrollo de métodos de producción y análisis de información sobre las poblaciones de las ciudades del Sur [f.dureau@gmail.com].

VINCENT GOUËSET. Geógrafo, es profesor en la Université de Rennes y miembro de la UMR ESO (geografía social), CNRS. Desde hace más de quince años sus investigaciones, iniciadas en Colombia en el seno del IFEA y prolongadas desde el interior de la UMR ESO, en cooperación con diferentes investigadores e instituciones francesas y latinoamericanas, se han concentrado especialmente sobre la dinámica de las redes y espacios urbanos, la acción pública, las prácticas sociales y el desarrollo local en las ciudades de Colombia, Argentina y México [vincent.gouëset@uhb.fr].

ODILE HOFFMANN. Geógrafa, es directora de investigación del IRD. Sus primeros trabajos tratan sobre las dinámicas regionales y agrarias, y los grupos de poder local en México y su medio rural. Después se orientó hacia la comprensión de las identidades populares y su anclaje territorial, siempre en México, antes de interesarse en los procesos identitarios y el movimiento negro en Colombia. De 2002 a 2006, dirigió un proyecto de investigación comparativa (México-Colombia) sobre las dinámicas identitarias en contextos de gran movilidad, en colaboración con el CIESAS y el ICAN. Actualmente es directora del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA) [hoffmann@juarez.ciesas.edu.mx].

THIERRY LULLE. Arquitecto y urbanista, investigador del CIDS en la Universidad Externado de Colombia. Coordina el grupo de investigación “Procesos sociales, territorios y medio ambiente”. Fue investigador del IRD entre 1999 y 2003. Sus trabajos tratan sobre las políticas urbanas, las prácticas residenciales y sus interacciones, primero en Togo y después en Colombia. Recientemente ha dirigido una investigación sobre el lugar de las diferentes formas de movilidad espacial en la planificación y la gestión urbanas, a partir del análisis del caso de Bogotá [thierry.lulle@uexternado.edu.co].

ÉVELYNE MESCLIER. Geógrafa, responsable de investigación en el IRD y asociada al laboratorio Prodig. Los temas que investiga son la organización del espacio a nivel nacional y regional, y la forma como influye su evolución en la situación de las sociedades locales, cultural, social y económicamente marginadas, en varios países andinos. Utiliza para ello tanto la cartografía temática como las entrevistas de campo. Actualmente coordina un estudio sobre la dimensión espacial de los cambios en la gestión de la tenencia de la tierra en Perú y Ecuador, en la Unidad de Investigación 095 del IRD [evelyne.mesclier@wanadoo.fr].

OLIVIER PISSOAT. Geógrafo urbanista, es ingeniero de investigación en el CNRS (UMR ADES). Ha vivido en Colombia cinco años (primero como becario del IFEA de 1993 a 1995, y luego durante varios períodos hasta 1998, desde su vinculación al IRD). Sus trabajos tratan sobre la geografía y la representación cartográfica de la violencia homicida en Colombia entre 1982 y 1998 [o.pissoat@ades.cnrs.fr].

JUAN CARLOS ROJAS. Arquitecto, es miembro del GRECAU (Groupe de Recherche Environnement, Conception, Architecture et Urbanisme) de l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Toulouse. Desde 2004 es profesor asociado en esta institución y catedrático en l'École d'Architecture et du Paysage de Bordeaux. Además de su práctica profesional como arquitecto en Francia y en Colombia, ha trabajado como consultor para el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). Actualmente termina su tesis de doctorado en geografía, con especialidad en urbanismo en la Université de Toulouse; su investigación trata sobre la demolición del habitat como política urbana en Francia y en Colombia [juan-carlos.rojas-arias@toulouse.archi.fr].



Editado por el Departamento de Publicaciones
de la Universidad Externado de Colombia
en noviembre de 2007

Se compuso en caracteres Ehrhard MT Regular y Expert MT
de 12 puntos y se imprimió sobre papel Propalibros de 70 gramos
Bogotá, Colombia

Post tenebras spero lucem

Algunos Cuadernos del CIDS
Centro de Investigación sobre Dinámica Social

Pensar en la ciudad de hoy y mañana

Francis Godard, 1996

El sector de la construcción: actores y estrategias

Thierry Lulle (comp.), 1998

Transporte y procesos urbanos en el siglo xx

Adriana Parías Durán y Antonio Luna de Barco, 2002

Minería y dinámicas regionales en Colombia

Otto Vergara González, 2005

Desplazamiento, movilidad y retorno en Colombia.

Dinámicas migratorias recientes

María Aysa, Alejandro González Pulido, John Jairo Roldán y
Nubia Yaneth Ruiz R, 2006

**Entre metrópolis y periferias. Análisis de los movimientos
migratorios a partir del censo de población de 1993**

Alejandro González Pulido y Norma Rubiano, 2007

Desde la década de 1970, Colombia muestra numerosos cambios –al seguir esencialmente tendencias continentales y mundiales– en los planos político, económico, social, demográfico y cultural. Las ciudades colombianas, espejos de esos cambios en la sociedad, también experimentan importantes transformaciones.

Para dilucidar las mutaciones en curso, el colectivo pluridisciplinar reunido en la presente obra propone unas lecturas cruzadas sobre el hecho urbano en Colombia, acudiendo a los bagajes conceptuales de diferentes disciplinas y a los paradigmas de dos comunidades científicas: la francesa y la colombiana. Al poner en común sus métodos, campos y resultados de investigación, los autores ofrecen respuestas originales a distintas preguntas que se encuentran en el corazón de los actuales debates sobre la ciudad, tanto en el norte como en el sur.

La obra está formada por seis capítulos: “La dinámica del sistema urbano”; “Las movi­lidades espaciales”; “Las segregaciones metropolitanas”; “La etnicidad negra en la ciudad”; “Violencias y ciudades, gestión urbana y democracia local”. La confrontación entre estos capítulos permite establecer una síntesis raramente alcanzada en las diferentes aproximaciones al sistema de ciudades, a las ciudades mismas y a las prácticas de diferentes actores urbanos, habitantes y agentes institucionales de la acción pública.

La lectura del hecho urbano –estructurada a partir de experiencias colombianas–, a la que invita esta obra, aporta nuevos enfoques para otras realidades urbanas, tanto de América Latina como de Europa.

Este libro reúne los aportes de Olivier Barbary (estadístico, IRD), Elisabeth Cunin (socióloga, IRD), Jean-Paul Deler (geógrafo, CNRS), Françoise Dureau (geógrafa-demógrafa, Universidad de Poitiers, IRD), Vincent Gouëset (geógrafo, Universidad de Rennes), Odile Hoffmann (geógrafa, IRD), Thierry Lulle (arquitecto-urbanista, Universidad Externado de Colombia), Évelyne Mesclier (geógrafa, IRD), Olivier Pissot (geógrafo, CNRS), Juan Carlos Rojas Arias (arquitecto).



Institut de recherche
pour le développement



IFEA

ISBN 978-958-710-270-3



9 789587 102703